



**«Dispuestos
a intervenir
en política»
Don Antonio
Plano Aznárez:
Socialismo
y republicanismo
en Uncastillo
1900-1939**



Víctor Lucea

Víctor Lucea Ayala (Zaragoza, 1974), historiador formado en la Universidad de Zaragoza, donde se doctoró con premio extraordinario, ha mostrado un interés preferente por los movimientos sociales en la edad contemporánea y las dinámicas de la acción colectiva en las sociedades en cambio, centrando su ámbito de investigación en el caso aragonés. Su tesis de doctorado, de próxima aparición, versó sobre *La protesta social en Aragón (1885-1917)*, habiendo publicado con anterioridad en la presente colección la obra *Rebeldes y amotinados. Protesta popular y resistencia campesina en Zaragoza (1890-1900)*, (2005), además de diversos artículos en revistas especializadas sobre la misma temática. Ha abordado también el estudio de la conflictividad social durante la II República, siendo coautor de *República y republicanos en Zaragoza* (2004) y preparando en los últimos tiempos un volumen sobre la protesta colectiva en los años treinta. En la actualidad desarrolla una investigación postdoctoral en la Universidad de Buenos Aires sobre migración y anarquismo en el primer siglo XX.

El presente trabajo nace como una biografía política del alcalde republicano de Uncastillo, Antonio Plano, fusilado como tantos otros y masacrado, además, con saña en los coletazos de aquel tórrido

DISEÑO DE CUBIERTA: A. Bretón.

MOTIVO DE CUBIERTA: Uncastillo, años 30.

Foto cedida por Lisardo Claveras.

La versión original y completa de esta obra debe consultarse en:
<https://ifc.dpz.es/publicaciones/ebooks/id/2842>



Esta obra está sujeta a la licencia CC BY-NC-ND 4.0 Internacional de Creative Commons que determina lo siguiente:

- **BY (Reconocimiento):** Debe reconocer adecuadamente la autoría, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo de cualquier manera razonable, pero no de una manera que sugiera que tiene el apoyo del licenciador o lo recibe por el uso que hace.
- **NC (No comercial):** La explotación de la obra queda limitada a usos no comerciales.
- **ND (Sin obras derivadas):** La autorización para explotar la obra no incluye la transformación para crear una obra derivada.

Para ver una copia de esta licencia, visite <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.es>.

**«Dispuestos a intervenir en política»
Don Antonio Plano Aznárez:
Socialismo y republicanismo en Uncastillo
1900-1939**

COLECCIÓN ESTUDIOS
HISTORIA

**«Dispuestos a intervenir en política»
Don Antonio Plano Aznárez:
Socialismo y republicanismo en Uncastillo
1900-1939**



Víctor Lucea



Institución «Fernando el Católico» (C.S.I.C.)

Excma. Diputación de Zaragoza

ZARAGOZA, 2008

Publicación número 2.820
de la
Institución «Fernando el Católico»
Organismo autónomo de la
Excma. Diputación de Zaragoza
Plaza de España, 2 • 50071 Zaragoza (España)
Tels. [34] 976 28 88 78/79 • Fax [34] 976 28 88 69
ifc@dpz.es
<http://ifc.dpz.es>

© Víctor Lucea
© De la presente edición, Institución «Fernando el Católico»

ISBN: 978-84-7820-967-5
Depósito Legal: Z-4.047/2008
Producción gráfica: a + d arte digital, S. L. Zaragoza
Impresión: Imprenta Félix Arilla, Ejea de los Caballeros

IMPRESO EN ESPAÑA-UNIÓN EUROPEA.

PRÓLOGO

En el camino de convertirnos en un país de los que saben honrar a quienes fueron héroes por obligación y a quienes dieron su vida por la democracia y la libertad, este libro sobre Antonio Plano resulta imprescindible en tanto representa una pieza más para llevar a cabo una reparación moral y sincera de las víctimas republicanas. Las gentes como Antonio Plano, alcalde de Uncastillo y vicepresidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, encarnaban la legalidad en un país desgarrado por esa guerra fratricida en la que desembocó esa asonada militar llamada Alzamiento, fracasada en primera instancia y luego instrumentalizada por las potencias totalitarias, sin encontrar apenas resistencia, solo desamparo, entre las llamadas «democracias occidentales» del momento, víctimas de aquella farsa que fue el Comité de No Intervención. Es cierto que el franquismo asesinó a españoles que, antes de enfrentarse a un pelotón de fusilamiento, ellos mismos habían formado parte de otros, pero sobre todo sembró el país de cadáveres de personas que tuvieron un comportamiento ejemplar, como el protagonista principal de las páginas que vienen a continuación.

No faltan opiniones conservadoras que insisten en no mirar hacia atrás, en no remover los muertos de la guerra y de la dictadura, que bien muertos y enterrados están. Todo esto no sería, a su modo de ver, más que un *revival* que huele a naftalina. Nosotros pensamos que la herida estaba mal cerrada y que, a partir del reconocimiento de los errores del pasado, podemos reafirmar los valores y las convicciones que deben sustentar una sociedad democrática.

Haríamos bien en reivindicar la tradición española antifascista en vez de seguir blanqueando al franquismo, como se empeña en hacer buena parte de la derecha española.

Antonio Plano formó parte de aquella España que, no lo olvidemos, fue el único país de Europa que se levantó en armas contra el fascismo. Luego vinieron años de dolor, de fosas y de silencio para estas familias socialistas y republicanas. Las heridas no cicatrizan de una vez por todas si antes no se afronta el tema abierta y lealmente, con voluntad de comprensión y con generosidad, como hace Víctor Lucea en este libro con tanto rigor y profesionalidad como calidad literaria.

Nos hubiese gustado honrar mucho antes a los asesinados, perseguidos, silenciados y encarcelados por el franquismo. Se les está haciendo justicia –al menos simbólica– cuando, en su gran mayoría, ya no están entre nosotros. Siempre nos quedará, por lo menos, hacer nuestros los valores que ellos defendieron. Y aplicarlos a la vida política española de comienzos del siglo XXI: sentido de la austeridad y de la ciudadanía responsable y solidaria, vocación de justicia social, preeminencia de la instrucción pública, laicismo desde el respeto a los distintos credos religiosos y respeto a la ley como expresión de la soberanía popular. Por ideas como éstas murieron Antonio Plano y otros vecinos de Uncastillo que le acompañaron en su compromiso público.

JAVIER LAMBÁN MONTAÑÉS
Presidente de la Diputación de Zaragoza

CONSIDERACIONES PREVIAS

Si en abril de 1931 los monárquicos imaginaban un efímero exilio para su rey, quienes como agua de mayo habían recibido la República pudieron soñar pronto con lo contrario, con la consolidación definitiva de una promesa histórica que por fin, conforme se consolidaba el nuevo Estado, se hacía realidad. Recibida por las clases populares como la inauguración de un tiempo de desagravio colectivo y de encarnación de las viejas promesas obreras y republicanas de justicia social, igualdad política y progreso económico, pocos sin embargo podían prever el amargo y dramático final que aguardaba al nuevo régimen. Desde una perspectiva más amplia, la guerra civil española constituyó una certera premonición de lo que más tarde sucedería en la Europa de entreguerras, aunque con un resultado bien distinto. En España, al contrario de lo que supondría la experiencia alemana o italiana, la guerra dio paso a una larga dictadura contrarrevolucionaria, o centrándonos en el caso hispano, católica, nacionalista y antiliberal. En realidad, la movilización colectiva violenta estaba germinando en la sociedad desde bastante antes de julio de 1936, en forma de una retórica agresiva y un amplio abanico de formas de confrontación directa entre grupos sociales dispuestos a echarse a la calle para combatir a la República o defenderla. En ese sentido, la historiografía es casi unánime en señalar a la derecha política como el desafiante más peligroso para el régimen, al tratar por todos los medios de colapsar la acción de gobierno con una motivación fundamental, llegar al poder y derribar la República, si era preciso a través de las armas.

La inevitable referencia a la violencia y la guerra que preside la mirada sobre la historia del XX español, ha puesto en ocasiones de relieve una interpretación del período republi-

cano en clave de fracaso, enfatizando los acentos bélicos y los tonos represivos de la narración. Siendo ésta una tarea sin ninguna duda necesaria, quizás no sea inexacto decir que en algún momento haya entorpecido una visión nítida de la vida política y social durante el período republicano salvo, claro está, honrosas excepciones. A vuelo pluma, resulta obvio que la actividad política republicana fue muy intensa, en ocasiones febril, animada como estaba por dotar con rapidez de leyes y cuerpos funcionariales leales al nuevo Estado. Se trataba de garantizar la continuidad del régimen «republicanizando» al Estado, algo que en 1931 no hizo falta avivar en exceso. Los nuevos responsables de ayuntamientos y diputaciones llegaron al poder local con un ímpetu entusiasta fácilmente explicable, en primer lugar por las privaciones y persecuciones que en los años anteriores había sufrido la izquierda política, y en segundo lugar por el hecho de que el poder pasó repentinamente a las manos de una generación de militantes y hombres de partido forjada en medio de algunos de los procesos históricos más importantes de la contemporaneidad española. Nacidos en su inmensa mayoría a finales del siglo XIX y primeros años del XX, muchos de estos dirigentes de la República vivieron en el tiempo de los manejos caciquiles, los pucherazos, los créditos usureros, la inseguridad que acompañaba al ciclo de las cosechas, los desequilibrios impuestos por la mercantilización agrícola capitalista y la emigración rural; en la ciudad, es más que probable que muchos de ellos experimentaran de cerca los efectos más desequilibrantes de la industrialización y la urbanización, con la pérdida del horizonte de la independencia profesional de muchos pequeños artesanos, la proletarianización de las clases trabajadoras y las pésimas condiciones de habitabilidad de los barrios obreros. Pero también fueron los protagonistas de la formación de una identidad de resistencia de clase capaz de enfrentarse a la patronal, y de articular culturas políticas con las que comprender e interpretar el mundo, y con las que elaborar discursos y acciones alternativas, aun de fuentes y resultados bien diferentes. Pero eso sí, tanto

éstos como aquéllos, campesinos y trabajadores urbanos, buena parte de esa generación de hombres y mujeres comprometidos con la República se forjaron, entre otras cosas, sintiendo el frío aliento de la penuria en el pescuezo, y por lo tanto con el conocimiento de lo que supone ansiar la aplicación de políticas de redistribución de los bienes y los servicios hacia los sectores más desprotegidos de la sociedad.

Antonio Plano, alcalde de Uncastillo y vicepresidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, perteneció a esa generación de hombres y mujeres jóvenes que vieron en la República una oportunidad de plantar cara a ese esquivo y muchas veces aciago destino colectivo. A eso se refería Plano cuando en 1930 afirmaba en *Vida Nueva* que los socialistas estaban «dispuestos» a formar sociedad, a entrar en política, a defender la bandera del partido y a lograr sus históricas aspiraciones. El presente estudio quiere ser un homenaje a la memoria de «Don Antonio», como era conocido en su pueblo natal, tras muchos años de silencio y olvido. Al mismo tiempo, se pretende verter una mirada más extensa sobre la República desde una perspectiva local, desde el caso concreto de Uncastillo. No en vano, es en el ámbito local, en el terreno del poder pequeño del pueblo o la ciudad menor, en el que se dirimen muchas cosas no sólo de la actividad política republicana, sino también del posterior conflicto bélico. Parece lógico atender a ambas facetas, la personal de Plano, y la más general de la villa en que desarrolló el núcleo de su labor pública, dada la implicación de nuestro protagonista con la Segunda República y su inicial proyecto reformista. De tal modo que el esbozo biográfico de Plano aparecerá jalonado por varias cesuras que, sin desvelar ahora el cómo o el porqué, avanzan en paralelo a los cambios más significativos del período republicano, desde su festiva llegada al poder hasta su infeliz y prematuro final en los albores del verano de 1936.

La historia local, en este sentido, ofrece ricas y variadas posibilidades en el estudio del pasado, tanto más en el caso

que nos ocupa. Superada aquella concepción que la relegaba a un mero apéndice reflejo de lo que ocurría en el ámbito nacional, se ha convertido en una dimensión muy utilizada en el desentrañamiento de explicaciones históricas a problemas de largo alcance. En un principio, y respecto de los temas emparentados con la acción colectiva y los movimientos sociales, los especialistas concluyen que es característico de la contemporaneidad la superación de las expectativas y movimientos de corte local o parroquial, y el desarrollo de políticas, organizaciones y campañas de tamaño nacional. Ello sin embargo no debe necesariamente ir acompañado de un olvido de las acciones de objetivos localistas, ni las políticas municipales o regionales, pese a enlazar el estudio en un marco temporal plenamente moderno. Máxime en el caso español, en el que el curso de los acontecimientos es en los años treinta determinado en buena medida por dinámicas y procesos de movilización social específicos, limitados, locales.

Resulta un hecho innegable, como demuestran las fuentes desde un primer acercamiento a las mismas, la fe de toda aquella generación de hombres y mujeres en la idea de que la República habría de llevar el progreso material y cultural a sus compatriotas, convecinos de villa y, en muchas ocasiones, compañeros de infortunio. Los matices, claro está, aparecieron bien pronto respecto al modo y el tiempo en que debería concretarse el cambio entre socialistas, anarquistas y republicanos de izquierda. Los socialistas, entre los que militaba Plano, colaboraron desde el primer momento con los republicanos para consolidar el Estado formando gobierno. El resultado de las elecciones municipales, con una aplastante mayoría para las izquierdas, avalaba esa participación en el gobierno del país. Lejos en el tiempo, aunque no en la memoria, quedaba aquel primer escaño que Pablo Iglesias ocupara en solitario en el Parlamento en 1910. Dos décadas más tarde, en la primavera de muchas esperanzas viejas, los socialistas estaban presentes en ayuntamientos y diputaciones, y formaban parte de la mayoría parlamentaria que

manejaba las palancas del poder. Para muchos de sus militantes la oportunidad de modernizar el país estaba servida en bandeja. Todavía en 1931 existía cierta dosis de ingenuidad sobre las bondades que la sola profusión del ideario socialista habría de producir en la sociedad. Como suele ocurrir en estos casos, el ejercicio de la política ejerce de por sí una acción de desgaste que, en el caso de los años treinta, resultó ser abrasiva.

Por otra parte, se están haciendo en esta presentación alusiones a «problemáticas», a «conflictos», a «crisis». Es obvio que la conflictividad social aumentó durante la República, haciéndose más virulenta y frecuente que en etapas precedentes. Pero con decir eso no se explica nada. Algunos han querido ver en ello, en una supuesta permisividad y aquiescencia de la autoridad hacia la movilización social y en una labor de boicot de radicales y amigos del crimen hacia la propiedad y el orden, la semilla de la guerra civil. En realidad, ese sería el argumento esgrimido durante décadas por parte de quienes se levantaron en armas contra el poder legalmente establecido. Una de las ideas que vertebran el estudio es que el conflicto social no remite a impulsos criminales o ideas «disolventes», a manejos de conspiradores y aprovechados gustosos de pescar en las revueltas aguas de una sociedad en supuesto caos, sino a intereses y políticas enfrentadas de grupos sociales autodefinidos como antagónicos. Durante los años treinta hay mucha más gente que percibe que puede movilizarse y protestar porque hay un marco de oportunidad que permite pensar en la resolución de injusticias y agravios seculares, y dichos grupos sociales interiorizan las herramientas más eficaces para hacerlo de modo público y colectivo. Todo ello remite a una novedosa, por su extensión e intensidad, politización de la vida social durante la República, algo desde luego que conviene tener en cuenta en tanto en cuanto permite dar respuesta a interrogantes relacionados con la movilización social. Entonces la violencia, como han apuntado los teóricos sociales más prestigiosos, no sería sino la evidencia de que existen impedimentos o incapacidades

para lograr los objetivos pretendidos por métodos pacíficos de negociación. A eso habría que añadir una radicalización del discurso público en el que el contrario es excluido sin miramientos de la acción y el debate políticos.

En cualquier caso, la violencia es una variable que lastra el desarrollo de la democracia en la España contemporánea. Esa idea estaría relacionada no tanto con un supuesto carácter hispano cainita, sino con una particular configuración del tablero de juego y de los mismos jugadores sociales durante el primer tercio del siglo XX: el crecimiento en una cultura política de confrontación y de reto, donde se funcionaba por oposición y se ganaba en reconocimiento retando el honor del rival, en la tribuna de prensa o en la calle; la pésima calidad de la participación pública de las clases subalternas, y la falta de interés por parte de las autoridades en instrumentar herramientas capaces de encauzar las reivindicaciones de las clases populares, fueron elementos que contribuyeron a alojar la violencia en un cajón cercano al atril. Eso, y episodios históricos concretos como la perpetuación de unas elites políticas que en el resto de Europa habían sido barridas por la Guerra Mundial, o la connivencia del Monarca con esas mismas elites para continuar con el *statu quo* y bendecir una dictadura militar, también han de ser tenidos en cuenta para calibrar el descrédito del parlamentarismo y las instituciones entre amplios sectores de población durante el primer XX. Sin embargo, existió una diferencia sustancial entre el motín campesino, la huelga obrera, o el llamamiento revolucionario, y la violencia desplegada por los militares insurgentes seis años después de proclamada la República.

La insurrección de julio de 1936 dio comienzo a una auténtica eliminación física del contrario y de todo aquello que lo pudiese representar. Fue esa una de las causas por las que se demoró la guerra en algunos de sus episodios, y constituyó el portazo definitivo a los proyectos reformistas de quienes se habían identificado con la República, como Antonio Plano y muchos otros uncastilleros. La historia del

pueblo, caído en la mitad insurgente de Aragón desde los primeros días, se tiñó de repente de sangre y oprobio, siendo objeto de una salvaje represión, al igual que otras localidades de las Cinco Villas. Aunque ya se han aportado datos en estudios previos, es evidente que habrá que volver a mencionar algunas claves con informaciones vertidas por vecinos y conocidos de represaliados, con el fin de captar el detalle de lo sucedido en una pequeña localidad agrícola lejana al frente de batalla. Lejos del frente era el territorio de las denuncias y las incautaciones, y también de las torturas, las humillaciones públicas y los fusilamientos. La fiesta del treinta y uno pronto hubo que olvidarla. La política, las ideas, las aspiraciones, pasaron a mejor vida. Se imponía la supervivencia física y psicológica frente a un Estado dictatorial y militarizado.

Hoy, después de setenta años de silencio, alguna gente del pueblo tiene la necesidad de recordar y de hablar. Resulta conmovedor comprobar hasta qué punto puede resultar catártica la remembranza de ciertos acontecimientos del pasado. Y es alentador comprobar cómo la difusión de congresos y reportajes bajo el epígrafe de la «memoria histórica» puede sensibilizar a la opinión pública en la dirección de un acercamiento al pasado de nuestros mayores. Sin embargo, los especialistas admiten que, de tanto usarlo, y de usarlo para todo, el epígrafe se ha gastado y nadie sabe ya muy bien qué quiere decir. Por eso este libro pretende situarse en el ámbito de la Historia para, aprovechando la frescura que puede proporcionar la oralidad, ofrecer una visión compleja y contrastada mediante las fuentes, de la actividad de Antonio Plano como alcalde, y del Uncastillo en el que la desempeñó.

No pocos testimonios, de prensa y otros fondos archivísticos, permiten reconstruir el tiempo republicano y los procesos históricos que lo acompañaron. De entre ellos, los guardados en el Archivo Municipal de Uncastillo son, como no podía ser de otra manera y pese a notorias ausencias, una parte funda-

mental del estudio. Las fuentes oficiales conservadas nos permiten conocer la problemática social de la villa, los agentes sociales implicados en el conflicto, y las motivaciones e ideales que guiaron a Plano en su labor política para tratar de resolver las crisis. Existen sin embargo zonas oscuras e interrogantes que las fuentes oficiales omiten, que han de ser planteadas por el historiador con hipótesis razonables y ajustada metodología. Cuanto más, en lo que atañe a la faceta más humana del personaje, asunto que precisa de informaciones como la de los testimonios orales.

En el fondo, con este utillaje teórico y metodológico, se persigue rescatar de la muda losa del olvido los trazos de voluntad con los que mucha gente se enfrentó, durante el tiempo de oportunidad que supuso para ellos la República, a problemáticas históricas de la sociedad. La dinámica política y la desigualdad económica hicieron que sectores amplios de población interpretaran, con la mediación de discursos críticos, que el progreso y la democracia estaban acotados para ellos y que sólo unos pocos podían disfrutar de sus beneficios. Es por eso que el libro no habla tan sólo de Antonio Plano, o sólo de Uncastillo, sino que con ese motivo se acerca a los problemas de los años treinta en España. El historiador, o al menos aquel comprometido con su tiempo, tan sólo trata de señalar vacíos de silencio y de proponer ideas que, lejos de constituir respuestas cerradas, logren mover al debate y a la reflexión sobre las causas de dichos silencios. Esperemos que esta pequeña contribución pueda, en la medida de lo posible, realizar una aportación en esa línea.

UN COMIENZO: OCTUBRE DEL 34, LA EXPLICACIÓN DE MUCHAS COSAS

«Comenzó el Consejo de Guerra para juzgar a ciento diez procesados por lo que ocurrió en Uncastillo en el mes de Octubre». Se lee en *La Voz de Aragón* del 27 de marzo de 1935. Las fotografías de aquel angustioso momento, publicadas en la prensa local, permiten percibir la gravedad con que fue vivido por sus protagonistas. A un lado del salón del Cuartel de Hernán Cortés en el que tenía lugar el juicio se ubicaba el tribunal militar conformado por nueve altos mandos. A la derecha del mismo se colocaron los veintidós abogados defensores, y frente a la mesa presidencial, los ciento diez vecinos sentados en banquillos corridos, flanqueados por números de la Guardia Civil. Todos miran al frente, hacia la cámara, con firmeza y seriedad, recordando al espectador esa imagen icónica del pueblo avanzando, «El cuarto poder» de Pelizza da Volpedo. Solo que aquí no marchan, sino que esperan. Esperan a que una sentencia les cambie la vida. En uno de los laterales de la sala grandes ventanales permanecen abiertos. Hay gente apoyada en los alféizares, con un aspecto más relajado que los procesados, alguno incluso inoportunamente bromista. El salón rezuma ansiedad, y el aliento cálido de toda aquella gente, cargado de indignación y miedo, impregna el aire hasta poderse cortar. El alivio lo aporta el aire fresco y la luz de aquella primaveral mañana entrando por las ventanas. Afuera muchos más siguen atentamente la evolución del juicio. Algunos miran, curiosidad inevitable, hacia la cámara. «Entre el público», escribe el diario, «se ven algunas mujeres» que permanecen en un segundo plano por detrás de los procesados.

Es cierto que esta historia comienza casi por el final. La razón de escoger Octubre de 1934 es que en ocasiones ciertos episodios constituyen un hito en el discurrir de los acontecimientos.

tecimientos de un colectivo, erigiéndose como efecto y causa de muchos otros sucesos, relatos e interpretaciones. El movimiento revolucionario de 1934 es uno de esos momentos históricamente significativos que merecen ser subrayados, matizados y redescubiertos, máxime en la pequeña escala. El movimiento revolucionario socialista fue un antes y un después, supuso un cambio de sentido, un giro de tuerca en la vida política de la República y en la dinámica de confrontación entre «las izquierdas» y «las derechas». Fue excusa y motivo recurrente para la radicalización de la retórica antirreformista de los partidos y grupos sociales católicos y pro fascistas. Las Cinco Villas fueron los únicos lugares de Aragón que acompañaron el movimiento de Asturias, por lo que no parece exagerado volver sobre los hechos y mantenerlos en la memoria como acontecimientos cruciales para el futuro inmediato de los vecinos de Uncastillo. La revolución fracasó y la represión del gobierno puso las bases de una nueva cultura política, la de la eliminación del contrario. Algo que habría de manifestarse con virulencia en la primavera del 36, y que tendría como muestra más evidente el terror caliente del verano de aquel año. Las preguntas en torno a ese dramático giro de los acontecimientos han revoloteado una y otra vez sobre la elección del inicio de esta historia: ¿Qué había cambiado desde la alegría de la primavera del 31 al horror del verano del 36? ¿Cómo vivió y participó la población de estos cambios? ¿Qué hizo a los socialistas, aparentemente demócratas, aceptar la vía insurreccional? Y en la pequeña escala, ¿cómo se desarrollaron los hechos en Uncastillo al margen de las explicaciones oficiales? ¿Y cómo se desenvolvió Antonio Plano, referencia moral y política para muchos, en un momento en el que todo parecía volverse del revés?

Para el juez instructor del caso, el teniente coronel Antonio Civera, no cabía ninguna duda. El alcalde había sido «el principal culpable de la revolución». Según informes oficiales y declaraciones de los guardias civiles heridos que habían prestado servicio durante el levantamiento, el movimiento se inició en la noche del 5 de octubre de 1934, cuan-

do al pueblo llegaron en automóvil, procedentes de Zaragoza y Tauste, varios enviados de la UGT que dieron orden a los mandos locales de que declararan la huelga general revolucionaria. «Al frente del movimiento se puso el alcalde del pueblo Antonio Plano Aznárez, y después de procederse al reparto de armas y municiones, los revoltosos comenzaron a actuar». Se cortaron las comunicaciones telegráficas y telefónicas, se levantaron barricadas en la carretera, se estableció vigilancia desde lo alto del castillo, y se comenzó el asalto al cuartel de la Guardia Civil. Los intentos de apaciguamiento por parte de Plano, reconocidos tanto por la defensa como por la fiscalía, no impidieron las descargas de los paisanos y el resultado fatal de dos guardias muertos, y heridos un capitán, un sargento y varios números de la Benemérita. Todos ellos fueron retratados para la prensa en las camas del hospital, pero apenas se conocieron los nombres de los paisanos muertos, y menos aún sus rostros. Como cabía esperar, tampoco se investigó la posible responsabilidad de los guardias o de otros mandos en dichas muertes.¹

Antonio Plano fue condenado a muerte, y no pocos de sus convecinos a penas de entre seis meses y reclusión perpetua. Sin embargo, las penas no se cumplieron más que en una pequeña proporción, al proclamar el Frente Popular la amnistía para los presos de Octubre pocos meses más tarde, en febrero de 1936. Quienes se habían hecho con el poder local tras los acontecimientos de Octubre, la gente identificada con el discurso antirreformista y antirrepublicano articulado por la derecha, alarmados por lo que consideraban ataques a la propiedad privada y al orden social, se vieron obligados a desalojar los sillones y abandonar los bastones de mando cuando el gobierno restituyó en sus cargos a los antiguos ediles socialistas. Eso y la liberación de los presos crearon en la derecha un sentimiento de afrenta irreparable, radicalizado a través de un discurso presente en los medios de comunicación que abogaba por la utilización de las armas y la eliminación física del contrario, que ahora pasaba a ser enemigo.

¹ HA, 27-3-1935.

Derecha e izquierda decían actuar por «nuestros muertos», los «mártires» cuya memoria había que honrar venciendo en la batalla de la preeminencia política y social. Lejos de responder a una única variable, el conflicto descansaba sobre identidades enfrentadas entre derecha e izquierda, entre catolicismo y laicismo, entre burguesía y proletariado. A eso también se podría añadir, en el contexto rural, el ingrediente del conocimiento personal entre los vecinos. Esa vecindad había sido tradicionalmente una amalgama social capaz de identificar a los campesinos con su pueblo y unir al vecindario frente a adversidades provenientes del exterior. Sin embargo, a la altura de los años treinta esa convivencia se veía fragmentada por las líneas de diferenciación social abiertas por la clase, la religión o la militancia política, campo abonado para dirimir por la vía directa viejas rencillas y afrentas. Desde esta perspectiva, cabe pensar en Octubre del 34 como una aceleración de algo que ya se venía larvando con anterioridad, la dinámica de conflicto entre grupos políticos y sociales, sobre todo a partir del cambio de gobierno de 1933. Y después pasó que «Octubre» no terminó en octubre, abriéndose desde ese momento una lucha encarnizada entre identidades por hacer prevalecer el discurso más convincente de los acontecimientos. Dicho de otro modo, cuando se hablaba de Octubre del 34 las disputas argumentales comenzaron a confundirse con las personales y las palabras comenzaron a quedarse cortas.²

Comenzó la derecha, tratando de deslegitimar no sólo al movimiento obrero que había preparado la revolución, sino por extensión a todos aquellos que conformaban la izquierda política. Se tenían los medios para excluir de la ciudadanía a la vieja mayoría progresista, y el encarcelamiento de Azaña durante tres meses fue quizás el mejor símbolo de esa drástica política. El recurso a la violencia quedaba a partir de

² El proceso competitivo abierto desde ese instante entre los grupos políticos resulta más que interesante, y ha sido analizado por Rafael CRUZ, *En el nombre del pueblo*, Siglo XXI, Madrid, 2006.

ese momento justificado para combatir lo que, según esa interpretación, había sido una revolución cincelada según el modelo soviético, demonizado por la derecha desde años atrás. Ante la amenaza de la dictadura de un proletariado impío y criminal, no quedaba sino la defensa de los valores patrios y de la vida por las armas, vigilando las instituciones y la calle para actuar con severidad y firmeza. Fue el comienzo de una retórica que alcanzaría su máximo apogeo y virulencia en febrero de 1936. Por su parte la izquierda, constreñida y excluida de manera creciente de los derechos ciudadanos, articuló a partir de 1935 un movimiento social encaminado a redefinir la interpretación de Asturias difundida por la derecha, transformando un enfrentamiento armado en una persecución repleta de crueldades por parte del Gobierno y las fuerzas armadas a su mando. Los jalones de esa historia fueron los despidos y el desmantelamiento de las garantías laborales, los consejos de guerra, la ocupación de las instituciones locales... Algo que según este relato afectaba no sólo a la clase obrera, sino a todo el «pueblo». Muchos grupos al margen de la clase obrera, en efecto, se solidarizaron con los detenidos y condenados por los sucesos de Octubre participando en las campañas organizadas por republicanos y socialistas firmando manifiestos o asistiendo a mítines y manifestaciones. El objetivo estaba muy claro, intentar no abandonar la política pública y mantener los derechos (ciudadanos, laborales, políticos...) que les estaban hurtando. La oportunidad no podía ser otra que las elecciones de febrero de 1936. Fue entonces cuando las versiones de «Octubre de 1934» tomaron total protagonismo en periódicos, mítines, propaganda electoral y en debates en los órganos representativos de la nación.

La inesperada derrota de las derechas sumió a los partidos de la coalición cedista en una nueva espiral retórica de violencia y exclusión de sus adversarios de izquierda, unidos en la cita electoral bajo el paraguas del Frente Popular. La victoria de la izquierda supuso, en el otro lado, una fuerte afirmación identitaria y la conquista de nuevo de los recursos

necesarios para hacerse con el control de la calle y las instituciones. La oleada de huelgas que tuvo lugar en la primavera de 1936 es quizás el mejor indicativo de que la población interpretó el momento como su ocasión de hacer política, de influir en la configuración de normativas y en la organización de las estructuras de poder local y regional. Se comenzó una nueva «republicanización» del Estado, que incluyó un intento de controlar policialmente la calle y las manifestaciones colectivas de los grupos de oponentes. Al mismo tiempo que el Gobierno desarrollaba un carácter autoritario en la gestión de sus políticas, la derecha articulaba con éxito un discurso basado en la percepción del gobierno como amenaza, en la exageración de elementos provocadores de miedo, y en la propuesta de una única y definitiva solución, el golpe de estado.

Es por todo ello que Octubre de 1934 resulta de tan singular trascendencia en la historia española de los años treinta. Despachado quizás con demasiada celeridad en las historias generales del período, el episodio todavía alberga mucho por contar en el terreno de la definición y conformación de las identidades políticas, de la movilización colectiva y la representación del conflicto a través de la difusión del discurso público. En la primavera de 1936 la batalla por la preeminencia política y social se libraba en la tribuna de prensa, en la calle y en las medidas emanadas de los organismos oficiales. Y en aquella batalla «Octubre» fue bandeado desde uno y otro lado como símbolo concitador de odios y adhesiones. Mediante la inclusión o la exclusión de derechos de ciudadanía y de acceso a los órganos de control político y económico, se estaba librando una batalla para imponer diferentes concepciones sobre el Estado y la sociedad. El posterior levantamiento militar de julio dio lugar al episodio más violento posible de exclusión del contrario. La guerra alumbró en el territorio ganado por los sublevados los cimientos del nuevo Estado fascista, mientras la zona republicana contemplaba, junto al mantenimiento de la autoridad del gobierno, la instauración de formas revolucionarias de organización

colectiva allí donde el fracaso de la sublevación dio como resultado un vacío de poder.³

No fue este último el caso de Uncastillo. Desde el primer momento experimentó la extrema crueldad de la vida en la retaguardia franquista. Quienes tomaron parte en la revolución de 1934 habrían de pagar cara la osadía ante los elementos del orden. El salvoconducto hacia la cárcel o algo mucho peor era la demostración de la responsabilidad política de los inculpados en «la creación de la situación que provocó el Alzamiento nacional». Y para eso, en muchas ocasiones bastó que el jefe local de falange o el comandante de la Guardia Civil atestiguase que el sospechoso había tomado parte en los sucesos del 34. Esos eran los argumentos que justificaban una rebelión militar, una guerra y una represión brutal contra republicanos y gentes de izquierda. El paso siguiente fue culpabilizar a estos últimos de haber comenzado el conflicto armado en 1934, por lo tanto de haber roto primero las reglas del juego. El argumento ha sido rescatado en la actualidad por algunos autores revisionistas, que no dudan en continuar por ese camino que caracterizaba las ideologías de la izquierda como totalitarias y antidemocráticas, y de exculpar a los protagonistas del golpe militar contra un gobierno legal de cualquier responsabilidad en el inicio de la guerra.⁴

³ Carlos GIL ANDRÉS, *Lejos del Frente. La guerra civil en La Rioja Alta*, Crítica, Barcelona, 2006. Vol. Santos JULIÁ (coord.), *República y guerra en España (1931-1939)*, Espasa, Madrid, 2006. Adrian SHUBERT, *Historia Social de España*, Nerea, Madrid, 1991.

⁴ Como se habrá podido adivinar, el principal revisionista es Pío MOA, *1934. Comienza la Guerra Civil. El PSOE y la Esquerda emprenden la contienda*, Altera, Barcelona, 2004. El volumen que ha sacado a la luz pública la controversia contra esta línea editorial y argumental, en Alberto REIG TAPIA, *Anti-Moa: la subversión neofranquista de la Historia de España*, Ediciones B, Barcelona, 2006, una aportación de por sí cuestionada por quienes consideran más adecuado no entrar en diatribas para, apuntan, no aumentar la publicidad y las cotas de mercado de los revisionistas. Un buen resumen de la cuestión en Carlos RILOVA JERICÓ «¿Qué te parece Pío Moa? Dos notas sobre el revisionismo y la guerra civil española», *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, <http://hispanianova.rediris.es>, 2007.

No seguiré esa senda. Primero, por respeto hacia la obra de muchos historiadores que a lo largo de varias décadas de callada investigación y paciente escritura han conseguido construir, consultando fuentes distintas de las franquistas, una consolidada historiografía que demuestra lo fallido de esa cadena argumental. Según la versión revisionista, lo iniciado en 1934 dio cobertura legal a la extensión de la violencia desde el ámbito de la izquierda durante los meses posteriores, desdibujándose la responsabilidad de los militares en el inicio de la guerra en 1936. Es cierto que tras la victoria frentepopulista algunas formas de confrontación desarrolladas por los españoles aumentaron su nivel de violencia, abarcando colisiones con la policía, reyertas, asaltos de centros políticos, agresiones personales, atentados o tiroteos. Sin embargo, no es menos cierto que la mayoría de las acciones de movilización planteadas en la sociedad fueron pacíficas, si bien tuvieron menor alarma y repercusión mediática que las violentas (huelgas, manifestaciones, entierros, marchas, peticiones...). Y que en todo caso, las violentas formaron parte del repertorio general de movilización y se articularon aprovechando determinadas oportunidades políticas, y respondiendo a la percepción de ciertas amenazas muy relacionadas con la presencia y ascenso de los fascistas. Un aumento de la violencia en el conflicto social no lleva, pese a lo que algunos intentan descubrir, inevitablemente a una guerra. La Francia de los años treinta es un buen ejemplo de cómo una situación social de tensión y conflicto no lleva aparejada una lucha armada entre ejércitos. En España el golpe militar lo cambió todo, cambió las reglas de un juego, duro y violento, es verdad, pero en el que todavía existían ciertos límites. Un acercamiento serio a la cuestión, en todo caso, no puede obviar la complejidad de las circunstancias que rodean la movilización colectiva en la historia contemporánea, ni la diferencia cualitativa que existe entre una intensa movilización política y el hecho de que un grupo de militares se alcen en armas contra un poder legalmente constituido.⁵

⁵ Rafael CRUZ, *En el nombre del pueblo...*, ob. cit., p. 164.

Y segundo, porque aunque he subrayado la importancia de 1934, es obvio que durante la República pasan muchas otras cosas que redimensionan y ubican los hechos en sus justos términos. La excepcionalidad de algunas localidades de las Cinco Villas como Uncastillo durante la insurrección en el territorio aragonés aúna factores de índole local con procesos históricos de largo alcance relacionados con la modernización y la democratización del país. Unos procesos que adquieren visibilidad y carta de naturaleza desde 1931, momento en el que se patentiza el compromiso de la izquierda democrática con el nuevo sistema político y las reformas sociales. En ese compromiso entraron en juego tanto la historia colectiva y la identificación con valores políticos republicanos y democráticos, como el cálculo del mayor beneficio posible en un marco de intensificación de la competitividad política para acceder al poder. Presuponer, como parece que se hace en algunas de las obras revisionistas, que la semilla totalitaria ya estaba presente en 1931, es demasiado presuponer. Los testimonios que avalarán lo contrario son muchos, y en lo que respecta al caso de Plano, su trayectoria, plagada de sensatez y prudencia, no ofrece lugar a dudas sobre su lejanía respecto de los atajos democráticos. Eso no evitó que fuera juzgado junto a sus convecinos por los hechos de 1934. Meses más tarde de aquellos angustiosos días frente al tribunal militar, sufriría junto con ellos castigos sin juicio ni garantía legal que se le pareciese. Es por todo esto que los acontecimientos de Octubre en Uncastillo han ocupado las primeras páginas de este volumen, concebido no como un exclusivo homenaje a Plano, que también, sino como un cuadro colectivo de la vida del Uncastillo del primer tercio del siglo XX.



Antonio Plano Aznárez.
Fotografía hecha en Zaragoza hacia 1930.
(Gentileza de Antonio Plano Cortés).

Capítulo 1

UNCASTILLO, UN TIEMPO Y UN LUGAR

La carretera de Sádaba se abre paso hacia el noreste, hacia la montaña, y conforme las curvas enrevesan el camino, los espacios abiertos por los que éste discurre a la altura de Layana van dando paso a tierras más escarpadas, pobladas de carrascas y chaparros. Asoman de cuando en cuando las copas de chopos, sauces y fresnos un poco más lejos y abajo, junto al río. La sierra se cierne a veces sobre la carretera para, en el recodo de una curva, permitir de nuevo ensanchar la mirada hacia otras laderas de arbusto y bosque. El asfalto, cuarteado y socavado por inviernos sin piedad, habla de un paraje hermoso pero de vida más difícil conforme avanza hacia las montañas. Imagino a sus habitantes recorriendo una y mil veces a lo largo de la Historia este mismo camino del Riguel, buscando comerciar con sus productos o pastar con sus ganados en Sádaba o en Ejea. Y a veces ir más allá, hacia Luesia, Sos, Navarra y las localidades del Pirineo. Uncastillo rompe las divagaciones, apareciendo no muy lejos y casi de repente, enclavado en un valle cerrado y tan sólo anunciado por el castillo medieval que lo domina en su mismo centro. Inmediatamente la iglesia de Santa María saluda al visitante, en su sitio de la plaza del Olmo, lugar que no siempre fue lugar de paso como hoy. Aquí, pienso, nació y murió el alcalde Antonio Plano. Pero queda tanto por saber de esa historia... Tras aparcar mi automóvil, y mientras dejo atrás la esquina de la iglesia, comienzo a ser consciente de la dificultad de la tarea que hoy emprendo, la de escudriñar en un pasado lleno de interrogantes y de silencios. Hoy por hoy, mientras me dirijo al Ayuntamiento, donde me esperan los primeros papeles viejos, tan sólo escucho, parafraseando el verso de una hermosa canción, el sonido de mis propios pasos en la gravilla.

Los Plano

Joaquín Plano era un jornalero agrícola, uno más de los que poblaban la villa de Uncastillo en los últimos años del siglo XIX. Había casado con María Aznárez, y aunque no sabía leer ni escribir, esperaba conseguir un lugar para él y su nueva familia en el pueblo. Él procedía de la cercana localidad de Lobera de Onsella, pero marchó de allí tiempo atrás, obligado por el servicio de quintas. De los cinco mozos sorteados en aquel año de 1890, dos habían podido pagar la redención de dos mil pesetas, otro pudo esquivar durante algún tiempo el servicio, y él y otro vecino tuvieron que marchar a un largo período de incertidumbre bélica. No pocas historias de vejaciones y peligros rodeaban el relato de la quinta, y aunque por aquel tiempo todavía no habían llegado los peores relatos de los machetazos de los mambises y las enfermedades de la manigua, la quinta seguía partiendo en dos la vida de los mozos, empujando a algunos a dañarse un ojo, a amputarse algún dedo o a trampear de cualquier manera con los casos que la ley reconocía como «exceptuados» y «excluidos». Otros se marchaban como «prófugos» a Francia. Y seguía siendo odiada porque los ricos podían fácilmente eludirla, mientras que los pobres debían endeudarse para toda la vida si querían hacer lo propio. Pues al volver de la quinta Joaquín se vio con fuerzas para intentar comenzar una nueva etapa en Uncastillo. Con María, habitaron el número seis de la calle Horno Nuevo, y cuando nació el primer vástago, Antonio, contaba veinticinco primaveras. Fue un veinticuatro de mayo de 1896, y la criatura llegaba al mundo sana y entera. Se hubieron de dar gracias al cielo por ello, pues el chico prometía brazos para trabajar y la perpetuación de una casa que trataba de echar raíces en Uncastillo.⁶

En un breve lapso de tiempo Joaquín había podido comprobar lo azaroso del destino. Cuando él marchó de quinto

⁶ Sorteo de Joaquín Plano Chavarri en ADPZ, *Libros de Quintas*, Partido de Sos, 1890. Datos sobre Joaquín Plano en AHPZ, Censo electoral de 1900, y gracias también a la información genealógica proporcionada por Pascual Plano.

no había guerra, y en poco tiempo se abrieron dos campañas militares, la africana de 1893, y la cubana en 1895. Una fotografía de los cinco quintos de 1895 perdura como testimonio gráfico de la participación de los uncastilleros en la guerra de Cuba, a los que de seguro Joaquín, como el vecindario entero, vio partir. Alguno como el joven Miguel Canales Idoype vivía justo frente a la casa de Plano. Miguel volvió años después, pero otros no corrieron igual suerte. Por el momento y hasta los diecinueve la quinta no sería motivo de preocupación para Antonio, ni para sus padres, quienes probablemente sí que estuviesen en aquellos momentos más preocupados sobre cómo alimentar una boca más en los tiempos difíciles en que les había tocado vivir. Y también en procurar el favor divino del chico bautizándolo como era preceptivo en la parroquia de Santa María, a la que pertenecían por domicilio, y a no mucho tardar.⁷

El universo de preocupaciones de Joaquín Plano tenía desde luego un trasfondo muy real. Ante la inseguridad de las cosechas y la amenaza de los fenómenos naturales había visto a sus mayores mirar al cielo para tratar de adivinar las señales en las nubes, en el viento o en las aves, y a veces para rezar con el fin de atraer las lluvias o espantar los pedriscos. Pero a esta crónica incertidumbre se estaban sumando una serie de fenómenos desconocidos y que no tenían que ver con lo divino. Bastantes agricultores se habían visto obligados a vender sus parcelas a bajo precio, a endeudarse con los caciques locales o, en el peor de los casos, a emigrar buscando mejor fortuna. Algo que por esos años, dicho sea de paso, tan sólo significaba un simple trabajo como jornalero o peón agrícola. Incluso los más ricos vendieron ante la recesión que asoló el campo durante los años noventa. El trigo que se acostumbraba a cultivar no se vendía fácilmente. Algunos periódicos como *Cinco Villas*

⁷ Miguel Ángel ZAPATER BASELGA y Francisco Javier NAVARRO CHUECA, «Cincovillenses en la guerra de Cuba (1895-1898)», *Suessetania*, 22 (2004), pp. 121-172.

daban cuenta de las causas, aunque su lectura solía ser coto de los casinos donde se reunían, arropados en aterciopelados sillones, los terratenientes más notorios. Se decía que había llegado trigo de Rusia y de América a los puertos marítimos, y que nadie quería pagarlo al precio de años atrás. En las capitales, los periódicos de gran tirada, boletines oficiales de Cámaras de Comercio y los foros de centros políticos y económicos habían popularizado el término de la «crisis agrícola y pecuaria» como explicación de lo que estaba ocurriendo. Pero en Uncastillo, como en muchos otros pueblos del interior, es más que probable que los campesinos, mientras volvían a sus casas al cansino ritmo de las caballerías y tras malvender su cosecha en la casa del «amo» o el cacique, fueran pensando no ya en los efectos perniciosos de la globalización capitalista, sino en cómo enfrentar un año más la subsistencia de la familia, que casi sin darse cuenta iba creciendo...⁸

Uncastillo era lugar de campesinos y pastores. Los vecinos de la calle Horno Nuevo eran en su inmensa mayoría jornaleros como Plano, «gente del campo» como a veces figuraba en informes oficiales. La calle ascendía desde Santa María hacia San Martín y la plaza del Mercado, bordeando el lado sur del castillo, al igual que por el norte lo hacía la calle Mediavilla. En el casco urbano, en las calles Lechuguilla o Roncesvalles había casas solariegas, sedes de linajes antiguos y emblemas públicos del poder económico de sus moradores, pero abundaban más las edificaciones humildes en las que vivían la mayoría de los vecinos que trabajaban con sus manos. También al otro lado del Cadenas, en el barrio de San Felices, se concentraba un buen número de familias del pueblo. Las calles eran populosas y activas, llenas de casas abiertas con apodos más o menos locuaces, fruto de la fina ironía aragonesa ejercitada en lugares cotidianos de encuentro como la plaza, el mercado, la taberna, el lavadero, los

⁸ Las ventas de pequeñas parcelas aparecen en AHPZ, *Apéndice a los amillaramientos*, años 1893, 1895, 1899.

lugares de juego infantil, la propia calle en las tardes de verano o la puerta de la iglesia en los días festivos. Muchos de aquellos nombres se han perdido en el tiempo, mientras que otros perduraron a través de varias generaciones de descendientes. De lo que no cabe duda es de que, antes que cualquier otra consideración sociológica, los habitantes del campo de finales del XIX se autodefinían como integrantes de una casa y partícipes de unas solidaridades internas fundamentales para la subsistencia del grupo familiar, y también hacia fuera y de manera más amplia para la continuidad de la misma comunidad rural. Casi antes que los individuos, contaban las casas. En Horno Nuevo había varios tejedores, albañiles, pastores, un esquilador y un herrero, pero la inmensa mayoría de los cabeza de familia de la calle eran jornaleros. ¿Qué significaba ser jornalero por aquellos días?⁹

País de pastores y jornaleros

Fundamentalmente, dependencia. Más que del jornal, de las voluntades con capacidad de influencia en los asuntos de la economía y la vida social, que eran las de los más importantes ganaderos y hacendados locales. Tradicionalmente la economía de las Cinco Villas había gravitado en torno de la ganadería, y los patrimonios se cifraban en los rebaños con mayor número de cabezas. Todavía en 1897, cuando ya el número de cabezas había descendido notablemente, vivían cincuenta y dos pastores en el pueblo. Por su parte, la mayoría de las casas habitaban a elaborar buena parte de los útiles precisos para su vida gracias a habilidades transmitidas generacionalmente, y cuando no ocurría así, se acudía al trueque en el mercado local. El trigo era el cultivo habitual, trabajado con técnicas tradicionales como el barbecho para garantizar tanto el consumo familiar como las demandas por parte de señores y abades, pero integrándose, al igual que

⁹ Los comentarios sobre la extracción sociológica de algunas calles, en AHPZ, *Censos electorales*, 1897 y 1903. La recopilación de los mote de las casas en la dirección de la página web de Jesús Pueyo Maisterra, <http://pagesperso-orange.fr/jesus.pueyo/listado%20de%20apodos.htm>.

la ganadería en un ciclo productivo natural. A lo largo del siglo XIX los procesos de venta y enajenación de los señoríos supusieron el inicio de la reestructuración de la propiedad de la tierra, provocando un cambio en su titularidad aunque no un reparto suficiente entre los campesinos pobres. Poco a poco la tierra iba a constituir, de por sí, un bien con el que comerciar y hacer riqueza. Quienes se hicieron con su titularidad dispusieron de una poderosa herramienta para manejar a su antojo su circulación y uso, y para incrementar su patrimonio a través de la cesión de arriendos a los campesinos. A finales de siglo este proceso dio otra vuelta de tuerca con la creación y consolidación de los mercados nacionales y la introducción definitiva de la economía capitalista en el campo.¹⁰

Hubo de percibirse casi como una maldición, porque en pocos años se inició un proceso de crisis que afectó a los más desprotegidos. Los trigos llegados de Ultramar y Rusia provocaron en zonas como la aragonesa una creciente necesidad de especialización para intentar ofrecer precios más bajos. Los mayores propietarios y mercaderes con posibles trataron de hacerlo instalando explotaciones cuya producción tenía como único destinatario el mercado, e intentando introducir mejoras técnicas capaces de incrementar los rendimientos por hectárea, como abonos y maquinaria nueva. Y para eso se fue poco a poco abandonando lo que había venido siendo fuente principal de riqueza, la ganadería, para concentrar los mayores esfuerzos en los cereales. Eso sí, los propietarios siguieron contando durante el tramo final del XIX con el control de la tierra, de la que continuaron sacando beneficio a través de los contratos de arrendamiento y algunas ventas. Las parcelas eran, sin embargo, lo suficientemente pequeñas como para no poder mantener a una familia, debiendo además tener en cuenta las particiones hereditarias.

¹⁰ Del cómo la balanza agricultura-ganadería se fue inclinando cada vez más del lado de la primera durante el siglo XIX se ha ocupado con detalle Alberto SABIO ALCUTÉN, *Tierra, comunal y capitalismo agrario en Aragón (1830-1955)*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2002, pp. 27-51.

Todo eso hacía que a finales del XIX informes oficiales y estudios diversos afirmaran que en Aragón la propiedad de la tierra estaba extremadamente fragmentada. Había que suplir esa escasez con algún jornal o trabajo extraordinario. Y ahí estaban las explotaciones de los propietarios, monopolizando las ofertas de trabajo locales, deseosas de recibir a los braceros a cambio de un exiguo jornal.¹¹

Pero además es imposible imaginar todo este nuevo puzzle económico y social sin atender al contexto político que lo hacía posible, la consolidación de un Estado comprometido con la propiedad y el orden burgués. Se establecieron leyes favorecedoras de la propiedad y el comercio, y los sucesivos gobiernos proyectaron crear un mercado nacional capaz de superar las barreras internas, con una misma moneda y sin aranceles locales más allá de los permitidos. Eso precisaba de unas comunicaciones que permitieran competir a los productos en mercados alejados, es decir, rápidas y baratas. Ese fue el auténtico caballo de batalla de muchos pueblos que, liderados por alcaldes y diputados con intereses comerciales, comenzaban a pedir por la vía institucional un lugar en el mapa de los trenes y las carreteras regionales. También Uncastillo, cuyo alcalde escribía a la Diputación Provincial de Zaragoza en 1858:

«la felicidad de las Cinco Villas de Aragón, tan abundante en granos, ganados y otros efectos, depende su consecución en facilitar el transporte de sus sobrantes [...] y dado que] en

¹¹ Una visión de conjunto sobre la crisis en Ramón GARRABOU, «La crisis agraria española de finales del siglo XIX: una etapa del desarrollo del capitalismo», en Ramón Garrabou y Jesús García Sanz, *Historia agraria de la España Contemporánea. Expansión y crisis (1850-1900)*, Crítica, Barcelona, 1985, pp. 7-191. Cifras y argumentos sobre la crisis en el campo aragonés, en Luis GERMÁN ZUBERO y Carlos FORCADELL ÁLVAREZ, «La crisis finisecular en la agricultura interior: el caso de Aragón», en Ramón Garrabou (ed.), *La crisis agraria de fines del siglo XIX*, Crítica, Barcelona, 1988, pp. 69-93. También José Antonio BIESCAS FERRER, *El proceso de industrialización en Aragón. 1900-1920*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1985. Antonio PEIRÓ ARROYO, «El mercado de cereales y aceites aragoneses. Siglos XVII-XX», *Agricultura y Sociedad*, núm. 43 (1987), pp. 213-279. Vicente PINILLA, *Entre la inercia y el cambio: el sector agrario aragonés. 1850-1930*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1995.

todo este dilatado país que encierra poblaciones importantes no se encontrará un camino regular de herradura [...], ahora se presenta a V.E. la ocasión más propicia para recibir las bendiciones de esos pueblos, con solo disponer lo conveniente para la prosecución de la carretera desde Tauste a Ejea, y pasando por Sádaba y Sos, enlazarla con la de Sangüesa, declarándola vecinal de primer orden, puesto que se enlazan dos capitales de Provincia, Zaragoza y Pamplona; y sin perder de vista al propio tiempo cuán útil sería para todos habilitar también las tres horas escasas que hay desde Sádaba a Uncastillo, pues sabido es que las hijuelas son las que dan vida a los caminos generales, y más tratándose de poblaciones de la importancia de Uncastillo; por ese medio no sólo conseguiría V.E. la felicidad de este país, sino las de otras Provincias, pues así como esas recibirán con más economía los cereales que les faltan, exportarán sus manufacturas con la misma, y con la esperanza de mejor y más fácil despacho, pudiéndose asegurar se pondrán en contacto frecuente el Mar Cantábrico con el Mediterráneo y las poblaciones interiores y más productivas que los separan con la facilidad de las comunicaciones».¹²

Por largo, el documento no es menos elocuente sobre las preocupaciones que invadían a los hombres de negocios de la localidad. Algunos de los que los firman aparecen como regentes del municipio, y son el vivo ejemplo de cómo el poder económico y el político aparecían indisociables en el ámbito local. La posición de preeminencia de familias como los Monguilán o los Gay arranca de estas fechas y se pro-

¹² ADPZ, *Fomento*, leg. XII-707. Juan PAN-MONTOJO, «El atraso económico y la regeneración», en Pan-Montojo (coord.), *Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo*, Alianza, Madrid, 1998, pp. 261-334. El cambio agrario y la introducción del capitalismo en el campo dio lugar a un encendido y rico debate entre los mejores especialistas en la materia como Domingo GALLEGU, Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA y Ramón GARRABOU, *Historia Agraria*, núm. 16 (1998), pp. 13-97. Ensayaron escritos sobre cuestiones como el supuesto «atraso» de la agricultura hispana, la agencia del cambio y su alcance, y la importancia de las resistencias de algunos sectores de población ante dichos cambios. Posteriormente, junto a otros especialistas, publicaron un volumen argumentando contra el mito del atraso de la agricultura española, y proponiendo un crecimiento lento y sostenido a lo largo del período liberal, Josep PUYOL, Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA, Lourenzo FERNÁNDEZ PRIETO, Domingo GALLEGU y Ramón GARRABOU, *El pozo de todos los males. Sobre el atraso de la agricultura española contemporánea*, Crítica, Barcelona, 2001

longará durante décadas. Eran ellos quienes impulsaban los proyectos regionales de comunicación que afectaban a sus productos. Volverían a emitirse informes al respecto en 1876 por parte de la Diputación Provincial, encareciendo al Ministerio de Fomento la inclusión de la carretera de Uncastillo a Sádaba en el plan general de carreteras. De igual modo, el trazado del recorrido del ferrocarril constituyó un motivo de disputa política entre comarcas y de movilización social, alentadas por los hombres importantes según sus particulares intereses. El proyecto del eje Sádaba-Gallur fue el que finalmente se impuso en las Cortes en 1908, aunque existía mayor apoyo vecinal y mejores posibilidades comerciales en el eje transversal Sádaba-Zuera. Lo que todo esto indica es que las comunicaciones se estaban transformando en un factor fundamental para el dinamismo económico y el progreso de la agricultura. Un progreso que habría de suponer pingües beneficios para las economías más saneadas, pero que se cruzó en el camino de los labradores humildes en forma de presión fiscal, empobrecimiento y emigración.¹³

Las primeras dificultades entre los campesinos surgieron cuando los trueques perdieron su razón de ser. Todo el mundo comenzó a necesitar dinero para poder comprar en el mercado, y también para poder pagar a los agentes del fisco los múltiples impuestos que la ley estipulaba: por el reparto territorial, por pesas y medidas, por matrícula industrial, por cédulas personales, por los consumos... Esa visita y la del agente de quintas eran en realidad los únicos momentos en los que los vecinos recibían noticia de una instancia política superior. Y casi siempre era para mal. En la libreta del recaudador no aparecía la pérdida de la cosecha por una tormenta, los estragos de una sequía, o la marcha del hijo a la guerra y la pérdida del jornal para la casa. Su sola llegada

¹³ ADPZ, *Fomento*, leg. XII-707. Javier LAMBÁN MONTAÑÉS, «Los caminos centenarios de las Cinco Villas: un debate centenario», en *IV Jornadas de estudios sobre las Cinco Villas*, Centro de Estudios de las Cinco Villas, Ejea de los Caballeros, 1995, pp. 123-142.

motivó en muchos lugares respuestas airadas en forma de motines y algaradas populares. «Vivimos en perpetua crisis», apuntaban desde Uncastillo en 1893, pues «triste es tener que demostrar el desaliento y postración en que se encuentra el labrador, y no es debido nada más que a la causa de los muchos gravámenes que pesan sobre la producción». Por su parte, la presencia de la Guardia Civil como brazo armado de la ley solía ir acompañada de cierta segregación de los guardias en casas cuartel apartadas de los pueblos, lo cual dificultaba la confianza en el cuerpo por parte de los vecindarios, sabedores de que cualquier alteración del orden sería duramente castigada por la Benemérita. En la percepción popular los representantes del Estado traían la incertidumbre, el dolor y en ocasiones la humillación en forma de embargos y formas vejatorias por parte de los recaudadores. Y tras eso, casi nunca cambiaba nada. No había más caminos, ni riegos, ni tierras para cultivar, ni trabajo. No es de extrañar que su mirada hacia todo aquello que se decía que constituía la modernidad y el progreso fuese de escepticismo, cuando no de recelo o rechazo abierto.¹⁴

Las consecuencias sociales de la crisis de finales de siglo repercutieron sobre los campesinos, amplios sectores de trabajadores rurales cuyos destinos se solían disponer desde los centros urbanos de poder. Ellos fueron los paganos de la modernidad, aunque la Historia no les concedió ninguna atención hasta hace escasas décadas. La bajada generalizada de los precios empobreció a las familias e hizo descender incluso el precio de la tierra entre un 20 y un 60% en la provincia de Zaragoza. La pequeña parcela no daba más de sí. Muchos emigraron hacia la industria catalana y la incipiente zaragozana, dejando atrás al pueblo y la casa. Muchos otros acudieron al crédito privado y a los prestamistas locales para poder pagar la contribución o la redención del hijo, o el mismo canon de arriendo, algo que rara vez evitaba la expro-

¹⁴ El apunte desde Uncastillo en *DAZ*, 25-2-1892. Diego LÓPEZ GARRIDO, *La Guardia Civil y los orígenes del Estado centralista*, Crítica, Barcelona, 1992.

piación de las fincas por parte del Estado.¹⁵ A la altura de 1890 la situación del campo aragonés llegaba a la tribuna de oradores del Congreso de los Diputados, donde Castelar peroraba sobre cómo «los propietarios descienden a jornaleros, los jornaleros a mendigos...».¹⁶

Las noticias que llegaban desde las Cinco Villas no eran más halagüeñas. Como sobre muchos otros pueblos de Aragón, los corresponsales de los diarios daban cuenta en las timeras cartas de la grave situación de los labradores. En 1893 se escribía desde Urriés que «el poco trigo que se recolectó ha sido vendido para el pago de atrasos por contribuciones y entregado a cuenta de intereses a los prestamistas, no quedando a los labradores ni un solo grano para el pan de sus familias». Y se añadía que «la clase jornalera en masa ha emigrado en busca de trabajo sin rumbo fijo, sabiéndose de algunos que han pasado a la vecina república francesa e ignorándose el paradero de los más». Algunos marchaban a hacer las Américas, como las varias decenas de las Cinco Villas embarcados hacia Brasil: «Los emigrantes en general no son jornaleros, son familias que poseen tierras y que las han dejado para que las cultive quien quiera, pues que de continuar trabajándolas tendrían necesidad de venderlas para comer, dados los años tan malos que se suceden». Y desde Luna, en ese mismo año, se sentenciaba que «no queda más recurso que emigrar para salvar las vidas, ya que se perdieron las haciendas».¹⁷

Aquella emigración tenía mucho que ver con la imposibilidad de adaptar las formas de producción y de la estructura de propiedad de la tierra a las nuevas necesidades de los

¹⁵ En los volúmenes de *La crisis agrícola y pecuaria (1887-1889)*, Madrid, se apunta que entre 1880 y 1886 las fincas adjudicadas al Estado en Aragón fueron 41.663, lo que suponía nada más y nada menos que el 20'9 % del total nacional de fincas adjudicadas en el período.

¹⁶ *La Derecha*, 16-7-1890, citado por L. GERMÁN y C. FORCADELL en «La agricultura interior...», p. 85.

¹⁷ Urriés en *DAZ*, 30-8-1893. Los emigrantes a Brasil en *DAZ*, 28-5-1896. Lo de Luna en *DAZ*, 30-9-1896. Sobre la emigración a Argentina, Eloy FERNÁNDEZ CLEMENTE y Vicente PINILLA NAVARRO, *Los aragoneses en América (siglos XIX y XX)*. Vol. 1, *La emigración*, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2003.

mercados, pero también de una población en franco crecimiento a finales del siglo XIX. Durante el siglo anterior, pese a que nacían muchos, también morían muchos por la existencia de frenos «tradicionales» como las crisis de subsistencias, las guerras carlistas o las epidemias.¹⁸ Uncastillo había pasado de 2.216 habitantes en 1787, a tener 2.546 vecinos en 1877. Sin embargo, a partir de esa fecha y hasta el registro de 1897 las cifras del censo no ofrecen lugar a dudas, produciéndose el más rápido crecimiento de gentes. También en Uncastillo, que alberga casi el mismo crecimiento durante ese período que durante todo el siglo anterior al pasar de 2.546 habitantes en 1877 a 2.732 en 1897. Sin embargo, la salida de cereales a otras zonas para su comercialización, el uso de técnicas de cultivo tradicionales incapaces de aumentar los rendimientos, la escasez de trabajo, y el problema social de la escasez de tierra cultivable por los campesinos, hizo a muchos emigrar, y a otros volver los ojos hacia el monte comunal como una posible solución a sus problemas. El hambre de tierra comienza aquí, y aquí comienza la configuración de los grupos sociales y políticos que se enfrentarán en el largo plazo de la Historia. Cuando Antonio Plano llega al mundo está teniendo lugar toda esta marejada de cambios que afectan al conjunto de la sociedad rural, y que constituyen la prehistoria de un conflicto social que también crecerá y se desarrollará durante todo el primer tercio del siglo XX. Una historia en la que, como en la vida, lo trágico amenazaba detrás de lo más inesperado, y en la que se hace preciso cambiar el tono para volver a bajar al relato de la experiencia familiar. Los Plano, junto a otras varias familias del pueblo, tuvieron que mirar de frente a la desolación en aquel malhadado septiembre de 1897, cuando Antonio tan sólo contaba un año de vida.¹⁹

¹⁸ Por la epidemia de cólera de 1885 fallecieron 580 personas en Tauste, 274 en Uncastillo, 185 en Sádaba, 129 en Bota... Apuntado por Alberto SABIO, *Tierra, comunal...* p. 51.

¹⁹ Según el censo de la época había en Uncastillo 2.732 personas de hecho y 2.758 personas de derecho, repartiéndose de forma equitativa entre los primeros hombres y mujeres (1.341 vecinos y 1.346 vecinas). Instituto Nacional de

La tragedia

Como de inmemorial, las fiestas mayores de Uncastillo tienen lugar en torno a la fiesta de la Virgen de San Cristóbal, pasada la primera semana de septiembre. La romería a la ermita es uno de los momentos más esperados. Momento de puesta de largo, de cambio de camisa, de encuentros amables, y de rezar a la patrona. Los auroros han estado cantando coplas desde la madrugada en honor a la Virgen, y como en toda ronda no han faltado en la calle las pastas y el anís. Los chicos se levantan nerviosos y sus madres les ponen orgullosas algún chaleco nuevo o alpargatas con buen remiendo. La ilusión es diferente según la edad, y los estrenos también según familias, pero en estas mañanas festivas el aire trae sonidos de jolgorio, y calienta el lento desperezarse del sol. Desde la casa, mientras algún abuelo enciende el fuego y las tortas empiezan a emanar el olor de la mañana, algunas voces, sordamente, se cuelan por entre las rendijas de las ventanas. Algunas risas infantiles, algunas órdenes maternas, algún lánguido saludo entre hombres que se encuentran en la calle..., pero todos los registros entonan a coro la misma canción de fiesta y de holganza. En la plaza de Santa María, bajo algún gallardete que la cruza, se van reuniendo los vecinos mientras el párroco ultima los preparativos. La mañana discurre según lo previsto, cumpliéndose procesión, misa y bendición en la ermita. Alguna nube encapota el cielo, pero nada permite presagiar lo que se avecina.

Es mediodía y ha pasado la mañana entre juegos, coplas y vinos. Llega el plato fuerte de la fiesta, la suelta de vaquillas. En las eras de la parte norte los vecinos han montado una plaza con sus carros, y allí concurre todo el pueblo. Unas dos mil quinientas personas abarrotan el círculo, dispuestas como Dios, y cierta respetabilidad en el caso de las familias más pudientes, les dan a entender, y mientras los chicos se cuelgan de tablas y radios, asideros improvisados,

o esperan en el suelo, bajo los carros. «El bullicio y la algazara propias de esta clase de fiestas daba una animación extraordinaria». El alcalde y los concejales se dirigen a la presidencia y ordenan soltar a la primera res. Hay miradas al cielo, que parece que no va a tener consideración. El viento arrecia y la oscuridad es mayor. Los animales barruntan, hay ladridos y nervios en los establos. La gente presenta un punto de alteración. Aún no ha salido la vaca, y en ese mismo momento comienza a descargar una tormenta que arroja gran cantidad de piedra. «Cual corriente eléctrica, el espanto invadió el ánimo de los espectadores». El gentío desciende de los carros precipitadamente, buscando un sitio para guarecerse del diluvio. Todo el mundo corre hacia el portal que da a la plaza del Mercado, el llamado «portal de las eras», primera estación para ganar los cubiertos. Una puerta cerrada, sin embargo, esperaba al otro lado. A partir de ese momento la confusión y el drama se dan la mano en una secuencia que de seguro fue inolvidable para muchos vecinos de Uncastillo durante bastantes años. Un testigo de los hechos, el corresponsal del *Diario de Avisos de Zaragoza* da cuenta de los mismos.

Narra en su crónica cómo intenta entrar por el portal sin conseguirlo porque se encuentra «una gran masa de carne humana y unos pocos hombres que impiden la entrada al pueblo». Gritan con fuerza «atrás», «no se puede pasar, hay muertos», mientras entre llantos se oyen angustiosas exclamaciones y lamentos: «¡socorro!, ¡mis hijos!, ¡mi mujer!, ¡mi familia! El corresponsal trata de averiguar lo que ocurre dentro, pero la confusión es enorme. El alcalde da la vuelta para dirigirse al cobertizo desde el interior de la plaza del Mercado, pero al llegar allí se encuentra que «unos cuantos bárbaros» lo tienen cerrado, impidiendo que la gente pueda franquear el paso y ganar los porches de la plaza. El alcalde ve necesario «invocar a su autoridad» para penetrar en el interior, donde le espera «el horrible cuadro» de cuerpos hacinados. Con frenesí, comienza a levantar del suelo hombres y mujeres con la ayuda de empleados municipales y otros

acompañantes, algo que equivale a juicio del observador a «evitar la muerte de varios vecinos medio asfixiados». Ha acudido también la Guardia Civil, que trata de imponer orden, mientras el médico atiende como puede a los muchos lesionados. El portal se va despejando poco a poco, hasta que se hace visible la tragedia. Cinco mujeres y una niña pequeña han muerto en la aglomeración, cuyos nombres corren de boca en boca entre los consternados vecinos. Josefa Viartola, viuda de sesenta y cuatro años; Elena Buey, casada de cincuenta años; Carmen Ezquerro, casada de cuarenta años; Ventura Zabalza, casada de veinticinco años; la niña de tres meses Concepción Abadía Clemente, y la joven de veintitrés años, casada y recientemente madre, María Aznárez. Mientras el cura párroco acude para administrar los «auxilios espirituales», el agua, ya mansamente, no deja de caer de aquel cielo gris e inmisericorde.²⁰

Es de imaginar la conmoción que atravesó la comunidad uncastillera. El cielo terminaba de desplomarse sobre las familias de las víctimas. El pueblo, dice el corresponsal, «está grandemente impresionado» por el inesperado acontecimiento. No hubo más fiesta aquel año, y el juzgado iniciaba las diligencias pertinentes. Al año siguiente tampoco se realizarían, aunque esta vez «en recuerdo de las víctimas ocurridas en las guerras». Pero eso importaba poco. Sobre todo para paisanos como Joaquín Plano, quien se habría de ver en solitario con su pequeño hijo Antonio, a quien tan bruscamente y sin enterarse todavía le había sobrevenido la orfandad. Sin rentas con que continuar con la crianza por otros medios, sin tiempo para ello dadas las largas jornadas de trabajo en el campo, y sin que probablemente a Plano se le hubiera pasado por la cabeza esa idea dado el contexto social y cultural de la época, aquel que asignaba la tarea de la crianza de los hijos a la mujer, la solución del Hospicio Provincial hubo quizás de parecer la única buena en tan duro trance.

²⁰ HA, 11 y 13-9-1897. LAA, 11-9-1897, DAZ, 11 y 14-9-1897.

Antonio dejaba su pueblo natal bien temprano, y a él habría de regresar años más tarde para convertirse en un importante protagonista de su historia moderna. El Uncastillo de finales del XIX y principios del XX que le veía marchar continuaría experimentando los problemas asociados a la modernidad económica y a la gradual configuración de un panorama político diferente. Los intentos de las clases populares por manifestar su descontento por la forma de vida y sus intentos por acceder a los órganos de poder, se verían anulados por la habitual dinámica represora de las autoridades y por la resistencia de los poderosos a ceder las más mínimas cotas de mando. Los problemas básicos de una sociedad campesina tradicional en pleno proceso de cambio radicaban en la desigual estructura de la propiedad de la tierra y en la posibilidad de un reparto más equitativo de las rentas que el mercado ofrecía a los grandes propietarios. Cuando Antonio marcha a Zaragoza, sus ojos y su entendimiento todavía no podían comprender el mapa de los afanes de sus vecinos y familiares, que era el de la difícil subsistencia, el de la amenaza de la pobreza y el del sometimiento al poder y la influencia de los más «notables» del lugar.

De caciques y de vecinos

Es muy difícil tratar de acercarse al conjunto de las relaciones de una sociedad compleja, por rural y relativamente pequeña que sea, pero la documentación, con la ayuda de la imaginación, puede ayudar a situar el problema. Es noche cerrada y el frío ya se ha cernido sobre Uncastillo en los primeros días de noviembre. Los fúnebres toques de campana de Todos los Santos y la liturgia católica habían puesto el colofón a la costumbre de las auroras cantadas en los domingos de octubre. Las normas municipales sancionaban la costumbre católica permitiendo los cantos en la madrugada de hombres y mujeres por las calles del pueblo. Fuera de los permisos municipales no se puede rondar. Sin embargo Sebastián Malón, «Morán», un labrador de veintidós años, comienza a cantar sin permiso, no sabemos por qué motivo

ni con qué intención. Sus juramentos «contra Dios y la Hostia» resuenan en la calle silenciosa. El alcalde le reprende y él, desafiante, los vuelve a repetir, tras lo cual es arrestado y finalmente absuelto. Tan sólo unos días antes, en la última noche de octubre, en el norteno pueblo de Salvatierra de Escá algunos mozos cantan «coplas escandalosas». Varios concejales les ordenan retirarse, pero ellos siguen cantando y les espetan lindezas como «pillós», «borrachos», y «qué granujas estaban en el Ayuntamiento».²¹

La documentación judicial esconde muchos enfrentamientos con las autoridades en momentos específicos, como las rondas y, sobre todo, los embargos de enseres por deudas fiscales. Durante los últimos años del XIX ocurren conflictos contra la comisión encargada de efectuar los embargos en Iuerre, en Biota, en Sádaba, Luesia, Tauste, Luna, Castiliscar, Undués de Lerda, en Ejea en diversas ocasiones, en Undués Pintano... en este último lugar la comisión, formada por el juez, el alguacil y dos testigos, llegó a una casa en septiembre de 1894 para embargar a un labrador de veinticuatro años. No era infrecuente que las visitas se realizasen cuando los campesinos estaban trabajando en el campo, y que algún familiar, casi siempre madre o esposa, acudiesen a llamar al interesado, negándose a abrir paso a la comisión. Cuando Cristóbal Pérez llegó a la casa, abrió las puertas de la calle de par en par, y exclamó con amenazas que «el que tuviera cojones que entrase a embargar el trigo». La comisión se fue por donde vino. En Farasdués un vecino es juzgado por «resistencia a la autoridad» en una procesión festiva de junio. El alcalde había prohibido la costumbre de hacer salvas en honor al santo, pero el vecino efectúa los disparos al aire. Es reprendido por el alcalde, llegando fácilmente a una fuerte discusión en la que termina espetándole que «no le reconoce su autoridad». La lista de tensiones similares ocurridas en la zona sería larga, y lo sería mucho más de atender al conjun-

²¹ Uncastillo y Salvatierra en AHPZ, Sentencias criminales, 1898, núms. 242 y 161.

to del agro zaragozano. Si las hemos traído aquí es para subrayar que el conflicto que acaba en un arresto y una denuncia, pequeño si se quiere y sin aparentes consecuencias para las autoridades, dice mucho de la cotidianeidad que no aparece en los documentos, de las relaciones sociales entre grupos sociales, y de la percepción que los vecinos podían tener de la ley, la autoridad, la costumbre, la justicia o los límites de la propia rebeldía.²²

Los enfrentamientos con la autoridad llevan el relato inevitablemente hacia los terrenos de la configuración del poder local y la percepción que los vecinos se formaron de aquella realidad. Aparentemente no habría mucho que rascar sobre un asunto zanjado habitualmente con alusiones al carácter fraudulento y coercitivo del caciquismo de la Restauración. El turno entre los partidos conservador y liberal de Cánovas y Sagasta ha sido habitualmente descrito como una placentera transmisión del poder llevada a cabo mediante la designación y reparto de candidatos en los diversos distritos y la presión electoral a través de compras de votos, pucherazos y alguna amenaza por parte de hombres fieles, todo ello desarrollado ante la irritante pasividad de los vecinos de los pueblos. El propio Blasco Ibáñez pintaba un mapa moral de España en el que, tras teñir del rojo «del risueño amanecer» las partes más ricas de Cataluña, Valencia y Bilbao, incluía a la tierra aragonesa en una extensa zona del interior que vestía «de lila, el color de la santa inocencia, que vive indiferente en el limbo, sin pensar nada, conformándose con todo y creyendo que vivimos en la mejor de las situaciones». Esa imagen, la de unos campesinos satisfechos de su pequeña parcela y ajenos a cualquier participa-

²² Undués Pintano en AHPZ, *Sentencias criminales*, 1895, núm. 178, y Farasdués en AHPZ, *Sentencias criminales*, 1893, núm. 261. En la misma ubicación, los casos de Isuerre (1891, núm. 195; 1899, núm. 33), Navardún (1891, núm. 154), Undués de Lerda (1894, núm. 49), Biota (1894, núm. 138; 1898, núm. 271), Sádaba (1895, núm. 25), Castiliscar (1897, núm. 27), Luesia (1897, núm. 298; 1898, núm. 243), Luna (1898, núm. 46) y Ejea de los Caballeros (1894, núm. 34; 1895, núms. 24 y 80; 1896, núms. 272 y 214; 1897, núms. 218 y 208; 1898, núm. 240; 1899, núm. 7).

ción política, caló durante décadas como una verdad sólida y fundamental en las explicaciones del caciquismo de la Restauración borbónica.²³

La realidad era algo más compleja que todo eso. Nacidos como único modo de controlar el territorio por parte de un Estado liberal agobiado por guerras civiles y por la bancarrota financiera, los oligarcas locales hacían de intermediarios de información y recursos entre el gobierno y las provincias. El poder de los caciques fue de ese modo creciendo a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX, pese al sostenimiento de ciertas apariencias formales, como el centralismo administrativo o el juego electoral como base de la representación política. Pese a la concesión del sufragio universal masculino en 1890, la permisividad hacia el fraude perduró hasta finales de siglo. Después no sería tan fácil administrar el mapa de escños, sobre todo debido al crecimiento de una opinión pública más independiente y combativa en las ciudades. De cualquier modo, lo que no cambia a lo largo del período es la importancia del poder municipal como clave de bóveda del tinglado político, y la enorme influencia que hasta bien entrado el siglo XX tendrán los notables sobre los pueblos, a través del control de ayuntamientos y juzgados. Ese control facilitaba el manejo de multitud de facetas que gestionaban los concejos y que afectaban de lleno a la vida cotidiana de los vecinos: reemplazos militares, padrones de vecindad y cédulas personales, beneficencia, orden público y cárcel, enseñanza primaria, exacciones de impuestos, consultas electorales, gestión de bienes municipales, desamortizaciones... Para enfrentarse a todas estas tareas los ayuntamientos apenas contaban más que con el conflictivo impuesto de consumos, por lo que se puede adivinar el carácter crónico de los problemas financieros de las corporaciones municipales para

²³ Esquema clásico delimitado en su momento por Javier TUSELL, *Oligarquía y caciquismo en Andalucía*, Planeta, Barcelona, 1976. Lo de Blasco en «Las dos Españas», *El Pueblo*, 20-8-1897, citado en Vicente BLASCO IBÁÑEZ, *Contra la Restauración. Periodismo político 1895-1904*, comp. por Paul Smith, Nuestra Cultura, Madrid, 1978, p. 157.

cumplir las disposiciones legales. José Álvarez Junco concluyó el argumento afirmando que «los ayuntamientos españoles vivían, de manera habitual, en la ilegalidad».²⁴

Por otra parte las situaciones difíciles se resolvían con la ayuda o la tolerancia del gobernador civil, quien exigía a cambio sumisión política a las autoridades locales. El gobernador, representante del Ministerio de Gobernación en cada provincia, ejercía de hecho como agente electoral del partido del gobierno y gestor del fraude electoral. Recibían instrucciones directas del Ministerio a través del telégrafo, y en función de las mismas recorrían la provincia preparando los resultados consiguiendo las adhesiones necesarias de los alcaldes. El cacique debía entonces demostrar que tenía capacidad de maniobra sobre el vecindario y que sabía gestionar su imagen como dispensador de favores y prebendas. Eso lo lograba por sus propios recursos personales (tierras, dinero, fuentes de empleo...), o más frecuentemente, influyendo políticamente sobre la maquinaria estatal a través de sus contactos para conseguir beneficios personales (exenciones militares, repartos de consumos, amillaramientos...), o colectivos (aprobación de inversiones para el pueblo o la comarca como carreteras o ferrocarriles).²⁵

²⁴ JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO, «Redes locales, lealtades tradicionales y nuevas identidades colectivas», en Antonio Robles Egea (comp.), *Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea*, Siglo XXI, Madrid, 1996, pp. 71-94, cita en p. 74.

²⁵ Como era de esperar, las denuncias en la prensa de este tipo de prácticas solían responder a intereses y circunstancias políticas muy concretas. Los diarios, encomendados a una u otra familia política, no dudaban en ofrecer detalles sobre las corruptelas del adversario: El conservador *Diario de Avisos de Zaragoza* anunciaba durante las elecciones a Cortes de marzo de 1898, regidas por el gobierno liberal de Sagasta: «nos resistimos a creerlo, pero se nos asegura que algunos alcaldes han recibido orden terminante y enérgica de adelantar los relojes el día de mañana, con motivo de las elecciones de diputados a Cortes», *DAZ*, 26-3-1898. Tras aquellos comicios, el propio Tomás Castellano —dato sintomático—, alzaba la voz en su *Diario de Zaragoza* denunciando la «cacicada» ocurrida en el distrito de Ejea, adjudicada a Francisco Roncales Brased. Periódicos como el *Heraldo de Aragón*, diario más moderno y algo más abierto por aquellas fechas, también escribía sobre la «maravillosa» transformación de un país políticamente liberal en otro conservador tras las elecciones que le dieron el triunfo a Silvela en 1899 («La compra de votos», *HA*, 12-4-1899 y «Lo que se ha probado», *HA*, 20-4-1899).

Uncastillo pertenecía a finales del XIX al distrito electoral de Ejea, un gran espacio de en torno a nueve mil electores. Y si hay que hablar de influencia en el mismo, hay que hablar de Tomás Castellano y Villarroya, cuya trayectoria pública es ya conocida. Militó en el partido conservador, siendo elegido diputado provincial desde 1878 y hasta su muerte durante trece legislaturas seguidas, logrando el acta primero por el distrito de Ejea, y más tarde por el de Zaragoza. Fue Caballero de la Gran Cruz de Isabel la Católica y Ministro de Ultramar en 1895 con el gobierno Cánovas, y de Hacienda con Silvela en 1904. También ocupó los cargos de Gobernador del Banco de España y jefe del Partido Conservador en Zaragoza. Su carrera política se amparó en su condición de gran propietario rústico, de buen conocedor de los mercados trigueros y de controlador de sus sistemas de transformación, logrando a través de diversas estrategias de cobro de sus rentas una liquidez que le permitía jugar con tranquilidad en el mercado para obtener el máximo beneficio. Dio promoción política a gente de su entorno como Ángel Ramírez, propietario de Tauste, el conde de la Viñaza, Carlos Rocatallada, uno de los principales propietarios de Ejea, o a Carlos Vara Aznárez, abogado personal de la familia. Colocó como gobernadores de Filipinas a este último y a otro de sus acólitos, Ricardo Lacosta. La red de su influencia no terminaba ahí, sino que se prolongaba en los despachos de los centros de dirección de ramas industriales emparentadas con la agricultura. Fue consejero de la Sociedad General Azucarera de España, presidente de la Sociedad General Alcohólica de España y promotor de la «Industrial Química de Zaragoza», dedicada a la elaboración de abonos. Constituyó en definitiva un buen ejemplo de intermediación e influencia para lograr beneficios para sus electores como carreteras y regadíos, y conseguir así la estabilidad en su cacicato.²⁶

²⁶ Alberto SABIO ALCUTÉN, «La penetración del capitalismo agrario a través de la renta a fines del XIX: la contabilidad de Tomás Castellano, hacendado y ministro», *VIII Congreso de Historia Agraria*, Departamento de Economía e

Tras la muerte de Castellano el distrito fue emigrando hacia el lado liberal, logrando desde 1905 todas las actas electorales. Fueron diputados Santiago Corella (1907), José García Sánchez (1910, 1914), José Gascón y Marín (1916, 1919, 1920, 1923), con el breve interregno del conservador Eduardo Gómez Gereda (1918), y destacando como un hecho notorio el acta republicana lograda por Dionisio Casañal en 1905. No es difícil imaginar cómo también Uncastillo, al igual que el resto de poblaciones de las Cinco Villas, hubo de formar parte de ese engranaje electoral, que en realidad era político-social desde el momento en que los derechos políticos iban unidos a la propiedad de la tierra. Los mismos nombres se repetirían en el futuro en el organigrama del poder local, los mismos que poseían las mayores rentas ganaderas y que aparecían como mayores contribuyentes del pueblo, colocando en las sucesivas legislaturas a miembros del grupo familiar o de familias afines en las corporaciones de la villa.

**TABLA 1: LISTADO (INCOMPLETO) DE CONCEJALES
DE UNCASTILLO. 1895-1920**

APELLIDOS		NOMBRE	FECHA ELECCIÓN		
TORRERO	SUÑÉN	Pedro	12-may-1895	Propietario	
LAPIEZA	BUENO	Laureano	9-may-1897	Propietario	
MONGUILÁN	LOZANO	Miguel	9-may-1897	Propietario	
GIL	CORTÉS	Manuel	14-may-1899		Fusionista
VIARTOLA	CORTÉS	Anacleto	14-may-1899		Fusionista
GAMBOA	PUEYO	Anacleto	14-may-1899		Conservador
PEMÁN	AÍSA	Fulgencio	14-may-1899		Conservador
ARBUNIÉS	SUÑÉN	Pedro	14-may-1899	Comerciante	Conservador
CANALES	FRAGO	José	14-may-1899	Propietario	Conservador
FERNÁNDEZ	OLIVA	Jesús	10-nov-1901	Médico	
PÉREZ	ARBUNIÉS	José	10-nov-1901	Veterinario	
SAMPER	VAL	Francisco	10-nov-1901	Comerciante	

Historia Económica y Seminario de Estudios de Historia Agraria, Salamanca, 1997, pp. 485-499. Voz «Castellano y Villarroya, Tomás», *Gran Enciclopedia Aragonesa*, versión digital en www.encyclopedia-aragonesa.com.

**TABLA 1: LISTADO (INCOMPLETO) DE CONCEJALES
DE UNCASTILLO. 1895-1920** *(continuación)*

APELLIDOS		NOMBRE	FECHA ELECCIÓN		
LAMBEA		Anacleto	10-nov-1901		
CAVERO	ANIETO	Juan José	10-nov-1901	Comerciante	
ARBUNIÉS	RIVED	Gaspar	8-nov-1903	Zapatero	
LUIS	CASTILLO	Antonio	8-nov-1903	Herrero	
GIMÉNEZ	GIMÉNEZ	Evaristo	8-nov-1903	Propietario	
TIRAPO	OLANO	Frutos	8-nov-1903	Jornalero	Republicano
VIARTOLA	CORTÉS	Anacleto	12-nov-1905	Propietario	Monárquico
PEMÁN	AÍSA	Fulgencio	12-nov-1905	Labrador	Monárquico
LÓPEZ	DOMINGUEZ	Emilio	12-nov-1905		Monárquico
PUEYO		Valentín	12-nov-1905		Monárquico
CORTÉS	GIL	Manuel	12-nov-1905	Propietario	Monárquico
GAMBOA	PUEYO	Anacleto	25-abr-1909		
MARCO	PUEYO	Carlos	25-abr-1909		
LOPERENA	TORRERO	Mariano	25-abr-1909		
CORTÉS	MARCELLÁN	Manuel	25-abr-1909		
PUEYO	GOYENA	Antonio	26-jun-1910	Labrador	
LÓPEZ	DOMÍNGUEZ	Emilio	26-jun-1910	Propietario	
PUEYO	CORTÉS	Valentín	26-jun-1910	Propietario	
PÉREZ	ARBUNIÉS	Ángel	26-jun-1910	Comerciante	
PUEYO	PÉREZ	Pedro	12-nov-1911	Labrador	
AZNÁREZ	GAMBOA	Salvador	12-nov-1911	Labrador	
PUEYO	GOYENA	Baldomero	12-nov-1911	Labrador	
AYBAR	GIMÉNEZ	Leoncio	12-nov-1911	Labrador	
MOLA	GALLEGO	José	12-nov-1911	Propietario	
BUEY	ZÁRATE	Pedro	9-nov-1913	Labrador	
GIMÉNEZ	GIMÉNEZ	Evaristo	9-nov-1913	Labrador	
LÓPEZ	MONGUILÁN	Mariano	9-nov-1913	Estudiante	
CASANOVA	RICARTE	Celestino	9-nov-1913	Albañil	
PUEYO	TORRERO	Enrique	9-nov-1913	Labrador	
PÉREZ	ARBUNIÉS	Ángel	14-nov-1915	Comerciante	
BUEY	ZÁRATE	Jerónimo	14-nov-1915	Labrador	
LÓPEZ	MONGUILÁN	Sebastián	14-nov-1915	Labrador	
CORTÉS	MAYAYO	José	14-nov-1915	Comerciante	
LAPIEZA	LAPLAZA	Venancio	4-nov-1917	Farmacéutico	
MARCO	PUEYO	Pedro	4-nov-1917	Labrador	
LÓPEZ	MONGUILÁN	Patricio	4-nov-1917	Estudiante	
FUERTES	CASAS	José	11-nov-1917	Ministrante	

**TABLA 1: LISTADO (INCOMPLETO) DE CONCEJALES
DE UNCASTILLO. 1895-1920** *(continuación)*

APELLIDOS		NOMBRE	FECHA ELECCIÓN		
TORRERO	PUEYO	Sabas	11-nov-1917	Labrador	
CORTÉS	MARCELLÁN	Manuel	11-nov-1917	Labrador	
VIVES	NERÍN	Ricardo	11-nov-1917	Médico	
CANALES	VILLELLAS	José	8-feb-1920	Labrador	Monárquico
GIL	LAPLANA	Inocencio	8-feb-1920	Albañil	Socialista
MARTÍN	LAYANA	Joaquín	8-feb-1920	Jornalero	Socialista
TIRAPO	OLANO	Frutos	8-feb-1920	Jornalero	Socialista
BRAU	LAPETRA	Julián		Practicante	
GARÍN	PUEYO	León	8-feb-1920	Herrero	
MOLA	FUERTES	Antonio	8-feb-1920	Abogado	Monárquico

Fuente: A.M.U., Registro de las certificaciones credenciales de concejales elaboradas en 1913, 1915, 1917 y 1920; *Heraldo de Aragón*.

La comparación de estos datos con información sobre sus propiedades permite comprobar lo estrechamente unidas que caminaban riqueza y posición política en el ámbito local. En este sentido, teniendo en cuenta que la especialización del trigo no llegaba a todos los sitios por igual, siendo la zona de Tauste-Ejea la que más solventemente lo hizo, la riqueza pecuaria en Uncastillo seguía teniendo un referente fundamental en el número de cabezas de ganado. El reparto de los pastos es fundamental para mantener la cabaña, pero eran de hecho los mismos grandes propietarios quienes conformaban las comisiones encargadas de adjudicarlos. En la tabla siguiente se reproducen los rebaños declarados en el reparto de los ejercicios de 1890-91 y 1899-1900 para el monte La Sierra. En otros montes del pueblo, como Baniés y Picanido también se efectuaban repartos de «yerbas», con muy similares protagonistas (Narciso Monguilán y Pedro Torrero fueron durante los años noventa los adjudicatarios de Baniés, pagando al Ayuntamiento 750 pts. por sus derechos, mientras que fue el vecino de Layana Leoncio Mayayo quien se hacía con los derechos de uso de Picanido por 600 pts.). También reci-

bía el Ayuntamiento un dinero por los varios hornos autorizados para hacer carbón en La Sierra, de los que el alcalde era propietario de uno de ellos. Quizás lo más interesante tras la consulta de los repartos de los años noventa sea la constatación de cómo la crisis afectó a los pequeños ganaderos y favoreció a las fortunas más afianzadas, que vieron engrosar lo que todavía a finales del XIX constituía una fuente de riqueza patrimonial básica, el ganado. Los ganaderos menores trataban de proteger su espacio en el escalafón local mediante la titularidad conjunta de los rebaños, pero su posición ante las adversidades era más precaria que la de las familias mejor posicionadas, a quienes terminaron vendiendo parte de su rebaño. Éstas, por su parte, al tiempo que se fortalecían como propietarios de ganado, iban poco a poco diversificando su producción hacia el mercado del trigo.

TABLA 2: COMPARACIÓN DE LOS PATRIMONIOS GANADEROS DE UNCASTILLO DECLARADOS EN LOS REPARTOS DE HIERBAS DEL MONTE LA SIERRA. AÑOS 1890-1891 Y 1899-1900

AÑO 1890-91		AÑO 1899-00	
PROPIETARIO GANADERO	NÚM. CABEZAS	PROPIETARIO GANADERO	NÚM. CABEZAS
Patricio López Domínguez	2102	Narciso Monguilán Lozano	2336
Narciso Monguilán Lozano	1850	Antonio Fuertes Bardají	1550
Antonio Fuertes Bardají	1434	Miguel Monguilán Lozano*	1300
José Mola Gallego*	1397	Narcisa Monguilán Lozano	1240
Miguel Monguilán Lozano*	1237	José Mola Gallego*	1100
Lorenzo y Manuel Cortés Gil	1050	Pedro Torrero*	
Pedro Torrero Suñén*	850	Calisto Pueyo	
Calisto Pueyo Cortés	368	Manuel Cortés Marcellán*	
Calisto Raveno Longás	45	Jorge Buey	1083
Manuel Vigo Raveno	105	Lorenzo y Manuel Cortés Gil	758
Esteban Sánchez	50	Antonio Charles Arregui	264
Julián Ezquerro Lamón	100	Julio Raveno	102
Gabino Izaga Begué	47	Raimundo Pérez	98
Faustino Viartola Asín	42	Melchor Morlaca	92
Antonio Charles Arregui	46	Faustino Viartola	82
Mariano Cay	104	Mariano Abadía Antón	60

Fuente: A.M.U., Repartos de hierbas de los años 1890-1, 1891-2, 1893-4, 1894-5, 1895-6, 1896-7, 1897-8, 1899-1900, Caja 344, exp. 66. Con asterisco, los nombres que de seguro fueron también cargos concejiles. Algunos no marcados pertenecían a familias con algún miembro en la corporación local.

Visto todo lo anterior, parecería que no hubiera muchas opciones para la participación popular en los asuntos comunes, al menos a través de las instituciones legales. No cabe duda de que existían muchos límites, tanto a nivel electoral como en el posterior ejercicio de las prerrogativas municipales, y que el diseño del «encasillado» de los candidatos condicionaba la marcha de la vida social de los municipios. Sin embargo, la realidad obedecía a circunstancias más complejas que tenían que ver con el cambio social. Estaban por un lado los caciques que se hicieron tan fuertes en su distrito que no merecía la pena intentar desbancarlos, los jefes de *distritos propios*. Además estaba la competencia surgida desde los distritos urbanos, en los que las organizaciones democráticas estaban mejor implantadas y el poder del cacique no tan definido como en los pueblos. Con la sola fuerza de su voto los candidatos republicanos, regionalistas y socialistas lograron incomodar a los del *turno*, sobre todo a partir de los primeros años del siglo XX. Pero además de todo esto, lo que recientes estudios están poniendo de manifiesto es que el análisis de la política finisecular se enriquece sobremanera si se cambia el punto de vista, y en lugar de hacerlo únicamente desde arriba, desde las instituciones y los juegos de política de salón, se realiza también desde abajo, desde las formas en que campesinos y artesanos urgaban grietas en el edificio caciquil para ensancharlas y acomodar mejor su forma de ver el mundo a la realidad que les rodeaba. La descripción de la campaña electoral de 1893 en la vecina villa de Sos puede ilustrar cómo acciones populares y en apariencia inocentes podían poner nerviosos a los candidatos que deseaban hacerse con el acta. El candidato conservador y gran propietario conde de la Viñaza acogía en su casa por esas fechas a los diputados provinciales Lacosta, Navarro y Bentura, para dar cuerpo a la campaña. Sus impresiones «respecto al estado de la población en su favor eran muy satisfactorias, según rumores circulados de antemano». Sin embargo poco después de su llegada una rondalla de más de doscientas personas recorrió las calles de la villa, «entonando

inocentes cantares y prorrumpiendo a continuación en atornadores vivas al candidato ministerial D. Mariano Arredondo, que fueron contestados con entusiasmo por la multitud». La prensa deja entrever un profundo resquemor por parte del conde y sus acólitos, e intenta restar importancia al asunto simulando hacerse eco de una demostración de generosidad por parte del Conde.²⁷

El caso de Sos sirve como ejemplo de la existencia de una práctica negociadora por parte de los campesinos hacia los potentados y candidatos, tendente a presionar por las mejores ofertas a cambio de votos. La cultura popular y sus manifestaciones como rondas o cencerradas podían ser utilizadas con este fin por parte de los vecinos, aunque las formas de presión por parte de los pobres afectaban a un conjunto mucho más amplio de asuntos relacionados de una u otra medida con la subsistencia. Podría decirse que la relación entre los vecinos más humildes y los hacendados mantenía vivo un código moral tradicional, en el que a los esfuerzos de los primeros debían de ir aparejadas ciertas obligaciones por parte de los segundos en los momentos de dificultad. En ocasiones la sola amenaza del conflicto bastaba para comprender el mensaje. En 1893 se escribía desde Uncastillo que «la miseria es general entre la clase proletaria y no sería difícil que esta situación diese origen a lamentables incidentes. El diputado por este distrito Señor Conde de Viñaza, en unión de los de la provincia y el gobierno, deben activar un plan completo de obras públicas y de trabajos a fin de aliviar el triste estado de aquellos trabajadores que ven en perspectiva desgraciado porvenir». Al año siguiente, y ante la grave situación de jornaleros y labradores, «el Ayuntamiento y algunos contribuyentes acuerdan proporcionar algunas cantidades de trigo para sembrar y harina para las necesidades más perentorias de los jornaleros, y de algún labrador si lo necesitase».²⁸

²⁷ DAZ, 24-2-1893

²⁸ DAZ, 13-7-1893, y DAZ, 29-1-1894.

Esa presión negociadora era capaz de castigar prácticas de los propietarios que contravenían la convención moral sobre lo justo y lo imperdonable, como lo era el beneficio a costa de la pobreza ajena. También hubo mensajes en el terreno del delito y las acciones de sabotaje a la propiedad. Eran acciones si se quiere de «baja intensidad», que no requirieron el uso de la fuerza, pero que consideradas en conjunto eran capaces de hacer virar políticas locales o replantear algunos beneficios mercantiles a cambio de un poco de paz en las posesiones agrícolas. Incendios de pajares, hurtos de mieses, extracciones de leña en el comunal, anónimos amenazadores... formaban todo un repertorio de posibilidades de remediar la injusticia por parte de quienes contaban con muy pocas oportunidades para hacerlo. Incluso se puede ir un paso más allá para, sin caer en la idealización de todo lo que ocurría en el pueblo, afirmar que las actitudes de deferencia o sumisión del campesino hacia el potentado obedecían en muchas ocasiones a una razón táctica, la de la supervivencia propia y la de la casa. Volvemos por tanto a la cuestión de si el campesinado zaragozano y aragonés era tan pasivo como se pretendía hacer creer. El campo hervía no de grandes movimientos revolucionarios, sino de pequeñas acciones de descontento mientras guardias y jueces sembraban multas y condenas. Y así, al tiempo que la ley de la propiedad y el mercado trataba de abrirse camino, los vecinos tenían en mente otro código paralelo y no escrito, aquel que justificaba hacer leña en el comunal cuando hacía frío, y cazar y pescar cuando no había nada que poner sobre la mesa familiar.²⁹

²⁹ Carmelo ROMERO SALVADOR, «La suplantación campesina de la ortodoxia electoral», en Ignacio Peiró y Pedro Rújula, *La historia local en la España contemporánea. Estudios y reflexiones desde Aragón*, L'Avenç, Barcelona, pp. 80-98. En la misma línea y aplicando el análisis al distrito de Alcañiz-Híjar, Carmen FRÍAS CORREDOR, «Elecciones y conservadurismo político en el distrito de Alcañiz-Híjar entre 1900 y 1923. Del turno a la estabilidad», Pedro Rújula (coord.), *Entre el orden de los propietarios y los sueños de rebeldía. El Bajo Aragón y el Maestrazgo en el siglo XX*, Grupo de Estudios Masinos, Zaragoza, 1997, pp. 23-36.

El hambre de tierra

¿Por qué los comunales fueron en Cinco Villas caballo de batalla de disputas y anhelos? La pregunta no es fácil de responder. La tensión manifestada en torno al monte será una peculiaridad propia de la zona que alcanzará su punto culminante en los años treinta, pero no porque allí la privatización fuera mayor que en otras comarcas. Algunos estudios ya han dejado por sentado que en realidad el valle del Ebro fue una de las áreas con mayor ofensiva privatizadora de todo el país. ¿Por qué entonces la reivindicación del comunal se convertiría en el eje de las reivindicaciones populares durante el primer tercio del siglo XX en las Cinco Villas, y no lo haría con la misma intensidad en otras tierras del Ebro? La idea de los cambios producidos por la introducción de la agricultura de mercado ofrece pistas válidas. A principios del siglo XX la zona experimentó una cierta prosperidad económica en torno a la actividad del ferrocarril Sádaba-Gallur y la mejora de los precios pagados al agricultor, un proceso que no se frenaría hasta prácticamente los años treinta. Sin embargo, el crecimiento agrario no fue neutro. En el modo en que una sociedad lo percibe influye de forma determinante la distribución de la propiedad y la estructura de clases. Cuando las había, las buenas cosechas no garantizaban un mejor reparto de la riqueza sino todo lo contrario, el agrandamiento de las distancias sociales. Alberto Sabio ha conseguido demostrar que la evolución económica seguida en las Cinco Villas favoreció la polarización de la riqueza, y la estratificación social de las comunidades. Esas divisiones presidirán las relaciones sociales en los vecindarios, dado que había que ser propietario para ascender en la escala social, ocupar cargos y reclamar derechos. La gente relacionada con el campo podían ser, según la terminología de la época, campesinos ricos («propietarios»), medianos («labradores») y pobres («pequeños propietarios-jornaleros»).³⁰

³⁰ A. SABIO, *Tierra, comunal...*, ob. cit., pp. 213 y ss.

Durante los años de bonanza económica los propietarios optaron por aumentar la extensión de sus campos utilizando en buena medida las técnicas tradicionales de cultivo. Entre 1901 y 1934 la superficie cultivada aumentó en la provincia de Zaragoza en un 27%. Y eso comportó una mayor demanda de tierras que obligó a reglamentar los usos que habían venido equilibrando agricultura, ganadería y monte. Un proceso controlado en todo momento por los más acomodados a través de los repartos de pastos y la disposición de los bienes de propios de los ayuntamientos. El éxito de sus fincas dependía de un exceso permanente de mano de obra a bajo precio, que se obtenía a través de arriendos a corto plazo sobre algunas partes de sus haciendas. Con esos contratos se explotaba la pobreza de la población rural y se mantenía al campesinado en una situación de inseguridad y dependencia. Con ello los propietarios se aseguraban no apagar el hambre de tierra del campesinado.

No es de extrañar que los montes comunales constituyeran, en este contexto de pobreza y dependencia, el centro de las miradas de los vecinos pobres. Leñar en sus bosques, recoger esparto o hacer caza menor con lazos y hurones suponía para muchos núcleos familiares un colchón de ayuda vital para pasar un invierno o una situación de paro estacional. Pero al mismo tiempo fueron el centro de las miradas de los propietarios para hacer crecer sus explotaciones, por lo que puede decirse que en los montes convergían intereses encontrados, los relacionados con el mercado y los que tenían que ver con la subsistencia. De repente las dificultades para acceder al comunal se hicieron insalvables para los primeros. Por un lado, y pese a tratarse de bienes colectivos, su mismo acceso estaba limitado a los miembros de pleno derecho de la comunidad, esto es, a los vecinos con derechos familiares adquiridos para entrar en el comunal en determinadas fechas. Por otro, la privatización de los montes municipales iniciada con las desamortizaciones supuso el inicio del desmantelamiento del comunal y de la costumbre a él aparejada. Las ventas de montes y las subastas de usos como

leñas y pastos proporcionaban al Estado y los Ayuntamientos ingresos notables, pero desde la percepción campesina suponían una agresión al tradicional acceso al monte. Podría decirse, con todos los matices que se quiera (dado que nunca hubo una comunidad tradicional idílica sin conflictos y dado que obviamente los diferentes grupos sociales accedían de modo diferente al comunal), que junto a la nueva lógica del mercado los campesinos trataron de mantener un sistema de acceso de los recursos alejado de la lógica del beneficio capitalista. Y que en algún momento lo consiguieron.³¹

¿Pero cuál fue el territorio de esa disputa? Existían en Uncastillo varios montes públicos patrimonio del pueblo, que debieron salir a la luz administrativa con la catalogación efectuada por el gobierno liberal a mediados de siglo XIX. Parece comprensible el recelo y las prácticas fraudulentas desplegadas por los ayuntamientos en las declaraciones de los montes, dadas las dudas que albergaban acerca de su futuro. La posibilidad de catalogar un monte como exceptuado de la venta hacía multiplicar las alegaciones por parte de los pueblos. Sin embargo el impacto de las ventas fue desigual según los partidos judiciales. Los de Ejea y Sos, por albergar extensos pinares, una de las causas de excepción que admitía la administración, no fueron muy perjudicados. En este último partido fueron exceptuados cincuenta y un montes con una extensión de aproximadamente 26.000 hectáreas, casi el 35% de la superficie de monte catalogada. En concreto, de los doce montes de Uncastillo incluidos en el Catálogo de 1859 nueve se consideraron enajenables y tres exceptuados (*Cubierto del Monte, Pardina Baniés, El Soto*), vendiéndose finalmente seis con una extensión de 388'5 ha. Desde luego, al lado de los casos de Ejea y Tauste, que ocuparon el primer y segundo lugar de entre los municipios de la provincia por las hectáreas de monte vendido, el puesto sesenta

³¹ Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA, «Los mitos de la modernidad y la protesta campesina: A propósito de «Rebeldes Primitivos» de Eric J. Hobsbawm», *Historia Social*, núm. 25 (1996), pp. 113-157.

y seis de Uncastillo en esa relación, con ser destacado, no parece muy alarmante. Sin embargo, y cambiando el enfoque a la escala de la casa campesina, el impacto de las ventas en las economías de subsistencia no se hizo esperar.³²

La resistencia campesina

Los vecinos de las comunidades percibían que el viejo mundo de costumbres y solidaridades que componían su vieja *economía moral*, aquellos valores a través de los cuales se comprendía el entorno y se guiaban las relaciones sociales, se estaba deshilachando de la mano del talonario del potentado y del lápiz del ingeniero forestal. Y se acudió precisamente a esa *economía moral*, a la costumbre urdida y reafirmada en los espacios de sociabilidad cotidianos —el lavadero, la plaza, la taberna, el camino de la era...—, para utilizar modos de expresión de descontento que tenían mucho de experiencia cultural y de combinaciones cambiantes de intereses, y poco de revueltas del estómago o motines del hambre.³³ Hubo roturaciones arbitrarias, intervenciones en las subastas de aprovechamientos de los montes, sustracciones de leña y de otros productos, enfrentamientos con la autoridad, manifestaciones, motines o algaradas de diversa importancia, todo un repertorio de opciones entre las que escoger

³² Alberto SABIO, *Tierra, comunal...*, pp. 326 y 327.

³³ Inevitables son todavía para acercarse a la lógica de la multitud y los grupos sociales protagonistas de la acción colectiva de protesta los marxistas británicos. Constituyeron el hito historiográfico que respondía a las obras «científicas» de la psicología social de principios de siglo XX, según las cuales la protesta era producto de los bajos instintos del «populacho», de muchedumbres envenenadas por agitadores foráneos, constatando una lógica interna en la protesta colectiva de los grupos marginales respecto del poder, como el campesinado. Entre otras obras, pueden destacarse: Eric J. HOBBSAWM, *Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX*, Ariel, Barcelona, 1983 (1ª de 1968). Edward P. THOMPSON, *Tradición, revuelta y conciencia de clase*, Crítica, Barcelona, 1984; *La formación de la clase obrera en Inglaterra*, Crítica, Barcelona, 1989 (1ª de 1963); *Costumbres en común*, Crítica, Barcelona, 1995. Georges RUDÉ, *La multitud en la Historia. Los disturbios populares en Francia e Inglaterra, 1730-1848*, Siglo XXI, Madrid, 1989 (1ª de 1964). Un estudio sobre esta corriente historiográfica en Harvey KAYE, *Los historiadores marxistas británicos*, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1989.

en función de circunstancias diversas y, en última instancia, de un cálculo medido, aunque no siempre racionalizado, de costes y riesgos. Sus protagonistas no fueron, como a veces se indicaba en informes militares y judiciales, «chusma» o «populacho» cuando se trataba de alteraciones del orden, ni criminales que «a mano airada» cometían sus fechorías al amparo de la noche. No eran vagabundos ni gente forastera, ni ignorantes sometidos al embrujo de sus «ideas disolventes». Eran, por el contrario, personas conocidas, con casa abierta, oficio y familia, y por lo tanto un respeto adquirido dentro del vecindario que legitimaba la reacción y el descontento.³⁴

La protesta vecinal contra el desmantelamiento y la privatización de los comunales tenía que ver con la percepción de que la prohibición de los usos tradicionales llevaba aparejado un riesgo de caída en la pobreza y el desastre. El levantamiento de cercas, los edictos municipales prohibiendo cazar y pescar en ciertas fechas, o la llegada de guardas particulares para vigilar posesiones de terratenientes absentistas fueron fenómenos a los que los vecinos hubieron de adaptarse con relativa celeridad, perviviendo a pesar del paso de las décadas el recuerdo, y la idealización, de cuando los mayores se adentraban en el bosque para extraer proteína y combustible. Es probable que el primer motivo de los vecinos para continuar con prácticas que la administración tipificaba como prohibidas, fuera la subsistencia. La cuestión se complica, y es entonces cuando más claramente se muestra el descontento hacia el marco liberal, cuando no hay ocultación, incluso hay ostentación (grupos numerosos de vecinos y parientes haciendo leña a plena luz del día), y surgen los enfrentamientos con los guardas particulares o la Guardia Civil cuando pretenden denunciar a los vecinos.³⁵

³⁴ VÍCTOR LUCEA AYALA, *Rebeldes y amotinados. Protesta popular y resistencia campesina en Zaragoza (1890-1905)*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2005. Sobre la protesta popular y los entramados culturales que la sostenían, CARLOS GIL ANDRÉS, *Protesta popular y orden social en La Rioja (1890-1905)*, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1995.

³⁵ La concesión en el contexto español de una mayor importancia a los movimientos hasta entonces definidos como antesala de los movimientos orga-

Una práctica muy frecuente para saciar esa hambre de tierra fue la de las roturaciones en comunal, si bien no siempre fueron los más pobres los que arañaron con sus rejas y sus mulas alguna parcela de monte. En el último tramo del XIX, con un mercado triguero en auge, también medianos y grandes propietarios volvieron sus ojos hacia el monte para incrementar sus beneficios. Por lo general se roturaba la tierra con la esperanza de que el paso del tiempo y la permisividad de la autoridad local otorgaran visos de legalidad a la parcela. En el Archivo General de la Administración se guardan varios expedientes que detallan con precisión las roturas efectuadas en los montes públicos de Uncastillo de Partida *Baniés* y *Picanido*. El ingeniero forestal del distrito insistía en sus informes en la utilidad pública de los mismos y en la necesidad de regular su aprovechamiento, mientras que los vecinos trataban de evitar la ingerencia estatal manifestando que el terreno, en el que se encontraban parte de sus montes comunales, «carece en absoluto de toda clase de arbolado». En realidad el monte *Picanido* se hallaba casi totalmente cultivado por roturadores de Layana y Uncastillo, siendo repetidamente denunciados, sin que ello provocara cambio alguno en su actividad. Muchas denuncias, se dice en los expedientes, «se castigan debidamente, pero muchas también quedaban exentas de corrección por causas que no procede exponer». En resumen, porque la denuncia se convertía en la mayoría de los casos en papel mojado. Los Ayuntamientos no podían destruir las cosechas o embargarlas «ante el sin número de casos», y por otro lado, aunque hubiera denuncia, los beneficios del roturador superaban el importe de la multa:

nizados de carácter plenamente político, en Manuel PÉREZ LEDESMA y José ÁLVAREZ JUNCO, «Historia del movimiento obrero: ¿una segunda ruptura?», en Jesús Izquierdo Martín y Pablo Sánchez León, *Clásicos de historia social de España: una selección crítica*, Centro Tomás y Valiente, Alzira, Valencia, 2000, pp. 159-198. Una teorización del asunto en Manuel PÉREZ LEDESMA, «Cuando lleguen los días del cólera (Movimientos sociales, teoría e historia)», *Zona Abierta*, núm. 64 (1994), pp. 51-120. Carlos GIL ANDRÉS, *Echarse a la calle. Amotinados, huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 1890-1905)*, PUZ, Zaragoza, 2000. Sobre las formas «menores» o «silenciosas» de resistencia campesina, James C. SCOTT, «Formas cotidianas de rebelión campesina», *Historia Social*, núm. 28 (1997), pp. 13-39.

«Van a la roturación con plena conciencia de lo que es; pero corriendo al albur de que no se les castigue y en la seguridad de que, aun siendo castigados, los elevadísimos precios que alcanzan los productos agrícolas les permiten hacer frente a todos los gastos con la cosecha que obtienen [...] El denunciado reconoce la razón de la denuncia, no se molesta en rebatirla sino que confiesa de plano porque no puede hacer otra cosa, pero también es porque es una merma pequeña en los beneficios que la infracción le produce.»³⁶

Los intentos de expropiación provocaron la respuesta airada de quienes consideraban las parcelas como un derecho adquirido. El distrito forestal terminó justificando las roturaciones, y aunque se reservaba el derecho de reincorporar las tierras al patrimonio común ya no volvería a intentarlo. Años más tarde, a finales de la segunda década del siglo XX, el Ayuntamiento llevaba a efecto la adjudicación de parcelas entre los vecinos estipulando el pago de 20 pesetas anuales por hectárea y ciertas condiciones como la prohibición de traspaso o venta, y también la obligación de plantar tan sólo hortalizas y cereales dado que frutales, olivos o vides podían dar al terreno «aspecto de mayor posesión». En total fueron 312 las parcelas adjudicadas en 1921, siendo alcalde el propietario Antonio Mola. En las de *Picanido*, unas 250, la mayoría de los agricultores pagaban 13 pesetas de canon, lo que denota que se trataba de parcelas pequeñas, de poco más de media hectárea. Eso no significó en modo alguno el final de los problemas de los campesinos, pues en el ejercicio siguiente se señalaba que algunas parcelas habían sido abandonadas por la mala calidad de sus tierras. Al mismo tiempo, se concedían unas cincuenta parcelas en la partida *Baniés* de una hectárea cada una, con el correspondiente pago de veinte pesetas, manteniéndose el número de éstas durante los años siguientes. Estas diferencias en el acceso a las parcelas hablan de la complejidad de la realidad social campesina, y de la necesidad de captar los intereses diferen-

³⁶ A.G.A., Agricultura, Leg. 2847.

ciados de los grupos sociales diversos sobre un mismo bien. El hecho de existir en la documentación municipal un listado de denunciados en 1900 por la administración estatal debido a roturas en *La Sierra*, conteniendo en el mismo a algunos importantes propietarios del término, da cuenta de este interés común sobre la tierra.³⁷

Junto a las roturaciones de tierra y como se ha venido avanzando, una práctica frecuente entre los campesinos pobres era la de extraer leñas y otros productos cuando la necesidad apremiaba, o fuera de los períodos establecidos para venderla y conseguir metálico. Ya en 1866 el Gobierno civil intervino conminando al alcalde Carlos Gallego, «bajo su responsabilidad y apercibimiento de la multa de veinte escudos», a entregar al ingeniero de montes estatal un listado de los vecinos denunciados por este motivo en el monte *La Sierra* durante el año anterior. Y lo hacía sospechando del consentimiento de la autoridad local hacia los vecinos pues, según el ingeniero, «no consta a este distrito el castigo que V. ha impuesto a los denunciados, antes por el contrario, tiene motivos para suponer que en su mayor parte no han sufrido ninguna penalidad». El ayuntamiento remitió un listado con ciento treinta y nueve denuncias, que resultaron ser bastante menos de las aproximadamente trescientas que esperaba el ingeniero. Los quebraderos de cabeza de guardias e ingenieros tan sólo acababan de empezar.³⁸

³⁷ A.M.U., Relaciones de usuarios que disfrutaban de parcela en los montes Picanido y Partida Baniés (años 1921, 1924, 1926 y 1929), Caja 334, exp. 77. El listado de denuncias por roturas en el monte La Sierra, en A.M.U., Caja 359, exp. 38. Se incluían los nombres de Narciso Monguilán, Laureano Lapieza, Manuel Cortés (a la sazón alcalde de Uncastillo en ese momento), o Antonio Fuertes.

³⁸ A.M.U., Caja 359, exp. 35. La relación da cuenta del momento de la denuncia, algo que permite vislumbrar los momentos de mayor necesidad de las familias: los meses de marzo, noviembre y diciembre, llegando en algunos días a denunciarse quince y más de veinte vecinos. De éstos, no pocos aparecen sin nombre propio, sino denunciados como «el hijo de...», «la mujer de...» o «la viuda de...», algo que remite a la concepción extensa del trabajo y la aportación para la casa propia del grupo familiar campesino. Los daños en los montes eran casi todos «de carrascas y enebros, y algún pino joven». Y la mayoría se hicieron con alguna caballería menor como elemento de carga.

Entre 1890 y 1900 fueron denunciados quince vecinos de Uncastillo por cortas de leña fraudulentas, pero es de suponer que los que se movieron en los montes sin despertar las sospechas de los guardias fueron bastantes más. La práctica estaba más que extendida en el campo zaragozano, como lo demuestra el hecho de que fueron seiscientas las denuncias que en el mismo período y por igual motivo llegaron a los tribunales en toda la provincia. Sin embargo al mismo tiempo que el empuje de la subsistencia existían unos límites que la legitimidad conferida por la cultura popular no permitía traspasar. Silencio en el monte, sí, pero sin menoscabar la propia dignidad. El abuso o el maltrato por parte de los guardias podían hacer germinar resentimientos en el campo abonado de la miseria y el trato cotidiano del pueblo, desembocando en un momento dado en un enfrentamiento que podía ser violento y, a veces, trágico. La amenaza de sufrir pena de cárcel o el pago de una multa imposible, el oprobio de verse detenido o las afrentas recibidas por un vecino a quien no se reconocía autoridad podían mover a venganzas y ajustes de cuentas. En diciembre de 1893 la tragedia llegó al monte de Uncastillo.³⁹

Habla la sentencia dictada por el tribunal de la Audiencia Territorial de Zaragoza. En la tarde del día 8 de diciembre los hermanos Juan José y Narciso Arilla, naturales de Petilla de Aragón, decidieron acabar con todo. Esperaron al guarda Gregorio Casales en los terrenos que estaban a su cargo, y al no encontrarle se apostaron en el solitario corral «del Abogado». Cuando éste pasó por el lugar recibió una descarga de perdigones. Cayó al suelo. Los agresores le golpearon repetidamente la cabeza con la culata «destrozándole por completo cráneo y cara», siendo detenidos días después por la Guardia Civil y confesando el crimen en los primeros interrogatorios. El principal agresor, Juan José, actuó «resentido

³⁹ Las denuncias por corta de leñas en AHPZ, *Sentencias criminales*, núms. 149 y 184 de 1893; núm. 82 de 1894; núm. 121 de 1895; núms. 186 y 279 de 1897; núm. 200 de 1899 y núm. 106 de 1900.

por los actos de [Casales] como guarda jurado de la propiedad de Don Narciso Monguilán, que le había denunciado ante el juzgado municipal de Uncastillo como culpable de faltas por daños causados con el ganado», y que además obró «ofendido y obcecado por el recuerdo de las repetidas denuncias que el dicho Gregorio había hecho como guardia contra él y su hermano Narciso, por el desprecio con que trató a ambos y por amenazas que el propio guarda les hiciera». Fueron condenados a morir en el garrote en plaza pública de Ejea. Eran labradores, vecinos de Petilla aunque se hallaban en Uncastillo temporalmente. Juan José, el mayor de los hermanos, tenía veintiséis años, contaba con instrucción y estaba casado, mientras que Narciso tenía diecinueve y no sabía leer ni escribir.⁴⁰

Es evidente que este tipo de hechos son excepcionales, y que hubieron de causar grave impresión en las villas donde sucedían. Pero quizás lo importante sea destacar que ese territorio, el de la denuncia y el furtivismo que rodeaba al monte de los guardas y las cercas, era un territorio de conflicto no menor, que era percibido por sus protagonistas como trascendental y que podía en ciertos momentos manifestarse de modo violento por parte de gente sin antecedentes penales, que nunca antes se había acercado a la delincuencia. Y que esa experiencia comenzó a fraguar una idea

⁴⁰ AHPZ, *Sentencias criminales*, caja juzgado Sinués. La detención en DAZ, 21-12-1893, núm. 7629. Publicación de la sentencia en *La Derecha*, 24-11-1894. Estos años son los de la progresiva sustitución de la prensa de partido por la de empresa, que no duda en acudir a los tribunales en busca de casos morbosos con los que atraer a los lectores. Este caso no ocupó muchas columnas, pero sí otros similares, como el de Sotero de San Anselmo, ocurrido en los montes de Tarazona en 1895. La prensa no sólo actuó como vehículo informativo, sino también como elemento movilizador en búsqueda del indulto. Cuando sucedía, como en Tarazona o como en Zaragoza en 1892 con los reos del famoso caso Conesa, las celebraciones en las calles eran generales. Ese indicio, y el hecho de que precisamente en 1894 se dictase un decreto ordenando que las ejecuciones fuesen en el interior de los recintos carcelarios, sin presencia de público y por lo tanto sin posibilidad de desórdenes públicos, evidenciaba cierto cambio de sensibilidad popular hacia las ejecuciones. Víctor LUCEA AYALA, «Reos, verdugos y muchedumbres. La percepción popular de la penalidad y la pena de muerte. 1855-1915», *Revista de Historia Jerónimo Zurita*, núm. 76-77 (2001-2002), pp. 129-158.

larvada de injusticia y de agravio en las familias humildes, de un «nosotros» los campesinos pobres, que le sacamos el pan a la tierra, frente a «ellos», los hacendados enriquecidos, parapetados en los títulos de propiedad, el favor del gobernador y la Guardia Civil, y sus guardas y sus perros. Mientras «ellos» piden acuartelamientos y policía rural armada, «nosotros» tan sólo queremos pan y un pedazo de tierra para trabajarla.

El fuego puede ser un silencioso aliado, un mensajero capaz de propagar palabras de amenaza con bocanadas de ceniza y humo. En los primeros años del nuevo siglo la crisis económica volvió a golpear los hogares pobres, algo que tuvo repercusión innegable en las Cinco Villas. Las huelgas de los jornaleros de Andalucía inquietaban a las autoridades, que temían su propagación por las regiones del interior, y en las zonas más industriales del país las organizaciones obreras demostraban que sabían liderar huelgas y combatir con la policía. El fuego purificador prendió allí donde había germinado la semilla del «milenio anarquista», pero en el campo nunca había dejado de llamear. Pese a los intentos de las autoridades por relacionar los incendios con vagabundos y gentes de «ideas disolventes», el fuego tenía mucho que ver con motivaciones y protagonistas locales, y a él iba unido un código comprensible para el conjunto de los vecinos. De modo que cuando llegaban los corresponsales o los reporteros al lugar de los hechos ya existía opinión general sobre si el fuego había sido casual o intencionado.

En la noche del veinte de abril de 1906 la Guardia Civil de Sádaba comunicaba al gobernador por vía telegráfica «noticias de un grave suceso». En Uncastillo un pajar y un corral de Mariano Marco había sido incendiado «por criminales manos según se supone», habiendo costado gran trabajo dominar el fuego, y alcanzando unas pérdidas valoradas en más de mil pesetas. Sobre su autoría, «se supone que fue cometido intencionadamente el atentado», por haber sido Marco, a la sazón diputado provincial y residente en Zaragoza, uno de los socios que adquirieron los montes comunes. Los vecinos se habían manifestado ante el Ayuntamiento el día dieciséis en

protesta por esa compra. «La idea del incendio –añadía el parte de la Guardia Civil– debió surgir con motivo de la manifestación». Pocos días más tarde la prensa daba por solucionado «el conflicto de la desamortización de los montes comunes» en Sádaba y Uncastillo. En Sádaba los concejales recibieron a una nueva comisión de manifestantes, que se disolvieron «al saber que serían atendidas sus solicitudes». También se comenta que en Uncastillo «la tranquilidad es normal y completa». Más que fruto de un arrebato, de «la pasión de la venganza» según titulaba el reportero, parece que la tea incendiaria iba dirigida hacia un objetivo muy concreto.⁴¹

El castigo no había acabado. Las frías noches del mes de enero de 1907 dieron cobijo a nuevos incendios. En la madrugada del día tres fueron quemados los corrales que en el pueblo poseían los propietarios Valentín Pueyo, Isabel Mayayo, viuda de Antonio Fuertes Bardají, y el propio Mariano Marco. Guardia Civil y grupos de vecinos trabajaron en los trabajos de extinción, portando agua y sofocando brasas, pero apenas quedó nada en pie. Después vinieron las pesquisas para descubrir a los incendiarios. El silencio rodeaba la investigación, sin que nadie aportara ningún dato fiable. Tuvieron que pasar diez días para que dos pastores de un corral de Monguilán dijieran haber visto a cinco hombres reunidos dirigirse hacia uno de los pajares. Tan sólo reconocieron a uno de ellos, Frutos Tirapo Olano, de 41 años, casado, jornalero y con casa en la plaza de la Villa, que al poco fue detenido. Según la prensa, negaba «con obstinación» ser autor de los delitos que se le imputaban. Quizás no fuera casual en todo el asunto el hecho de que un hombre «del campo» como él se hubiera colado en el escenario del poder municipal cuando fue elegido concejal en las elecciones de noviembre de 1903. Pocos días después de la detención ardía en respuesta un pajar de otro propietario local, Manuel Cortés, prendido por «manos criminales».⁴²

⁴¹ HA, 24 y 25-4-1906.

⁴² Las noticias en HA, 5, 14 y 22-1-1907. Precisamente Antonio Fuertes fue objeto de un robo de mies pocos años atrás. En 1898 sustrajeron de su casa veinticuatro cahices de trigo. DAZ, 5-11-1898.

Manifestaciones y peticiones colectivas

Parte de la gestión de esa economía moral de los campesinos incluía la posibilidad de salir a la calle en son de protesta para hacer pública una situación de dificultad o para realizar peticiones colectivas. El telón de fondo social es el mismo que el que alentaba los castigos anónimos a los potentados, la disputa por la tierra, el principal medio de conseguir rentas y preeminencia social para unos, o supervivencia para otros. Los mayores hacendados se sentían implicados cuando ocurrían estas peticiones, pues tenían la impresión de que el orden social y la consiguiente salvaguarda de la propiedad estaban en juego cuando el «populacho» desataba su ira colectiva. Ellos tendían a proporcionar soluciones de carácter benéfico-asistencial como repartos de grano, bonos de comida o la instalación de comedores para pobres, pero los trabajadores no pedían tan sólo pan, sino que cuando se echaban a la calle lo hacían bajo la consigna de «pan y trabajo», proponiendo la gestión de la realización de obras públicas con las que llevar jornales a las casas en tiempos de paro estacional o malas cosechas. Se pedía en definitiva que los prohombres pusieran su influencia al servicio del pueblo hambriento para que el Estado se interesase por la construcción de una carretera o un tramo ferroviario. En cualquier caso, la petición de trabajo respondía en primer lugar a un sentido de dignidad de los vecinos que no se conformaban con algo reservado para los pobres de solemnidad; desde un plano de interpretación histórica, la petición de salarios tenía que ver con la llegada al campo del capitalismo y la necesidad de metálico con que acudir al mercado y saciar los impuestos estatales.

Pero la costumbre de los ricos de donar dinero para beneficencia o de promover medidas que evitaban afrontar un más equilibrado reparto de la renta también tenía que ver con una ideología conservadora y católica que por estos años, y a través de las directrices comprendidas en la *Rerum Novarum*, se conforma como una vía de implicación política y moral en la

problemática del mundo. Una problemática cifrada para el elemento eclesial en el auge de los socialismos y en la destrucción de los valores y las normas sociales tradicionales que ello podía arrostrar. En este contexto general en España, de una forma clara e inequívoca, la Iglesia y el Estado se dan la mano durante este final del siglo XIX. El Estado prometía privilegios como los educativos o los relacionados con las órdenes religiosas, mientras que la Iglesia ofrecía acatamiento al orden establecido y amparo moral a la política gubernamental. También la bélica. No es extraño, sino todo lo contrario, encontrar suculentas aportaciones de cabildos y obispados para contribuir a la creación de batallones de voluntarios, arengas desde hojas parroquiales y púlpitos para alentar óbolos en ese sentido, y bendiciones públicas de los quintos que se marchaban a la guerra en la estación o el puerto de partida. En los pueblos todo el mundo sabía que, salvo excepciones, el cura contaba con pasaporte para comer con los potentados, que éstos solían concederle su favor, y que algunos de los beneficios con que el cacique favorecía a los vecinos eran aconsejadas o discutidas por aquél.⁴³

Volviendo al punto de vista de los campesinos, había momentos en los que resultaba inevitable recordar a las familias más adineradas del lugar que pese a vivir sin frío ni hambre, ni la preocupación por su llegada, no debían olvidarse de ellos. En una fecha tan temprana como septiembre de 1882 medio millar de jornaleros pidieron pan y trabajo ante el Ayuntamiento de Uncastillo, manifestación que se repite en el mes de agosto del año siguiente de 1883. La comarca empieza a sentir la crisis, y las comunidades hacen valer con cada vez mayor frecuencia su situación a las autoridades locales. En el verano de 1893 varios cientos «de la clase proletaria» de Uncastillo llevan a cabo una manifestación «ordenada y pacífica», que terminó con la presentación de un escrito ante la autoridad. De igual modo sucedió en

⁴³ José ESTARÁN, *Catolicismo social en Aragón (1878-1901)*, Fundación Teresa de Jesús, Zaragoza, 2001.

Luesia en aquellos mismos días al salir toda la «clase jornalera» a la calle demandando «a los pudientes pan y a la autoridad trabajo», y entregando a los munícipes un escrito sugiriendo su mediación para que dieran comienzo los trabajos en una carretera comarcal, años atrás proyectada.

Entre los columnistas de los principales diarios se instalaba la opinión de que estas manifestaciones eran merecedoras de respeto y consideración por el modo pacífico en que tenían lugar, y por hacer descansar en la autoridad la resolución del problema. Porque, en definitiva, no buscaban una reorganización social ni alentaban ideas subversivas como las que portaban el socialismo o el anarquismo, que ya habían mostrado su fortaleza durante las huelgas organizadas con motivo del Primero de Mayo de 1890 en las principales ciudades del país. Respecto de la de Uncastillo, dice por ejemplo el *Diario de Avisos* en primer lugar que parecía veraz «por haberse hecho en un tiempo en que en otros años había apenas empezado la trilla, lo que prueba la situación precaria [...] y por lo tanto la justicia de sus pretensiones». Y en segundo término se congratula porque, pese a que en la solicitud presentada a la autoridad se hace constar la ausencia de ninguna adscripción ideológica concreta, «la mayoría de los manifestantes son individuos cuyos ideales políticos no se hallan muy en armonía con el régimen existente en la actualidad». Expresiones de este estilo, en tiempos en los que las suspensiones de garantías constitucionales estaban a la orden del día, revelan que en la vida local bullía cierto magma de descontento capaz de incomodar bastante a las clases rectoras. En los años en que sale a la luz pública el fenómeno del terrorismo anarquista, en los tiempos del miedo y de cierta psicosis capaz de atenazar a muchos hombres de orden, el grito de «trabajo, trabajo», como admite la prensa, significa: «el remedio de nuestros males no lo queremos hallar en el bolsillo del rico y del potentado, sino en el sudor de nuestra frente».⁴⁴

⁴⁴ La cita, a propósito de la carestía en Luna, en *DAZ*, 30-9-1896, núm. 8577. Uncastillo en *DAZ*, 8-8-1893, núm. 7510 y Luesia en *DAZ*, 19-8-1893, núm. 7521.

Al mismo tiempo esa prensa dio cobertura a un discurso lastimero y quejumbroso sobre la fuerte crisis que atravesaba la comarca cincovillense durante aquellos años, que tendía a dramatizar la descripción con entonación lacrimógena y alusiones pesimistas al desvanecimiento del campesino. Desde Uncastillo se escribe sobre «las miserias del pobre labrador, y esperamos sólo nuestro remedio del cielo [pues] triste es tener que demostrar el desaliento y la postración en que se encuentra [el labrador]». ⁴⁵ De este modo se va conformando una imagen del campesino necesitado de la ingeniosidad tecnológica de la ciudad y de la generosidad del Estado moderno, una «clase dependiente» necesitada de la gestión de los mayores propietarios, capaces de operar a través de las nuevas asociaciones agrícolas de corte vertical y la intervención directa en los aparatos del Estado. Y en esa línea, tenían cabida las voces que cifraban en la realización de obras públicas la solución a dicha crisis en su vertiente más social. Si desde Uncastillo se solicita al diputado de la circunscripción, Conde de la Viñaza, un plan de carreteras en 1893, poco después se agradece desde Luna la aprobación de la carretera de Zuera, si bien la ilusión de los cuatrocientos firmantes del escrito se desvanece poco a poco al comprobar cómo el contratista prefiere emplear a trabajadores del vecino pueblo de Luna. La aleatoriedad y limitación de los beneficios de estas concesiones llevan en algunos momentos a plantear medidas más contundentes. En Sos los vecinos se amotinaron ante el Ayuntamiento pidiendo trabajo para superar la crisis. El motín suponía un paso más para arrancar a

Problemas de cierta agitación en la comarca no eran nuevos. En febrero de 1892 fue hallado en la casa del alcalde de Luna un cartucho de dinamita, y al año siguiente hay quejas del mismo pueblo porque se producen recurrentemente «desórdenes nocturnos» de los «jóvenes que se dedican a alborotar», llegando a detener la Guardia Civil a dieciséis de ellos.

⁴⁵ DAZ, 25-2-1892, núm. 7054. Este discurso, en realidad, estaba relacionado con una intención comercial: crear una necesidad en la demanda agrícola, la de la compra de abonos y maquinaria agrícola, productos ofertados como los únicos capaces de «levantar» la agricultura». Gloria SANZ LAFUENTE, *Las organizaciones de propietarios agrarios en Zaragoza. 1890-1923*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2000.

las autoridades un compromiso concreto en la dirección deseada, y conllevaba un uso contenido de la fuerza basada en el número y en la amenaza de la violencia.⁴⁶

El viejo motín, aquel que comenzaba al alba con el bloqueo de las salidas de la población para hacer regresar a los labradores, que continuaba con el protagonismo de las mujeres en la plaza enfrentándose en primera línea con la fuerza armada, que podía continuar con el bloqueo de las autoridades en el Ayuntamiento por parte de los hombres, que conminaba a firmar nuevos pliegos de impuestos más igualitarios irrumpiendo en masa en la sala consistorial, que hacía público el mando de los vecinos pobres en el pueblo a través de pregones y pasquines, que ponía fin a las afrentas del recaudador persiguiéndolo tumultuosamente por las eras, que protestaba contra los curas cerriles y viciosos ante la iglesia, que se enfrentaba violentamente con el pueblo vecino por un río o un bosque, que dictaba sentencia contra un asesino o un ladrón sin esperar a lo que dijera el juez municipal... el viejo motín popular no dejará de sacudir, de cuando en cuando, la vida del pequeño municipio hasta bien entrado el siglo XX. Esa persistencia no fue fruto de la incultura de los campesinos, sino de la eficacia de este tipo de herramientas para hacer saber su descontento. Y nos dice mucho, además, sobre cuáles eran sus preocupaciones en los tiempos «ordinarios» en los que aparentemente tan sólo había silencio y obediencia.

Sin embargo, a la altura del cambio de siglo la ciudad ya cuenta con cierta experiencia en un nuevo fenómeno que causa aversión entre autoridades civiles, militares y eclesiásticas. El obrerismo organizado prende mecha, llegando en ciudades como Barcelona a utilizar las bombas como medio frecuente de propaganda por el hecho. El anarquismo es protagonista principal en los noventa, sobre todo desde que se instala un

⁴⁶ DAZ, 13-7-1893, núm. 7488; DAZ, 17-8-1893, núm. 7518; Lo de Luna en DAZ, 12-1-1895, núm. 8022. El motín de Sos en DAZ, 9-5-1896, núm. 8447.

contexto más favorable para salir a la luz pública, de la mano de la nueva ley de asociaciones de 1888 y del sufragio universal masculino de 1890, que alienta a la organización acelerada de secciones de oficios agrupadas en federaciones locales. Pero pronto la represión legal y policial remite al movimiento obrero, como en sus primeros tiempos, a las catacumbas de la clandestinidad. En una ciudad todavía muy agrícola como Zaragoza, las dificultades legales unidas a la preocupación de muchos trabajadores jóvenes por evitar la quinta produjeron un cierto desinflado del obrerismo organizado.

El cambio de siglo, con la crisis de legitimidad que supone la derrota militar, vuelve a estimular en las ciudades la organización política y obrera con nuevos bríos. En Zaragoza la Federación Local de Sociedades Obreras dirime en su seno una fuerte disputa por el poder entre socialistas y anarquistas durante los primeros años del XX. A un intento de huelga general en 1903 dirigido por la cúpula socialista, le sucede un cambio de manos y nuevas y más masivas huelgas generales organizadas por los anarquistas locales en 1904 y 1905. Al mismo tiempo, las familias republicanas adquieren nuevo lustre con el empuje de las Cámaras de Comercio de Costa y Paraíso, y los intentos de fusión en un partido único. Movimientos que resultaron ser insuficientes como para provocar una crisis en el edificio político de la Restauración. Sin embargo, el combate estaba planteado tanto en las urnas como en la calle. Los republicanos consiguieron victorias inesperadas en los comicios de los primeros años del nuevo siglo, y fomentaron además virulentas campañas de prensa anticlericales y antigubernamentales que podían desembocar en algaradas callejeras y agitación popular, y en las que la identidad de los protagonistas terminaba por aunar múltiples colectivos de los estratos populares y trabajadores. La ciudad, inevitablemente, se convertirá en foco de irradiación de estos nuevos modos de entender la realidad y de situarse ante ella hacia el entorno rural, a través de la prensa y la exportación de nuevos usos sociales mediante cada vez más eficaces medios de comunicación.

Capítulo 2

LOS AÑOS DEL REY Y EL DICTADOR

La crisis de 1905 en las Cinco Villas

Una de las comarcas aragonesas donde mejor puede seguirse el rastro de esta recepción de novedades habidas en el mundo del trabajo, y en la actitud de los habitantes rurales respecto de su lugar en el organigrama social, quizás sea la de Cinco Villas. Esta dimensión, la comarcal, ayuda mucho mejor a comprender el juego de tensiones sociales que se produjeron durante ese período, y a captar los matices de las respuestas vecinales ante lo que consideraban en ciertos momentos como ingerencias abusivas o, en el otro fiel de la balanza, imperdonables dejaciones. No se puede reducir toda la historia de la Restauración a una sola faceta como la protesta social, pero no dejan de ser merecedores de cierta atención indicadores como ese, que señalan que algo distinto pasaba en los pueblos respecto de la imagen de idílica quietud que se acostumbraba a imaginar. Algo pasaba que tendrá la vista puesta en los años treinta, que adquiere la forma de un proceso lento y complejo por el cual la sociedad campesina se fue complejizando y estratificando. Un proceso que en perspectiva larga es fundamental para comprender la historia local contemporánea, y que gira alrededor de la configuración de identidades diferentes que poco a poco se irán apartando de los usos y adhesiones tradicionales comunitarias, y que encuentran en el enfrentamiento y la demostración pública un modo habitual de autoafirmación colectiva.

Los aguinaldos y las coplas de año nuevo no trajeron en los primeros eneros del nuevo siglo las mejoras de vida esperadas por muchos. En Andalucía la carestía de subsistencias y el paro provocaron una potente reacción jornalera con seguimiento en todo el país a través de las páginas de la

prensa. El fantasma de la Mano Negra y del anarquismo milenarista se cernía sobre los sueños de propietarios y garantes del orden, pero esta vez el gobierno se decidió a tomar cartas en el asunto dedicando fondos y obras públicas para paliar el paro. Por las mismas fechas y en el ámbito regional, las Cinco Villas salieron a la palestra como una zona tan castigada como la andaluza, en la que el paro y la miseria se enseñoreaban por los pueblos a consecuencia del encadenamiento de malas cosechas, y también del aumento de la población ante las buenas perspectivas previas. Las cifras globales del negocio triguero iban en aumento, los mercados, el comercio y los beneficios de propietarios, intermediarios y productores de abonos continuaban al alza, y sin embargo de las Cinco Villas no llegaban sino malas noticias. Cada pocos días asomaban cartas emitidas desde Sos, Uncastillo o Ejea, que daban cuenta de «la miseria en Cinco Villas». La cosecha, se dice en una de ellas, «presenta muy mal cariz, en muchos pueblos se ha perdido por completo, y no hay quien facilite trabajo a los innumerables braceros que carecen de él».⁴⁷ Estaba claro que el modelo de crecimiento no había legado al campesino un colchón con el que afrontar con garantías un golpe de mala suerte, como una pobre cosecha. Ante el desolador panorama, el argumento del agravio comparativo con Andalucía estaba servido y llegaba, a través de la prensa, hasta las instituciones provinciales.⁴⁸

La Comisión Provincial de la Diputación zaragozana escribía en julio de 1905 al propio Ministro de Agricultura, Industria, Comercio y Obras Públicas para que, «ante la perspectiva del cuadro de miseria que desgraciadamente sufren muchas regiones de esta provincia», socorriera «a los pueblos desgraciados [...] por igual que lo hace en Andalucía». Se apuntaba como causa de la situación «el escasísimo, casi nulo rendimiento de la cosecha de cereales, única que se recolec-

⁴⁷ HA, 22-5-1905.

⁴⁸ A. M. CALERO, *Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936)*, Siglo XXI, Madrid, 1976.

ta en Monegros y Cinco Villas, los efectos desastrosos [...] de la plaga filoxérica [...] y la falta total de salida que tiene el vino procedente de cosechas anteriores». Y continúa indicando que para paliar «la carestía de jornales a braceros del campo [...], la emigración [...] y el malestar económico que en general sufre la provincia», se gestione «lo que a otros pueblos con justicia también seguramente se conceda», haciendo especial hincapié en las obras públicas comenzadas o proyectadas. En octubre del mismo año la Comisión volvía a enviar al Ministro un recordatorio para que atendiera las demandas regionales. Esta vez hablaba de «un malestar tan grande como pocas veces se ha observado en el país», aunque el aragonés no sea «un pueblo acostumbrado a exteriorizar sus dolores y sufrimientos», sino que tiende a callarlos «por la aversión que siente al llanto de mujer y se siente más varón cuanto mayores son los infortunios». Tras apelar a la virilidad aragonesa, la carta ahonda en la preocupación por el estado de la agricultura: «sin los elementos de vida que proporcionan los años fértiles, y terminadas las escasas operaciones a que da lugar la sementera, no hay en la esfera normal del trabajo factores importantes que puedan proporcionarlo en condición alguna a las numerosas huestes que aquí viven a expensas de la agricultura». De Cinco Villas, igual que otras comarcas, apunta que el cuadro es verdaderamente «tétrico», pues allí «sufren la amargura de haber perdido tres cosechas consecutivas por faltar el agua de lluvia».⁴⁹

Sin embargo, la actitud de los más sufrientes no era de total pasividad. En realidad, uno de los más poderosos motivos por los que se llevaban a cabo estas iniciativas tenía que ver con la salida de hombres y mujeres a la calle de sus localidades, y con el miedo que ello provocaba entre propietarios y políticos. Éstos se hallaban imbuidos de la idea de que hambre y violencia colectiva estaban estrechamente relacio-

⁴⁹ ADPZ, Fomento, leg. XIV-932. Tras este interés sin duda también se escondían desvelos por beneficios económicos, articulados en estos años como una lucha entre los beneficios que el Estado otorgaba a la industria en detrimento de la agricultura.

nadas, de que era la desesperación la que empujaba a la gente a pedir o a tomar de donde hubiera. «Sin fuerza moral ni material para contener la hambrienta masa de este pueblo trabajador —escribían desde Ejea—, se halla el día muy cercano en que el orden público se ha de alterar muy gravemente». Y de que además esas alteraciones podrían ser doblemente peligrosas. Primero porque se estimaba que el hambre nublabla el entendimiento. Y en segundo lugar, porque la ciencia social del momento, absorbida en el estudio del comportamiento de «las masas», fijó argumentos ampliamente extendidos en la sociedad, como el de que el hombre en grupo pierde la personalidad propia y su razón en beneficio de un líder o del impulso de la masa. Y por lo tanto, la protesta de los hambrientos habría de ser especialmente destructiva. «Se comprende el delirio de las muchedumbres que carecen de alimentos; se explican todas las exaltaciones del espíritu en el hombre que aspira a satisfacer sus exigencias más imperiosas; son lógicos esos movimientos subversivos en quienes sienten la fiebre del hambre y no encuentran medios de aplacarla [...]; se transparentan las causas de los horrores que producen la desesperación del proletariado, cuando se encuentra sin trabajo en que ocupar sus brazos [...] Indudablemente no se ha pensado todavía lo bastante para conjurar los grandes conflictos sociales que provocan las crisis económicas en las muchedumbres que viven al día».⁵⁰

La historia y la sociología han puesto de manifiesto en las últimas décadas que cuando la gente salía a la calle para protestar se ponían en juego otras cuestiones además de una situación objetiva desfavorable. La propia percepción que los sujetos se construyen de esa realidad no sigue muchas veces los dictados de la previsibilidad, máxime cuando podían existir expectativas no cumplidas que con facilidad se insertaban en unas nociones culturales compartidas sobre la justicia y el agravio colectivo. No es difícil imaginar que las carencias y la inoperancia de los poderes públicos podrían

⁵⁰ HA, 27-5-1905 y 17-4-1905 («El hambre y la sociedad»).

llevarse peor cuando las explotaciones capitalistas exhibían sus buenos beneficios y auguraban mejores perspectivas de futuro. Los estudios históricos han podido comprobar que eran precisos ciertos recursos para movilizarse (una posición de respeto social, tiempo, recursos económicos...), o que en otras palabras, los que se hallan en una situación de indefensión absoluta no suelen protagonizar enfrentamientos con el poder. La sociología ha puesto de manifiesto que además eran precisas ciertas estructuras de movilización, que no necesariamente habían de identificarse con una organización formal, unos marcos interpretativos comunes de la realidad, y una oportunidad favorable para manifestar la protesta. En el caso que nos ocupa, puede decirse que en las Cinco Villas se puso a prueba a las autoridades con formas pacíficas y admitidas de disensión como eran las manifestaciones, algo que no excluía en el mensaje emitido a la autoridad la amenaza de uso de formas más violentas y directas. Y sobre todo, con la amenaza de la extensión del fenómeno obrero urbano al entorno rural, y de la huelga como forma predominante de crearles problemas a los patronos.

En el mes de abril de aquel año de 1905 en Castejón de Valdejasa se pide con insistencia el inicio de las obras en la carretera de Gallur a Ejea, «o sus moradores, acosados por el hambre, o tienen que emigrar o perecer de hambre entre las cuatro paredes de sus viviendas». En Sos el alcalde, tras la manifestación de los vecinos pidiendo la capitalidad comarcal de las contribuciones, comunica al gobernador que si no se satisfacen los deseos del vecindario «no responde del orden público». En Uncastillo unos quinientos vecinos se presentan en manifestación ante el Ayuntamiento para que se pueda trabajar en las obras de la carretera de Luesia. En Ejea de los Caballeros se alternan las rogativas en petición de lluvias con la constatación del hondo malestar entre la «clase trabajadora» por la ineficacia política para gestionar obras públicas. El 17 de mayo tiene lugar una «manifestación bracera», tomando los grupos de huelguistas las salidas para sumar cuantos más posibles a la protesta. El corresponsal señala que la huelga,

aun cuando no se conoce su «organización», ha sido «elaborada bajo una buena dirección, a juzgar por el movimiento general iniciado y por haber acudido todos los vecinos como un solo hombre a los puntos que se les han destinado. Y aterrado, esbozababa este sombrío cuadro:

«El aspecto de la población es imponente a manera que transcurre el tiempo. Albañiles, carpinteros, herreros e industriales de todas las artes hacen causa común con los manifestantes, incluso las mujeres que los alientan con su presencia. En este momento hay en la plaza de la Constitución mil hombres o más y el clamoreo y el murmullo que producen esas multitudes causa verdadero terror, solo comparado al bostezo de un monstruo de mil cabezas que amenazara devorar todo cuanto encuentre a su paso. Dícenme que van a presentar una exposición al Ayuntamiento, redactada en tonos correctos, pidiendo trabajo y según las impresiones que reciban de esta corporación se hallan dispuestos a mantener la manifestación por tiempo indefinido».⁵¹

Como se puede ver, algo ha cambiado. Es probable que sea ésta la primera vez que se usan los términos de «huelga» y «huelguistas» en una crónica de la comarca. De hecho, y como prueba de que esta práctica estaba todavía muy en entredicho, el corresponsal no duda en «condenar este tipo de movimientos de opinión, que irrogan perjuicios considerables a todas las clases sociales», atreviéndose a recomendar a unos prudencia y a otros diligencia. La crónica del día siguiente detallaba cómo ante la «inmensa multitud» que ocupaba los salones del Ayuntamiento, los primeros contribuyentes, juez de instrucción y autoridades locales trataron sobre las soluciones de la crisis. Como era de esperar, se culpó al gobierno del abandono de la comarca, cifrando en las

⁵¹ Castejón de Valdejasa en *HA*, 29-4-1905, núm. 3115. Lo de Sos en *HA*, 26-4-1905, núm. 3112, y la de Uncastillo en *HA*, 23-5-1905, núm. 3135. Las rogativas en Ejea y Castejón en *HA*, 3-4-1905. La huelga de Ejea en *HA*, 17 y 18-5-1905, núms. 3130 y 3131. Terminó con la promesa de la autoridad de realizar una cuestación entre los pudientes para subvenir las necesidades de la clase trabajadora, y solicitar de los poderes públicos y la Diputación Provincial se diera comienzo a los trabajos de caminos vecinales para proporcionar trabajo a la población.

obras públicas la solución a los problemas, y elaborando una serie de acuerdos relativos a la petición de obras a las administraciones estatal y provincial. Además, se acordó realizar una cuestación entre las personas pudientes «para subvenir las primeras necesidades de la clase trabajadora» formando cuatro comisiones dirigidas por el alcalde, juez de instrucción, juez municipal y cura párroco, con «una numerosa y respetable representación de la clase obrera». Y es que es en las villas agrícolas de tamaño notable, con buenas comunicaciones y un cierto desarrollo económico donde más rápidamente la sociedad se complejiza, y donde con mayor claridad puede observarse la aparición de una incipiente identidad obrera que radica en su difícil experiencia laboral su razón de ser.

El mes terminó con una exposición del alcalde y mayores contribuyentes de Mallén dirigida al Ministro de Gobernación sobre «la absoluta carencia de recursos» de «la clase jornalera» y «del problema (entiéndase de orden público) que pronto, muy pronto, va a plantearse en esta villa». A comienzos de junio hicieron manifestación varios centenares de braceros de Luna, mujeres y niños, presentándose ante el concejo para pedir la puesta en marcha de las obras de carreteras, y pocos meses después se amotinó el vecindario de Biota, asaltando el ayuntamiento para exigir claridad en las cuentas del monte comunal «Saso». En febrero del año 1906 las autoridades de la comarca convocaron una asamblea en Ejea para transmitir al diputado de la circunscripción, el republicano Dionisio Casañal, la urgencia con que se precisaban sus gestiones en Madrid para dar inicio a las obras. Las promesas conseguían desactivar momentáneamente la protesta, manteniendo una tensión dinámica entre las manifestaciones y las medidas de las autoridades. Pero las promesas no fueron suficientes, y los braceros de Luna volvían a manifestarse de forma «tumultuosa» ante el Ayuntamiento, pidiendo «pan y trabajo». También en busca de trabajo se manifestaron los de Uncastillo ante su Ayuntamiento en el momento del pleno. «Los grupos situáronse en la plaza, y una comisión subió a conferenciar con el

alcalde», quien envió un oficio al gobernador pidiendo la continuación de las obras en la carretera a Murillo de Gállego, paradas desde hacía cinco años por la muerte del contratista. Se apunta que la crisis tiene su origen en la filoxera y «en la transformación de la agricultura», hechos que «no permiten a los propietarios la ocupación de los muchos jornaleros que en Uncastillo sufren los rigores de la miseria».⁵²

La cosa no terminó ahí. También salieron a la calle los de Luesia y de Biel, quienes «a grandes voces» reclamaron socorro y trabajo. En Luesia volvió a tener lugar una nueva manifestación relacionada con la subsistencia, para pedir al ayuntamiento que intentase que los propietarios de los comunales los retornasen al pueblo, y en Uncastillo sucedió lo propio para pedir la anulación de la venta del comunal. «Braceros sin jornal y gentes necesitadas» pidieron que los montes revirtieran al municipio «para que los pobres puedan encontrar remedio a sus miserias en la explotación de aquellos terrenos». El alcalde accedió a estudiar el asunto «de acuerdo con los propietarios», aunque hizo saber a los comisionados la dificultad de sus pretensiones. Hay que recordar que el común se hallaba muy relacionado con la subsistencia, desde el momento en que no sólo se pedía el acceso al mismo para la recolección de bienes, sino sobre todo tierra para trabajar. La batería de protestas terminó con una huelga de pastores de Ejea, injustificada a juicio del corresponsal pero también consecuencia indirecta de las malas cosechas y los «cambios en la agricultura».⁵³

Aquel comienzo de siglo supuso la puesta de largo de una serie de reivindicaciones por parte grupos de población des-

⁵² Lo de Mallén en *HA*, 26-5-1905. Lo de Luna en *HA*, 3-6-1905, y lo de Biota en *HA*, 18 y 21-10-1905, núms. 2261 y 2264), cuando todavía se hablaba de «crisis gravísima» y «miseria espantosa» en la comarca, *HA*, 25-10-1905. La Asamblea de las Cinco Villas en *HA*, 5-2-1906. La manifestación de Luna en *HA*, 15-2-1906 y la de Uncastillo en *HA*, 16-3-1906

⁵³ La manifestación de de Luesia en *HA*, 20-3-1906. La manifestación de Biel en *HA*, 30 y 31-3-1906. La protesta por los comunales de Luesia en *HA*, 6-4-1905, y por los de Uncastillo en *HA*, 18-4-1905. La huelga de pastores en *HA*, 21-4-1906.

favorecidos que esperaban respuesta rápida por parte de los poderes locales y del gobierno. Su malestar fue encauzado y desviado unas veces por esos mismos poderes locales, remitiendo la cuestión a las obras públicas que debían de venir de Madrid, pero en otras ocasiones se descubre por parte de campesinos y artesanos una acción independiente e incluso castigadora respecto de los caciques y potentados, pues en su mano y su generosidad también estaba buena parte de la solución. Es el resultado de un lento proceso de estratificación social relacionado con la mayor dependencia del jornal por parte del campesino y con su mayor exposición a las crisis agrícolas, pero también de nociones que tienen que ver con la dignidad vecinal y una economía moral anclada en la tradición que justificaba la reclamación del conjunto de la comunidad. Como en todo, lo viejo y lo nuevo se dan la mano en los fenómenos sociales de cambio, y en éste es la estructura de la propiedad de la tierra lo que está en el centro del debate. Fuente de nueva riqueza, también lo es de ansiedades y desvelos de quienes no podían acceder a ella.

El Hospicio

Pueden imaginarse también la conmoción y los desvelos de Joaquín Plano tras la trágica muerte de su mujer. La noticia hubo de llegar a la rama familiar de Lobera, desde donde habrían de salir los hermanos, Andrés, Pascual y Celedonio hacia el sepelio de Uncastillo. A su llegada todavía perduraría la «honda impresión» que había sacudido al vecindario en aquel aciago septiembre de 1897. Y también es fácil imaginar que tras el funeral, entre lutos y resignados pésames, largas caras y el humo triste de los cigarros, hubiese opiniones sobre cuál hubiera de ser la solución más cabal para un hombre joven y trabajador que acababa de enviudar. En Uncastillo Joaquín había conseguido hacerse un pequeño hueco trabajando la tierra, y había dado nombre a una casa. Pero ahora no era suficiente. ¿Quién podría criar a su hijo? No era infrecuente que cuando una criatura quedaba huérfana algún ama de cría aceptase darle la leche materna y

comenzara a criarlo, todo eso con la premura que dictaba la carencia de cualquier otro tipo de alimento para los pequeños. La pista de aquel momento urgente se pierde en el tiempo, pero Antonio hubo de seguir viviendo entre familiares y gente empeñada en que pudiera crecer.

La vida sigue, o eso dicen, y a no mucho tardar Joaquín volvió a casar con Patricia Cervero, de familia de jornaleros, con quien tuvo hijas, Elena y María, nacidas en 1900 y 1902. No serían las últimas, pues en el censo campesino de 1933 consta que Patricia tuvo siete hijos, pero sí las únicas con Joaquín como padre. Se trataba de seguir aportando trabajo y consistencia a la casa, de continuar la familia campesina pese a los embates del cielo y la fortuna. Y no había mucho tiempo para desperdiciar ya que la tierra y la casa requerían de la aportación de todos los brazos posibles, presentes y futuros. Y para eso los hombres contaban con ciertas ventajas sobre las mujeres, que debían soportar lutos más rígidos, y también un más duro hostigamiento de lenguas maledicentes y sermones reprobatorios si decidían acortar o aligerar el mortecino peso de la viudedad. Aumentar la familia, pese a la escasez, no dejaba de ser tarea virtuosa que, desplegada con honradez, era aprobada por el resto de la sociedad. En un contexto de jornales escasos y comidas esquivas ese tipo de pensamientos eran muy fáciles. Es claro que también existía la necesidad emocional de traer hijos al mundo, pero sería ilusorio no ver en el modo o la intensidad con que eso se percibía las interferencias de un cierto sistema de pensamiento dominante, o mejor, como un autor lo bautizó, cierta «estructura del sentir», en el que la Iglesia católica llevaba la voz cantante. Todo iba bien para un hombre si tenía trabajo y una mujer a la que darle hijos. Por aquel entonces Joaquín contaba con treinta y dos años, había llegado lo que en la época podía considerarse la madurez de la vida, y pudo celebrar un nuevo casamiento. El juicio popular no habría de alegar nada en contrario por lo terrible y accidental de su viudedad. En otras ocasiones, si hubiera mediado diferencia de edad entre los desposorios

o alguno de ellos hubiese sido foráneo, habrían sido de temer las cencerradas y las rondas de picadillo a la puerta de la casa, el honor en entredicho, y quién sabe si una mala reyerta para zanjarlo. Pero no, este no fue el caso. Quizás con el recuerdo tierno e imborrable de María y de su infeliz final, Joaquín casó con Patricia poco antes de finar el siglo.

Entre juegos y aulas pasó Antonio Plano su primera infancia en Uncastillo. Sin embargo, bien pronto su entorno conocido de estabilidad sufriría un duro vuelco, en esa edad en la que ya comienza a ser consciente de los amargores de la vida. El 9 de septiembre de 1905, contando Antonio nueve años, moría su padre Joaquín de «tuberculosis peritoneal», a los 44 años de edad. Aunque María, la madre de Antonio, había recibido sepultura en el cementerio de Santa María, él fue enterrado en el cementerio de San Martín. Muerto el cabeza de familia, y desaparecidos los dos progenitores de Antonio, su situación se tornó muy difícil. La familia no tenía bienes, por lo que entraron en acción los mecanismos establecidos de la beneficencia. Primero se certifica que Antonio Plano, «de once años de edad, hijo de Joaquín y de María ambos ya difuntos, es pobre de solemnidad, puesto que carece en absoluto de bienes de fortuna, y como tal se halla incluido en la lista que para el servicio benéfico sanitario gratuito tiene formada este Ayuntamiento». Antonio ingresaba en el Hospicio, en la sección del Hogar Pignatelli el 12 de enero de 1908.⁵⁴

El inmenso bloque albergaba a varios cientos de niños, los de la Inclusa, expósitos sin nombre marcados en su apellido, y los huérfanos como él. En su origen figuraban la deshonra, la fatalidad o la miseria. Así lo decía el Reglamento, que estipulaba la recogida de «todos los niños de ambos sexos habidos ilegítimamente y los de legítimo

⁵⁴ Documento expedido por el alcalde Manuel Cortés y el secretario municipal Mariano Marcellán. ADPZ, Hogar Pignatelli, Expediente personal de Antonio Plano Aznárez.

matrimonio que quedaran huérfanos antes de los siete años en estado de pobreza». La imagen que de los hospicianos se tenía se relacionaba con la desgracia y con la recogida de los muchachos «del arroyo», con escenas pecaminosas y meses después, en la anochecida, cestillos en los tornos de la inclusa. Para la sociedad bienpensante este tipo de recintos no dejaban de ser lugares de exclusión. Para los ensayistas del momento fenómenos como la mendicidad infantil o el abandono eran parte de la mala vida de la ciudad que protagonizaban desclasados y miserables, emigrantes tachados de viciosos de taberna y carentes de la mínima fuerza moral para refrenar sus impulsos. Y no dejaban de reconocerse como males las consecuencias del trabajo fabril y la desmembración familiar a la que obligaba la búsqueda del salario. Desde la perspectiva católica, la caridad hacia todos ellos debía no sólo suplir las carencias materiales, sino también el vacío espiritual de que hacían gala desarraigados y mendigos. La *Rerum Novarum* había indicado el camino a seguir, el de plantar cara a los discursos obreros de la lucha de clases inmiscuyéndose de pleno en la sociedad, pero ofreciendo caridad y amor fraterno frente a la lucha descarnada y deshumanizadora de socialistas y anarquistas. El campo de batalla abarcaba todos aquellos terrenos en los que poder dejar impronta doctrinal, desde los sindicatos católicos hasta los comedores de pobres, desde la escuela a las conferencias morales o la publicación de prensa propia. Y desde esa posición de superioridad moral y de rectificación de los acogidos, a quienes se concibe como fruto del pecado o como carne de cañón del mismo, es desde la que hay que entender las obras pías de este comienzo del siglo XX. No es casual que en un mismo entorno urbano la Diputación Provincial dispusiera de importantísimos centros benéficos, como el Hospital de Nuestra Señora de Gracia y Justicia (que incluía la Maternidad Provincial, la Casa-cuna o inclusa y el Hospital de dementes) y el Hospicio de Nuestra Señora de Misericordia (que incluía los Hospitalicos en el que se acogían a niños huérfanos menores de 15 años),

mantenido durante mucho tiempo con la recaudación de las entradas de la cercana plaza de toros.⁵⁵

Cada cierto tiempo se publicaban en la prensa de la ciudad alarmistas artículos sobre la cantidad creciente de mendigos y la necesidad de acometer medidas de «limpieza». La burguesía afrontaba la cuestión desde una no disimulada molestia, sobre todo hacia los «pobres de oficio», «mendigos industriales [...] que no dejan ni un momento en paz al vecindario», y trataba de articular soluciones pensando en el efecto nocivo y contagioso de la delincuencia, sobre todo de la infantil y juvenil. A partir de finales del XIX la Beneficencia se especializa, concentrando la atención de las viejas Casas de Misericordia en niños, adolescentes y jóvenes. «La clase más conocida del tipo golfo es la infancia abandonada», podía leerse en un famoso estudio antropológico sobre la mala vida en Madrid, «todos esos pequeñuelos lanzados al arroyo [...], todos esos abandonados y errantes de las aceras que mendigan, roban y se prostituyen, y son como el estercolero en que germina el crimen». Los testimonios escritos sobre esta vinculación entre calle y delincuencia son muy numerosos. Lucas Mallada, en sus cartas escritas al rey Alfonso XIII en 1905, y tratando de compensar con crudo realismo las impresiones que el joven monarca sacaba de sus afables visitas por el país, describía cómo en las capitales «...pululan los enjambres de golfos, unos sin camisa, otros descalzos, todos desvergonzados, medio idiotas e inútiles para el más insignificante trabajo». Lo cierto es que al margen de imágenes o estereotipos, la vida no debía resultar sencilla para los muchachos de la calle, y que para muchos la vida del Hospicio pudo en algún momento resultar incluso más agradable. «¡No se pasa bien! –dice el personaje de un hospiciano en una obra de teatro– Antes que murieran mis padres, yo corrí mucho por esas calles ham-

⁵⁵ *Reglamento para el régimen interior del Hospicio Provincial de Zaragoza en sus tres departamentos de Hospicio, Hospitalico y Casa-Cuna. Aprobado por la*

briento y desnudo, sin recoger más que injurias y golpes. Aquí se está mejor».⁵⁶

Este era el ambiente que rodeaba el mundo del Hospicio de principios del siglo XX. La mayoría de estos escritos y opiniones se vertían desde «fuera», aunque lo realmente interesante sería llegar «adentro», al interior de las salas, los patios y los talleres. La gente tan sólo sabía de ellos cuando salían a la calle, con motivo de procesiones religiosas o para tocar música en actos de caridad, y entonces solían señalarlos como «los del Hospicio», fijándose en sus cabezas rapadas, sus tipos arguellados y sus tristes vestimentas.⁵⁷ Salvo por vía del estudio de la reglamentación del centro no puede decirse mucho más, pues lamentablemente la información de la institución no está hoy por hoy accesible a los investigadores y estudiosos salvo en una parte muy limitada. Tampoco es ese el fin de estas líneas, pero sí al menos lo era el realizar una aproximación al entorno al que arribaba Antonio Plano, no sólo en lo referente al ámbito institucional, sino también en lo que atañía a imágenes extendidas y expectativas previas. Porque en ese entorno habría de compartir experiencias y descubrimientos trascendentales para su desarrollo humano. Algunas, seguro, tuvieron que ver con el seguimiento de las normas establecidas, pero tam-

Diputación Provincial en sesión de 4 de junio de 1873, Imprenta del Hospicio Provincial, Zaragoza, 1883, p. 44.

⁵⁶ Gonzalo JOVER y Salvio VALENTÍ, *Los niños del Hospicio*, Editorial Maucci, Barcelona, 1903, p. 52. Varios artículos en prensa sobre la mendicidad, en *HA*, 10-1-1903; *HA*, 25-10-1905 ó *HA*, 20-3-1907. Constancio BERNALDO DE QUIRÓS y José María LLANAS AGUILLANEDO, *La mala vida en Madrid*, Egidio Editorial e Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1998 (original de 1901), p. 13. Lucas MALLADA, *Cartas Aragonesas dedicadas a S.M. el Rey Alfonso XIII (q.D.g.)*, Establecimiento Tipográfico de la Viuda e Hijos de M. Tello, Madrid, 1905.

⁵⁷ La dieta estaba basada sobre todo en la ingesta de pan. Como ejemplo sirva el cuadro de alimentación aprobado para el año 1905 destinado a los niños de 8 a 14 años. Desayuno: 80 grs. de pan, 200 de café con leche, 15 de azúcar. Comida: 120 grs. de pan, 60 de carne, 15 de tocino, en las vigiliás 60 de bacalao y 5 centilitros de aceite, 45 grs. de garbanzos ú 80 grs. de judías, 60 de arroz, 60 de patatas y 12 cls. de vino de 9 a 10 grados. Cena: 120 grs. de pan, 10 de tocino, 40 de carne ó 30 de bacalao con 5 cls. de aceite, 70 grs. de patatas ó 50 de lentejas, 70 de arroz y 12 cls. de vino, *EP*, 30-11-1904.

bién con el aprendizaje de leyes y códigos que no estaban escritos, dictados por las costumbres de los más mayores, en los que debía situarse a través de las relaciones cotidianas con los compañeros.

El conflicto, ya se ha dicho, puede ayudar a reconocer trazas de cotidianeidad que de otro modo no resultarían visibles. De cuando en cuando saltaban a las páginas de la prensa relatos sobre alteraciones del orden en el interior del Hospicio a partir de las cuales puede rastrearse la percepción que los propios asilados tenían de su situación en el interior del centro. La rígida educación y el propio sistema de confinamiento provocaban fricciones entre maestros y aprendices. En julio de 1892 se tiene noticia de una «huelga» de hospicianos por un motivo grave. Apareció el cadáver de un niño ahogado en el Ebro, lo que motivó una investigación sobre las causas y el descubrimiento de «un abuso» consistente en prolongar las salidas dominicales junto a familiares o amigos más allá de las horas permitidas. La aplicación estricta del reglamento hizo que en aquel día sólo pudiesen salir los de buen comportamiento y mayores de dieciocho años. Los pequeños quedaron encerrados, dando comienzo una fenomenal «gritería» en los patios. «Los chiquillos tiraron piedras, rompieron cristales de las habitaciones de los maestros y no fue librada la casa del cura, en donde no quedó cristal sano». A la mañana siguiente los jóvenes se negaron a entrar en los talleres, lo que motivó severas medidas disciplinarias y la expulsión de ocho asilados que la dirección consideró «autores del motín». En junio de 1899 hubo una nueva algarada. Esta vez los mayores consideraban excesivo el tiempo de estancia en el Hospicio, que se prolongaba hasta los veintitrés años, siendo que se habían hecho con el oficio mucho antes y deseaban iniciar su independencia en el exterior. Los cuarenta y cuatro asilados expulsados nos hablan de la gravedad de aquella protesta. En el motín de 1905 se produjo «un pequeño alboroto» del que no se dan las causas. Pero en la depuración de responsabilidades, cuando ya reinaba cierta normalidad, un asilado hirió a un

maestro con una cuchilla de zapatero, produciendo «penosa impresión en el Hospicio».⁵⁸

Evidentemente la vida cotidiana era en el Hospicio más rutinaria que aquellas esporádicas bullangas, pero no deja de ser significativo que los asilados amotinados repitieran en alguna manifestación que demandaban «más libertad». Es lógico pensar que ese anhelo lo compartieran la mayoría de los internos, pero ante una carencia que había de cruzar la existencia en el Hospicio durante años, más acuciante conforme se crecía en cuerpo y mente, Antonio Plano hubo de tomar otras referencias y forjarse en la convicción del poder de la palabra y del razonamiento. Las muestras del carácter pacífico y tolerante de que hizo gala en posteriores episodios de su vida son las mejores pruebas de esta afirmación. En las mismas salas del Hospicio donde otros compañeros usaron de la reyerta, Plano templó su carácter en el descubrimiento de la solidaridad como un valor, en el gusto por el aprendizaje de los buenos maestros y, sobre todo, en el carácter resolutivo y práctico que imprimiría a sus empresas personales. Hubo de lograr, al igual que muchos otros, dotar de un sentido a su estancia en el Hospicio, y ese no sería otro que la adquisición de una profesión para salir con éxito del mismo y volver a su pueblo natal, del que probablemente hubiera de guardar abundantes recuerdos de infancia. Él se inclinó

⁵⁸ LD, 4-7-1892 y DZ, 5-7-1892; HA, 12-6-1899; y HA, 10-5-1905. Las condiciones de los confinamientos provocaban situaciones de protesta entre colectivos diversos, no siendo los únicos en protagonizarlos los hospicianos más «rebeldes». Hubo varios motines de mujeres en el Hospital, donde las curas tenían que ver no sólo con la enfermedad física, sino también con la reconducción moral. Las enfermas de la sala de Santa María Magdalena se amotinaron, «protestando de algunos abusos cometidos en aquel benéfico establecimiento». Según se dice, «proferían terribles insultos contra las monjas y las enfermeras», pidiendo incluso la presencia del obispo. Otras amontonaron camas vacías debajo de las ventanas y desde ellas «lanzaban al mundo» su protesta, arrancando tejas y tirándolas por doquier. Las causas del malestar eran «que reciben las cartas abiertas y son violadas las que ellas escriben. Por los sellos les cobran 5 céntimos de prima, y ellas no quieren ser *tan primas*: textual. De los alimentos que les envían sus patronas llegan a las destinatarias *lo que llega*, y además la sala, dicen, es una nevera, se regatea el carbón de la estufa y allí no se puede estar de frío», EP, 3-12-1904. Otro motín similar en el año anterior, en HA, 30-11-1903.

por la carpintería, mientras otros lo hacían por la tipografía, el textil, la panadería, la herrería, la yesería, la sastrería, la zapatería, la pintura o la albañilería. El nivel educativo no era en realidad malo comparado, por ejemplo, con la enseñanza heterogénea e intermitente de algunas localidades rurales, aunque el contexto fue de constante dificultad económica. Y hubo, sobre todo, de hacerse fuerte, acordándose de cuando en cuando que su padre acababa de irse para no volver.

La cotidianeidad, necesariamente, fortalecía. En el mes de abril, por poner un ejemplo, se levantaban a las cinco de la mañana y tras lavarse acudían a oír la misa, que comenzaba a las cinco y media. A las seis entraban en los talleres o en la escuela, según edades, trabajaban hasta las siete y media, momento del desayuno, y volvían a sus ocupaciones hasta las doce del mediodía. Se servía la comida y a la una se volvía al trabajo. A las seis y media se rezaba el rosario y a las siete se cenaba, dirigiéndose a las habitaciones tras un pequeño descanso. Es cierto que el ambiente era de austeridad por crónicas dificultades de presupuesto, lo cual no es incompatible con la búsqueda de un mayor equilibrio sin que el ahorro afectase a los aspectos de alimentación, vestido y enseñanza, «cosas sagradas que necesitan mirarse con mucho respeto». En general el primer tercio del siglo XX fue un período de constante actualización de los servicios del Hospicio, comenzando por la reforma del propio edificio, la instalación de luz eléctrica, la apertura de la biblioteca, la mejora de la alimentación (se suprime la costumbre de servir vino) o el riguroso control sanitario. Y en el aspecto pedagógico se asiste a una renovación de la enseñanza, incluyendo en el reglamento consejos a los maestros para que «enseñaran a los acogidos que estuvieran a su cargo todo lo relativo a su oficio, corrigiéndoles con buenos modales los defectos que advirtiesen». La potenciación de los talleres como fuente de beneficio económico complementaba a la perfección el aspecto formativo y la implicación tanto de asilados como de maestros, responsables del buen estado de la maquinaria y su renovación y pagados por igual en los trabajos destinados a la institución

como en los externos. En el informe de 1915 se dice que «la principal finalidad de los talleres es la educación de los asilados proporcionándoles un oficio que les permita ganarse holgadamente la subsistencia cuando salen del Establecimiento». No era poco, y es más que probable que por ello Antonio Plano tuviese adquirida una deuda perenne de gratitud hacia la que fue su casa durante años.⁵⁹

Eso explicaría el hecho de que cuando Antonio, ya Don Antonio Plano, fue nombrado alcalde de Uncastillo y Diputado Provincial, quisiera visitar el Hospicio en uno de sus primeros días de mandato. Era un gesto simbólico con el que demostrar su querencia por unos orígenes de los que, a la vista estaba, nunca renunció. Había correteado por aquellos patios y trabajado en aquellas naves, y ahora volvía portando sombrero, rodeado de respeto y pletórico de ilusión a visitar a sus pobladores, pobres y huérfanos como lo fue él en un tiempo. Por las muestras de cercanía y humanidad hacia los pequeños, el orgullo personal no fue el de haber logrado notables cumbres en política, sino el de haber ascendido desde tan «abajo». Tamaño recorrido constituía, al igual que en otros insignes líderes, motivo de panegíricos en la tradición socialista, que siguiendo el modelo del «apóstol» Pablo Iglesias aplaudía a los que lograban hacer carrera política desde el mundo del trabajo manual y la experiencia solidaria con los «hermanos» obreros de infortunio. Eso es lo que hace el redactor del órgano socialista *Vida Nueva*, cuando narra cómo «Antonio Plano salió de la Casa del Niño en Orfandad y entró en los caminos del Trabajo, inteligente, laborioso, bien aleccionado por las viejas angustias. Tanto laboró, que alcanzó preeminencia social por sus luchas reivindicadoras, por su amor a los que trabajan, por hondo sentimiento de fraternidad humana, revalorado por el desamparo en que vivió durante los años de su infancia». Este tipo de rimbombancias no parece que fueran mucho con el carácter

⁵⁹ Jesús MARTÍNEZ VERÓN, *La Real Casa de Misericordia*, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1985, pp. 104-5.

sencillo de Plano. Sin embargo, y al margen de exageraciones retóricas, sí puede vislumbrarse un detalle importante de la visita que deja entrever la calidez de su personalidad. Siendo ovacionado por los niños, «no pudo evitar que dos ríos de lágrimas, en silencio, descendiesen por su noble rostro de trabajador». Esa capacidad de empatía hacia los problemas de quienes le rodeaban será lo que en el fondo explique algunos hechos trascendentales de su vida.⁶⁰

Igual panegírico realiza quien trabajó intensamente junto a él en la política local durante los años republicanos, probablemente el secretario del Ayuntamiento Emiliano Bravo. Sus descendientes legaron a la familia de Plano, casi treinta años después de aquél trágico 1936, unas cuartillas en las que se daba testimonio de la «bondad, honradez, seriedad, lealtad e hidalguía» del alcalde. Dichas cuartillas parecen escritas con la intención de desmentir las acusaciones que sobre el carácter de Plano vertían fiscales y periodistas tras los sucesos que tuvieron lugar en Uncastillo en octubre de 1934, y en ellas parece querer compensarse la ausencia de la autoría con recursos para dar verosimilitud a las mismas, con sentencias como «yo conozco a fondo a este Sr.» No cabe duda de que el momento debía de ser especialmente intenso como para tener que pronunciarse con un gesto de ese cariz, por mucho que tuviera carácter particular y pudieran eludirse de ese modo las sospechas y las detenciones sin cuento que por entonces estaban teniendo lugar en el pueblo. Pues bien, sobre su paso por el Hospicio, esta voz que se confiesa tan cercana a Plano es muy clara: «en su pubertad fue sumiso, obediente, disciplinado cual otro haya, y tan es así, que se ha captado las simpatías de los administradores del establecimiento, de sus profesores, de sus compañeros, y las de cuantas personas tenían intervención o función técnica, administrativa o subalterna en aquel centro».

«En él aprendió con rapidez el oficio de carpintero que perfeccionó hasta llegar a ser un buen ebanista; estudió la

⁶⁰ VN, 9-5-1931.

música y pronto formó parte de la Banda Provincial en distinguido plano; y era que con su constancia, asiduidad y amor al trabajo conseguía cuanto proponía o le imponía la disciplina del establecimiento en que estaba acogido [...]

Así como la mayoría de las personas tratan de evitar sacar a la luz su pasado, si éste fue de humilde origen, es en cambio siempre para Plano una íntima satisfacción. Lo demuestra en cuantas oportunidades halla.

No hay persona que hable dos veces con él que no sepa su vida tal y como la contamos, pero contada por él mismo.

El hospicio provincial, tenía para Plano todas sus atenciones y preferencias. Cuando en razón de su cargo de Diputado visitaba el establecimiento, era su más íntima satisfacción decir a sus compañeros de Corporación: «Aquí me eduqué», «En este local trabajaba», «Esta máquina se ha movido a mi mando», «En esta habitación dormía», «Aquél era el lugar de mi cama», «Allá era el sitio que se me asignaba en la mesa»... A la imprenta, a los talleres, a los dormitorios, las naves, pasillos y jardines, dedicaba una frase que era un recuerdo.

El personal del Establecimiento (monjas, sacerdotes y empleados en general) lo recordaban con cariño; unos por ya desempeñar el cargo cuando estaba Plano en calidad de acogido, los más modernos, por oír hablar a sus compañeros de aquel modelo de "HOSPICIANO".

Rara era la vez que en sus viajes a Zaragoza dejaba de visitar aquel Establecimiento que lo educó y casi crió.⁶¹

Es difícil saber detalles más concretos sobre la etapa juvenil de Plano, etapa en la que probablemente hubo de iniciarse su interés por la política. Antonio abandonó el Hospicio el mismo día que contaba dieciocho años, el 26 de mayo de 1914. La Zaragoza de aquellos años, los de la Primera Guerra Mundial, vivía un intenso debate público entre germanófilos y aliadófilos. Muy *grosso modo*, los sectores sociales de la derecha como el clero, los carlistas, la casta militar, la aristocracia y sectores conservadores en general se identificaban

⁶¹ Notas manuscritas anónimas cedidas por Antonio Plano Cortés, hijo de Antonio Plano Aznárez.

con Alemania y el principio de autoridad del káiser, con el militarismo, la religión y la disciplina. Por el contrario, ser aliadófilo significaba ser de izquierdas, algo que englobaba a radicales, republicanos, liberales, independientes, intelectuales y escritores. Y se era, fundamentalmente, por simpatía hacia la república francesa y hacia el aura liberal que rodeaba su ideal político. La movilización en Aragón en torno a esta cuestión aprovechó, desde ambas posiciones, las posibilidades de los medios de comunicación de masas y las nuevas formas de adhesión política. Los germanófilos lanzaron manifestos de adhesión, como el suscrito en 1916 por un grupo de notables de Zaragoza titulado «Amistad Hispanoalemana», y estuvieron representados sobre todo por el diario católico *El Noticiero*. Tanto *Heraldo de Aragón* como, sobre todo, el republicano *El Ideal de Aragón*, defendían las posturas aliadófilas, llegándose a formar una «Liga antigermanófila» que agrupaba a partidos de la izquierda y liberales independientes, organizándose frecuentes mítines y campañas de movilización social en las que la prensa y la calle eran las protagonistas. Por aquellas fechas y ambiente hubo Antonio de forjar definitivamente su identidad política republicana y socialista, leyendo los artículos de María Domínguez, Manuel Marraco o Venancio Sarría en las páginas de la prensa republicana, donde también tenían cabida las noticias sobre el obrerismo local y comarcal, que mantendría un pulso de activismo huelguístico a partir de entonces sin parangón en la historia regional. El joven hombre que salía del Hospicio volvía a su lugar de nacimiento con ideas en la mente, y una sensibilidad muy particular hacia los males que aquejaban a gran cantidad de los trabajadores del país. Por de pronto quería trabajar, el mejor modo que conocía de realizarse como persona y de ser reconocido como adulto capaz de levantar su propia casa.

Semillero de cambios. El Republicanismo en Uncastillo

Es evidente que, pese a la muerte de su padre, el vínculo con el pueblo seguía vivo, probablemente mantenido a través de periódicas visitas familiares al Hospicio durante

años. Volvía ahora, con veinte veranos, a la casa familiar, la que habitaban sus hermanas y la única madre que recordaba. Sea como fuere, el Uncastillo con el que ahora se encontraba Antonio respiraba un tímido aire de cambio gestado de manera soterrada y a veces más elocuente desde mucho tiempo atrás. Poco a poco la semilla de la política había ido germinando y, sin dar frutos espectaculares, había conseguido crear entre el vecindario una sensación de protagonismo y fortaleza ante los manejos caciquiles de siempre. La llegada de Antonio supuso un auténtico catalizador de cosas que ya estaban ocurriendo en Uncastillo, cosas que necesitaban del impulso dinamizador y del aire «urbano» que portaba aquel joven cargado de ilusión por trabajar y hacerse un hueco en la sociedad campesina uncastillera.

Fue con el cambio de siglo cuando el republicanismo había puesto en alerta al aparato político de la Restauración. En las elecciones de 1903 obtuvieron muy buenos resultados en diversas circunscripciones, logrando Costa el acta por Zaragoza, y en 1905 llegaría la de Dionisio Casañal por Ejea-Sos. El 10 de noviembre de 1903 abría el diario republicano *El Progreso* con «Aragón republicano», donde se daba cuenta de las alcaldías y concejalías republicanas tras las elecciones municipales. Hubo sonadas victorias en Calatayud, Alhama, Tarazona, Borja, Alagón, Maella, Barbastro, Graus, Tardienta, Valderrobres, Aguaviva... comentándose de Cinco Villas cómo en Sos, Sádaba, Biota, Castiliscar, Sigüés y otros municipios «colocan la bandera republicana sobre la monárquica».⁶²

La agitación anticlerical y antigubernamental vivida en diferentes ciudades, en la que la insurrección callejera parecía convertirse en el arma más característica de movilización y adscripción identitaria, llevaron a los sucesivos gobiernos a suspender una y otra vez las garantías constitucionales y a someter el poder político al militar. Se estaba conformando una cultura política que cifraba la identificación colectiva propia en la diferencia respecto del contrario y en el comba-

⁶² EP, 10-11-1903.

te con él. Algún historiador ha dicho que se trataba de una cultura política, en las formas, de «provocación y reto». La calle era el espacio real y simbólico de ese combate, donde no sólo se sacaban a relucir los puños y las pistolas, sino también donde había que instalar los símbolos propios y deterrar los contrarios. Republicanos y anticlericales montaron increíbles algaradas difícilmente controlables una vez desatado el motín, en las que se repetían a lo largo del tiempo los blancos objeto de castigo popular. En Zaragoza, el intento de quema del colegio de los jesuitas en junio de 1899, la fenomenal trifulca ocurrida con motivo del Jubileo de 1901, o las protestas habidas con ocasión de la coronación de la Virgen del Pilar en 1905, son quizás los casos más conocidos de un anticlericalismo que supuso un auténtico banderín de enganche, un espacio en el que agrupar sectores descontentos de las clases populares y obreras urbanas para incorporarlas a la amalgama del imaginario de la izquierda. Una incorporación que no era exclusiva, sino a través de una militancia «laxa» o amplia, que no excluía que los mismos asistentes a la convocatoria de un mitin anticlerical fuesen trabajadores implicados de modo creciente en las organizaciones y sociedades de defensa del oficio. Allí podían escuchar de las bocas de republicanos y obreristas anarquistas, una misma crítica contra el clero y el estado del sistema político, y también las mismas llamadas al orden por parte de la autoridad hacia ambos.⁶³

Porque en aquellos primeros años del XX el republicanismo era sobre todo anticlerical y antimonárquico, lanzándose sobre ambos estamentos virulentos denuestos y críticas de carácter fuertemente moral, y era además abiertamente nacionalista y patriótico, en un sentido aparentemente opuesto al de los conservadores, pero destilando el mismo jugo esen-

⁶³ Manuel SUÁREZ CORTINA, *La redención del pueblo: la cultura progresista en la España liberal*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, Santander, 2006; *El gorro frigio: liberalismo, democracia y republicanismo en la Restauración*, Sociedad Menéndez Pelayo, Madrid, 2000. VÍCTOR LUCEA AYALA, «Protesta colectiva en Zaragoza en el tránsito del siglo XIX al XX: una tipología», *Studia Historica / Historia Contemporánea*, núm. 19-20 (2001-2002), pp. 129-159.

cialista que aquél. Los curas representaban la hipocresía del vicio escondido, el oscurantismo, la doble moral, el mantenimiento del pueblo en la incultura y el incumplimiento de los mandamientos que propugnaban. La monarquía significaba el favoritismo por sangre, las rancias herencias, la falsa adulación cortesana, la idiotez como producto de las bodas de Estado, y el dominio arbitrario sobre los súbditos. El mensaje de denuncia que portaba el republicanismo y la exageración y amplificación de las injusticias y desmanes cometidos sobre quien se atrevía a levantar la voz, vertidos a través de sórdidos relatos y vociferantes artículos en los periódicos, consiguieron despertar atenciones y concitar simpatías en aumento. Son éstos los años de las tumultuosas representaciones de *Electra* de Galdós, de las sociedades de librepen-sadores, de los banquetes cada 11 de febrero en conmemoración de la Primera República, y de las escuelas laicas para los hijos de los militantes de «el ideal». También son los años de las giras por parte de candidatos y republicanos insignes por los pueblos, llegando en trenes engalanados arengando en mítines, estrechando manos, e inaugurando centros, buscando adhesiones y votos. La primera noticia que hemos hallado sobre el republicanismo en la comarca tiene que ver con la organización de un mitin federal en Zaragoza, adonde acuden representantes de diversas localidades (Huesca, Tarazona, Fitero, Belchite, Boltaña, Ansó, Escagüés, Robres...), existiendo también delegados de Sos, Sádaba y Uncastillo. También aparecen los republicanos de Uncastillo adheridos, junto a muchas otras poblaciones, al mitin organizado por Unión Republicana en Zaragoza, y en el que habló Gumer-sindo de Azcárate.⁶⁴

En el transcurso de aquellos años se da cuenta en Uncastillo de una organización estable y de la instauración de un Centro republicano. La actividad de los afiliados y simpatizantes y la tarea de propaganda parecían obtener buenos resultados. A finales de 1903 aparecen diversos artículos en

⁶⁴ ECZ, 10-3-1901. EP, 14-5-1905.

la prensa republicana con ocasión de la campaña electoral y en tono de denuncia, sobre el mal estado de las carreteras comarcales y contra la articulación de medidas de coacción electoral relacionadas con el caciquismo castellanista, cosas que solían aparecer juntas en las denuncias de falsedad y compra de voto. En noviembre se llamaba la atención del ministro de Obras Públicas sobre «el más lamentable abandono en cuanto a vías de comunicación se refiere» en las Cinco Villas, pero la disputa sobre la reclamación política de un problema tan acuciante estaba a la orden del día.⁶⁵ «Los agentes de la candidatura castellanista –apunta *El Progreso*– apeplan al gastado recurso de propagar que el Sr. Lacosta (Ricardo), hijo del país, logrará ahora que se construyan las muchas carreteras del distrito cuyos proyectos están abandonados». Y continúa el redactor diciendo que «como siendo hijo del país todos tienen en cuenta que ha sido el principal agente para fabricar diputados cuneros, sin que se viera ningún real interés por la construcción de esas tan necesarias carreteras, nadie da valor a esas promesas electorales con las que se pretende cazar incautos».⁶⁶

En poco tiempo los republicanos de Uncastillo adquirirán una buena experiencia en el terreno de la participación política y la organización colectiva y social de militantes y simpatizantes. En enero de 1904 varios vecinos de Uncastillo firman en la prensa regional un comunicado de condena por la cuestión Nozaleda,⁶⁷ después llegaría el entusiasmo por los resulta-

⁶⁵ *EP*, 18-11-1903.

⁶⁶ *EP*, 26-12-1903. Denuncias de «trapacerías y malas artes electorales» y «pucherazos» por parte de los castellanistas del distrito, en *EP*, 26-11-1903 y 26-12-1903. En 1906 Dionisio Casañal volvería sobre la cuestión de las carreteras como nudo gordiano de su gestión política y como *leit motiv* de la denuncia del abandono ejercido por el gobierno liberal, *EP*, 6-3-1906.

⁶⁷ La conocida como «cuestión Nozaleda» hace referencia a los vivos debates que siguieron al ofrecimiento de una sede arzobispal al padre Nozaleda, arzobispo de Manila en el momento de la pérdida de soberanía española sobre las Filipinas. La propuesta desató una gran polémica en la prensa y constituyó un motivo de movilización republicana y anticlerical, ya que se acusaba a Nozaleda de un comportamiento poco patriota y de acciones poco claras con el patrimonio eclesial en las islas. Centros y órganos republicanos de todo el país escribían

dos electorales triunfantes a favor de la candidatura republicana de Juan Pedro Barcelona,⁶⁸ y el traslado del Centro republicano a un nuevo local «cuyas condiciones correspondan al constante aumento que en sus filas logran». Para su inauguración proyectaron un mitin al que acudirían delegaciones invitadas de «correligionarios de Sádaba, Castiliscar, Biota, Layana, Malpica, Luesia, Orés, El Frago, Biel, Fuencalderas, Undués, Pintano, Lobera, Ruesta, Urriés, Tiermas, Sigüés, Salvatierra y otros municipios».⁶⁹ Días más tarde se aprovecharía la inercia favorable celebrando festivamente el aniversario de la I República en el mítico 11 de febrero. Unos cincuenta paisanos, bajo la presidencia de Ramón Escagüés, se reunieron para comer en el viejo castillo que domina el pueblo, lanzándose brindis y recitándose versos compuestos ad hoc. Por la tarde hubo rondalla, comandada por los concejales recién elegidos Frutos Tirapo y Gaspar Arbuniés, «con lo que la fiesta terminó en orden tan perfecto como había existido en toda ella».⁷⁰

Es cierto que este centro de Uncastillo no adquirirá en los años posteriores la relevancia de otros como Ayerbe, Zuera, Alagón o Épila, surtidores continuos de noticias y reuniones para la prensa republicana zaragozana como *El Progreso* o *El Clamor Zaragozano*, pero no es menos cierto que las condi-

manifestando su disgusto ante el anuncio de Maura. La nota de Uncastillo aparecía firmada por Mariano Casaus, Frutos Tirapo, Francisco Malón, Narciso Palacio, Modesto Agón, Juan Francisco Ribed, Nemesio Maisterra, Constantino Solano, Manuel Claveras, Faustino Arregui, Pablo Idoipe Vicastillo, Manuel Escagüés, Mateo Ezquerro, Bartolomé Guinda, Julián Beguería. Y al final de la nota, «se adhiere a la protesta contra los hipócritas Ana María Aísa», *EP*, 19-1-1904.

⁶⁸ La propaganda de Juan Pedro Barcelona en la zona fue intensa (visitó Fuencalderas, Biel, Luesia, Uncastillo, Sádaba, Ejea, Sierra de Luna, Las Pedrosas, Erla, Farasdués y Biota, *EP*, 16-12-1903), derrotando en algunos lugares como en Biota al candidato conservador Ricardo Lacosta (93 a 44 votos). Allí habría de acudir posteriormente a agradecer la confianza al electorado. *EP*, 30-12-1903 y 2-1-1904.

⁶⁹ *EP*, 5-1-1904. Se dice en la misma noticia que en día próximo al del mitin de Uncastillo se habría de celebrar otro en Ejea con la presencia de los mismos oradores de aquél. Parece que Barcelona dio «una notable conferencia de propaganda republicana» durante la campaña electoral previa a estas celebraciones.

⁷⁰ *EP*, 17-2-1904, nota firmada con las siglas «M.C.», probablemente Mariano Casaus.

ciones de la localidad, apartada de las grandes vías de comunicación, hacían difícil el fluido dinámico de la información para que las campañas y los actos de adhesión se produjesen con la frescura necesaria como para producir movilizaciones efectivas.

Hay que imaginar a los republicanos del tiempo tratando de extender el ideario político republicano entre el vecindario convocando a labradores y artesanos en el austero local, quizás tan sólo, como en otros lugares de los que sí hay noticia, adornados con algún retrato del santo laico del tiempo, Pi y Margall, y después Costa. Y sobre todo hay que imaginarlos tratando de incendiar los ánimos campesinos cuando entraban de lleno en un terreno que conocían bien, el de los abusos caciquiles.

Desde luego, algo se movía en el entorno uncastillero, y un nombre parece dar continuidad al inicio de los cambios, el de Frutos Tirapo Olano. Elegido concejal en las elecciones de 1903, lo fue junto a profesionales de taller que parecían salirse del arquetípico modelo de propietario-comerciante que venía copando los cargos, como un zapatero, Gaspar Arbuniés, y un herrero, Antonio Luis. Ya se apuntó que Frutos fue detenido con motivo de los incendios de pajares de propietarios en 1907. Vuelve a aparecer en la escena pública hacia 1915, erigiéndose en portavoz del republicanismo local en *El Ideal de Aragón*. El objetivo de sus escritos estaba más que claro: «Los elementos libres de esta villa se aprestan a dar la batalla definitiva al caciquismo opresor y tiránico que tiene metida en un puño a la clase obrera», anunciaba en las previas de las elecciones de 1915. Y sigue describiendo cómo «en todos los sitios donde se reúnen varias personas no se habla de otra cosa que de las próximas elecciones, y flota en el ambiente la idea de presentar como en años anteriores una candidatura obrera. Y apuntaba también el principal problema, «la escandalosa venta de votos que siempre hacen los caciques, y la poca vergüenza que residen en algunos elementos que se llaman liberales y que se prestan a las infames combinaciones del caciquismo».

Indicó la causa de la ausencia de candidaturas obreras, «el desbarajuste» legado en la administración local por los concejales monárquicos, y espera encontrar prontamente «quien acepte tan hermoso sacrificio, en cuyo caso el triunfo de los obreros y la derrota de los caciques es cosa segura».⁷¹

Los cambios, sin embargo, tardaban en llegar más de lo esperado por «los buenos republicanos, por desgracia muy pocos», según admitía el propio Frutos al año siguiente. En las elecciones a diputados tuvieron que reconducir su convicción democrática hacia «el más afín», el liberal Gascón y Marín, pues «todos los obreros del campo están dispuestos a trabajar por él, por considerarlo capaz de meter en cintura a los tan odiosos caciques». La percepción de injusticia, de abuso y de abandono de los poderes locales hacia los vecinos afectaba no sólo a los préstamos usurarios, los ínfimos jornales o la política de precios de los trigos, sino también a servicios que comienzan a percibirse como fundamentales, como la enseñanza. En marzo de 1916 el pueblo se manifestó en protesta contra el maestro Pedro Gerbán «por la marcha que lleva la escuela de niños». El alcalde Evaristo Jiménez recibió en su despacho a una comisión de los manifestantes y, ante los gritos dados frente al Ayuntamiento pidiendo la destitución del maestro, prometió obrar «con rectitud y justicia». Hubo una contratación posterior de un maestro, la de Pedro Navarro, pero también figuraba como maestro un vecino que años atrás figuraba como comerciante. Y mientras Frutos denunciaba los tejemanejes de los caciques para beneficiarse de la desgracia ajena, se hacía sentir la crisis de subsistencias en Uncastillo. «En este pueblo es tan grande el terror de que invada nuestros hogares la miseria, que muchas familias piensan alejarse de aquí en busca de otros horizontes más risueños».⁷²

Y pese a todo, algo estaba cambiando, como lo atestigua la protesta formal que contra las elecciones de 1911 elevaron

⁷¹ *EIA*, 6-11-1915.

⁷² *EIA*, 29-3-1916.

varios vecinos de Uncastillo ante la Comisión de la Diputación Provincial, entre ellos el propio Frutos Tirapo. El documento no tiene desperdicio. Tras verificarse las elecciones a concejales, hubo sesión extraordinaria de la Sociedad de Labradores aprobándose protestar y exponiendo los motivos: «Uno de los candidatos electos ejerce de juez suplente de esta villa, cargo que es incompatible con el de concejal». Dicen también «que se admitió como elector a un individuo que por ser idiota no pudo identificar su persona», a otro «que implora la caridad pública», y que un candidato «no sabe leer y escribir, y requerirlo así el número de abitantes de esta Villa». Señalan como irregular la celebración de sesiones electorales en la secretaría de la Villa, y «haberse celebrado una sesión en la sala capitular de este Ayuntamiento, en contra de lo que dispone la ley». Y sobre todo, acusan de «haber encargado varios señores de esta localidad (en concreto señalan a José Mola y Pedro Pueyo) a un sirviente cada uno que, casa por casa de arrendatarios y demás relacionados de una manera más o menos directa en los mismos, comisionándolos a votar, lo que entendemos es una coacción penada por la ley». Y firman el presidente Patricio Garralaga (carpintero), el vicepresidente Pedro Pueyo Loren, el vocal Frutos Tirapo, Juan Yarz Casaus, Juan Francisco Rived, Constantino Solano (jornaleros) y Francisco Malón (esquilador), rubricando como secretario Salvador Villacampa (zapatero).⁷³

Contra el pucherazo también hubo papeles en 1914. El concejal Celestino Casanova interponía un recurso de alzada por la elección ilegal de alcalde en sesión municipal. En lugar de resolver el empate realizando nueva votación, se votó en otra sesión resultando elegido un tercero, el propietario Leoncio Aybar. El gobernador resolvió que hubiera nueva votación, en la que salió elegido uno de los dos en liza, Evaristo Jiménez.⁷⁴ El contexto general era desde luego

⁷³ AMU, Leg. 359, exp 001.

⁷⁴ AMU, Leg. 359, exp 002.

favorable para la crítica y la movilización contra los poderes locales tradicionales por parte de las voces descontentas. El discurso republicano se tornaba cada vez más virulento, y los actos de propaganda y adhesión por la provincia eran cada vez más sonados y multitudinarios, como los organizados en Tauste, Belchite o Cariñena a la altura de marzo de 1919. En realidad la crisis de legitimidad que afectaba a la monarquía y al sistema parlamentario había comenzado en 1909, con la Semana Trágica de Barcelona y la furibunda campaña articulada contra Maura por la sangrienta represión que le siguió, y con la fundación de la CNT en 1910, algo que revitalizó el obrerismo organizado de corte anarquista en las zonas industriales del país. Casi sin solución de continuidad llegarían campañas capaces de atraer un mayor número de solidaridades, como la organizada contra la pena de muerte (campaña que alternó momentos álgidos a nivel nacional como el que centró su atención en los reos de Cullera, con otros de tipo local pidiendo en las calles de Zaragoza el indulto para el reo Gregorio Pasamar en 1915), o la que llevaron a cabo las organizaciones obreras en 1915 y 1916 con motivo del aumento del precio de las subsistencias. Campañas en las que los protagonistas principales, partidos republicanos y partidos y sindicales obreras, eran los protagonistas absolutos de la movilización, si bien con algunos matices. La calle era de los obreros, y el republicanismo pocas veces supo montar a caballo de la agudización de la conflictividad social, viéndose desbordados por las huelgas o, en el campo, por formas seculares de protesta como motines antifiscales, atentados contra la propiedad, robos de trigo o secuestros de miembros de familias de propietarios.⁷⁵

Eso sí, el discurso republicano se fue haciendo cada vez más exigente en la demanda de democracia y cada vez más

⁷⁵ Ángel DUARTE, «La esperanza republicana», en Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma (eds), *Cultura y movilización en la España contemporánea*, Alianza, Madrid, 1997, p. 186. Gerald MEAKER, *La izquierda revolucionaria en España (1914-1923)*, Ariel, Barcelona, 1978.

crítico con el parlamentarismo, tachado de farsa incapaz de resolver los verdaderos problemas de la sociedad. Sobre todo a partir de algunos hitos fundamentales en la movilización política y social del país, y en la evolución del aprendizaje de nuevas y más eficaces formas de movilización y enfrentamiento con la autoridad. Se llegaba a la altura de 1920 tras producirse la primera alianza táctica entre el anarquismo y el socialismo para intentar derribar al gobierno a través de una huelga revolucionaria, y se venía de una intensa campaña a favor de la liberación de aquel comité de huelga, mistificado en los medios obreros y republicanos como auténticos mártires de la libertad. El tono contra la monarquía se elevaba, y eso provocaba detenciones de firmas reconocidas como Samblancat o María Domínguez, lo que a su vez era publicitado y aireado para concitar mayor repulsa hacia el sistema jurídico-político de la Restauración. Pero, sobre todo, se invocaba al poder de la calle como el verdadero parlamento del pueblo, el lugar de «las izquierdas» desde el que habría que ahondar «el abismo grande abierto entre el pueblo y la monarquía» a través de una campaña de agitación, «que es el preludio de una revolución».⁷⁶

La «guerra social» estaba en el cenit de su apogeo. En Zaragoza la movilización obrera inculcaba pavor entre el sector patronal a través de huelgas sectoriales y masivas movilizaciones generales (noviembre de 1919, noviembre de 1920, noviembre 1922...). La dinámica habitual solía consistir en el silencio patronal ante las demandas obreras en espera de un debilitamiento y un desistimiento de la protesta, algo arriesgado dado el alto grado de organización y recursos con que contaban a estas alturas. La rapidez y contundencia de sus respuestas mantuvieron durante algún tiempo en jaque a las autoridades y patronos de la capital, hasta que éstos consideraron una reorganización capaz de responder con contundencia a los desafíos obreros. Pero el enfrentamiento afectaba no sólo a obreros y patronos, sino también

⁷⁶ EIA, 3-8-1918.

a las sindicales adscritas a UGT o CNT, en lucha por el monopolio del mercado laboral. Luego, a la altura de 1920, llegó la violencia. La sublevación del Cuartel del Carmen dio el pistoletazo de salida. Hubo juicio sumario y siete condenas de muerte ejecutadas inmediatamente. Después llegarían los asesinatos, los atentados, las coacciones, las huelgas encadenadas, y las olas represivas contra el sindicalismo local y regional, aquel que ya daba muestras de actividad importante en los núcleos rurales más grandes. Las noticias que llegaban sobre la persecución desencadenada en Barcelona, las arbitrarias detenciones sufridas en carne propia y la frecuente suspensión de garantías sociales contribuyeron a crispar el ambiente social zaragozano durante aquellos agitados años.⁷⁷

También lo hizo la dureza patronal, que encontró en la Revolución Rusa un referente que ocupará un lugar central en su imaginario colectivo, un auténtico miedo cervical al contagio de la sedición. Lejos de constituir una mera artimaña para castigar a los obreros díscolos, lo cierto es que en la España del cruce de la primera con la segunda década de siglo XX se instaló un temor real entre patronos y propietarios hacia los obreros. Una reacción en la que tomaba fuerza, al calor de las noticias que llegaban de Moscú, una verdadera cultura del miedo forjada decenios atrás con multitud de imágenes negativas y peyorativas sobre el mundo fabril obrero y sindical, y que se amparaba en el paso de una situación de fácil imposición de los criterios patronales a otra muy distinta decantada a favor de las reivindicaciones sindicales. El incremento de la conflictividad (huelgas, motines de subsistencia, coacciones, violencia...), trajo consigo el envilecimiento de las relaciones laborales, su politización y el escorramiento de los contendientes hacia posiciones radicales y mutuamente excluyentes. Los patronos, azorados en su definición dicotómica de la realidad entre la *revolución* y sus víc-

⁷⁷ Laura VICENTE VILLANUEVA, *Sindicalismo y conflictividad social en Zaragoza (1916-1923)*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1993.

timas, entre luz y oscuridad, entre la diabólica sombra del sindicalismo y el bendito orden social, acudieron a la auto-defensa, cuando no hubo más remedio en forma de sindicatos, y al tiempo y sin ningún tipo de rubor con organizaciones paramilitares (guardias cívicas, círculos de cazadores, casinos militares... y pistoleros del hampa a los que no les faltó trabajo).⁷⁸

El ámbito rural no se resiente tanto de esa conflictividad social, aunque comienza a haber algunos síntomas de cambio y estratificación de clases. De manera desigual y lenta para las necesidades de los habitantes de los pueblos, empiezan a llegar novedades aparejadas al «progreso» como la luz eléctrica, el ferrocarril o las estaciones telegráficas. Eso podía mejorar la vida cotidiana de la gente, pero de hecho servía fundamentalmente para perfeccionar el control de los mercados agrícolas por parte de los propietarios. En la coyuntura de la Gran Guerra se entrevé una creciente distancia entre los beneficios y el bienestar económico de los grandes comerciantes y los de la clase trabajadora, que percibe que la desigualdad es creciente y gravosamente injusta. Los propietarios y patronos se organizan en asociaciones defensivas que consiguen establecer una dura política de intransigencia respecto de las demandas laborales. Al campo también llega esta práctica, así como el control de la mano de obra a través de los sindicatos agrícolas católicos y las asociaciones de labradores conservadoras. Progresivamente y de modo desigual, las tradicionales comunidades agrícolas van dejando paso a una mayor complejidad social en la medida en la que los intereses de los grupos sociales van distanciándose y defendiéndose mediante asociaciones que, al tiempo, proporcionan matices identitarios confrontados. Se era católico, amante del orden social y garantista de la propiedad frente al que era republicano, socialista o anarquista,

⁷⁸ Fernando DEL REY REGUILLO, «El empresario, el sindicalista y el miedo», en R. Cruz y M. Pérez Ledesma, *Cultura y movilización...*, pp. 235-272, y en el mismo volumen, R. CRUZ, «Luzbel vuelve al mundo! Las imágenes de la Rusia soviética y la acción colectiva en España», pp. 273-303.

o de modo genérico frente a quien se alineaba con los intereses de trabajadores y campesinos.

Ya se ha visto que había una Asociación de Labradores con tintes republicanos allá por 1911, que probablemente había surgido en contestación a la institución del Sindicato Agrícola de Uncastillo, nacido en 1910. Son estos los años en los que se crean diferentes espacios de sociabilidad, en los que se pretendía dar cabida a diferentes gustos sociales y modos de entretenimiento al margen de las querencias políticas. Serán un primer paso en la participación colectiva en la vida pública, los lugares en los que se comenten los avatares del pueblo, los del mundo en la medida en que llega la prensa, los lugares donde se irán segregando grupos sociales en función de posiciones sociales y credos ideológicos, y se reafirmen o dirijan las identidades colectivas dispuestas a defenderse. Y en todo caso simbolizan un punto de cambio social en la trayectoria de una localidad o comarca, la necesidad de divertirse al modo «moderno», de intercambiar experiencias y opiniones sobre lo que ocurre, o de formarse con enseñanzas que la generación anterior no pudo disfrutar. Ese fue un proceso no lineal, más si cabe en un ámbito rural donde las relaciones personales mueven en buena medida el conjunto de la vida local, y donde además la acción social católica y las estrategias de los propietarios para ganarse las fidelidades vecinales dificulta la adscripción a una ideología crítica.⁷⁹

El Sindicato Agrícola creó en la villa un «círculo» en 1915 «con el triple objeto de estrechar los lazos de mutuo afecto y sincera amistad que debe reinar entre todos los socios, procurarles solaz y honesto esparcimiento, y atender a su ilustración y cultura». Para ello se prevé dotarse de «los enseres necesarios para los juegos lícitos, creará una biblioteca, dará en sus salones sesiones recreativas y conferencias instructi-

⁷⁹ El Sindicato Agrícola de Uncastillo en Gloria SANZ LAFUENTE, *Las organizaciones de propietarios agrarios en Zaragoza, 1890-1923*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2000, p. 188.

vas, y establecerá cuando sus medios económicos se lo permitan, clases nocturnas de primera enseñanza». El propietario Leoncio Aybar fue el primer presidente del Círculo, siendo vicepresidente Manuel Cortés, interventor Evaristo Giménez y uno de los socios quien habría de ser secretario del Ayuntamiento durante la Dictadura de Primo de Rivera y aún después, Sebastián Sierra. Al año siguiente se crea una «sociedad de recreo-baile», que se habría de llamar «La Unión», con una vocación integradora de esparcimiento y en la que figura como secretario un joven Antonio Plano. Su pronta aparición en la vida pública de Uncastillo tras llegar de Zaragoza da cuenta de su inquietud por los asuntos colectivos y del aval que una completa formación urbana como la suya suponía en aquellos años. La sociedad tenía su local en la calle de Mediavilla 11, y su fin «único y exclusivo» era el de «proporcionar a los socios unas horas de recreo», bajo pago de cinco pesetas de entrada y dos mensuales. Presidía Santiago Torrero y formaban parte de la junta vecinos que más tarde se verían separados por adscripciones políticas contrarias, incluyendo a gente del espectro socialista o afín como Cándido Gracia o el propio Antonio Plano, y a personas del ámbito conservador como Iluminado Pemán. Por el momento la sociedad indicaba en su artículo catorce que «esta sociedad es ajena a toda clase de política, quedando prohibida toda discusión de asuntos políticos y religiosos». Significativo, y mucho, que la política y la religión se declarasen de modo tan elegante como frecuente motivo de conflicto entre los vecinos.⁸⁰

Pero no es menos cierto que hay coyunturas en las que los tiempos históricos aceleran los procesos sociales. El período que se abrió en 1917, con la revolución rusa de telón de

⁸⁰ El «Círculo» del Sindicato Agrícola, en AHPZ, Caja 30075. La sociedad «La Unión» en AHPZ, Caja 30975. Completan la junta el vicepresidente Máximo Olano Pérez (Carpintero), el tesorero Cándido Gracia, el secretario Antonio Plano, los vocales Manuel Praderas Navarro (Jornalero), José Olano Pérez (Carpintero) y Francisco Pemán Tirapo (Labrador), y los suplentes Eusebio Luis, José M^a Arnau y José Caudevilla Malón (Jornalero).

fondo para venerarla o denostarla, fue de intensa movilización y politización, sobre todo en las ciudades. Algo de eso, aunque ni de lejos igual en intensidad, llegaba también al campo, aunque las dinámicas y las preocupaciones eran distintas. A estas alturas el elemento aglutinante de los trabajadores del campo para asociarse respondía más al anticaciquismo y el deseo de ruptura de las inercias locales que a una militancia de partido en el sentido más moderno del término. No obstante es obvio que asuntos como la crítica clerical, desde el momento en que las actitudes de curas y ministrantes eran generalmente más comprensivas hacia los propietarios, se estaba convirtiendo en tema de conversación y celos entre la gente humilde. Todo ese sustrato de descontento y de experiencia asociativa previa es lo que posibilitó la fundación del Partido Socialista de Uncastillo, en la que Antonio tuvo un papel principal.

El joven carpintero y el socialismo en Uncastillo

Cuando Antonio sale del Hospicio es un joven de dieciocho años, edad de pasar por el aro de la quinta. Al volver a Uncastillo junto con su madrastra y sus hermanas sabe que se tiene que someter, junto con otros jóvenes del pueblo, a la ceremonia del tallaje en el salón del Ayuntamiento y al dictamen que determinará si es declarado o no soldado. Poco o nada ha cambiado en los últimos años respecto de la problemática que rodea las quintas y el injusto sistema de redenciones por dinero. Tanto por el carácter poco anónimo de todo lo que ocurre en el pueblo, como porque bien pocos han logrado en los últimos años librarse del Ejército pagando dinero, ronda por las almas en vilo un anhelo, el de tener lo suficiente para poder pagar sin «entrampar» a la familia. Y quizás en alguna de ellas un rencor contra quien inventó la malhadada milicia, parteaguas de vidas, afectos y futuros. Los más beneficiados de su fortuna en ese sorteo habían sido los hermanos López Monguilán, así como el hijo del propietario Pedro Pueyo. Quienes habían pagado siendo campesinos pobres lo habían

hecho gracias a un crédito que se convertiría en una pesada losa para la familia durante años. La realidad llevaba a los mozos a pensar en tácticas alternativas para librarse, desde marcharse como prófugo a acogerse a alguna de las exenciones legales, pasando por forzar una inutilidad autolesionándose o provocándose infecciones. Tal es el temor de los quintos hacia el servicio militar, un rechazo que en el transcurso de una generación ha cambiado de escenario, de Cuba a Marruecos, pero que en esencia continúa sin prácticamente modificaciones. Joaquín Plano se bregó en los años cubanos, y ahora le toca a Antonio hacerlo en territorio marroquí, donde desde 1912 España trata de asentar sus reales coloniales.

Durante estos años los mandos políticos y militares volverán, como con Cuba, a identificar el patriotismo con el ardor bélico, y a los desafectos con quienes protestan o eluden la guerra, hechos cada vez más frecuentes como atestiguan las estadísticas. Arturo Barea recrea con claridad el pensamiento de la mayoría de los quintos que, de la noche a la mañana, son obligados a cambiar la vida del pueblo por el polvoriento campamento, los chinches y las miserias de militares corruptos, y describe el sinsentido que invade a muchos de ellos cuando, muchas veces en el mismo viaje de traslado a la zona de campaña, comienzan a sufrir las penurias del hambre, la suciedad y la falta de preparación y material para soportar las inclemencias del clima:

«Los soldados españoles en Marruecos se hacían la misma pregunta. No podían evitar el intentar entender por qué se encontraban en África y por qué tenían que arriesgar sus vidas. Los habían hecho soldados a los veinte años, porque tenían veinte años; los habían destinado a un regimiento y los habían mandado a África a matar moros [...] ¿Por qué tenemos nosotros que luchar contra los moros? ¿Por qué tenemos que civilizarlos si no quieren ser civilizados? ¿Civilizarlos a ellos, nosotros? ¿Nosotros, los de Castilla, Andalucía, de las montañas de Gerona, que no sabemos leer ni escribir? Tonterías. ¿Quién nos civiliza a nosotros? Nuestros pueblos no tienen escuelas, las casas son de ado-

be, dormimos con la ropa puesta, en un camastro de tres tablas en la cuadra, al lado de las mulas, para estar calientes. Comemos una cebolla y un mendrugo de pan al amanecer y nos vamos a trabajar en los campos de sol a sol. A mediodía comemos un gazpacho, un revuelto de aceite, vinagre, sal, agua y pan. A la noche nos comemos unos garbanzos o unas patatas cocidas con un trozo de bacalao. Reventamos de hambre y de miseria. El amo nos roba y, si nos quejamos, la Guardia Civil nos muele a palos. Si yo no me hubiera presentado en el cuartel de la Guardia Civil cuando me tocó ser soldado, me hubieran dado una paliza. Me hubieran traído a la fuerza y me hubieran tenido aquí tres años más. Y mañana me van a matar. ¿O voy a ser yo el que mate?». ⁸¹

Sólo tres años separan esta escena de la que tiene lugar en 1917 en el salón del Ayuntamiento de Uncastillo, cuando se pretende medir a los quintos sorteados. El día señalado hay gran animación en la puerta del edificio, arremolinándose de buena mañana los mozos, las familias y los curiosos. Como manda la ley, es primer domingo del mes de marzo y «una hora cómoda de la mañana», momento en el que comienzan a despejarse incertidumbres personales y familiares. El día se prevé largo y puede prolongarse «hasta la hora de ponerse el sol», e incluso durante los días siguientes necesarios para medir y anotar todas las alegaciones. Son veintiséis los mozos sorteados en este año en el pueblo, la mayoría de ellos muchachos que como de costumbre cortarán un chopo en el próximo primero de mayo, dejándolo plantado en lugar bien visible hasta el final del mes, cuando se celebre la fiesta de la Virgen de los Bañales. Los concejales forman la Comisión medidora, siendo el encargado de realizarla un sargento del Ejército designado por el Gobernador civil. En el salón los mozos van pasando por riguroso orden. Dejan sus alpargatas a un lado para medirse descalzos como fija el reglamento, para evitar picarescas, y son reconocidos más tarde por el médico titular del Ayuntamiento Sr. Fernán-

⁸¹ Arturo BAREA, *La forja de un rebelde*, Debate, Madrid, 2000 (1ª de 1943), p. 325.

dez Oliva. Después, si no se les declara inútiles o exceptuados por algún impedimento físico, se les invita a que aleguen los motivos de excepción que contempla la ley a los que desean acogerse. El primero de ellos, Antonio Casaus, es declarado «inútil total» por la Comisión, «por física». Tras él desfilan el resto de mozos, hasta que le llega el turno a Antonio, el número diecisiete. Las mediciones le dan algo más de un metro y setenta centímetros de altura, y un perímetro torácico de en torno a ochenta y cinco centímetros. Un «buen mozo» comparado con el resto. Sin embargo es declarado exceptuado temporal por su situación familiar, una situación que se revisa durante los años siguientes hasta que en abril de 1920 es declarado «inútil total» para el servicio militar, y por lo tanto, exceptuado del mismo.⁸²

Y así, mientras otros partían hacia el Marruecos de Larache y Annual, el de los blocaos y las kabilas, el de los «paqueos» con que castigaban a las tropas los lugareños y los bombardeos sobre los míseros pueblos, el de los cuarteles insalubres, los burdeles de los zocos, los militares corruptos y las violentas razzias de unos y otros, Antonio volcó su existencia en el trabajo de la carpintería, en el que fue adquiriendo reconocimiento y destreza. Como dicen aquellas cuartillas de un vecino uncastillero, «trabajó de oficial carpintero, siempre en la mejor disposición y armonía con su único patrono». De los dieciocho a los veinte años trabajó en taller ajeno, algo en lo que sin duda también influyó cierta dosis de fortuna. De los doce carpinteros registrados en el censo de 1917 desaparecieron en el siguiente registro varios de ellos, sobre todo del numeroso grupo de los Olano, probablemente porque la situación de los trabajadores manuales, no sólo de los agricultores, no dejaba de ser tan difícil como la de éstos y sometida a los vaivenes de las cosechas y los mercados, que significaban más o menos efectivo para realizar encargos en la construcción, el mobiliario o las reformas de las casas humildes. Por entonces Uncastillo seguía su cre-

⁸² ADPZ, Libros de quintas, 1917, núm. 541.

cimiento poblacional, habiendo pasado de 2.732 habitantes de hecho en 1900, a 3.467 en 1920. Llegará a su cenit en 1930 (3.708 habitantes), y a partir de ese momento comienza por diversas razones un descenso imparable hasta el día en que estas líneas se escriben.

Trabajó durante esos dos o tres años, pasando por la dureza de la tarea manual y la pobreza del salario percibido. El joven Antonio, que ahora vivía en la Plaza del Mercado, compartía con muchos vecinos preocupaciones y anhelos básicos, experiencia que de seguro hubo de estar trufada de conversaciones en la taberna, de camino al taller, en la casa, de lecturas de prensa, de comentarios más o menos indignados sobre la situación económica y social del municipio. Y de seguro que también de una interpretación sobre la causa de los males del común de los vecinos, sobre quiénes eran las víctimas y quiénes los responsables. Ese sentido colectivo fue amalgamando hasta conformar una identidad común que se percibía agraviada respecto de los «culpables», los caciques y señores locales que se enriquecían a costa de poseer las tierras y mantener bajos los salarios de sus peones. Esa identidad colectiva logró organizarse en torno del socialismo, cuando el hecho obrero estaba consiguiendo en las grandes ciudades cotas de afiliación desconocidas entre las filas de la CNT. La llegada de Antonio Plano al pueblo casi coincidió con el alumbramiento público del socialismo local. No parece que fuera casual. Contaba con una sólida educación y buenas maneras, pero también con una experiencia solidaria en los infortunios del trabajo y una simpatía hacia la problemática de los trabajadores y vecinos humildes, aval para muchos suficiente como para convertirlo en referente en la búsqueda de soluciones. Su identificación con el ideal socialista quedaba patente desde el momento en que, un veintidós de diciembre de 1919, firmó los estatutos de la Agrupación Local Socialista como nuevo y flamante presidente.

Según esas actas, enviadas al Gobernador civil para dar legalidad a la nueva sociedad, «infinidad de vecinos habían

mostrado su deseo de constituir una Agrupación Socialista de Obreros para defender los intereses de los mismos», aprobándose «por aclamación» ese propósito y el reglamento que debía de regirlo, y firmando el acta el propio Antonio Plano, el secretario Rogelio Guinda y un viejo conocido de la movi- lización local como parte de la Junta Directiva, Frutos Tirapo. El reglamento se abre anunciando en su primer artículo que «se constituye una Agrupación Obrera Socialista en Uncastillo con objeto de defender y propagar las ideas socialistas», y en el segundo que «realizará su objeto con la práctica de los derechos consignados en la Constitución del Estado». Se deta- llan a continuación a lo largo de veintidós artículos las con- diciones de ingreso, suspensión o expulsión en la sociedad, el régimen de cuotas (cincuenta céntimos mensuales), las pautas de gobierno interno, las atribuciones de los directivos, normas de registro y diversas eventualidades más. Varios de ellos ponen de manifiesto el deseo de los dirigentes de pro- mover un orden y cierta ética entre los afiliados: «Artículo 4º: Se estima necesaria la observancia de una conducta honrada y la conveniencia de pertenecer a la Sociedad de resistencia de su oficio si la hubiera», indicando además en el artículo siguiente, que para ingresar en la sociedad se ha de contar con el aval de dos socios, y en otro posterior, que «el indivi- duo que proceda de otra agrupación deberá presentar certifi- cación de su conducta en ella y satisfacer los débitos que tuviera pendientes».⁸³

Elecciones municipales de febrero de 1920. Dos conceja- les monárquicos y tres socialistas, Inocencio Gil Laplana, Joaquín Martín Layana y Frutos Tirapo Olano, forman el pri- mer Ayuntamiento de mayoría socialista en la historia local. «Habíamos logrado la mayoría después de una lucha grande», explicará años más tarde en *Vida Nueva* quien probablemen- te fuera nuestro protagonista firmando con el nombre de E. de Plano. La primera parte del programa a desarrollar era bien claro, la tierra para los campesinos mediante la «rotura-

⁸³ AHPZ, Registro de Asociaciones Políticas, 6005/34.

ción y parcelación del monte Secanido», coronando con éxito las gestiones al repartirse doscientas setenta y cuatro parcelas bajo un canon al Ayuntamiento de trece pesetas. El monárquico Antonio Mola tuvo que firmar como alcalde un reparto que facilitaba a las familias humildes del pueblo algún recurso para la subsistencia. Los Acín, Agón, Alcubierre, Añanos, Arregui, Aznárez y Beguería; los Casaus, Cervero, Claveras, Convalía, Charles, Estabén y Ezquerria, los Frago, Fuertes, Garralaga, Izaga, Jarauta, Lafuente, Larcuén, Malón, Maisterra, Navarro, Pérez y Pueyo; los Rived, Subirón, Suñén, Tirapo, Viamonte, Viartola, Zárate o Zarralanga, por citar tan sólo los apellidos más frecuentes, se hicieron con una de las parcelas del reparto. Algunos nombres que serán bien conocidos unos años más tarde ya figuran en este listado formando parte del conjunto de vecinos que se beneficiaron de este cambio tan significativo en las relaciones sociales y en la dinámica política del municipio. Manuel Lasilla Pueyo, Pío Pueyo Prat o el propio Antonio Plano, tríada importante del socialismo durante la República, y otros ya conocidos como Frutos Tirapo, inscribieron sendas parcelas a su nombre.⁸⁴

El éxito político y social del socialismo uncastillero no acababa sino de comenzar. Sin embargo, pronto hubo de toparse con previsibles dificultades dispuestas por propietarios y autoridades, acostumbradas a gestionar los recursos bajo un interés muy determinado, y con un muy escaso nivel de transparencia democrática. El relato de «de Plano» en 1930 es muy concreto respecto de lo ocurrido durante y después de las nuevas elecciones municipales de 1922. Antes de la proclamación de candidatos, «nuestros enemigos» se reunieron para medir sus fuerzas ante «el incremento que tomaba la organización», repartiéndose el censo diciendo «este es mío; este lleva tierras mías y cuento con él». Es más que probable que Antonio Plano firmase este escrito, convertido como estaba ya, en el quicio de la década de los treinta, en la voz

⁸⁴ AMU, Leg 364, exp. 067. VN, 15-6-1930.

más autorizada del pueblo (como se verá, por esas fechas ya ocupa cargos de representación en el municipio y en el PSOE regional). Y también lo es que quisiese desenmascarar a los caciques denunciando que les ofrecieron un «arreglo», negándose ellos a componendas, «pues estábamos dispuestos a probar la voluntad del pueblo salida de las urnas». Las mejores predicciones se hicieron realidad. De los once puestos del Ayuntamiento nueve los conquistó la Agrupación Socialista, disponiendo enseguida lo necesario para acometer la segunda parte del programa, la construcción de las escuelas, y otros edificios como el matadero «que dan buenos ingresos al Ayuntamiento». Al mismo tiempo los socialistas en el poder acometían «la cuestión batallona de los montes comunales propiedad del Ayuntamiento» que fueron en parte vendidos por el Estado a partir del año 1861. «Como los Ayuntamientos de aquellos años eran los dueños de todo, no dieron cuenta al pueblo de las ventas que habían de realizarse, y aprovechándose de la influencia que disponían, fue lo bastante para que los ingenieros encargados de la peritación de la tierra lo hicieran de una manera desproporcionada para quedarse los ricos la tierra por poco precio». Según sus informaciones, «lo que compraron fue el aprovechamiento de pastos por treinta años», cursando contra estos abusos protestas al Gobierno civil. Cuando se aproximaba una resolución favorable para esta reforma de la propiedad comunal, llegó la Dictadura del general Primo de Rivera.⁸⁵

Los socialistas fueron despojados gubernativamente del poder, «renovándose los Ayuntamiento por los enemigos de tales reformas». A finales de 1923 «consiguen deshacernos la organización, resucitando los caciques». Pasaron algunos meses, pero no la intención de continuar con las reformas a favor del «pueblo». Los socialistas de Uncastillo contactaron con los de Zaragoza para intentar una reorganización aprovechando la permisividad de la Dictadura hacia el Partido Socialista y la UGT, algo que no extendió hacia el anarco-

⁸⁵ VN, 15-6-1930.

sindicalismo cenetista, para el que se apagaba la luz de la vida pública y tornaban los tiempos de las catacumbas. Intentaron presentar en 1924 otro Reglamento de Oficios Varios al Gobierno civil, en el que no aparecía de forma expresa la filiación socialista y que rezaba en su primer artículo: «Con el título de Sociedad Obrera de Uncastillo se constituye un organismo para acoplar los esfuerzos de los trabajadores en su mayoría del campo, en el sentido de ir mejorando por los modos legales su actual condición económica, social y cultural». La estrategia era revestir con una pátina de neutralidad corporativa un reglamento muy similar al socialista, una solución de compromiso para continuar con el hecho asociativo hasta la llegada de tiempos mejores. El Gobernador pidió al Ayuntamiento información «con urgencia y reservadamente» sobre qué reglamento convenía aprobar, si el de Oficios Varios o reorganizar la Agrupación Socialista. El informe del alcalde Carlos Marco fue rotundo al aconsejar la prohibición de ambas dos «por tratarse de los mismos elementos perturbadores» con los que «peligraba la tranquilidad del pueblo». Y así lo notificó el gobernador a Isidoro Achón, figura respetada del obrerismo zaragozano y dotado de cierta capacidad de mediación, quien había tratado de conseguir una resolución positiva para los socialistas de Uncastillo.⁸⁶

El testimonio sobre este oscuro tiempo de travesía en el desierto está cargado de autenticidad, no sin ciertas dosis de candidez: «Por más que los caciques apelan a todos los recursos para no dejarnos asociar, no consiguen que estemos desunidos y alquilamos un local, pagando contribución industrial de café público, nos reunimos todos los días comentando nuestras cosas y leyendo *El Socialista* en alta voz». El cuadro se parece mucho a las escenas narradas por Juan Díaz del Moral en su *Historia de las agitaciones campesinas andaluzas*, publicada por estas mismas fechas, respec-

⁸⁶ VN, 15-6-1930. El reglamento, sellado por la Junta del Centro Ferroviario de Zaragoza, en AHPZ, Registro de Asociaciones Políticas.

to del ambiente y apego por la lectura pública.⁸⁷ Durante los meses en los que se intentaba de nuevo legalizar la sociedad volvieron a viajar los informes entre gobernador y alcalde. Para este último la «antigua» Agrupación «más que socialista fue sindicalista, y la que ahora se pretende formar tiene embozadamente el mismo carácter». No obstante las zancadillas, el nuevo reglamento es aprobado en el Gobierno civil en treinta de junio de 1926, «fecha en que nos reunimos unos cuarenta compañeros dispuestos a constituir la Sociedad». Y pese a que todos los permisos figuraban en regla aquel mismo día se presentó el sargento de la Guardia Civil con dos parejas para impedir la constitución formal de la Sociedad. Hubo «serenidad» y, finalmente, cuando el sargento comprobó los permisos, retiró la fuerza. Cuenta que hubo «atropellos» y condiciones para permitir la Sociedad, y que la intervención de Luis Viesca y Bernardo Aladrén facilitó las cosas. «Esto es lo que más les preocupa a nuestros enemigos —dice—, que nos vayamos capacitando e interven-gamos en política, pasando a ocupar cargos que ellos han disfrutado toda la vida». Esa centralidad de la política será lo que explique la presencia, carácter y repercusiones de la conflictividad social durante los años venideros, pero veremos esa parte de la historia un poco más adelante.⁸⁸

⁸⁷ «El anhelo vehemente de aprender invadió a las masas como en 1903. Se leía incesantemente: de noche en los caseríos, de día en la besana; durante los descansos (cigarros) se observaba siempre el mismo espectáculo un obrero leyendo y los demás escuchando con gran atención; luego venían las peroraciones corroborando lo leído y las inacabables alabanzas. [...] Se leía siempre; la curiosidad y el afán de aprender eran insaciables; hasta de camino, cabalgando en caballerías, con las riendas o cabestros abandonados, se veían campesinos leyendo; en las alforjas, con la comida, iba siempre algún folleto. Es incalculable el número de periódicos que se repartían: cada cual quería tener el suyo. Es verdad que el 70 u 80 por ciento no sabía leer; pero el obstáculo no era insuperable. El entusiasta analfabeto compraba su periódico y lo daba a leer a un compañero, a quien hacía marcar el artículo más de su gusto; después rogaba a otro camarada que leyese el artículo marcado, y al cabo de algunas lecturas terminaba por aprenderlo de memoria y recitarlo a los que no lo conocían», Juan DÍAZ DEL MORAL, *Historia de las agitaciones campesinas andaluzas*, Alianza, Madrid, 1969 (1ª de 1923), p. 190.

⁸⁸ VN, 15-6-1930. Las notas del gobernador y el alcalde de 1925 en AHPZ, Registro de Asociaciones Políticas. Juan Díaz del Moral, *Historia de las agitaciones campesinas andaluzas*, Alianza, Madrid, 1995 (1ª de 1923).

Madurez de Antonio y primer amargor republicano

En los años de trabajo como oficial de carpintero había empezado a festejar con Benita Cortés, la hija de Hilario. No dejaron correr mucho el tiempo, casándose el 17 de marzo de 1920. El futuro empezaba a encarrilarse. Antonio trabajaba como oficial de carpintero, y ahora era llegada la ocasión de establecerse por su cuenta. Hicieron la casa junto a la carretera de Luesia, y allí comenzarían a poder criar la prole venidera. Los primeros hijos llegaron pronto y con celeridad (María nació en 1921, Antonio en 1922, Jesús en 1923), y más tarde llegarían sus hermanos hasta formar la numerosa familia de siete hermanos (Carmen llegó en 1927, Ángeles en 1929, Benita en 1931 y Asunción en 1935), llenando la gran casa de nuevos juegos y algarabía. En el piso bajo Antonio había instalado un taller de madera y un almacén de muebles donde guardaba las existencias con las que comerciaba, y al otro lado del piso bajo daría cabida al local de la UGT del pueblo. La planta de arriba era para la vida familiar.

Pero pese a los cambios profundos que atañían a la familia Plano-Cortés, a la altura de mediados de los años veinte algunos problemas continuaban ocupando a la mayor parte del vecindario, a los campesinos y trabajadores. Problemas cuya solución se identificaba en buena medida con el acceso al poder local para cambiar la dinámica de las relaciones sociales, materializadas en asuntos como los repartos fiscales, las normas de contratación laboral o el tipo y los límites de los aprovechamientos comunales. Un nutrido grupo de propietarios con intereses divergentes, la oligarquía agraria, había conseguido mantener el control sobre los asuntos municipales pese a la temporal intervención socialista en el Ayuntamiento y la gestión de reformas importantes. La Dictadura de Primo de Rivera se alimentaba del apoyo de los grupos privilegiados del agro interior y la industria de la periferia del país, e igualmente se beneficiaba de la adhesión de la Iglesia católica, a la que otorgó amplias facultades en

materia educativa. En el plano social el *Somatén* se erigió como una organización paramilitar centrada en el mantenimiento del orden público, formalmente apolítica, pero de hecho constituida por adeptos del Directorio militantes de la *Unión Patriótica*, el partido oficial del régimen, cuyo lema era el de «Religión, Patria, Monarquía». En muchos pueblos se organizaron secciones locales del Somatén con parafernalia pública de misas multitudinarias, desfiles y bendiciones de banderas que la autoridad entregaba a los somatenistas. Así, hay noticia de que en mayo de 1924 el delegado gubernativo notificaba al Ministerio de Gobernación la celebración de la bendición y entrega del banderín al Somatén de Sos, con una misa de campaña a la que asistió el Comandante general de Somatenes, descubriéndose placas en la calle dedicadas al Ejército español, y con presencia y regocijo de somatenistas de todo el partido judicial.⁸⁹

Los gobernadores civiles recibían instrucciones precisas recomendando «especial cuidado en descubrir, evitar y castigar todo acto encaminado a dificultar el reclutamiento del Somatén o a ejercer coacción sobre los que se propongan afiliarse al mismo o pertenezcan ya a él». La calle era del Somatén. Los combates de años atrás por la apropiación obrera y republicana de espacios simbólicos significativos quedaron relegados al olvido. Era la consecuencia lógica de la persecución del anarcosindicalismo, y una de las tarifas que el pragmatismo del Partido Socialista y la UGT debían de pagar por colaborar con el régimen. Los primeros de mayo eran vigilados de cerca por la autoridad gubernativa: «No se autorizará manifestación alguna en la vía pública, permitiéndose únicamente los mítines, reuniones o conferencias en los domicilios propios de las Sociedades obreras, pero de ningún modo en centros, cines ni otros locales públicos», autorizándose a pequeñas comisiones hacer entrega de conclusiones o peticiones. Y se conminaba a garantizar «la libertad del trabajo [...], no pudiendo por lo tanto imponerse a nadie el

⁸⁹ AHN, Gobernación, Serie A, leg. 59, exp. 10.

paro forzoso».⁹⁰ Esa avenencia y la aceptación del recorte de derechos civiles y libertades políticas, se fundamentaba en la convicción de que sólo una cooperación con las instancias estatales podía salvaguardar las conquistas del movimiento obrero. Largo Caballero llegó a ocupar incluso un puesto en el Consejo de Estado pese a la oposición minoritaria de Prieto y Fernando de los Ríos. Pero el apoyo socialista comenzó a diluirse cuando la Dictadura, merced a su concepción corporativa de la vida laboral, favoreció la creación de los *Comités Paritarios* como herramienta de neutralización de la actividad sindical, algo que terminó por denigrar a los sindicatos como instituciones con la única función de negociar los salarios. En 1929 el Partido Socialista se distanciaba formalmente de la Dictadura, aunque no sería hasta octubre de 1930 en que formalmente se adhirió a la campaña de protesta contra la Monarquía.⁹¹

Sin embargo, el oficial beneplácito hacia los socialistas no despejaba de dificultades el camino en la política local. Prueba de ello es que de las instancias estatales emanaban de cuando en cuando disposiciones correctoras para que por parte de gobernadores y alcaldes «no se creen dificultades a las corporaciones o asociaciones de carácter socialista, teniendo en cuenta que la política del Directorio no ha sido en ningún modo la de perseguirlas o impedir su funcionamiento y el ejercicio de sus derechos», y que además no aprobaría que se crease «un ambiente de descontento en las fuerzas socialistas». El caso de Uncastillo, ya mencionado, es un claro ejemplo de cómo los intereses de la oligarquía se anteponían a otras consideraciones legales. El consistorio era la piedra angular de la situación política por la que atravesaba la villa. Tras aquella mayoría socialista de 1922 los concejales habían venido representando los intereses de los propietarios, siendo de notar que uno de los más importantes, Patricio López Monguilán, fue elegido Diputado Provincial.

⁹⁰ AHN, Gobernación, Serie A, leg. 58, exp. 24; y leg. 50, exp. 6.

⁹¹ Walter BERNECKER, *España entre tradición y modernidad. Política, economía y sociedad (siglos XIX y XX)*, Siglo XXI, Madrid, 1999, pp. 226 y ss.

Eso no impedía una representación socialista más o menos constante en las personas del propio Antonio Plano, Manuel Lasilla o Cándido Gracia, para quienes esta etapa representó sin duda un intenso aprendizaje de la administración municipal, pero casi siempre desde posiciones minoritarias.⁹²

**TABLA 3: CONCEJALES DEL AYUNTAMIENTO DE UNCASTILLO.
1923-1930**

			FECHA POSESIÓN	FECHA CESE
MARCO	PUEYO	Carlos	1-10-1923	26-4-1928
CORTÉS	MAYAYO	José	«	25-2-1930
CASANOVA	LASILLA	Domingo	«	18-8-1928
PÉREZ	SÁNCHEZ	Florencio	«	25-2-1930
GAY	AURÍA	Ramón	«	«
SANGORRÍN	PALACÍN	José	«	26-4-1928
PLANO	AZNÁREZ	Antonio	«	25-1-1927
RIVED	AISA	Juan Francisco	«	«
CERVERO	AISA	Juan	«	«
AIBAR	GIMÉNEZ	Leoncio	«	25-2-1930
LAPETRA	PRADERAS	Antonio	«	17-4-1924
GAMBEA	PUEYO	Anacleto	1-6-1924	25-2-1930
CANALES	VILLELLAS	José	25-1-1927	26-4-1928
LASHERAS	VIARTOLA	Serafín	«	25-2-1930
LÓPEZ	MONGUILÁN	Patricio	«	«
CASANOVA	LASILLA	Ángel	26-2-1930	16-3-1930
AURIA	VERA	Ramón	26-2-1930	
GRACIA	GARCÍA	Cándido	«	
OLANO	VICTORIANO	Gregorio	«	
FANLO	PUEYO	José María	«	
FREJ	GUINDA	Ladislao	«	
LAPIEZA	LAPLAZA	Venancio	«	
LASILLA	PUEYO	Manuel	«	
GRACIA	PEMÁN	Santos	«	
VIVES	RUIZ	Ricardo	«	
MARTÍN	LAYANA	Joaquín	«	

Fuente: AMU, Caja 359, exp. 004.

⁹² AHN, Gobernación, Serie A, leg. 58, exp. 34 (de 24-3-1925).

Así lo cuenta el propio Antonio Plano respecto de la Junta Repartidora. En un artículo de *Vida Nueva* escrito en 1930 vuelve la mirada de nuevo sobre los primeros años de presencia socialista en el Ayuntamiento, extrayendo lecciones de gran valía acerca de la gestión municipal y los vericuetos legales para no rendirse a los manejos caciquiles. El objeto del artículo no es sino aleccionar solidariamente a las sociedades recién nacidas: «los que ya nos podemos considerar casi veteranos por el tiempo que llevamos militando, tenemos la obligación de [...] poner al corriente a estos nuevos compañeros para que en su día puedan llegar al nivel que nos encontramos nosotros y puedan defenderse con más facilidad de los inconvenientes con que tropiezan hoy». Indica en efecto en su escrito que unos artículos del Estatuto municipal permitían la presencia en las Juntas del reparto no sólo de los propietarios, sino también de vocales elegidos entre los vecinos. «Hay muchos pueblos que no se preocupan de esto hasta que les pasan la cédula de notificación con la cuota asignada, y entonces, indignados, serían capaces de cometer cualquier tontería que hiciese echar abajo la labor de organización que tenemos empezada». Narra cómo en 1922, con la mayoría socialista «los caciques, amargados por la derrota que habían sufrido, se ensañaron con la clase trabajadora, que entonces desconocía los trámites necesarios para la constitución de la Junta Repartidora». Los propietarios, «dueños de ella, recargaron con el doble a la clase obrera», regalándoles además «una campaña en contra nuestra diciendo a los incautos que la culpa del aumento había sido del Ayuntamiento socialista, quedando tan satisfechos de la calumnia lanzada». Y con cierta amargura cuenta cómo «los pobres ignorantes se tragaron la píldora, desatándose contra el Ayuntamiento, sin ver que los mayores contribuyentes fueron los responsables del aumento».⁹³

Junto al reparto, los comunales seguían concitando absoluta centralidad, tanto en la gestión de los propietarios como en los anhelos del vecindario. Es cierto que en 1926, además de

⁹³ VN, 22-6-1930.

las fincas repartidas en el monte *La Sierra*, se sacaron más fincas al reparto en la partida de *Baniés*, hasta cincuenta, esta vez por un canon superior, de 20 pts. El aumento demográfico del pueblo, que sobrepasaba los 3.500 habitantes, hacía más imperiosa la tradicional hambre de tierra de las familias campesinas. Sin embargo, eso no garantizaba de ningún modo la independencia de los trabajadores agrícolas. En una sesión municipal de diciembre de 1930, el concejal Cándido Gracia lo exponía con demasiada crudeza para los oídos de los potentados. Propuso pedir un crédito al Estado de medio millón de pesetas «y abrir un crédito que redunde a todos los trabajadores en general, con un módico tanto por ciento sobre las escrituras legalizadas», y «por este medio, con verdadero fin humanitario habremos logrado remediar en parte la penuria del triste invierno que se presenta». Propone asimismo

«que se recurra al Ministerio correspondiente para que nos permita el control de propiedades y así llegarnos a un régimen de justicia, pues sabido es por todos que los latifundistas tienen adheridas a sus propiedades un tanto por ciento muy elevado a lo que en propiedad les pertenece; que una comisión formada por elementos del Ayuntamiento formalice o intervenga los contratos entre colonos y terratenientes y que en dichos contratos existan las cláusulas siguientes: que la renta de la tierra no pueda ser mayor que el interés legal del valor en venta; que no puedan ser desposeídos inminentemente como ahora sucede, siempre que sean puntuales al arriendo avalorado; que se haga la rectificación de los lindes de *La Sierra* por medio de una zanja o margen; que con la autoridad de que estamos revestidos hagamos cumplir lo legislado sobre trabajo, tal como el descanso dominical, la jornada de ocho horas, intervenir para la fijación del jornal mínimo para que puedan comer decorosamente y no permitir el trabajo a los menores de catorce años; que el nuevo grupo escolar que se va a construir, en lugar de dos gradas conste de seis, para poder albergar y camar a todos aquellos que por ley del trabajo tuvieren que estar vagando».⁹⁴

⁹⁴ Los repartos en Baniés, en AMU, Leg. 334, exp. 67. AMU, Actas municipales, 26-12-1930.

Tanto el alcalde Venancio Lapieza como el concejal Vives «mostraron su disconformidad y extrañeza» a lo propuesto y a las manifestaciones de Gracia, creyendo «absurdas» la mayor parte de las proposiciones, aprobándose tan sólo la adquisición de mil almendros para venderlos a mitad de precio a los vecinos, deslindar *La Sierra* y tratar de acelerar administrativamente algunas obras relacionadas con el grupo escolar y el alcantarillado y traída de aguas. Manuel Lasilla volvería a la carga poco tiempo después, logrando elevar de común acuerdo una solicitud al Presidente y al Ministro de Fomento pidiendo la anulación del deslinde de *Picanido* practicado en 1921 (no de las parcelaciones), «por haber sufrido un error tan importante por el que quedaron setecientos y pico de cahíces de terreno sin incorporar a dicho monte, las que son utilizadas por vecinos de Layana y Sádaba», así como instando al Distrito Forestal para posibilitar la entrega al municipio del monte *Lallana*, «que quedó sin vender por falta de licitador y desaparecido igualmente del catálogo correspondiente».⁹⁵

El empobrecimiento de muchos campesinos jornaleros e ínfimos propietarios durante los años veinte requería desde luego medidas de más amplio alcance que los frecuentes repartos de caridad, y los socialistas recordaban en el Ayuntamiento el origen del problema: la desigualdad de condiciones de participación en el mercado agrícola, donde los sistemas oficiales de control favorecían la perpetuación de la hegemonía de los propietarios. En octubre de 1930 la Comisión Especial Triguera, encargada de hacer constar los movimientos y almacenajes de trigo y formada por el alcalde, dos representantes de los sindicatos agrícolas (Sabas Torrero y Ángel Bataller, propietarios), y uno de los trabajadores agrícolas no organizados (Fructuoso Solano), declaraba que la «falta total de declaraciones es debida a que está paralizado completamente el mercado local, por la mala clase del cereal, y por ello no se puede

⁹⁵ AMU, Actas municipales, 15-1-1931.

realizar operación alguna ni local, ni regional, ni nacional». Al mes siguiente se declaraba que «las declaraciones son por bajo la tasa, justificadas por los vendedores». En noviembre se dice que «no extraña a esta Comisión no haya declaraciones hechas por los agricultores, pues le consta que no venden y que sí lo dejan en depósito». Y en diciembre se alega que «en las declaraciones sobre ventas de trigos defectuosos no consta la firma del comprador, detalle que se omite por ser estos vecinos de otras localidades y haberse efectuado los ajustes por medio del telégrafo y teléfono», haciendo constar que «todo el trigo recolectado en este término estará muy cargado de semillas». Sintomático resulta que en los papeles que debía ver el Gobernador la Comisión achacase los posibles problemas agrícolas únicamente a los pequeños agricultores.⁹⁶

Como en el resto de asuntos municipales, en tanto en cuanto las guías de circulación de los trigos estuvieran en manos de los propietarios y mayores comerciantes se daban las condiciones óptimas para la ocultación y el fraude en pos del beneficio patrimonial. Los pequeños agricultores seguían vendiendo sus cantidades a los intermediarios y fabricantes locales, quienes en una coyuntura de precios al alza, y con la tranquilidad que confería el régimen de Primo a la aristocracia agrícola interponiendo aranceles proteccionistas para que se mantuvieran los precios, tan sólo debían ocuparse de garantizar los flujos de tránsito de la mercancía y de mejorar los niveles de productividad, además de mantener la dependencia de la mano de obra local hacia sus jornales. Para los propietarios, el dinero se movía en el campo: la provincia de Zaragoza es aquella en la que mayor es el valor de la producción de grano, con más de 100 millones de pesetas en el ejercicio de 1930. Y en el transcurso de un solo año, de 1929 a 1930, la superficie dedicada al trigo aumentó en la provincia en 15.000 ha. Las expectativas de los poseedores de aumentar el beneficio aumentaron, y tra-

⁹⁶ AMU, Leg. 175, exp. 009.

taron de maximizar el beneficio comprando a bajo precio y manejando el mismo mediante el almacenamiento del stock.⁹⁷

Las estrategias para incrementar el dominio sobre la tierra incluyeron maniobras sobre los aprovechamientos forestales y los elementos comunales. Hay que recordar que Zaragoza fue en 1930 la tercera provincia del país en cantidad de aprovechamientos de leña, y que esa cifra escondía una realidad social y económica compleja que, todavía en el alborar de la República, era objeto de privilegios y disputas. Reseñable es la tensión habida con Layana cuando este pueblo pretendió anexionarse los montes de *Valdebañales*, *Ilor* y parte de *La Certera*, consiguiendo la comisión municipal informes favorables en el último momento para solventar «el perjuicio e injusticia que se hacía a Uncastillo». En otras ocasiones se debe sostener expresamente la legalidad de las operaciones de los aprovechamientos y subastas, algo que indica las suspicacias que podía levantar entre otros vecinos y labradores. En 1929 hubo un incendio en *La Sierra*, circunstancia aprovechada por el Ayuntamiento para proponer un aprovechamiento forestal por valor de 4.950 pts. por seis meses. Los suscriptores de la propuesta, Francisco Buey y Ramón Gay, creyeron necesario incluir en el escrito dirigido al pleno que la medida era «estrictamente legal», y que sería «altamente beneficioso a los intereses del Municipio». Sin embargo, la subasta quedó desierta en los dos intentos de que hay constancia. El aparente desinterés podía esconder una de las múltiples artimañas para acceder con preferencia y en condiciones ventajosas a esos bienes. Segundas y terceras subastas suponían caídas de cotización, algo que facilitaba los remates de ganaderos y propietarios, cuando no ocurría que el desinterés por la escasa rentabilidad hacía inútil la subasta. En otras ocasiones las subastas sólo se

⁹⁷ Anuario de 1930. Datos publicados por el Comité Informativo de Producciones Agrícolas.

celebraban formalmente, es decir, un testaferro del Ayuntamiento las remataba por el precio de tasación y luego el alcalde celebraba nuevas y verdaderas subastas «extra-oficiales» por partidas. Otras veces las subastas quedaban desiertas y después las ejecutaba el Ayuntamiento de forma más o menos abusiva.⁹⁸

Lo cierto es que la Dictadura favoreció sin duda alguna el control de los mayores propietarios sobre las mismas palancas del poder sobre las que se asentó su dominio oligárquico años atrás. Un dominio que se extendía sobre una gran cantidad de facetas de la vida cotidiana del vecindario, y que radicaba en el control de los dispositivos administrativos municipales. Sin embargo también al régimen de Primo debía de llegarle su momento de inestabilidad. Hasta ese momento la elección de los cargos públicos había tenido poco que ver con la democracia, nombrándose gubernativamente los concejales afines. Pero el 28 de enero de 1930 el general presenta su dimisión, abriendo un período de inestabilidad y transición que se prolongará durante los meses siguientes. Ante el imprevisto vacío de poder se trató de retornar políticamente a 1923, olvidando el paréntesis de la Dictadura como si nada hubiera pasado. El 14 de febrero firma el rey Alfonso XIII el Real Decreto que disponía la sustitución de los integrantes de los Ayuntamientos y Diputaciones designados durante la Dictadura y el nombramiento de cargos con un método mixto de elección. Una mitad se elegiría entre los mayores contribuyentes del pueblo, y la otra entre los concejales más votados entre las elecciones celebradas entre 1917 y 1923. El día 15 de febrero es disuelta la Asamblea Nacional. En Uncastillo el alcalde Sebastián López Monguilán y el secretario Sebastián Sierra firman las informaciones y las actas del proceso, en el que son proclamados once concejales, seis como contribuyentes y cinco ex concejales por mayor votación. Eso, claro está, excluía a los propietarios que habían figurado como conceja-

⁹⁸ AMU, Leg. 378, exp. 039. La subasta en AMU, Leg. 334, exp. 083. A. SABIO, *Tierra, comunal...*, ob. cit., pp. 315-317.

les en el último período de la Dictadura, nombres bien conocidos en el entorno local como los hermanos López Monguilán, Leoncio Aybar, José Cortés o quien sería durante algún tiempo de la República juez municipal, Ramón Gay. Al mismo tiempo, volvían a la gestión municipal nombres que ya habían estado en el poder local, como los socialistas elegidos en 1922 Manuel Lasilla o Joaquín Martín Layana. El listado de concejales proclamados está reflejado en la Tabla 4:

TABLA 4: CONCEJALES DE UNCASTILLO. FEBRERO 1930.

Como propietarios
Casanova Lasilla, Ángel Auria Vera, Ramón Gracia García, Cándido Olano Victoriano, Gregorio Fanlo Pueyo, José María Frej Guinda, Ladislao
Como ex concejales
Lapieza Laplaza, Venancio Lasilla Pueyo, Manuel Gracia Pemán, Santos Vives Ruin, Ricardo Martín Layana, Joaquín

Fuente: AMU, Caja 59, exp. 007.

En este contexto de intento de dominación económica, política e ideológica, la asociación pasó a constituirse en eficaz instrumento de adhesión de fidelidades. Frente a la Agrupación Socialista se constituyó en 1922 el «Casino Cinco Villas» cuyo objetivo, decía en su Reglamento, era «la asociación y amigable trato de personas sin distinción de matices políticos, y proporcionarles aquellas distracciones de buena sociedad admitidas por las leyes». En el articulado se hablaba de bailes a celebrar según las épocas, de juegos permitidos... durante los cuales «se guardará la mayor compostura procurando los socios no molestar el bienestar general de los demás socios con voces extraordinarias, disputas acaloradas,

movimientos bruscos, etc.». Pero también, además de los derechos y obligaciones habituales en los socios (voz y voto en las Juntas Generales, posibilidad de formar parte de la Directiva...), el Casino ofrece a sus socios poder solicitar «tarjeta o permiso de transeúnte para los mayores que residan temporalmente, y para los hijos menores de veinte años limitando el plazo de tres meses». Algo que, desde luego, requería contar con cierto poder y que, sobre todo, daba cuenta del modo con que la derecha local podía ganarse a los trabajadores temporales. Desde luego, la aparición en el listado de asociados de nombres relacionados con períodos de poder municipal de la derecha en los años venideros, no parece casual en la aparición de este centro, justamente después de hacerlo la Agrupación socialista y de haber ganado éstos las últimas elecciones municipales.⁹⁹

En 1928 veía la luz una nueva sociedad en Uncastillo destinada a la organización de la caridad. Con un cariz marcadamente religioso, pretendía «la creación, conservación y fomento de escuelas gratuitas para niñas y niños párvulos; de asilo para ancianos; de asistencia a enfermos pobres y de cuantas obras de caridad pueda atender con sus recursos [...] siempre conforme a la doctrina y los cánones de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana». La sociedad era una muestra local de la preeminencia e influencia que la Iglesia adquirió durante la Dictadura, aliada con la propiedad en la defensa del orden contra el socialismo y el anarquismo en sus diversas manifestaciones sociales y culturales. «El augusto nombre de Dios y el honor de España deberán brillar en las obras de esta Asociación, y singularmente en la labor de sus escuelas», rezaba el Reglamento como muestra del maridaje, que ya venía de lejos, entre Patria y Religión. La designación de

⁹⁹ El Casino Independiente en AHPZ, Leg. 30975. Pedro Loriz (Presidente), Luis Casanova Lasilla (Secretario). Listado de socios: Álvaro Guinda, Alejandro Corruchaga, Julián Brau, Simón Pueyo, Jorge Jarauta, José Caudevilla, Gaspar Arbuniés, Venancio Lapieza, Ramón Gay, Pedro Buey, Pedro José Zárate, Mariano Zárate, Cipriano Sánchez, Félix Sánchez, Félix Aisa, Tomás Asín, Florencio Pérez, Diego Acín, Félix Saba, Simón Frago, Domingo Casanova, Emeterio Sánchez, Jorge Alcubierre, Carlos Arnau.

socios Patronos y Protectores dejaba al descubierto la esencia clasista y clientelar de esta sociedad. Los Patronos eran los que aportaban el dinero necesario para poner en funcionamiento la fundación, dirigiéndola en una Junta de Patronos, «la institución encargada del ejercicio del Patronazgo». El cargo era hereditario, «y habiendo varios será preferido el varón a la hembra y el mayor al menor siempre que sean mayores de veintitrés años». Los socios Protectores por su parte contribuían con sus cuotas a las diversas actividades de caridad. Los nombres de la primera Junta no dejan lugar a dudas del carácter conservador de esta asociación: Emilio Bayarte Arbuniés (párroco), Mariano Pérez Arbuniés, Mariano Marco Pueyo, Blas Arbuniés Aznárez, Anacleto Viartola Cortés, y Carlos Marco Pueyo, vinculados la mayor parte directa o familiarmente con la política monárquica como concejales en los años precedentes y con claros intereses en el terreno de la agricultura comercial.¹⁰⁰

La Junta Directiva sería siempre «presidida por el Sr. Cura párroco de Uncastillo o el que a su sazón haga las veces», quedando autorizado para hacer con la autorización de la Junta «toda clase de negocios, operaciones y especulaciones; practicar judicial y extrajudicialmente cuantos actos se requieran, y nombrar mandatarios [...] para la reclamación y cobro de créditos», entre otras facultades legales. Y desde luego este tipo de disposiciones no eran gratuitas, dada la elevada cantidad de dinero que previsiblemente movería el patronato. Se establecían unas bases para la regulación de las diferentes obras de Caridad en la villa, llevadas a cabo por la Congregación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl que ahora se supeditaba a esta sociedad, como las escuelas de párvulos. Esas escuelas se habrían de llamar «de la Caridad», y deberían de estar gobernadas por las hermanas

¹⁰⁰ AHPZ, Leg. 31158. Los Marco Pueyo pertenecían a una familia de propietarios medios de los que Carlos había sido ya concejal en 1909, y el hermano Pedro había ocupado un sillón en 1917. Anacleto Viartola ya había sido concejal monárquico en 1905 y 1917; Mariano Pérez Arbuniés era hermano del comerciante local Ángel Pérez, concejal monárquico conservador en 1910 y 1915.

monjas «según los preceptos de la pedagogía y la higiene y según sus propios sistemas para esta clase de establecimientos». Se pensó en dos escuelas, una de niños de cuatro a siete años y otra de niñas, sin límite hasta los catorce, debiendo admitir esta última a las «niñas pobres, huérfanas, de Uncastillo, y las hijas y sobrinas carnales de los socios Patrones y Protectores». Se proyectaba enseñar «la cultura general y la enseñanza doméstica propia de la mujer, como está mandado, poco más o menos, para las escuelas nacionales de los pueblos de la categoría de Uncastillo». También se establecía control sobre un «Asilo de la Caridad» para ancianos y ancianas pobres, y preveía asistencia de enfermos pobres de la localidad mientras no hubiera hospital en edificio acondicionado para ello.

Si hay algo interesante del detalle de la lectura del Reglamento de esta asociación, es la clarividencia con la que se muestra el sentido caritativo y paternal de la acción social católica hacia la problemática de la pobreza. Por de pronto es obvio que la sola presencia de una asociación de este tipo demuestra que existía un problema social de entidad en Uncastillo, que sin duda estaba relacionado con la realidad sociopolítica del campo en los últimos tiempos, aunque otros la quisieran vincular con el desatino personal, la estulticia original o la tendencia pecaminosa y desviada de quienes debían aprender a capear a la miseria. El estudio de los elementos del orden y de su concepción de la realidad permite formarse una idea completa del tejido de sensibilidades, percepciones, estrategias colectivas y políticas con las que los diferentes grupos sociales pretendían alcanzar sus metas. «Siendo esta Asociación eminentemente cristiana, tendrá por primer Patrón al Señor Dios de la Caridad, celebrando su fiesta el día del Santísimo Nombre de Jesús [...] El espíritu amplio, intenso, de la caridad cristiana deberá impulsar a todos los miembros de esta Asociación a implantar y sostener cuantas obras caritativas y de misericordia, corporales y espirituales, puedan ser útiles a los habitantes de Uncastillo». A estas alturas resulta meridiano que Antonio Plano y otros

vecinos republicanos y socialistas también pretendían ser útiles a los habitantes de Uncastillo, pero no a través de la caridad, sino de una reestructuración de las relaciones sociales y un equilibrio en las relaciones económicas que habría de llegar con un gobierno democrático. No quedaba mucho para ese momento.

La Dictadura caería durante los últimos meses de 1930 en el desprestigio más absoluto, produciéndose un súbito proceso de politización y un auge del republicanismo no ya al estilo de las familias políticas decimonónicas, con sus círculos, sus tertulias, y sus veladas celebrativas, sino convirtiéndose en una amplia coalición de partidos con nuevas élites y bases sociales, y con un muy variado espectro ideológico en el que tenían cabida desde conservadores y católicos como Maura, a firmes anticlericales como Álvaro de Albornoz. Como es sabido, la desconfianza y el recelo de los socialistas para emprender cualquier tipo de acción conjunta con los republicanos demoró su unión al movimiento de oposición, hasta la intervención favorable de Largo Caballero, para quien era preciso ayudar a los republicanos para «influir» desde dentro «en la orientación de la revolución» en ciernes. Los socialistas facilitarían el cambio político echando a sus bases a la calle mediante una huelga general. Por su parte la otra gran sindical, la CNT, salía del ostracismo impuesto por el régimen militar tras aquellos años gloriosos de protagonismo social en el ámbito urbano, los de la crisis final de la Restauración. Ellos no mostraron el menor interés por una República que habría de ser «burguesa», y que habría de quedar muy lejos de una auténtica transformación revolucionaria de la sociedad, capaz de cambiar de raíz los valores políticos y económicos de aquélla. El clima general, pese al desdén de los anarquistas, era de auténtica marejada de desafección hacia la Monarquía y de apoyo a la República, bien en forma de artículos y manifestos publicados por políticos e intelectuales, bien mediante la asistencia masiva de público a mítines y manifestaciones. Finalmente también ellos, los anarquistas, habrían de

navegar en aquella marea alta de la insurrección antimonárquica.¹⁰¹

La historia es bien conocida. Se planeó un levantamiento militar que estaría organizado por un comité revolucionario y apoyado por la masa obrera, donde los anarcosindicalistas comprometieron finalmente, aunque no sin reticencias, su apoyo al plan. Eso fue lo que fracasó en Jaca el 12 de diciembre de 1930. El capitán Fermín Galán había contactado en la ciudad pirenaica con otros militares dispuestos a participar en una insurrección contra la Monarquía, estableciendo relación con sindicalistas de Zaragoza y entrevistándose en Madrid con el comité revolucionario para fijar los términos de la insurrección. Según algunas fuentes el comité había elegido la fecha del 15 de diciembre, pero Galán consideraba apremiante ganarle tiempo al régimen y utilizar a su favor el factor sorpresa. A las cinco de la mañana del 12 de diciembre un grupo de militares sublevaron a la tropa de Jaca, detuvieron al gobernador militar y ocuparon los centros estratégicos (teléfonos, correos y estación de ferrocarril), tras matar en un tiroteo a un sargento de la Guardia Civil y a dos carabineros que les salieron al paso. A las once de la mañana proclamaron la República en el Ayuntamiento, «en nombre del Gobierno Provisional Revolucionario», y poco después se organizaba la marcha de dos columnas de soldados hacia Huesca, para ir sumando poblaciones a la sublevación republicana.¹⁰²

Pero los mandos de la V Región Militar, con sede en Zaragoza, abortaron la insurrección sin mucho trabajo. Hubo un tiroteo en las lomas de Cillas, pero ante la fuerza enviada para sofocar a los rebeldes se produjo desbandada general. Detuvieron a García Hernández y poco después se entregó Galán. El domingo 14 de diciembre, en consejo de guerra sumarísimo, ambos fueron condenados a muerte, y fusilados

¹⁰¹ Julián CASANOVA, *Historia de España. República y Guerra Civil*, Crítica, Barcelona, 2007, pp. 9-11.

¹⁰² J. M^a APÍROZ, «La sublevación de Jaca», *Trébede* núm. 45 (2000), pp. 20-25.

de forma inmediata. A partir de entonces el mito atraparía la figura y la memoria de ambos, convirtiéndose en los primeros mártires de la República, objeto de veneración icónica en círculos republicanos y *leit motiv* de excursiones conmemorativas de grupos de republicanos desde diversos puntos del país hasta sus tumbas en territorio oscense. Quedaban pocos meses para las elecciones municipales y para la llegada alborozada del nuevo régimen político. Éste llegaría entre manifestaciones pidiendo el indulto para los presos políticos y multitudinarios actos de adhesión republicana, y las noticias de los procesos sumarios instruidos contra los últimos militares implicados en lo de Jaca por negligencia en la paralización de la insurrección. Uno de esos presos políticos lo había sido Antonio Plano, junto con otros elementos de la izquierda republicana y socialista de las Cinco Villas, la única zona en la que se había intentado continuar el impulso de los militares sublevados.

Por eso el sabor de la República ahora fracasada sería amargo para Antonio y para todos los vecinos que fueron encarcelados. Como es sabido, para apoyar la insurrección la CNT y la UGT habían convocado una huelga que logró algún seguimiento en las capitales zaragozana y oscense, y en lugares como Gallur y otras localidades de las Cinco Villas tuvo cierta repercusión. En esa localidad un grupo numeroso cortó las comunicaciones telegráficas, y «se pasearon por la estación armados con pistolas y escopetas», recorriendo los cafés y lugares públicos de la localidad, parapetándose luego en los alrededores del puente de entrada, «sin duda decididos a repeler cualquier ataque de la fuerza que se suponía había de llegar en tren». Llegaron de madrugada, distribuyéndose en los lugares estratégicos y comenzando algunas horas después las detenciones. Eso provocó la protesta de las mujeres, y después de todo el vecindario que terminó, como en los viejos motines populares, sitiando el Ayuntamiento, donde se estaban realizando los interrogatorios a los detenidos. Se dijo que un guardia había sido herido con un ladrillo, y acto seguido «desde el balcón comenzaron a disparar contra la

calle varios guardias civiles», entablándose tiroteo desde un casino situado frente al Ayuntamiento. Llegados refuerzos y restablecida la calma, los vecinos heridos fueron trasladados a Zaragoza. Después se publicaría un bando de guerra y se clausuraría el centro UGT. Acerca del movimiento el *Heraldo* afirmaba que «no han intervenido los elementos republicanos», que no sabían nada del asunto. Los rumores públicos, en este caso bien dotados de imaginación, decían «que las órdenes para iniciar esta revuelta fueron cursadas a Gallur por un avión que dejó caer un comunicado dirigido a la UGT», hablándose también de «un automóvil misterioso» que habría portado las órdenes oportunas y se habría dirigido luego por las Cinco Villas a extender sus consignas.¹⁰³

Los rumores hablaban de un movimiento sedicioso en la comarca, de banderas antimonárquicas y republicanas izadas en los edificios oficiales, de un comité revolucionario instaurado en Ejea, de fuego en la casa del cura párroco y el Ayuntamiento de Farasdués. Los corresponsales del *Heraldo* minimizan los sucesos y tan sólo dan cuenta de noticias indirectas o parciales de los mismos. «En ninguna de estas localidades ocurrió el menor incidente, y el envío de fuerzas no tuvo más objeto que garantizar posibles alteraciones del orden». Se habla de «tranquilidad absoluta», de «confraternización» entre guardias y vecinos, pero lo cierto es que cuando se decía que todo estaba solucionado, se enviaban desde el Gobierno Civil nuevos refuerzos. *La Voz de Aragón* profundiza en algunos detalles de interés, aunque las fuentes tampoco ofrecen muchas garantías. En Tauste se habrían producido desórdenes «de carácter revolucionario» como los de Gallur. «Según referencias», llegó un coche «un conocido maestro laico que hacía propagandas disolventes», y al ser detenido por la Guardia Civil se amotinaron los obreros, que sitiaron el cuartel hasta la llegada de los refuerzos. También «hubo conatos revolucionarios en Ejea, Sádaba y Uncastillo». Al parecer se trata de «intentonas de carácter republicano,

¹⁰³ HA, 18-12-1930.

habiendo mostrado buen número de vecinos diversas clases de armas, y ostentando muchos el gorro frigio». Con la llegada de los refuerzos de la compañía de Saboya comenzaron «las detenciones, siendo clausurados los Centros Republicano y de la Unión General de Trabajadores». El gobernador civil Juan Díaz Caneja tildaría posteriormente a los «contingentes obreros» de algunos pueblos «declarados en estado de rebeldía» como presos de una «inaudita ceguera». En Gallur, Tauste, Uncastillo y Farasdués «las huelgas obreras han cesado automáticamente y la tranquilidad es absoluta en toda la provincia», salvo en Zaragoza capital, donde se vive una «situación anormal» fruto de una «equivocación lamentable».¹⁰⁴

Muchos fueron detenidos entonces. Sobre todo en Tauste, Gallur y Zaragoza. En Uncastillo el listado que *Vida Nueva* proporciona tan sólo señala las detenciones de los ugetistas Antonio Plano y León Garín. Sin embargo también fueron detenidos simpatizantes o militantes republicanos, como Cándido Gracia en el caso de Uncastillo, algo que en el futuro le habría de jugar una mala pasada. Tras los sucesos de 1934 llegó el tiempo de desmarcarse de los socialistas y de demostrar pedigrí antirrevolucionario. Cándido Gracia será concejal republicano y colaborará en muchas ocasiones con Plano, pero a la altura del 34 las diferencias políticas se habían vuelto más que agrias. Gracia será detenido junto con muchos otros vecinos por aquellos sucesos, algo que considerará un error y que tratará de solventar aludiendo una y otra vez a sus disputas con Plano. Sin embargo, cuando se investigaba la conducta política de Gracia el jefe del puesto comenta que «por lo que se refiere a épocas anteriores supone no existirían antagonismos toda vez que durante la época que estuvo mandado el puesto [Gracia] y Antonio Plano tenían que presentarse semanalmente en el puesto de la Guardia Civil como procesados por el Juzgado de Instrucción de Sos, cuyo proceso debió de terminar al advenimiento de la República», suponiendo que el proceso que se menciona

¹⁰⁴ LVA, 18-12-1930.

«coincidió con la sublevación de Jaca en tiempos de la Monarquía».¹⁰⁵

Volvamos a 1930. A petición del socialista Manuel Lasilla el pleno municipal acordó dirigir un escrito al Capitán General de la Región Militar pidiendo «que se activen cuanto sea posible las diligencias preliminares para depurar las responsabilidades en que hayan podido incurrir con motivo de los sucesos desarrollados en el mes de diciembre el concejal Sr. Gracia Don Cándido y los vecinos D. Antonio Plano Aznárez, D. León Garín Pueyo y D. Francisco Guiral, pues se está seguro que no pueden resultar cargos contra los mismos por no haber cometido desmán ni atropello alguno». La vuelta a sus hogares, dice el acta, daría «la alegría y el pan a sus atribuladas familias».

¹⁰⁵ VN, 14-2-1931. ATTM núm. 3, Sumario núm. 449, folio 1795.



*Juventudes Socialistas de Uncastillo. 25 de mayo de 1935.
En el centro y primera fila Antonio Plano Cortés,
a su izquierda su hermana Libertad, de pocos meses de edad,
junto a su otra hermana María.
(Fotografía gentileza de Antonio Plano Cortés).*

Capítulo 3

LA REPÚBLICA

La fiesta

«Una fiesta enorme...lo primero que se cantaba aquí, que me acuerdo, era el *Himno de Riego*, y después *La Marsellesa*, y salieron con el gorro frigio, me acuerdo. Incluso hicimos una fiesta, que fue en la Iglesia de San Juan, y todos los años se celebraba una fiesta en la Iglesia de San Juan. Mataban unos corderos e íbamos a comer... por el aniversario, pero fueron pocos años porque le dejaron vivir poco... Fue un momento de alegría popular.»¹⁰⁶

La cara de Jesús Pueyo todavía se ilumina cuando rememora aquel 14 de abril de 1931. Siendo por aquel entonces un niño de diez años, hubo de grabar en su memoria nítidas instantáneas de aquella primera gran fiesta republicana, en la que sin saber cómo ni por qué, se topó con aquel regalo de no tener que ir a la escuela. Pronto el transcurso de los acontecimientos dejaría aquella anécdota pequeña. Pero en aquellas horas febriles, y como en tantos otros pueblos en los que se iban conociendo los resultados electorales de las elecciones municipales y las noticias de prensa, los vecinos salieron a la calle a festejar el fin de todos los problemas y las miserias. En muchos lugares se sacaban las banderas republicanas para, mediante pacíficas pero bulliciosas manifestaciones populares, hacerlas ondear en los edificios del poder público. El chaval aplicado y despierto que era Jesús, aun sin comprender la jerga política ni el trasfondo histórico de lo que estaba sucediendo, pudo percibir que aquella no era una fiesta al uso, porque la Iglesia y los curas no tenían nada que ver, y la gente decía en voz alta palabras que nunca antes había escuchado proclamar con tanta holgura: libertad, democracia y República.

¹⁰⁶ Entrevista realizada a Jesús Pueyo en Uncastillo, 16-6-2007.

El sentir festivo discurrió como consecuencia lógica de cómo muchos percibían la República, como la tierra prometida, la superación de las injusticias y el reinado final, después de tanta penuria, después de «hambre de siglos», del bienestar. Se creía que se repartiría la tierra, que habría pan para todos y que ya no habría más humillaciones de señoritos y patronos. Había que salir a la calle para tomarla, para demostrar que el «pueblo» había vencido sobre los tradicionales enemigos de la libertad, sobre oligarcas, sacerdotes, frailes, caciques, especuladores y reyes. Bien pronto los discursos de los jefes republicanos en radio y prensa saludarían al pueblo victorioso, a una comunidad popular convertida en protagonista indiscutible del cambio. Se apelaba a un «pueblo» con memoria, al pueblo forjado desde hacía décadas en las batallas de la soledad y la exclusión política, en la dureza de la marginación social y económica, al pueblo víctima de los «chanchullos» de caciques y patronos, y al pueblo dignamente erguido y sabedor de su superioridad moral frente a la viciosa corrupción de los potentados. Esa identidad de «pueblo» a la que se apela es la misma que se había configurado en otros países europeos durante el siglo XIX, y que ahora, en el nuevo «amanecer republicano», agrupaba a republicanos, revolucionarios y trabajadores de las redes obreras. Algunos elementos pertenecían a todos ellos, como la fe en la instrucción y en el progreso, o una cultura de movilización laboral y plebeya como elemento clave de la propia identidad y confrontada con la indignidad, el fanatismo y la inmoralidad de los «grandes», los enemigos del pueblo.¹⁰⁷

De ahí que esa situación de desigualdad en la que los «pequeños» no podían ejercer su soberanía, produjera finalmente el sufrimiento del pueblo, simbolizado en sus propios mártires. Se multiplicaron en los primeros días del nuevo régimen las visitas de las corporaciones a las tumbas de Galán y García Hernández, pero también a las de Costa y los

¹⁰⁷ CRUZ, *En el nombre del pueblo...*, ob. cit., pp. 29-30.

conocidos como los muertos de la calle del Perro en Zaragoza, dos obreros caídos bajo el fuego de los maüsser durante una huelga en 1911, o la del obrero Aparicio, fallecido en los enfrentamientos de la huelga revolucionaria de 1917. Ese pueblo al que la Historia hacía por fin justicia era portador de cualidades morales que le otorgaban superioridad sobre sus oponentes. Era un pueblo honrado, valiente, digno, trabajador, inteligente, sacrificado, sufriente, solidario... capaz de sentir la injusticia y rebelarse contra ella. Y el mejor modo de hacerlo, según este discurso populista, era a través de la movilización, de la participación activa en los asuntos públicos y la protección de la comunidad de vecinos. Votando o no haciéndolo, según el momento, conmemorando, manifestándose, ocupando la calle con orden, amotinándose con ira justa, llenando aforos en mítines, firmando manifiestos... La movilización, y en esto todas las organizaciones políticas y sociales que se sintieron victoriosas el 12 de abril estaban de acuerdo, traería al pueblo la igualdad, programa político por excelencia de aquella primavera republicana, terminando definitivamente con el gobierno de los «grandes», de los tiranos. El gobierno del pueblo, de los justos, era la democracia, y eso significaba la exclusión de los privilegiados de la política pública. Cuanto más alejados estuvieran de la misma, más democracia habría.¹⁰⁸

Y eso que en el ámbito local las expectativas de victoria no habían sido muy firmes habida cuenta de la actitud y manejos de los gestores del voto en la sombra, los caciques. Antonio Plano lo denunció en *Vida Nueva*, tratando de alertar y aleccionar a trabajadores y convecinos, y de movilizarlos en un sentido progresista. «El día 13 [de marzo], faltando bastantes días para la convocatoria electoral, ya se reunieron unos veinte señores, la plana mayor que aspira a regir los destinos de este pueblo, tan admirablemente como hasta la

¹⁰⁸ JOSÉ ÁLVAREZ JUNCO, *El emperador del Paralelo: Lerroux y la demagogia populista*, Alianza, Madrid, 1990. CHRIS EALHAM, *La lucha por Barcelona: clase, cultura y conflicto. 1898-1937*, Alianza, Madrid, 2005.

fecha, en provecho suyo». Presume Plano que «estarían todos de acuerdo en hacer la acostumbrada presión sobre los que llevan tierras en arriendo, amenazando con despedirlos de ellas y ofrecer lo que no podrán ni querrán cumplir nunca». Explica que «la persecución a la Unión General de Trabajadores es enorme», y que las «calumnias y mentiras» que sobre los miembros de la Directiva se vierten por «algunos de negra historia», que con motivo de los hechos de diciembre de 1930 dicen «que se nos debía de haber fusilado, y a esta hora la organización estaría disuelta y podrían repartirse los puestos del Ayuntamiento». Plano estaba poniendo palabras y dando ámbito público a una percepción colectiva de injusticia y agravio con la que se identificaban muchos campesinos, atados a «arriendos de miseria y de hambre», y elevando sus expectativas al señalar que con la candidatura de la UGT y junto a los republicanos, «todos unidos serán los únicos que defiendan a la clase trabajadora». Ellos habrían de ser quienes, «a la luz del día, dando la cara, trazarán el programa que se proponen realizar en el Ayuntamiento, procurando resolver de la mejor manera el problema de la tierra, única solución para que salgáis de la lamentable situación en que os encontráis y no lleguéis a padecer hambre, rompiendo de una vez las cadenas que os ahogan». Y terminaba su escrito con una arenga directa a la movilización electoral, confiando en que «sacaréis triunfantes a socialistas y republicanos, despreciando a esa pandilla de caciques que, no conformes con enriquecerse a tus expensas, quieren robarte lo poco que te queda libre: la conciencia de pensar libremente».¹⁰⁹

Y se votó, y se ganó. Pero siendo cierto que para muchos la llegada de la República supuso un motivo de celebración, para quienes perdieron fue un verdadero cataclismo que auguraba las más oscuras previsiones. Además de los propietarios, a los que las elecciones habían sorprendido desorganizados y desmovilizados, sin duda fue la Iglesia católica la

¹⁰⁹ VN, 21-3-1931.

institución que con mayor vehemencia objetó contra la República pues, y no le faltaba razón, se percibía a sí misma como objetivo de profundos cambios con motivo de aquel nuevo escenario político. Obispos, sacerdotes y seglares recibieron el nuevo tiempo entre rezos y lamentos, al igual que la mayoría de propietarios y aristócratas. La vieja canalla, la «chusma» inculta, el bruto populacho, los criminales revolucionarios estaban tomando el poder, y eso afectaba de lleno a quienes hasta la fecha se habían preocupado de guiar al país por la senda del orden, el progreso y la decencia. La quema de conventos en Madrid de quince días más tarde les cargó de razón. Pero hasta ese momento ya habían ocurrido bastantes cosas, entre las que destacaron la asunción formal del poder de los nuevos alcaldes.¹¹⁰

El día quince por la tarde se reunía el pleno y los nuevos concejales electos. Allí estaban, presididos por el alcalde Venancio Lapieza, los cesantes Ricardo Vives Nuin, Joaquín Martín Layana, Ladislao Frej, José María Fanlo, Gregorio Olano, Ramón Auria y Santos Gracia. Y también los nuevos concejales Antonio Plano, León Garín Pueyo, Inocencio Fernández Subirón, Enrique Pérez Sardoy, Pío Pueyo Prat, Pedro Marco Abadía y Manuel Cortés Goñi. Los únicos que continuaban del equipo de gobierno anterior eran Manuel Lasilla y Cándido Gracia, sólo que con una diferencia fundamental en la correlación de fuerzas. Ahora republicanos y socialistas eran mayoría. El vecindario, sabedor de la trascendencia de aquella sesión, abarrotaba el salón de plenos. El alcalde Lapieza se despidió manifestando que se marchaba «con la conciencia tranquila» y pidiendo perdón por algún acto «inconsciente» con el que hubiera podido causar perjuicio. El secretario que redactó el acta, da la sensación que más como un gesto de simpatía que como una impresión objetiva, afirma en ella que «el público numerosísimo que llenaba el salón contestó que no había que perdonarle y que

¹¹⁰ Julián CASANOVA, *La Iglesia de Franco*, Temas de Hoy, Madrid, 2001, pp. 25 y ss.

estaba satisfecho de su gestión honradísima». Lo cierto es que fue Don Antonio Plano quien, con la solemnidad propia del momento, recibía las insignias de concejales por haber sido quien más número de votos obtuvo. En la segunda parte de la sesión se procedió a elegir alcalde, siendo votado por nueve de los diez votos posibles (hubo uno en blanco y no votó por retrasarse Francisco Fernández Lasilla). En su discurso dio las gracias «al pueblo, a sus compañeros de filiación, y muy especialmente a los demás compañeros que siendo de filiación completamente opuesta le han honrado con sus votos [...], ofreciéndose a todos por igual y prometiendo cumplir con la ley, aplicándola por igual a todos los ciudadanos». Aquel aplicado muchacho del hospicio y luego carpintero inquieto, el ya padre de familia numerosa y vecino implicado en los anhelos colectivos, pero también el que había pasado por la cárcel, y el que se las había visto con la Guardia civil y los caciques locales, era alcalde de Uncastillo.¹¹¹

«Don» Antonio Plano, como quedaría grabado su nombre en la memoria colectiva, llegaba así a su etapa más importante en el desempeño de la vida pública. En la eclosión republicana la política se hizo cercana al pueblo, en realidad la política, liberada de los «parásitos» de siempre, era el mismo pueblo, que asumía su propio destino colocando con satisfacción a sus representantes en corporaciones y diputaciones. Plano tenía experiencia, juventud al tiempo, e ideas claras sobre los problemas que necesitaban de reformas. Al frente del socialismo y de la UGT locales, imbuido de históricas líneas programáticas del Partido como la importancia de una organización fuerte, la participación en las reuniones regionales le hizo ser en 1930 suplente del delegado de la Federación Regional y alcanzar reconocimiento entre sus correligionarios. Un reconocimiento que se vería coronado poco después de su elección como alcalde, al ser nombrado diputado provincial por el distrito de Ejea-Sos. Los nuevos diputados tomaron

¹¹¹ AMU, Actas municipales, 15-4-1931.

posesión de su cargo el 25 de abril de 1931 en Zaragoza, destilando aquellas primeras actas un inequívoco sentido emprendedor hacia la reforma y ampliación de la Beneficencia, y hacia la mejora del medio rural mediante la construcción de caminos vecinales «no sólo para sacar del aislamiento a muchos pueblos de la provincia, sino para contribuir al fomento agrícola del país, facilitando las comunicaciones y transportes de los productos, además de dar trabajo a numerosos obreros». En aquella sesión Plano «hizo uso de la palabra para saludar en nombre de los socialistas de la Provincia a los demás compañeros de la Corporación, y para ofrecer su entusiasta cooperación en beneficio de los intereses provinciales y generales de España».¹¹²

Muy felices se las prometían los nuevos cargos. Al volver a Uncastillo era felicitado por el resto de concejales por el nuevo cargo, «que procurará cumplir todo lo mejor posible». Algo empaña la felicitación pues se menciona en acta que salió al paso de «dos infundios circulados sobre su nombramiento». No hay noticia de tales difamaciones, pero sí de las primeras tiranteces entre algunos concejales. El socialista Manuel Lasilla increpó al monárquico Cortés para que «declarase si venía a defender los intereses de los diferentes sectores que lo habían elegido, o los intereses municipales». Quizás aquello fuera un síntoma más de una atmósfera que comenzaba a cargarse de tiranteces antes de lo previsto. Pocos días después el gobierno provisional se enfrentaba a una situación inesperada, la quema de conventos en Madrid durante los primeros días de mayo. Se trataba de una manifestación de radical anticlericalismo, adornada de especies sobre monjas envenenadoras de niños, igual que cuando un siglo atrás los rumores habían acusado a los frailes de envenenar las fuentes de Madrid.

¹¹² Aquel Ayuntamiento de ayuntamientos lo formaban los diputados Ernesto Montes (Tarazona-Borja), Luis Zarazaga (Calatayud-Ateca), Antonio Plano (Ejea-Sos), José Pellicer (Caspé-Pina), Luis Orensanz (San Pablo-Cariñena), Joaquín Borao (Pilar-La Almunia), José Artigas (Daroca-Belchite), Manuel Fernández Casas y Simón Carceller Ferrer (Zaragoza). ADPZ, Leg. 260, Actas Comisión Gestora, 25-4-1931 y 16-5-1931.

Arsenio Jimeno recordaba en sus memorias a Antonio Plano como hombre de proverbial mesura y carácter bondadoso. De lo primero hay constancia escrita en las actas municipales en relación a los símbolos políticos propios de los espacios públicos. Lejos de admitir cualquier desquite que pudiera bordear la legalidad del nuevo estado, prefirió la integración y la ecuanimidad en sus primeros pasos como alcalde. Fernández Subirón «rogó a la presidencia fuesen colocados los retratos de los gloriosos capitán Galán y García Hernández y el del apóstol del socialismo Pablo Iglesias» en el salón de plenos del Ayuntamiento, proponiendo el concejal Gracia «que se compren banderas republicanas y se forme la guardia cívica». Plano rechazó esas proposiciones, «ya que no debían incurrir en los mismos vicios que la Dictadura, y que por ahora no había peligro de que se conspirase contra el Régimen, y que las banderas se comprarían cuando se hayan dado las normas a seguir, pues no se sabe qué emblema se debía colocar en las banderas». Ese mismo día se aprobaba en Madrid la Bandera nacional y el Escudo de armas de la II República española, «enseña investida por el sentir del pueblo con la doble representación de una esperanza de libertad y de su triunfo irrevocable», publicándose en Decreto que «el Gobierno provisional acoge la espontánea manifestación de la voluntad popular». Y la canción que se cantó en infinidad de pueblos y ciudades, el *Himno de Riego*, pasó a ser el oficial del nuevo Estado.¹¹³

En aquellas primeras sesiones los nuevos concejales trataron, entre otras medidas, sobre la colocación de bancos para mayor comodidad del público (nuevas formas para una nueva política más democrática), y el renovado interés del vecindario en la vida pública del municipio. La legalidad presupestaría impidió de nuevo al alcalde aprobar la medida, pero acaso tan sólo la intención de la misma es un hecho significativo. Y se comenzó a tratar de asuntos de importan-

¹¹³ AMU, Actas municipales, 27-4-1931. Arsenio JIMENO, *Zaragoza en la tormenta*, 1936, UGT Provincial, Zaragoza, 1987.

cia, como la ampliación del grupo escolar, la extensión del alumbrado eléctrico, el proyecto de traída de aguas y alcantarillado, el arreglo de caminos con los que «poder dar ocupación a varios obreros» y, sobre todo, de un nuevo deslinde del monte *Picanido*. Pronto sin embargo la conflictividad social y política alcanzaría la vida local republicana en forma de enfrentamientos directos, agresiones, manifestaciones, actos de adhesión, huelgas o motines en torno a problemas sobre los que se exigía una resolución acorde con las expectativas generadas. En Uncastillo el más acuciante era el del reparto de tierra para los campesinos.¹¹⁴

Uncastillo en los años treinta: la tierra, siempre la tierra

El censo indica que la villa contaba con 3.700 habitantes en 1930, el máximo de vecinos de toda su historia. A partir de ese momento y por causas diversas iniciará una curva descendente sin capacidad de recuperación. La actividad económica agrícola y pecuaria seguía siendo fundamental en el discurrir de la población, al igual que lo había venido siendo en las últimas décadas. La sociedad tampoco había registrado cambios muy acusados, existiendo una mayoría de campesinos jornaleros sin tierra y pequeños propietarios, y del otro lado unos cuantos terratenientes que cedían parcelas en arriendo. En apariencia, nada nuevo bajo el sol. ¿O sí?

El ciclo agrícola tradicional incluía planes diversos de la gente para allegarse el sustento. El campesino trabajaba su tierra, pero también la del potentado, y cuando tocaba, emigraba temporalmente bajando en cuadrillas y armado de hoz y guadaña, a segar en los campos de Ejea, Tauste y la ribera navarra. El dinero conseguido lo empleaba para adquirir pedazos de tierra en su pueblo, en definitiva para mejorar la explotación agraria de la que había salido, o para comprar herramientas con las que confeccionar bienes artesanos. Porque ocurría que solía dominar con pericia otras activida-

¹¹⁴ AMU, Actas municipales, 27-4-1931.

des, con las que no sólo complementar los ingresos, sino también buscar nuevas oportunidades de trabajo para otros miembros de la familia. Así hay vecinos que, solapando su actividad agrícola, son al mismo tiempo albañiles, carpinteros, tejeros, caleros, canteros, esquiladores..., dejando constancia de ello en los nombres de las casas (en Uncastillo, Alforjero, Alpargatero, Bastero, Botero, Cantarero, Cantaricas, Cañicero, Civil, Cochero, Costurero, Escobero, Esquilador, Ferreré, Herrero, Lanero, Matachín, Molinero, Mortajador, Mulatero, Secretario, Tejero, Vajillero, Verguero, Yecuacero). La mayoría de esta actividad, que también abarcaba un sinfín de trabajos relacionados con el monte (leñar, carbonear, cazar, recoger plantas) estaba orientada al abastecimiento interno o al intercambio, era una pluriactividad perfectamente integrada en la vida de la familia y del municipio, una actividad en la que las mujeres contribuían de un modo diferenciado y muy destacado.¹¹⁵

Sin embargo, entrado el siglo XX las combinaciones profesionales se vuelven más complejas, produciéndose algunos reajustes en ese modo de vida campesino. Alberto Sabio estudió el fenómeno con detenimiento, llegando a la conclusión de que en las Cinco Villas no se dio el paso de esa pluriactividad tradicional, orientada al artesanado, hacia una pluriactividad industrial, dependiente de empresas de mayor tamaño. La mecanización del trabajo agrícola y el empleo de químicos más eficientes dejaban más tiempo libre a los campesinos, pero no había demanda de mano de obra industrial suficiente como para absorber todo ese tiempo libre de los trabajadores. Si antes era el agricultor el que se adaptaba a los cambios económicos o las crisis por medio de otras actividades, ahora parece que se generaliza la obligatoriedad de ingresar en las nuevas profesiones. Poco a poco se asiste a un proceso de especialización en el cultivo de la tierra, de profesionalización en torno a la agricultura, y de abandono de la producción de bienes artesanales para cambiar o auto-

¹¹⁵ INE, Censo de población (1931); AHPZ, Censos electorales, 1931.

abastecerse. Muchos campesinos pasaron a depender casi en exclusiva del trabajo agrícola en sus pequeñas parcelas o vendiendo su fuerza de trabajo en las parcelas mayores, o ambas cosas simultáneamente. El jornalero-pequeño propietario pasó a constituir así una figura muy habitual en el campo cincovillense, que no siempre aparece bien definida en los censos electorales, donde una lectura acrítica de sus datos puede llevar a confusión respecto del significado de «jornalero», «labrador».... La fotografía adquiere contornos más precisos en los censos agrícolas efectuados durante la Segunda República.¹¹⁶

En 1933 había en Uncastillo 120 campesinos sin tierra, la mayoría con una situación familiar valorada como «mala» o «regular» y con cierta especialización en determinada tarea agrícola (segadores, muleros, hortelanos y pastores). El censo agrícola de aquellos años los denominó «obreros agrícolas y obreros ganaderos propiamente dichos, o sea, campesinos que no posean porción alguna de tierra». Había además otro grupo que el censo clasificó como «propietarios [...] que pagan menos de 50 pts. por tierras cultivadas directamente, o que pagan menos de 25 pts. por tierras cedidas en arriendo», es decir los más pequeños de los propietarios. El censo clasificó en este grupo a 86 vecinos, casi todos con caballerías y aperos completos de labranza, dándose el caso de que la mayoría trabajaban además tierras en arriendo de los mayores propietarios o del Ayuntamiento, lo que da cuenta de la insuficiencia de la explotación familiar para la subsistencia. Por último estaba el grupo más numeroso de los 165 vecinos arrendatarios o aparceros que explotaban menos de diez hectáreas de secano, grupo de similares características que el anterior salvo por la mayor exposición si cabe a los cambios en las condiciones de arriendo y a la estacionalidad laboral. Los propietarios de las tierras arrendadas son casi siempre los mismos, nombres que se repiten con asiduidad en los listados oficiales como los herederos de Narcisa Monguilán

¹¹⁶ Alberto SABIO, *Tierra, comunal...*, ob. cit., pp. 237 y ss.

(Sebastián y Patricio López Monguilán), Antonio Mola, Leoncio Aybar, José María Arnedo..., algunos de los cuales residían en el pueblo mientras que otros eran absentistas. El panorama general era el de una elevada concentración de la propiedad de la tierra en muy pocas manos, algo bastante común en los municipios de las Cinco Villas y que determinará no poco de los acontecimientos políticos de los años republicanos.¹¹⁷

Midiendo la riqueza rústica en cahíces de trigo, y teniendo en cuenta que cada cahíz suponía unos 150 kg de grano, las cosechas habituales solían llegar a los 3.300 cahíces, alrededor de medio millón de kilogramos de trigo. Habría que distinguir aquí entre la propiedad de la tierra por la cual los poseedores recibían rentas en pecunio o en especie en función de las diferentes estrategias comerciales y financieras, y la producción de los arrendatarios que administraban mucha cantidad, con sus propias estrategias diferenciadas de comercialización y almacenamiento de grano. La mayor parte de estos últimos combinaban el trabajo sobre fincas arrendadas con otras de propiedad. De los cuarenta y nueve mayores propietarios y arrendatarios sólo dos de ellos, Leoncio Aybar y Baldomero Pueyo, sobrepasaban los cien cahíces de trigo. La mayor parte de los mismos se agrupan en torno a los 30 cahíces, pudiéndose decir que dentro de este grupo existía cierto reparto en el nivel de riqueza (el 82% de estos propietarios producían menos de 7.500 kg, el 14% producían hasta 15.000 kg, y sólo un 4% más de esa cantidad). En la siguiente tabla hemos resumido los datos sobre los principales propietarios de Uncastillo. No obstante, en algunos casos se añadían estrategias de diversificación del patrimonio al existir familias con varios miembros entre dicho listado, que podrían contabilizarse como un único patrimonio familiar.

¹¹⁷ Luis GERMÁN ZUBERO, *Aragón en la II República. Estructura económica y comportamiento político*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1984. Censo campesino de 1933 en AMU, Leg. 175, exp. 018.

TABLA 5: MAYORES PROPIETARIOS DE LA TIERRA EN UNCASTILLO. 1934.

			PROPIETARIO	CAHÍCES TRIGO
<i>Abadía</i>	<i>Alastuey</i>	<i>Mariano</i>	<i>Hdros. Narcisa Monguilán</i>	15
Arbuniés	Victoriano	Martina	J. M ^a Arnedo	46
Arilla	Pueyo	Ángel	Antonio Mola/ Hdros. Pedro Fuertes	32
<i>Arregui</i>	<i>Acín</i>	<i>Milagros</i>	<i>Senén Galván/ Vda. Sebastián Sierra</i>	30
Arregui	Alcubierre	Faustino	Concepción Loperena	32
Arregui	Alcubierre	Rafael	Hdros. Narcisa Monguilán	29
Asín	Lera	Bernardo	Crescencia Soterías/Malpica	53
Aybar	Jiménez	Leoncio		110
Aznárez	Jiménez	Tomás		30
<i>Bataller</i>	<i>Casaus</i>	<i>Ángel</i>	<i>Ant. Navarro/Cresc. Soterías/ J. M^a Arnedo</i>	29
Beguería	Añanos	Alejandro	Crescencia Soterías	36
Buey	Begué	Damián	Juana T. Pemán	26
Buey	Begué	Francisco		48
Buey	Zárate	Babil	Francisco Buey/ Hdros. Narcisa Monguilán	48
Buey	Zárate	Pedro	Francisco Buey/ Hdros. Narcisa Monguilán	45
<i>Canales</i>	<i>Galardón</i>	<i>Manuel</i>	<i>Hdros. Narcisa Monguilán</i>	22
Canales	Villellas	José		45
Corruchaga	Paradís	Santiago	Hdros. Benita Fuertes	61
Cortés	Marcellán	Manuel		14
Frago	Begué	Martín	Hdros. Narcisa Monguilán	27
Frej	Buey	Francisco	Pedro Fuertes	80
Gamboa	Pueyo	Anacleto	Senén Galván	44
<i>Gay</i>	<i>Auria</i>	<i>Manuel</i>	<i>Eladia Reved/María Casaus</i>	34
Guinda	Pueyo	Eugenia	Hdros. Pedro Fuertes/ J. M ^a Arnedo	51
Jiménez	Aznárez	Lorenzo	Isabel Cortés Marcellán	28

TABLA 5: MAYORES PROPIETARIOS DE LA TIERRA EN UNCASTILLO. 1934. (Continuación)

			PROPIETARIO	CAHÍCES TRIGO
Lasheras	Viartola	Serafín	Isabel Cortés Marcellán	50
Lear	Aznárez	Juan	Concepción Loperena/ Felipa Lear	53
Lear	Pueyo	Antonio	Hdros Narcisa Monguilán	27
Malón	Pérez	Higinio	Hdros. Baldomero Pueyo/ Pedro Marco	30
Marco	Pueyo	Pedro	J. M ^a Arnedo	57
Mola	Fuertes	Antonio		70
Moreno	Loire	Jesús	Hdros. Narcisa Monguilán	34
Navarro	Salvo	Juan	Hdros. Narcisa Monguilán	22
<i>Navarro</i>	<i>Sierra</i>	<i>Luis</i>	<i>Antonio Mola Fuertes</i>	33
Pemán	Tirapo	Francisco		40
Pemán	Tirapo	Iluminado	J. M ^a Arnedo	36
Pérez	Frej	Eugenio	Antonio Mola	32
Pérez	Larcuén	Manuel		26
<i>Pueyo</i>	<i>Artiaga</i>	<i>Pedro</i>	<i>J. M^a Arnedo</i>	24
Pueyo	Caudevilla	Francisco	Leoncio Aybar	20
Pueyo	Goyena	Baldomero	J. M ^a Arnedo	108
Pueyo	Navarro	Pedro	Antonio Gallego	39
Pueyo	Soteras	Calixto	Crescencia Soteras	26
Ríos	Acín	Pascual	Valentín Pueyo Cortés	42
<i>Rived</i>	<i>Cortés</i>	<i>Pascual</i>	<i>J. M^a Arnedo</i>	50
Torrero	Pueyo	Sabas	Expectación Torrero/ Santiago Torrero	42
Tirapo	Casanova	Daniel	Policarpo Villellas	35
Torrea	Frago	Francisco	J. M ^a Arnedo	22
Zárate	Jiménez	Joaquín	Hdros. Narcisa Monguilán	44
Zárate	Jiménez	Pedro José	Hdros. Narcisa Monguilán/ Leoncio Aybar	49

Interpretación: (Cursiva) = Sólo gestiona tierras en arriendo; (Normal) = Gestiona tierras en arriendo y en propiedad; (Negrita) = Sólo gestiona tierras en propiedad. Fuente: AMU, Leg. 378, exp. 010.

Además del elevado índice de concentración de la propiedad rústica en la zona, la otra marca de identidad de la misma es el elevado nivel de afiliación obrera en sindicatos de clase al comenzar el régimen republicano. En ese momento, de las veinticuatro sociedades obreras existentes en pueblos de la provincia, la mitad correspondían a las Cinco Villas. Esa afiliación se incrementó de modo notable entre el final de la Dictadura y los primeros meses de la República, sobre todo en el ámbito ugetista. Las cifras de afiliación del sindicato en Aragón pasaron de 3.671 en 1928 a 16.530 afiliados en 1931, y en 1932 la provincia contaría con más de 27.000 afiliados, siendo más de 10.000 los vinculados a la agraria Federación de Trabajadores de la Tierra. En Uncastillo constaban 350 afiliados a la UGT local en 1933. La implantación electoral socialista marchó, al menos en los primeros tiempos de la República, en correlación con la afiliación sindical. Hay que recordar que la presencia del partido socialista en Aragón está muy relacionada con el mapa de las organizaciones del sindicato UGT, si bien eso no quiere decir que las cifras de ingreso en una y otra organización fueran a la par. La ambigüedad entre sindicato y partido perjudicó a este último, ocurriendo que, debido a la politización de los sindicatos, la mayoría de las organizaciones campesinas estimaban que perteneciendo a la UGT estaban participando directamente en la política socialista. Por su parte el sindicalismo cenetista, según las cifras que utiliza Julián Casanova, apenas contaba con algún tipo de notoriedad en la zona al comienzo del régimen republicano. La organización más cercana la formaba un grupo de medio centenar de anarquistas en Ayerbe. Sí que podrán registrarse grupos nuevos y numerosos en 1936 (76 afiliados en Uncastillo, 23 en Luesia), pero por aquel entonces ya habían pasado muchas cosas desde el advenimiento republicano.¹¹⁸

¹¹⁸ Cifras en Luis GERMÁN ZUBERO, *La UGT en Aragón durante la II República. De la adhesión a la decepción*, en Enrique Bernad y Carlos Forcadell (eds.), *Historia de la Unión General de Trabajadores en Aragón. Un siglo de cultura sindical y socialista*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2000, pp. 79-136.

¿Cuáles fueron las razones de la abrumadora presencia socialista en la zona? Desde luego que no se puede apuntar a una única causa, pero la existencia de grupos originarios nacidos en la segunda década del siglo, que fueron sumando tradición y experiencia de movilización pública, es un argumento muy sólido. El símil más utilizado será el de una «semilla» que fructifica en el tiempo de la cosecha, el de la República. Lo utilizaba, por ejemplo, el que sería alcalde de Ejea Juan Sancho, cuando en 1930 percibía el claro incremento de la afiliación socialista y el ambiente favorable a la reivindicación política: «Cinco Villas es campo abonado para nuestros ideales. La semilla socialista, repartida a voleo por nuestros dirigentes en diferentes ocasiones, no ha caído en terreno baldío, sino en campo bien labrado, y como hay constancia, perseverancia y muchas injusticias sociales que derruir, a los que militamos en la UG de T y en el Partido Socialista nos corresponde hacer que esa sagrada semilla fructifique en el mayor grado de desarrollo y rendimiento, único medio de que el paria y el esclavo del agro consigan su emancipación social». La República y el nuevo régimen de libertades supusieron una oportunidad inmejorable para la participación y la reivindicación de medidas de cambio por parte de los campesinos, que se centraron, articuladas a través de las actividades societarias y la movilización política, en el rescate de los comunales enajenados para que volvieran a los Ayuntamientos.¹¹⁹

Además de este tipo de argumentos económicos, existían razones pertenecientes al ámbito de la «mentalidad», un terreno bastante más impreciso que el de «cultura», pero que se adapta mejor a la sociología y el modo de vida agrícola. La «mentalidad» sería el modo de ver y valorar las cosas a través de nociones sentimentales del tipo simpatía/antipatía y prejuicio; o dicho de otro modo, la mentalidad es una actitud

(Viene de la página anterior)

Julián CASANOVA, *Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa. 1936-1938*, Siglo XXI, Madrid, 1985, p. 27. AMU, Leg. 175, exp. 018.

¹¹⁹ VN, 18-5-1930.

espiritual e intelectual que se adopta frente a la realidad en forma de vínculo personal. Un vínculo que une al individuo con un grupo de pertenencia poseedor de una serie de principios, valores y formas de actuar en las que aquél, el individuo, se identifica y se siente «a gusto», aceptado y cómodo. La «mentalidad socialista» abarcaba a la altura de los años treinta una serie de propósitos que iría desde lo más elevado, la consecución del ideal utópico de la sociedad sin clases, pasando por determinadas pautas de comportamiento y nociones morales, hasta una serie de hábitos y costumbres cotidianas más modestos y prosaicos, como leer o escuchar la lectura de *El Socialista*, acudir a los actos del Primero de Mayo, casarse por lo civil, prescindir del bautismo católico o afiliarse a la Casa del Pueblo o al sindicato socialista local. Desde esta perspectiva y teniendo en cuenta que para los socialistas los esfuerzos culturales eran un instrumento al servicio de la concienciación de clase y de la emancipación, la subcultura socialista fue una más de las varias culturas o subculturas políticas de izquierdas, caracterizadas todas ellas por la consecución de una meta inmediata: la educación política de las clases subalternas como medio de conquista del poder. Eso incluía no sólo la adopción de principios estrictamente políticos, sino además una serie de valores, unas normas de conducta, unos símbolos y un código ético entre los militantes que les diferenciaba, así lo pretendían, del resto de los sectores políticos y sociales, también entre la izquierda.¹²⁰

La Agrupación Socialista de Uncastillo cumplía como espacio emblemático en el fortalecimiento de esa identidad socialista. Allí se podía leer el *Vida Nueva* y *El Socialista*, y

¹²⁰ FRANCISCO DE LUIS MARTÍN, «La cultura socialista en España: de los orígenes a la guerra civil», *Ayer*, núm. 54 (2004), pp. 199-247. Manuel PÉREZ LEDESMA, «La cultura socialista en los años veinte», en José Luis García Delgado (ed.), *Los orígenes culturales de la II República*, Siglo XXI, Madrid, 1993, pp. 149-198. Algo muy parecido puede decirse del anarquismo en cuanto a la creación de una «sociabilidad cultural» formativa y de ocio, si bien las huellas del anarquismo son más difusas y fragmentadas en el ámbito rural, ahogado organizativamente por la persecución de la Dictadura.

celebrar reuniones para acordar movilizaciones y unificar criterios. Había además una biblioteca, como todo centro socialista que se preciase, presidida por un gran cuadro de Pablo Iglesias, como recuerda Antonio Plano hijo, quien además rememora cómo bullía la vida en el recinto: en los días de reunión «había llenazo», allí «estaban todos, los Jóvenes... todos... y poníamos... qué se yo, quinientos cafés, sí, mucha gente». Entre cafés y cigarros los campesinos fortalecían sus lazos con el grupo y con la ideología, estableciendo una distinción bien clara entre quién formaba parte de los «nuestros» y quién era el enemigo, «ellos», los caciques que siempre han mandado y pretenden seguir manejando el poder. En aquel primer «nosotros», el «pueblo», cabían no sólo socialistas, sino también republicanos y anarquistas, algo que se ejemplifica en la aparición del republicano «amigo» Cándido Gracia en algún mitin comarcal socialista. Pedro Torralba, anarquista y combatiente de la columna «Roja y Negra», lo ilustra respecto del pueblo de Ayerbe, donde «el más concurrido de los tres cafés era el Centro Obrero Republicano, en el que teníamos nuestra casa todos los demócratas; en este café, en buenas relaciones, convivíamos los republicanos de las diferentes tendencias, los socialistas y simpatizantes, los de la UGT, y los que pertenecíamos a la CNT». Todos compartían anhelos respecto de un marco de libertades y de cambio y justicia social. Sin embargo, pronto llegó la confrontación y el conflicto con los grupos sociales que no compartían ese deseo de transformación.¹²¹

Una conflictividad que se manifestó desde muy diversas líneas de fractura y protagonizada por sectores sociales muy diversos, en los que la violencia actuaría como un potente corrosivo de cualquier tipo de lazo interno. Esa confrontación tuvo su campo preferente de expresión en el ámbito local, el entorno en el que se libró con mayor tenacidad el

¹²¹ Entrevista a Antonio Plano Cortés, Zaragoza, 10-11-2007. Pedro Torralba Coronas, *De Ayerbe a la «Roja y Negra»*. 127 *Brigada Mixta de la 28 División*, Barcelona, 1980, p. 27.

combate por el poder político, tanto real como simbólico, y donde el Estado republicano evidenció con claridad su incapacidad para hacer frente a la dispersión de autoridad que fue causa de su crisis y derrumbe. Motivos de agravio y disputa que se remontaban a épocas muy anteriores se manifestaban ahora con inusitada virulencia en el entorno local, comarcal o regional, en tanto en cuanto la obra reformista del Parlamento generó inusitadas expectativas en grupos e identidades con cuestiones «pendientes» desde una perspectiva casi secular. Hasta entonces las protestas y conflictos no miraban más allá de la parroquia, pero el cambio republicano en los poderes locales favorecerá una nueva dimensión de los conflictos, en los que el combate político y la polarización social actuaron como factores de primer orden en la movilización y redefinición de las identidades. En una perspectiva de conjunto, tres fueron los principales campos de batalla política, social y cultural: las derivaciones políticas del conflicto agrario, el simbolismo de las medidas laicizadoras, y la ineficiente renovación de las fuerzas coactivas tradicionales.¹²²

La conflictividad agraria. 1931-1932

Buena parte de la primera conflictividad producida tras el 14 de abril fue debida a las esperanzas de cambio y mejora que la República había despertado entre los trabajadores del campo, y a la tibieza y las dudas con las que, desde su percepción, el gobierno trataba de abordarlas. Cabe sin embargo afinar un poco más el relato, porque esas expectativas a las que acompañaron cifras inusitadas de afiliación sindical, fueron al tiempo alimentadas por un discurso político que debía dar respuesta a esa demanda de soluciones. Apenas el socialismo había mirado al campo hasta la Segunda

¹²² La importancia de lo local en la conflictividad republicana, en Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, «La dialéctica de las pistolas: la violencia y la fragmentación del poder político durante la Segunda República», en J. Muñoz, J.L. Ledesma y J. Rodrigo, *Culturas y políticas de la violencia. España siglo XX*, Sietemares, Madrid, 2005, p. 101-146, y R. CRUZ, *En el nombre del pueblo...*, ob. cit.

República, pero el inmenso cambio político obligó a los socialistas a perfilar mejor su oferta para la sociedad agrícola, toda vez que su apoyo y colaboración con el régimen traducían el entendimiento de la República como una singularidad irrepetible, como una oportunidad única en la edificación de una utópica sociedad socialista, solidaria e igualitaria. Ese camino comenzaba con la afirmación y extensión de los derechos de las clases trabajadoras de la ciudad y del campo, algo a lo que había que llegar a través de la modificación de las leyes, de tal modo que se fuesen modificando las relaciones laborales y transformando gradualmente el modo de producción capitalista.¹²³

En lo que respecta al campo, el análisis socialista de la realidad estaba plagado de referencias teóricas y tradiciones intelectuales basadas en argumentos decimonónicos como el regeneracionismo o el krausismo, y en identificaciones más bien ideológicas, como la que culpabilizaba del problema de la tierra a la persistencia del latifundismo y la gran propiedad sobre extensas áreas de la agricultura española. Según ese discurso, el origen del pecado estuvo en una desamortización que tan sólo quitó la tierra de manos del clero para otorgarla a una burguesía sin ningún interés en modernizar las explotaciones, y que acabaría condenando a la miseria a una ingente multitud de campesinos empobrecidos y jornaleros sin tierra. La crisis finisecular del XIX y medidas como la privatización del comunal o el recurso al proteccionismo arancelario terminó por reforzar la imagen mitificada y simplista del «atraso» del rural español, algo que dejó una profunda huella entre teóricos y pensadores procedentes del progresismo, el republicanismo o el socialismo del primer tercio del siglo XX. Esa propensión a fijarse en factores estructurales, como el tamaño de la explotación agrícola como factor determinante de desarrollo social, llevó no sólo

¹²³ Santos JULIÁ, «Objetivos políticos de la legislación laboral», en José Luis García Delgado (ed.), *La II República. El Primer Bienio, Siglo XXI*, Madrid, 1987, pp. 27-47; y *Los socialistas en la política española, 1879-1982*, Taurus, Madrid, 1997.

a culpar a los grandes propietarios rústicos de la ausencia de mejoras en productividad, sino también a mirar con desprecio a la pequeña propiedad campesina, considerada como una unidad productiva sin capacidad de modernización agrícola.¹²⁴

Todas estas percepciones continuaban en buena medida presentes en el análisis socialista de la realidad del sector agrícola a principios de los años treinta. Una reducida élite de privilegiados había instaurado su dominio y monopolio sobre los recursos agrícolas excluyendo de los beneficios a la masa de trabajadores pobres, amparada en la protección ofrecida por gobiernos corruptos. Ahora, con la llegada de la República, podía pensarse en la hora del desagravio. Casi todas las opiniones al respecto en el Partido Socialista coincidían en los beneficios de una expropiación a la nobleza y un reparto entre los colectivos organizados sindicalmente de asalariados agrícolas y campesinos pobres, mostrando su preferencia por el cultivo colectivo y las grandes unidades de explotación gestionadas por los sindicatos jornaleros. Las fuertes antipatías que el proyecto generó entre radicales y agraristas, unidas al acercamiento táctico del PSOE con Izquierda Republicana, condujeron a posturas más moderadas. Dejaron de lado el debate entre individualismo o colectivismo, y se acogieron a una posición más pragmática respecto de las tierras expropiadas, consistente en la aceptación de una variada multiplicidad de fórmulas de cultivo en función de costumbres y usos locales.

En consonancia con todo ello, los socialistas pusieron en práctica una estrategia de acuerdo con su programa agrario y la firme esperanza de propiciar entre la población agraria una amplia base de apoyo al recién instaurado régimen republicano. Esa estrategia consistía en la articulación de dos instrumentos básicos para conseguir tanto la mejora de las condiciones de vida del campesinado como la potenciación

¹²⁴ Contra el mito del «atraso» de la agricultura española, Josep PUJOL (et al.), *El pozo..., ob, cit.*

de su capacidad reivindicativa frente a la patronal rural. El primero de ellos fue el apoyo incondicional a la batería de disposiciones legales y decretos de naturaleza avanzada y reformista encaminados a incrementar los salarios medios y ampliar la oferta de trabajo en el campo. El segundo intentó afianzar el compromiso político del campesinado con la izquierda no revolucionaria, con el fin de elevar la representatividad de los colectivos de jornaleros y campesinos pobres en los ayuntamientos y otras instancias de poder de naturaleza local, provincial o nacional. Eso facilitaría el cambio profundo en las estructuras agrarias y las relaciones sociales, porque se pondría en práctica el reparto de la tierra para que los campesinos pobres extrajeran de ella el máximo rendimiento posible. Se establecía que eso daría a la gente del campo autosuficiencia y libertad, y recursos como para garantizar su adhesión voluntaria al régimen republicano recién instaurado, y apoyarían a las nuevas instituciones democráticas republicanas en su inicial andadura.¹²⁵

Paralelamente tuvieron efecto dos procesos significativos. El acceso a los Ayuntamientos de los representantes de los campesinos pobres significó un auténtico vuelco del poder en numerosas comunidades agrícolas. Al mismo tiempo, el Gobierno ponía a su disposición una serie de herramientas legales para administrar el cambio de unas relaciones sociales que hasta la fecha habían controlado los propietarios. El tradicional intercambio clientelar patrono-obrero y el contexto de amparo legal a los abusos de los primeros dieron paso a unas relaciones económicas y jurídicas entre clases controladas en buena medida por los representantes políti-

¹²⁵ FRANCISCO COBO ROMERO, «¡Ciudadanos españoles: ayuda a los campesinos! Los socialistas y la «cuestión agraria» al inicio de la II República», en Manuel Ballarín y José Luis Ledesma, *Avenida de la República. Actas del II Encuentro «Historia y compromiso: sueños y realidades para una república»*, Cortes de Aragón, Zaragoza, 2007, pp. 141-162. Jacques MAURICE, «Reforma Agraria y Revolución Social», en Ángeles Egido León (ed.), *Memoria de la Segunda República. Mito y Realidad*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2006, pp. 239-240.

cos locales de la izquierda republicana y socialista. Las Juntas Locales Agrarias, las Comisiones Rurales de Policía Rural o los Jurados Mixtos Agrarios pasaron a ser unas poderosas armas de negociación colectiva y de control del proceso de producción en beneficio de los obreros agrícolas, algo que irían estableciendo las primeras decisiones de los nuevos alcaldes, quienes ahora contaban con amplias competencias en política agraria local. En definitiva, la conflictividad agraria se manifestó en torno al control de los ayuntamientos, la mejora de las condiciones laborales y de la contratación de la mano de obra jornalera de las localidades. Fue el incumplimiento patronal de las bases reguladoras del trabajo agrícola y de la legislación social republicana lo que abrió el camino de la protesta campesina, alentada por las nuevas expectativas políticas y el desarrollo de la organización sindical. Dicho de otro modo, los campesinos no se hubieran lanzado en defensa de las reformas si no hubieran encontrado respaldo suficiente en los líderes aupados a las alcaldías tras las elecciones municipales de mayo de 1931, a las presidencias de los Jurados Mixtos o de las Comisiones de Policía rural. Por eso poder local y luchas socioeconómicas en el campo están en este período tan indisolublemente unidos.¹²⁶

Es cierto que en Uncastillo no se dio una actividad huelguística entre los obreros agrícolas como la de otras localidades durante 1931 y 1932, como en Sádaba, Leciñena (junio de 1931), Mallén (julio de 1931), Mulero (agosto de 1931), Maluenda, Velilla de Jiloca, Paracuellos (septiembre de 1931), Pastriz (marzo de 1932) o Santa Isabel (mayo de 1932). Pero sí que hubo otras muestras de conflictividad por tensiones surgidas en torno a los montes comunales y los contratos de arrendamiento. El Ayuntamiento, con Plano a la cabeza, trata desde finales de mayo de conseguir el deslinde del monte *Picanido*, debiendo constar denuncias contra los roturadores que cultivan indebidamente para que en ese momento el

¹²⁶ Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, «La dialéctica de las pistolas...», *ob. cit.*

Distrito Forestal realizara las mediciones pertinentes. En medio de un auténtico frenesí político y administrativo, Plano viajó a Madrid para conferenciar con el Ministro de Agricultura, dejando constancia «de las buenas impresiones que sobre el asunto de la tierra traía». Las denuncias se llevaron en comisión a Zaragoza por el propio Plano, Lasilla y Gracia, para después con urgencia tratar de viajar a Madrid y conseguir cuanto antes «la incorporación de la tierra al municipio y revisión de las ventas de los montes comunales». Pero es julio y surgen las primeras impaciencias. Lasilla manifiesta su disgusto por la «demora que observa en la tramitación del expediente para despojar a los que cultivan tierra en el monte de Picanido», y Gracia pretende «que el Ayuntamiento impida el que se cobren las rentas de las tierras o a lo sumo que se depositen para evitar el que se cobren los arriendos onerosos». Como ya es costumbre Plano vuelve a ejercer de contrapeso legal recordando que antes hay que hacer el deslinde. Ni qué decir tiene que con estas medidas el Ayuntamiento socialista no sólo se granjeaba la enemistad de los propietarios, sino también de los pequeños arrendatarios que vivían a sus expensas.¹²⁷

El grupo Republicano Radical Socialista escribió un texto respaldando la acción del deslinde de los montes, ilustrativo de cómo diversas vertientes políticas podían aglutinarse alrededor de esta cuestión, y que fue leído por el concejal Cándido Gracia:

En nombre del PRRS, al cual represento, vengo a proponer lo siguiente:

1º: se acuerde deslindar todas las propiedades rústicas del término municipal. Para esto tenemos la creencia firme de

¹²⁷ AMU, Actas municipales de 20-5-1931; 3-6-1931; 10-7-1931. La confluencia de intereses entre grandes propietarios y pequeños arrendatarios ha sido señalada por Francisco COBO ROMERO, «El conflicto campesino en Andalucía durante la crisis de los años treinta (1931-1939). Un intento de revisión histórica», en Manuel González de Molina (ed.), *La historia de Andalucía a debate, I. Campesinos y jornaleros*, Anthropos/Diputación Provincial de Granada, Barcelona, 2000, p. 119.

que sólo hace falta poner en conocimiento del Gobernador y Gobierno de que este Ayto. ha tomado acuerdo unánime de hacer dicho deslinde con el único objeto de reivindicar nuestros montes municipales, abandonados por anteriores Ayuntamientos, y resolver la angustiosa crisis de trabajo y hacer una humana justicia social, dando para esto un plazo lo más corto posible, para presentar en esta alcaldía todos los títulos de propiedad de fincas rústicas, y pasado el tiempo legal proceder al deslinde, cargando los gastos de sus fincas al que no haya presentado sus títulos en el plazo señalado. Fundamos esto en que entendemos que las tierras que no son de nadie, SON DEL PUEBLO, y siendo el Ayto. su administrador, es a él a quien corresponde guardarlos y darlos a los verdaderos trabajadores, para así evitar casos de miseria y de vergüenza. Y claro es que hay que cobrar alguna renta de dichas tierras y de los pastos, pero será una insignificancia comparada con la renta actual, y que estos ingresos serán devueltos en jornales, puesto que con esos ingresos se puede acometer parte de las muchas obras que hay que hacer 2º: Asimismo pido se tome acuerdo de solicitar personal competente para aforar nuestros ríos y estudiar si es fácil realizar las obras siguientes: hacer un pequeño pantano en la «Pasada Canales», con el objeto de aprovechar el gran desnivel, para poder producir fuerza eléctrica para toda la población, y con el agua del salto poder hacer regadío seguro una zona de 80 a 100 cahíces, desde ésta hasta la partida llamada «El Peñazo». Este mismo personal aforará y estudiará si hay agua y sitio apropiado para construir otro pantano para dedicarlo exclusivamente a riegos, que a nuestro escaso entender podría ser en la partida llamada «Valdaba», porque así aprovecharíamos el barranco del mismo nombre y los dos ríos que rodean nuestro pueblo, «Cadena» y «Riguel». Estas obras las vemos de gran utilidad, porque de la primera conviene hacer constar que se pagan más de 50.000 pts. al año de fuerza eléctrica, y que tenemos una huerta inmejorable, que no da nada por no tener agua segura, y es nuestra opinión que habría que llegar a la municipalización de todas las tierras que se hagan regadío, y si esto no se podía, hacer obligar a que se ceda en arriendo módico, por trozos, tantos como vecinos haya y puedan por sí cultivarla.

Esto es lo que a nuestro juicio tiene el Ayto. que hacer si no quiere ver a sus vecinos emigrar o morir de hambre (...)

ruego a todos los compañeros de concejo se den cuenta perfecta de que llevar esto a la práctica representa y es el único medio para que en nuestro pueblo no haya esclavos ni miserias.¹²⁸

La gestión municipal por la recuperación de los comunales despertó las esperanzas de los campesinos y fortaleció su identidad, espoleada con la actitud violenta de algunos de los perjudicados. La cotidianeidad ofrecía coyunturas favorables al enfrentamiento, y no se tardó mucho en recurrir a la violencia como una herramienta más del mismo. En *Vida Nueva* se airea en junio un «vil y cobarde atropello» de un «hijo republicano» por «dos elementos monárquicos, de los que no se resignan ante la actual situación». Describe el remitente cómo en una conversación dichos dos elementos hablaban en contra del régimen, «celebrando con regocijo inaudito que llevarsen presos a nuestros queridos compañeros que lo estuvieron cuando el movimiento de diciembre». Parece ser que el agredido terció defendiendo la República y a los que fueron detenidos, recibiendo a cambio, «en un momento de hidrofobia o locura albiñanista [...] una tanda de porrazos, arañazos y patadas». Se denuncia ese «matonismo» y se advierte que los caciques visten ahora ropajes republicanos. Son «gansos y perros rabiosos que babean por todas partes, [...] con pasos vacilantes de beodo, el señorito cacique, para ver si consigue seguir engañando se llama republicano, después que intentó mil veces asesinar a la República recién nacida». Y finaliza volviendo sobre el asunto central de la confrontación local: «pronto, muy pronto, el obrero campesino trabajará esas tierras que injustamente tenéis usurpadas y que sólo a ellos pertenecen, porque trabajándolas serán de ellos».¹²⁹

¹²⁸ AMU, Actas municipales, 26-8-1931.

¹²⁹ VN, «Uncastillo, famosamente revolucionario», 13-6-1931. Tan sólo un mes después José Miguel Sádaba publicaba desde Uncastillo y en el mismo órgano un nuevo artículo contra el caciquismo y por la exclusión de las fuerzas antirrepublicanas del nuevo Estado: «España quiso ser libre y lo es; desterró para siempre a la Monarquía sin violencia. La familia borbónica, esa familia que ha sido nuestra ruina moral y material, ha huido para siempre con una millonada mal adquirida... no olvides las ofensas de aquellos sacerdotes indignos que tanto te insultaron desde el púlpito... Para ellos no hay más fuerza brutal que la

En septiembre de 1931 Plano daba cuenta en el Ayuntamiento de la asamblea de la Federación Provincial de la UGT para tratar sobre la reforma agraria, así como del «entusiasmo» con que se celebró. También del viaje a Madrid que realizó junto con otros tres alcaldes para visitar a varios Ministros y presionar en el asunto de los comunales. Recibieron «impresiones optimistas» por parte de Largo Caballero y Fernando de los Ríos, ministros a la sazón de Trabajo y Justicia, pero hubo otros gabinetes del centro y la derecha republicana que se opusieron. Pasada la crisis ministerial de octubre, una nueva comisión formada por el secretario general de la Federación regional Bernardo Aladrén, el alcalde de Ejea Juan Sancho, el alcalde de Tauste Jacinto Longás y Antonio Plano como alcalde de Uncastillo y diputado provincial, volvió a viajar a Madrid «con el fin de gestionar nuevamente que los montes comunales que se hallan en poder de particulares rewertieran a los Municipios, primero por ser de justicia, y segundo porque con ello se daría satisfacción a los trabajadores de los pueblos, que carecen de tierra». Fueron recibidos por Azaña, Caballero y De los Ríos, quedando este último encargado de llevar al Consejo de Ministros el Decreto que ordenaba que todos los comunales deslindados volviesen a los municipios y que éstos los entregaran a los trabajadores para su cultivo, así como el deslinde administrativo de los terrenos que no lo hubieren sido, para repetir la operación de reparto de tierras. En las Cinco Villas la Reforma Agraria para los campesinos parecía más cercana que nunca, y hubo algunos que pudieron comenzar a pedir su anhelado trozo de tierra.¹³⁰

de los perturbadores Primo, Berenguer, Mola, Martínez Anido y otros... Desterremos para siempre a los parásitos arrinconados que conspiran en las tinieblas, y que tenemos nosotros el deber de exterminar. Si no lo hacemos así, la nueva España, la República que acaba de nacer, puede estar en constante peligro de muerte», VN, «En peligro de muerte», 4-7-1931.

¹³⁰ AMU, Actas municipales, 18-9-1931. VN, «Hacia la solución del problema de la tierra en Aragón», 17-10-1931. Algunos vecinos denunciaron por esas fechas que los propietarios habían corrido los mojones del monte «La Sierra» en su beneficio. La Comisión de Montes comprobó que eran «exageradas las versiones» que sobre el hecho circularon, aunque sintiéndose insegura sobre los lindes, acordó dirigirse al Distrito Forestal para que se personara un técnico que

En octubre y noviembre continuaron las gestiones para repartir las primeras parcelas y continuar con los deslindes. El 20 de noviembre, reunido gran gentío en el salón del Ayuntamiento de Uncastillo y tras sorteo en el que dos niños extraían las papeletas de la fortuna, 59 «vecinos pobres» recibían una parcela en el monte Baniés. Ellos eran el mayor exponente del cambio ocurrido en el seno del poder político local, y también la espoleta del deterioro de las relaciones entre los grupos de clase de la localidad. La confrontación social y el enfrentamiento abierto llegaron cuando los propietarios trataron de acudir a la Guardia Civil y a la manio-bra política para mantener el estado de las cosas.¹³¹

Por aquel entonces tendría lugar una escena de protesta popular de la que no hay relato alguno en la prensa del momento, pero sí en un documento posterior, una denuncia ante el Tribunal de Responsabilidades Políticas que, después de la guerra civil, administró culpabilidades y multas a los acusados de haber «fomentado con eficacia la situación anár-quica en que se encontraba España y que ha hecho indis-pensable el Movimiento Nacional», es decir el golpe militar de julio de 1936. La denuncia parte de Antonio Mola, por entonces gobernador civil de Huesca, se formaliza en agosto de 1939, y acusaba a los vecinos Babil Freg Rived y a Joaquín Freg Buey de significarse como «perturbadores y revolucionarios de Uncastillo desde el primer momento en que fue proclamada la República y publicado el Decreto de revisión de arrendamientos rústicos». Apunta que «alentaron y

podría colocar los mojones donde deberían estar. Pidió de igual modo a la corporación autorización para roturar dos trozos de terreno en dicho monte, «que no tiene leñas y puede ser muy beneficioso para la agricultura». AMU, Actas municipales, 2-9-1931.

¹³¹ Las primeras solicitudes de los vecinos pobres y el avance en las gestio-nes para sortear en la partida de Baniés, en AMU, Actas municipales, 2-10-1931 y 6-11-1931. En esta última fecha se crea solicitar la Junta Agraria en el partido de Sos, que al parecer no se había constituido todavía, pidiendo el deslinde de los montes a la Junta Central Agraria y al Ministerio de Fomento. Parece ser que además vuelve a reavivarse el litigio con Layana por una partida colindante de los términos municipales, que esta localidad reivindicaba. El sorteo en AMU, Actas municipales, 20-11-1931, hubo en total 97 solicitantes.

promovieron estas revisiones y cuando las resoluciones judiciales no fueron favorables a sus pretensiones soliviantaron a los cultivadores promoviendo en cierta ocasión ruidos o motín». Eso fue a finales de noviembre. Ellos, según informa la Guardia Civil, llevaban en arriendo al medial las fincas «Pesquera» y «Torregay», propiedad de los herederos de Pedro Fuertes, siendo su representante Antonio Mola. La legislación agrícola posibilitó la revisión de los contratos de arrendamiento y la percepción de que los campesinos podían exigir mejores condiciones. En ese momento, que era el de la cosecha, Babil y Joaquín se la llevaron a sus graneros, sin pagar a propietarios y apoderado. Mola fue a la Justicia, y desde el tribunal de Sos se ordenó al juez de Uncastillo que los acusados entregaran a Mola la renta que le correspondía. El día 28 de noviembre, habiendo sido llamado Mola al Juzgado Municipal de Uncastillo, se promovió en sus puertas una protesta, debiendo «salir custodiado por el juez y una pareja de la Guardia Civil hasta su domicilio». En esa acusación, realizada ocho años después de los hechos, se dice que Babil Freg «reunió a una gran masa del pueblo, que gritaban y amenazaban de palabra, y que lo matasen, al Sr. Mola». El propio Babil, se defiende y justifica las reclamaciones agrícolas con un escrito muy interesante sobre las razones que avalaban sus reclamaciones:

«Ciertamente se dictó una orden general o decreto sobre la revisión de contratos agrícolas y como nunca teníamos ningún contrato y sí solo verbal y, como casi todos los vecinos del pueblo solicitaron tal revisión o llegaron la mayor parte a un arreglo con los propietarios mejorando las condiciones, propusimos al Sr. Administrador-apoderado hiciera algo en nuestro beneficio ya que suponía más para nosotros unos cahíces que para él porque los gastos eran cada día mayores siendo imposible siquiera obtener o cubrir los gastos; como el administrador dijera que se atenía a la ley, solicitamos la revisión ya que era legal en aquella fecha y de justicia porque eran condiciones de arriendo imposibles de sostener, esto no demuestra instigara a nadie para que hiciera lo mismo, dicho administrador podía haber hecho lo que otros propietarios hicieron más conocedores de la situación

del campo que encontraron más justas sus peticiones ya que de esta manera hacía más llevadero el sostenimiento no sólo del colono, sino también del obrero por cuanto que de estos beneficios él también participaba».¹³²

Algo menciona *Vida Nueva* sobre los hechos del día 28, aclarando que cuando «se iba a proceder al envase del trigo que anteriormente se había almacenado como depósito entre medialeros y propietarios», para en su día proceder al pago de la cantidad que debían abonar, los medialeros no se mostraron conformes «con que se llevara a cabo el cobro del trigo hasta que las autoridades competentes dieran las oportunas órdenes claras y terminantes, las cuales pudieran satisfacer en justicia las aspiraciones de todos». Este «acto de solidaridad» entre los campesinos «contra la terquedad de algunos propietarios» provocó una concentración posterior de Guardia Civil que excitó todavía más los ánimos. Llegaron ocho parejas en un camión que suscitaron «descontento general y espontáneo», saliendo las mujeres y niños a la calle para mostrar su enfado ante el despliegue de fuerza. No era algo excepcional. Aunque en la Segunda República el repertorio «tradicional» de protesta fue languideciendo, todavía se usaban merced a su eficacia motines populares en los que

¹³² La denuncia de Mola se adornaba de detalles escabrosos y exageraciones para mostrar el carácter criminal de los inculpados, algo muy habitual en las denuncias, señalando que ambos dos favorecían a los izquierdistas del pueblo «regalándoles para sus orgías corderos, vino, etc», haciendo en otras ocasiones «patente su extremismo exaltado amenazando a los elementos de derechas y abogando por la revolución social». Babil fue posteriormente amonestado en 1938 por dirigir injurias a Mola durante una visita al pueblo, frases que no pudieron demostrarse «por la falta de civismo de los ciudadanos, apareciendo probado tan sólo que dijo: «canallería» y «canalla de Gobernador». De él se afirma con insistencia que perteneció al Partido Republicano Radical Socialista (PRRS) y luego a Izquierda Republicana (IR), y que después se inscribió en Falange nada más comenzar el «Movimiento», dando batidas por el monte para cazar a los republicanos huidos. En un nuevo escrito, Mola carga contra ellos por «la gran influencia que ejercieron sobre gran parte de los arrendatarios de Uncastillo para que estos votasen a las izquierdas extremas, tanto por su constancia en la práctica como por el ejemplo que suponía que, con su admirable condición económica realizasen acción demoledora, viéndose permanentemente protegidos [...], consiguiendo no sólo dejar de ser castigados por sus desafueros y hechos delictivos, sino que conseguían sentencias injustas». AHPZ, Responsabilidades Políticas, Uncastillo, 2/216.

mujeres y niños encabezaban la protesta contra la fuerza armada como medida de defensa. Pensaban que era muy improbable que los guardias dispararan contra ellas, y así había venido ocurriendo desde tiempo atrás, desde los años de la Restauración. «Una voz fuerte y viril dio un ¡Viva la República!, que fue unánimemente contestado, y [...] en aquel mismo momento la muchedumbre entona nuestro himno socialista, la Internacional, que fue cantado con entusiasmo desbordante, y silbada la Guardia Civil como protesta».¹³³

La reforma agraria continuaba su curso, pero los obstáculos hacían resentir el ritmo de implantación de las reformas en el ámbito local. Para los propietarios descontentos, nada más efectivo para ello que socavar la autoridad del alcalde a través de escritos en prensa y comunicaciones dirigidas a poderes superiores. En diciembre de 1931 Antonio Plano tuvo que salir al paso de las denuncias que algunos propietarios hicieron ante el gobernador, acusado de estar procediendo al reparto de tierras, «y que con sus predicaciones, soliviantaba a las gentes». La noticia, replica Plano, «carece en absoluto de fundamento», y explica punto por punto el proceso que se está siguiendo en la villa, especificando que se está en el momento del deslinde de los montes según directrices del Distrito Forestal. El propio Distrito, dice Plano, será el que invite a los propietarios a presentar sus títulos de propiedad y hacer las comprobaciones definitivas para, detectado el exceso de cabida, devolver ese sobrante al Municipio.¹³⁴

«Calumnia canallesca contra nuestro querido camarada Plano», así describe la maniobra el rotativo socialista, un asunto que no sería en absoluto el último de ese cariz. La actividad municipal en la dirección de rescate de comunales no había cesado, si bien es verdad que más bien, a golpe de decreto y frenada por la demora de los debates parlamenta-

¹³³ VN, «Uncastillo y la Guardia civil», 19-12-1931, artículo de J.M. Sádaba.

¹³⁴ AMU, Actas municipales, 30-12-1931. El escrito se publicó en *Heraldo de Aragón*. Como respaldo a la acción de Plano, la Corporación acordó por unanimidad aprobar su gestión encaminada al deslinde de los montes.

rios. En noviembre del 31 se iniciaron los trámites para el deslinde de los montes *Valdelafluén*, *Flor*, *Buesal* y *Puyarraso*, y pasado el año nuevo se pide agilidad en la concesión de las partidas de *Baniès* «pues es hora de que los usuarios vayan trabajando en ellas». El tono de celeridad que los concejales quieren imprimir a la acción de gobierno viene justificado por la crisis obrera que se arrastra desde el verano anterior. Sin embargo el nuevo año vuelve a poner de manifiesto la distancia entre el equipo de gobierno municipal y los sectores acomodados y conservadores de la localidad. Sucesos ocurridos más allá de la bella localidad cincovillense vendrían a enturbiar más si cabe las relaciones entre los grupos implicados en el cambio republicano y los que se resistían a ceder posiciones de privilegio. En menos de una semana, entre el 31 de diciembre de 1931 y el 5 de enero de 1932, tendrán lugar sangrientas escenas que cambiarán radicalmente el panorama del medio rural del país y la actitud tanto de gobiernos como de las fuerzas armadas del Estado hacia el campesinado. Castilblanco, Arnedo y el levantamiento anarquista de las comunidades del Alto Llobregat son las trágicas instantáneas de una conflictividad política y social en franca progresión en el medio rural.¹³⁵

Castilblanco, un pueblo al noreste de la provincia de Badajoz, encendió la mecha. La Federación de Trabajadores de la Tierra regional convocó una huelga general para los días 30 y 31 de diciembre en protesta contra el gobernador y el coronel de la Guardia Civil, a quienes acusaba de apoyar a propietarios y caciques de la zona en su resistencia a cumplir la legislación social recién implantada. La huelga transcurrió sin novedad, pero cuando los manifestantes de Castilblanco volvían a sus hogares la Guardia Civil dispersó a los vecinos, produciéndose choques y forcejeos y resultando un paisano muerto. Los campesinos, en un ataque de ira sin freno, se abalanzaron sobre los cuatro guardias y con palos, piedras y

¹³⁵ VN, 26-12-1931. AMU, Actas municipales, 27-11-1931; 6-1-1932. Igualmente se acuerda comprobar y repartir las parcelas en el monte Picanido.

cuchillos, los masacraron. La Guardia Civil quiso escarmentar al «populacho», y aprovechando la pasividad de algunas autoridades se desahogó repartiendo heridos y muertos en diferentes puntos de la geografía del país. En Zalamea de la Serena mataron a dos campesinos e hirieron a tres más. En Épila, el 2 de enero de 1932, durante una huelga agrícola de trabajadores de la azucarera, instigados parece ser que por la CNT y pese a la oposición de la UGT, se reunieron en la plaza de la localidad unas quinientas personas. La Guardia Civil intentó despejar la plaza, disparó y dejó muertos a dos jornaleros y varios más heridos. Al día siguiente, en la localidad valenciana de Jeresa, una manifestación de campesinos recibió a la Guardia Civil a caballo con insultos y piedras, produciéndose una carga de sables y disparos que dejó como resultado cuatro muertos y trece heridos. El día 5 de enero llegó lo de Arnedo. Lo ocurrido allí levantó un clamor popular contra la Guardia Civil por las muertes cosechadas en la plaza de la República de la villa riojana. Seis hombres y cinco mujeres muertos (entre ellas una mujer de setenta años y un niño de cuatro), once mujeres y diecinueve hombres heridos (hombres y mujeres ancianos y un niño de cinco años a quien tuvieron que amputar una pierna), y un guardia civil herido leve de bala fue el trágico balance de aquel funesto día. La pacífica manifestación de la plaza fue disuelta de manera fulminante por la fuerza armada sin que hubiera mediado resistencia, ni provocación, ni acción colectiva hostil de ningún tipo. La campaña de la prensa y los sectores de la izquierda contra la Guardia Civil no se hizo esperar, como tampoco lo hicieron los cambios gubernativos en la cabeza del cuerpo. Sanjurjo fue relevado como director del mismo, pero eso no apagó un sentimiento de la Guardia Civil de estar siendo atacada injustamente, percepción que alentó aquella súbita y violenta reacción. Ni tampoco la sensación de que el Estado republicano no controlaba sus propios medios de represión ni mostraba capacidad para hacer cumplir la nueva legislación.¹³⁶

¹³⁶ Julián CASANOVA, *República y guerra civil...*, ob. cit., pp. 57 y ss. Sobre Arnedo, Carlos GIL ANDRÉS, *La República en la plaza: los sucesos de Arnedo de*

Casi al mismo tiempo que tenían lugar los hechos de Arnedo se presentaba un grupo de números de la Guardia Civil de refuerzo en Uncastillo. Los concejales reflejaron en las actas la sorpresa de tal medida por lo injustificado de la misma, iniciando gestiones para saber las causas por las que el comandante del puesto había pedido dichos refuerzos. No hubo acción colectiva por parte de los vecinos ni excesos por parte de los guardias, pero la escena evoca ya un clima de absoluta desconfianza entre ambas partes. Los guardias pensaban que los socialistas no eran sino lo peor de cada casa, y los vecinos constataban una alianza desleal entre la fuerza y los propietarios. Plano, como cabeza visible de la nueva política agraria, fue objeto en el mes de marzo de una nueva denuncia de los terratenientes de Uncastillo ante el Gobierno Civil y a través de la Agrupación de Propietarios de fincas rústicas, en queja «por haber roturado arbitrariamente trozos de terreno que servían para descansadero de los ganados sin consentimiento de sus propietarios». Plano hizo constar en acta su «más enérgica protesta por la forma de proceder de dicha Agrupación», pues debían de haberlo denunciado en los tribunales ordinarios, «o por lo menos haberle dado cuenta como alcalde de dichos hechos». Las trabas impuestas por ellos para la cesión de tierras en arriendo para los campesinos no hicieron sino incrementar la movilización social en su contra, de muy diversas maneras. Para

1932, Instituto de Estudios Riojanos y Ayuntamiento de Arnedo, 2002. En los pueblos del Llobregat lo que se inició el día 19 de enero como una huelga de mineros terminó con la proclamación del comunismo libertario y la sustitución de las banderas republicanas por otras rojinegras. Cuando ya el levantamiento tocaba a su fin el Comité Nacional de la CNT acordó organizar un paro general en toda España, secundándose tan sólo en algunos pueblos aislados del País Valenciano y Aragón. En Alcorisa fueron colocadas dos bombas en el cuartel de la Guardia Civil, y en Castel de Cabra «los revoltosos» también proclamaron el «comunismo libertario», se apoderaron del Ayuntamiento, destruyeron el Registro fiscal y todos los documentos que había en la Secretaría municipal, y amenazaron al cura con quemarlo en una gran hoguera. ELISEO MORENO BURRIEL, «Desorden en el campo: análisis de la sociedad rural turolense desde la sublevación anarquista de 1932 hasta la insurrección de 1933», en Pedro Rújula e Ignacio Peiró (coords.), *La Historia Local en la España Contemporánea*, L'Avenç, Barcelona, 1999, pp. 399-416

muchos era el momento esperado durante décadas, la hora de la justicia y el reparto, y si la ley no era suficiente la fuerza del número haría el resto. Pero para eso aún quedaban pasos por dar.¹³⁷

«Crisis obrera», obras públicas y movilización social

Las noticias de las penurias económicas de los campesinos comienzan a circular desde los primeros momentos de la República. La Monarquía había abandonado el barco del Estado pero lo había dejado sin dinero, con presupuestos irrisorios y graves dificultades financieras. Hubo una importante retirada de fondos de las cuentas bancarias y los préstamos y créditos también se redujeron drásticamente. Los mercados agrícolas se estancaron y la ausencia de obras públicas impedía ingresos complementarios en las casas pobres. Desde mayo el Ayuntamiento de Uncastillo fija su atención sobre el problema laboral del municipio, elaborando un listado con los «obreros que se hallan en paro forzoso» en el que constaron 145 vecinos inscritos desde junio de 1931 a marzo de 1932. Sólo en los diez últimos días de julio del 31 quedaron sin trabajo veinte vecinos del pueblo, y en el mes de agosto fueron treinta. Junto a las acciones encaminadas a facilitar tierra de los comunales, varias líneas de actuación concentraron los esfuerzos de los munícipes republicanos y socialistas. En primer lugar la concesión de obras públicas por parte de las instituciones superiores para repartir jornales. Y en segundo lugar, la firma de créditos con los que adelantar capital a arrendatarios y pequeños propietarios para poder efectuar las labores de la siega y gestionar diversas obras municipales. Y en tercer lugar y cuando la necesidad así lo requiriera, el reparto de pan.¹³⁸

¹³⁷ AMU, Actas municipales, 6-1-1932 y 30-3-1932. En esta última misma sesión se pide información sobre la negativa de los propietarios a dar o ceder tierras para hortalizas. En sesión de 20-1-1932 el concejal Giménez pide la protección de cañadas, pasos y abrevaderos de los ganados del arado roturador.

¹³⁸ AMU, Leg. 175, exp.010.

Los caminos vecinales fueron desde los primeros momentos de la República una veta que explotar para aquellos que querían otorgar trabajo a los campesinos. El mal estado de los mismos abría la posibilidad de iniciar trabajos de allanamiento y limpieza con los que no sólo dar jornales, sino además mejorar las comunicaciones y por añadidura el comercio local. Antonio Plano, como vicepresidente de la Diputación, conocía de primera mano no sólo el interés de la institución por mejorar las comunicaciones en el ámbito rural, abandonadas durante años hasta hacerlas impracticables, sino de los trámites administrativos necesarios para llevar adelante proyectos de mejora de caminos por parte de los Ayuntamientos. De su puño y letra firmó un artículo en *La Voz de Aragón* a finales de 1931 en el que, opinando sobre su distrito, decía que «a mi juicio está en peores condiciones que ninguno de la provincia, ya que dadas las malas condiciones del terreno, especialmente Sos, donde todos los trabajos de transportes y recolección hay que hacerlos a carga y, por tanto, resulta el encarecimiento de la vida donde hay que emplear muchas caballerías». Da cuenta de cómo la Diputación, siguiendo los acuerdos de análogas instituciones, pidió al Ministerio de Fomento prescindir de la subasta de las obras para ganar tiempo y realizarlos «por administración» y poder «atender lo antes posible a remediar la crisis de trabajo». La dificultad de la falta de dinero la solventaba Plano fácilmente: «es tan grande la ocultación que existe en todos los órdenes, especialmente en la propiedad de la tierra, que haciendo una investigación por cuenta del Estado y obligando a los propietarios a tributar por lo que defraudan, podría de esta manera salir el dinero suficiente para emprender trabajos en carreteras y ferrocarriles en la necesidad que precisan estos pueblos, y desaparecería la miseria que hay y poder comunicar con otros pueblos en mejores condiciones».¹³⁹

¹³⁹ LVA, 16-12-1931. El artículo formaba parte de una serie en la que personalidades locales y regionales, sobre todo los diputados provinciales, opinaban sobre la campaña emprendida por el diario por la promoción de una Asamblea para solventar el problema de los pueblos comunicados de la región. El interés por el asunto surge en las primeras sesiones del Ayuntamiento, con una pro-

El empeño de Plano por acometer la mejora de los caminos vecinales tenía una faceta regional desde el momento en que formaba parte de la comisión de Fomento de la Diputación Provincial.¹⁴⁰ Y desde luego que, no por conocido ese problema, dejó de intentar sensibilizar a políticos, a la opinión y a militantes correligionarios a través del relato de una experiencia personal durante la campaña electoral de mayo de 1933. Por aquel entonces ser político socialista significaba intentar llevar la palabra y «la idea», a oídos de campesinos maltrechos por la miseria y la humillación caciquil, para movilizarlos y liberarlos a través del voto. Tal era su fe en el poder de la cultura y la solidaridad de clase que, desde la autoestima que les daba el saberse mejores que el contrario, pensaban que el solo contacto con «la idea» debería bastar para liberar a los campesinos de la esclavitud de la ignorancia. Y eso significaba tragar polvo de los caminos y empaparse de lluvia inoportuna. A lomos de un mulo marchó en mayo de 1933 con Juan Sancho, alcalde de Ejea, por los pueblos de la comarca más apartados, «las Hurdes de Cinco Villas», para organizar charlas y mítines en busca del voto. Varias son las alusiones sobre el mal estado de los caminos en este periplo. De Tiermas partieron «en dirección a Bagüés, distante seis horas de camino, por una senda que hasta los pájaros corren el riesgo de morir destrozados en los chaparros y los pinos o despeñados por algún desfiladero de los muchos que existen, de una profundidad fantástica. Haciendo eses y eses vamos escalando las montañas para volver a bajar por veredas llenas de agua producida por las filtraciones de la nieve, y obstruidos por grandes peñasco-

puesta de Lasilla para que «se proceda al arreglo de los mismos». AMU, Actas municipales, 6-5-1931.

¹⁴⁰ En la primera sesión de la Comisión Gestora de la Diputación Provincial, Antonio Plano hace referencia a un escrito presentado por la UGT solicitando de la Diputación la adopción de medidas conducentes al alivio de la crisis obrera, especialmente con la construcción de caminos vecinales. Insiste en que cuanto antes se dé efectividad a lo solicitado por escrito, a fin de dar trabajo a los obreros de los pueblos, con lo cual, además de remediar la miseria de los mismos, se evitaría el desplazamiento de los sin trabajo a la Capital y los conflictos que la aglomeración de obreros parados puede producir en la Ciudad». ADPZ, Libros de actas Comisión Gestora, núm. 260, sesión de 2-5-1931.

nes que, los mulos, que saben matemáticas y álgebra, sortean con gran facilidad, pero que el alma y el corazón del jinete va constantemente en un puño». Camino de Lobera «vamos caminando unos ratos montados y otros andando, ante el inminente peligro de perecer rodando por algún desfiladero de los muchos que hay en el camino», sin disimular que de camino a Fuencalderas andaban ya «con las posaderas algo escocidas por el roce de los jumentos». Ambos, Sancho y Plano, concebían ese aislamiento físico como un impedimento de primer orden en la llegada de nuevas ideas y en la configuración del encapsulamiento que los caciques de siempre habían logrado en los pueblos.¹⁴¹

El otro gran combate que se libra para mejorar la situación de los campesinos es la firma de créditos para agilizar los trabajos agrícolas. En junio de 1931 el pleno de Uncastillo aprueba pedir uno al Instituto Nacional de Previsión de Aragón ante las solicitudes de anticipos de colonos y propietarios. Los beneficiarios serían tanto campesinos pobres como propietarios medios que podrían afrontar los jornales de la recolección y evitar así «el quebranto de propietarios y colonos». Hasta 269 vecinos pidieron los anticipos en aquella ocasión. En diciembre vuelven a solicitarse fondos públicos, esta vez al Ministerio de Gobernación, «para remediar la gran crisis obrera» mediante la construcción de un muro de contención en el cauce del río Cadena, «todo ello de acuerdo con la carta circulada por la Federación de la UGT de esta provincia». Con el final del año llegaron 10.000 pesetas a Uncastillo, que fueron inmediatamente utilizadas para comenzar las obras del muro, fijándose un jornal para los obreros de 6 pesetas, y de 2,50 pesetas por mula en los carros prestados para los trabajos. Sin embargo los avances se toparon sorpresivamente con la política local, aprobándose por primera vez una resolución no por unanimidad, sino tan sólo con la mayoría socialista. El origen de todo fue la propuesta de Antonio Plano de crear una tahona reguladora para producir

¹⁴¹ VN, 6-5-1933.

pan a bajo precio. Tres concejales, Gracia, Cortés y Giménez, se manifestaron en contra de la medida y preferían otorgar más jornales a través de las obras, apuntando que «no debe ser tan crítica la situación ya que no consta que el vecindario haya pedido se le concedan créditos para adquirir el pan». La respuesta de Plano fue contundente: «si el pueblo no se ha manifestado pidiendo el establecimiento de la tahona ha sido por disciplina que reina en su agrupación». Para emplear a todos los obreros parados había que realizar más obras y adquirir un crédito más cuantioso, y lo que Plano y los socialistas pretendían era no sólo llegar a cuantos más posible para posibilitar la subsistencia, sino además borrar cualquier duda en el vecindario sobre la limpieza de la gestión de los fondos. «Debía de ser muy moral la persona que se encargase de la administración», y «moralidad no se halla tan fácilmente», dejó caer el monárquico Cortés. Del éxito social de la medida se quiso dejar constancia en actas, cuando a finales de marzo se aprobó pedir un nuevo crédito de 30.000 pesetas «para que con él pueda esta Corporación continuar facilitando el pan a los muchísimos vecinos que lo toman de esta tahona municipal».¹⁴²

Entre las gestiones destinadas a proporcionar jornales y la adjudicación de parcelas en los montes públicos transcurrieron los primeros meses de la República, y las esperanzas de

¹⁴² AMU, Actas municipales, 19-6-1931. Los beneficiarios debían de acreditar pagar contribución territorial no superior a 500 pts., comprometiéndose a devolver las cantidades un mes después de la siega. El monto del crédito eran 71.380 pts., aprobando además el pleno disponer del sobrante del presupuesto anterior, 5.633 pts. En diciembre constan quejas de algunos concejales porque hay quien no ha pagado el crédito concedido para la siega. Esto y la solicitud a Gobernación en AMU, Actas municipales, 9-12-1931. La corporación agradecía al diputado Algora sus gestiones para la rápida concesión del dinero, AMU, Actas municipales, 27-1-1932. Los debates sobre la tahona y la aprobación de su instalación en el horno de Consuelo Marín en AMU, Actas municipales, 3-2-1932. El éxito de la tahona en AMU, Actas municipales, 30-3-1932, aunque se demuestra cierta preocupación porque en mayo todavía no había sido concedido. Las dificultades financieras para llevar a cabo estas medidas serían el principal escollo del impulso renovador del equipo municipal. En mayo de 1932 vuelve a solicitarse un nuevo crédito al Instituto Nacional de Previsión, esta vez por valor de 94.779 pts., en demanda de las 189 solicitudes de «varios propietarios y colonos de esta villa», AMU, Actas municipales, 27-5-1932.

mejora de no pocos vecinos. Pero a la altura del primer aniversario de la instauración del nuevo régimen el desarrollo de las reformas pasaba por debates broncos, campañas de difamación y manifestaciones públicas de adhesión o rechazo. Unas manifestaciones colectivas que tenían bastante de combate simbólico por la apropiación de la calle y la plaza, del espacio público por antonomasia, donde poder demostrar la fuerza del número y la solidez de la propia identidad en contraposición con las otras. La movilización que supuso la fiesta nacional republicana quiso ser una nueva fiesta colectiva, pero esta vez con un balance que debía incluir los logros obtenidos por los nuevos detentadores del poder, y los impedimentos puestos por los que lo habían detestado hasta entonces. El discurso republicano-socialista identificaba a los enemigos de las reformas con los enemigos del «pueblo» y, por tanto, de la recién nacida democracia. Y así, a través de la palabra y el discurso aleccionador del mitin las elites de los partidos de izquierda pretendían enseñar al «pueblo» un nuevo modo de entender y de comportarse en la política, de participar en los asuntos colectivos, de crecer en una cultura política democrática y consciente. Esa participación era considerada como una válida correa de transmisión entre la voluntad colectiva y la gestión del poder, algo que a su vez tenía mucho que ver con la organización sindical y la militancia, y la creciente influencia de los medios de comunicación en la extensión masiva de los discursos políticos. Todo eso, cuando los vecinos salían a la calle, se traducían en el entusiasmo con el que se gritaban vivas y se cantaban canciones por las que años atrás se sufría denuncia y condena.¹⁴³

¹⁴³ Se ha de tener cuidado con no idealizar la actitud de los vecinos en la política local. Una muestra de que también la autoridad percibía la necesidad de corrección en su comportamiento político ocurrió en agosto de 1931. Plano manifestó como Alcalde que «debido a la gran tolerancia que se ha tenido para que el personal numeroso que asiste a las sesiones, pudieran enterarse mejor, y hasta proporcionar comodidad a los mismos, había transigido en que entraran al Consistorio y se sentaran en los mismos escaños de los Concejales, pero que debido a los incidentes ocurridos y hasta alborotos para entrar en la sesión anterior, había dictaminado la prohibición absoluta del personal a la sala de sesio-

A finales de noviembre de 1951 tuvo lugar un acto de «afirmación» y «compañerismo» socialista en Uncastillo, «como demostración de gratitud», dedicado sobre todo al compañero Antonio Plano, alcalde socialista y diputado provincial, junto con los camaradas Lasilla y Garín, luchadores infatigables que han mantenido honrada, entusiastamente, con fe inquebrantable, las banderas socialista y de la UGT». El acto además quería ser «de entusiasmo por nuestra magnífica organización de la UGT y además, para celebrar la promulgación del Decreto sobre los bienes comunales, que tanto ha de beneficiar a aquella villa». De Zaragoza llegaron José Algora, Manuel Fernández, Mariano Sierra, Antonio Puyo y el director de *Vida Nueva*, José M. Antón. Centenares les esperaban a pie de carretera mientras entre vivas, la banda tocaba «La Internacional», «cantada magníficamente por hombres, mujeres y niños». Desde la entrada del pueblo marcharon en manifestación alegre hasta los locales de la UGT, donde estaba la casa del propio Plano, para después marchar a comer a una ermita ya abandonada, donde también se cantó el himno internacionalista. Luego volvieron todos a la UGT, donde se tomó café. «Nuestro camarada el diputado socialista José Algora se veía imposibilitado para atender a todos los que deseaban saludarle». Se visitó luego el grupo escolar, obra emblemática del primer Ayuntamiento socialista, y luego de nuevo al Centro, incapaz de contener el gentío. Desde los balcones tuvieron que hablar los oradores para que pudieran escucharlos todos los congregados. Uno a uno, previa presentación de Antonio Plano, fueron saludando «a los trabajadores de Uncastillo» y felicitando a los Plano, Sancho, Marín, Lasilla «y a todos los que en aquella región simbolizaban el espíritu socialista y de la UGT». Se ensalzó a Uncastillo como «baluarte del socialismo», se saludó a sus mujeres y se les ani-

nes, parte destinada a los Concejales y la asistencia a las sesiones de las mujeres y niños que no tuvieran más de 16 años». También protestó contra una agresión de un vecino al secretario municipal, recordando que estaba disponible para las reclamaciones en su despacho, y que «en modo alguno toleraría se faltase a nadie», AMU, Actas municipales, 22-8-1931.

mó a mantener la llama socialista, y se hizo memoria de cuando en diciembre de 1930 Cinco Villas respondió al movimiento revolucionario para derrocar a la Monarquía. Luego, entre ovaciones, comenzó su discurso José Algora. Los saludos que portaba de Manuel Albar y del propio Largo Caballero fueron recibidos con grandes muestras de entusiasmo, pasando a explicar la actividad socialista en las Cortes y a explicar el avance que suponía el Decreto aprobado sobre bienes comunales. Con vivas al Socialismo y a Uncastillo terminó su alocución, para dar paso a la salutación de Gabriel Marco, de Farasdués, y a las palabras finales de agradecimiento y saludo de Plano. Hubo más palabras tras la cena organizada en la fonda, y más de nuevo en el Centro Obrero, donde algunos «maestros» de la jota como Faustino Arregui y Blas Frej cantaron «de manera irreproachable».¹⁴⁴

Poco tiempo después llegaría una nueva ocasión para salir a la calle. En Uncastillo el día 14 de abril de 1932 fue de verdadera fiesta. «Desde las primeras horas —dice *Vida Nueva*—, un inmenso gentío invadió las calles en alegre camaradería». A las 10 de la mañana salió una «imponente» manifestación de vecinos desde el Ayuntamiento, presidida por las autoridades y acompañada por los acordes del «Himno de Riego» y la «Internacional». En la «manifestación cívica» ondearon «las banderas tricolor y socialista, llevadas por las «camaradas» Rosario Malón e Isabel Agón, «bellas muchachas por su juventud y por sus cualidades que han demostrado en varias ocasiones de lo que serían capaces de sacrificarse por la causa de la Libertad». Después se inauguraron las placas que daban nuevos nombres de plaza de la República, calle de Joaquín Costa y avenida Pablo Iglesias. Y en la misma plaza de la República hablaron Plano, Manuel Lasilla, Inocencio Fernández y el republicano Cándido Gracia ensalzando las figuras de Costa e Iglesias, y atacando a la Iglesia, a los caciques y a los «cavernícolas» que profetizaban una corta vida para la República. Antonio Plano hizo el resumen final y explicó detalles de la

¹⁴⁴ VN, 21-11-1931.

Reforma Agraria para demostrar que bien pronto habría de concretarse, censurando además «la labor insidiosa de los autores de unas hojas llenas de majaderías y de absurdos ridículos» contra «nuestras organizaciones».¹⁴⁵

La gente volvió a echarse a la calle pocos días después, con motivo de la visita de Eduardo Castillo y el Diputado Manuel Albar. Hubo «manifestación cívica» de socialistas y ugetistas locales para recibirlos, «siendo frenéticamente aplaudidos y llevados en hombros por un grupo de emocionados entusiastas». Tras vítores en honor de los visitantes y del Socialismo, «la multitud», entre la que había «bastantes mujeres compañeras nuestras», se cantó la «Internacional». En las escuelas de párvulos y ante un inmenso gentío, José Miguel Sádaba da cuenta de los discursos de los diputados, en los que la tónica común fue el ensalzamiento de la labor parlamentaria socialista y la acusación a sus críticos como los traidores de la esperanza republicana. Castillo, además de recordar a las mujeres que el Partido Socialista logró con el voto femenino el reconocimiento de sus derechos «como ciudadanas», indicó que «la República nos trajo la esperanza» y que es un reaccionario quien a ella se opone. Albar alabó el «espíritu democrático» de los uncastilleros y su carácter «noble y elevado», despreciando con firmeza la política de Lerroux atrayéndose a los sectores conservadores, reconociendo sin ambages el difícil momento por el que atravesaba la realidad agrícola del país:

«Por esa conducta que han observado una mayoría de los republicanos españoles [conservadores] han vuelto a resurgir las fuerzas monárquicas, y todo el viejo y podrido caciquismo rural, que hoy con gran cinismo se llaman republicanos, como si en España no hubiera pasado nada.

Sé que hay muchos descontentos, y bastante pesadumbre en el elemento obrero, porque no han visto ya realizadas muchas de sus apremiantes necesidades ¿Es que la República

¹⁴⁵ VN, 23-4-1932. El redactor destacó como nota más sobresaliente del acto el hecho de que, «todos unidos, socialistas y republicanos radicales-socialistas, olvidando viejas rencillas, formamos un bloque contra el verdadero enemigo: el caciquismo».

no nos ha de dar más de los que nos ha dado...? Hay que reconocer que los caciques se han adueñado de nuevo de la vida de los pueblos, y es necesario que de aquí en adelante, tengáis por entendido, no se ha de operar ningún milagro, y que por mucho que se legisle, no conseguiremos nada mientras no haya en cada pueblo la suficiente cultura para recoger el fruto de la semilla socialista, fundando organizaciones donde se forjen hombres dispuestos al sacrificio y a la lucha por una España mejor».¹⁴⁶

Escuelas y anticlericales

Esa cultura a la que Manuel Albar hacía referencia estuvo muy presente en la acción legislatora de los mandatarios republicanos. Es conocida la ingente tarea de construcción de escuelas, sobre todo en comparación con lo efectuado durante la Monarquía, más bien poco. Uncastillo había sido una excepción al lograr durante la Dictadura dar comienzo a las obras del grupo escolar. En ellas trabajaron muchos vecinos, y en ellas estudiarían sus hijos –bastantes más de doscientos–, con la esperanza de llevar una vida mejor que la que ellos tenían. Quizás el propio Antonio Plano, con su verbo fácil y su trato elegante, fuera el mejor ejemplo de cómo un hombre sencillo podía convertirse en una figura respetada a través de la educación y la cultura. En las casas del pueblo lo que se quería era que mejorase la calidad de los maestros y su implicación con la educación, pues no pocas veces ocurrían conflictos en los que los vecinos protestaban por la falta de asistencia del maestro a la escuela. Así recuerda Jesús Pueyo el afán que sus padres tenían en que estudiara y aprendiera:

«Teníamos una madre que era más severa... cuánto me acuerdo... y cuánta razón tenía. Nos tenía... o sea la merienda... que podía ser a lo mejor media sardina o media pastillita de chocolate y un trozo de pan... y entonces llegaba y

¹⁴⁶ VN, 30-4-1932. El acto terminó con una nueva manifestación desde las escuelas hasta el local de la Agrupación Socialista, «que en seguida quedó invadido por una muchedumbre imponente que vitoreaba sin cesar a nuestros queridos camaradas».

eso lo ponía arriba: «A ver, los deberes...» Hasta que no hacíamos los deberes ni nos daba la merienda ni nos dejaba salir a jugar. A la mañana, la misma cuestión. Nos levantaba una hora antes, nos daba la lección y hasta que no la sabíamos no nos daba de almorzar. Ah, sí sí, era así. Por eso se decía siempre... «es que los hijos de la María...» pero es que la María se quedaba con nosotros... los estudios de mil demonios. Y la pobre mujer pues... lo que no hizo por nosotros...».¹⁴⁷

La llegada de la República hizo volver la mirada hacia el crónico analfabetismo de la sociedad rural. No obstante, la voluntad de los entes locales para levantar escuelas podía topar con ciertas ineficacias del sistema que arrastraban escandalosos retrasos. A comienzos de mayo de 1931 «se acordó por unanimidad solicitar la ampliación del grupo escolar para construir en él locales para escuela de párvulos con dos secciones y que se aumente el personal de dichas escuelas con una profesora más para poder atender mejor a la enseñanza». También se acordó por unanimidad adquirir el material y menaje escolar solicitado por los profesores para las escuelas. En julio se aprueba la construcción de un edificio de párvulos por cuenta del Ayuntamiento, solicitando para agilizar las obras la excepción de la subasta y la construcción por administración, «evitándose así continuar en el local inmundo donde en la actualidad se dan las clases a los pequeñuelos, y adelantarse el traslado de las clases unos meses». En septiembre Plano viajó a Zaragoza para conferenciar con el gobernador civil y solicitar la excepción de subasta de las escuelas, pero todavía en septiembre de 1933, pese a estar designados los solares para ello, no se habían construido las escuelas de párvulos, solicitándose además al Ministerio la ampliación de las graduadas. Por lo que aparece en las actas, la renovación del material escolar apenas existía, y había carencias que requerían de una acción de gobierno inminente, como la de la calefacción. En el frío enero de 1934 el director de la escuela escribió al alcalde

¹⁴⁷ Información de Jesús Pueyo, Uncastillo, 16-6-2007.

indicándole que no tenían carbón, «y hallarse además imposibilitada de adquirirlo debido a la cantidad que para material da el Estado, apenas si llega para la adquisición del móvil a cargo de la Escuela». Apunta que «en años anteriores era costumbre de los niños llevar algunas leñas con las que alimentaban las estufas de dicha Escuela, pero que en el año actual, sin duda debido al crudo tiempo y escasearla en sus casas, no siguen aquella costumbre».¹⁴⁸

Pero sería incompleto acercarse al contexto educativo sin percibir lo cerca que éste discurrió del conflicto relacionado con las medidas laicizadoras del Estado republicano. Previamente al 31 la Iglesia católica había desempeñado un papel protagonista en la educación, manteniendo una serie de privilegios en ese terreno desde muchos años atrás. Precisamente eso, la presencia de la Iglesia en la vida pública, había sido objeto de virulentas críticas por parte de republicanos y obreros desde finales del siglo XIX, convirtiendo el anticlericalismo en banderín de enganche de motines y movilizaciones urbanas, y alimentando en el ámbito rural la tradicional crítica hacia los excesos y dejaciones de los sacerdotes con ese discurso moderno, radical y violento que paradójicamente se alimentaba de una fuerte condena moral sobre frailes y monjas. De tal suerte que para muchos la vida monacal de aquellos se identificaba con depravaciones sexuales, con oscurantismo ideológico y con atesoramiento codicioso de riquezas. Ese recelo hacia el clero, aliado tradicional de las elites políticas y económicas del país llegó intacto hasta la Segunda República, iniciándose entonces una labor de desplazamiento del clero de la vida pública a través de una serie de leyes de contenido laico.¹⁴⁹ Sin embargo, al mismo tiempo o solapándose en el tiempo, tendrían lugar las

¹⁴⁸ El Ayuntamiento, claro está, resolvió en sentido favorable aprobando la distribución de 50 sacos de carbón mineral para las escuelas. AMU, Actas municipales, 10-1-1934. Las informaciones anteriores sobre la escuela en AMU, Actas municipales, 6-5-1931; 22-7-1931; 5-8-1931; 2-9-1931; 6-9-1933 y 24-11-1933.

¹⁴⁹ Ley de secularización de cementerios de 19 de enero de 1932; Decreto de disolución y confiscación de los bienes de la Compañía de Jesús de 24 de

primeras muestras de un anticlericalismo popular de corte iconoclasta. La quema de conventos en Madrid de mayo de 1931 sería el primer paso, y desde luego no el único, de la batalla simbólica y política que contenían ese tipo de acciones violentas.¹⁵⁰

Porque en efecto, si bien algunos autores han insistido en el carácter cultural de esas manifestaciones como ataques a una institución que creaba y difundía ritos, concepciones, vivencias y símbolos definitorios de una sociedad tradicional, otros hacen hincapié en las implicaciones políticas del enfrentamiento. Desde una perspectiva histórica, sin minusvalorar lo primero, es obvio que la ira popular iba dirigida contra una Iglesia que había demostrado un maridaje fiel con el periclitado régimen monárquico. Ese carácter político quedó bien patente en las luchas por el poder en el ámbito local, en las que se dirimía la reordenación del espacio público (lugares, sonidos y trayectos pasaron a ser objeto de discusión). Las autoridades republicanas rechazaron las expresiones rituales y limitaron las expresiones externas del culto católico (toque de campanas, procesiones, nombres de calles, crucifijo en las escuelas, cementerios católicos) que implicaban la utilización sacramental del espacio en el que se había llevado a cabo el ritual sagrado. De ese modo se pretendía acabar con la identificación simbólica de la fe católica con la comunidad entera, algo que ahora, en el tiempo de la soberanía popular democrática, ya no tenía razón de ser. Desde entonces la destrucción de objetos religiosos se convirtió en un hecho familiar a todo acto insurreccional en contra del Estado, al igual que lo fue el ataque a otros elementos representativos del poder a escala local (Ayun-

enero de 1932; Ley de Divorcio de 17 de febrero de 1932, Ley de matrimonio civil de 28 de junio de 1932 y Ley de congregaciones religiosas de 2 de junio de 1933.

¹⁵⁰ Pilar SALOMÓN CHÉLIZ, *Anticlericalismo en Aragón. Protesta popular y movilización política (1900-1939)*, PUZ, Zaragoza, 2002. Víctor LUCEA AYALA, «Anticlericalismo (¿tradicional?) en el Aragón rural a finales del siglo XIX», en Alberto SABIO y Carlos FORCADELL, *Las escalas del pasado*, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 2005, pp. 117-196.

tamiento, archivo, cuartel de la Guardia Civil). La Iglesia se convirtió en «chivo expiatorio» de los conflictos políticos, sobre todo en las coyunturas de incertidumbre en las que los rumores ocupaban el lugar de la información y existía una percepción colectiva de un peligro vago pero inminente (como los incendios en Sevilla tras la Sanjurjada, las ejecuciones de frailes en Asturias en octubre de 1934 o la oleada anticlerical tras el triunfo electoral del Frente Popular).¹⁵¹

Es cierto que en Uncastillo no se vivieron los acontecimientos violentos contra la Iglesia que tuvieron lugar en otros lugares, pero la tensión anticlerical constituyó un sonido de fondo que polarizó a los colectivos políticos, sobre todo una vez que asociaciones y sindicatos católicos se decidieron a contraatacar organizando y movilizand o a sus bases. Ya en mayo de 1931 se acuerda no asistir ni pagar gasto alguno para la fiesta de los Bañales, «y para lo sucesivo se precisará que para pagar gasto alguno por fiesta religiosa un acuerdo especial del Ayuntamiento». El asunto de la religión también tocó a las escuelas. Semanas más tarde se aprueba dirigirse al inspector provincial de Enseñanza para que revisase si las clases del Convento «se dan por personal competente que ostente el título correspondiente», y en otra ocasión el concejal radical Gracia se erige en cabeza visible de las medidas laicizadoras en la localidad insistiendo en que se lleve a cabo la retirada de los crucifijos de las aulas. El cementerio también fue objeto de debate cuando se rehizo la pared que separaba el civil del católico, o cuando a propuesta del propio Plano se acordó revisar las cruces para ordenar retirar las que no hubieran satisfecho el arbitrio de adorno de sepultura. Las posiciones al respecto estaban claras. Por un lado el concejal Manuel Cortés como representante de la derecha local trató de hacer respetar a la Iglesia y sus minis-

¹⁵¹ Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA, «La dialéctica de las pistolas...», p. 108. Manuel DELGADO RUIZ, *Lucas iconoclastas. Anticlericalismo, espacio y ritual en la España contemporánea*, Ariel, Barcelona, 2001.

tros, como cuando en mayo de 1932 pidió a la Alcaldía mayor celo a los vigilantes nocturnos, «ya que le consta que son varias las veces que se molesta y ofende al párroco D. Emilio Bayarte, y los agentes no han sido vistos ni una sola vez». Cándido Gracia por su parte se convirtió en el anticlerical más contundente, como cuando en octubre de 1931 quiso que el Ayuntamiento enviase telegramas al Gobierno y a las Cortes «para que se apruebe el asunto religioso todo lo más radical posible». Cortés se opuso, «pues entiende que con ello se lastiman las creencias y se perjudican notablemente los intereses religiosos».¹⁵²

Y en este punto y en casi todos los que afectaban a este tipo de tensiones, Plano se mostró contemporizador y poco amigo de radicalismos. Manifestó, en efecto, «que no tenían sentido tales telegramas», prefiriendo que la legalidad continuase con su curso. Y es que pese a su incuestionable militancia socialista demostró tolerancia hacia el ámbito de las creencias personales, algo que en los pueblos no debía de ser tan infrecuente. Sea como fuere, y aunque es imposible determinar hasta qué punto esa actitud fue fruto de sus convicciones personales o quizás un mal menor que admitir para mantener una convivencia familiar, no cabe duda del sentido común de Plano para intentar mantener unas mínimas cotas de respeto general en la vida cotidiana de Uncastillo, sin revanchas ni cuentas pendientes por saldar. Siempre, eso sí, dentro del marco legal republicano y con especial preferencia hacia los campesinos pobres del pueblo. Otros, sin embargo, parece que sí iban apuntando en la libreta de «pecados» cometidos contra la Iglesia y la propiedad. Probablemente no debió de pasar inadvertido para algunos que en una vieja ermita románica, aunque abandonada, se cantase la «Internacional» durante un acto de confraternización socialista en 1931. Eso es lo que quiere subrayar el probable autor de las cuartillas escritas hacia 1935, el entonces secretario del

¹⁵² AMU, Actas municipales, 20-5-1931; 3-6-1931; 7-10-1931; 3-2-1932; 27-4-1932; 4-5-1932 y 4-5-1932.

Ayuntamiento de Uncastillo Emiliano Bravo, quien se dice conocedor fidedigno de Plano y su actividad política:

«Mucha contra le hicieron, muchas persecuciones e injusticias sufrió por culpa de ellos, pero cuando se vio elevado, con un símbolo de mando y de autoridad en su mano, no pasó por su mente ni tan siquiera la intención de vengarse. Era que en su espíritu no anidaba el Mal. [...]

Hubo amigos suyos que sin afearle su proceder (la virtud no puede ser afeada), llegaron a echarle en cara tener más benevolencia que con ellos, con aquellos sus enemigos.

Es tal su ecuanimidad, transigencia y respeto a las demás tendencias y doctrinas que vemos en infinidad de ocasiones cómo por absoluta unanimidad se le confieren comisiones, votos de confianza, carta blanca en una palabra en el Ayuntamiento de que es Presidente, aun a pesar de estar formado aquél por elementos de todas las tendencias políticas, para resolver infinidad de problemas».¹⁵³

Incluso, aunque nos adelantemos en el tiempo, en un contexto de mayor confrontación política como en mayo de 1935. La prensa «política» salió a la palestra en las sesiones municipales por comentar «de una forma apasionada y tendenciosa» el hecho de haber ocurrido desperfectos en la escalinata de la iglesia de Santa María, «dando a entender que esta alcaldía apoya esos desmanes». Plano protestó públicamente en el Ayuntamiento de los hechos así como de los escritos, y propuso abrir una investigación para castigar al culpable o culpables, anticipándose a los «sectores de ideología contraria que no estuviesen en lo íntimo del asunto o quisieran molestar, según es práctica de mucha clase de prensa política». Y para que no se dudase «de la sinceridad de estas sus manifestaciones» propuso se nombrase instructor del expediente a Manuel Cortés, «ajeno a la política de la presidencia». El propio Cortés manifestó que «la presidencia le merece entera confianza y que cree debe ser ella quien instruya y tramite la información que ha dicho, con cuya práctica se halla conforme». ¿Muestra de confianza o regalo

¹⁵³ Notas cedidas por Antonio Plano Cortés, pp. 5-6.

envenenado? No lo sabemos, pero sí la pericia política de Antonio Plano, quien a esas alturas ya se había bregado en peores lides, entre otras, la responsabilidad de ser diputado provincial.¹⁵⁴

En la Diputación

Cada sábado de aquella naciente República Antonio preparaba su maleta con la cariñosa supervisión de su esposa Benita. Por la mañana un chofer de la Diputación Provincial conducía un automóvil desde Zaragoza hasta Uncastillo para que pudiera asistir, junto con los otros alcaldes diputados, a las sesiones de la Comisión Gestora. Su hijo recuerda que en ocasiones marchó con él a la capital, que se hospedaban en una posada de la calle de San Blas, las pacientes esperas en los pasillos de la Diputación, los caramelos que su padre le daba cuando salía de las sesiones, y los regalos que solía llevar de Zaragoza para él y sus hermanos, casi siempre fruta fresca. Cada sábado Antonio Plano apartaba temporalmente los asuntos semanales de la alcaldía y acometía los de la provincia, adquiriendo mediante dichas reuniones una perspectiva más general sobre las problemáticas que afectaban al resto de las poblaciones. Es posible imaginarlo dirigiendo por primera vez sus pasos hacia la pequeña escalinata del palacio de la plaza de la Constitución, pensando en cómo aquel muchacho del Hospicio había llegado hasta allí, y sintiendo un comprensible nudo en la garganta ante la responsabilidad que inauguraba. Pero es obvio tanto que la vocación política alimentaba su aplomo, respaldado como se sentía por sus correligionarios, como que contaba con la experiencia del cargo de concejal y un precedente cercano, el de Patricio Monguilán, respecto de lo que se podía hacer o dejar de hacer desde la Diputación. Subió por las escaleras alfombradas y entró en el salón de sesiones donde solemnemente daría comienzo, con las saluciones del gobernador Manuel Lorente y el alcalde zaragozano Sebastián Banzo, la

¹⁵⁴ AMU, Actas municipales, 18-5-1934.

gestión republicana de la Diputación Provincial, una institución que pretendía llevar la modernidad y la cultura a todos los rincones de la provincia, algo que como se verá ni siquiera los propios diputados entendían de igual modo. Por su parte, Plano miraría por los asuntos de Fomento, Cultura, Sanidad e Instituto de Higiene, que era la comisión en la que participaría junto con Ernesto Montes y Luis Orensanz.¹⁵⁵

Su primera proposición tuvo que ver, y desde luego que no fue casual, con el Hospicio y una subvención que había quedado pendiente a la Asociación de Antiguos Alumnos del mismo. Fue al tiempo elegido representante de la Diputación en la Junta de Estadística de Trabajo. Ambas facetas, la de la beneficencia y en particular la atención a la situación del Hospicio, y los problemas relacionados con el ámbito del trabajo en esas dependencias, así como las concesiones de plazas de manera equitativa por parte de la Corporación provincial, ocuparon las intervenciones de Plano más brillantes e independientes. Además de la ya sabida intención de fomentar las obras en caminos vecinales, de las que se gestionaron centenares, esa atención a la infancia, a la dignificación laboral y el sumo cuidado con que contemplaba cualquier atisbo de corruptela o prebenda en las gestiones públicas, dieron un sentido unitario a su participación como diputado socialista de la provincia. Y un tono de independencia que, por fidelidad a sus ideas le hizo protagonista de algún incidente dialéctico y, también, defensor de posturas incómodas para su posición política minoritaria. Aunque quizás fuera precisamente esa postura minoritaria como único representante del Partido Socialista en la corporación lo que le hiciera sentirse con la libertad de aconsejar, sugerir, denunciar y opinar sin ningún tipo de cortapisa.¹⁵⁶

¹⁵⁵ Información de Antonio Plano Cortés, 11-10-2007.

¹⁵⁶ Los diputados que componían la corporación pertenecían en su mayoría al sector republicano. Luis Orensanz, Fernández Casas, y José Artigas pertenecían al PRR, al que se había unido el Partido Republicano Autónomo de Aragón (PRAA), con Carceller como diputado representante; José Pellicer y Joaquín Borao eran de IR, y tanto Luis Zarazaga como Ernesto Montes se encontraban

Fue él el encargado de dar espacio a una solicitud de los enfermeros de los Establecimientos de Beneficencia de la Diputación para poder asociarse a un sindicato obrero, algo prohibido hasta la fecha para esos trabajadores. En la UGT rápidamente se gestionó su incorporación a la organización de enfermeros y similares, acordando la Diputación dejar libertad de asociación para sus trabajadores. En julio vuelve sobre el tema, pidiendo que se reorganicen los servicios de los enfermeros, «de modo que pueda establecerse la jornada de ocho horas, ya que ahora hay días que están quince horas de servicio», algo que no tuvo muy buena acogida entre el resto de diputados, relegando el asunto a un nuevo estudio para poder hacerlo «sin que aumente el personal». En agosto Plano saca a la luz «el despido de muchos obreros de los Talleres del Hospicio», rogando información sobre el asunto, y denunciando asimismo un caso de abuso en un taller de carpintería de un asilado. En el mes de noviembre la ponencia de Beneficencia da cuenta de un escrito de la Sociedad de Cocineros «Arte Culinario Zaragozano» solicitando, «debido a la angustiosa situación en que se encuentra por la gran crisis de trabajo», que se contrate personal profesional en los establecimientos de la Diputación, donde «de siempre» vienen realizando ese trabajo las religiosas. El dictamen resuelve desestimar la petición por no haber partida presupuestaria, pero Plano lo impugna «por entender que debe accederse a la petición de los cocineros, pues aparte de que con eso se proporciona trabajo a una clase que hoy atraviesa gran crisis, se consigue que los asilados coman mejor». En enero de 1932 firma un dictamen junto a Borao para mejorar la situación económica de los maestros provinciales de las Escuelas del Hospicio, y en marzo nuevamente saca a la luz un problema laboral, denunciando que en las obras del

cercanos al republicanismo de orden del PRR. Enrique BERNAD (COORD.), *República y republicanos. Socialistas y republicanos de izquierda en Zaragoza y provincia. 1931-1936*, Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Zaragoza, 2003. Jesús BUENO, Concepción GAUDÓ y Luis GERMÁN, *Elecciones en Zaragoza-capital durante la II República*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1980.

camino de Tauste a Luceni se hacía «labor política» en la admisión de obreros por parte de los capataces, y señalando que con la denuncia «no ha querido sino llamar la atención de la Corporación para evitar partidismos». En la sesión siguiente el presidente Montes contestó con un informe del ingeniero encargado de las obras en el que se manifestaba que la Diputación no tenía que ver en la contratación. Plano le dio la razón, y admitió que «es uno de los pocos casos en los que se hizo eco de determinadas indicaciones [...] y que luego ha sabido que todo es obra de unos cuantos descontentos con el alcalde». No hubo de ser trance agradable y, sobre todo, restó crédito político a Plano.¹⁵⁷

Fueron por otra parte frecuentes las alusiones y peticiones relacionadas con las condiciones higiénicas y laborales de los asilados del Hospicio, no sólo de Zaragoza sino también de las instalaciones de Calatayud o Tarazona. En agosto de 1931 hace público que en el de Calatayud muchos de los internos «padecen una intensa enfermedad en los ojos», solicitando una visita de inspección para que se tomen las medidas curativas oportunas. En noviembre de ese mismo año Borao, Artigas y el propio Plano presentan una moción en la que

¹⁵⁷ ADPZ, *Libros de actas Comisión Gestora*, núm. 260, sesiones del 6-6-1931; 18-7-1931; 8-8-1931. Parece ser que el despido de los obreros fue acordado por la Diputación anterior, la última de la Dictadura, al suprimir en los reglamentos de los Talleres una práctica que se venía realizando desde mucho tiempo atrás, el trabajo para los talleres de fuera de la Casa. El «caso vergonzoso» de que da cuenta, aunque ya se había dado cuenta al Tribunal Industrial, consistió en que «el carpintero Tomás Martín, habitante en la calle de Zapata, solicitó y obtuvo la salida del asilado Félix Pons para prestar sus servicios en su taller, recibiendo una comida deficiente y 10 pts. semanales. Ruega que se eviten estos abusos, y si se busca a los asilados trabajo, que se procure sea en buenas condiciones». Lo de los trabajadores de cocina en ADPZ, Leg. 260, sesión de 7-11-1931, y el asunto de los maestros del Hospicio en la sesión de 9-1-1932. Lo de la «labor política» en ADPZ, *Libros de actas Comisión Gestora*, núm. 261, sesión de 12-3-1932. Conflictos de este tipo fueron frecuentes dada la elevada actividad en lo tocante a los caminos vecinales por parte de la Diputación, a donde llegaban denuncias y conflictos entre patronos, contratistas y obreros. Por ejemplo, en las obras del camino de Piedratjada al apeadero de Ortilla surgió un conflicto por la cuestión de los jornales, siendo los obreros defendidos por el Comité Paritario de obras públicas de la provincia, en la misma sesión de ADPZ, *Libros de actas Comisión Gestora*, núm. 261, sesión de 12-3-1932. La respuesta de Montes y la rectificación de Plano en la sesión de 18-3-1932.

recordaban «a sus dignos compañeros» de corporación la inclusión en los presupuestos de la cantidad necesaria para la reorganización del Laboratorio de Orientación profesional del Hospicio Provincial, servicio «que es de gran utilidad y provecho». Poco después Plano, junto a Fernández Casas, Carceller y Artigas, sale de visita a los sanatorios de Boltaña y Pineta «para comprobar el trato, tanto terapéutico como de alimentación que se da a los pensionados por esta Diputación». Se interesó igualmente por la construcción de un nuevo Hospital con mejores condiciones sanitarias y por la agilización del proyecto, así como por la mejora de los servicios en el Hospicio. Pero fue con el caso de un asilado de Uncastillo donde con mayor claridad se reveló la fe de Antonio Plano en el ideal educativo republicano, y en las posibilidades que centros como el Hospicio, donde él se había criado, podían proporcionar para el desarrollo de los jóvenes a través del trabajo.¹⁵⁸

El caso comenzó con la solicitud de Amado Corruçhaga Olano, de 14 años de edad, pidiendo el reingreso en el Hospicio. Plano afirma en la ponencia que salió de él sin autorización «debido a los malos consejos de varios compañeros que burlaron su inexperiencia», y en nombre de la Comisión de Beneficencia pide su reingreso valorando que «se trata de un muchacho huérfano de padre y madre, que

¹⁵⁸ ADPZ, *Libros de actas Comisión Gestora*, núm. 260, sesión de 28-8-1931. La moción y la aprobación de la visita de inspección a los sanatorios del Pirineo en la sesión de 21-11-1931. En diciembre se hace eco de la preocupación de algunos padres para que las puertas del Hospicio permanezcan abiertas «para uso de los niños y en evitación de posibles atropellos por tranvías y demás vehículos», ADPZ, *Libros de actas Comisión Gestora*, núm. 260, sesión de 26-12-1931. En la sesión de 13-8-1932 «se ofrece para la más pronta construcción del nuevo Hospital y pide una inspección para que muchos que, según sus noticias no están enfermos, se despidan del Hospital para dar cabida a los que realmente lo necesitan». Sobre la mejora del Hospital, fue Carceller el que inició las intervenciones tras visitar las instalaciones: «el edificio es sencillamente horrible. Es un infierno dantesco. La sala de crónicos es un lugar inundo, repugnante». Y se habla de construir otro Hospital al modo moderno, «en forma de rascacielos, con ascensores para el transporte de alimentos». ADPZ, *Libros de actas Comisión Gestora*, núm. 260, sesión de 20-6-1931. También propuso medidas para mejorar los servicios del Hospicio, en sesión de 17-10-1931, como visitar otros centros «de los cuales sea buena noticia la organización de los servicios».

arrepentido de su salida del establecimiento benéfico abriga los mayores propósitos de aplicación y laboriosidad, y de observar en lo sucesivo una conducta irreprochable». Carceller hizo dura oposición, pese a figurar en la misma ponencia, por haber existido huida del Hospicio, detención y reingreso, y una nueva salida mediando solicitud de familiar y gestión del propio Plano. Juzga como no disculpable la acción del chaval «por tratarse de una verdadera fuga», y sobre todo por ser «muchacho listo al que se le había matriculado en el Instituto con objeto de haberle dado una carrera». Fernández Casas tuvo en cuenta «las pruebas de arrepentimiento del muchacho y entiende que se debe ser tolerante con los momentos irreflexivos de la juventud», y de modo parecido argumentó Artigas. Plano intervino entonces admitiendo su gestión como alcalde para facilitar la salida del hospiciano, «pero cree que la Corporación no debe mostrarse intolerante con un jovenzuelo que, si cometió una mala acción, fue inducido por otros muchachos, [...] que ahora está arrepentido y si la Diputación lo admite, hará una buena obra evitando la degradación del muchacho que actualmente empieza a frecuentar tabernas y seguramente habría de adoptar definitivamente malísimas costumbres». Fue el único caso de un hospiciano debatido tan detenidamente en la Comisión Gestora, un debate en el que salió a la luz la cercanía vital de Plano hacia la problemática de los jóvenes hospicianos, pero también posicionamientos políticos de confrontación dentro de la misma Comisión que se avivarán durante los meses siguientes.¹⁵⁹

Casi tan interesantes o más son las intervenciones de Antonio Plano encaminadas a garantizar la transparencia democrática y administrativa que superase la caciquil concesión de prebendas y favores. Por junio de 1931 hubo discrepancias sobre la concesión de una ayuda para cursar estudios en París y Roma solicitada por la pintora Joaquína Zamora

¹⁵⁹ ADPZ, *Libros de actas Comisión Gestora*, núm. 261, sesión de 9-4-1932. Finalmente todos los diputados menos Carceller votaron a favor de la información presentada por Plano.

Sarrate, a la sazón cuñada del diputado Carceller. Artigas alertó algún tiempo después sobre «caciquismo» en la contratación de empleados. Después fue el tema de las curas y los certificados de pobreza expedidos por el personal de Beneficencia. A partir de las elevadas partidas de gasto en material de curas se investigaron «abusos» en la facilidad de expedición de muchos certificados de pobreza y la circulación entre los enfermos de la documentación, «practicando al efecto las enmiendas y raspaduras necesarias para conseguir su propósito». Fernández Casas propone una inspección que controlase «el ingreso en los consultorios sólo a los que realmente tuvieran derecho», y Carceller la creación de un padrón de beneficencia «con lo cual se evitaría el abuso tan corriente de facilitar certificaciones de pobreza a quienes en realidad no son pobres». Plano estuvo de acuerdo con este tipo de medidas, «depurándose todas las anormalidades que puedan existir, sin andarse en medias tintas», denunciando además un caso denegado que fue admitido «cuando un empleado del Hospicio lo recomendó». ¹⁶⁰

Las suspicacias se tornaron en abierto enfrentamiento con motivo de un debate del mismo cariz sobre la concesión de plazas de enfermos en los sanatorios provinciales de tuberculosos. Plano propuso que se concedieran «por riguroso turno de solicitud», algo que recibió alguna crítica de Fernández Casas y sobre todo, de Luis Orensanz, para quien la denuncia de Plano venía motivada por las quejas de los enfermos del Hospital Provincial al estimar que se prescindía de ellos al

¹⁶⁰ ADPZ, *Libros de actas Comisión Gestora*, núm. 260, sesión de 13-6-1931. En septiembre de 1931 José Artigas lee «un escrito alertando sobre la posibilidad de que con motivo de unas plazas de la Corporación se actúe de manera caciquil», recibiendo las críticas del presidente Montes y Carceller, quien dice ser «ilógico e injusto hablar de caciquismo». Vuelve a la carga sobre eso en octubre, en concreto sobre unos obreros contratados en el Hospicio. Dice, probablemente con gran sorna, que debe establecerse un turno entre los Sres. Diputados para la designación de empleados eventuales, «para atender a los compromisos que cada uno tenga contraídos». Plano afirma no haber contraído compromiso alguno ni haber propuesto a nadie. Las intervenciones de Artigas en las sesiones de 12-9-1931 y 24-10-1931. El debate sobre los abusos en el Hospital en ADPZ, *Libros...*, núm. 260, sesión de 19-12-1931.

designar las plazas para el Sanatorio de Boltaña. «Las cosas hay que decirlas así, claramente». El tono de la discusión subió con la contestación de Plano, quien indicó que Orensanz «ya ha dicho lo que tenía que manifestar, y es que en la designación de enfermos se atiende preferentemente a la influencia de los Sres. Diputados». Eso encendió el ánimo de Orensanz, quien dijo que «se ha tenido en cuenta la necesidad y no la recomendación». Carceller abogó por Orensanz y dijo no haberse cometido injusticia alguna, y Montes defendió a Plano al indicar que «no ha podido habar de injusticias, sino que solamente se ha referido a la conveniencia de regular la provisión de vacantes en los sanatorios». Un debate calcado en motivo y protagonistas tuvo lugar con ocasión de la construcción de un edificio para colonias escolares de hospicianos en Ágreda. Orensanz daba cuenta de haberse planificado expediciones de 100 muchachos durante veinte días, que «producirán inmediatos beneficios en la resistencia orgánica de los asilados, fortificándolos y haciéndolos más aptos para su desenvolvimiento en la vida». Plano volvió a manifestarse en solitario, afirmando estar conforme con todo, «siempre que los beneficios de las colonias alcancen a todos los asilados, pues él sabe bien cómo en aquella Casa hay también castas, y por ello desearía saber en qué forma se ha hecho la selección».¹⁶¹

En el mismo verano en el que se discutían estas cuestiones tendría lugar un hecho trágico que sacudió de lleno a la propia Comisión, el asesinato de José Artigas en Letux a raíz de un conflicto de carácter clerical. Luis Orensanz leyó una comunicación oficial en la que se le hacía «mártir de la

¹⁶¹ Lo de las plazas del Sanatorio de tuberculosos en ADPZ, *Libros de actas Comisión Gestora*, núm. 261, sesión de 9-1-1932, y el asunto de las plazas de las colonias juveniles en la sesión de 9-7-1932. Carceller contestó que desconoce los nombres de los muchachos que han de formar parte de las colonias. Él dio la orden de que precediera a la designación de personas el reconocimiento médico, siguiéndose además la pauta razonable, dada la estrecha convivencia que ha de observarse en la colonia, de enviar asilados mayores con los chicos más pequeños». Artigas volvió sobre el asunto al denunciar que en los establecimientos provinciales «hay empleados [...] que sólo asisten a las oficinas en día de firma de nómina» (sesión de 30-7-1932).

República», y haciendo constar el dolor de la Corporación por la pérdida, asistiéndose al entierro en Letux junto a otras autoridades de la provincia y leyéndose diversos mensajes y telegramas de condolencia. Plano habló «en nombre del Partido Socialista», uniéndose al pésame y «lamentándose de estos actos criminales, debido en gran parte a que todavía existen en los pueblos los odiados caciques que se atreven hasta con las autoridades republicanas». Montes también pide gestiones para «robustecer la autoridad de los alcaldes en los pueblos», y en general todos, tras condenar el hecho, pidieron que la Corporación se presentase como acusación privada en el caso. La sesión se cerró con ese acuerdo unánime, algo que no venía ocurriendo con mucha frecuencia hacia mediados de 1932, o al menos no sin encendidos debates que respondían a situaciones partidarias como la progresiva enemistad en el seno del gobierno entre republicanos y socialistas.¹⁶²

Las diferencias alcanzaron su máximo apogeo durante el desarrollo de los debates políticos. En los primeros momentos de Comisión Gestora el posicionamiento de la misma respecto de la política afectaba al modo de organización del Estado, predominando la prudencia respecto de la forma de gobierno. Así, en mayo del 31 se declinó participar en un encuentro de figuras de «la cátedra y el foro» para tratar de la organización regionalista de Aragón por si se optase por una República federal. La febril actividad en torno a los caminos rurales o la Beneficencia provincial relegó a un segundo plano la política, aunque de cuando en cuando la «cuestión social» salía a la luz cuando se lamentaban sucesos violentos ocurridos en la capital con ocasión de las huelgas. En mayo de 1932 la política volvió a ocupar a la Comisión, con ocasión de los debates parlamentarios del Estatuto Catalán. Zarazaga presentó las conclusiones de un escrito aprobado en el Ayuntamiento de Calatayud contra la apro-

¹⁶² Lo de Artigas en ADPZ, *Libros de actas Comisión Gestora*, núm. 261, sesión de 20-8-1932.

bación del Estatuto, «por ir en mengua de la unidad de la Patria» y avanzar en la destrucción «de la unidad territorial, la unidad de pueblo y la unidad de poder del Estado español», solicitando un modo para que todos los diputados de la circunscripción votasen en contra del Estatuto. De igual modo Orensanz llevó la oposición de la Cámara de Comercio y la Federación Patronal «contra los extremismos del Estatuto Catalán», simpatizando con las conclusiones del Ayuntamiento bilbilitano, dado que «la Diputación de Zaragoza es opuesta a todo lo que implique separatismo franco o encubierto». Antonio Plano, pese a su posición minoritaria, no dejó de manifestar que «a su juicio, lo que se pretende hacer con esa campaña contra el Estatuto Catalán es una maniobra política, y que procede, estando el asunto en manos de las Cortes, atenerse al resultado de la deliberación». Montes medió al igual que en otras ocasiones, significando que el momento de manifestar la opinión mayoritaria era antes de la votación, y que dado que Aragón ya contaba con un Estatuto que preconizaba la descentralización administrativa, tan sólo se protestaba de los «extremos nocivos para la unidad y el interés general de la Patria». Antes de aprobarse la adhesión de la Diputación a la actitud de la Cámara de Comercio y el Ayuntamiento de Calatayud, Antonio Plano pudo decir «que el Partido Socialista no se ha decidido aún y por ello él, soldado disciplinado, ha expuesto su opinión de que se deje el problema a la solución de las Cortes».¹⁶³

¹⁶³ ADPZ, *Libros de actas Comisión Gestora*, núm. 260, sesión de 9-5-1931. En junio de ese mismo año y a instancia de la alcaldía de Sádaba, se convocó a una Asamblea magna de representantes de las tres provincias aragonesas para formar el Estatuto de Aragón y someterlo a las Cortes Constituyentes. El presidente Montes opta por solicitar «toda clase de asesoramientos» al respecto. El debate sobre el Estatuto Catalán en ADPZ, *Libros...*, núm. 261, sesión de 7-5-1932. Las posturas sobre el Estatuto provocaron una fractura política no sólo entre partidarios y beligerantes, sino también en el seno de la familia política socialista. José Algora, uno de los más carismáticos nombres del socialismo zaragozano republicano, protagoniza una oposición personal en las Cortes al proyecto, en contra de los postulados seguidos por el partido y el sindicato socialista, siendo expulsado de ambos órganos en junio de 1932. Esta discrepancia provocó una gran fractura dentro del socialismo, pues Algora consiguió arrastrar

Un mes después, a principios de junio de 1932 surgía un nuevo debate sobre la correlación de fuerzas políticas en la propia Diputación y el resto de instituciones, interesante por cuanto revela una dinámica interna que en un momento dado produce enfrentamiento y acusaciones mutuas. Carceller da cuenta de un agrio debate habido en el Ayuntamiento zaragozano con el socialista Bernardo Aladrén, quien afirmó «que la preponderancia del Partido radical en la corporación de la Comisión Gestora absorbía la actuación de los demás diputados, es decir, torpedeaba las iniciativas, gestiones, etc.» Curiosamente, y pese a subrayar que los miembros de la Comisión Gestora habían prescindido de toda política «procurando hacer labor meramente administrativa al margen de toda bandería», apeló a la «caballerosidad» de Plano para que se manifestase sobre las acusaciones de Aladrén. Plano, prudente y fiel a su organización en todo momento, prefirió no contestar sin conocer antes el caso por noticias de sus correligionarios, aunque indicó a Carceller que quizás el momento adecuado para contestar a Aladrén hubiera sido en la sesión municipal. Carceller se mostró incisivo, y hasta agresivo, hacia los socialistas: «la preponderancia numérica del partido radical no ha opuesto ningún obstáculo a la actuación de las otras facciones políticas, [y] que el partido socialista tenga o no los representantes que proporcionalmente a su importancia en la Provincia le correspondan, es cosa que no nos compete, [siendo esa] cuestión a ventilar en los Comités políticos». Plano, Artigas y Orensanz eran partidarios de demorar el asunto hasta tener más información, pero Carceller insistía en arrancar una respuesta a la cuestión de si había habido torpedeo por parte de la mayo-

consigo muchos adeptos. De hecho, sólo acudieron 80 de las 180 secciones de la UGT de la provincia a la asamblea provincial extraordinaria celebrada en Zaragoza para tratar del tema. La consecuencia política más grave fue la pérdida de votos y el que Algora fuera considerado principal responsable del descenso electoral socialista en la capital en 1933. Pilar Maluenda, voz «José Algora», en Bernad (ed.), *República y republicanos. Socialistas y republicanos de izquierda en Zaragoza y provincia. 1931-1936*, Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 2003, pp. 243 y ss.

ría radical hacia las minorías socialista y radical-socialista. Plano zanjó la cuestión indicando escuetamente que por su parte no tenía nada que reprochar a la mayoría radical.¹⁶⁴ Quizás fuera entonces totalmente sincero en lo personal, pero no en el terreno político, a tenor de la propuesta de dimisión formulada pocos meses más tarde por el propio Antonio Plano y el diputado Joaquín Borao, una propuesta que era extensible al resto de diputados. El escrito no dejaba lugar a dudas sobre los motivos de la propuesta:

«A la Excma. Diputación Provincial de Zaragoza. Los abajo firmantes, pertenecientes a la Comisión Gestora de la Diputación Provincial, tienen el honor de presentar la siguiente moción de carácter urgente: es de todos sabido que la constitución de la actual Comisión Gestora se realizó en condiciones de anormalidad, en aquellos momentos aceptable, por nuestro amplio criterio de transigencia, que hizo que algunos partidos políticos como el Progresista, Acción Republicana, etc., quedaran sin representación, y otros como el Radical-Socialista y el Socialista, cuyos efectivos políticos, de gran volumen, son evidentes y están representados en proporción inferior a la que efectivamente les corresponde. Todo esto que se pudo aceptar por creer sería efímera la vida de la Comisión Gestora, no es admisible hoy porque da lugar a suspicacias que queremos creer que son infundadas y que hay que evitar para que los pueblos y ciudad miren confiados el organismo que administra sus intereses generales. Por otra parte creemos que la falta de actividad de esta Comisión Gestora responde indudablemente a la falta de confianza en las propias fuerzas nacida a su vez de la aludida autoridad moral ausente. Por todo ello tenemos el honor de proponer que todos los miembros de la Comisión Gestora pongamos nuestros cargos a disposición del Excmo. Sr. Gobernador Civil, única forma de conseguir la fuerza moral necesaria para laborar imparcial y eficazmente previa reorganización por la citada autoridad en forma ponderada de la Comisión. Zaragoza, 22 de octubre de 1932, Joaquín Borao, Antonio Plano.

¹⁶⁴ ADPZ, *Libros de actas Comisión Gestora*, núm. 261, sesión de 4-6-1932.

Estamos en octubre de 1932, y la Comisión se constituyó con carácter provisional en abril de 1931. Sin embargo, las reticencias a considerar la urgencia del escrito y someterlo a votación en esa misma sesión, no se hicieron esperar, votando todos los diputados menos los firmantes en contra de la consideración urgente del escrito. En la siguiente sesión Plano esperaba que la propuesta figurara en el orden del día, pero creyó mal. Hubo reproches mutuos y excusas, y alguna apelación a hacer «un esfuerzo por mantener la armonía de siempre». Pero volvió a resolverse posponer el asunto hasta un informe de la ponencia correspondiente. Eso, sin embargo, no hacía sino demorar *sine die* la inclusión de la propuesta en el orden del día de la Comisión, dado que Plano y Borao no podían asistir a las reuniones de las ponencias en las que se incluían los asuntos a tratar. Pasaron los días, los Comités de los partidos políticos tampoco se ponían de acuerdo respecto de la proporción de representatividad en la Comisión, y el gobernador tampoco resolvía. Antonio Plano comunicaba el 19 de noviembre de 1932 que los Comités del Partido Socialista y del Radical Socialista habían indicado a sus representantes que cesasen como diputados. Borao dejó de asistir sin previo aviso, pero Plano prefirió comunicar en persona que «siguiendo las indicaciones del Comité de su Partido, seguirá esta misma conducta». Entre muestras de agradecimiento por la «delicadeza» de Plano, recomendaciones de continuidad hasta el pronunciamiento del gobernador y freno a su postura «radical», termina este primer período de Antonio Plano como diputado provincial de Zaragoza, con el regusto amargo de contemplar cómo el enfrentamiento político se había constituido en obstáculo insalvable para llevar el desarrollo y la cultura a pueblos y comarcas.¹⁶⁵

Atrás quedarían muchas otras intervenciones en la Comisión para promover los caminos vecinales, facilitar roturaciones en terrenos de la Diputación (Montañana), o sub-

¹⁶⁵ ADPZ, *Libros de actas Comisión Gestora*, núm. 261, sesiones de 22-10-1932, 29-10-1932, 4-11-1932 y 19-11-1932.

vencionar obras de sanidad casi siempre relacionadas con «el abastecimiento de aguas, el saneamiento de zonas palúdicas o la evacuación de inmundicias». No sólo quedó constancia de la disciplina y personalidad de Plano en las actas de la Comisión, sino también de su crecimiento como político y gestor. Pese a la buena voluntad de los diputados, la inicial conjunción republicano-socialista fue abriendo grietas conforme se sucedían los debates en el Congreso y las disputas entre la coalición. Como algún historiador ha dicho, aquella unión empujó la llegada de la República, pero muy pocos habían pensado en el después, en el modo de gobierno y en el alcance de las reformas. No pasaron muchos meses para que Plano y los representantes del partido Radical Socialista se autopercibieran en franca minoría y manifestasen sus diferencias respecto a la gestión de la mayoría radical. No sólo en el contenido de la administración de los recursos, sino también en el empeño en la transparencia de las formas democráticas. Pero quizás una intervención, en apariencia menor, dé cuenta del profundo sentido que Plano otorgaba a su administración política y a los símbolos representativos. En septiembre de 1931 pedía que se colocase en el testero del salón de sesiones una alegoría de la República, tan frecuentemente personificada como mujer y gorro frigio, a veces con espada sobre el dragón oscuro de la monarquía y el caciquismo, otras proyectando su mirada serena y clara. Quizás con esa imagen, o quizás con la del malogrado Artigas con quien al parecer mantenía una buena amistad, marchase algún día del final del verano de 1932 hacia su pueblo, donde tantas cosas quedaban por hacer.¹⁶⁶

¹⁶⁶ ADPZ, *Libros de actas Comisión Gestora*, núm. 260, sesión de 12-9-1931. El retrato de Artigas fue colocado en el despacho de la presidencia para «perpetuar su memoria», ADPZ, *Libros...*, núm. 261, sesión de 27-8-1932.

Capítulo 4

LA SENDA DE OCTUBRE

Entre el humo de los cigarros y el calor de la chimenea fueron leídas en alta voz las noticias que traía la prensa sobre Casas Viejas, un pequeño pueblo de la provincia de Cádiz donde la Guardia Civil se había ensañado con los campesinos levantados en armas. Ni el tintineo de algún platillo de café ni el de las traviesas cucharillas distraían la atención de los asistentes, que enfundados en sus gruesas prendas de lana y piel animal habían peregrinado hasta el Centro después de haber trabajado toda la mañana en el campo o el oficio. El relato a veces, espoleado por la crudeza con que se detalla la masacre y como con el objeto de superar la estupefacción inicial, es acompasado con algún comentario indignado contra los guardias que habían tomado parte en la tragedia. En aquella pequeña aldea, como en otros puntos de la comarca, y meses después del fiasco de la intentona de enero de 1932, los anarquistas intentaron de nuevo traer la revolución al toque del reloj, cuando este marcara las ocho de la tarde del ocho de enero de 1933. Los quejidos de la madera del piso acompañaban al lector cuando detalló el primer balance de dos guardias muertos con que se saldó el tiroteo de los paisanos contra los guardias, y el posterior castigo infligido a los que se guarecían en la cabaña del viejo carbonero «Seisdedos». Allí se refugiaban algunos familiares suyos que habían tomado parte en el levantamiento. Hubo más tiros y otro guardia muerto cuando la tropa quiso entrar en la cabaña. Luego el capitán al mando ordenó incendiar la choza. Algunos de sus ocupantes ya estaban muertos por las balas de los rifles y las ametralladoras y dos más fueron acibillados cuando salían huyendo del fuego. La nieta de Seisdedos salvó la vida al llevar un niño en brazos. El saldo final fue de ocho muertos, seis de ellos calcinados dentro de la choza,

entre ellos el propio «Seisdedos». La insurrección anarquista de Casas Viejas había finalizado en aquel 11 de enero de 1933.¹⁶⁷

Pero la cosa no acabó ahí. El capitán al mando continuó con la búsqueda de los dirigentes del movimiento, matando nada más comenzar a un viejo de setenta y cinco años que desesperado pedía clemencia. Apresaron a otros doce, los esposaron y arrastraron hasta la choza de «Seisdedos», y allí los asesinaron entre humillaciones y vapores de coñac. Tan sólo uno de ellos había participado en el movimiento. Ahora sí, la tragedia había concluido. Y aunque la verdad había tardado en saberse, se había aireado merced a un debate parlamentario y una investigación extraoficial. Casas Viejas, para la CNT, pasó a ser un eslabón más de la funesta cadena que venía de Castilblanco y Arnedo. Para Azaña y el gobierno, acosado desde izquierda y derecha por la excesiva crueldad con la que había reprimido el levantamiento, no existía en cambio culpa alguna ni otra alternativa en un caso como aquél de «rebeldía a mano armada contra la sociedad y el Estado». A partir de ese momento, la oposición de la CNT privó a la República de un apoyo social fundamental, en un tiempo de recrudescimiento de la crisis económica y de crispación de las relaciones en el mundo del trabajo. Al mismo tiempo, el catolicismo, amparado por los grupos dominantes que habían sido desplazados de las instituciones con la llegada de la República, arraigó como un movimiento político de masas con el apoyo de miles de pequeños y medianos propietarios rurales. En apenas dos años estaba en condiciones de lanzar una ofensiva desestabilizadora, y no dudaron en ponerla en práctica a través del paraguas político de la CEDA, y de avivarla hasta conseguir echar abajo las reformas y extirpar la amenaza revolucionaria. La ofensiva católica contra la República, que tuvo su cenit durante los debates

¹⁶⁷ Jerome MITZ, *Los anarquistas de Casas Viejas*, Diputación de Granada y Diputación de Cádiz, Granada, 1999. Julián CASANOVA, *República y guerra civil...*, p. 70.

por la Ley de Confesiones y Congregaciones Religiosas de febrero de 1933, no caminó sola. Ya hubo ruido de sables con la Sanjurjada del verano de 1932, y desde luego que a partir del 1933 la obstrucción la practicaron al unísono las organizaciones patronales, el Partido Radical, la emergente ultraderecha y los graves disturbios y huelgas anarquistas tras los sucesos de Casas Viejas.

La República era cogida por lo que Azaña denominó la «tenaza» de anarquistas y monárquicos. Si los primeros ya habían mostrado su predilección por la calle para mostrar su descontento, los segundos estaban comenzando a aficionarse. Los dos caballos de batalla de propietarios y hombres de negocios, la implantación de los jurados mixtos y todo lo tocante a la reforma agraria, se convirtieron en protagonistas de mítines y llamamientos a la desobediencia. Los jurados, a los que los trabajadores acudían para dirimir denuncias e incumplimientos laborales, fueron percibidos como inaceptable intromisión en la gestión empresarial por parte de los propietarios, y como muestra de la tibia componenda de los socialistas con el poder por parte de la CNT. Por otra parte la reforma agraria fue identificada como una grave amenaza contra la propiedad del campo y la ruptura de la armonía de clases del viejo paternalismo caciquil, aquel que conseguía aglutinar a los colectivos campesinos bajo la bandera de los «intereses comunes» de la comarca. De repente parecía que el orden y la religión, supuestas esencias del mundo rural, eran atacados por aquella agitación revolucionaria que venía de las ciudades y la modernización, encarnada en los socialistas. El discurso agrarista ganó enteros entre pequeños y medios propietarios, que se sintieron ignorados en sus intereses por el sindicato agrícola socialista (FETT). La elección en abril de 1933 de los ayuntamientos designados en 1931 por el artículo 29 de la Ley electoral, y que habían venido siendo gestionados por comisiones gestoras, confirmaron la pérdida de apoyos a los socialistas y el ascenso de la derecha, que se vería consagrado en los comicios a Cortes del mes de noviembre.

1933. Pulso entre contendientes

La tensión en las relaciones laborales no fue sólo cosa del meridional español. Al igual que en otros muchos pueblos de Aragón, país de pequeños e ínfimos propietarios, en Uncastillo se incrementó la actividad de las comisiones y las reuniones de las organizaciones de clase para dirimir los conflictos agrícolas. De esa tensión daba cuenta el propio Antonio Plano en la famosa carta dirigida al ministro de Agricultura, firmada por los alcaldes de Cinco Villas, demandando la devolución de los comunales y el fin de las demoras sobre ese asunto. Con su brillante y fresco estilo, hace gala de su característica resolución política, siendo un documento dotado de buenas notas estilísticas: claridad, precisión, argumentación. Habla de la historia de la demanda de los comunales, de cómo muchos pensaron en la República como el fin de los males colectivos y de cómo esos muchos contuvieron reclamaciones por no entorpecer la vida política del régimen. Pero también habla del paso de los meses y de impaciencia, de decepción, de un posible movimiento revolucionario, y de una amenaza, la de la dimisión en bloque, de no llegar en breve un proyecto de ley regulando la devolución de los comunales. Esa reunión, cuya importancia en la vida política de la comarca y de la región ha sido destacada en diversos trabajos, tuvo lugar en Uncastillo el 28 de marzo de 1933, y en ella se puso de manifiesto la contradicción existente entre el discurrir parlamentario y las necesidades locales con las que aquella generación política se hallaba comprometida. Tanto, que en la carta se planteaba un ultimátum a un gobierno del cual el Partido Socialista formaba parte en sus carteras de Obras Públicas (Prieto), Instrucción Pública (Fernando de los Ríos), y Trabajo (Largo Caballero). La carta que Antonio Plano redactó y que fue firmada por los alcaldes, dice en su texto íntegro:

Excmo. Sr: Antonio Plano Aznárez, alcalde de la villa de Uncastillo (Zaragoza), en nombre y representación de los alcaldes de Sádaba, Tauste, Biel, Fuencalderas, Biota, Asín, Navardún, Malpica de Arba, Ejea de los Caballeros, Sos del

Rey Católico, Farasdués, Pradilla de Ebro, Orés, Luesia, Luna, Castejón de Valdejasa, Sierra de Luna, Sigüés, Layana, Murillo de Gállego, Undués de Lerda, Erla, Remolinos y Valpalmas, tiene el honor de dirigirse respetuosamente a V.E., manifestándole lo siguiente:

En ocasiones anteriores, unas veces directamente, otras por voz de nuestros representantes en Cortes, hemos hecho llegar hasta el Gobierno de la República el profundo clamor de los pueblos de esta provincia de Zaragoza, especialmente de la comarca de las Cinco Villas, en demandas de resolución para un grave problema que requiere, por su importancia y por su contenido de justicia, la atención urgente del Gobierno. Nos referimos, señor ministro, al rescate de los bienes comunales, en el cual tienen puestas sus esperanzas muchos pueblos españoles que ansían reparación. Los que nosotros representamos, enclavados todos ellos en la comarca de las Cinco Villas, viven desde hace muchos años, pero sobre todo desde el advenimiento de la República, pendientes de ese problema capital para su economía y para la paz de su vida social. No ya los Ayuntamientos, sino las organizaciones obreras y los partidos políticos, han hecho cuestión de honor —por ser de vital necesidad—, la restitución al patrimonio comunal de los bienes que les fueron arrebatados a los Municipios por la codicia y la inmoralidad puestas al servicio del régimen monárquico.

No es ahora cuando formulamos esta petición. Mucho antes del advenimiento de la República, las organizaciones obreras de estos pueblos venían propugnando esta reparación. Con motivo de ella, hubimos de sufrir persecuciones de la dictadura sin que decayera en ningún momento nuestra energía. Por el contrario, esa circunstancia nos llevó a identificar nuestro problema con la República y a trabajar por ella con una abnegación y unos bríos cuyos testimonios mejores están en las crónicas del movimiento revolucionario de diciembre de 1930 y en las jornadas de abril de 1931. Pensábamos que sólo la República podía resolver nuestro pleito. Todavía lo seguimos pensando, señor ministro. Tan fuerte ha sido y es nuestra confianza en la República que, durante muchos años y llenos de angustia, largos en miseria y cortos en bienandanzas, hemos sabido ahorrarle a la República toda clase de contratiempos y reclamaciones enojosas. Organizaciones obreras, partidos políticos y Ayuntamientos nos dába-

mos cuenta cabal de las dificultades que se oponían al desarrollo normal del régimen republicano. Veíamos también la labor urgente que las Cortes tenían que realizar. Esas consideraciones alimentaban nuestra paciencia. Pero han pasado dos años, señor ministro. Hace ya muchos meses que se aprobó la Reforma Agraria, cuya base veinte encontró en estos pueblos pleno asentimiento. No exageramos, señor ministro [...] estos pueblos un día de fiesta popular. Y desde entonces se ha hecho más viva la impaciencia. Creíamos nosotros que la aplicación de esa base, ya que, aparte de su justicia, no entraña gasto para el Estado, sería inmediata. Han pasado los meses. Los propietarios actuales —de hecho ya que no de derecho— de la tierra usurpada, han movilizad sus influencias. Ellos han sido los primeros y más interesados en hacer creer a los pueblos que sus aspiraciones no serán atendidas. Y el descontento, la falta de fe, han ido cundiendo entre los campesinos de tal manera, que ya son muchos los que consideran que tampoco la República puede darles la justicia que ellos esperaban.

Son muchas las decepciones que llevamos sufridas. De una parte la tardanza en resolver el problema; de otra, la ofensiva brutal que los poseedores de la tierra que fue comunal, vienen realizando, contando con asistencias inconfesables contra los Ayuntamientos y las organizaciones obreras.

Se da el caso, señor ministro, de que los propietarios acusados y confesos de usurpación, niegan trabajo a los afiliados a la Sociedad obrera, aunque ésta, como es lo corriente, reúna a la mayoría de los vecinos de la localidad. Todo eso, sucintamente expuesto, hace insostenible la situación de los Ayuntamientos que suscriben. En reunión de alcaldes celebrada en Uncastillo el día 19 de marzo se expusieron estos puntos vista que suscribieron, sin excepción, los asistentes. Los pueblos les apremian, señor ministro, para adoptar medidas enérgicas que den término a la cuestión. Hay hambre en los pueblos. Sigue imperando el caciquismo. Y los alcaldes firmantes, midiendo su responsabilidad y antes de verse obligados a dirigir un movimiento insurreccional y aunque justo —para adueñarse de unos bienes usurpados al patrimonio común—, transmiten a V.E. el acuerdo de la Asamblea concretando en las siguientes líneas:

Que si en el plazo inmediato no se lleva a las Cortes el proyecto de ley regulando de manera rápida y eficaz el res-

cate de los bienes comunales y de propios usurpados a los Ayuntamientos, los firmantes y los Ayuntamientos que representan, con profundo sentimiento, no como medida coactiva, sino sintiéndose fracasados en su intención de llevar a término el problema, se verán en la necesidad de abandonar todos sus cargos poniéndolos a disposición del señor gobernador civil de la provincia.

Esta es, señor ministro, la resolución que adoptamos como mal menor.

No quisiéramos de ningún modo, aparecer como responsables de hechos violentos que no podremos evitar y que tampoco quisiéramos cargar a la cuenta de la República.

Es cuanto tenemos que decir a V.E.

Uncastillo, 28 de marzo de 1933 – Antonio Plano

Excmo. Sr. Ministro de Agricultura, Comercio e Industria.
Madrid.¹⁶⁸

La carta y la clara demanda final enmarcarán la acción política local de los meses subsiguientes. El 15 de abril de 1933 se levanta acta de una reunión a la que asistían el alcalde Antonio Plano y los representantes de la Agrupación de Propietarios (Patricio López y Pedro Marco), de la UGT (León Marín, Manuel Lasilla y Gregorio Solano), de la CNT (Gregorio Larcuén, Agustín Alcubierre y Ladislao Aznárez), de la Asociación Radical Socialista (Félix Alcubierre y Cándido Gracia), de la Unión de Derechas (Lorenzo Giménez y Pedro Buey), los representantes de los arrendatarios (Joaquín Frej y Serafín Lasheras) y hasta doce personas más. El objeto, tratar de formar una comisión capaz de gestionar «la reunión de tierras suficientes para remediar la necesidad sentida por algunos vecinos de esta población», y al tiempo procurar «que los arrendatarios de fuera de la localidad cedan una gran porción de sus tierras para este fin».¹⁶⁹

Llama la atención en ese documento el elevado nivel de sociabilidad política alcanzado en la villa en el ecuador de la

¹⁶⁸ VN, 15-4-1933. Se entendía por «necesitado» el campesino que cultivara hasta cinco cahíces de tierra.

¹⁶⁹ AMU, Leg. 359, exp. 021.

República. La novedad del acta, en la que aparecen las agrupaciones socialista, radical y radical-socialista, estriba en la aparición de la Unión de Derechas de Uncastillo, asociación que como tal nace en 1932 si bien originalmente se había denominado Derecha Liberal Republicana. En esa organización se pretendía acoger a todo aquel que se identificara con un vago ideal político de «religión, orden, familia y propiedad». El Sindicato Agrícola, presidido por Antonio Mola, seguía por su parte vinculado a los sectores conservadores igual que hacía años, suministrando a los campesinos abonos y maquinaria agrícola y ejerciendo una posición hegemónica en el comercio del cereal. En las guías de circulación de trigo expedidas por el Ayuntamiento se repiten los mismos nombres de vendedores y compradores, algunos de los cuales conseguían manejar los precios conforme se hacían con mayores cantidades. Iluminado Pemán, Venancio Lapieza, Lorenzo Giménez o Manuel Guinda eran algunos de ellos, vinculados directamente además en determinados casos con la política local institucional. Por cierto, que algunos de los industriales y comerciales inscritos en la Cámara de Comercio (como Pedro Caudevilla, Pedro Arbuniés, Venancio Lapieza o Manuel Alcubierre) aparecen registrados como «especulador», entendiéndolo que los secretarios y escribientes hacían un uso estricto del término en modo alguno peyorativo. Otros hacendados, como Manuel López Monguilán, Martín Suñén o Manuel Gay aparecían vinculados al sector del «transporte». A partir de 1933, la conjura de los propietarios por resistirse a las medidas de reforma agrícola de la República será articulada por la derecha política a través de un discurso abiertamente hostil a las medidas socialistas del reparto, y favorable a la obstrucción de la acción de gobierno municipal republicano.¹⁷⁰

Sin momento para el descanso o el desánimo, en mayo de 1933 Antonio Plano presentó unas «bases para la reivindicación de los montes comunales» que fueron aprobadas por

¹⁷⁰ AMU, Leg. 175, exp. 020, Guías de circulación de trigos, 1933-1934. *Cámara de Comercio de Industria de Zaragoza*, Registro de Electores, año 1926.

el equipo municipal y remitidas a los propietarios. Dichas bases proponían «que los señores propietarios o tenedores de los montes comunales que fueron comprados a éste [Ayuntamiento] los cedan mediante el pago o indemnización que más adelante se dirá», y que «los señores propietarios unidos al Ayuntamiento soliciten el deslinde oficial de estos montes comunales». Plano planteaba garantías para los propietarios al indicar que el deslinde sería legal, y que se les indemnizaría en forma y condiciones pactadas entre aquéllos y el Ayuntamiento. Sin embargo, un acontecimiento, previsible aunque inesperado en su evolución, provocaría una mayor polarización social y todavía más dificultades para alcanzar acuerdos de cualquier tipo. La gente volvió a salir a la calle, pero esta vez para plantear una amenaza abierta hacia los tradicionales garantes del orden, dejando incluso constancia escrita de su identidad en una protesta formal contra la Guardia Civil de Uncastillo.¹⁷¹

Hacia el 20 de mayo Patricio López Monguilán presentó una denuncia ante el Comandante del puesto de la Guardia Civil Teodoro García Gil por haberse encontrado daños en su propiedad. Fue detenido el vecino Agustín Alcubierre Viamonte, apodado «Plano» y perteneciente a la CNT local, por un supuesto delito de «atentado a la propiedad». Correse la voz de la detención y amotinarse el pueblo fue todo una misma cosa. Cuando la Guardia Civil trasladaba a Alcubierre al juzgado para que prestase declaración «un grupo de vecinos intentó coaccionar a los guardias» pidiéndoles que lo dejaran en libertad. «En vista de que los ánimos se excitaban» y para evitar males mayores, los guardias se retiraron con el detenido al cuartel en ademán defensivo. «Ante el edificio se congregaron más de quinientas personas en actitud poco tranquilizadora». El comandante del puesto ordenó a una pareja salir por la puerta de atrás, que daba al campo, para solicitar refuerzos de Luesia. De allí acudieron un teniente y

¹⁷¹ AMU, Leg. 361, exp. 003.

varias parejas, que cuando llegaron se encontraron tranquilidad absoluta. «La gente se había retirado a sus casas, sin provocar desórdenes». Aquél fue el primer cerco al cuartel de la Guardia Civil. En poco más de un año habría de llegar el definitivo.¹⁷²

La cosa sin embargo no quedó ahí. Dos días después trescientos treinta y ocho vecinos firmaban una carta de protesta contra el comandante del puesto pidiendo su destitución como tal y el traslado de Uncastillo. La carta iba dirigida al alcalde y fue redactada por algunos vecinos «respetables», pertenecientes a la clase media local, Eusebio Pérez, Pascual Sánchez, Miguel Aznárez y Romualdo Garcés. En ella se detallaba cómo «con motivo de una denuncia presentada por Don Patricio López Monguilán» al comandante del puesto, éste «ha procedido con tal manifiesta ignorancia e inexactitud que de no haber intervenido los firmantes, el Sr. Juez Municipal y otros vecinos, Uncastillo a estas horas tocaría las fatales consecuencias de la ceguedad y la falta de tacto de los jefes de las fuerzas cívicas». Y continúa: «esto ya estaba previsto por muchos vecinos, dada la forma despótica y monarquizante que tenía de actuar, haciéndolo siempre con un descaro y una pasión desmedida a favor de las clases privilegiadas hasta el punto de que hoy, por defender a uno de ellos, hubiéramos tenido que lamentar graves desgracias». Se ruega al alcalde que dé curso de la carta a las autoridades superiores para que se le incoe expediente «para sacar a dicho Sr. de este puesto y del cuerpo al cual pertenece por creerlo que lo merece». Así lo hizo Antonio Plano, que remitió el escrito al gobernador, y éste a su vez al jefe de la Comandancia. Éste sin embargo informó favorablemente sobre su subordinado, señalando que la denuncia venía motivada porque tanto el detenido como los firmantes eran afiliados de la CNT, organización que guardaba «resentimientos» contra la casa de López Monguilán. «El tachar a la clase que nos ocupa de reaccionario —argumenta el jefe para exculpar

¹⁷² HA, 26-5-1933.

al cabo—, es porque creen que obró en aquella ocasión en servicio del Sr. Monguilán, sin tener en cuenta que lo hacía en cumplimiento de su deber y porque a aquél lo consideraban como monárquico». ¹⁷³

Al mismo tiempo que se emitían esos informes entre autoridades se intentaban aprobar unas bases de trabajo entre representantes «de la clase obrera y de la patronal de la villa de Uncastillo» para las faenas de recolección y trilla. La sola existencia de ese acuerdo revela una soterrada realidad de descontento obrero por el incumplimiento patronal de los contratos laborales, y la creencia de Antonio Plano, garante del proyecto, en las fórmulas negociadoras públicas que la ley otorgaba a los colectivos de trabajadores. Las bases regulaban las condiciones de trabajo en un tiempo habitualmente conflictivo, el de la recolección, en cuanto al jornal percibido y a las artimañas usadas por los patronos para manejar los precios a su antojo, contratando mano de obra forastera y peones procedentes de otros oficios, o utilizando maquinaria agrícola para reducir el tiempo de las faenas. Como era de esperar, la negativa patronal demoró la aprobación de esas bases y, además, abrió un proceso de negociación que se prolongó durante meses. En la documentación municipal aparecen las firmas de los representantes obreros Carlos Fanjul, Tomás Beguería y Enrique Lafuente, pero no hay rastro alguno, en las dos copias conservadas, del beneplácito de los patronos, y sí en cambio constancia de la pronta intervención gubernativa para tratar de solucionar el «conflicto» planteado. ¹⁷⁴

Pasado el verano, en septiembre de 1933, la Junta de la Sociedad Local de Campesinos dirigió un escrito al alcalde exponiendo la angustiosa situación de los obreros agrícolas, un documento que se vuelve a situar en la línea de la reunión de marzo. La precariedad económica y laboral de los

¹⁷³ AGCZ, Leg. 101, exps. 3 y 5.

¹⁷⁴ AMU, Leg. 359, exp. 022.

jornaleros era percibida como un problema urgente pero de factible solución, el reparto. Pero no sólo eso, sino que el propio conflicto por las condiciones de contratación y trabajo parecía tener su piedra de toque en la futura autosuficiencia que habría de otorgar la adjudicación de parcelas a los jornaleros pobres. Una petición que, por el momento, se mantenía dentro de los límites de la ley. El discurso político socialista, articulado a través de la prensa y las alocuciones públicas, había implantado la idea de que Reforma Agraria era sinónimo de reparto, y éste de solución a la pobreza y la desigualdad. «De todos es sabido la enorme crisis de trabajo que existe en esta localidad, debido a no haber en ella industria ni obras que empleen obreros, teniendo éstos únicamente colocación en la época del verano a la recolección de cereales, únicos trabajos que se dan a esta clase obrera, por ser esta villa exclusivamente cerealista», comenzaba en sus primeras líneas. Y lejos de pedir, como en otras ocasiones, obras públicas por considerarla esa una «solución fugaz por lo pasajera, puesto que terminadas estas otra vez se hallaría en la miseria actual la clase trabajadora», se proponía una alternativa sólida para «solucionar de una vez para siempre la crisis de trabajo actual»:

La Sociedad que a V. acude, después de buscar infinidad de fórmulas que luego eran desechadas por los más, ha llegado a la conclusión de solicitar de las autoridades el que la infinidad de propiedades que hoy día se hallan trabajando a renta unos pocos vecinos, que han llegado a acaparar extensiones fabulosas comparadas con el territorio de este término municipal, sean repartidas o divididas en renta, con arreglo a los precios que rijan en la localidad o los que pagan los actuales arrendatarios, con lo que quedaría definitivamente resuelto el pavoroso problema de paro y llegar así a ser cada vecino trabajador un arrendatario que, aun cuando lo fuese en pequeñas proporciones, seguramente habría de serlo en proporción suficiente a las necesidades de su hogar.

No se les oculta a los solicitantes y compañeros a quienes representan en la Sociedad concurrente, que esta fórmula, simple, sencilla y hacedera con buena voluntad de parte de todos, es imposible llevarla a la práctica si los egoísmos

de los menos han de sobreponerse a la razón de los más, pero los firmantes confían en la recta justicia y cabal equidad de las autoridades que nos administran y de ellas esperan la aglutinación necesaria a que todos aspiramos y por la que velamos constantemente.

Ya esta Sociedad solicitó con arreglo a las leyes que rigen en la materia, el arrendamiento colectivo de varias fincas que vienen teniéndose en arrendamiento por particulares y sin saber a qué achacarlo, pues no hemos de pensar que a la mala fe, se nos negó lo solicitado, aun a pesar de haberlo hecho en forma correcta y con arreglo a la legislación.

Así, pues, en resumen, solicitamos de V. que, como anteriormente se dice, se vea la forma de obligar o invitar a los grandes propietarios de este término municipal a que las bastas propiedades que poseen las distribuyan en arrendamiento entre el mayor número posible de vecinos y hasta todos de acuerdo, señalar un tipo máximo que como tope en número de hectáreas cultivase cada vecino que lo solicitase, pagando por ello al propietario la cantidad que por arriendo corresponda con arreglo a la ley o por los precios que rigen en la localidad, pues a todo estamos conformes con tal de trabajar, producir y llevar el pan a nuestras esposas y a nuestros hijos.

Justicia que esperamos alcanzar de V., deseándole viva muchos años.

Uncastillo, 16 de septiembre de 1933.

No hubo novedades sobre el conflicto hasta finales de octubre. A instancia del delegado del gobernador, Plano convocó a los terratenientes a finales de ese mes para «procurar aglutinar ciertas discrepancias surgidas entre propietarios y obreros de la localidad, e intentar llegar a determinar una fórmula que siendo satisfactoria para todos, armonice los intereses de ambas partes y se llegue a una inteligencia definitiva». Su idea era reunir a las clases sociales en litigio y tratar de que el debate llevara a un acuerdo. Por parte de los propietarios fueron designados Antonio Arnedo Monguilán, Antonio Mola Fuertes y Leoncio Aybar Jiménez.¹⁷⁵ Por parte

¹⁷⁵ AMU, Leg. 378, exp. 010. A la reunión asistieron Leoncio Aybar Jiménez, José Canales Villellas, Patricio López Monguilán, José Frago Lear, Francisco Buey

de los obreros, reunidos pocos días más tarde en el salón de plenos en número de cincuenta y seis, los designados fueron Manuel Lasilla, Gregorio Larcuén Estabén y Francisco Malón Gil. Una semana después, el diez de noviembre, las comisiones se veían las caras en una nueva reunión bajo presidencia del delegado del gobernador Domingo Rueda, y con la presencia de un asesor técnico de la sección agronómica de la provincia y del propio alcalde. El delegado propuso el envío de un ejemplar del censo campesino a cada comisión, y la inclusión de una representación de colonos, tanto propietarios como sin tierra, propuesta que fue admitida por todos. En aquel momento la negociación se detuvo ante la inminencia de las elecciones generales a Cortes de noviembre de 1933, un acontecimiento que habría de tener gran repercusión en la dinámica política local de Uncastillo y en la conformación de bloques sociales antagónicos con vocación a enfrentarse definitivamente.¹⁷⁶

1934. El camino de la huelga

1933 terminó con aires violentos. El veinte de octubre el gobernador de la provincia, a la sazón el radical Elviro

Bueguería, Félix Canales Aísa, Ricardo Vives Ruín, José Marcellán Loperena, Venancio Lapieza Laplaza, Ramón Gay Auría y Pedro Marco Abadía.

¹⁷⁶ AMU, Leg. 378, exp. 010. Obreros que asistieron para nombrar a sus representantes comisionados: Maximino Sánchez Blesa, Eugenio Convalía Marco, Pedro Casaus Pérez, Mariano Ezquerro Tirapo, Marcial Izaga Vigo, Antonio Beguería Alcubierre, Juan Arregui Biota, Vicente Tirapo Casanova, Julián Estabén Gracia, Miguel Yarz López, Felipe Abadía Casaus, Juan Guinda Alcubierre, Mariano Asín Casaus, Gregorio Maisterra Pueyo, Paulino Rebla Izaga, Jesús Murió Prat, Sabas Beguería Alcubierre, Emeterio Pueyo Suñén, Simeón Luis Soteras, Domingo Casaus Paradís, Saturnino Sánchez Suñén, Pedro Urdaniz Malón, Gregorio Frago Arregui, Vicente Casaus Navarro, Inocencio Estabén Martín, Gregorio Casanova Pérez, Alejandro Pérez Pérez, Francisco Malón Gil, Nicolás Zárate Muñoz, Pablo Jarauta Sarralanga, Juan Larcuén Loperena, Juan Vicastillo Rebla, Ángel Frago Navarro, Pantaleón Charles Praderas, Julián Galardón Aragüés, Generoso Cay Pueyo, Esteban Casaus Sampietro, Carmelo Cortés Aragüés, Esteban Buey Alcubierre, Daniel Larcuén Estabén, Rafael Asín Lizondo, Antonio García Reved, Pedro Arilla Añanos, Gregorio Beguería Cervero, Hilario Garcés Lobera, Emilio Subirón Guinda, Manuel Claveras Arregui, Valeriano Pérez Morlana, Antonio Sánchez Suñén, Gregorio Arregui Acín, Santiago Baztán Acín, Pablo Villa Guinda, Francisco Alcubierre Viamonte y Víctor Pérez Sánchez.

Ordiales, clausuró el centro de la UGT de Uncastillo, así como los de muchos otros lugares. Había sido nombrado a mediados de septiembre, pocos días después del cese de Manuel Azaña de la presidencia del gobierno y con motivo de la formación del gobierno provisional radical. Un gobierno que quiso preparar el terreno de cara a las cercanas elecciones legislativas con un auténtico «desmoche» de cargos socialistas en muchas provincias y, en definitiva, con la reorganización de los mapas regionales de poder. El mensaje iba dirigido tanto a las izquierdas como a las derechas, pero en ambos casos los argumentos giraban en torno al control férreo del orden público. Eso afectó a la sociedad ugetista de Uncastillo, que se abriría ocho días después de su cierre. En el plano local es más que probable que en Zaragoza se recibieran informes desfavorables acerca del estado social de la villa con motivo de un homicidio ocurrido en la noche del día quince de ese mes, en lo que parece que fue una reyerta personal regada con vino y terminada con un disparo mortal. Sea como fuere, a aquella reapertura asistieron, además de don Antonio Plano, el presidente de la sociedad León Garín Pueyo, los testigos Gregorio Solano Alcubierre y Pascual Pemán Aísa, además del secretario del Ayuntamiento Emiliano Bravo y el comandante de la Guardia Civil Teodoro García. Todo se encontró en orden, «muebles, libros y documentos», así como el metálico de la caja. No obstante, aquello fue recibido como un atropello en toda regla, con el que las derechas parecían mostrarse más que satisfechas. La cita electoral de noviembre sería la oportunidad, tanto para los que querían «barrer» a los socialistas del poder, como para los que habían rumiado una venganza para sus oponentes, quienes a su juicio la tenían más que merecida.¹⁷⁷

¹⁷⁷ Joan SERRALLONGA I URDIQUI, «El aparato provincial durante la Segunda República. Los gobernadores civiles, 1931-1939», *Hispania Nova*, núm. 7 (2007), <http://hispanianova.rediris.es>. La clausura y apertura de la UGT local en AMU, Leg. 378, exp. 014. La sentencia por el homicidio de Vicente Viamonte en AHPZ, *Sentencias criminales*, 1934, núm. 21, y el proceso paralelo por la tenencia ilícita de armas en AHPZ, *Sentencias criminales*, 1934,

En la víspera de las elecciones dos sacerdotes y cuatro mujeres acabaron entre las dieciséis personas heridas durante los enfrentamientos ocurridos en la localidad. Parece que a las «ofensas» vertidas hacia los derechistas siguió la intervención personal de Antonio Plano para evitar males mayores, algo que no aplacó la ira de los perjudicados, que percibieron los hechos como una oportunidad única para atacar a Plano abiertamente. Se publicó una carta al diario católico *El Noticiero* cargando las tintas sobre su responsabilidad en los hechos. «Un pueblo a merced de la vesania de los socialistas», titulaba el diario, dispuesto a denunciar lo que ocurría «en un pueblo que vive bajo la dictadura socialista más extremada». Se comenta que poco tiempo antes había sido necesario enviar Guardia Civil al «feudo» del diputado provincial debido a las invasiones de tierras efectuadas por «los socialistas», «disponiendo de ellas como si fueran sus legítimos poseedores». No hay otras noticias que puedan contrastar ese dato, aunque se menciona que hubo un viaje del gobernador Ordiales para detener la ofensiva campesina. Las crónicas cuentan, con diferentes matices, que el día de la elección un grupo quiso agredir a López Monguilán, que iba en su auto, y que cuando la Guardia Civil intervino se produjeron los insultos y amenazas, y más tarde las agresiones hacia un grupo de derechistas que se dirigía al colegio electoral. Parece que la presencia de los guardias encrespó los ánimos como ya había sucedido en otras ocasiones. Plano quiso evitar mayores males ordenando al comandante su retirada, exigiendo éste un comprobante escrito para no incurrir en la responsabilidad de la pasividad. A pesar de eso la crónica narra cómo el presidente del centro de derechas, Lorenzo Giménez, fue arrastrado, cómo fueron golpeados el párroco Emilio Bayarte y el capellán Mariano Pérez, cómo Antonio Mola fue herido en la cabeza de un garrotazo, y que el propietario Ramón Auria también resultó herido en el grupo de los derechistas

núm. 111. El procesado, Julián Sardoy, labrador de veinticinco años de buena conducta fue finalmente absuelto de los cargos.

agredidos. En total hubo dieciséis vecinos perjudicados, cuyos nombres fueron publicados pocos días más tarde para revestir la crónica de un aura de persecución martírica, la de los socialistas criminales contra los cumplidores de la ley y la religión. Una crónica que termina con una perla contra Plano: «un pueblo no puede estar a merced de un caciquillo analfabeto que ejerce con sus secuaces la más odiosa de las tiranías».¹⁷⁸

Plano respondió dolido en una carta de desagravio publicada en *Vida Nueva* a las ironías y desdenes del diario católico *El Noticiero*. En su escrito Plano comenzaba exponiendo a modo de digresión su propia idea de la «noticia» periodística y la distancia que debía mediar entre ella y la «tendencia partidista». En unas líneas deja ver sin pudor su trasfondo cristiano y humanista en la concepción de la sociedad misma: «¿Qué habríamos adelantado con que yo ahora le lanzase una serie de improperios de tan mal gusto como los que usted, sin duda saliéndose de su costumbre, me lanza, sin estar seguro de su acierto o yerro? El hombre debe tender a perfeccionarse; y cuando la sociedad se componga de hombres que amen y respeten a sus semejantes como a sí mismos, habrá llegado a ser perfecta». Y añadía: «yo tengo presente aquel enunciado y domino el grosero lastre interior con que desgraciadamente carga el género humano», para sin falsa humildad advertir que de no haber sido por su mediación «no hubiesen salido indemnes algunas personas». El hecho es que el proceso judicial siguió su curso, y bajo la acción del magistrado de Sos fueron detenidos algunos vecinos como responsables de los hechos. Varios de ellos no son ajenos a la dinámica política y a la conflictividad social local, y habrá que recordar sus nombres en el momento de la crónica de los hechos revolucionarios de octubre de 1934. Saturnino Agón López, Eugenio Convalía Marco, Antonio Pueyo Arregui o

¹⁷⁸ *EN*, 22-11-1933. El listado de los heridos publicado se completaba con Raimundo Rived Cortés, Raimundo Rived Pemán, Florentino Ruiz, Concepción Ortega, Ángel Casanueva, Julia Cortés, Inocencio Gil, Carmen Pueyo Soteras, Mariano Casaus Gabás y Victorina Cortés Goñi, *EN*, 25-11-1933.

Francisco Alcubierre Viamonte fueron algunos de esos protagonistas. Su actuación, su detención y la percepción de injusticia que la misma provocó deben situarse en la imparable apertura de la brecha social que experimentaba no sólo Uncastillo, sino la inmensa mayoría de las poblaciones del país. Una intensa politización y la radicalización de los discursos públicos, en el marco de una estrategia de movilización de masas sin igual para conseguir o defender derechos de ciudadanía y de acceso al control del poder, definieron el modo en que cristalizó esa división política e ideológica en el seno de la sociedad civil.¹⁷⁹

La victoria de los republicanos radicales supondrá el final del bienio republicano-socialista y el inicio del llamado Bienio Negro o radical-cedista. El discurso endurecido de los radicales pretendía distanciarse de la izquierda republicana y socialista, que también se había separado notablemente. En ese contexto, la CEDA consiguió, merced al discurso cada vez más desafiante de Gil Robles, ser la fuerza más votada. Favorecida por una ley electoral que premiaba las coaliciones, cobijaba bajo su manto tanto a partidos tradicionalistas como a grupos violentos similares a las ligas fascistas alemanas e italianas. El *leit motiv* común era sin duda un rechazo hacia cualquier reforma de las relaciones sociales en el campo, hacia el marxismo y cualquier teoría socialista o socializante, y hacia el mismo marco institucional republicano («Religión, Familia, Patria, Orden, Trabajo y Propiedad», era su lema). En Uncastillo el voto, sin embargo, y a pesar de convocar por primera vez a las mujeres a una cita electoral, factor esgrimido tradicionalmente como determinante en el cambio de tendencia política, las listas socialistas volvieron a ser las más votadas.¹⁸⁰ El hecho cierto es que la cita electoral tuvo lugar en el mismo epicentro del

¹⁷⁹ Fueron además detenidos Gregorio Larena Esteban, Julián Esteban Solsona, Antonio Pueyo Freg, Valeriano Urdaniz Viartola, Mariano Rived Sanmartín y Romualdo Garcés Aragüés. *EN*, 25-11-1933. *HA*, 23-11-1933.

¹⁸⁰ AMU, Leg. 359, exp. 008. En las dos secciones electorales la lista socialista, integrada por Manuel Alvar, Eduardo Castillo, Luis Palacios, Francisco Nieto

conflicto local por las condiciones del trabajo obrero agrícola y, por añadidura, por la posesión y cesión de la tierra, y que dicho conflicto se vería abocado a una deriva radical en los meses siguientes merced a la evolución del panorama político. De nuevo aquí subrayar el ribete elitista de aquella idea que asimilaba política y violencia, al señalar la incapacidad de la gente común para involucrarse en los asuntos públicos y las instituciones. En realidad era el desarrollo concreto del contencioso lo que permitía explicar la intensidad del enfrentamiento. Meses de crisis agrícola, de falta de entendimiento entre patronos y obreros, de manifestaciones públicas de hostilidad y defensa de derechos de ciudadanía adquiridos y ejercitados, de actitud cerrada por parte de propietarios y patronos locales contra las solicitudes de los campesinos, y una nueva situación política que alentaba un sentimiento de «resistencia» por parte de la derecha para no ceder en el ámbito local lo que se había ganado en el Parlamento. En este complejo marco político es en el que Antonio Plano debía seguir desempeñando el programa socialista.

A comienzos de marzo de 1934 se produjeron nuevos intentos de acercamiento entre patronos y obreros. El clima social, eso sí, había venido tensándose con algunos actos de violencia simbólica, de los que quizás el más significativo fuera la rotura de las placas con la imagen y el nombre de Pablo Iglesias, que habían sido inauguradas para dar nombre a una calle dos años antes al son de la Internacional y en presencia del pueblo en masa.¹⁸¹ A aquella reunión, y bajo la presidencia del ingeniero agrícola Domingo Rueda como delegado gubernativo y con la asistencia del técnico admi-

Mora y Antonio Ruiz García, consiguió la inmensa mayoría de los votos frente a la de la C.E.D.A. (258 y 249 votos en ambas secciones, frente a 98 y 86 votos respectivamente).

¹⁸¹ VN, 3-3-1934. «¡Cobardes, traidores!», titulaba «Un socialista» de Uncastillo el artículo. El hecho provocó una protesta formal de Pío Pueyo en la sesión correspondiente del pleno, proponiéndose y aprobándose la apertura de una investigación para esclarecer los hechos, en AMU, Actas Municipales, 28-2-1934.

nistrativo José María Salvador, acudieron Plano como alcalde, Emiliano Bravo como secretario, y Manuel Lasilla y Francisco Malón Gil como portavoces de los obreros. Los patronos no asistieron a la misma, «pese a estar debidamente citados», un signo claro de la actitud de abierto obstruccionismo que iban a plantear en adelante al equipo de gobierno local. Tres días más tarde, un nuevo intento. Los mismos protagonistas más Antonio Mola por parte patronal. Había llegado el momento de concretar soluciones. El delegado propone que se facilite a los propietarios un listado con el «nombre y número de obreros necesitados de esta localidad a los que habría que facilitarles medios que fuesen de ayuda económica», listado que debería provenir del censo campesino de la villa. También invitó a los representantes obreros a elaborar «una relación de los propietarios y arrendatarios que administrando importante cantidad de tierra estén en condiciones de ser invitados por esta Comisión a cesión de parte de aquella que pudiera ser distribuida entre los obreros que se intenta mejorar económicamente». Los patronos protestaron entonces alegando casos anteriores de cesión de tierras a algunos obreros «y su falta de pago del arriendo por algunos de ellos». El presidente expone su intención de garantizar la cesión con contratos. Las espadas siguen en todo lo alto, y los días siguientes transcurren plagados de nuevas reuniones en los locales de las asociaciones, en los que se refuerzan los credos propios y se ultiman las posturas a tomar en la negociación.¹⁸²

Una semana más tarde volvieron al salón del Ayuntamiento de Uncastillo las autoridades mediadoras (delegado, técnico agrónomo y alcalde), así como los protagonistas principales del conflicto, los representantes de obreros y patronos. Por los obreros acudieron Manuel Lasilla, Francisco Malón y Antonio Casaus sustituyendo a Gregorio Larcuén, mientras que por la patronal los representantes eran Antonio Mola, Leoncio Aybar y Antonio M^a de Arnedo. El presidente

¹⁸² AMU, Leg. 378, exp. 010.

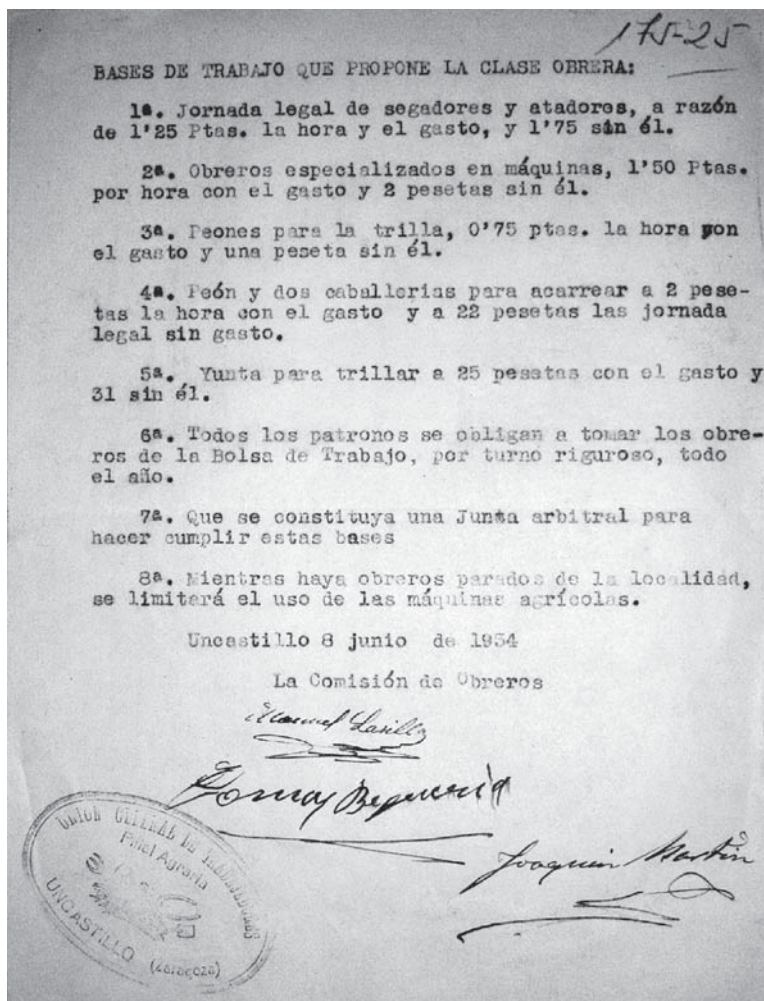
de la sesión cede la palabra a la patronal para que diese cuenta de las gestiones realizadas. Mola indica que la clase patronal había acordado no utilizar el Censo campesino para realizar el listado de vecinos a los que se debía ayudar, prefiriendo «que se les hiciese entrega de una simple relación de los vecinos cabezas de familia que más necesitados se hallan en la localidad para que, a la vista de la misma y previo estudio por la Asamblea de la clase patronal, se declarase conforme tal relación o bien se pusiesen a la misma los reparos que se considere justo». Por su parte, Lasilla sí que llevó consensuado un listado de patronos y arrendatarios que administran mucha tierra, «y a los que sería susceptible de invitarles a dejar parte de ella en beneficio de los obreros necesitados». A pregunta de la presidencia contesta además que la cantidad de tierra que estiman necesaria para el sustento de una familia es de seis cahíces, cifra a la que se oponen tenazmente los patronos, para quienes «a su juicio es mucha tierra para cultivar un obrero sin más elementos de trabajo que los suyos físicos propios». Alegan que es demasiada tierra para un obrero, y demasiada poca para utilizar animales o máquinas, y dado que se trata de ayudar a los necesitados que no poseen otros medios de trabajo que sus brazos, es una cantidad de tierra excesiva. Resumiendo, ofrecían cuatro cahíces, oferta que quedó a estudio de la presidencia, que además se comprometía a elaborar el listado de vecinos pobres para que ambas partes lo sometiesen a aprobación.

A mediados de mayo el gobernador volvía a telegrafiar anunciando la llegada de los delegados Rueda y Salvador para continuar con la negociación. Además de Plano y los llegados de Zaragoza asistieron Leoncio Aybar, Venancio Lapieza y Patricio López Monguilán por los patronos, y Gregorio Larcuén y Francisco Malón por los obreros. Se trataba entonces de valorar la lista de vecinos susceptibles de recibir tierra, existiendo reticencias importantes por parte patronal, como es fácilmente comprensible, si bien también los obreros presentaron alegaciones, dado que sobre todo la

lista de los mayores tenentes de tierra les parecía insuficiente. El resultado de la reunión suponía ciertos avances en la negociación pero, sobre todo, ilustraba la complejidad de la misma al establecerse procedimientos para consensuar ambos listados, así como la desconfianza reinante entre ambos grupos sobre la información que debía figurar en los informes que habrían de servir para decidir. Por diferentes razones tanto unos como otros creían preciso volver a debatir los listados en el seno de sus organizaciones. Entre entusiasmos y recelos llegó el verano, con él la recolección y, como simbolizando el fruto de meses de desacuerdo colectivo, la huelga campesina organizada por la Federación Nacional de Trabajadores de la Tierra (FNTT).

Conocemos de mano del propio Antonio Plano el desarrollo de la huelga en Uncastillo gracias a una información abierta por la alcaldía informando de los detalles de la misma, una fuente privilegiada que narra de primera mano los acontecimientos relacionados con el conflicto. El día 5 de junio empieza la huelga, «que afecta exclusivamente a los trabajadores de la tierra», sin mucho seguimiento y con tranquilidad, como informa el alcalde al gobernador. Al día siguiente la huelga es «completa en el gremio». La Guardia Civil se ofrece para mantener el orden y tienen lugar las primeras protestas de los ganaderos por haber concurrido a la huelga algunos pastores bajo coacción. Hay negociaciones y compromiso de los huelguistas de dejar libertad a los pastores, pero al poco Plano recibe nuevas denuncias sobre coacciones no sólo con los pastores sino también con las muchachas del servicio. Las palabras de Plano pretenden no dar mayor trascendencia a los sucesos que tienen lugar en la calle, no así la «gente de orden» del pueblo. A la mañana siguiente Antonio Mola denunció el apedreamiento y destrozos en el huerto de su hermano. El alcalde Plano dio parte al juzgado y dejó caer que tan sólo se había tratado de «cuatro o cinco mozalbetes». Poco más tarde llega la noticia de que Baldomero Pueyo se hallaba en una huerta a las afueras y «por haber sido amenazado no se atrevía a salir sin las garan-

**BASES DE TRABAJO PROPUESTAS POR LOS OBREROS.
UNCASTILLO, JUNIO 1934.**



Fuente: AMU, leg. 175, exp. 25.

tías suficientes». El propio Plano acudió al lugar con un empleado municipal, encontrándose con ocho o diez personas, a las que interrogó, llegando a la conclusión de que «no estaban con ningún fin malo». Hubo luego un tira y afloja entre Plano y Pueyo, el primero garantizando la ausencia de

peligro, y el segundo reclamando más fuerza para evitar «posibles desmanes». Fue insuficiente el ofrecimiento de una pareja de guardias para escoltarle, acudiendo al final el comandante junto con toda la fuerza disponible (seis guardias de infantería con dos de caballería y el suboficial). «Trajeron a aquel Sr. a su domicilio sin más incidente que el de la aglomeración de público curioso», apunta Plano. Aquella noche un telegrama precedió la llegada de más guardias: «Una vez reforzado puesto Guardia Civil por fuerzas llegarán hoy, y puesto acuerdo comandante Guardia Civil, proceda detención arreglo Ley Orden Público elementos sindicalistas más destacados como instigadores alteraciones orden público trasladándolos prudencia debida cárcel del partido». Es obvio que al gobernador le habían llegado informaciones y consejos diferentes a los emanados por la autoridad municipal.

Debido al estado de tranquilidad general que se respiraba al día siguiente, Plano pactó con la fuerza la no detención de los líderes sindicales a no ser que el orden público «lo requiriese». Sobre ese día, resume: «la tranquilidad es absoluta. No se notan aglomeraciones de público como en días anteriores y el estado del pueblo es normal». Los obreros presentaron sus bases a los patronos: unos salarios más elevados en función de la categoría y trabajo (ataidores, segadores, obreros especializados en máquinas, peones para la trilla, peón con dos caballerías o yunta para trillar), la obligación de los patronos de tomar obreros de la Bolsa de Trabajo, la constitución de una Junta arbitral, y la limitación del uso de maquinaria mientras existieran obreros en paro en la localidad. Plano expresaba al gobernador: «Considero estas bases muy aceptables», y anunciaba la reunión de patronos y obreros para discutir las, si bien no acudieron todos los propietarios a la cita. El día 10 amaneció con el cometido principal de avanzar en la negociación. A las diez de la mañana concurrieron al salón ambas comisiones más Antonio Plano como alcalde, el secretario Emiliano Bravo y el comandante del puesto de la Guardia Civil. No puede decirse que el

resultado constituyese una victoria total para los obreros, pero el avance respecto de la situación salarial previa fue más que significativo. Un bracero que cobraba de modo habitual alrededor de 6 pts., es decir unas 0,75 pts. por hora (y muchas veces también menos), pasó a cobrar tras la aprobación de las bases 1,20 pts. por hora. Se cedió más en el compromiso de emplear al 50% de los obreros que el patrón necesitara por medio de la bolsa de empleo, «dejando a su libre elección el otro 50%», aunque sí se consiguió la garantía de que existiendo obreros en paro no iban a emplearse máquinas de segar por cuenta ajena. La huelga tocaba a su fin. Plano enviaba un telegrama al gobernador comunicando «solucionada huelga de campesinos, mediante bases de trabajo aprobadas por representaciones de obreros y patronos». Y resumía el último oficio enviado a la autoridad gubernamental, en el que le daba

«amplios detalles de la solución de la huelga en la forma en que ha quedado anotado anteriormente y haciéndole saber que tanto la huelga como la terminación han llevado consigo infinitas gestiones de la Alcaldía y que en las realizadas para la terminación y aprobación de las bases, ha sido con laboriosísimas gestiones de la Alcaldía a las que ha coadyuvado el oficial de la Guardia Civil».¹⁸³

Como balance queda un pacto de filigrana dispuesto a romperse a la menor ocasión por parte patronal. Tan sólo la habilidad negociadora de Plano, sustentada en el ordenamiento legal laboral que el gobierno radical había dejado en pie, no así en la unanimidad sobre su crédito personal tras las campañas de descrédito emprendidas por la derecha, consiguieron llevar a puerto una parte de las aspiraciones obreras. De cualquier modo, la huelga de junio de la FNTT, en la que se enmarcaba el movimiento, no contaba con los recursos ni

¹⁸³ La información de la huelga firmada por Antonio Plano, en AMU, Leg. 378, exp. 011. Las bases redactadas por los obreros se conservan en AMU, Leg. 175, exp. 025. Tras ser negociadas, las bases fueron firmadas por Pedro Marco, Pedro Buey, Calixto Pueyo por parte de los patronos, y Manuel Lasilla, Joaquín Marín e Ignacio Maisterra por parte obrera. El salario municipal, en AMU, Actas municipales, 10-1-1934.

la oportunidad para plantear un exitoso paro campesino a gran escala, y a pesar de extenderse a más de mil quinientos municipios españoles, terminó en fracaso al ser encarcelados unos siete mil campesinos y quedar desmantelada orgánicamente la Federación. Es cierto que había crecido de manera muy notable durante la República, contando con unos diez mil afiliados en 1932 en Aragón (unos seis mil en Zaragoza, tres mil en Teruel y unos mil en Huesca), pero también lo es que el socialismo se hallaba fatigado tras dos años de labor de gobierno y de liderato en la defensa política de los derechos de ciudadanía adquiridos frente a los embates de la derecha. Un cansancio que se hará más evidente cuando trate de liderar pocos meses más tarde un movimiento revolucionario general.¹⁸⁴

La violencia y el descrédito de la democracia

El Bienio Negro trajo consigo un endurecimiento de la convivencia política y una radicalización de las posiciones de los colectivos sociales en contienda. Desde la perspectiva del gobierno la interpretación principal del asunto se hacía en clave de orden público, tratando de atajar la cuestión dando cabida a nuevos órganos como los Tribunales de Urgencia, encargados de juzgar los delitos que atentasen contra el gobierno o la paz pública como la posesión ilegal de armas, el enfrentamiento armado o una amplia panoplia de actividades calificadas como «intento de sedición». Esa y otras medidas se encuadraron en un contexto general de recorte partidario de derechos de ciudadanía y de proscripción de facultades para la participación popular en la política. El discurso de la izquierda, sobre todo del Partido Socialista, se radicalizó a partir de 1933 y promovió una división en su seno entre los seguidores de Largo y los de Prieto, ante el fenómeno de la utilización frecuente por par-

¹⁸⁴ FRANCISCO COBO ROMERO, *Por la reforma agraria hacia la revolución. El sindicalismo agrario socialista durante la II República y la Guerra Civil (1930-1939)*, Universidad de Granada, Granada, 2007.

te de la derecha de excluyentes formas de confrontación de índole fascista. El gobierno trató de hacerse con el monopolio de las armas en circulación, y de frenar sobre todo a los grupos de acción y de encuadramiento de izquierda. Se intensificaron las denuncias y registros, tendenciosos según la prensa socialista y comunista, así como la publicación en las crónicas de los detalles de las acciones más espectaculares. La intentona insurreccional anarquista de diciembre de 1933 fue la piedra de toque que permitió a la nueva autoridad republicana encarar el asunto del orden público como creían que realmente había que hacerlo, con mano dura.

En realidad el incremento de la conflictividad social, como ha estudiado Rafael Cruz, no es un hecho excepcional en la España de los años treinta, al contrario, el método de la comparación permite afirmar que no fue un caso muy diferente al de otros países del entorno europeo. Todavía a estas alturas de 1933 y primera mitad de 1934 la violencia, sin negar sus profundos costes sociales y culturales, no dejaba de formar parte de la dinámica de interacción colectiva en un contexto político que todavía seguía siendo el terreno de juego en el que se movían los partidos en colisión. Porque tampoco era lo mismo un motín popular, en el que se empleaba fundamentalmente la amenaza de la coacción y la violencia simbólica, que una huelga en la que se arremete contra esquirols y se atacan propiedades, que el asesinato de un patrono, o que una insurrección armada. Las repercusiones en la configuración de los actores colectivos y la propia dinámica del conflicto son muy distintas según uno u otro caso. Todavía en un entorno de violencia más frecuente se seguía practicando la política desde ayuntamientos y diputaciones, una política, eso sí, que cada vez contaba con obstáculos mayores que salvar. El obstruccionismo de las derechas en el Parlamento había torpedeado la tarea gubernamental del último período azañista, y en noviembre la CEDA había resultado la fuerza más votada. A partir de ese momento, alentadas por el discurso excluyen-

te de Gil Robles («O ellos o nosotros»), puede decirse que las derechas se prepararon para tomar el poder por la fuerza: ayuda financiera y militar italiana, concentraciones militarizadas, desfiles de requetés y ruptura de huelgas. Los propietarios agrarios comienzan a tomarse el «desquite» con sus obreros, y protestan porque la tímida reforma agraria llevada a cabo no se ha paralizado aún durante 1934. Arsenio Jimeno lo ilustra con la contestación que daban los propietarios a los parados: «¡Que te dé trabajo la República!».

El marco local constituye de nuevo una perspectiva eficaz para comprender cómo se superpusieron las diferentes dinámicas de relación colectiva, la de la política «formal» y la una tensión social creciente que influiría de modo inevitable en ella. De julio de 1932 a finales de agosto de 1933 existe un vacío documental en las actas de Uncastillo que impide saber el detalle de la vida municipal y, por demás, las inquietudes y preferencias políticas de personajes implicados en la política local como Antonio Plano. Por de pronto, en la fecha en que se restituye la información volvía de viajar a Madrid liderando una comisión para, en compañía del diputado Albar, gestionar asuntos relacionados con la construcción de unas nuevas escuelas, la posibilidad de construir un pantano y el expediente de segregación solicitado por Layana. Plano, fiel a su trayectoria, continuaba resolutivo hacia la mejora de la clase trabajadora del pueblo. En octubre viajaba a Zaragoza para conferenciar con el gobernador y con el ingeniero de obras del Canal de las Bardenas para colocar el mayor número posible de obreros en aquella.¹⁸⁵ Y en treinta de diciembre viaja de nuevo a la capital «por asuntos particulares», mas al enterarse de la celebración «de una asamblea de representantes de varios pueblos de la provincia para tratar de los honorarios que vienen cobrando los ingenieros de los distritos forestales por sus operaciones de

¹⁸⁵ AMU, Actas municipales, 4-10-1933.

reconocimiento y entrega de los montes y sus aprovechamientos», no dudó en acudir. Era un espectador, pero intervino en las deliberaciones y fue designado como uno de los componentes de la Comisión que debía llegar a Madrid las conclusiones para presentarlas en el Ministerio correspondiente. Fue a Madrid, y allí conferenció con el director general de Obras Hidráulicas para gestionar el asunto que tenía pendiente esa institución con Uncastillo sobre traída de aguas. Sacó una promesa diligente de resolución y una aprobación en el pleno municipal de la gestión.¹⁸⁶ Su entusiasmo político parecía intacto, pero la evidente distancia con algunos ediles reflejaba un mapa social plagado de fidelidades personales que iban más allá de la posición en la escala social.

En mayo de 1934 el concejal Marco hacía un ruego, apoyado por Cortés, para que en la colocación de obreros en el Canal «se procure atender a todos los parados, pues sabe de algunos que solamente han ido a dichos trabajos una quincena y hasta ninguna otros, y en cambio hay obreros que han ido tres quincenas», citando casos. Plano contesta que «siempre ha tratado vayan los referidos trabajos todos los obreros parados, haciendo los turnos por riguroso orden de renovación». Y sobre los casos citados, «el no ir esos obreros a trabajar al Canal ha sido por voluntad de ellos, puesto que en algunas quincenas se les ha avisado y por tener otras ocupaciones, no han aceptado». Su intención, señala, es que «la colocación de obreros en esos trabajos se haga con la mayor equidad». Es difícil saber dónde empezaba una simple petición y dónde continuaba en provocación, igual que es difícil determinar si la energía de Plano pudo tenderle alguna mala jugada y convertirse en motivo de denuncia de la oposición por autoritarismo. Pero a la altura de septiembre el asunto volvía a ser motivo de crítica, inquiriendo Gracia sobre la causa del paro de los trabajos del Canal, «que ocupaba buen número de obreros de esta loca-

¹⁸⁶ AMU, Actas municipales, 10-1-1934.

lidad». Por entonces se frenó el ritmo de trabajo, «y además los pocos obreros que se ocupan son del pueblo de Sádaba», prometiendo Plano una investigación y su gestión a favor de la colocación de vecinos de Uncastillo. Ya por esas fechas su crédito en el plenario se encontraba minado por las críticas externas, y los debates internos en la familia socialista. Otros temas habían generado agrias polémicas, como el tema de la dirección de la banda municipal de música, su reglamento, condiciones laborales y momentos de aparición oficial de la misma, si bien en algunas tareas de gestión seguía recibiendo la confianza del pleno (aprobación de su propuesta para los festejos del aniversario de la República en abril de 1934, presidente de la Junta para la intervención de trigos y harinas en junio de 1934, representante del Ayuntamiento ante el juzgado de Sos por multas realizadas en los comunales, miembro comisión de festejos de septiembre, aprobación de un viaje en agosto para conferenciar con el gobernador para aclarar una información errónea...).¹⁸⁷

La continuidad de la actividad no debe confundir acerca de la creciente tensión política que se vivía en los plenarios, algo de lo que hay noticia tan sólo a posteriori, a través de las cartas manuscritas del concejal Cándido Gracia a raíz del proceso por los hechos de octubre (serán detalladas más adelante), y del proceso de obstrucción de los sectores de la derecha a la dinámica institucional normal. Pero hay un signo que apunta hacia una situación de creciente recelo en el seno del plenario. El día doce de septiembre de 1934 no acude número suficiente de concejales a la sesión ordinaria, debiéndose realizar una segunda convocatoria para dos días más tarde. A esa sesión concurren en un principio tan sólo Plano y Manuel Lasilla. Es cierto que más tarde acudieron varios concejales... socialistas, nadie en cambio de la derecha ni del republicanismo radical. El dato

¹⁸⁷ Lo del Canal en AMU, 18-5-1934 y 26-9-1934.

sería anecdótico si no fuera porque se estaban dando señales de abandono del juego político. Las opiniones de los jefes continuaban su rodaje fuera del Ayuntamiento, viajando a través de los cafés y círculos recreativos en los que los prosélitos afianzaban sus posturas teñidas en muchas ocasiones de relaciones personales. En ese contexto, hubo no pocos que deseaban que terminase el tiempo de las palabras. Tocaba hablar a las armas, que se habían conseguido y guardado durante los meses precedentes. Más adelante el capitán Julián Miranda, actuando como abogado defensor de uno de los inculcados en la revolución de octubre, hablaba de las armas «que tan fácilmente podían adquirirse en aquellos tiempos», los que iban de febrero a septiembre de 1934.¹⁸⁸

Vida Nueva levantó la voz desde Uncastillo para denunciar lo que se percibía como un agravio partidario. El nuevo contexto político exigía escribir bajo seudónimo, «un socialista», para denunciar que «de pocos días a esta fecha van ocurriendo hechos que consideramos lamentables y sospechosos». Cuenta cómo a principios de marzo «las derechas vaticanistas reciben, con el favor del señor gobernador, unas treinta pistolas», y cómo al día siguiente de recibir una segunda remesa de pistolas, la Comandancia de la Guardia Civil «recibe orden ampliando la recogida de armas a los extremistas de izquierda, a los afiliados a la Unión General de Trabajadores, incluso las escopetas de caza, llegando a los registros domiciliarios a los mismos». Así que, protesta, «ya tenemos a las derechas con armas oficiales y no oficiales». Por las noches, detalla, «se sienten detonaciones, sin duda para probarlas o tal vez para que sepamos que las tienen». Poco después ocurrieron las roturas de las placas de Pablo Iglesias: «no tenemos armas como vosotros, que las enseñáis con corrillos de casinos y hasta en la peluquería, pero si nos lleváis a ese terreno confiados en la protección oficial, sabed

¹⁸⁸ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1997.

que en Uncastillo hay buenos segadores, y que las hoces no se han hecho sólo para segar trigo».¹⁸⁹

La justicia actuó. En mayo de 1933 Francisco Alcubierre Viamonte y Estanislao Aznárez eran procesados por «tenencia ilícita de armas», que tenían «en perfecto estado de funcionamiento» y sin la correspondiente licencia, siendo condenados a seis meses de arresto.¹⁹⁰ Esas detenciones, recordemos, fueron las que motivaron una airada protesta popular contra el proceder del sargento del puesto Teodoro García, y la escritura de una carta colectiva solicitando su traslado. En noviembre de ese año era detenido el joven labrador Alejandro Moreno Sarralanga por tenencia de una «Smith» del 44,¹⁹¹ y en diciembre era detenido el jornalero Daniel Larcuén, conocido como «Gregorio», al efectuarse registros «con ocasión de los sucesos revolucionarios que por aquella fecha se desarrollaban en diversas poblaciones de España», encontrándosele según la sentencia un revólver «Smith» del 38 con varias cápsulas y lista para ser usada y sin la licencia preceptiva.¹⁹² Quizás los casos más llamativos fueran los de los hallazgos de explosivos en marzo de 1934 en Sos, y en abril de ese año en Uncastillo. Jesús Gracia, de la localidad, y Estanislao Aznárez, de Layana, eran jóvenes de 25 y 23 años de edad y «de ideas extremistas anarquizantes». Sobre las 12 de la noche, cuenta la sentencia que «extramuros de la población» fueron sorprendidos los procesados portando «cada uno dos bombas fabricadas con bujes de carro, dinamita y metralla, provistas de su correspondiente mecha y de gran poder destructivo y dañoso». Se sospechó que podían atentar contra las personas y las cosas «que se estimasen contrarias al ideario extremista anarquizante de los referidos procesados», siendo condenados a cuatro años de prisión.¹⁹³

¹⁸⁹ VN, 3-3-1934.

¹⁹⁰ AHPZ, *Sentencias criminales*, 1934, núm. 6.

¹⁹¹ AHPZ, *Sentencias criminales*, 1934, núm. 121.

¹⁹² AHPZ, *Sentencias criminales*, 1934, núm. 78,

¹⁹³ AHPZ, *Sentencias criminales*, 1934, núm. 214.

Es evidente que la sola tenencia de armas no explica nada por sí sola, aunque previene de algún modo sobre el ambiente de hostilidad que se había venido instalando no sólo en las capitales, sino también en el campo. Las versiones históricas que apuntan a la izquierda como iniciadora de la guerra civil en ese mismo año de 1934 al armarse y optar por la vía revolucionaria, no tienen en cuenta procesos políticos y discursivos más profundos y complejos. La entrada de la violencia en la sociedad fue un hecho, pero no lo hizo de manera mucho más abrupta que en otros momentos de la historia reciente, como durante el Trienio Bolchevique (1920-1923), en el que pistoleros de obreros y patronos, junto con un papel activo de las fuerzas del orden al lado de estos últimos, imponían su ley en las calles de las urbes industriales y de movimientos sindicales potentes, como Barcelona o Zaragoza. Una década más tarde crecía el número de grupos fuertemente ideologizados que despreciaban los cauces instituidos de participación política, asumiendo prerrogativas relacionadas con el cambiante modo en que los gobiernos actuaban respecto del reparto de los derechos ciudadanos y los beneficios sociales. Era el tiempo de las violentas Juventudes de Acción Popular y de los discursos defensivos de socialistas y comunistas llamando a la resistencia. La nota del Comité Nacional, redactada por Prieto, decía con algún rodeo que había que estar presto a defender la República en la calle:

«El Comité Nacional, apreciando el riesgo evidente en que se hallan los derechos de la clase trabajadora y de España en general por las amenazas más o menos encubiertas de un fascismo vergonzante, coincidió en apreciar la necesidad absoluta de que las organizaciones del Partido estén preparadas para oponerse con el máximo empeño, llegado el caso, al logro siniestro de los propósitos acariciados por las derechas españolas».

Protesta en Cinco Villas

Lo que estaba ocurriendo en Uncastillo respondía a una situación social relacionada con las malas condiciones de

vida del campesinado, con el despertar de expectativas de cambio y mejora colectiva, así como con la percepción de que existía una mayor posibilidad de participación en la política pública. En la zona de las Cinco Villas hubo además una profunda recepción del ideario socialista promovida por propagandistas y republicanos forjados en la movilización colectiva en los años diez y veinte. No hay que perder de vista que la modernización de trenes y telégrafos no sólo beneficiaba a los próceres del trigo, sino de paso a quienes buscaban un intercambio y difusión de ideas nuevas sobre el modo de cambiar las cosas. La eficacia de esa difusión hizo que en la misma comarca se pudieran valorar situaciones de modo similar, y poner en práctica similares modos de protesta social. Uno de ellos, tenía que ver con las manifestaciones colectivas respecto de la actuación de la fuerza armada y su implicación con la República, algo que a su vez estaba relacionado con la interpretación de la legalidad en materia laboral y de la ocupación del espacio público. Los conflictos con la Guardia Civil en el período republicano indicaban en todo caso que la gente se sentía con derecho a hablar sobre la actuación de la Benemérita en función de valoraciones comunes sobre lo permisible y lo imperdonable, y conforme a la percepción de cómo en la República se configuraban las fuerzas acerca del cambio social y las resistencias al mismo. Y al igual que respecto de ese asunto, de muchos otros sobre los que antes se había impuesto el silencio.

No es objeto de este trabajo estudiar por entero la conflictividad en la comarca durante la República, pues ya existen trabajos solventes sobre el tema, pero sí parece pertinente verter una somera mirada de conjunto capaz de contextualizar los sucesos de Uncastillo.¹⁹⁴ El fin de la Monarquía supuso la puesta de largo de viejas esperanzas y

¹⁹⁴ Agradezco la inestimable ayuda de Eliseo Moreno Serrano para la elaboración de estas líneas, sin cuya desinteresada cesión de archivos y ficheros personales de incalculable valor para el estudio de este tema, no se hubieran podido escribir.

reivindicaciones. Lo que hasta la fecha se había manifestado de modo soterrado y delictivo en forma de incendios y actos de protesta silenciosa (en Luna se incendia un predio del Duque que los vecinos del pueblo se niegan a apagar¹⁹⁵), sale a la calle en forma de actos de protesta y manifestación colectiva. En mayo de 1931 se respiraba en Luesia «efervescencia en el municipio por las tierras comunales», pues llevaban dos años tramitando el deslinde y, dada la lentitud, «el pueblo se ha excitado y ha labrado el monte denominado *Val-Defano*».¹⁹⁶ Eso no quiso decir que los campesinos no siguieran utilizando el fuego castigador contra determinadas propiedades, como sucede en Luna en julio de 1931 y como volverá a suceder en otros lugares en los años posteriores.¹⁹⁷ Pero son las formas colectivas y públicas de enfrentamiento las que surgen en esta nueva coyuntura política con fuerza, sobre todo cuando las malas cosechas no ceden un respiro a los campesinos (hay noticias nada halagüeñas en Luesia en julio de 1931)¹⁹⁸. En julio tiene lugar en Ejea una huelga de pastores¹⁹⁹, y en diciembre tenía lugar en la Delegación Regional de Trabajo una reunión con los representantes de Gallur para resolver la fórmula de resolver un reparto de tierras. «Se da el caso de varios propietarios de aquella villa que se niegan a ceder en beneficio de sus convecinos la parte de tierra que se les asigne y otros que rotundamente se niegan a entrar en dicho reparto siquiera sea en la proporción que sea».²⁰⁰

Las noticias sobre la crisis económica vuelven a llegar desde Luesia en marzo de 1932, desde donde los vecinos piden trabajo público para paliar el desempleo, previéndose

¹⁹⁵ HA, 11-3-1930.

¹⁹⁶ HA, 31-5-1931.

¹⁹⁷ HA, 5-7-1931.

¹⁹⁸ HA, 22-7-1931. En agosto se producen varios embargos de mieses por no saldar a tiempo créditos agrícolas (HA, 9-8-1931).

¹⁹⁹ HA, 16-7-1931.

²⁰⁰ HA, 8-12-1931.

desórdenes en las celebraciones religiosas y tomándose la prevención de suspender sus manifestaciones públicas. Algo más tarde se incendia el pajar de una propietaria, y en diciembre se comunica alivio por el restablecimiento de la «tranquilidad» tras una ronda tumultuosa.²⁰¹ Marzo y abril de 1933 fue testigo de sucesos más significativos si cabe de las necesidades campesinas. En marzo, en el pueblo de Luna y en Sierra de Luna, con motivo de un pleito relacionado con el aprovechamiento de las tierras de un monte, se concentraron varias parejas de la Guardia Civil para evitar enfrentamientos entre ambas comunidades. Pero cuando vigilaban que no se produjeran asaltos en las fincas, dado que «los vecinos se hallaban muy excitados», se produjo el choque. Allí se presentó un grupo de cincuenta vecinos en actitud levantisca, que se disolvió pero que se rehizo cuando intentó evitar que entrara en el pueblo una camioneta procedente de Valpalmas. La Guardia Civil custodió su paso, pero la gente «empezó a insultar a los guardias y a lanzarles piedras». Hubo una carga de respuesta de los guardias, y después los disparos de varios vecinos que se hicieron fuertes en una esquina, matando a uno de ellos por disparo de pistola. El posterior tiroteo de la fuerza puso a los vecinos en fuga.²⁰²

En abril se menciona que en Luesia «continúan los asaltos a las propiedades particulares», notándose «hambre de tierra» en espera de «que los poderes públicos implanten la Reforma Agraria y den a cada cual lo que en justicia le corresponde».²⁰³ Y en ese mismo mes de abril el alcalde de Tauste informa al gobernador de que varios propietarios «se niegan a cumplir las bases pactadas» con los trabajadores.²⁰⁴ En julio tuvo lugar una huelga de trabajadores del campo en Gallur²⁰⁵, y en agosto se generó en Castiliscar «un grave pro-

²⁰¹ HA, 4-6-1932 y 18-12-1932.

²⁰² HA, 19-3-1933.

²⁰³ HA, 28-4-1933.

²⁰⁴ HA, 12-4-1933.

²⁰⁵ HA, 14-7-1933.

blema con unos terrenos incultos adquiridos por la desamortización y que fueron donados al pueblo en 1930. Antes y después de la donación, «pero sobre todo después, dichas tierras fueron roturadas caprichosamente por un buen número de vecinos en proporción directa a las posibilidades de cada uno». Por aquellos días del 33 la autoridad municipal quiso arreglar el asunto solicitando del Gobierno Civil un delegado para mediar en la cuestión.²⁰⁶ En aquel mismo verano dos violentos incendios acabaron con la mies almacenada de una finca y un pajar en Tauste.²⁰⁷

En el Archivo del Gobierno Civil de Zaragoza se conservan algunos documentos que dan cuenta de manifestaciones de tensión entre los vecindarios y la Guardia Civil, al tiempo que ilustran la confluencia de intereses, la fluidez en la comunicación entre las organizaciones obreras y políticas republicanas y socialistas de la región, y el intercambio de experiencias, estrategias, valoraciones y juicios sobre la situación política y la actuación exigible a la fuerza pública. El alcalde de Farasdués escribió al gobernador exigiendo el traslado del jefe del puesto «augurando que de no hacerse así se producirían desórdenes tales en el vecindario que de lo que ocurriera no podía responder».²⁰⁸

En Ejea ya se planteó el descontento al poco de caer la Monarquía, ocasión en que «varios vecinos pertenecientes a Sociedades» firmaron una solicitud de traslado de un cabo de la Benemérita. Las sociedades eran, como cabe imaginar, la UGT y la Agrupación Socialista locales:

Las Sociedades firmantes a V.E. con todo el respeto debido tenemos el honor de exponer:

Que teniendo en esta Comandancia de la Guardia Civil al cabo más perseguidor de hombres honrados y libres de pen-

²⁰⁶ HA, 31-8-1933.

²⁰⁷ HA, 19 y 30-7-1933.

²⁰⁸ AGCZ, Leg. 101, exp. 3. La investigación abierta exoneró al cabo de los cargos que le imputaba el alcalde, no produciéndose dicho traslado y estimando el gobernador «que el vecindario es ajeno a la actitud violenta que el alcalde le supone».

samiento, se ha marcado ser uniprimogénito del dictador que sufrimos los españoles, y una gran servidor de los caciques locales.

Si los firmantes fuéramos a detallar a V.E. las multas pagadas con carros sin farol en la recolección de la cosecha, porque estos vienen cargados de mies por caminos vecinales, y en el corto camino y espacio de carretera que teníamos que pasar éramos esperados como la caza de la perdiz en la espera, teniendo que doblegarse a tener que llevar los faroles encendidos con perjuicio de poder ser incendiados los carros, aperos, caballerías y lo que tanto sudor nos costó crear.

No son menos las multas pagadas por los humildes trabajadores con camioneta para transportes, cosa tan esencial y precisa en esta localidad (en esto se han ensañado, pues las ha habido en gran escala hasta ochocientas pesetas, y de quinientas son interminables en ambas esferas, las que tendrá registradas la Jefatura de Obras Públicas), sin que se haya dado el caso de que hayan sido denunciados los vehículos de varios Sres. Caciques, sostén del régimen caído.

No es solamente lo expuesto Sr. Gobernador, sino que el asunto capital es, que por exteriorizar sus ideas de libertad y de justicia, en el primer intento de nuestros compatriotas el quince de Diciembre pasado, se expansionaron en gritos a la República. Pasados algunos días de esta fecha los más significados pasaron por la Comandancia de la Guardia Civil a ser interrogados, ¡pero qué interrogatorio Señor!... con pistola en pecho, maniatados, pisoteadas sus hombrías y honor a sufrir el calvario que V.E. conoce.

Por todo lo expuesto y sernos imposible redactar todas las injusticias por este señor cometidas del año veinticinco a la implantación de la República, rogamos a V.E. [...] el más rápido traslado para tranquilidad de nuestros espíritus, hasta tanto conocemos fórmula presentación, querella al fiscal de esta Audiencia, por abuso notorio de su autoridad.

Ejea de los Caballeros, 9 de mayo de 1931.²⁰⁹

²⁰⁹ AGCZ, Leg. 101, exp. 2. Carta firmada por los presidentes y secretarios de la UGT y Agrupación Socialista de Ejea. También existe un informe que da cuenta del descontento del alcalde de Gallur con un cabo de la Guardia Civil con motivo de unos sucesos en 1929 relacionados con un conflicto de autoridad. Parece ser que el cabo denunció el hecho de que durante una novillada el público había bajado a la arena, «teniendo que retirarse los lidiadores y que-

Dos años más tarde el vecino ejeano Domingo Chueca denunciaba en marzo y ante el alcalde Juan Sancho a los guardias Gregorio Lorenzo y Esteban Navarro por una agresión gratuita. Marchaba según su carta cantando con un amigo unas canciones que según la Guardia Civil ofendían a gente. «Yo les dije que las había oído cantar dentro del pueblo y por eso las cantaba, pero que ya no las cantaría». Uno de los guardias amenazó con dar «una bofetada» si no callaba. «Yo le dije que para pegar siempre había tiempo, terminar de decir esto y dármele fue todo uno, por lo cual que me hizo sangre en las narices y me tiró al suelo». Por considerar «que fue un abuso de autoridad y un atropello» hizo la denuncia. Los testigos que iban con él dieron detalles, como que las coplas se titulaban «Los faginetes» y «La clase media de Ejea», así como la actitud prepotente del guardia: «Ahora vas a la Casa del Pueblo y dices que te he pegado yo». El hecho provocó la manifestación de las Juventudes socialistas de Ejea, que «no puede pasar impasible ante los sucesos ocurridos estos días entre la opinión pública y la Guardia Civil». Y es que «a pesar de ser una fuerza pública se interesan de la política tan descaradamente que lo han demostrado y demuestran en todos los actos acaecidos desde el advenimiento de la República desprestigiando a los ojos de la opinión pública a este Ayuntamiento por todos los medios que tienen a su alcance, sean legales o no con el solo objeto de boicotear el régimen republicano». Y se les acusaba de gran «cinismo» por haber pegado a un vecino tan sólo por cantar «coplas de elogio al régimen republicano». Las Juventudes protestan por ello de esos actos «que considera bochornosos para este régimen de libertad y de justicia que los trabajadores han implantado».²¹⁰

En Mallén el conflicto adquirió en mayo de 1933 tonalidades diferentes. La UGT local denunció ante el gobernador

dando el animal a disposición de la muchedumbre, que se encarga de matarlo después de torearlo». El gobernador suspendió la siguiente novillada, y esto en opinión del comandante del puesto «molestó extraordinariamente al alcalde y empezó a hacer atmósfera contra el cabo», AGCZ, Leg. 101, exp. 1.

²¹⁰ AGCZ, Leg. 101, exp. 5. La carta fue firmada el 16 de marzo de 1933.

el intento de las derechas locales de perturbar el orden utilizando a la Guardia Civil. Según los socialistas hubo por parte de los «elementos monárquicos» del pueblo una denuncia previa que no tenía otro fin que el de «enfrentar a la fuerza pública provocando un choque con el pueblo valiéndose de la falsedad de la calumnia y de su desmedido atrevimiento, propio de su monarquismo», usando «toda su maldad y argucias para ello». Frecuentemente «celebran tertulias y reuniones» donde dan «vivas al rey y a la monarquía y mueras a las instituciones y organizaciones que sostienen al Régimen Republicano». Su enemistad hacia el comandante del puesto vendría de su postura escasamente servil hacia los poderes locales: «públicamente dicen que es un cobarde, que no los tiene bien puestos..., que consiente la alegría del pueblo y su adhesión al Régimen, como si fuese indigno, claro que para ellos lo es». Los monárquicos «se disgustan porque la fuerza no se decide de una vez a ametrallar al pueblo consciente de que ha puesto todas sus esperanzas e ilusiones en el Régimen Republicano». Se dice aún así que la fuerza actuó con ellos parcialmente, «con demasiada benevolencia», y que al tiempo «la masa consciente del pueblo» les vigila para impedir que fructifiquen sus «intrigas y maquinaciones», dado que «están acostumbrados a considerar a la fuerza pública como látigo pretoriano y dispuesta a servir sus intereses». Parece ser que el año anterior había tenido lugar «un plebiscito» a favor de la Guardia Civil promovido por los mismos elementos de la derecha local, y tan sólo un año después se manifiestan hostiles a ella. «Pues ha ocurrido que han intentado infructuosamente sobornar a la fuerza para hacer un escarmiento injustificado entre la gente trabajadora», a lo que se ha opuesto tan sólo el deseo de los socialistas de que «resplandezca la justicia y la verdad», pues es notorio y a los firmantes les consta que las opiniones de la fuerza «no solamente no coinciden sino que ni siquiera simpatizan con las nuestras».²¹¹

²¹¹ AGCZ, Leg. 101, exp. 5. Carta firmada en 15 de mayo de 1933 por presidentes y secretarios de UGT y Agrupación Socialista de Mallén. En ese mismo

Por otra parte, al igual que en Uncastillo, hubo tensión en la cita electoral de noviembre de 1933 en Valpalmas, si bien de un modo más indirecto, no por una causa expresamente política. Según el segundo alcalde Clinio Gil en origen se trató de un incumplimiento laboral. Un grupo de jornaleros de Julio Gallego estaba trabajando en la finca Marisora, «cosa que está en litigio con el Municipio». Corrió el rumor, y los socios «se violentaron», por lo que el alcalde procedió a suspender los trabajos «temiendo algún altercado». Fue sometido por la Guardia Civil a severos interrogatorios, «despidiéndome de la Alcaldía sin ningún miramiento de mi cargo». Después, «estando en el patio de la Alcaldía veo cómo bajaron las escaleras todos los guardias y vi cómo dicho encargado se tiró el fusil a la cara para disparar contra un pequeño grupo de jóvenes, teniendo que intervenir yo para que no ocurriese ninguna desgracia, pudiendo con sólo mi palabra disolver el grupo cuando el guardia lo quería resolver a tiros». Por supuesto, que la versión de la Guardia Civil difería de parte a parte de la aportada por el alcalde ejerciente. Según el informe del jefe tan sólo anotó los nombres de los implicados. Afirma que después «oyó voces de un grupo de hombres que se habían congregado frente a la puerta de dicho ayuntamiento al parecer con el propósito de insultar cuando bajasen de declarar los criados [...], propósito que la fuerza evitó con palabras». Y añade en la comunicación al gobernador que en el fondo «ve una gran animosidad por parte del repetido alcalde, pues con fecha 22 de abril de pasado año la repetida autoridad denunció a otra pareja del puesto, denuncia que resultó completamente falsa».²¹² La misma cita electoral

año hubo denuncias similares en Aranda del Moncayo, donde el Ayuntamiento denuncia que «desde que tomaron posesión los cargos municipales vienen notando que en cuantas intervenciones toma parte en este pueblo la Guardia Civil [...] observan que todos los guardias del puesto [...] se conducen de una forma parcialísima, siempre encaminada a favorecer a los enemigos encubiertos del régimen republicano, los cuales son amigos suyos». AGCZ, Leg. 101, exp. 5.

²¹² Y sobre el alcalde afirma que «está afiliado a la UGT y está considerado como elemento peligroso por sus ideas avanzadas», y que obró como lo hizo «por tener órdenes de la superioridad se abstenga dicha Sociedad de efectuar trabajos de ninguna clase en la finca de referencia», desmintiendo que hubiera

provocó quejas contra el comportamiento de la Guardia Civil o conflictos de autoridad en Daroca²¹³ y en Quinto²¹⁴, lo que da una noción del grado general de confrontación alcanzado por esas fechas. En Belchite una «chusma» a decir de *El Noticiero* había insultado y apedreado a una mujer que había permanecido en una mesa electoral.²¹⁵ El trasfondo político del enfrentamiento y la complejidad del mismo queda patente cuando, al margen de las tensiones, también se producen agradecimientos hacia guardias que han simpatizado por diversos motivos con el vecindario y protestas contra su traslado.²¹⁶

El año siguiente comienza con un incendio intencionado en Biel y una huelga campesina en Gallur, donde además varias semanas más tarde se comete un acto de sabotaje en una finca talando varios árboles frutales de un propietario.²¹⁷ En Biota los obreros parados organizan una huelga en demanda de más trabajo en las obras del Canal de las Bardenas.²¹⁸ En junio tuvo

un posible tumulto, «pues en dicho pueblo reinaba la más completa tranquilidad», AGCZ, leg. 101, exp. 6.

²¹³ También durante la elección de noviembre de 1933 el alcalde quería mantener el orden y concebía como una provocación el que salieran los guardias. «Por el presente ordeno a V.S. se abstenga de que la fuerza a sus órdenes salga del Cuartel mientras no sea requerida por algún presidente de mesa, por mi autoridad o por algún candidato, o si acaso recibiere alguna llamada telefónica». El jefe del puesto de Daroca se molestó por «la forma imperativa y no procedente» empleada por el alcalde, AGCZ, leg. 101, exp. 6.

²¹⁴ Dos vigilantes municipales denunciaron a un guardia por arrancar pasquines de propaganda socialista. Los vigilantes Tomás Ingalature y Pascual Úbeda denunciaron al guardia civil «por romper los pasquines que abía puestos por las esquinas de la candidatura Socialista, y ofendernos de palabra a los Vigilantes, el cual dijo que los abiamos puesto nosotros o que abiamos recibido dinero por consentirlo, y que a saber si seríamos nosotros los que se llebaban las gallinas de los Corrales, a todas estas palabras le dijimos que mirara lo que decía y contestó que si fuera Comandante dicho guardia que esta noche terminabamos de estar aquí, y que daría parte al Gobernador para que nos cojera presos» (respetada la ortografía original), AGCZ, leg. 101, exp. 6.

²¹⁵ *EN*, 22-11-1933.

²¹⁶ En 1936 diversas organizaciones de Daroca protestaron por «el injusto traslado» del Teniente de la Guardia civil, aunando a UGT, CNT, Unión Republicana y Sindicato Agrícola, significando que en el pueblo había un alto grado «de excitación». AGCZ, leg. 101, exp. 9.

²¹⁷ Lo de Biel en *HA*, 24-1-1934 y lo de Gallur en *HA*, 17-1 y 22-2-1934.

²¹⁸ AGCZ, Leg. 1, exp. 9.

lugar la huelga de la FNTT, que se dejó sentir en la mayoría de localidades de la comarca, como Sádaba y Sos, donde la Guardia Civil detuvo a varios vecinos que intentaban «ejercer coacciones».²¹⁹ En Tauste se anunció una «grave situación por la división en dos bandos de los vecinos del pueblo, unas a favor del Ayuntamiento y otros en contra».²²⁰ Más tarde, en octubre, llegarían las noticias de las repercusiones del movimiento revolucionario en las diferentes localidades. En Uncastillo, Tauste y Mallén, pero no sólo. En Farasdués el presidente de la UGT Casiano Melero fue detenido acusado de ordenar ir «a la huelga» el día 6, paralizándose las faenas agrícolas, incautándose del correo «y dando lugar a que se quemaran varios periódicos y a que la correspondencia fuera abierta por manos ajenas».²²¹ En Luna al menos los cuatro vecinos inculcados, en la noche prefijada y «valiéndose como era costumbre de una trompeta propiedad del pregonero, anduvieron por el pueblo dando algún grito de Viva la República Española», sin que hubiera alteración del orden, ni gritos subversivos, «ni tratasen de asaltar la casa del Sr. Cura párroco ni pronunciasen frases amenazadoras contra el mismo», como al parecer quiso dejarse caer por algún denunciante.²²² Los hechos en estos pueblos pequeños casi tienen que ver con formas populares de manifestar el descontento, siendo indudable que el éxito de estas acciones dependía en mayor medida de lo que ocurriese en las poblaciones de mayor tamaño e influencia.

En definitiva, esta perspectiva más amplia desde la que se ha contemplado la conflictividad social y política en la

²¹⁹ HA, 8-6-1934.

²²⁰ HA, 16-5-1934.

²²¹ AHPZ, Sentencias criminales, 1934, núm. 413. Un mes más tarde la Guardia Civil detenía a «cuatro complicados en los sucesos revolucionarios», pero «ante el motín del pueblo y temiendo una alteración fuerte», se les liberó mediando la promesa del nuevo alcalde de llevarlos él al día siguiente. Al día siguiente los bajó el alcalde, «pero esto los envalentonó, quedando muy debilitada la fuerza de la Guardia Civil. AGCZ, Leg. 1, exp. 7.

²²² AHPZ, Sentencias criminales, 1934, núm. 393. Los cuatro vecinos detenidos fueron absueltos.

comarca de las Cinco Villas durante los años republicanos permite ubicar la concreta historia de Uncastillo en un contexto de tendencias comunes y modos de manifestación compartidos, de aspiraciones colectivas y de autodefinición como grupo injustamente tratado por sus oponentes. Pero cuando llegamos a octubre de 1934 un sólido bloque de información no tratada hasta la fecha, así como la gravedad de unos hechos que determinarán el futuro de muchas familias, obligan a volver a aplicar el microscopio al relato.

Capítulo 5 REVOLUCIÓN

El 7 de octubre de 1934 se celebra en el salón de plenos del Ayuntamiento de Uncastillo una sesión extraordinaria. A ella acuden los concejales Cándido Gracia, Pío Pueyo, León Marín, Francisco Fernández, Enrique Pérez y Manuel Cortés, con el objeto de tomar postura sobre «los luctuosos sucesos ocurridos en esta villa en el día 5 del actual». Se acuerda, en primer lugar, «condolerse de los sucesos que tan lamentable fin han tenido para muchas familias de la localidad y protestar enérgicamente contra los mismos, motivados por personas que no tienen ajustados sus sentidos». También pagar las cajas mortuorias y lápidas de los guardias civiles muertos «en el cumplimiento de su deber en bien del orden público», levantar la sesión en señal de duelo y dar el pésame a las familias de los guardias fallecidos. A las tres y media se levanta la sesión, abandonando los concejales el salón. Al día siguiente llegaría la destitución del Ayuntamiento por orden gubernativa y posteriormente el nombramiento de una nueva alcaldía de derechas. En efecto, y en primer lugar, algo muy grave ha ocurrido dos días atrás, todo el pueblo lo sabe, y ahora también todo el país. Llegó la revolución, aunque la revolución no se quedó, pero se llevó consigo a dos guardias civiles y también a dos paisanos a quienes apenas se menciona en las crónicas. Los detalles fueron ofrecidos por la prensa, unánime en presentar a los guardias civiles como víctimas de un movimiento «criminal» y abyecto, una locura de consecuencias desastrosas. En segundo lugar, destaca la ausencia del alcalde hasta la fecha Antonio Plano en el salón de plenos que había presidido durante cuatro años. En realidad no está en el pueblo. Todas las miradas y los dedos acusatorios se dirigen hacia él como cabecilla decidido de una rebelión que condujo a muchos de sus convecinos a la ruina y la cárcel, y algu-

na pluma sugiere que no es precisamente la valentía el principal valor del alcalde cuando presintió el funesto rumbo que tomaban los acontecimientos. Estas impresiones, corroboradas en el juicio celebrado meses más tarde, fueron las aceptadas por el poder político, las fuerzas del orden y buena parte de la opinión pública, y supusieron un punto y aparte en la convivencia entre los vecinos de Uncastillo, y sobre todo en la vida de Antonio Plano. Han pasado más de setenta años de todo aquello, y quizás haya llegado la hora de volver a recordar los hechos y, sobre todo, de tratar de restituir el lugar que desempeñaron los actores en aquellos graves acontecimientos, entre ellos Antonio Plano, en unos términos más justos y, ojalá ecuánimes, que los que quedaron en los medios escritos de la época.²²³

Para ello hemos contado con una fuente no utilizada hasta la fecha, el sumario militar instruido a partir de octubre de 1934, el expediente número 449, legajo 19, guardado en el Tribunal Togado Militar número tres de Zaragoza, compuesto nada más y nada menos que por siete rollos de información distribuidos en tres cajas, para completar un total de 2.185 folios de instrucción. Se trata de una copiosísima amalgama documental de una riqueza extraordinaria, por cuanto en él aparecen los detalles de la investigación, la recopilación o la ausencia de pruebas, los diversos testimonios y sus posibles contradicciones, los argumentos utilizados por acusación y defensa, los exámenes periciales en el lugar de los hechos... De tal modo que, siguiendo el curso de la investigación, y contrastándola con otras fuentes y apuntes, se puede no ya reconstruir fielmente los hechos, cosa pretenciosa en un caso tan complejo y enmarañado como éste, pero sí obtener un revelado del estado de agitación alcanzado en un pequeño pueblo agrícola en el que el conflicto parecía haberse instalado y alcanzado, con este episodio, un grado nuevo y desconocido de violencia y de implicación política vecinal. Y quizás, ese es el deseo que nos anima, arrojar algo de luz

²²³ AMU, Actas municipales, 7-10-1934.

sobre unos hechos oscurecidos por un entorno hostil y deseoso de un juicio ejemplarizante, cuyos protagonistas han desaparecido o cuyos testigos luchan por no dejar escapar de su memoria un recuerdo infantil de una fría mañana de octubre de hace más de setenta años.

La crónica

El día 7 de octubre el periódico derechista *El Noticiero* titulaba su editorial «El crimen contra España», confesando que «escribimos en plena confusión de noticias» pese a saberse la situación dominada en Asturias, pero con alegría franca por haberse declarado el estado marcial en todo el país. «Las tropas en la calle proclamando el estado de guerra encerraban el espíritu y el vigor de la raza española contra los crímenes separatistas», clamaba. *El Noticiero*, al igual que el resto de diarios regionales, no publicaría, y bajo censura previa, los detalles de los hechos hasta el día 9. Al parecer, mientras el gobernador de Zaragoza Otero Mirelis manifestaba su satisfacción por la adhesión a su autoridad de las fuerzas vivas de capital y provincia, la sangre había corrido en Tauste y Uncastillo, donde sus alcaldes, «después de haber lanzado a sus paisanos a una loca y sangrienta aventura, andan huidos por el campo. La Benemérita les persigue», concluía la breve crónica. Enseguida los reporteros se trasladaron al Hospital Militar, a donde iban llegando los heridos de la refriega, y de ahí es de donde proceden los primeros relatos. El *Heraldo* fue más prolijo en detalles en su narración del día 9. Uniéndose a la corriente general crítica de medios y autoridades hacia el levantamiento, titulaba «El movimiento revolucionario pasó inadvertido en Zaragoza y repercutió en pocos pueblos de la provincia». En el cuerpo de la noticia se lee que en Zaragoza las secciones afectas a la UGT declaran el día 5 la huelga desde primeras horas de la madrugada, secundando el llamamiento de Madrid los empleados de espectáculos, panaderos, barberos, Artes Gráficas y camareros. Toda la atención se dirige entonces hacia los sindicatos de la CNT, organización que finalmente no secunda el paro al tacharla de

lucha política, trabajando con normalidad en construcción, transportes y demás oficios.²²⁴ Al mediodía se clausura el histórico local de la UGT de la calle Estébanes, y nada de particular ocurre ya en la capital hasta el día siguiente, sábado, en el que el gobernador resigna la autoridad en el estamento militar. Las tropas salen a la calle para imponer el estado de guerra, algo que según el diario «causó en el público gran emoción». La resistencia más enconada tendría lugar en Asturias y Barcelona, si bien al día siguiente se recibe la noticia de que la Generalidad había rendido su maniobra separatista.

De la región hay anotaciones aisladas de importancia menor, como una huelga en Utrillas, la detención de trenes por piquetes en Mora, la destrucción de un puentecillo por los «rebeldes» en Pradilla, y la captura de una partida armada en Anadón, dominando la situación en cada lugar la fuerza con su sola presencia. Sin embargo en las Cinco Villas fue distinto. Los «focos rebeldes» de Mallén, Tauste y Uncastillo dieron para llenar varias páginas y adjuntar fotografías de los guardias heridos y del entierro de varios de sus compañeros muertos. Los vecinos habían amanecido «dando gritos subversivos», cortando las comunicaciones con barricadas y tomando

²²⁴ La causa fundamental del fracaso de la huelga general fue la no participación de la potente CNT zaragozana, que rechazó todo tipo de colaboración en el movimiento por atribuirle un carácter «político». Tanto para Graham Kelsey como para Alejandro R. Díez Torre, estudiosos del anarcosindicalismo aragonés, el llamamiento a la huelga no pudo llegar en momento más desafortunado, a causa de la debilidad por la que atravesaba la Alianza Obrera en aquel momento y a la «antigua desconfianza [cenetista] hacia el reformismo y la falta de capacidad revolucionaria de los socialistas». Además, para estos autores —que se basan en fuentes confederales—, la propuesta para que la CNT secundase el movimiento habría llegado «de buenas a primeras», sin contactos previos. Sin embargo, otra visión radicalmente opuesta, la ofrecida por la documentación que obra en el archivo del Comité Central del PCE, contradice esa versión y sostiene que la dirección cenetista habría recibido «no solo llamamientos y cartas [de la Alianza Obrera] sino visitas para que participara en la lucha». No obstante, como reconoce el propio Díez Torre, la respuesta inicial de la CNT a la huelga general de octubre fue diferente en Zaragoza que en el resto de la región, como lo prueban las declaraciones de huelgas conjuntas por parte de UGT y CNT en diferentes comarcas aragonesas y las críticas emitidas contra la dirección desde algunas comarcas cenetistas, matizadas posteriormente por las aclaraciones de los líderes confederales en un Pleno Regional.

el Ayuntamiento en el que habían proclamado «el comunismo libertario», teniendo lugar violentos tiroteos al llegar los camiones con refuerzos de otros puntos de la región. La nota oficial que gobernador Mirelis transmitió a la prensa sobre lo ocurrido en Uncastillo fue la siguiente:

«El alcalde de Uncastillo, Antonio Plano y un teniente de alcalde, ambos de filiación socialista, organizaron una manifestación con los elementos afectos a la U.G.T. y se dirigieron a la casa cuartel de la Guardia Civil, donde el señor Plano dijo a los guardias que habíase declarado la revolución social en toda España y que por tanto debían rendirse y entregar las armas.

Los guardias contestaron que no tenían por qué rendirse, ni aceptar otras órdenes que las de sus jefes. En este momento se inició un violento tiroteo y los guardias se refugiaron en el cuartel, desde donde repelieron la agresión en tanto llegaban los refuerzos pedidos a Tarazona.

Cuando llegó la fuerza de Tarazona, también fue tiroteada por los revoltosos y en vista de que éstos arremetían en sus agresiones, se solicitó de Zaragoza el envío de nuevas fuerzas. De Zaragoza salieron treinta guardias, al mando de un oficial, que después de sostener fuerte tiroteo, lograron entrar en Uncastillo a las dos de la madrugada.

Se tiene la impresión de que en los tiroteos han resultado bastantes heridos y algunos muertos pero de momento no se puede precisar su número, porque los revoltosos se hallan huidos por los campos.

El alcalde Antonio Plano y el teniente de alcalde, promotores y dirigentes de los sucesos registrados han desaparecido del pueblo y la Guardia Civil les busca activamente.

En los últimos momentos un grupo de revoltosos se hizo fuerte en las ruinas del castillo, pero un capitán de la Guardia Civil, con diez números, tomó las ruinas, haciendo salir de ellas a los revoltosos, que entregaron las armas y municiones que poseían».

Después venía el balance de heridos trasladados al Hospital Militar. Los más graves eran el capitán Enrique García Lasierra, con heridas de arma en brazo, cuello y espalda, y su ordenanza Cristóbal Moral López. También fueron heridos los guardias Ruperto Santamaría (herido por arma de fuego en

cara, brazo y conducto auditivo, pronóstico grave), Demetrio López (herido por arma de fuego en mano y muslo derecho, menos grave), Fernando Díaz (herido por arma de fuego con fractura de fémur, grave), el sargento del puesto Victoriano Quiñones Fernández (heridas de bala, perdigón y posta en cara, pierna, pecho, brazo izquierdo, grave), y el guardia Félix García (herido por arma de fuego en el ojo derecho con probable ceguera, grave). A los guardias les habían dado duro. La versión en primera persona la proporcionan Quiñones y el capitán García Lasierra desde sus lechos hospitalarios.

Quiñones contó lo ocurrido desde dentro del cuartel. El viernes a las seis de la mañana «se presentó en el cuartel un vecino del pueblo y pidió hablar con el comandante». Cuando Quiñones se presentó le manifestó «que se había proclamado el comunismo en España y que los vecinos del pueblo se hallaban en armas para secundar el movimiento», a lo que respondió con incredulidad y requiriendo a Plano como alcalde y presidente de la UGT local. «A los pocos momentos llegó el alcalde, quien me dijo que a las cuatro de la mañana habían llegado en automóvil unos delegados con la orden de que los afiliados a la UGT se apoderasen del pueblo». Plano le dijo además «que los vecinos estaban armados y que todas las comunicaciones estaban cortadas», requiriéndole para que entregasen las armas y se rindieran. «Me negué rotundamente a tal pretensión y le hice algunas reflexiones para convencerle de que aquello era una locura». Plano contestó que marchaba al Ayuntamiento para intentar disuadir a los grupos, sin confiar mucho en su gestión, observando entonces desde la puerta que «en las inmediaciones había formados algunos grupos de vecinos armados» dispuestos a tomar el cuartel. «En ese momento nos hicieron una descarga de la que resultaron dos guardias muertos, un herido y yo que también fui alcanzado por los proyectiles». Cerrar la puerta, recoger a los muertos y heridos y responder al fuego los que podían, todo fue uno, mientras «en nuestro auxilio acudieron las mujeres y los hijos».

El capitán García Lasierra sitúa su relato unas horas más tarde, en la tarde de aquel mismo viernes. Él llegaba, cuen-

ta, desde Tarazona a Uncastillo tras reunir a varios efectivos de Malón y viajar en dos automóviles requisados. «En las afueras del pueblo nos desplegamos en guerrilla», encontrándose al querer entrar «una barricada formada con gruesos troncos de árbol», y a los pocos pasos un recibimiento en forma de descarga. «Respondimos con fusiles». Avanzaron con dificultad, pues «desde las casas continuaban hostilizándonos». Cuando se hallaban a pocos metros del cuartel «los rebeldes intensificaron el tiroteo, hasta formar una verdadera cortina de fuego». Cuenta con dramatismo cómo él y el guardia Santamaría se guarnecieron del fuego en una acequia apenas sin munición, y cómo llegaron a duras penas al cuartel, donde los guardias abrían a su señal la puerta. Dentro, «el espectáculo no pudo ser más trágico. Allí yacían los cadáveres de dos guardias y tres más estaban heridos de gravedad, por lo que únicamente estaba defendido el cuartel por los dos guardias que quedaban ilesos». Durante varias horas se hizo fuego sobre las casas desde las que se hostilizaba a la Guardia Civil, hasta que llegó un nuevo contingente de Sos formado por un alférez y nueve números. Sólo entonces pudo el capitán ordenar a una patrulla enviar a buscar al médico del pueblo para prestar auxilio a los heridos. Para garantizar la seguridad esta patrulla «detuvo en la calle a catorce individuos, a los cuales los ataron de pies y manos y los colocaron delante de la puerta para evitar que los rebeldes hicieran fuego, y así estuvieron hasta las dos de la mañana». A las cuatro llegaron cuarenta hombres del Tercio de Osuna con dos ametralladoras, apoderándose del Ayuntamiento, realizando registros y detenciones. En el interior del cuartel «la noche fue horrible», pues «a los lamentos de los heridos y el cuadro de los dos cadáveres se unían los llantos de las mujeres y de los niños». Tan sólo *La Voz de Aragón* menciona el día 10 que hubo además un paisano muerto y nueve heridos.²²⁵

A partir de aquí no hay más investigación ni corresponsalías de los diarios a los pueblos, aceptando todos ellos la ver-

²²⁵ HA, 9-10-1934; EN, 7 y 9-10-1934; LVA, 10-10-1934.

sión oficial sin plantear dudas o posibles contradicciones. La censura instaurada con el estado de guerra, desde luego, no ayudó, provocando más bien que los diarios anduvieran buscando excusas para explicar por qué no había salido en los días previos (algo que implicaba al menos sospechas de haber seguido la huelga), o sacando pecho cuando, como *El Noticiero*, sí que se había editado ese día. En cuanto a Uncastillo, se da por sentada la plena culpabilidad de Plano como «inductor» del movimiento y máximo responsable de lanzar a sus vecinos a la confrontación armada. «Los revoltosos –apuntaba *La Voz*–, entre los que hay varias bajas, huyeron a la desbandada internándose por el campo [...] También lograron escapar el alcalde y los concejales que dirigieron el movimiento».

Reconstruyendo la revuelta

A las 10 de la mañana del día 6 de octubre el juez de Sos Sr. Lanzón y Surroca procedió a levantar los cadáveres de los guardias. La inspección ocular posterior proporcionaba detalles sobre la magnitud de la batalla. La casa cuartel «es un edificio de firme y planta sobre el mismo, de fachada unos veinte metros, que linda por la derecha entrando con un solar sin edificar de D. Ignacio Dominé, y por la izquierda con terreno sobrante de la vía pública, por la espalda con el terraplén que da al río, siendo el frente la carretera [...] de Sádaba a Ayerbe». En la puerta de entrada a dicho cuartel que da a la carretera «se aprecian numerosos impactos, mejor dicho orificios, indudablemente producidos por arma de fuego; los cristales del montante aparecen rotos, y trozos del mismo se encuentran en el suelo, donde asimismo hay una gran mancha de sangre; en el borde de la hoja izquierda entrando hay un pedazo de madera arrancado donde existe un orificio de unos dos centímetros de diámetro; también en la parte superior del marco de dicha puerta existe otro trozo de madera arrancado; [...] en las piedras de la fachada... existe un desconchado grande y notándose perfectamente la impresión dejada por dos

impactos; en la pared que da frente a la puerta se apreciaba asimismo señales inequívocas de haber penetrado balas en el interior del edificio, habiéndose hecho igual observación en los pabellones que componen el edificio y en las ventanas del mismo; los tubos de bajada de aguas aparecen agujereados a distintas alturas y en distintas direcciones; en la cuneta de la carretera en la parte correspondiente al cuartel se encontraron tacos de cartuchos de escopeta de caza y diferentes trozos de plomo». La inspección también abarcaba los corrales y casas situados frente al cuartel, los de Pantaleón Charles y Francisco Arregui. En el primero, unos montones de leña permitían alcanzar el borde de la tapia, cuyas piedras que lo forman «han sido preparadas en forma de troneras o aspilleras», y en el otro «existen unos esportizos de los de sacar estiércol con unas tablas encima, subidos sobre los cuales se alcanza a unos orificios hechos en la pared quitando piedras de la misma que están unidas sin argamasa [...] los balcones de las casas a que pertenecen dichos corrales tienen impactos indudablemente producidos por los disparos seguramente hechos por los guardias del puesto».²²⁶

El mismo día 5 por la tarde se habían iniciado las actuaciones del proceso sumarísimo, espoleadas por «la necesidad de conseguir la inmediata reconstrucción del orden público y la ejemplar sanción de los culpables», y bajo la instrucción del teniente coronel de Infantería Antonio Civera Aixemus. La primera declaración que se toma en Uncastillo es la del sargento Quiñones, dejando fijada desde entonces su versión de los acontecimientos. Sus hombres le habían despertado a las siete y media de la mañana para decirle que unos vecinos portaban un extraño recado. Pascual Beguería y Máximo Malón²²⁷ venían a decirle que había llegado la revolución, y

²²⁶ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 405.

²²⁷ El nombre del acompañante Malón no surge en la investigación hasta el folio núm. 30 del sumario, ningún guardia lo menciona en sus primeras declaraciones. ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 30.

que la mayor parte del pueblo estaba reunido en la Casa de la Villa. Quiñones quiso conferenciar con el alcalde Plano, quien cuando llegó se reafirmó en la noticia diciendo «que se había declarado la revolución como protesta de haber entrado la CEDA a constituir el gobierno, y que le entregaríamos las armas que tuviéramos». El resto de su relato ya ha sido detallado, desde la conferencia con Plano a la descarga cerrada de los vecinos apostados frente al cuartel. Quiñones fue herido y recogido por su esposa, y al subir al pabellón vio a los guardias Francisco García Prieto y Celestino Morales Marco «que se hallaban en el suelo al parecer cadáveres».²²⁸

Pese a que tan aparatosa escena copa toda la atención, el inicio del relato ha de situarse en la noche anterior, lejos de Uncastillo. Hacia las doce un chofer de Tauste que alquila su Pontiac como taxi, Ángel Guillén, recibe la visita de Rafael Palacios y alguien a quien dice no conocer para un servicio urgente en esa misma noche. Él tenía comprometido un servicio para unos albañiles a la mañana siguiente, así que mostró reticencias, sobre todo si el viaje lo debía de efectuar con un perfecto desconocido. Así que Antonio Tudela, concejal de Tauste, accedió a acompañar a la comitiva hasta Uncastillo. Llegan hacia las dos y media. Nada en la noche hace intuir agitación o preparativos. La calma es total. El juez indicará días más tarde que «nada extraño ni anormal notaron en el pueblo los días antes, ni siquiera la víspera en que los hechos se desarrollaron».²²⁹ A la entrada de la villa, junto a la posada, baja el desconocido. Quiere hablar con el alcalde y pide a Guillén que permanezca allí hasta que vuelva. Eso sucedió tres horas después, a las cinco de la mañana, regresando el forastero con un grupo de vecinos. Parte luego a Luesia con dos de ellos a quienes tampoco conocía, con Manuel Lasilla y Pedro Rived, regresando hacia las ocho de la mañana a Uncastillo, donde un grupo le impidió el paso

²²⁸ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 12-13.

²²⁹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 495v.

«pues se había declarado la revolución en el pueblo, en el que se oían muchos tiros». Dejó el coche y marchó a pie hacia Sádaba con Antonio Tudela, para desde allí hacerse con otro automóvil de alquiler y regresar a Tauste. ¿Qué ocurrió en Uncastillo durante aquellas importantísimas tres horas previas a los tiroteos?²³⁰

Acudimos al testimonio de Plano. Como los de todos los detenidos, su veracidad está socavada por la intensidad del dramático y tenso momento de la detención y el interrogatorio, y la honda y lógica preocupación por las consecuencias penales del asunto. La prestigiosa trayectoria personal y política hacen de contrapeso de veracidad. A las dos y media tocaron a la puerta de su casa, presentándose «un tal Miranda, que reside en Zaragoza cuyo apellido no sabe pero que lo conoce de haberle visto en el centro de la UGT de esta capital», acompañado de otro al que no conocía pero que sabía era de Tauste. Tudela y Miranda le dijeron que buscaban al presidente de la UGT, por lo que Plano les acompañó a la casa de Manuel Lasilla, a la sazón teniente de alcalde de Uncastillo. Reunidos en la entrada del pueblo, donde se encontraba el automóvil de Guillén, los forasteros revelaron que su llegada se debía «a que se había declarado el movimiento revolucionario en toda España y que esperaban que lo secundaran en el pueblo». Comenzaron los forcejeos. Plano y Lasilla planteaban que allí «no tenía objeto el movimiento puesto que si era para hacerse con el poder la UGT, como allí ya estaban en el poder, no había caso». Pero Miranda y Tudela insistían en llevar adelante la revolución, pidiendo que llegaran tres directivos socialistas más para que dieran su opinión. A la reunión acudieron Eugenio Combalía «Cantarero» y Pascual Beguería «Royales». Miranda insistía en hacer la revolución y Plano se oponía, pero esta vez Combalía se puso de parte del primero, y con él muchos otros que habían salido despertados por Miranda cuando al llegar llamó a las puertas

²³⁰ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 86-87.

de las casas en busca del centro obrero. «En vista de que la opinión que sustentaba era contraria al criterio de la mayoría se marchó a su casa». Pero los acontecimientos se iban a precipitar con mayor celeridad de la esperada por el propio alcalde.

A esa hora de la madrugada, sobre las seis, ya el pueblo estaba hirviendo. Vicente Tirapo afirma haber visto a un grupo «de chicos y mujeres en la calle diciendo que había venido la revolución, que no sabe quién era el que capitaneaba a las mujeres y a los chicos, pues hombres no iba ninguno».²³¹ Al modo del viejo motín campesino, también Agustín Beguería afirma que se enteró del movimiento «porque lo decían las mujeres por la calle».²³² Hemos dejado a Plano caminando hacia su casa. Antes de que llegue le sale al encuentro «un grupo de jóvenes pidiéndole municiones». Se sabía que Plano había vendido en su comercio cartuchos para la caza, aunque había dejado de hacerlo tiempo atrás. Según el propio alcalde, el sargento Quiñones sabía que guardaba unos seiscientos cartuchos, cargados unos con perdigón y otros con balín, y bajo coacción entrega al grupo tan sólo los de perdigón para mitigar los daños. Quiere permanecer en su casa, pero alguien le dice que el Ayuntamiento está tomado. Coge su escopeta y allí se dirige, viendo al llegar que la casa consistorial está «invadida» y que «se reparten municiones que había en una mesa», aunque «no [puede] ver quién era porque [hay] mucha aglomeración de gente». Muchos al verle le piden municiones, que no da. Trata de desalojar la alcaldía, pero el forastero Tudela dice que «de allí no se marchaban sin quemar el archivo municipal, como iban a hacer en Tauste». Crece la tensión. Plano lo impide, así como que se desarme a los guardias municipales. Va luego al Casino Independiente para tratar sin éxito de averiguar noticias de radio sobre el seguimiento de la huelga en Madrid, y después, quizás

²³¹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 66v.

²³² ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 71-72.

entre resignado y enojado por el rumbo que habían tomado los acontecimientos, marcha a la casa. En el camino se topa nuevamente con otro grupo de vecinos, entre doscientos y trescientos, con más novedades. Le dicen «que [vienen] del Cuartel de la Guardia Civil de invitar a la fuerza a que se [rinda]», pero que el comandante mantiene firme su adhesión a la República. Eso incluía, claro, acatar las órdenes del alcalde, motivo por el cual el grupo le obliga a ir al cuartel para rendirlo. Y ahora, la entrevista. Desde luego que la versión de Plano se distancia de la del sargento Quiñones. Éste «le [dice] que si a él no le [molestan] que él no se movería del Cuartel y que le agradecería [...] que se llevase a los grupos que se [ven] por las inmediaciones del cuartel, lo que [consigue] llevándoselos a unos doscientos metros [...], tratando nuevamente de convencerles de que no [molesten] a la fuerza pública», pues ésta no se va a rendir. Los del grupo pretenden hacerle volver al cuartel para dar a la Guardia Civil un plazo de diez minutos para su rendición, pero Plano se niega «recibiendo en consecuencia una serie de insultos y amenazas». Él mismo afirma que, «medroso, se metió en su casa por estar cerca de ella de donde no salió hasta cerca de las tres de la tarde».²³³

Manuel Lasilla por su parte declara cómo fue llamado por Antonio Plano y los dos forasteros hacia las cuatro de la mañana, y conminado a reunir a la directiva de la UGT «pues había estallado la revolución». Llamó a Antonio Pérez, que también era concejal socialista, y a Demetrio Agón, acudiendo todos al puente de Santa María. Ya había un grupo de unos sesenta, «que no iban armados» dijo en su primera declaración, aunque apuntó en la segunda que

²³³ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 114-115. Los testimonios de Juan Pablo Casale Suñén y Tomás Tris Tosaus corroboran la secuencia, la salida de Plano del cuartel, cómo le rodean los del grupo, cómo se los lleva a un lugar fuera de las líneas de fuego, y cómo el «forastero» fue quien dijo que había que ir a por las armas «por las buenas o las malas». ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 45 y 46.

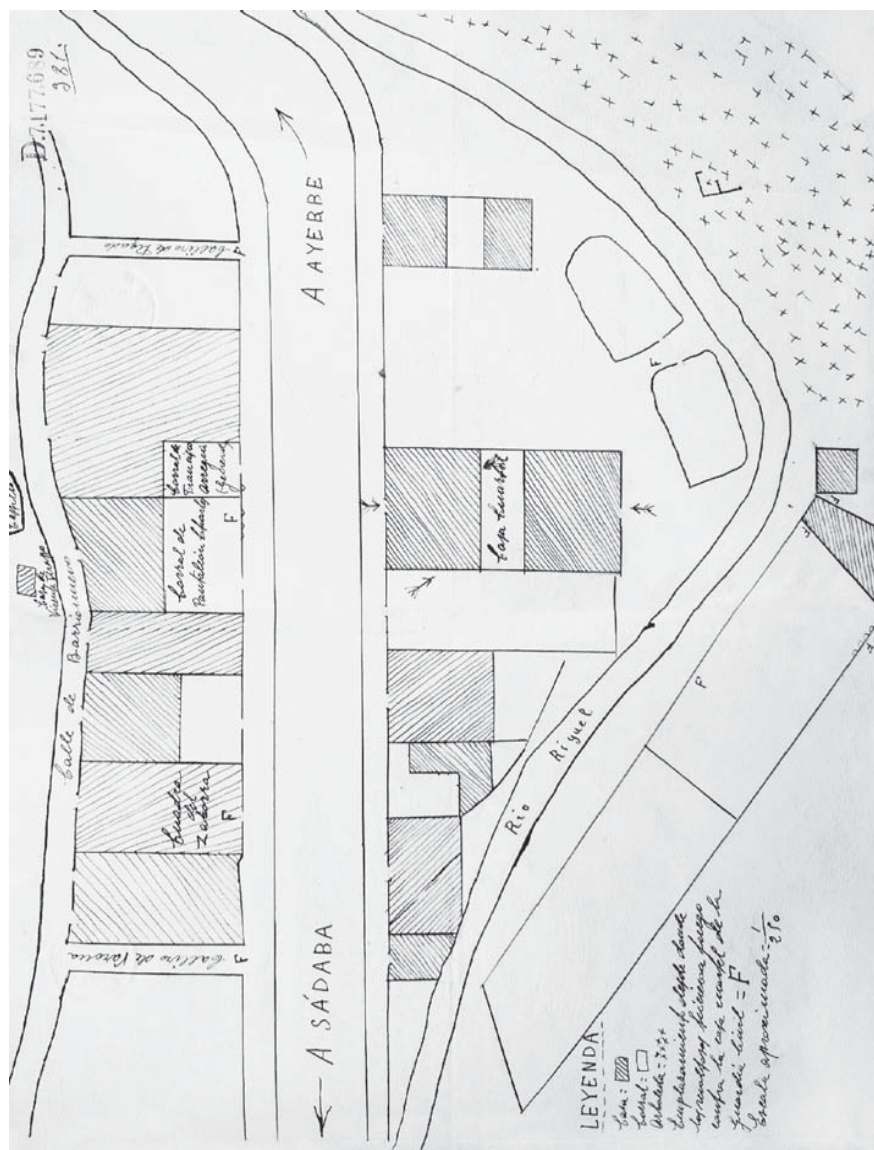
algunos iban con escopetas. Insiste en que «aconsejó a los grupos que no hiciesen nada», y de allí se dirigieron a la Casa de la Villa, «en donde el Alcalde y los forasteros dijeron que peligraba la República», conminando a los empleados municipales a defenderla.²³⁴ Durante ese tiempo de reunión multitudinaria en el Ayuntamiento, de confusión y acalorado debate, diversos grupos de «revoltosos» trataban de reunir armas coaccionando a los vecinos que se sabía que tenían. El sumario recoge diversas visitas a casas de propietarios, derechistas y viejos somatenistas para conseguir, mediando las amenazas necesarias, pistolas, escopetas y municiones.²³⁵ Los grupos se envalentonan y tras hacer acopio de pistolas y armas largas, se dirigen al cuartel, donde tiene lugar el forcejeo, la toma de posiciones y la descarga fatal.

Juliana Romero, esposa del guardia civil Celestino Morales, intuía que algo no iba bien por afuera. Quizás víctima de un mal presagio, se asoma de madrugada a una ventana del cuartel, viendo «a los hermanos (Convalía) que se les conoce por los Tejeros en la parte del río, cada uno con un arma [...] que debían ser trabucos o tercerolas». Despierta a su marido, «levántate que no sé lo que pasa», asomándose al tiempo a otra ventana que da al corral de Figado, donde puede ver «a un grupo de doce a catorce con armas, que se asomaban y volvían a ocultarse detrás de la esquina», así que alarmada llama a los guardias que todavía están acostados.

²³⁴ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 169, la segunda declaración en folio 587.

²³⁵ Presentaron declaración diciendo que los grupos habían visitado sus casas pidiéndoles las armas Manuel Cortés, José Caudevilla, Calixto Romeo, Genaro y Mariano Zárate, José María Arnau, el juez Ramón Gay, Damián Begué, Martín Frago, Marcos Sanso Arrese, Sabas Torrero Pueyo, Tomás Aznárez Giménez, Angel Pérez Frej, Miguel Aybar Monguilán, Luis Ugedo Samper, Venancio Lapieza Laplaza, Antonio Caudevilla, (ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 466 al 479), Francisco Fanlo Fuertes, Lorenzo Giménez Aznárez, Baldomero Pueyo Goyena, Luis Larcuén, Florencio Pérez, Francisco Labat Abadía, Francisco Buey Begué, (ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 515 al 522), Jesús Guinda Samper, Teodoro Cavaren Fuertes, Mariano Acín, (ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 531 al 533).

**CROQUIS REALIZADO POR LA GUARDIA CIVIL
DEL ASALTO AL CUARTEL DE UNCASTILLO. 1934.**



En el cuarto de Concha Salve y el guardia García Prieto, un guardia entra azorado y avisa a Francisco. Cuando sale del cuarto avisa a su mujer para que no se mueva de allí. El sargento comienza a dar órdenes disponiendo a los hombres en el piso superior para no perder ventaja de tiro. En ese momento llaman a la puerta y el guardia Vicente Adell ordena bajar a Celestino. Juliana «viendo el peligro le dijo que no bajara», pero cumple la orden. Era el alcalde. Las voces que escucha son en tono bajo, dialogante, corresponden a la conferencia entre Plano y el sargento. Al poco Adell, apostado en una de las ventanas del piso superior, dice «que había oído un tiro por arriba hacia la carretera». Juliana baja atropellada a avisar «a los compañeros, y a la última escalera oyó la descarga y vio caer muerto primero al otro guardia, e inmediatamente a su esposo». Concha siente la descarga desde otro pabellón del cuartel, y al poco los gritos en el pasillo. «Salió a ver qué había sucedido, y se encontró con que en la puerta estaban atravesados los cuerpos de dos guardias, y la mujer de Celestino Morales llorando, y que el guardia Corchete hacía fuego por entre la puerta». Dice Concha que, al ver que no se podían retirar los cadáveres, «se decidió a hacerlo ella, y agarrándolo de las piernas tiró y consiguió meterlos, reconociendo entonces en uno de ellos a su marido Francisco García Prieto, al cual trasladó al pabellón de la dicente sin darse ya cuenta de lo que pudiese suceder».²³⁶ La sangre de los caídos, que mana en abundancia, tiñe ya toda la escena. Los guardias que pueden hacerlo se defienden disparando hacia corrales y casas cercanas, jurando venganza ante los compañeros muertos. Justo enfrente, en casa «General», Francisco Arregui coloca colchones en los balcones cuando comienzan a entrar proyectiles en las habitaciones.²³⁷ La mañana se hace larga, parapetados los asaltantes y desesperados los guar-

²³⁶ El testimonio de Concha en ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 431. El de Julia, vertido desde Milmarcos donde se hallaba enferma, en ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 854-855.

²³⁷ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 724.

días, manteniendo tiroteos con cambiante intensidad hasta la llegada de fuerzas de Sádaba, al mediodía del día seis.

Casi al tiempo que ocurría el tiroteo en torno del cuartel otros disparos se escucharon en los primeros números de Roncesvalles, en una zona no muy lejana del punto caliente del cuartel. El juez de Sos se encontraba al día siguiente con los rescoldos de la batalla en las inmediaciones de la casa de Antonio Mola. Levantó el cadáver del joven Alejandro Asín Morlana, «Palomina». Yacía en el corral de un vecino que lo había recogido cuando cayó muerto durante la refriega del día anterior, tenía «unos dieciocho años» y su camisa aparecía «manchada de sangre en la parte central y con orificios». Avanza en la inspección ocular, y al llegar a la casa de Mola «se observa que la puerta principal de la misma, que es de amplias dimensiones y de dos hojas, aparece la madera de la misma casi completamente carbonizada, quedando en absoluto inservible». En el suelo «se notan cenizas y resto de ramaje indudablemente empleado por los revoltosos como combustible para quemar la puerta, apreciándose en la fachada impactos de disparo, tanto en la pared como en la madera de los balcones, los cuales presentan los cristales rotos». Se indica también que en el garaje que tiene Mola en la carretera «las puertas aparecen abiertas y los paneles de las mismas rotos, seguramente con barras de hierro o hachas». Frente al garaje, «un automóvil casi completamente destruido por el fuego, que pertenece [...] a Antonio Mola, y que asimismo fue incendiado por los revoltosos», un Gran Piagget matrícula de Zaragoza. «Parece ser que el incendio del mismo fue provocado por la gasolina que contenía el depósito, y que fue vaciado».

Mola revela el negativo de la secuencia. Cuenta en su declaración cómo a las seis de la mañana Saturnino Agón e Isidro Frago se presentaron en su casa para pedirle las armas, «a lo que contestó el declarante cerrando la puerta». Al poco llegó un grupo numeroso «y en actitud amenazadora [...] dijeron que querían se les entregaran las armas». Mientras

las mujeres de la casa, su mujer Juana Salvo y su sobrina Isabelita Sierra, subían a una de las ventanas de la falsa del segundo piso, Mola afirma haberse mantenido firme. «Inmediatamente disparó Eugenio Convalía Marco con una pistola», hiriendo a su sobrina. Juana Salvo gritaba «muerta», «muerta». Mola cogió su pistola Star y disparó «para amedrentar al grupo», que salió corriendo, y siguió haciendo fuego desde otra ventana. Luego vino cierta tranquilidad ya que los del grupo «se habían dirigido al garaje situado en la carretera para incendiarlo», y que «según noticias que ha adquirido después los dirigentes de la quema fueron Gregorio Larcuén, Mariano Alcubierre, Eugenio Convalía y Valeriano Urdain; y que estos fueron los que obligaron al choffer de Florencio Pérez llamado Mariano Acín a que les entregase la gasolina de la camioneta para incendiar el auto [...] y vio desde su casa que había otro incendio, averiguando después que se trataba de la casa de la huerta de su propiedad». Después afirma que volvió un grupo numeroso a la casa de Mola capitaneado por Eugenio Convalía, que gritaba «a apoderarnos de él», que oyó «el ruido del incendio de fajos de leña acumulados en la puerta, y al ver esto disparó repetidas veces la pistola, que oía también a otro de los jefes del grupo llamado Manuel Casalé Suñén, «que propuso a los demás el asalto a la casa con escalera», que a cada disparo que hacía Mola decían «tira cabrón que mañana no lo contarás», que desde un edificio cercano, habitado por varios inquilinos, «hicieron muchos disparos cuyas huellas en la fachada y los balcones así lo demuestran, que le hicieron al declarante más de seiscientos disparos», identificando además de los citados a Saturnino Sánchez Suñén. Luego llegó la Guardia Civil de Sádaba, los grupos marcharon y pudieron apagar el incendio de la puerta. En su declaración Antonio Mola indicaba que «desde esta casa no se hicieron más disparos que los hechos por el declarante sin poder precisar la puntería». La autopsia de «Palomina» determinaba que todas sus heridas «tenían marcada dirección de arriba hacia abajo», que se encontraron postas de perdigón grueso, que la muerte «debió

de ser instantánea» y que fue disparado a una distancia de diez o doce metros.²³⁸ El fiscal dijo que a Mola no le quedó más remedio que matar de un disparo a Palomina, y que «no cejó en su valerosa y noble actitud hasta la llegada de la Benemérita».²³⁹

Mientras esto ocurría, en el Gobierno Civil de Zaragoza se recibía desde las diez de la mañana una preocupante secuencia telegráfica procedente del puesto de Sádaba:

Sádaba a Zaragoza, 5 de octubre, 10:00h: «Recibo noticias nos hallamos incomunicados telégrafo y teléfono con Uncastillo hallarse huelga aquel pueblo. Hay trozos de árboles cruzados en carretera y ha habido disparos. Me dirijo con fuerza puesto dicho pueblo, hasta recibir otras órdenes superiores continuaré comunicando novedades que ocurran y concretar información».

Sádaba a Zaragoza, 5 de octubre, 10:15h: «Recibo informes haber sido agredida gravemente fuerza puesto Uncastillo».

Sos a Zaragoza, 5 de octubre, 11:40h: «Recibo noticias comandante puesto Sádaba que se hallan incomunicados por telégrafos y teléfono con Uncastillo hallándose éste último en huelga, hay trozos de árboles cruzados carretera y ha habido disparos habiendo sido agredida gravemente fuerza, habiendo salido fuerza puesto Sádaba, salgo para Uncastillo con una pareja puesto esta cabecera».

Sádaba a Zaragoza, 5 de octubre, 15:00h: Del juez de instrucción de Sos. Llegado Sádaba pueblo próximo a Uncastillo. Se ignora situación dicho pueblo, se sabe ha habido muertos fuerza y paisanos. Imposible entrar pueblo.²⁴⁰

²³⁸ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 438 (autopsia) y 456 (declaración de Mola). Antonio Mola contaba con licencia de armas expedida por el gobernador civil desde 1922 y guía de matrícula para su Star, modelo famoso conocido como «del sindicalista» y utilizado desde los primeros años veinte tanto por pistoleros sindicalistas como patronales. Pero además guardaba en su casa una carabina «mauser», «al parecer sin señales de haber sido usado», otra carabina de seis milímetros «inservible», y «una espada muy antigua oxidada sin punta ni corte», ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 488.

²³⁹ HA, 27-3-1935. Mola se esforzó después por limpiar su nombre y negar la autoría de la muerte de Palomina, alegando las pruebas balísticas de la autopsia como prueba principal (HA, 28-3-1935).

²⁴⁰ AGCZ, Leg. 1, exp. 7.

Cuando llegaron a Uncastillo los guardias de Sos eran las doce de la mañana del día seis. Se detuvieron en las afueras. «Subieron un poco por este lado a ver lo que se veía no viendo nada pero sí oyendo muchos disparos», y fueron por el monte buscando el barranco que va perpendicular al río Riguel. En cuanto estuvieron casi frente al cuartel «empezaron a ser hostilizados con un nutrido fuego» de postas. Observaron «que las fuerzas que habían llegado de Sádaba estaban apostados por la Tejería de Combalía». Éstos estaban siendo objeto de fuego intenso, dos de ellos habían sido heridos y se refugiaban en el pequeño desnivel de una alcantarilla. Los hombres de Sos avanzaban «resguardándose de los accidentes del terreno y haciendo fuego», hasta que «consiguieron reunirse con dicha fuerza de Sádaba sin dejar de ser hostilizados y respondiendo la fuerza con descargas, pero haciendo los disparos sin poder apuntar pues a nadie se veía, y solamente se notaban los disparos, que indudablemente eran hechos por gente apostada en casas o tapias». No se veía «en absoluto a nadie», una ausencia que incrementaba la amenaza. «Estando en esta situación vieron que por la carretera llegaban varios coches con más fuerza», dirigiéndose varios hombres por el río Riguel al lugar donde se encontraban los de Sos, y siguiendo el resto carretera adelante en dirección al cuartel, «arreciando entonces las descargas». Aprovecharon el momento en que a los revoltosos se les ofrecían dos blancos para acercarse al cuartel sin dejar de disparar, logrando entrar por la puerta trasera mientras por la principal lo hacía el capitán García Lasierra. Eran las cinco de la tarde. «Al poco rato, -hacia las siete- cesaron los disparos y quedó todo en silencio, ordenándose por el capitán que saliesen unos cuantos a por médico y medicamentos para curar a los heridos».²⁴¹

Los últimos en abandonar sus posiciones fueron los que habían subido al castillo. Cuando Ricardo Lanza vio llegar

²⁴¹ Testimonios de los guardias Ángel Villalón, Juan Giner y Emiliano Medina, ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 565 al 567.

a los guardias se arrojó desde la altura y se rompió las dos muñecas. Fue de los últimos heridos en la refriega. Al poco llegó el médico al cuartel para proceder a realizar los diagnósticos y curas de los siete guardias lastimados de diversa consideración, ordenándose luego el traslado de los más graves a Zaragoza.²⁴² Muchos, por miedo, callarán sus heridas esperando poder sanar sin acudir al médico. La última víctima mortal de la colisión, sobre quien la crónica y también la memoria relegaron al olvido, fue Julián Aznárez, gravemente herido y fallecido en Zaragoza. Un disparo de máuser le fracturó el fémur, el día 6 ingresaba en el Hospital de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza, con pronóstico muy grave por la «gangrena gaseosa» de la herida. El día 8 a la mañana se certificaba su muerte. En la posterior pesquisa acerca de los detalles de «cómo y por quién le fueron producidas las heridas», el comandante del puesto, instado por el juez del partido, tan sólo aportaba un vago e impreciso informe: «este puesto no puede precisarlo, pues el expresado día [...] partían disparos con insistencia, que la fuerza se vio precisada a repeler la agresión hasta conseguir la reducción de los revoltosos, no pudiendo por lo puesto precisar cómo y por quién fue herido el Julián Aznárez». Veinte días antes el herido se estaba debatiendo en el lecho de su casa, pero pudo declarar que al subir a una falsa que tenía en la casa «la Guardia Civil le hizo un disparo causándole las lesiones que sufre», aunque «no sabe qué guardia fue el que le disparó».²⁴³

La cárcel

Relegado a un forzado silencio en su casa mientras ocurría el tiroteo, Antonio Plano tan sólo podía percibir, desolado, los ecos de la tragedia. En su declaración apuntó que sobre las tres de la tarde pensó en hablar con la fuerza de

²⁴² ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 57

²⁴³ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1144, informe de autopsia.

la Guardia Civil que había visto llegar. Hizo señas y sacó un pañuelo, pero recibió una descarga, «de la que resultó ileso y herido un cuñado suyo –Francisco Cortés– que estaba en su casa». Las órdenes que tenían los guardias y su deseo de venganza no dejaban opción nada más que a la huida. Llevaron a su cuñado a su casa, «cerrando la puerta y no volviendo, quedándose en casa de una vecina, donde permaneció toda la noche y el día siguiente hasta las ocho de la tarde, en que salió a las afueras del pueblo no atreviéndose a entrar por miedo a los revoltosos o a la fuerza pública». Después, «vagando, se marchó a Lobera de Onsella, donde tiene familia», en marcha difícil y tensa por el monte, evitando los caminos principales. Llegó a Lobera el día 7 al mediodía, «marchando a comer con la familia y después a pasear por el campo, quedándose a dormir en un corral de las afueras del pueblo acompañado de su primo Serafín Plano». En la propia versión de Serafín hablaron sobre lo sucedido, «le dijo que se había marchado de Uncastillo porque había ocurrido una catástrofe, que había tres cadáveres, y al responderle que cómo siendo alcalde se había movido del pueblo, le contestó que tenía miedo y que por eso se había marchado». Serafín preguntó «qué iba a hacer, que debía presentarse a la Guardia Civil», contestándole Plano «que había pensado quedarse allí cuatro o seis días hasta que las cosas estuvieran tranquilas, y después presentarse en Madrid o Barcelona». Después marcharon los dos a Pintano, donde alrededor de las doce fueron detenidos por unos carabineros que les condujeron a Sos.²⁴⁴

²⁴⁴ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 114-115. Según la declaración de Serafín, la marcha a Pintano se debía al compromiso adquirido con un primo suyo para ayudarle en los trabajos de la viña. Según la declaración de ese familiar, cuando llegaron, Serafín le propuso «si quería acompañar a Francia a un primo suyo de Uncastillo», negándose el otro. Tras presentarle a Antonio Plano, y mientras éste dormía, volvió a proponerle la travesía diciéndole «que se lo pagaría bien», volviendo a rehusar efectuar la huida. Cuando volvieron a comer al pueblo, fueron detenidos. ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 1288-1292.

Los guardias pertenecían al puesto cercano de Ayerbe, alertado por la comandancia de Huesca para que se procediera «a la busca y captura de los cabecillas dirigentes del movimiento revolucionario [...] de Uncastillo». Por la tarde del día 6 el sargento Gallego y siete números requisaron un automóvil y se dirigieron a Biel, «estableciendo sobre la marcha una constante vigilancia para no ser sorprendidos». No obstante la noche y el mal estado de los caminos, continuaron avanzando hasta llegar a Longás a la mañana del día 7. Descansaron. Al poco supieron de la ubicación de Plano en Lobera. Tomaron las salidas y averiguaron que había salido hacia Pintano. Allí se presentaron al día siguiente. Varias mujeres le indicaron que habían visto a dos sujetos andar por las afueras, cuando pasaron por una de las calles ambos Plano y su primo Serafín, siendo detenidos, cacheados y conducidos al Ayuntamiento. El sargento sostiene que Plano ocultaba su identidad con el nombre de Julián López, pero que tras el interrogatorio, confesó «que se llamaba Antonio Plano, alcalde del tan repetido pueblo de Uncastillo», y que se encontraba en Pintano para dejar pasar unos días hasta ver calmados los sucesos ocurridos en su pueblo. Se da cuenta de habersele ocupado una pistola Astra y dos cargadores y 700 pesetas, y del traslado de Plano hasta la comandancia de Sos. Ufano, el teniente coronel de la comandancia de Huesca se enorgullece ante el juez militar Civera:

«Cumple a mi deber hacer presente a V.E. el excelente espíritu, sagacidad y celo puesto a contribución por el personal anteriormente aludido en la prestación del servicio que nos ocupa, que, además de esforzadas marchas por terrenos abruptos y desconocidos, a fin de esquivar su presencia por caseríos y poblados que pudieran sus habitantes delatarles a los perseguidos facilitándoles con ello la huida por otros puntos, llegaron exhaustos a las 7 horas de la mañana del día 7 al pueblo de Longás, donde sin descanso se dedicaron a adquirir referencias de los fugitivos, obteniendo detalles tan precisos con los que, a las 13 horas del día 8, fueron detenidos en el pueblo de Pintano el ex alcalde

de Uncastillo y su acompañante. Tan importante servicio ha dado lugar a que la fuerza, a su paso por los pueblos que tuvieron que atravesar durante la conducción de los dos sujetos, considerado el Antonio Plano como peligrosísimo en toda la comarca de Cinco Villas y suponérsele fue él quien repartió las armas a los revoltosos en la Casa Ayuntamiento de Uncastillo, fuera ovacionada entusiastamente por el vecindario y felicidadísima por las primeras autoridades locales, al ver en ellos representadas la entereza y lealtad de las fuerzas de orden con que cuenta la República, para reprimir y poner bajo la acción de la justicia a los que traidoramente y por procedimientos ilegales quieren avasallarla».²⁴⁵

El reputado socialista Plano, alcalde y diputado provincial, había pasado a ser un «peligrosísimo» traidor de la República. Quizás por eso no importaba usar métodos expeditivos para sonsacar una verdad que sabía de antemano. Plano hace constar en su declaración tomada en Zaragoza que «conducido a la cárcel de Sos le maltrató la Guardia Civil». Pero no fue el suyo el único testimonio que permite dudar de las declaraciones tomadas en los primeros interrogatorios. Mientras Plano se apartaba del fuego revolucionario, y cuando todavía no se habían enterrado los cuerpos de los caídos, comenzaron las detenciones y registros en las casas de Uncastillo. En el día 6 fueron detenidos 23 vecinos, pero sólo serían los primeros hasta los 110 que ingresaron finalmente en la cárcel de Predicadores de Zaragoza. Quizás no sea aventurado afirmar que muchos de ellos miraron aquellas celdas con cierto alivio tras los interrogatorios en el cuartel. Una experiencia que venía precedida por el miedo a los golpes y las torturas, algo sobre lo que no dejaba de haber rumores y comentarios alimentados por la prensa socialista. El número del periódico madrileño *Renovación* ocupado por los guardias a Antonio Zárate y que también forma parte del sumario, dedicaba entera su segunda página a un reportaje titulado «Los tormentos con que la fuerza pública

²⁴⁵ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 912 y 913.

ESTADO DE LAS DETENCIONES EFECTUADAS
POR LA GUARDIA CIVIL EN UNCASTILLO, Y DE PERSONAS PENDIENTES
DE DETENER EL 8 DE OCTUBRE DE 1934.

Detenidos

Ignacio Maisterra Pueyo
Carlos Casaus
Pascual Barona
Pascual Begueria Arilla
Juan Pablo Casali
Eusebio Eris
Mamuel Casali Lurien
~~Saturmino Sanchez Lissia~~
Francisco Aleuherre Ramon
Ricardo Balanca Ruiz (Hospital)
Eugenio Arago Begueria
Maksimino Sanchez Roca
Pantaleon Charles
Jon' Olano Victoriano
Serafin Ananias
Ricardo Eris
~~Eusebio Eris~~
Agustín Begueria Arilla.

Salen por detener

Agustín Begueria Arilla
Eugenio Colvalia Marcos
Constante Convalia Marcos
Luis Acenar, Ribalda
Saturmino Agon
Indro Arago
Gregorio Larcuen
Mariano Aleuherre, el hijo
El hijo mayor de Pedro Arda
Antonio River Samatin
Antonio Olano Acenar
Mamuel Lavilla Pueyo
El hijo del guapo el parado
sado con la hija del moreno
Un tal Arar de Petilla de
Navarra
Lorenzo Estaban y su hermano
le sigue en edad
Saturmino Agon
Mariano Canales Eris
Florencio Claveras
Un hijo del Tello
Jenico Marcos Pueyo
Vicente Perez Quintan
~~Ricardo Ramon~~
Antonio el del Serro
Antonio Sabro
Carmelo Casali
Rufino Claveras
Antonio Casaus Casanova
Francisco Perez Arilla
Marcos Arrequi
Felix Pueyo Ramos
Angel Morfana
Saturmino River
Mamuel River
Martin Cortes Lavilla
Jon' Estaban
Jon' Ricardo Cortes
Valentín Acen

somete a los campesinos rebasan las peores épocas inquisitoriales». Explicaba con detenimiento e ilustraciones procedimientos de tortura conocidos como «los palillos» o «el colgajo», recordaba las «conducciones eternas por la carretera», que «las culatas de los máuseres logran concretas declaraciones», y que «en los pueblos de España no hay más ley, ni más fuero, ni más jueces, ni más Tribunales de justicia que la Guardia Civil». El imaginario campesino se veía en esta hora amarga, enfrentado a sus peores temores, los que nacían tras las cuatro paredes del cuartel, esas que nadie quería ver por dentro.²⁴⁶

Uno de los veintitrés vecinos detenidos, Antonio Salvo Samatán, «El Soldao», fue largamente interrogado, ofreciendo abundantes detalles en su primera declaración. En ella el propio Plano le había dado una escopeta y unos cartuchos y le había dicho que lo acompañara al cuartel. Dijo además que Eugenio Combalía planteó «primero apoderarse de las armas» de los guardias y después, «si no se entregaban matarlos y una vez muertos, cohabitar con las mujeres». También, que fue Plano quien ordenó a un grupo apostarse frente al cuartel, en el corral de «Zaborra», y que vio a un grupo en el que iban Mariano Alcubierre («Polica»), Larcuén, Agustín Alcubierre Viamonte («Plano»), y «uno que es zurdo hijo del enterrador que había antes», («El Gato»), subiendo por la carretera e internándose por un callejón que da justo frente al cuartel. Y que entonces sonó la fatal descarga.²⁴⁷

Pero tan sólo tres días después «El Soldao», ya en Zaragoza, declaraba que «algunas de las cosas que constan en su declaración se las hicieron declarar a la fuerza con los malos tratos y culatazos que le dieron». Y añade además

²⁴⁶ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 68v. Hay que hacer notar que el reportaje narraba una experiencia particular de un sindicalista detenido y torturado en Castro del Río. Se ofrecían fotografías demostrativas de las torturas para aumentar la veracidad del reportaje. La documentación carcelaria de Antonio Plano en AHPZ, Prisión provincial, leg. 5938.

²⁴⁷ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 69-70.

«que desde la cuadra del «Zaborra» donde él estaba no se tiró un tiro pues el alcalde que dirigía el movimiento *tenía previsto que no se tirara al cuartel*» (cursiva mía). Más claro aún, confiesa «que esos que dice en su declaración que fueron los que mataron a la Guardia Civil se lo hicieron decir a la fuerza a culatazos pero que el declarante no vio que fueran ellos los que los mataran, y que la afirmación que hace de que Eugenio Combalía dijo que había que matar a los guardias y cohabitar con las mujeres tampoco es cierto, pues también se lo hicieron decir a la fuerza».²⁴⁸ Presa del miedo y la angustia, José Olano, acusado de haber repartido munición en el casino, corrigió su primera declaración con razones que «si no expuso ante la Guardia Civil fue porque como estaba tan sobresaltado al verse esposado y detenido, no acertaba con claridad a exponer los hechos».²⁴⁹ Sobre la arbitrariedad: Juan Pablo Casalé Suñén, vigilante, fue a ponerse a disposición del juez por orden del alcalde provisional, cuando en el cuartel un capitán, dirigiéndose a él y a Tomás Tris les dijo «que como alguaciles del alcalde también debían de estar tirando tiros con él, y que aunque ellos protestaron diciéndole puede usted mirar las pistolas que ni siquiera se han disparado, el capitán ordenó que quedasen detenidos».²⁵⁰ Francisco Alcubierre aclaró que «dijo que tenía intención de hacer fuego contra la Guardia Civil porque le obligaron a declararlo así los mismos guardias cuando lo detuvieron».²⁵¹ Jesús Marco Pueyo desmintió

²⁴⁸ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 79.

²⁴⁹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 89v.

²⁵⁰ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 119.

²⁵¹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 123v. Otro caso fue el de Ángel Guillén, quien desde la celda 24 de la cárcel escribía una larga carta al juez. Se trataba de una nueva declaración, pero comenzaba confesando lo viciado de las anteriores: «Habiendo comparecido ante V.S. en diferentes ocasiones, en virtud de serme practicadas determinadas diligencias y de prestar declaración, y habiéndola prestado ésta en algunos aspectos de la misma falseada por temor a represalias por parte de los supuestos interventores directos en dichos sucesos, ruego a V.S. admita como espontánea, aunque algo tardía, y como única y verdadera la declaración que a continuación expongo, para que si tiene a bien, la una al Sumario...», ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 1354 al 1359.

en Zaragoza su primera declaración, que firmó «sin darse cuenta, pues acababan de darle trompazos la Guardia Civil cuando bajaba por la escalera a declarar», y que fue inmediatamente antes de prestar declaración, cosa que no dijo ante el juez.²⁵² Es obvio que el juez podía apercebirse por sí mismo de los golpes, y que si no lo hizo fue o bien porque no existieron, o bien porque lo consideraba parte habitual del interrogatorio. Obviamente que son demasiados los indicios que apuntan en este último sentido como para pensar en algún tipo de invención colectiva con ánimo exculpatorio.

Muchas de estas denuncias salieron a la luz poco antes del juicio sumarísimo, en febrero de 1935, cuando se les instaba a rectificar o aclarar su declaración ante el abogado defensor. Gregorio Buey dijo que «no es cierto declarara nada de lo que consta en sus declaraciones del sumario, que cuando declaró [la Guardia Civil] le pegaron muchos palos»²⁵³. Luis Ruiz aclara que lo que dijo en su declaración «lo hizo obligado por los malos tratos que [la Guardia Civil] le dio».²⁵⁴ Más casos. Mariano Ezquerro también quiso enmendar sus declaraciones para corregir lo que dijo «por temor a la Guardia Civil».²⁵⁵ Lorenzo Caudevilla quiso retractarse alegando «miedo a la Guardia Civil».²⁵⁶ José Pueyo también habla de «la presión de los malos tratos que había recibido de la Guardia Civil cuando bajaban por la escalera a declarar».²⁵⁷ Unos y otros argumentan las mismas palizas, el mismo miedo, para desmentirse de cuando dijeron haber visto a éste o aquél en algún momento y lugar comprometido.

²⁵² ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1721. Declaró no sólo que fue maltratado cuando iba a ser interrogado por el juez de instrucción de Sos, durante los primeros días de actuaciones judiciales, sino también cuando lo iba a hacer ante el juez militar.

²⁵³ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1686.

²⁵⁴ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1702.

²⁵⁵ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1718.

²⁵⁶ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1725.

²⁵⁷ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1726.

Lorenzo Lacosta también afirma no ser cierto nada de lo que consta en su declaración, no ya por la Guardia Civil, sino «porque el Sr. Juez de instrucción de Sos le decía que lo dijera».²⁵⁸

Quizás el caso más claro de hasta qué punto podía llegar la desesperación ante el dolor anunciado fue el de Saturnino Agón. El día 12 de octubre fue detenido en Uncastillo por cuatro guardias, «siendo conducido al cuartel para ser interrogado y quedado en un cuarto interior al de guardia de puertas en la planta baja». Aprovechando un momento en que «fue soltado de las manos y sujetado por los pies con la cadena de seguridad al objeto de que pudiera comer por haberle traído viandas sus familiares», y en un instante en que no le vigilaba el guardia, «se dio varios cortes con una navaja hiriéndose en el cuello». Fue atendido rápidamente por el médico del pueblo, y más tarde declaró que se había hecho aquellos cortes «con ánimo de suicidarse». En el reconocimiento médico, además de la descripción de los cortes y del pronóstico reservado, se añade que presenta «en la región frontal izquierda ligera contusión ocasionada por golpe lo mismo que una pequeña contusión en la región de la unión de los parietales con el occipital», algo que no parece que formara parte del intento suicida del detenido.²⁵⁹

Sobre la experiencia de la cárcel no hay apenas referencias. Traspasados los umbrales de la prisión las vidas de todos estos hombres quedan ocultas para asomar tan sólo en nuevas declaraciones o careos. Plano ya había pasado por eso cuando lo del 30, lo cual no garantizaba una estancia más llevadera. Como se puede imaginar, la verdad sobre los acontecimientos se constituyó en referencia para saber de quién podía uno fiarse y de quién sospechar que había declarado en contra. Pero esa verdad, que formaba una tupida red de adhesiones y decepciones, nos está hoy

²⁵⁸ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1728.

²⁵⁹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 145.

vedada. Sí que hay algún rastro que permite intuir la desazón de las familias de los apresados y la sensación de indefensión e injusticia que muchos hubieron de sentir, tratando en algunos casos incluso de mediar ante la autoridad, en otros de interceder desde fuera. El padre de Serafín Plano y tío de Antonio Plano firmaba una carta que probablemente redactó un abogado, haciendo ver al juez que su hijo «no tomó parte directa ni indirecta en tan abominables sucesos, puesto que no se separó ni un momento del pueblo [de Lobera]» debido a que se encontraba convaleciente, y por haber ayudado a Antonio Plano a ir a Pintano estando «ajeno y desconocedor de lo que se tramaba». Por si no fuera suficiente, en la carta se aclaraba que Serafín era considerado en Lobera «persona de inmejorables antecedentes, estimado de todos y alejado de toda política», y que «ni el procesado ni los firmantes se solidarizan en modo alguno con el movimiento revolucionario sino todo al contrario, protestan y abominan enérgicamente los hechos tan vandálicos y terroristas». La carta la firmaban 141 vecinos de Lobera.²⁶⁰

María Jesús Serrano, la mujer de Pantaleón Charles, se presentó ante el juez instructor en Uncastillo diciendo que «como ha recibido una carta de su esposo [...] en la que le dice que él está preso así como su hijo porque nadie dice la verdad de lo ocurrido», contando a continuación su versión

²⁶⁰ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 1377-1380. No serían estos los únicos que dejarían constancia escrita de la defensa de su inocencia. Joaquín Martín («Tajadilla») también lo hizo, justificando la petición «para poder sobrellevar y sostener a mis hijos», denegándose la petición por parte del juez. ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1443. En otros casos las cartas de descargo podían dejar entrever el intento de salvar una amistad rota por delaciones y malentendidos. Longinos Arilla escribía una carta a Vicente Casaus (respeto ortografía original): «Amigo Vicente, por algún rumor me enterado en esta de que yo te abia acusado de que te abia visto el día de los sucesos. No lo puede decir nadie de que yo aya dicho nada de ti, ahora bien Vicente si te ubiera acusado te lo diria lo mismo pues son cosas que se abian de saber, así que te digo no tienes que tener duda referente a mi. Able con el Pabano aber si te abia acusado y dijo que sí, que habia dicho que te vio pero nada mas. Cuidate, alegrandome verte pronto este que te aprecia, Longinos», ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1940.

sobre uno de los hechos más controvertidos del caso, lo que concernía a quién y desde dónde se realizaron los disparos que acabaron con los dos guardias civiles.²⁶¹ En sus declaraciones, ambos dueños de las casas que quedaban frente al cuartel, la casa de Charles y la de Arregui o casa «General», alegaban haberse visto sorprendidos al observar un boquete en el muro medianil que separaba los dos corrales, «un boquete por el que podía pasar un hombre». Ambos se habían mostrado alarmados por la presencia de los grupos en la calle, y ambos previnieron a sus familias de que se estuvieran en la casa. Y ambos sintieron hacia las siete los disparos muy cercanos. Charles afirma que pudo ver un grupo apostado sobre una pila de leña en su corral, entre los que estaban los hermanos Agón, quienes según él habían entrado desde el corral del «General». Esa misma escena es la que narran su mujer y su hijo ante el juez, afirmando que los hombres que allí estaban (los Agón y el «Canillero») habían pasado saltando la ramera que separa su corral de la finca del «General». Éste, por su parte, declaró algo muy similar, no haber visto nada, ni mucho menos haber consentido entrar a la gente armada a su casa, sin saber si la descarga se había efectuado desde su casa o desde la de Charles. Alegó además haberse sentido intimidado cuando más tarde pasó Saturnino Agón y, «en actitud poco pacífica», le pidió un vaso de vino mientras se jactaba de que «ya los hemos tumbado». Pero su declaración no le eximió de la cárcel. Su hija, en una conmovedora carta, trataba de aclarar la inocencia de su padre y, sobre todo, de orientar su declaración exculpatoria:

Uncastillo 26-10-1934.

Querido Padre

Hemos recibido su carta y por ella vemos que llebaron mui buen biaje, pues ya nos lo dijeron que iban todos viéndosen con lo que se les decía. Padre emos sabido el porque lo an detenido a V., porque no estaba claro lo del aujero del coral, pero oy ya lo sabemos. Ayer bino Francisco de

²⁶¹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 230v.

Añanos al enterarse que a V. se lo abían llebado por ese motivo y nos dijo que oy o mañana iba voluntariamente a declarar quien izo el aujero, que cuando vino atraer el ape-ro, al dejarlo en el corral bio que estaba encima de los argui-ños Vicente el Porgador y Chaparro aciendo el aujero y tenian dos escopetas, y subio Añanos a la cocina y le pidio a V. una copa y se marchó sin decirnos nada mui deprisa a sacar a su familia de casa. Padre cuando a V. lo llamen a declarar entregue V. esta carta. Padre no sabiamos aun lo que nos apreciaba el personal deste pueblo, nosotros, Candido y las del Coreador somos muy dolidos en el pueblo, deber que sin culpa alguna tengamos estos disgustos. Mi madre sige mejor ya selebanta. Con recuerdos de todos y reciba el cariño de su ija que pronto esperamos tenerlo en nuestra compañía.

Pilar Arregui²⁶²

La carta pretendía desmentir los cargos que la investigación militar había repartido, sin duda precipitadamente, durante los primeros días. El 9 de octubre el juez instructor de las diligencias previas de carácter urgente, alférez Rafael Casasús, ya había señalado los nombres de los culpables de la revuelta. Entre sus conclusiones se mencionaba que, tras el reparto de municiones por parte de Plano, «los revoltosos tomaron posiciones estratégicas introduciéndose algunos de ellos con la complicidad por lo menos de uno de los dueños de los corrales –PANTALEÓN CHARLES- en los dos corrales, uno propiedad de dicho Pantaleón y otro de Francisco Arregui que están frente por frente a la casa cuartel, y donde se ha podido comprobar que quitando piedras de las paredes formaron como aspilleras o troneras que los ocultaban a la vista de los guardias y resguardaban de las que éstos pudieran hacer», señalando además como uno de los que disparó al propio Charles²⁶³. Desde casa «Zaborra» también se realizaron disparos, pero de igual modo éste alegó

²⁶² ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1327 (respetamos la ortografía original). Nota aclaratoria: los arguiños son cestos grandes de mimbre utilizados para vendimiar o recoger otros frutos.

²⁶³ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 75.

que se sorprendió al ver tras la puerta de su corral a varios vecinos con armas, y que él y su familia, «horrorizados de miedo», se pasaron a casa de una vecina llamada Pabla Clemente, en donde pasaron todo el día.²⁶⁴ El hecho de que «Zaborra» ni siquiera fuera procesado, y de que tanto Charles como Arregui fueran finalmente absueltos en la causa supondría un ulterior alivio a una penalidad carcelaria que duró meses.

Las masivas detenciones no daban tiempo para disquisiciones ni formulismos. El concejal radical-socialista Cándido Gracia fue uno de los que más documentación generó en intentos de exculpación y cartas dirigidas al juez aclarando que su procesamiento había sido un error y que él no había tomado parte alguna en el movimiento. Desde luego que hubo de ser un fuerte impacto pasar de ser alcalde provisional a ingresar en calabozos y pasar por los interrogatorios como el resto de encartados. Pero un guardia declaró haberlo visto salir de su casa con armas, y ante eso poca defensa cabía. Envía tres escritos al juez en los que enfatiza su inocencia y «temer alguna venganza de los socialistas, ya que estos últimos tiempos nuestras relaciones eran muy malas», apelando si fuera preciso a la información de «todas las autoridades y personas de orden y de todo el Pueblo en general, y hasta de los mismos socialistas».²⁶⁵ En un cuarto escrito cambia el tono y se vuelve más agresivo, haciendo constar junto con el ruego de su libertad, su «protesta» por el «horror judicial» que con él se estaba cometiendo. Y vuelve sobre sus tiranteces con los socialistas «porque los desenmascaraba de todas mentiras y patrañas que anunciaban para cazar incautos desde el Ayuntamiento, y combatir todas aquellas propuestas absurdas sobre deslindes y asaltamientos de tierras». Con resentimiento indica que a sus propuestas de creación de obras de riego y viveros, fomento de la ganadería y repo-

²⁶⁴ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 235.

²⁶⁵ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 1530-1531.

blación forestal «fui combatido y tildado de loco y hasta intentaron hecharme por la ventana por descubrirles una gran mentira; en fin, las actas y hasta los concejales de derechas pueden testimoniar». Y pedía finalmente enmendar la «gran equivocación» de su detención. «Esto es horrible y [si este error] no se deshace luego va a costarle la vida a mis padres, a mi mujer, y me va a ocasionar la ruina».²⁶⁶

No todas las gestiones para liberar a detenidos tuvieron que generar documentación, pero cuando ésta existió podía ser indicativo fiel de relaciones sociales de fondo que transcurrían en la cotidianeidad del pueblo, de lealtades y adhesiones, de favores que precisaban, en aquel momento de necesidad, ser cobrados en forma de recomendación o de aval. Una carta firmada por elementos del orden de Uncastillo, «fervorosos entusiastas del orden y la paz pública, enemigos y censores de cuantos actos tiendan a dañar, agraviar o molestar», quería hacer constar ante el juez los buenos antecedentes e inocencia de los hermanos Varona y Carlos Casaus, «personas de inmejorable conducta y antecedentes» para quienes se pedía «perdón». Los firmantes eran ganaderos, comerciantes, industriales, funcionarios y propietarios en número de cuarenta y nueve, y agrupados en torno al «Casino Independiente». Cuando a poco de comenzar el juicio tuvo lugar un careo entre Casaus y el guardia que dijo haberlo visto en el sitio del cuartel, éste rectifica y afirma que «cree muy posible haber sufrido una confusión», dado que además, alega, hizo su declaración cuando tras ser herido iba a ser trasladado en ambulancia, «y posiblemente no disponía de la lucidez

²⁶⁶ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 1543-1545. Su argumento se basaba en la distancia que en los últimos tiempos su partido había tenido con los socialistas: «Mi conducta política no creo que nadie la tenga más limpia en Uncastillo, se han cometido toda clase de desmanes, yo no solo no he consentido ninguno, sino que con todas mis fuerzas me he impuesto. He aconsejado y lo he conseguido de que ninguno de mis correligionarios hayan cometido ninguno, ni saliesen de la ley, así ha sucedido que hasta hoy nunca hemos tenido que ver con la justicia», y sobre el día de autos afirma que «di órdenes rápidas y severas a todos los afiliados y amigos de que no entregasen ni una escopeta, ni un cartucho, y que nadie sin antes darse de baja en la organización secundase el movimiento».

de un estado normal».²⁶⁷ Algo similar sucedió con Juan Pablo Casale y Tomás Tris cuando pidieron ayuda al guardia civil Teodoro García, destinado en los meses posteriores en Villafeliche, para que éste diera referencias favorables. «Recuerdo de la noche del día 21 de mayo de 1933 que con motivo de la detención de uno de los (Planos) —está hablando de los Alcubierre—, al protestar por su detención, Vds. intervinieron por la noche frente de la casa de la Guardia Civil diciendo a los salvajes que se retiraran, como también lo hizo el General» (Francisco Arregui). «También recuerdo de la noche del 9 ó el 10 de diciembre cuando les requerí para ir al Centro Comunista y que Vds. nos acompañaron», aunque también hace constar que «no puedo decir si Vds. son autores de los asesinatos de mis compañeros».²⁶⁸

Durante todo ese tiempo de prisión la autoridad local producía documentación enviando al juez militar informes oficiales sobre la conducta de los encartados, incluyendo la filiación política y, en muchos casos, impresiones de carácter más bien subjetivo sobre la actitud e historial del preso. Sobre Antonio Plano se apunta que «el interesado es persona de buena conducta, sin que de los antecedentes que obran en esta Alcaldía resulte nada en contrario». Pero también, «por si el dato pudiera interesar, se hace constar que la persona de que nos ocupamos [...] pertenece a la Sociedad llamada Unión General de Trabajadores, en la que al parecer ejercía gran influencia».²⁶⁹ En otras ocasiones, como con Ricardo Lanza, se deja caer una velada sospecha de propensión al delito: «no consta nada en contrario sobre su conducta, pero por notoriedad se sabe en esta villa es persona poco escrupulosa en el respeto a la propiedad y bienes ajenos, si bien también no puede decirse contra él haya hecho perjuicios de importancia». Es decir, que no tenía ningún tipo

²⁶⁷ La carta en ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 1636 y ss. El careo en el folio 1797.

²⁶⁸ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1616.

²⁶⁹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 345.

de antecedente penal.²⁷⁰ Y así de muchos otros. De Vicente Tirapo se apunta que «no consta de una manera oficial haya observado mala conducta, pero dado su carácter de entrometido y hablador, sin temor a molestar o faltar a los demás, la prudencia de los otros ha servido en algunas ocasiones para evitarle antecedentes oficiales en contra de su conducta».²⁷¹ Y algo similar se opinaba de Saturnino Agón, condenado en 1926 por «escándalo» en Sos. «El individuo de referencia siempre ha tenido un temperamento de gritar, molestando a los demás, es decir, que a pesar de la condena a que nos hemos referido, no se enmendó y bien pudiera haberse castigado en sucesivas ocasiones por la misma causa de haber estado a tiempo la autoridad o sus agentes».²⁷² ¿Qué significaba que Antonio Casaus fuese «persona amiga de desplantes y mafezas?»²⁷³ O que Saturnino Sánchez fuese calificado como «un elemento de esos que hablan ofendiendo, un voceras como vulgarmente se dice, con desplantes de guapeza y grosería?»²⁷⁴ Y de igual modo, cuando se pretendía favorecer al encartado, se podía decir, como respecto a «General», que «ha observado constantemente una conducta ejemplar, no ha intervenido nunca en política de ninguna clase ni se sabe pertenezca a ninguna asociación de tal índole; es el tipo aragonés de la historia; noble-

²⁷⁰ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 346.

²⁷¹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 355.

²⁷² ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 358.

²⁷³ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 947. «...persona amiga de desplantes y mafezas, actividades por ella usadas con frecuencia sin tener el respeto debido a los demás».

²⁷⁴ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 950. Este tipo de retórica se repetía en otros informes de la alcaldía, prodigándose en literaturas: de Lorenzo Estabén se decía que «es de un temperamento vociferador, grosero e irrespetuoso con los demás, amigo de molestar y de imponerse con desplantes», ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1036; de Esteban Casaus, que es de buena conducta, pero «un individuo amigo de molestar a los demás con desplantes y mafezas y engrandeciéndose con estas actividades», ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1041; de Lorenzo Pueyo que «se quiere dar importancia con mafezas y desplantes: un pincho, como vulgarmente se dice», ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1047; y de Maximino Sánchez, por citar tan sólo varios casos, que «resulta ser sujeto comprometedor, voceras, que se da importancia ante los demás con desplantes de mafeza y conmisericordia burlesca», ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1078.

za, corazón y rudeza noble. No se le considera capaz de perjudicar a nadie ni mucho menos de intervenir en la lucha social».²⁷⁵ De Antonio Suñén se apunta que «es persona de buena conducta, mereciéndole al que suscribe un alto concepto y consideránole incapaz de perjudicar al prójimo».²⁷⁶ Y de José Beguería, que «por tener alguna relación particular y conocerlo personalmente más a fondo [esta Alcaldía hace constar] que es persona humanitaria y de muy buenos sentimientos». Parece que todo esto sonaba más a castigos y premios por lances previos, basados en impresiones personales, que a informes emitidos con alguna pretensión de objetividad.²⁷⁷

Es evidente que tales comentarios no constituían ninguna prueba, pero sin duda tenían un peso específico en los informes posteriores de letrados y la sentencia del tribunal.²⁷⁸ No hay que olvidar que la concepción jurídica de la época, máxime entre unos miembros del ejército obsesionados con la persecución de la rebeldía contra la autoridad y el desorden público, bebía de las fuentes doctrinales que, nacidas en el comienzo del siglo XX y determinadas a encontrar modos de pautar los comportamientos sociales «anómalos», establecían una relación directa entre el modo de vida, la psicología

²⁷⁵ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 361.

²⁷⁶ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 376.

²⁷⁷ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 786. La arbitrariedad de las valoraciones sobre el modo de conducta no quitaba para que en algunos casos existiese una trayectoria probada de delitos y condenas. Demetrio Agón había sido condenado en 1916 por disparo de arma de fuego y lesiones, en 1927 por lesiones, y en 1933 por el mismo delito, ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 941. Y Juan José Pueyo tenía a sus espaldas una condena de catorce años de prisión dictada en 1926 por homicidio y lesiones, ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1052.

²⁷⁸ En un caso, el de Mariano Gil Laplaza («El Chato») se explicitó ese peso específico de las opiniones de la alcaldía. Ante la petición del encartado a finales de noviembre al juez solicitando la libertad provisional dado que «no había intervenido en nada del movimiento», y que «tiene a su familia desamparada». Se denegó la petición, justificada además de en unos cargos no desvirtuados, en el informe del alcalde según el cual «resulta ser elemento que le gusta intervenir en todas las cuestiones, dar opiniones de todos los asuntos siendo además lo que se dice un «voceras» (Textualmente)», ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 1432-1432.

personal y la propensión al delito, y señalaban como peligroso todo aquello que no discurriera por los cauces del buen sentido y la moralidad burguesas. Y en eso tenía que ver no sólo la vida de los desclasados en los suburbios urbanos, sino también el comportamiento campesino que se desviaba del ideal bucólico de la comunidad «prepolítica». Además de referencias personales de este cariz, a los procesados les exigieron tras la notificación de procesamiento cien mil pesetas «con las que solidaria y mancomunadamente deben responder a las consecuencias de este proceso», respondiendo todos ellos que no contaban con esa cantidad y alegando la mayoría «pobreza legal» para justificar la exención. Casi todos fueron declarados «insolventes», y los que no tan sólo poseían alguna caballería, los menos la casa, y todavía menos aún alguna máquina o algún objeto con el que trabajar («Figado» tenía una máquina para hacer gaseosas y el «Cantinerero» pipas para el vino, eso es todo).²⁷⁹

Un caso que ilustra cómo en estos tiempos excepcionales la sospecha consigue franquear las barreras de los derechos, es el del alcalde de Zuera y dirigente socialista, Antonio Garulo. Su declaración es la primera que abre el expediente del motín de Uncastillo, pese a que su relación con el caso podría parecer más que lejana. Se sospechaba que hubiera sido uno de los «inductores» del movimiento. El día 6 salió de mañana hacia Zaragoza en un autobús de línea. Pasó por el centro de Izquierda Republicana, almorzó en casa Gascón y después fue al «café del Rojo», paseando por el centro y regresando en el coche de la tarde. Nada extrañamente anormal, salvo el hecho de no volver en el coche de la mañana sino en el de la tarde. Confesó que se debió a esperar la prensa de Madrid «para conocer la situación de España con motivo de los acontecimientos que

²⁷⁹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1445. Fueron declarados como «insolventes» ochenta y ocho de los encartados. Seis contribuían en «industrial», entre ellos Plano con 152 pts., y veinticuatro aparecen como contribuyentes en pecuaria y rústica.

ocurrían». Una nueva salida a Zaragoza al día siguiente, pese a que estuvo departiendo con varias personas y que pudo comprobar que había ido al cine, decidieron a la autoridad a detenerlo. Poco hacía falta para ello. «Es el jefe del partido socialista de la localidad, y considerando que el movimiento que ahora se registra en la nación parece motivado por los dirigentes de dicho partido, y que dicho señor ha estado en continuo movimiento durante los sucesos y al frente de sus afiliados de la localidad, se procede a la detención del mismo». Como puede verse, la relación de Garulo con los hechos en Uncastillo es más que periférica, y tan sólo podía estar amparada por la búsqueda por parte de gobernador y policía de conspiradores políticos directores del «movimiento». De cualquier modo, la preocupación también hacía mella en estos hombres de partido. De su puño y letra, Garulo firma desde la cárcel dos cartas dirigidas a los testigos que pueden corroborar su declaración para que cuando les llamasen a declarar lo hiciesen a favor suyo, es decir, «diciendo la verdad».²⁸⁰

La nueva «normalidad»

Todos los informes de conducta fueron firmados por el nuevo alcalde, Iluminado Pemán. Pero hasta que asumió el poder pasaron varios días. Tras los tiroteos y la llegada de la fuerza, el juez instructor y el coronel del tercio de la Guardia Civil se constituyen en Ayuntamiento y dan posesión como alcalde al que hasta la fecha era segundo teniente, el radical Cándido Gracia. A las nueve y media de la mañana del día 6 enviaba un telegrama a la autoridad gubernamental:

De Uncastillo a Zaragoza. Día 6 de octubre, 9:30h.
«Después de un día de incertidumbre y desórdenes llega el de hoy con tranquilidad, habiendo dominado situación fuerza pública. Por no hallarse en la localidad Alcalde propietario y primer teniente me he hecho cargo alcaldía. Dos guar-

²⁸⁰ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 2 a 4. Es puesto en libertad provisional en 2-11-1934 (ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1057)

días y un paisano muertos, varios heridos. Juzgado instrucción actúa».²⁸¹

En las siguientes horas redactaba un informe sobre los acontecimientos del día anterior, en el que lamentaba que «esta Alcaldía no puede dar más concretos datos, pues ocupando en los cargos administrativos de este Ayuntamiento el tercer lugar [...] además de tener temor de que le ocurriese una desgracia, se hallaba impotente para remediar los hechos y sucesos que se venían desarrollando, ya que ningún aliado político o de amistad tenía con los sediciosos, limitándose que era de momento cuanto mejor podía hacer a los amigos políticos y parientes que fueron a su casa o pasaron por ella, que no se metieran en aquella alteración».²⁸² El coronel del 7º Tercio en Uncastillo ofrece otra nota sobre el restablecimiento de la normalidad en Uncastillo en el día posterior al de los tiros.

Sádaba a Zaragoza, día 6, 11h: A las 8.30 Juez Instrucción y yo nos hemos constituido Ayuntamiento dando posesión 2º Teniente Alcalde por haber huido Alcalde y 1er Teniente alcalde. Publicado bando con tendencia normalizar vida ciudadana dentro de los términos que las circunstancias aconsejan. Desde amanecer estamos practicando registros en Ayuntamiento, sindicatos y casas sospechosas. Hemos tenido fuego con revoltosos, deteniendo quince. En el fuego a veces intenso no hemos tenido bajas causando a revoltosos alguna vista, incautándonos de alguna escopeta abandonada al huir. La fuerza pública es dueña de la situación en este momento, como lo demuestra el hecho de que circulamos por calles sin escolta. Coronel que suscribe, ayudante y Capitán tercio móvil. Sabemos existe de revoltosos un muerto y muchos heridos que no se presentan curar. Imponderable la conducta de Capitanes, oficiales, clases y tropa del 4º y 7º tercio puesto. Ruego a V.E. de traslado este

²⁸¹ AGCZ, Leg. 1, exp. 007.

²⁸² ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 416. Todas esas razones no eximieron a Cándido Gracia de pasar por la cárcel de Zaragoza, ingresando el día 23 de octubre. Documento en el que notifica su nombramiento de abogado por la acusación de intervención en desórdenes públicos en ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1068.

telegrama Mtro. Gobernación, Inspector Gral. Guardia Civil y Gral. Jefe Zona en Valencia.²⁸³

Posteriormente, el día 8 tiene lugar una sesión extraordinaria en la Casa de la Villa a las 9 de la noche. Asisten los concejales Cándido Gracia, Pío Pueyo, León Marín, Francisco Fernández, Enrique Pérez y Manuel Cortés bajo convocatoria del teniente de la Guardia Civil Emilio Catalán, que hace las veces de delegado gubernativo. El fin de la reunión, en palabras del propio teniente, «la suspensión del actual Ayuntamiento de esta villa y toma de posesión del nuevo, que ya se determina en la repetida orden telegráfica». Los concejales «se dan por enterados, acatan la orden de la superioridad y se retiran»²⁸⁴. Al día siguiente se constituye el nuevo Ayuntamiento, conformado por propietarios y elementos de orden de la villa encuadrados en la derecha local. Iluminado Pemán, Mariano Escagüés, Eusebio Luis, Ladislao Frej, Gregorio Olano, Martín Pemán, Jesús Solana, Pedro Pueyo, Jorge Alaviano, Mariano García y José Caudevilla eran los nuevos concejales. La primera acción tomada por el consistorio consistiría en pedir al gobernador un comisionado «que proceda al examen de la gestión del anterior ayuntamiento», algo que finalmente efectuarían diversos concejales de Uncastillo.

Pero si la vida política de la villa tendía a adquirir algún tipo de normalidad, no ocurría lo mismo con la social. Las detenciones y los registros de los que habla el teniente en su telegrama mantenían a muchas familias en un estado de temor. La sola militancia en el sindicato de la UGT se convertía en motivo de interrogatorio, y hasta los últimos días de octubre se continuaron efectuando apresamientos, traslados a Sos, indagatorias y viajes al presidio de Zaragoza. El local de la UGT y el domicilio de Antonio Plano fueron registrados el día 8. El registro dio como resultado un hallazgo de muni-

²⁸³ AGCZ, Leg 1, exp. 007.

²⁸⁴ AMU, Actas municipales, 8-10-1934.

ción en el domicilio particular (quizás todas aquellas postas que en los primeros momentos de la revuelta quiso esconder de los grupos), «en una percha de la alcoba que ocupaba Antonio Plano en su casa», mas otras cajas de cartuchos encontradas en el local de la UGT y diversa documentación de carnets, libros de registros, facturas, sellos de cotización encontrados en el local de la Juventud Socialista. El día 15 volvió a ser registrado el local de la UGT, encontrándose muchas hojas para sellos de cotizaciones, carnets del partido socialista, el propio carnet de la UGT de Antonio Plano, «un cuaderno de notas con indicación de notas para la CNT», «tres cartas dirigidas a Antonio Plano», circulares, un tampón y varias cápsulas para pistolas. Nada, desde luego, que facilitase las cosas para él.

Con todo y eso, más aparatoso iba a ser el registro efectuado a Romualdo Garcés. Denunciado por un vecino por haberle visto pasar con escopeta el día de los sucesos, la Guardia Civil halló en su casa una maleta de cartón y un saco de folletos con numerosos y diversos ejemplares de material anarquista, socialista y revolucionario. Además, hallaron «un tubito de cristal con polvos». El Garcés reconoce el material como suyo, alegando que «hacía los pedidos de dichos folletos a distintas casas que los editaban, entre ellas a la Biblioteca de Tierra y Libertad en Barcelona, a la Biblioteca Plus Ultra, Torrijos catorce Madrid, a la biblioteca de Estudios de Valencia, y que los vendía al público en el pueblo de Uncastillo, y que este tráfico lo viene haciendo desde hace un año».²⁸⁵ Los polvos, tras el examen pericial, resultaron ser elementos para fabricar tinta de escribir. A finales de noviembre se habían recogido en Uncastillo siete pistolas, dieciséis escopetas, dos carabinas y una tercerola.²⁸⁶

Mientras actuaba la Guardia Civil, el Ayuntamiento gestionaba la resaca del movimiento. El día 13 se acuerda

²⁸⁵ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 632.

²⁸⁶ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1419.

hacer constar en el acta «el haber sentido la Corporación la detención gubernativa que ha sufrido el Sr. Secretario de este Ayuntamiento [Emiliano Bravo Catalán] en aquellos primeros momentos de intervención de la autoridad después de los lamentables y desgraciados sucesos ocurridos [...], así como también haber visto con agrado la libertad de dicho funcionario, ya que ninguno de los presentes tiene ni remotamente noticia de que haya intervenido en aquellos sucesos».²⁸⁷ En la sesión siguiente, la del día 17, ya no habría la misma unanimidad, para desgracia de bastante gente del pueblo. Martín Pemán expone que «con motivo de los lucuosos sucesos [...] hay infinidad de familias que han quedado casi sin amparo debido a estar detenidos los miembros de las mismas que podían ganar el sustento, y por todo ello quiere hacer presente se vea de hallar un medio que por lo menos contribuya a remediar el mal en aquellas familias en que haya niños pequeños, *sin mirar ideología política ni condición de las familias*, es decir un trato igual para todos» (el énfasis es mío). La presidencia, lejos de conmovearse con la exposición, da largas sobre el asunto contestando «que más adelante se verá de atender a este ruego, ya que por ahora es prematuro pensar en ello, por no saberse de fijo qué familias quedarán en esa situación». La oportunidad de superar la división es relegada por el castigo.²⁸⁸ No se ofrece en cambio ninguna reticencia para acceder a la invitación del Gobierno Civil de abrir una suscripción popular a favor de los guardias civiles heridos, para «allegar fondos con que recompensar al heroico comportamiento de las instituciones defensoras del orden y bienestar públicos y para aliviar las dolencias y miserias producidas con motivo de la última intentona revolucionaria». Se acuerda que el Ayuntamiento inicie la cuestación con 50 pts., y publicar bandos «invitando» al vecindario a

²⁸⁷ AMU, Actas municipales, 13-10-1934. Emiliano Bravo continuaría ejerciendo como secretario municipal hasta julio de 1936.

²⁸⁸ AMU, Actas municipales, 17-10-1934.

contribuir en un plazo de 5 días.²⁸⁹ El día 7 de noviembre, y a indicación del alcalde «que hace ver lo pobre de la cantidad que se acordó en anteriores sesiones contribuir a la suscripción nacional», se acuerda elevar la aportación a 150 pts.²⁹⁰

En noviembre se acuerda denegar un trozo de terreno que tenía solicitado la UGT en la plaza de Santa María. Pero el castigo selectivo también llegaba a los casos particulares, denegándose también un terreno a Tomás Tris, encausado en el proceso, y se dispone de la parcela de Saturnino Agón y Daniel Garralaga en *Picanido* por «haber renunciado a ellas», cediéndolas a otros dos vecinos «por ser los vecinos que, a juicio de esta Comisión, más necesitados se encuentran entre los aspirantes a parcelas».²⁹¹ La llegada del nuevo equipo municipal implicaba un cambio en el sentido en el que la corporación desplegaba las políticas públicas, tendente a remover las prácticas y la identidad de los colectivos republicanos de izquierda. Los cargos municipales, como los de director de la Banda municipal y de matarife, cambiaron de manos. Nuevas casas y familias debían ahora agradecimiento. También cabría interpretar la práctica y despliegue de la beneficencia como un modo de dominio local, de reparto de favores y compra de fidelidades en un tiempo especialmente difícil para muchas familias de Uncastillo. En 28 de noviembre, con los fríos llamando a la puerta de las casas sin pan, el alcalde expone que «debido a los lamentables sucesos ocurridos en octubre último, habían quedado un buen número de familias en la más estricta miseria y que era de humanidad atender en lo posible a

²⁸⁹ AMU, Actas municipales, 24-10-1934.

²⁹⁰ AMU, Actas municipales, 7-11-1934. En la misma sesión llegaría una propuesta que tendría mucho que ver con la beneficencia ejercida desde una posición predominante. La Junta Provincial de Protección de Menores da cuenta de «la difícil situación de desamparo en que han quedado muchos niños de Asturias con motivo de los sucesos ocurridos», recomendando a las Juntas locales la recaudación de fondos para contribuir a la suscripción. La Junta Provincial había concurrido con 5.000 pts., acordándose en Uncastillo pasar el asunto a la Comisión de Hacienda para calibrar si es posible contribuir.

²⁹¹ AMU, Actas municipales, 14-11-1934.

remediar a las que se encuentren en tal estado». Ahora bien, el Municipio no contaba con crédito para cubrirlas, pero proponía «se abriese una suscripción popular», encabezando la cuestación el propio Ayuntamiento con 500 pts., cargando 150 a la partida de «imprevistos» de 1934 y las 350 pts. restantes al presupuesto de 1935.²⁹² En la siguiente sesión se lee una carta del vecino José Cortés en la que, «después de animar a este Ayuntamiento en la ruta de su gestión», ofrece 100 kg. de arroz, 25 de garbanzos y 100 piezas de jabón «con destino a las familias necesitadas», acordándose aceptar el ofrecimiento y dar un voto de gracias,²⁹³ y por su parte el Sindicato Agrícola donaba 100 kg de arroz, 100 de alubias y 50 de bacalao, constando también voto de gracias de la alcaldía.²⁹⁴

No sabemos hasta qué punto estas medidas consiguieron remediar la angustiada situación de muchas familias del pueblo, con los trabajadores y braceros en la cárcel. Probablemente la red de pequeñas pero efectivas solidaridades vecinales y familiares también contribuyó a sobrellevar el invierno. Estirar un poco la masa del pan para poder repartir, trabajar a ratos en la finca del familiar o prestar algo de ropa usada podían ser modos habituales para salir de la amenaza del hambre. No sólo porque la reclusión de los hombres de la casa significase la ausencia del principal jornal, sino porque además la crisis de trabajo en aquel invierno, arrastrada durante todo el año de 1934, impedía el tradicional complemento de jornal con que los trabajadores iban cubriendo las estaciones agrícolas. Lo anunció el concejal García cuando recién pasados los sucesos propuso la formación de una Comisión municipal para gestionar con las autoridades «la mayor colocación de obreros en las obras del Canal de las Bardenas y otras que pudieran ser factible», ya que de otro modo «llegaría la época del invierno y las clases trabajadoras

²⁹² AMU, Actas municipales, 28-11-1934.

²⁹³ AMU, Actas municipales, 7-12-1934.

²⁹⁴ AMU, Actas municipales, 12-12-1934.

habían de sufrir una gran crisis».²⁹⁵ Y la crisis se agravó, hasta el punto de que el Ayuntamiento concedió al contratista de las obras iniciar los trabajos en los terrenos propiedad del municipio saltándose la tasación de los mismos y el abono del importe por la expropiación. «Dada la circunstancia de la crisis de trabajo en esta localidad y la rapidez con la que se llegaría a la colocación de obreros de esta villa autorizando las mencionadas obras, se acuerda por unanimidad acceder desde luego a lo solicitado, siempre que en las obras de referencia se dé trabajo con preferencia a los obreros de esta localidad».²⁹⁶ Beneficencia y trabajo para los fieles no eran sino algunos de los instrumentos con los que el nuevo poder local pretendía ganar adhesiones en un tiempo de crisis para muchas familias. Y en la medida de lo posible, después de haber sido testigos –y en algún caso objeto– de la violencia revolucionaria, evitar nuevos desórdenes.

El pueblo «inmaduro»

Para las clases pudientes, todo se había debido a una malhadada mezcla entre falta de pan y manejos arteros de los directores del complot. Avancemos algún mes en el tiempo, hasta los primeros días de marzo de 1935, en los que los abogados defensores ultimaban y presentaban sus escritos de defensa en la causa. Las últimas palabras de José Martí Laguardia, abogado defensor de Antonio Plano y veintiocho procesados más, empezaban con los sufrimientos y desventuras de los vecinos de Uncastillo:

«Mucho dolor trajeron los hechos que todos lamentamos, pero mucho dolor para todos, las víctimas no son las que nos ha leído el fiscal, hay que añadir todos los que se sientan en el banquillo y centenares de mujeres y niños que ni siquiera han podido venir a presenciar el juicio por carecer de medios para el viaje. Se os pide por el Ministerio Público el restablecimiento del derecho y del orden, pero éste no

²⁹⁵ AMU, Actas municipales, 17-10-1934.

²⁹⁶ AMU, Actas municipales, 12-12-1934.

quedará restablecido en Uncastillo mientras estos hombres con el escarmiento que ya tienen, no vuelvan a sus hogares a reorganizar la vida de centenares de seres sin culpa. Condene el Consejo al ambiente y procure que no vuelva a cargarse, pero absuelva a esta muchedumbre de irresponsables».²⁹⁷

Las últimas tres palabras encierran la clave de los argumentos exculpatorios no sólo de Martí Laguardia, sino de la gran mayoría de abogados defensores: «muchedumbre de irresponsables». Sin embargo, aunque se pretende infundir lástima apelando al lado más humano de los vecinos de Uncastillo, formar parte de ese agregado no implica precisamente un concepto elevado de sus integrantes. A ellos hay que tratar, decía el propio Martí, «con conmiseración y benevolencia» debido a su «ceguera de entendimiento», a «su escasa cultura» y a que, «ante la lucha de pasiones y sentimientos, los habíamos dejado indefensos».²⁹⁸ En la misma línea habla el abogado Alcalá Royo de sus defendidos, «gente honrada, gente sencilla, sin instrucción apenas, sin cultura, muchos de ellos analfabetos, seres sin ideal confundidos y arrastrados por perniciosas propagandas».²⁹⁹ Francisco Lacasa, teniente coronel de caballería y abogado de Eugenio Convalía, retrata a los participantes en los hechos como «núcleos de hombres de inteligencias pobres, toscas, calenturientas, exaltadas por predicaciones malévolas o equivocadas».³⁰⁰ Esos hombres incultos pero inocentes, en grupo «se encuentran momentáneamente poseídos de la peor locura y destruyen vidas y haciendas y delinquen. Y el abogado de Manuel Lasilla, Luis García Berenguer, argumentaba que «las muchedumbres lo arrollan y devastan todo», y recurría a la imagen de la «furiosa avenida que, engendrada por lluvias torrenciales, se precipita por el llano». Como agua desbordada, como fuego que prende,

²⁹⁷ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 2047.

²⁹⁸ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 2035v.

²⁹⁹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 2048v.

³⁰⁰ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1959.

como lava de volcán o como corriente eléctrica se asimilaba el movimiento de la revuelta. ¿Pero cómo se argumenta esa secuencia que pasa de la tranquila vida familiar campesina a una multitud criminal y desbocada?

El propio Martí explica en qué consiste el «delito colectivo o de masas» a que se está refiriendo para describir lo que sucedió en Uncastillo. Existiría una ley psicológica por la que «una emoción o un deseo individual trasladado a una multitud crece en intensidad desmesuradamente y provoca o crea un estado emocional común». Ese estado emocional colectivo hace que «se desvanezcan las características especiales de cada individuo», dejando vía libre a «los más hondos estratos de su psiquis, instintos, tendencias, residuos atávicos». De ese modo, mediante «imitación y contagio», se forma «un alma colectiva, una muchedumbre organizada psicológicamente» que ya no tiene nada que ver con los individuos que la forman. «El individuo ha desaparecido y lo sustituye la muchedumbre con otra alma distinta». Es «un monstruo colectivo, ante el cual el individuo es como un grano de arena en un desierto azotado por un huracán». El ejemplo del quinto demostraba la teoría. Por sí sólo «no es casi nada, bastaría incluirlo en la multitud de un regimiento», y en cambio en cierto momento, tras una arenga, esa multitud puede realizar actos que individualmente no hubiera intentado. En un mitin derechista, «el público compuesto de señores si se quiere piamorosos [...] individualmente buenos y morales, basta la interrupción a su líder de un aguafiestas para que cientos de puños y bastones se ciernan sobre su cabeza». Igualmente, escoge Laguardia los ejemplos heroicos de Sagunto, Numancia y de Fuenteovejuna como casos históricos en los que la irresponsabilidad de la multitud se orienta en función de una actitud imitada, un impulso seguido.

Uncastillo sería un caso claro de colectividad de ánimo, prosigue el defensor en su alegato, en la que «no hay directores ni dirigidos, sino que basta una voz, un grito, para que la multitud actúe y delinca», absorbida como está la multitud

por su «emotividad exaltada, delirante, imaginación fantástica que deforma la realidad». Bajo ese estado emocional, y amparada por «la fuerza terrible, casi indomable, la que da el número», la muchedumbre «carece de facultades inhibitorias [...] y procede en todos los casos como un autómatas, como un ser primitivo y siempre con la fuerza ciega y brutal de la tempestad». De ese modo, dependerá del camino que uno del grupo tome para que los demás le imiten, pero tan sólo cabrá la sanción sobre la multitud cuando existe un móvil de egoísmo individual en la comisión del delito. «Cuando no es ambición personal lo que lo produce sino ese ambiente de propagandas, entonces la multitud es irresponsable», y no se puede imputar culpa sobre los individuos que la forman, sugestionados como se hallan por «la influencia hipnótica» de la masa. En otras palabras, el reconocimiento de ese estado permite exculpar a los acusados por la existencia de una «locura transitoria elevada a la multitud». El capitán Ramón de Mesa explica el modo «en que se realizan los delitos cometidos en la furia del pueblo». En principio, «nadie interviene con el propósito de cometer un delito, nadie osa proponerlo, nadie tiene las armas en la mano». Pero en un momento dado, «los ánimos se exaltan, el recuerdo de los dolores sufridos excita la sangre, el furor suministra las armas y destruye la razón, une a todos y llega al punto en que nadie sabe lo que hace». Y eso ocurre, «porque los individuos se ciegan de tal manera que sus facultades mentales quedan anuladas». Ante ese fenómeno, se pregunta el militar y letrado, «¿cómo puede el juez medir la criminalidad de cada uno?».³⁰¹

Las teorías que sustentan todas estas opiniones jurídicas provienen de finales del siglo XIX y principios del XX, momento en el que las obras de «psicología colectiva» hacen furor en el ámbito no sólo académico, sino también en el político y jurídico. Pretendían dar una explicación a todo un conjunto de fenómenos novedosos que estaban teniendo

³⁰¹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1976.

lugar en las sociedades europeas occidentales, fenómenos relacionados con las repercusiones sociales de la industrialización y la urbanización, con el surgimiento del movimiento obrero y la progresiva instauración del sufragio universal. Esta creciente participación de las clases populares en la vida pública era contemplada con recelo y, las más de las veces, con aversión por gobiernos y propietarios. Sobre todo cuando tenían lugar formas diversas de contestación colectiva, cada vez más frecuentes, como motines, revueltas urbanas, manifestaciones, protestas populares o huelgas, momentos de peligro para el orden y la propiedad. La era de las «masas» había llegado, las masas pedían cambios y amenazaban con un arma que no había sido usada como hasta entonces, con la fuerza del número. Una amenaza que, vista con aquella aversión y rechazo con que era contemplada desde el poder, se concebía caprichosa y destructiva. Por lo tanto, cuanto mejor se pudiera conocer y pautar el comportamiento de las muchedumbres, de mayor capacidad de maniobra y anticipación dispondrían instituciones y agrupaciones de orden para predecir y contener sus movimientos.

De este modo, las teorías de autores como Pascual Rossi, Escipion Sighele, Gabriel Tarde o Gustave Le Bon, se convierten en referentes inexcusables del pensamiento conservador de la época. Y se instalarán de tal modo en el ámbito social que no sólo serán frecuentadas por amigos y garantes del orden, sino que la izquierda política también los hará suyos cuando quiera criticar las movilizaciones que discurren fuera de los «cauces» de sus organizaciones. El motín y la revuelta pasaron a ser sinónimo de desorden, de irracionalidad y de falta de discernimiento, utilizándose para comprobarlo citas de autoridad provenientes de los escritos de los autores mencionados. En el juicio sumario que nos ocupa, el letrado Julio Alcalá fue desgranando en su alegato, una tras una, referencias de este cariz. Cita a Ferri para decir que «de la reunión de individuos de buen sentido puede resultar una asamblea que no tenga sentido común»; a Giuriati para aseverar que «cuando la multitud se desencadena o se subleva no

tiene más personalidad jurídica que las bestias enfurecidas, ambas son sujetos inconscientes, irresponsables, fuerzas brutas»; con Aquiles Mestre manifiesta que «no se puede apreciar en la multitud, ser inorgánico y amorfo, la manifestación de voluntad, [...pues tan sólo puede...] manifestar instinto»; con Sergi considera que «esta clase de delitos son más propios de apreciación por los alienistas que por los Tribunales, debido a la sugestión, que es un fenómeno muy agudo de la psiquis»; con Sighele reflexiona que un hombre honrado puede «dejarse arrastrar por la multitud al crimen, como en un acceso de locura momentáneo», pero que una vez pasado no deja huella, y que no puede dar lugar a reacción penal; con Concepción Arenal afirma que lo característico de este tipo de delitos es que tienen una causa, pero no «una empresa», es decir, un objetivo personal; cita a Bonilla San Martín al apuntar que «al hablar de las huelgas y de estos delitos, el delito colectivo es una ficción, [pues] la colectividad no puede accionar delictivamente»; con Pacheco indica que en los delitos de rebelión «no hay nada que parezca odioso, ni repulsivo, nada que estimemos denegatorio de la rectitud y caballerosidad del hombre honrado». Y termina su exposición sentenciando que «en el mismo o parecido sentido exponen sus teorías con rara unanimidad sociólogos y autores de todas las tendencias».³⁰²

No otra cosa había sucedido en Uncastillo. El *Heraldo de Aragón* lamenta que «donde antes reinó la alegría y la satisfacción del campesino aragonés» ahora han de verse «unas cuerdas de presos, los hogares deshechos, lágrimas...», fruto de «un momento de locura, del que hay responsables que no aparecerán ahora a dar cuenta, agitadores, fanáticos o imposutores enemigos de la paz». Éstos, los inductores, «fácilmente hicieron presa en la simplicidad campesina con las excitaciones a lograr por la violencia un cambio social». La propaganda criminal «hallaba éxito fácil en las gentes menos ilustradas», que se dejaban llevar por el «maquinista» del tren de la

³⁰² ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 2048 y ss.

revolución³⁰³, y en cuyos ánimos prendía el fuego de la revuelta: «caldeadas las imaginaciones, inflamados los apetitos, a sus manos encallecidas en el uso de instrumentos de trabajo se hicieron llegar los de destrucción y muerte». Y por continuar con el símil del fuego, se puede leer que «el mal prendió» en los pueblos de las Cinco Villas³⁰⁴, aunque finalmente tan sólo fueron «unos chispazos de la trágica fragua revolucionaria» los que hubo que sofocar.³⁰⁵ El problema estaba en la mano que prendía la llama, «agitadores, fanáticos, impostores... promotores que supieron ponerse en salvo con tiempo empujados por el miedo y el remordimiento».

«Los ideólogos de las revoluciones» —afirma el letrado defensor de Manuel Lasilla—, «no han tenido otro mérito que su audacia y su cinismo», y es a ellos a quienes alcanza «la verdadera responsabilidad y no a estas pobres gentes trabajadoras que, embarcadas en la nave revolucionaria que marcha a la deriva, impulsados por el odio y las pasiones que encendieron en su corazón las teas de las ideas disolventes». Todas las miradas en el proceso se dirigían hacia Antonio Plano, aunque «la responsabilidad de los hechos hay que buscarla más lejos», en «otros personajes, que aunque creen estar en el anónimo no son desconocidos». Y continúa describiéndolos como «los que con sus predicaciones engañosas han llevado a los pueblos españoles a cometer los tristes sucesos desarrollados en diversas partes de España en el mes de octubre último».³⁰⁶ Con probabilidad se estaba refiriendo a las figuras demonizadas de la política nacional republicana y socialista, a los González Peña, los Largo Caballero y los Azaña, acusados y detenidos con motivo de octubre, y cabezas visibles de lo que todos sus críticos denominaban como un complot no sólo antidemocrático, sino fundamentalmente antiespañol. Por lo que tocaba a Plano, en aquella hora oscu-

³⁰³ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1971v.

³⁰⁴ HA, 10-10-1934.

³⁰⁵ LVA, 10-10-1934.

³⁰⁶ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1979.

ra en que los ciento diez vecinos de Uncastillo eran sentados en el banquillo, y en que comenzaba a leerse el informe del fiscal, ningún presagio positivo permitía aliento a la esperanza. En los papeles aparecerá como el instigador y azuzador de las violencias revolucionarias del pueblo. Para el fiscal, desde luego, no cabía ninguna duda al respecto.

El informe fiscal

El 10 de diciembre de 1934 el teniente coronel Civera Ayxemus y juez instructor de la causa depositaba las conclusiones finales de su investigación. En ellas determinaba sin ambages que el día de autos, «noticiosa la Unión General de Trabajadores de Uncastillo de la formación de nuevo gobierno, obedeciendo a planes preconcebidos y ante las instrucciones de que fueron portadores dos forasteros llegados a dicha villa en automóvil», decidieron oponerse al Gobierno constituido. Empezaron a llamar a las casas de los afiliados «y a las de los pertenecientes a otras sociedades extremistas –CNT y análogas–», y una vez congregada la gente en el puente de Santa María, el alcalde Antonio Plano (a la vez secretario, tesorero y conserje de la UGT), el teniente de alcalde y presidente de la UGT Manuel Lasilla, junto con los dos forasteros, «empezaron la realización de sus planes cortando las comunicaciones telegráficas, interrumpiendo con barricadas y troncos y piedras la circulación por la carretera y ordenando la recogida de armas de los vecinos de orden», operación llevada a cabo «por grupos de revoltosos» que fueron haciéndose con ellas voluntariamente o mediante amenazas.

Continúa el fiscal: Tras recoger las armas, el alcalde repartió municiones entre los revoltosos en el Ayuntamiento, en el Casino Independiente, y en el local de la UGT, donde también se repartió «gasolina preparada en botellas». Armados los grupos «y prosiguiendo los planes trazados» se enviaron emisarios a la Guardia Civil para que entregase las armas y se rindieran. Como no lo hicieran, Antonio Plano «se entrevistó

con idénticas pretensiones con el comandante del puesto». Ante la negativa «se respondió ordenando la distribución de la gente armada que, sitiando el Cuartel por sus cuatro costados, aprovecharon arteramente una salida de los Guardias [...] para hacer en ese momento una descarga cerrada que causó la muerte a dos de aquéllos y heridas graves al sargento comandante del puesto, y otras leves a otro de los guardias». El tiroteo continuó contra el cuartel, «heroicamente defendido por los dos guardias que habían quedado ilesos», y «se generalizó, extendiéndose a otros lugares de la población con el fin de impedir la entrada de refuerzos». Los disparos se prolongaron hasta la tarde, en que «consiguió forzar la entrada la fuerza que acudió en auxilio del puesto», haciéndose poco a poco en el pueblo la tranquilidad a partir de entonces. Menciona también el fiscal como notorio el intento de asalto «a la casa del vecino y propietario Don Antonio Mola, que habiéndose negado a entregar las armas a los revoltosos» vio cómo los revoltosos prendían fuego a la puerta de su casa, al garaje y al coche, teniendo «que defender su vida y la de los suyos haciendo fuego contra los asaltantes, quienes [...] hirieron de un disparo a la sobrina del Sr. Mola».

«Queda bien patentizado –arguye el fiscal–, que los principales esfuerzos de los revolucionarios se dirigieron a eliminar las fuerzas de la Guardia Civil: primero sitiando estratégicamente la casa cuartel y, después, oponiendo una tenacísima resistencia a la llegada de refuerzos que fueron seriamente hostilizados». Como prueba de ello, «baste observar el croquis del lugar de los hechos y la descripción» realizada en inspección ocular, pudiéndose observar «el gran número de impactos y destrozos causados por los proyectiles en las puertas, ventanas y paredes de la casa cuartel», algo que probaba «un ataque tenacísimo y por la distribución de los atacantes, una preparación del movimiento concienzudamente preconcebida y estudiada por los directores de aquél». El cuartel fue «rodeado de todas partes de atacantes perfectamente apostados y cubiertos en las casas bajas», la «ocupación del Castillo» dominando el pueblo para controlar la lle-

gada de refuerzos, «el aspillerado» de los tapiales y corrales que dan frente al cuartel y la distribución de los grupos armados que ocuparon las casas y puntos dominantes, todo «prueba hasta la evidencia que nada se improvisó sino, por el contrario, la estudiada, cuidadosa y premeditada preparación del movimiento revolucionario».

Los dictámenes de autopsia probaban «la barbarie de los revoltosos en su propósito de matar». Las heridas de balas, postas y perdigones «dan idea de la ferocidad con que fueron atacados. El fiscal aquí generaliza un testimonio para todo el movimiento. «La actitud y frases de alguno de los agresores pidiendo un vaso de vino porque ya los hemos tumbado, refiriéndose a los guardias, ponen bien de manifiesto lo que fue el movimiento revolucionario de Uncastillo, y lo que hubiera sido —en caso de triunfo— el programa a desarrollar, lo revelan los propósitos de cohabitar con las mujeres de los guardias después de muertos o entregados éstos». Uno de los defensores firmaría algún mes más tarde en una réplica indignada, que el informe fiscal «se acerca más a una proclama militar del siglo pasado que a una acusación normal de cualquier régimen penal del período presente», pues en él «se ensalzan al máximo todos los aspectos morales de las víctimas, se rebajan hasta la abyección los de los procesados, y en esta desproporción que presenta, no puede surgir sino la engañosa justificación de una grave sanción».³⁰⁷

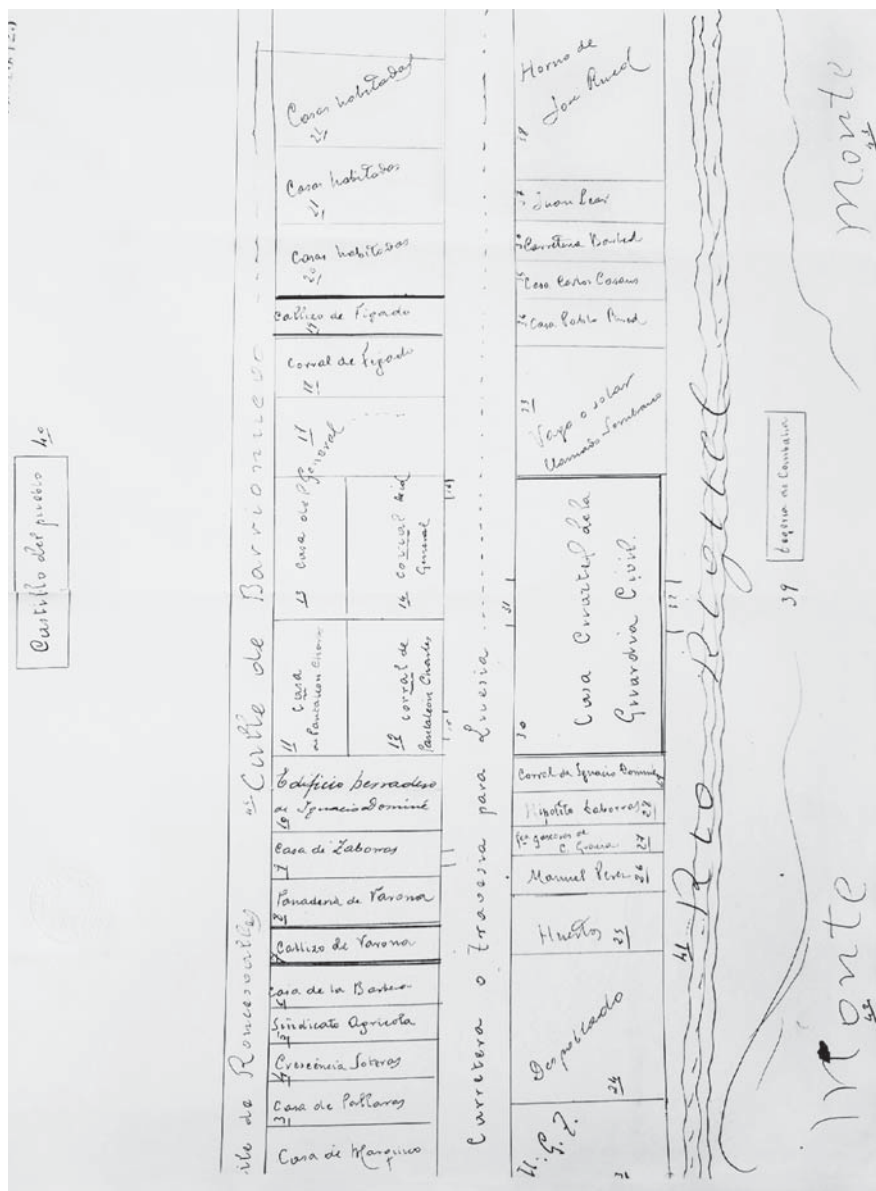
El teniente coronel Civera sostiene que los hechos expuestos constituyen un delito de rebelión según el artículo 237 del Código de Justicia Militar, pese a que pudiera existir alguna duda al respecto (que aprovecharán las defensas) debido a la posible no consideración de la Guardia Civil como fuerza del Ejército. Como es sabido, se trataba de un cuerpo militarizado que dependía al tiempo del Ministerio de Gobernación y de Defensa, por lo que este tipo de disquisiciones jurídicas venían siendo frecuentes. Aun reconociendo

³⁰⁷ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 2056.

que cabía la posibilidad de considerar los hechos circunscritos a Uncastillo como delito «contra la forma de gobierno» e «insulto a fuerza armada», el juez se inclinaba por la rebelión porque, según él, «el movimiento revolucionario en aquel pueblo se inició obedeciendo órdenes que llevaron unos forasteros, para que fuera secundado el que había estallado en toda España». Eso descartaba concebir lo ocurrido en Uncastillo «como un hecho aislado, sin conexión ni relación alguna con los que en aquellos momentos se desarrollaban en distintos puntos de la Península, sino íntimamente ligados, defendiendo la misma causa y persiguiendo idénticos fines». Lo ocurrido eran «brotes distintos de una raíz común», por lo que cabía imputar –y así lo hace el fiscal– el delito de rebelión y ataque al ejército, a toda manifestación del movimiento en el país. También a los hechos de Uncastillo, y eso implicaba para sus ejecutores principales la máxima pena.

El relato del fiscal Civera se firma un 10 de diciembre de 1934. Tan sólo habían transcurrido dos meses desde el primer resumen de diligencias efectuado por el juez instructor, alférez Rafael Casasús. Bien poco se distanciaba el primero del segundo en su línea argumental, y parece lógico que así fuera dado el volumen de documentación y declaraciones cruzadas que albergaba el caso. Abierta la vía de la conspiración por el primero, el segundo tan sólo tuvo que completar la tesis y añadir los detalles del levantamiento. No cabe duda de la intencionalidad disciplinaria que se escondía detrás de tanta celeridad. Para el caso de Arnedo, en el que varios vecinos murieron por los disparos de los guardias civiles en enero de 1932 durante el transcurso de una manifestación, el fiscal precisó de año y medio para completar sus conclusiones. Sin embargo, la circunstancia del caso y el ambiente político y judicial eran bien distintos. Si en Arnedo la muerte de vecinos inocentes a manos de los guardias creó una honda corriente de simpatía popular y de manifestaciones de duelo por parte de las autoridades republicanas, abriéndose una investigación para aclarar y fiscalizar la actuación de los guardias, en Uncastillo se daba el caso

**SEGUNDO CROQUIS ELABORADO POR LA GUARDIA CIVIL
DEL ENTORNO DEL CUARTEL DE UNCASTILLO EN 1934.**



contrario. Tensado el ambiente político hasta el extremo, nadie dudaba de la inocencia de los guardias, cuyos disparos habían respondido a la agresión de los revolucionarios. Desde luego era mucho más sencillo articular la acusación desde una culpabilidad «masiva» que tratando de afinar responsabilidades. Y a la hora de asignar estas últimas, la Guardia Civil iba a ser la que menos porción del amargo pastel recibiría.

Según la cartilla de la Guardia Civil el «honor» y buen nombre del cuerpo descansaba en una buena defensa y restablecimiento del orden público alterado, «no pudiendo permitir» insultos a la fuerza y mucho menos enfrentamientos directos, algo que sancionaba la propia Ley de orden público. Efectuada la descarga desde los corrales nadie podría poner en tela de juicio la acción de la fuerza. Antes al contrario, la falta de «energía» en el ejercicio de la autoridad podía constituir motivo de juicio o sanción. El recuerdo de Casas Viejas y la sangre vertida en el suelo del cuartel hicieron el resto. Hubo muchos heridos por arma de fuego de los guardias, aunque en el sumario tan sólo se reconoció a los más graves, a Juan Zarralanga, a Francisco Cortés —cuñado de Antonio Plano— y a la sobrina de Antonio Mola, Isabel Sierra. Tan sólo en este último caso se detalla de modo oficial la circunstancia de esa herida, que sirve para inculpar a los asaltantes de la casa Mola. No hay explicación alguna para los otros dos, cuando el propio médico de Uncastillo certifica que Zarralanga presentaba cuando lo atendió diversas heridas de arma de fuego, una en la cara y otra en una pierna,³⁰⁸ y Francisco Cortés dos feas heridas de arma de fuego en ambos muslos.³⁰⁹

Y respecto de los paisanos muertos el fiscal tan sólo argumenta respecto de «Palomina» que «las heridas fueron produ-

³⁰⁸ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 413.

³⁰⁹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934. El médico de Zaragoza certifica que le quedó «una deformidad» en el pie al haberse roto un nervio de la pierna, «que no le impedirá dedicarse a su profesión habitual de campesino», ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 1410.

cidas por armas de fuego cargadas con postas, evidenciándose con ello que los disparos no pudieron ser hechos por la Guardia Civil, dado el armamento y proyectil que usan estas fuerzas». Ahí terminaba la responsabilidad de los guardias o de Mola. Es cierto que para los primeros existía la posibilidad de interpretar los hechos como defensa legítima según el código militar, no así en el caso del segundo. Lo que fue concluido en el informe como un acto de «generosa y noble actitud», el de «tener que matar de un disparo a Alejandro Asín» al verse acorralado y sitiado en su casa, enciende setenta años más tarde a Jesús Pueyo, quien dice recordar haber visto con sus propios ojos a Antonio Mola disparando contra Palomina. «Yo lo vi, fui testigo», afirma contundente. Sin embargo la causa no supondrá ningún tipo de sanción para Mola, quien quiso rectificar públicamente al fiscal por medio de una carta. En ella decía que «aunque todos han de reconocer que yo procedí entonces en circunstancias de legítima defensa archijustificadísimas, tengo que rectificar aquel aserto [...] por cuanto consta en el sumario la prueba terminante de todo lo contrario», sugiriendo de ese modo que «Palomina» fue muerto por disparos de los propios vecinos amotinados.³¹⁰

La chispa que enciende la llama

Lo que en realidad estaba buscando el fiscal era a los instigadores o autores «intelectuales» del movimiento, los dirigentes e «ideólogos» que echaron a la gente a la calle, la red de conspiradores «traidores» a la República. La madeja debía de desenredarse a partir de los hechos concretos, tirando del hilo de los testimonios de los detenidos para poner cara a los famosos «forasteros» que nadie en el pueblo decía conocer, y que fueron objeto de especulaciones, investigaciones y

³¹⁰ Y ciertamente que según las pruebas balísticas y la autopsia podía defenderse. Él alega que tiró balas, y el forense firmó que «Palomina» había muerto por postas. Si bien existen preguntas sin responder, como que existían más armas en casa de Mola, y que también su hermano se hallaba en ella.

preguntas de interrogatorios. ¿Quién era el tal «Miranda» que venido de Zaragoza había dado las órdenes en Uncastillo? ¿A quién obedecía? ¿Cómo se había gestado el movimiento revolucionario en la región? ¿Posibilitaba la estructura orgánica del socialismo lanzar a la gente a la revolución a golpe de visitas de «forasteros»? Se detuvo a «un tal Miranda» con cargo directivo en la UGT, pero resultó no ser reconocido por los inculpados. Debía de tener un hermano, pese a que «ignoraba si había otro Miranda en la organización».³¹¹ La declaración de Plano no aportaba más que confusión, pues afirmaba conocer al «forastero» tan sólo de «haber jugado algunas veces con él al dominó» en la UGT de Zaragoza. El juez instructor le apretó «las tuercas», pues le parecía «incomprensible que un individuo al que se ve varias veces, con quien se alterna en una sociedad, con quien se juega al dominó y con quien ocurre una intervención [...] en los sucesos de Uncastillo, no se sepa quién es ni se tenga de él datos ni conocimiento más que los superficiales». Plano, presionado, dio los nombres del resto de los compañeros de mesa de dominó, Bernardo Aladrén (secretario de la Federación Provincial UGT), Eduardo Castillo (Presidente de la Federación Provincial UGT), Miguel Ladrón, Emeterio Gracia (empleados municipales) y Pedro Ros (cree que tiene una imprenta), y «que eso es todo lo que puede decir».³¹²

Un mes después, hacia el 10 de diciembre, tenían lugar una serie de interrogatorios efectuados a la cúpula del socialismo regional en la sumaria por «excitación a la rebelión» por los sucesos ocurridos en Zaragoza, incluyéndose la información en la causa que nos ocupa. Eduardo Castillo, Arsenio Jimeno y Vicente Sist se vieron en la tesitura de responder a las preguntas del fiscal, revelando las profundas heridas que por aquellas fechas laceraban al socialismo nacional. Castillo defendía su inocencia y su no participación en el movimiento, apuntando a que en él «han intervenido los elementos

³¹¹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1229.

³¹² ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1255.

que defendían esta postura de partido contraria a la del declarante, [...] las juventudes socialistas y las agrupaciones». Manifestaba su solidaridad con Bernardo Aladrén por su detención, y alegó que le parecía «lamentable» que se perseguía «a unos individuos sin representación política dentro del partido, y sin embargo a los que ostentaban varios cargos e incluso elementos más destacados están en la calle», refiriéndose principalmente al delegado del partido, que no era otro que Arsenio Jimeno y a los presidentes de las agrupaciones.

Vicente Sist era el presidente de la recién creada en 1933 Federación Aragonesa de Agrupaciones Socialistas (F.A.A.S.), y presidente de la Sociedad de Oficios Varios de la UGT. Defendió en su declaración que la Federación no había tratado nada que tuviera que ver con el movimiento, afirmando «desconocer en absoluto si han existido órdenes, quién las ha dado», que «la Federación de Agrupaciones Socialistas no ha intervenido para nada en los hechos acaecidos en el mes de Octubre, y no sabe cuál ha sido el procedimiento de su gestación [...] ni puede en conciencia hacer ninguna afirmación de desbordamiento de masas». Ante la presión del juez, tan sólo podía afirmar que las órdenes «o han sido espontáneas, o dadas por personas que desconoce». Arsenio Jimeno admitió ser el delegado del Comité Central del Partido Socialista, pero dijo «desconocer si tales órdenes [dirigidas a las agrupaciones] han existido», y que «no puede contestar sobre de quién dimanaban las órdenes por desconocer la organización del movimiento a que se alude». Inquirido por el juez, comenta «primero, que el número de socialistas en Aragón es muy insignificante; segundo, que el comité a que pertenece, representante de las agrupaciones socialistas de Aragón, no ha dado ni una sola orden [...], que estos elementos actuaron al margen de las directivas». Preguntado sobre la estructura del Partido Socialista en Aragón, responde que el «radio de acción» de la Agrupación de Zaragoza tan sólo abarca la capital, y que «la Federación regional es la encargada de cumplir y hacer cumplir los acuerdos de los congresos regionales», comunicando los acuerdos a las agrupaciones. Y a la

pregunta directa de quién entonces había intervenido en el movimiento, respondió con un lacónico «los trabajadores».

Por su parte Plano vuelve a extenderse sobre su versión inicial. Tudela, de Tauste, y Miranda le llamaron de mañana, fueron a avisar a Lasilla como presidente de la UGT, comunicando Miranda «que había estallado un movimiento revolucionario en toda España, y que solicitaba su cooperación», respondiendo «que si era un movimiento de cambio de situación en Uncastillo, por estar todo en manos de ellos ya nada podían hacer», saliendo juntos hacia el coche y llamando por el camino a Combalía y Pascual Beguería. Pero añade que «por el temor de salir de noche decidieron esperar hasta que fuera de día, durante cuyo tiempo el Miranda y el Combalía levantaron el pueblo». Cuando alcalde y teniente plantearon sus reticencias a «la orden» que portaba Miranda, éste contestó «que iba en nombre del Partido, y al manifestarles ellos que no pertenecían al Partido, que obedecerían órdenes nada más que de la UGT, contestó Miranda que la UGT no había dado la señal, sino que ésta dimanaba del Partido Socialista, con cuya orden había salido de Zaragoza sobre las siete para ir a darla por varios pueblos», asegurando que por esas horas Zaragoza ya estaba levantada, y que en la revuelta estarían implicados «el Partido Socialista, las Juventudes y las clases trabajadoras». ¿Una versión plausible de lo que para Plano pudo constituir un fatal engaño?³¹³

Muchos años después Arsenio Jimeno, pasados los apuros de los interrogatorios y disuelta la amenaza de la prisión, contaría una versión más verosímil sobre la gestación de la huelga revolucionaria en Aragón. Para dirigir el movimiento insurreccional en Zaragoza se formó un comité revolucionario integrado por el propio Jimeno, Vicente Sist, Francisco Félix (que actuó como enlace del comité) y los dirigentes de las Juventudes Socialistas José Antonio Baras y Froilán Miranda. Del ácido relato de Jimeno se deduce una innega-

³¹³ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 1626-1930.

ble improvisación e ingenuidad en la preparación del *putsch*, y una notable carencia de entusiasmo entre algunos miembros de las direcciones provinciales del PSOE y la UGT. Parece por lo tanto obvio que las excusas y alegaciones de desconocimiento de los interrogatorios fueron debidas a estrategias de despiste más que a otra cosa, si bien es más complicado calibrar dónde terminaba la fidelidad al partido y comenzaba la adhesión a la revolución. El caso de Antonio Plano y seguramente el de otros militantes pudo encontrarse en ese territorio de un compromiso ideológico que en aquel momento clave entraba en conflicto con determinaciones personales de rechazo de la violencia política.

Las defensas

Veintiuno fueron los abogados defensores del proceso, trece militares y ocho civiles. En todos sus informes se trasluce un trabajo prolijo, dada la extensión y complejidad del sumario, por demostrar la inocencia de sus defendidos, y en algunos casos un manejo solvente de la retórica. Ni es posible ni es el objeto de este trabajo reproducir las defensas de los veintidós letrados ni los detalles de los ciento diez casos, pero sí que se pueden resaltar algunos subrayados argumentales importantes y las defensas de los implicados más señalados. El acercamiento pone de relieve dudas más que razones acerca de la instrucción del sumario, dirigido bajo una actitud excesivamente rigurosa de la fiscalía, argumento que no es excepcional que aparezca en los alegatos de las defensas. Vayamos por partes.

Casi todas comienzan con una parte preliminar, en la que se presenta la defensa, a veces con retórico recurso de modestia, se continúa con un común discurso contra los trágicos sucesos y, en general, contra los hechos violentos, y se apela al tribunal para ejercer auténtica «justicia», esa por la cual, tras escuchar sus exposiciones, no debería dudar sobre la inocencia de sus defendidos. No era sino un modo habitual para intentar predisponer favorablemente al Consejo de

Guerra. El capitán Julián Miranda abogaba porque los sucesos de octubre fuesen castigados con «gravedad y ejemplaridad», pues los rebeldes deben «encontrar frente a ellos un gobierno fuerte y de autoridad [pues] hubieran podido estar a punto de terminar con el Estado, arruinando la economía nacional y sumiendo nuestra querida Patria en la más espantosa de las anarquías». Pero, aun condenando los sucesos «en tonos de gran energía», esa justicia, para ser ejemplar, debía ser aplicada sobre «los verdaderos culpables».³¹⁴ El abogado Joaquín Gil Marraco deja sentada su «absoluta protesta contra todo acto de fuerza o de violencia», y su convencimiento de que «la reforma de las leyes solamente puede ser dentro de las vías legales». Salirse de ellas provoca «trastornos y catástrofes, [...] algún tanto extendidos desgraciadamente en nuestra querida Patria», y cuyas consecuencias tan sólo pueden llevar a «cortar la vida de hermanos nuestros, a destruir estérilmente gran parte de la riqueza del país [...] y a dejar un semillero de odios africanos, determinantes de violentas reacciones que alejarán el respeto al derecho, [...] a la autoridad, al orden público [...] y la paz social». Y continuaba con un alejamiento expreso del movimiento, «la separación más absoluta por parte de esta defensa, de las teorías, de los procedimientos, del régimen social que por los revolucionarios se pretendía implantar en nuestra España con la trágica revolución de Octubre, feliz y victoriosamente reprimida por las fuerzas de nuestro Ejército y nuestros agentes de la Autoridad, que así salvaron nuestra gloriosa civilización». No fuera a ser que, «porque venga a ocupar el honroso puesto de defensor» pudiera pensarse «la más mínima relación con los revolucionarios españoles de octubre».³¹⁵

Quizás un alegato semejante pudiera no favorecer excesivamente el fin de la defensa, pero por lo que aquí interesa esa toma de postura deja entrever la enorme presión social y el prejuicio negativo que se cernía sobre los detenidos y

³¹⁴ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1998v.

³¹⁵ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 2027.

sobre quien pudiera expresar la mínima simpatía hacia ellos. Sin embargo, a las defensas les tocaba demostrar que no eran los monstruos criminales merecedores de ensañamiento que crónicas y habladurías describían, y para eso nada mejor que tratar de mover la sensibilidad del Consejo y su conmi-seración hacia los presos. Los «desgraciados que hoy se sientan en el banquillo de los acusados» —comenzaba el capitán Ramón de Mesa— dibujan en sus caras «un gesto de dolor», y «si no queremos que el incesante rodar de lágrimas que desde aquel día aciago se vienen derramando en unos hogares españoles se vea aumentado, es necesario que vosotros, al dictar vuestra sentencia, lo hagáis dejando que llegue hasta vuestros corazones no sólo el contenido de las normas y preceptos jurídicos, sino también el dardo de la sensibilidad». El capitán Rodríguez Córdoba esperaba que nuevas desgracias no se cernieran «sobre unos hogares donde hasta hace poco tiempo reinaba la alegría», presos de la «avalancha destructora que invade el mundo», con lo que «habrán tranquilizado a una familia honrada y trabajadora que lleva más de cinco meses de incertidumbre y ansiedad por la situación crítica, rayana en la miseria, a la que la fatalidad ha llevado al cabeza de familia».³¹⁶ Y el capitán Julián Miranda deseaba que se cumpliera la ley «sin distinguos ni privilegios, pero no se quiera arrastrar en la caída a pobres y desgraciados hombres, que si alguna culpa tienen es la de su falta de cultura y de experiencia suficiente para no dejarse arrastrar por propagandas subversivas y devastadoras».³¹⁷

Un recurso frecuente en las defensas fue la crítica al procedimiento sumarial y al riguroso criterio del juez instructor, cuestiones ambas que aparecían relacionadas en las quejas de los letrados, incluso también por la propia fiscalía: «si en alguno de los procesados hay dudas sobre la participación en los hechos, deja al criterio del Consejo su completo examen para que pueda adoptar un criterio menos rigorista que

³¹⁶ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1979.

³¹⁷ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1999.

el mantenido por dicha Autoridad».³¹⁸ El defensor Martí Laguardia interpretaba ese mismo criterio como el deseo, «excesivamente celoso, de sentar en el banquillo a casi todo un pueblo; [...] si actuaba una masa irresponsable, el juez instructor nos ha traído a casi toda la masa y aún puede decirse que se haya pasado con creces de la multitud delincuente que actuó en Uncastillo».³¹⁹ Ese criterio sostenido del fiscal admitía laxitud jurídica en las imputaciones de un proceso que necesitaba rapidez y ejemplaridad. Pero algunas defensas iban más allá. El capitán Gregorio del Campo señalaba: «El rígido juez instructor ha arrasado casi íntegramente las pruebas solicitadas, no sólo por los procesados sino por las defensas»³²⁰, denunciando además una sospechosa anomalía en lo que tocaba a dos de sus defendidos, Pablo y Santos Villa. Uno de ellos es inocente, porque el cargo del denunciante se aplica irregularmente a los dos. «La declaración está escrita a máquina, a máquina está impreso el nombre del citado Santos, ¿cómo, cuándo y por quién, ese nombre de Santos ha sido borrado a pluma y sobre él se ha puesto el de mi patrocinado Pablo?», una modificación «no permitida legalmente».³²¹ González Gamonal, defendiendo a algunos de los militantes de su mismo partido, se había quejado de la negativa del juez a admitir pruebas. El argumento ofrecido descansaba en que la casi totalidad de los vecinos de Uncastillo tomaron parte, «cuando menos como simpatizantes», en el movimiento revolucionario, y teniendo en cuenta que en los pueblos «los lazos de parentesco se hallan muy extendidos», creándose una solidaridad» que lleva a sobreponerse a posibles reticencias a la hora de añadirse al movimiento. Y como es lógico, todos los detenidos, «por humana y lógica conveniencia», han de conducir sus testimonios «para

³¹⁸ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 1982, 2003, 2008v., 2026.

³¹⁹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 2035v. Algunos defensores criticaron al instructor haber acusado «a la ligera», folio 2019.

³²⁰ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1985v.

³²¹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1991 y 1991v.

asegurar la coartada», por lo que no se contribuirá a esclarecer la verdad, sino a «desfigurar, falseándola, la ya recogida en el proceso».³²²

La molestia de los defensores venía de atrás. Pocos días antes de comenzar el juicio, el abogado que más acusados defendía, Martí Laguardia, se veía obligado a renunciar ante las dificultades, si bien a los pocos días volvía a tomar a su cargo a sus setenta defendidos. Una carta anónima había llegado al juez, y éste, al incluirla en el sumario, permite conocer el ánimo con el que se llegaba al juicio. Merece la pena reproducirla enteramente. (Respetamos la escritura original)

Zaragoza, 10 de febrero de 1935.

Muy señor mío: Estamos enterados de cuantos atropellos cometen Vd. y el Sr. fiscal, encargados de la causa de Uncastillo, que niegan toda clase de pruebas con el solo fin de que nadie se pueda defender, mientras algunos de los que buscaron defensores militares se les admiten; cosa que si la ley deniega tales pruebas para los defensores civiles, también para los militares, sacamos en consecuencia que de acuerdo Vd. y el fiscal tratan de castigar el mayor número posible y desvirtuar la obra del Sr. Laguardia. Por todo lo ante expuesto ponemos en conocimiento de Vds. que los de la cárcel están indefensos, pero que aún quedamos en la calle buen número de compañeros que sabemos hacer justicia si Vds. se extralimitan en la más mínima, como obreros que somos y hermanos de clase; por lo que le invitamos a rectificar en sus errores, de lo contrario en la primera ocasión ni con una espuerta podrán replegar sus restos y menos los del fiscal, y quizás a poder ser con toda su familia, como be la dirección vien la sabemos, y aunque vayan a vivir a pequín lo mismo será perseguido, y sin duda de alcanzar nuestros propósitos, así como los demás jueces militares de España que instruyen sumarios por el movimiento Obrero y por lo tanto muy justo.

³²² ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1753. Contra este auto que denegaba la admisión de nuevas pruebas y testimonios protestan formalmente los abogados Martí Laguardia y Lázaro Almunia (folio 1777 y ss). Además se hacía constar la protesta por la negativa del juez a realizar careos «frente a frente», algo incomprensible para Laguardia cuando en muchos casos tan sólo se trata de un acusador el que hay que sentar frente al acusado que solicita el careo.

Tenga muy en cuenta cuantas indicaciones le hacemos a tiempo para su retificación. Si tenemos tiempo le indicaremos donde a de caer, y por si no tenga preparada la carroza fúnebre.

El Comité de esta Plaza

El camino del verdugo de Barcelona te espera.³²³

La arbitrariedad denunciada respecto de las pruebas y testimonios admitidos extendía una penosa sospecha no sólo por los testimonios rechazados, sino también por los admitidos. Algunos parecían más ajustes de cuentas que otra cosa. Gregorio del Campo defendía a ocho vecinos de la CNT. La clave argumental de su apología descansaba en la distancia que esa organización había tomado respecto del movimiento revolucionario socialista. Pero debía demostrar en cada caso la inconsistencia de las imputaciones. «El acusador D. Antonio Mola, que no dice, porque no puede decirlo, que él vio a mi patrocinado (él que a tantos ha acusado directamente)», dice que lo hace «por noticias que adquirió después», sin indicar la fuente de esas informaciones, lo cual convierte su acusación –a juicio del defensor–, en algo cercano a «una calumnia». Él, continúa, «no puede alegar este desconocimiento como dice porque es uno de los señores del pueblo y hay que suponerle, por lo tanto, un sentido más rígido de sus deberes que al pobre lugareño analfabeto». Y con estupor señala que «no es lo extraño que este señor se limite a hacer de esta manera anónima su delación», sino que lo más extraño todavía es «que el Sr. Juez instructor [...] no haya tratado de concretar esta delación y solamente se ha limitado a aceptarla».³²⁴ Igual que aceptó denuncias «en frío», pasado más de un mes de los hechos, como denunció González Gamonal: «¿Por qué [el declarante] ha esperado un mes? ¿Qué ha reaccionado, qué ha fermentado dentro de él en ese tiempo?»³²⁵

³²³ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1766.

³²⁴ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1888.

³²⁵ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 2025.

No son escasos los lamentos de las defensas por las enemistades y rencillas que utilizaron la puerta del cuartel para zanjar pleitos y asuntos pendientes. Por continuar con González Gamonal, apunta éste que el denunciante de marras «estaba enemistado con la familia» de sus defendidos porque sustituyó al padre de éstos «en el cargo de operador de la Casa Mola hace dos años próximamente». Este hecho «fue causa de que desapareciese en la familia de mis representados la garantía económica de un jornal permanente», dando lugar a «discusiones violentas y comentarios desagradables que motivaron el ambiente inculto áspero de los interesados, una ruptura de toda clase de relaciones, una enemiga pronta a la venganza».³²⁶ El capitán García Belenguer señala que las denuncias hacia su defendido «son por haber tenido una reyerta con él anteriormente, [...] por haber sido destituido un yerno suyo como encargado de las obras del Ayuntamiento y colocado» en su lugar el acusado. Tras dejar al descubierto la falsedad de las acusaciones, reconoce no sin indignación «que la venganza artera de que ha sido objeto mi defendido no puedo pasarla», calificando el hecho de «canallesco y ruin, no admisible entre personas de buen proceder», por «llevar el sentimiento despreciable de la venganza al extremo de acusar a un inocente de grave responsabilidad».³²⁷ Sobre el acusador de Benito Beguería se podía leer que «existe entre ambos una gran enemistad a causa de que [el guarda] mató a Beguería un perro de caza [...] Ha aprovechado éste sin duda una ocasión en que cómodamente podía acusar para intentar hundir a mi patrocinado».³²⁸ Se repitieron por lo tanto los discursos en torno a las acusaciones «hijas del rencor» o «de la venganza» con un elevado tono de certeza y desvelando detalles a veces comprometedores sobre rencillas particulares.

Como también se repitieron algunos argumentos exculpatorios. Uno de ellos consistió en la negación de la mayor. No

³²⁶ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 2023v.

³²⁷ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1969v.

³²⁸ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1975v.

se podía acusar de haber participado en una «rebelión militar» porque no había habido tal «rebelión». La vía partía del propio Código militar, cuando en su artículo 237 definía a aquella como el alzamiento armado contra el gobierno o su autoridad armada siempre que «formen partida militarmente organizada y compuesta de diez o más individuos». El capitán Francisco Lacasa, que es quien primero utilizó el argumento, recordaba a renglón seguido que según la Ley «una partida está organizada militarmente cuando una vez alistados son armados y equipados sus componentes, tienen por norma la obediencia y subordinación al mando [...] y acatan la condición de estar sujetos a rigurosa disciplina». Pregunta retórica: «¿Está seguro el Sr. Fiscal de que en el pueblo de Uncastillo existieron grupos o partidas organizadas militarmente?», para contestar que allí no había «nada más que núcleos de hombres de inteligencias pobres, toscas, calenturientas, exaltadas por predicaciones malévolas o equívocas, pero que iban detrás de un ideal».³²⁹

Y eso mismo, el ideal que descansaba detrás de la acción revolucionaria, constituye el núcleo de las más interesantes defensas, las que trataban de desligar la acción de Uncastillo de lo sucedido en el resto de España. «No hay la relación que se pretende», pese a que se argumenta en contrario que fue al entrar «cierta facción» en el Gobierno lo que provocó el movimiento. Concede que en el día de autos hubo algo, pero no complot político ni revolución, sino «una acción colectiva, civil, contra una organización política». En ese supuesto, «el objeto que se prometían esos vecinos, en su casi totalidad, del pueblo de Uncastillo, no era personal [...], la idea que los guiaba, el sentimiento que los impulsaba» no era otro que mejorar «la organización político-social». No es el instinto criminal lo que mueve estas acciones, sino «la intención de procurar una Sociedad más perfecta ideal en que las rebeldías no tienen posibilidad, porque la Sociedad que se acerca a la perfección es aquella en que las rebeldías no tie-

³²⁹ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folios 1954 y ss.

ne razón de ser por el mejoramiento individual, llevado por el principio igualitario». Haciendo historia, «esa misma idea colectiva es la que impulsó la revolución, que luego de la tragedia de Jaca, culminó en Abril de 1931». «Las revoluciones no se han considerado nunca como delito, por ser la expresión histórica de la evolución», pues «siempre hay derecho al mantenimiento del ideal político sentido», y siendo eso así, ese colectivo no comete delito «porque las muchedumbres no delinquen jamás» (los individuos pierden la personalidad, «para adquirir la personalidad colectiva de la masa»).

³³⁰

Pero en este sentido, la introducción del alegato de Martí Laguardia aún va más allá. Plantea profundizar en los hechos y reconocer que al hacerlo se extiende al resto de la sociedad la responsabilidad de esos «desahogos de tiempos primitivos». Entonces «la Sociedad, el Estado, la Nación, la Patria [...] acude presurosa a imponer penas, sanciones, e incluso eliminar del mundo de los vivos a los presuntos e inmediatos culpables». Pero eso no es sino una herida cerrada en falso, pese a que «la Nación, el Estado... queda satisfecho como quien ha cumplido con un deber», prefiriendo no saber que «las pasiones, los odios y los rencores que han sido motores de la catástrofe» quedan latentes y aún aumentan, «buscando el nivel suficiente para rebasar la presa de contención creada por el poder», hasta que finalmente «se rebasa, la arrolla y vuelve a producirse la catástrofe». Y entonces Martí plantea el núcleo de su discurso de defensa, cuestionando el castigo si es fruto de la insolidaridad social, del egoísmo que ha hecho «prender los odios, los rencores, consecuencia de las diferencias de forma de vida de situaciones económicas, creando la llamada lucha de clases». Una lucha de clases «que nosotros, los de arriba, queremos eliminar diciéndoles a los de abajo: Eh, cesar en la lucha que os predicán, dejadnos tranquilos disfrutando la mejor situación que en la vida tenemos», cuando se les debería decir «no luchéis, no es preciso, a vosotros os falta, a nosotros nos sobra y vivid mejor sin odios y sin

³³⁰ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 2018.

luchas», mensaje de igualdad que, señala la hipocresía, falta en una nación que se dice cristiana. Lejos de eso, la Sociedad se ensaña «con mayores castigos, que no son los mejores remedios». Ese y no otro constituyó el motivo de fondo de la revuelta, el «ambiente nacional enrarecido» por el cual se desataron en un momento los odios en Uncastillo.³³¹ Unos odios que se dirigieron contra dos clases de personas, «uno los llamados señores del pueblo, otros la fuerza pública; el primero plenamente justificado, el segundo solamente desde el único punto de vista desde el que ellos veían los hechos: por su incultura».

«Justificación del odio a los señores: Uncastillo, pueblo de profunda historia feudal, no ha dejado de ser feudo para estos señores. Poco o nada repartida la tierra, concentrada en muy pocas manos, es entregada a los verdaderos campesinos, que la trabajan en condiciones de no poder siquiera cambiar los beneficios, el resto, después de segregar la parte del propietario por el importe del trabajo puesto en la tierra. Conclusión, una vida permanente de miserias y deudas. De cómo se entendía el concepto feudal de la propiedad tuve ocasión de comprobarlo personalmente, en ciertas tramitaciones llevadas a cabo en el Jurado Mixto de la Propiedad Rústica de Sos del Rey Católico, frente a determinado noble y señor que es personaje importante de este drama. Mucha caballerosidad si se quiere, nobleza de pergaminos y hasta educación, pero siempre que se comporten como siervos, trabajen sin descanso sus tierras y sus fortunas aumenten a la par que el hambre y la miseria en los otros. Consecuencia, un odio a muerte primer motor de estos hechos.

Odio a la fuerza pública: [...] Aquellos señores aprovecharon de sus puestos de mando en la administración municipal para extender sus dominios a costa del patrimonio municipal de los bienes comunales, tanto es así que una sola ley querían las Cinco Villas, la del rescate de los bienes

³³¹ Pero eso fue «un hecho aislado», una respuesta «contra personas determinadas», y no parte de una revolución nacional. «Pretender que este centenar de hombres estaba de acuerdo con los del resto de la Nación para un fin concreto [...] es puramente imaginario, y el que éstos, desde el rincón de Uncastillo pretendieran cambiar un sistema de Gobierno por otro es iluso».

comunales. Pues bien, a la par que centenares de hectáreas pasaban al común y aún a la propiedad de aquéllos, estos parias de la sociedad, cuando con su junta de burras se lanzaban a roturar unos palmos de terreno donde obtener el cereal que produjera el pan para sus hijos hambrientos, eran vueltos al pueblo conducidos codo con codo entre una pareja de la Guardia Civil. Odio infundado, porque el culpable era el Señor monterilla, el Alcalde, que daba la orden y no el agente de la autoridad, al fin otro sometido que no hacía más que cumplir con su deber. Y el odio injustificado por su pobre visión del culpable crecía, y al fin era odio y muy justificado para ellos que no veían más. Otro ejemplo era la veda, y el Señor cazaba tranquilamente, pero si el desgraciado intentaba obtener una pieza que echar a su pobre olla volvía también atado, perdía su escopeta y se sentaba en el banquillo a responder de un delito de infracción de Ley de caza. [...] El hecho encendía el odio, así como en otras manifestaciones de la vida. Conclusión, que cuando éstos querían imitar un poco de lo que hacían los otros, se encontraban frente, no a los otros que mandaban, sino a la Guardia Civil que cumplía su deber. Y el odio tomaba proporciones gigantescas. No reconocer todo esto es cerrar los ojos a la realidad e incurrir nosotros en los defectos de esa sociedad abstracta y convertida en Estado Gendarme como única finalidad.»

Todo ese cúmulo de agravios constituye la pólvora. «Las propagandas, los avisos y las órdenes son la chispa», y no hay solución posible al estallido violento salvo atajar los motivos de fondo con «una vida más justa». Hasta ese momento de reequilibrio social, cuando se repitan hechos similares, «tratemos también con conmiseración y benevolencia a los causantes, en los cuales la responsabilidad a todos nos alcanza», porque «en ese estado de excitación colectiva [...] las masas se encuentran momentáneamente poseídas de la peor locura», y no tienen responsabilidad penal alguna.

Antonio Plano y la revuelta

Todo parecía indicar, tanto en las declaraciones como en el informe fiscal, que Plano había jugado el papel principal

en la ideación y materialización de la revuelta. Sin embargo, ya en los testimonios de algunos encausados encontramos expresiones que hacen dudar de la opinión del fiscal y de todas las autoridades que contemplan el proceso. Él había recibido a los agitadores con la orden de rebelión, él había repartido municiones, él había planteado el ultimátum a la Guardia Civil, él había huido cobardemente tras la descarga que mató a los guardias. No había duda acerca de sus intenciones. ¿O sí? ¿Cómo un respetado y democrático alcalde y diputado provincial había podido elegir de la noche a la mañana empuñar las armas contra la República? O el reputado Antonio Plano había sufrido una transmutación inverosímil, o el informe fiscal y la sentencia hacían aguas por algún sitio. De entre la enorme pila de declaraciones hallamos algunas que quisieron dejar constancia o al menos apuntar informaciones en sentido contrario. Pascual Beguería se levantó al oír el «revolicio» en las calles, fue a la UGT, donde había «un grupo de unas cien personas sin armas», entre las cuales dijo no reconocer a nadie salvo a Antonio Plano, «que estaba diciendo que no había que hacer más que una manifestación pacífica y que había que avisar a la Guardia Civil para que estuviera a la expectativa». Con ese ánimo, continúa, se presentó voluntario junto con Máximo Malón para ir a avisar a los guardias.³³² Ya se ha citado el testimonio de «Zaborras», quien afirmó que el alcalde «tenía previsto que no se tirara al cuartel».³³³ Y Crescencio Frago cuenta que cuando estaban los grupos requisando las armas en las casas se dirigió a la UGT, y que allí se encontró con Plano y Lasilla, quienes comentaban que «por unos revoltosos está remontando el pueblo».³³⁴

Pío Pueyo Prat, concejal e histórico del socialismo local, avala esa tesis con su versión de los hechos. Al salir de su casa a las siete «con un borriquillo» se encontró con Ignacio

³³² ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 500.

³³³ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 79.

³³⁴ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 529.

Maisterra poniéndole en antecedentes de que «había llegado un forastero y estaba el pueblo algo revuelto». En el Ayuntamiento no encontró a nadie, acudiendo luego a la UGT, sin hacer caso a un grupo de gente con palos en la calle. En el local escuchó por radio «las palabras que pronunció el Ministro de Gobernación», llegó Manuel Lasilla poniéndole en antecedentes de lo ocurrido, lamentándolo Pueyo «pues el dicente nunca estaba conforme con la violencia y así lo había expresado en la UGT y había tenido alguna agarrada con los elementos revoltosos». Tras escuchar al Ministro comprendió «que había fracasado todo», marchando resignado a su casa.³³⁵

Ese comportamiento contrario a la violencia concordaba con la descripción de «ecuanimidad, tolerancia y respeto a las demás tendencias y doctrinas» que realizaba Emiliano Bravo, el secretario del Ayuntamiento, así como de su «bondad, honradez, seriedad, lealtad e hidalguía», un hombre «cercano a la perfección». Arsenio Jimeno completaba su descripción años más tarde al recordarlo como un hombre «alto, bien parecido, de carácter bondadoso y conciliador, su perenne sonrisa era la rúbrica de la pureza de su alma». Era un hombre que «irradiaba simpatía, estaba hecho para gobernar su municipio, teniendo siempre bien equilibrada la balanza de la Justicia». Pero esto último no garantizó el consenso a favor de Plano. Cándido Gracia, diputado radical de Uncastillo, trazaba esta semblanza bien distinta del alcalde, en una circunstancia tan especialmente intensa como la de la cárcel. En su carta al juez tratando de demostrar su inocencia, comenta que «conocía yo demasiado a Plano para salir de casa, si llego a salir ya no lo contaría, otras veces ya lo ha intentado, y si no véase lo que hizo con la Guardia Civil, que les dice que ba a mandar retirar la gente, y ba a dar creo órdenes que repugnan decirlas y a repartir municiones» (se ha respetado la escritura original). Para él no cabía duda alguna sobre la iniquidad de Plano, «sabía que si llegaba la noche y no venían fuerzas no sería yo el último que intentaría vengarse, sabía

³³⁵ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 595.

que era traidor y no me perdonaría los fracasos y ridículos que le había hecho sufrir y el deshacerle la organización y quitarle la mejor gente». ¿Era realmente Plano capaz de todo eso?³³⁶

Pese a que la encendida y extensa defensa que de Antonio Plano realizó Martí Laguardia no sirvió finalmente de mucho, fue sólida y esperanzadora para el alcalde. «No sé qué negro designio ha motivado un ambiente creado por ciertos elementos alrededor de la figura de Plano», pues «aquellos mismos que él respetó y lo respetaban cuando lo era todo, ahora como un árbol caído se han tirado sobre él a desgajar su bien ganada fama en todos los órdenes de la vida y sobre todo en el político». Su honra, continúa, no es discutida, ganada al superar «los obstáculos de la vida» desde «su modesta cuna» y el paso por «el Hospicio que le crió» hasta llegar a diputado provincial. «Un solo defecto le era señalado a Plano», precisamente por algunos amigos, «la excesiva consideración con que trataba a los que se llamaban sus enemigos», atribución que no parece gratuita. Emiliano Bravo, secretario del Ayuntamiento de Uncastillo, afirma en sus cuartillas: «Hubo amigos suyos que sin afearle su proceder (la virtud no puede ser afeada), llegaron a echarle en cara tener más benevolencia que con ellos, con aquellos sus enemigos». Y Arsenio Jimeno dice que «su sentido de la justicia le creó aura de amor popular y suscitó el odio africano, irracional, mal contenido de los caciques». Aquellos amigos «se lo han agradecido laborando en contra suya cuando unas rejas le impedían defenderse». Todos, incluido el fiscal, «trataban de buscar la cabeza del turco, y la encontraron en la que más sobresalía». Al final «sus enemigos [...] habían conseguido sus propósitos [...], habían conseguido eliminar a Plano».

Laguardia sitúa al Consejo en el primer momento de la acción, cuando a las tres de la mañana llegan a Uncastillo en el automóvil Miranda y Tudela, tildando de «gratuita» la afir-

³³⁶ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 1545.

mación del fiscal según la cual Antonio Plano se puso a la dirección del movimiento en el mismo momento de la llegada del coche. Lo cierto es que nadie, ni Tudela, ni Miranda ni Plano había afirmado tal cosa. Era Miranda quien «actuaba por cuenta propia, levantando la polvareda y el reguero de sangre que todos lamentamos». La verdad sumarial que Plano hizo constar fue su discusión con los recién llegados de que en Uncastillo no tenía sentido la rebelión por cuanto todos los puestos de mando eran socialistas, «algo que revela una actitud contraria al movimiento». Sabe Plano cuál será su responsabilidad si se extiende «la locura», por lo que «trata de evitar que el movimiento se produzca en lo que él puede». Esa expresión, «en lo que él puede», es una de las claves de la cabal defensa, porque «si la Guardia Civil era impotente, ¿qué iba a hacer Antonio Plano frente a varios centenares de personas en situación de rebeldía?». Toda «una masa de gente» se concentra en el Puente de Santa María, ante la que «nada puede hacer un solo hombre». En esta situación en que Plano trataba de actuar de «freno de lo que allí se preparaba, surgen amenazas, y una pistola puesta en el pecho por cierto personaje importante en este sumario, para obligarle ya que no a secundar el movimiento, a entregar los cartuchos que tenía en su casa». La nobleza de Plano hace que en su declaración no acuse al autor de las amenazas, «extremo que no es una fábula, sino algo auténtico que sabe todo Uncastillo con todo detalle».

En ningún momento del sumario se menciona el nombre de ese supuesto pistolero que amenazó a Plano. Sea como fuere, el confuso reparto de municiones, el que se echara la escopeta al hombro cunado marchó al Ayuntamiento, y la precipitada huida del pueblo, vierten algunas sombras sobre el papel de Plano en los sucesos, y abren interrogantes de difícil resolución. Conocer si pudo implicarse en la asonada para inmediatamente arrepentirse; si la hora de la revolución pudo tentar al político cansado de frustrados intentos de cambio; o si la salida del pueblo respondió a la desesperación de quien se sabe culpable o a un exceso de precau-

ción... no lo pueden determinar hoy por hoy las fuentes históricas disponibles. Esta suerte de condicional histórico podría descansar sobre un contexto político y social muy concreto, capaz de seducir a muchos con propuestas violentas, y en el que Plano no dejaría de ser sino un hombre de su tiempo y figura visible de una sociedad cada vez más polarizada. Es imposible obviar que aquel hombre de carne y hueso había mascado amargos bocados y se había tenido que enfundar la indignación con episodios como el de la muerte de su compañero en la Diputación José Artigas, habiéndose expresado entonces «contra los odiados caciques que se atreven hasta con las autoridades republicanas». Y que además, hasta ese momento se había manifestado como un hombre fiel a las directrices de una UGT que ahora se tornaba revolucionaria. Sin embargo, no es menos cierto que el compromiso de Plano con las instituciones de la democracia republicana no había ofrecido ninguna duda hasta ese momento. Su carácter dialogante, avalado por fuentes diversas, permite imaginar sin esfuerzo al hombre manteniendo su perfil ante la avalancha de acontecimientos que se precipitan y que lo empujan, y tratando de controlar a vecinos que, sin ataduras de responsabilidad política alguna y con armas en la mano, deciden erigirse en parteros de una nueva Historia que exige, así lo pensaban ellos, echar tabla rasa de asuntos pendientes. En este mar de dudas, en esta ida y vuelta sobre la sombra de Plano, aparecen las fuentes. Y las fuentes, eso que pide la Historia para ser ella misma, hablan de dudas más que razonables sobre la pretendida maquinación del alcalde en la gestación del movimiento y su responsabilidad en el tiroteo sobre los guardias civiles de Uncastillo. Y sobre todo abonan la idea de su intento de pacificar los ánimos y también, quizás, de su error o impotencia en el modo y momento de hacerlo. Tan sólo eso, o todo eso.

La entrevista con el sargento de la Guardia Civil en el cuartel también es presentada por la defensa con otra cara bien diferente. Aquélla —dice Laguardia— «se desarrolla dentro de la máxima cordialidad, tanto es así que a su terminación es

acompañado por el sargento mismo hasta la puerta», donde «se despiden cortésmente». Parece lógico pensar que si el sargento se hubiera encontrado frente a un jefe de rebelión, sólo y desarmado en el interior de su cuartel, habría intentado reducirlo y apresarlo, cosa que no hizo. Y alude al careo que hubo entre ambos. En él el sargento dejó dicho que Antonio Plano «no quería las armas de dotación de la Guardia Civil, sino otras que tuvieran en depósito», especificando que «lo que quería era una buena arma para su defensa personal, incluso para quedarse en la casa cuartel de la Guardia Civil para coadyuvar a sofocar el movimiento, ya que sabía que la Guardia Civil no tenía otras armas que las de su dotación personal». El sargento corroboró además el compromiso de Plano de «disuadir a los revoltosos» en ese momento, «cuando nada se sabía ni se podía presumir del triunfo o el fracaso» del movimiento, lo cual habla por sí solo de sus intenciones. Se llevó «arteramente» al grupo, diciéndoles «que la Guardia Civil había dado su palabra de honor de no meterse con el pueblo, recomendando a los del pueblo que no se metieran con la Guardia Civil».

Ese fue el sentido principal de la participación de Plano en los sucesos, el de evitar el enfrentamiento armado. Si los testimonios tienden a una interpretación equívoca del papel de Plano, «hay que tener en cuenta que a la par que alcalde son sus propios amigos juntamente con otros elementos quienes han organizado la revuelta, viéndose doblemente coaccionado por toda esa serie de circunstancias que le imposibilitan para una acción ofensiva contra el movimiento», una acción que sería «inútil, ya que la misma fuerza pública no se atrevía a ampararle en sus gestiones fuera del cuartel, y a él solo le encargan la tarea de disuadir a varios centenares de hombres, labor que estaba fuera de sus posibilidades y recursos». En las acusaciones y los cargos «no es precisamente la verdad lo que brilla» debido a que algunos acusados, al saber que Antonio Plano había huido, creyeron que al incriminarlo «diciendo que sus actos obedecían a órdenes del alcalde» podían exculparse. «¿Cómo iba Plano a intentar

nada contra la Guardia Civil, con cuyos elementos le unía una buena amistad, especialmente con el sargento del puesto, a quien muy pocos días antes en una reunión de las fuerzas vivas del pueblo con el delegado del gobernador civil de la Provincia, Don José María Salvador Ascaso, precisamente por Don Antonio Plano había sido requerida la presencia del sargento del puesto para que interviniera en aquella reunión en que se trataba de mitigar la miseria de los jornaleros del pueblo.» El hecho, concluye Laguardia, «demuestra el acatamiento, consideración y respeto de Plano que como alcalde tenía para con dicho sargento, con quien iba de común acuerdo en la solución de todos los problemas que afectaban al orden público».³³⁷

En el hombre que había trabajado tanto por Uncastillo se hubieron de encontrar emociones intensas, serenadas tan sólo por la apremiante necesidad de salir cuanto antes del pueblo. Si su salida tenía como ánimo huir a Francia o tan sólo desmarcarse durante unos días de la violencia revolucionaria, no lo sabemos. Es probable que si hubiera querido salir del país no se hubiera demorado como lo hizo en casa de su primo y luego en Pintano. Quizás, en un momento de esperanza, al ver que el movimiento había fracasado y que no se había extendido a otros pueblos, pudo pensar en una pena no muy severa. Quizás, en ese mismo momento, se imaginó absuelto y felizmente junto con su familia, tras demostrarse su inocencia. Pero Plano tenía bastante sentido común, y probablemente intuyó con un elevado grado de certeza que sus intenciones de pacificación se perderían en el mar de acusaciones, y que su apresamiento traería consecuencias irreversibles. La angustia de ver el

³³⁷ Así es en efecto, parece que las relaciones con la Guardia Civil habían mejorado desde la salida del puesto del sargento Teodoro García Gil, quien había ordenado en mayo de 1933 una detención que soliviantó al vecindario, y que motivó una carta de protesta firmada por muchos hombres y mujeres del pueblo por su comportamiento favorable a los intereses e ideario de la derecha. Precisamente el sargento aparece en el proceso como destinado en el puesto de Villafeliche, y es quien escribe una carta de descargo hacia dos individuos que le piden referencias, Juan Pablo Casalé y Tomás Tris.

desastre cernirse sobre el pueblo en las horas en las que los grupos sitiaban el cuartel, el fraguarse la idea de salir tras el tiroteo de los guardias sobre su cuñado Francisco, la emocionada e incierta despedida de Benita y los chicos, formaron parte de la tragedia personal de Antonio Plano, empujado de nuevo a un duro trance vital. Si amarga fue para Plano la aurora republicana con su detención tras los sucesos de Jaca, más amargas hubieron de ser aquellas crudas horas de separación familiar y de persecución gubernamental. La posterior huida, la detención, la experiencia del proceso, las mentiras y las delaciones, la sentencia final, dejaban lejos el ideal que había unido a tantos en pos de la República y para luchar por una libertad concretada en la instauración de derechos individuales y colectivos más amplios y capaces de beneficiar a grupos que hasta entonces no habían podido disfrutar. Pese al carácter afable de Plano y a que ni a pesar de lo vivido dejó espacio para el rencor, una indudable cicatriz de desengaño hubo de quedar en su ánimo.

La sentencia

La sentencia final del proceso se produjo al día siguiente de la última vista, el 29 de marzo de 1935. El Consejo estaba presidido por el general de infantería Carlos Guerra, e integrado como vocales por el general de ingenieros Alfonso Moya, el general de artillería Eduardo Martín González, el coronel de infantería Miguel Campins, el coronel del centro de reserva José Serrano y Manuel Gómez, coronel de caballería. Los primeros «resultandos» no diferían en nada de la versión del fiscal, acaso afirmaban con mayor rotundidad que Antonio Plano «tomó la dirección del movimiento», y que fue «secundado» por los portadores de los forasteros, de Miranda y Tudela. «Comenzó a dar órdenes que fueron obedecidas por los rebeldes cortándose las comunicaciones telegráficas, interceptándose la carretera, agrupándose para la mejor defensa del pueblo, recogiendo a los particulares las armas de fuego, repartándose municiones para dichas armas y

aprovisionándose de gasolina para provocar incendios». Se describe el asedio del cuartel y la «brava» resistencia de Mola, y se determina que «no ha sido posible fijar en autos quiénes, de entre los revoltosos, hayan sido los autores directos y materiales de las bajas sufridas por la Benemérita». Pero sí que el delito por el que se imputa a los procesados es el de «rebelión militar», por tratarse «de un alzamiento en armas contra la Constitución del Estado en el que tomaron parte los vecinos de Uncastillo que combatieron, formando grupos, en cierto orden estratégico y bajo un mando, atacando y causando bajas» a la Guardia Civil.

Pero quizás lo más interesante es la calificación de los hechos en relación a los sucesos del resto de España. Para poder extender un castigo ejemplarizante era necesario relacionar lo ocurrido con un movimiento revolucionario contra el gobierno, pues el cambio de gobierno y la entrada de la CEDA en él se había esgrimido como detonante del golpe socialista. En cada rebelión, entendida ésta según los parámetros militares, debe de haber un jefe «que dé la orden de comenzar el movimiento y dirija las diversas fases de su desarrollo». Esto llevaría a buscar al jefe de la revolución que organizó y lanzó el movimiento en todo el país, dado que no sólo en Uncastillo hubo revuelta. Pero Plano no pudo ser el director del movimiento general, y eso le excluía de recibir la pena correspondiente. Sin embargo, se hizo una interpretación *ad hoc* del código para entender que «en una rebelión que alcance gran extensión territorial cabe apreciar diversos jefes, esto será en el caso de que por su gran envergadura estalle a la vez en varios puntos y separados e independientes geográficamente entre sí, necesitándose por tanto un jefe en cada uno de los lugares en que la rebelión se manifiesta». En Uncastillo «sólo hubo un jefe, Antonio Plano Aznárez, aunque por las necesidades de la contienda existieran diversos grupos de vecinos que obraran en distintos lugares del pueblo obedeciendo órdenes que transmitían otros secundando al referido Plano Aznárez». Ellos eran «simples ejecutores» y «auxiliares», que además contaban con una

circunstancia atenuante, el «arrebato y obcecación propia de la clase de delitos colectivos [...], en los que la voluntad de cada sujeto activo queda disminuida por el apasionamiento y emulación con que, envueltos todos en un tumulto, obran».

Pero era obvio que muchas acusaciones del fiscal, de entre las ciento diez, no se sostenían más que por un único testimonio, algo que habían venido repitiendo las defensas hasta cansarse. Ocurre en numerosas ocasiones que «a algunos procesados sólo les acusa la declaración de un único testigo, que [...] no tiene en su apoyo otros indicios o antecedentes en contra del procesado, [y no cuenta] el testigo con dotes excepcionales intelectuales o morales que le revistan de especial consideración». Además, hay testigos «que hablan de los sucesos únicamente por referencia y haciendo deducciones o suposiciones acerca de la culpabilidad de los procesados», y teniendo en cuenta que «en los pueblos el trato continuo de sus convecinos suele crear afectos y enemistades que hacen que los móviles de afecto o venganza puedan influir en los testigos que depongan, y más aún en los de carácter político, con más facilidad que en las ciudades». Se reconocía que muchos de los actos revelados en las acusaciones «están en el linde sutil que separa los actos indiferentes de los culpables pudiendo por ello, según la interpretación que se les dé, ser o no considerados en relación con la rebelión perseguida como participantes en ella». En esos casos de duda, continúa la sentencia, se opta por la absolución.

«FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos a Antonio Plano Aznárez como autor de un delito de rebelión militar comprendido en el artículo 237 del Código de Justicia Militar a la pena de muerte con accesoria, para caso de indulto de interdicción e inhabilitación perpetua sin que por la individualidad de la pena pueda jugar a su favor la atenuante de arrebato y obcecación». La relación detallada de las penas y absoluciones es la que sigue.

TABLA 6: RELACIÓN DE PENAS Y ABSOLUCIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA POR REBELIÓN MILITAR EN UNCASTILLO.

ZARAGOZA EN 29 DE MARZO DE 1935

Antonio	Plano	Aznárez		Pena de muerte
Saturnino	Agón	López	«Vigornia»	Prisión perpetua
Demetrio	Agón	López	«Vigornia»	Prisión perpetua
Lorenzo	Alcubierre	Viamonte		Prisión perpetua
Gregorio	Buey	Micaléy	«Morán»	Prisión perpetua
Esteban	Casaus	Sampietro	«El Bielo»	Prisión perpetua
Eugenio	Combalía	Marco	«Cantarero»	Prisión perpetua
Ricardo	Lalanza	Ruiz	«Carpio»	Prisión perpetua
Manuel	Lasilla	Pueyo	«Saro»	Prisión perpetua
Lorenzo	Pueyo	Aznárez	«Chaparro»	Prisión perpetua
Antonio	Rived	Samatán		Prisión perpetua
Antonio	Salvo	Samatán	«El Soldao»	Prisión perpetua
Vicente	Tirapo	Casanova	«Porgador»	Prisión perpetua
Antonio	Tudela	Navarro	«Pindajo»	Prisión perpetua
Pablo	Villa	Guinda	«Gato»	Prisión perpetua
Rufino	Claveras	Arregui		25 años de prisión
Isidro	Frago	Beguería	«Alforjero»	25 años de prisión
José	Laiglesia	Pueyo	«Fierro»	25 años de prisión
Andrés	Navarro	Vidal	«El Guapo»	25 años de prisión
Francisco	Pérez	Arilla	«Canillero»	25 años de prisión
Luis	Ruiz	Remón	«Carletes»	25 años de prisión
Pascual	Beguería	Arilla	«Royales»	20 años de prisión
Benito	Beguería	Cervero	«Quintín»	20 años de prisión
José	Beguería	Fuertes	«De la Rita»	20 años de prisión
José	Buey	Micaléy	«Morán»	20 años de prisión
Ángel	Canales	Pueyo	«Penilla»	20 años de prisión
Manuel	Casalé	Suñén	«El Royo»	20 años de prisión
Antonio	Casaus	Casanova	«Jarretano»	20 años de prisión
Florencio	Claveras	Martínez	«Clavel»	20 años de prisión
Constancio	Combalía	Marco	«Cantarero»	20 años de prisión
Martín	Cortés	Lasilla	«Fetes»	20 años de prisión
Lorenzo	Lacosta	Aguas	«Araiz de Petilla»	20 años de prisión
Ángel	Morlana	Navarro	«De urbe»	20 años de prisión
Maximino	Sánchez	Blesa	«Jalma»	20 años de prisión
Saturnino	Sánchez	Suñén	«Jalma»	20 años de prisión
Marcos	Arregui	Pérez	«Royo Antoné»	15 años de prisión
Santos	Aznárez	Lizalde	«Peguero»	15 años de prisión
Mariano	Canales	Tris		15 años de prisión
Francisco	Cortés	Lasilla	«Fetes»	15 años de prisión

TABLA 6: RELACIÓN DE PENAS Y ABSOLUCIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA POR REBELIÓN MILITAR EN UNCASTILLO.**ZARAGOZA EN 29 DE MARZO DE 1935** *(Continuación)*

José	Estabén	Lapetra	«Morricones»	15 años de prisión
Lorenzo	Estabén	Lapetra	«Morricones»	15 años de prisión
Gregorio	Frago	Beguería	«Alforjero»	15 años de prisión
Ignacio	Maisterra	Pueyo	«Rugal»	15 años de prisión
Antonio	Sánchez	Suñén	«Jalma»	15 años de prisión
Valeriano	Urdániz	Viartola	«Araoles»	15 años de prisión
Alejandro	Agón	López	«Vigornia»	12 años de prisión
Serafin	Añaños	Aznárez	«Charravín»	12 años de prisión
Máximo	Casalé	Suñén	«Royo»	12 años de prisión
Vicente	Casaus	Navarro	«Negrito»	12 años de prisión
Lorenzo	Caudevilla	Guinda	«Borrascas»	12 años de prisión
Félix	Claveras	Beguería	«Berguero»	12 años de prisión
Romualdo	Garcés	Aragüés	«Albano»	12 años de prisión
Antonio	García	Rived	«De la Sabina»	12 años de prisión
Mariano	Gil	Laplaza	«El chato»	12 años de prisión
Antonio	Gracia	Arregui	«El perro»	12 años de prisión
Máximo	Malón	Lear	«Esquilador»	12 años de prisión
Jesús	Marco	Pueyo	«Larraga»	12 años de prisión
Joaquín	Martín	Layana	«Tajadilla»	12 años de prisión
José	Olano	Victoriano	«Maza»	12 años de prisión
Enrique	Pérez	Sardoy		12 años de prisión
Pedro	Rived	Abadía		12 años de prisión
Pablo	Varona	Pueyo	«Corredor»	12 años de prisión
Aniceto	Viamonte	Yarz		12 años de prisión
Carmelo	Casalé	Casaus	«Pinchador»	6 meses y 1 día de prisión
Juan P.	Casalé	Suñén	«Los Royos»	6 meses y 1 día de prisión
Julián	Tris	Tosaus	«Panetico»	6 meses y 1 día de prisión
Mariano	Alcubierre	Frago	«Delfín»	Absuelto
Juan	Arias	Endrinas	«Cantinerio»	Absuelto
Antonio	Arregui	García	«Masador»	Absuelto
Francisco	Arregui	Praderas	«General»	Absuelto
Miguel	Aznárez	Palacín	«De la mulatera»	Absuelto
Agustín	Beguería	Arilla	«Royales»	Absuelto
Antonio	Berges	Alcubierre	«Estanquero»	Absuelto
Joaquín	Brau	Berdód	«Mainé»	Absuelto
Juan	Buey	Clemente	«Ninin»	Absuelto
Venancio	Casanova	Pérez	«Corroncho»	Absuelto

TABLA 6: RELACIÓN DE PENAS Y ABSOLUCIONES CONTENIDAS EN LA SENTENCIA POR REBELIÓN MILITAR EN UNCASTILLO.

ZARAGOZA EN 29 DE MARZO DE 1935 *(Continuación)*

Carlos	Casaus	Esteban	«De la calma»	Absuelto
Tomás	Casaus	Lear	«Zuriza»	Absuelto
Juan	Cervero	Aísa	«Chulo»	Absuelto
Pantaleón	Charles	Praderas	«Revertín»	Absuelto
Miguel	Charles	Praderas	«Charravin»	Absuelto
Crescencio	Charles	Serrano	«Pantaleón»	Absuelto
Mariano	Ezquerria	Tirapo	«Porgador»	Absuelto
Cándido	García	García	«Figado»	Absuelto
Isidro	García	Viamonte	«Masador»	Absuelto
Ángel	Guillén	Cardona		Absuelto
Pedro	Guinda	Arregui	«Antón»	Absuelto
Tomás	Jordán	Bueno		Absuelto
Domingo	Lafuente	Beguiría	«Tumbo»	Absuelto
Eugenio	Laiglesia	Pueyo	«Fierro»	Absuelto
Mariano	Malón	Pueyo	«De cuatro»	Absuelto
José	Morlana	Navarro	«De urbe»	Absuelto
Pedro	Palacín	Tirapo	«Correo»	Absuelto
Vicente	Pérez	Guinda	«Cantina»	Absuelto
Antonio	Pérez	Idoype	«Del correo»	Absuelto
Serafín	Plano	Arilla		Absuelto
José	Pueyo	Arregui	«Matadores»	Absuelto
Hipólito	Pueyo	Navarro	«Del conon»	Absuelto
Pío	Pueyo	Prat	«De la Virgen»	Absuelto
Jesús	Pueyo	Prat	«Jesús de la Virgen»	Absuelto
Félix	Pueyo	Romeo	«Carletes»	Absuelto
José	Ricarte	Cortés	«Fetés»	Absuelto
Perfecto	Rived	Palacios	«Pinta»	Absuelto
Antonio	Sánchez	Navarro	«Los Pepos»	Absuelto
Víctor	Sánchez	Navarro	«Los Pepos»	Absuelto
Vicente	Sánchez	Suñén	«Jalma»	Absuelto
Antonio	Suñén	Claveras	«Foricones»	Absuelto
Pascual	Varona	Pueyo	«Corredor»	Absuelto
Santos	Villa	Guinda	«Gato»	Absuelto
Miguel	Yarz	López	«Ferreré»	Absuelto

Fuente: ATTM nº 3, Sumario nº 70-1934, folios 2075 al 2078.

Un «apogeo de perturbaciones»

A las diez de la noche del 6 de octubre de 1934 el presidente del Consejo de Ministros Alejandro Lerroux pronunciaba una alocución radiofónica que comenzaba expresando su alivio porque «en estos momentos de apogeo de las perturbaciones los ciudadanos españoles han sabido sobreponerse a la insensata locura de los mal aconsejados». Todos los españoles, concluía, «sentirán en el rostro el sonrojo de la locura que cometieron unos cuantos, pero el Gobierno les pide que no sientan odio contra pueblo alguno», pues «en todas partes una exaltación de verdadera ciudadanía nos acompaña». A esa hora en Asturias «el Ejército se ha adueñado de la situación» y en la mayoría de los puntos «calientes». Ya hemos repasado los sucesos de Uncastillo, pero ese análisis no puede obviarse respecto de lo que ocurrió en el resto de la comarca ¿Cómo discurrió la jornada revolucionaria en las localidades cercanas? ¿Qué incidencia tuvieron las noticias que llegaban de uno y otro lugar en aquella noche de incertidumbres y de búsqueda de referencias? Ya hemos visto desfilar a los principales protagonistas sintonizando el dial de la radio en busca de noticias, y viajando en el caso de Manuel Lasilla a Luesia para comprobar el estado de la situación.

La crónica periodística del *Heraldo* del día 9 apuntaba que en Mallén «los elementos afectos a la UGT se declararon en huelga y recorrieron las calles del pueblo dando gritos subversivos armados de pistolas y escopetas». Cortaron las líneas telegráficas y telefónicas e interceptaron las carreteras. «Un cabo y dos guardias que iban de Tudela a Cortes se vieron atacados de lo cual resultó muerto el cabo y herido un guardia». La fuerza llegada de Zaragoza se enfrentó en varias ocasiones a los amotinados hasta que se dominó la situación. Dos días más tarde se registró una nueva agresión a la Guardia Civil, mediando un violento tiroteo en el que uno de los vecinos resultó muerto.³³⁸ En Gallur no hubo incidentes violentos,

³³⁸ HA, 9-10-1934.

por lo que la prensa no da ningún detalle de lo que allí ocurrió. Pero es interesante rescatar la información aportada por el cabo de la Guardia Civil. Supo que en la noche del 4 de octubre, al igual que ocurrió en Uncastillo, llegaron dos forasteros en un automóvil que celebraron una entrevista con «significados izquierdistas» de la localidad «y de gran influencia entre el elemento obrero». El cabo, «enterado de los desagradables sucesos ocurridos en varios pueblos y sospechando se tramara idéntico plan en esta villa», realizó investigaciones al respecto, confirmando que hubo tal reunión y que en ella «un tal Miranda, presidente o vocal de las Juventudes Socialistas» de Zaragoza, hacía las veces de director del movimiento. En compañía de un directivo obrero de Alagón y del secretario de la UGT de Gallur y «también extremista» Enrique Quílez salieron luego hacia Tauste, Ejea y Uncastillo. Al día siguiente, el 5 de octubre, realizaron otra reunión los elementos obreros nombrando un comité que, «caso de triunfar la revolución, habían de apoderarse del Ayuntamiento y encargarse de la dirección del pueblo», por lo que fueron todos detenidos.³³⁹

De Ejea en la prensa tan sólo se comenta que el alcalde fue destituido por el gobernador. Sin embargo los informes de la Guardia Civil dan cuenta de interesantes detalles. En un primer momento, indican que al ver «movimientos sospechosos» se presentaron en la Plaza de la Constitución, siendo ya recibida con un intenso tiroteo en el que fueron heridos un guardia y un vecino. «Los rebeldes» se hicieron fuertes frente al edificio del Ayuntamiento, «ondeando bandera roja». En ese momento la fuerza era insuficiente «pues sólo había tres guardias por estar resto en Uncastillo», retirándose al cuartel para defenderlo. Los grupos habían asaltado varios establecimientos en busca de armas y municiones, algo que quiso atajar el alcalde publicando un bando castigando con «sanciones severísimas» al que no entregara las armas. Sobre el alcalde Juan Sancho el guardia apunta «creo está refugiado en Ayuntamiento al frente

³³⁹ AGCZ, Leg. 1, exp. 7. Los detenidos fueron Francisco Miguel Arles, Leonardo Aranda, Mariano Navarro, Antonio Pallarés, Santiago Giménez, Evaristo López y Dionisio [ilegible] Zaldívar, Jesús Koyan y Alejandro Pasamar.

rebeldes, que serán 150 ó 200 armados, y los serenos se les unieron en rebeldía y hasta han desarmado al jefe de policía municipal y un guarda». Al día siguiente llegó desde Mallén el jefe de la Comandancia con veinte hombres y una sección de zapadores. Poco después «comuniqué telefónicamente con alcalde que se hallaba con sediciosos, remitiéndole escrito en el que le comunicaba que [...] abandonara el edificio entregando armas con promesa de que si así lo hacían serían tratados con benignidad». Con el edificio rodeado por la Benemérita, un guarda municipal anunció la rendición de los diez vecinos que permanecían en él. Se recogieron en el registro «treinta y dos armas largas, tres cortas y gran cantidad de cartuchería y bastantes efectos de curación y comestibles». Como colofón simbólico del final del episodio revolucionario, «la bandera roja fue arriada e izada la nacional».³⁴⁰

Junto a Uncastillo, los sucesos más graves ocurrieron en Tauste. La crónica del *Heraldo* describe cómo «a las 5,30 de la mañana un disparo al aire dio la señal de la revuelta», y cómo minutos después grupos armados recorrían las calles del pueblo, «dando vivas subversivos y tomando los puntos estratégicos». Una hora más tarde el pregonero, escoltado por un grupo de «revoltosos armados», recorría las calles «con un bando del comité revolucionario por el que se declaraba el estado de guerra con la pena de muerte para todos los que tuvieran armas sin permiso del comité y para cuando no obedecieran sus órdenes». Unos cortaban las líneas telegráficas y telefónicas, otros levantaban barricadas en las carreteras y otros quemaban los archivos del Ayuntamiento y el Juzgado en la plaza. Luego fueron a tomar el cuartel de la Guardia Civil, que opuso resistencia hasta que llegaron los refuerzos de Zaragoza. Al mediodía del seis «ya habían tomado las fuerzas del orden el Ayuntamiento, donde fue arrancada la bandera comunista» y sustituida por la nacional. Sin embargo la lucha continuó, efectuándose fuego por parte de «los revoltosos» desde la parte alta del edificio y otras casas. Llegó el regimiento de Infantería nº 5,

³⁴⁰ AGCZ, Leg. 1, exp. 7.

con ocho ametralladoras y un obús, y una sección de zapadores minadores. El enfrentamiento fue cruento, tirando la fuerza bombas sobre varias casas y usando «una cortina de fuego de ametralladoras» para controlar la situación. Aquí murieron tres paisanos «ajenos al conflicto», más un guardia chofer de camión, el dueño de un café y un labrador. Luego llegarían los registros y las detenciones. El relato finalizaba de modo similar a como lo hacían las columnas dedicadas a Uncastillo, volviendo una mirada culpabilizadora hacia los responsables políticos locales: «El alcalde ha huido y se sospecha está refugiado en el monte».³⁴¹

[*La Voz de Aragón*, 27 de marzo de 1935]

Liquidación de un movimiento revolucionario

Comenzó el Consejo de guerra para juzgar a ciento diez procesados por lo que ocurrió en Uncastillo en el mes de octubre



Dos aspectos de la sala en la que son juzgados ciento diez vecinos de Uncastillo, a los cuales se acusa de haber intervenido en los sucesos allí ocurridos en octubre.

³⁴¹ HA, 9-10-1934.

Capítulo 6

DESQUITES Y AGRAVIOS

Los tricornos de la República

Durante el primer bienio republicano Casas Viejas y Arnedo habían abierto un debate público acerca del estatuto, reglamentación y uso de la fuerza por parte de la Guardia Civil. Dichos episodios (a los que habría que sumar otros como Épila o Zalamea la Real...), terminados en tragedia por el castigo ejercido por los guardias contra la población civil, permitieron a detractores y partidarios tomar al asalto cabecezas y editoriales de diarios para argumentar la oportunidad y posible exceso de la represión, para extenderse a favor y en contra del Benemérito cuerpo. Arnedo fue quizás el caso que más repercusión mediática tuvo. La marea de opiniones llegó al Parlamento, donde junto a las propuestas de rendición de homenaje a los guardias caídos por parte de los conservadores, se escucharon peticiones de reforma del cuerpo cuando no, desde los bancos de la izquierda, abiertas críticas hacia una organización que desde su punto de vista era incompatible con un régimen democrático. Si para unos el cuerpo constituía un auténtico y prestigioso «centinela» en el campo, presto a sofocar desórdenes y a socorrer necesitados, para otros era un auténtico «ejército de ocupación» portador de fusiles demasiado destructivos y de una estética y un comportamiento de otro tiempo. En realidad la cuestión había venido siendo objeto de discusión desde los primeros años del XX, en los que la aparición de nuevas formas de conflictividad masiva y motines urbanos dejaban en evidencia la enemistad popular hacia el cuerpo que habitualmente los enfrentaba y reprimía de manera indiscriminada. Son incontables las crónicas de algaradas y revueltas rurales que dan cuenta de enconados enfrentamientos de los grupos con la Guardia Civil tras la detención de algún vecino o por la amenaza de su sola presencia para acompañar al odiado recaudador.

El debate giraba en torno a un radio más amplio que el del campo de acción de la Guardia Civil. Desde las controversias en torno a la Ley de Jurisdicciones de 1906 por las que el Ejército podía juzgar todos los delitos que considerara atentatorios contra el honor de sus cuerpos para amordazar a la prensa crítica, intelectuales y ensayistas habían diagnosticado que el problema era la militarización del sistema de orden público en el país. A la mínima señal de protesta se «enarenaban» las calles para la acción de la caballería en lugar de ejercitar caminos institucionales de negociación. Unos canales que se hallaban limitados en su capacidad de gestión y sin prestigio suficiente para buena parte de la clase obrera, protagonista fundamental de las protestas, por percibir esas mediaciones al servicio de propietarios y capitalistas. Poco o nada había cambiado eso hasta la II República. Las protestas colectivas son reprimidas con un vigor que va aparejado a la dignidad del cuerpo. Como venía determinado en la cartilla del Marqués de Ahumada de 1845, el «honor» es la principal divisa de la Guardia Civil, y «una vez perdido no se recobra jamás». Por eso y como decía su artículo séptimo, aunque «sus primeras armas deben ser la persuasión y la fuerza moral», recurrirá a las que lleve consigo «cuando se vea ofendido o cuando sus palabras no hayan bastado». En ese caso «dejará siempre bien puesto el honor de las armas que la Reina le ha confiado». Nada más que eso, esgrimían partidarios y el propio director de la Guardia Civil, general Sanjurjo, había ocurrido en Arnedo en enero de 1932: una pura y justa defensa de un honor mal-trecho.

El cuerpo creado por Ahumada era un cuerpo de soldados profesionales muy jerarquizado, con un espíritu corporativo muy acusado, relaciones internas paternalistas, fuerte endogamia, una ideología muy conservadora y una disposición geográfica muy dispersa que le permitía penetrar todo el territorio, aunque manteniéndose aislado de la vida civil mediante una fuerte y detallada reglamentación, la ordenanza militar y la vida familiar y profesional en la casa-cuartel.

El puesto, el Tercio, la Comandancia y la Línea constituían de menor a mayor extensión el modo de organización sobre el territorio, que va creciendo conforme lo hace la red de telégrafos, ferrocarriles, carreteras y caminos del Estado. Esa red de puestos constituía un instrumento de centralización de incalculable valor político para los gobiernos liberales, que conseguían de ese modo contar con ojos para vigilar y manos para actuar en el control de la población del último pueblo del país, en un tiempo de inestabilidad política e importantes amenazas bélicas. Podía de ese modo reforzar el carácter de ocupación del territorio del Ejército con su política de establecimiento de regimientos, compañías y guarniciones en casi todos los núcleos importantes de población. El primer objetivo de la Benemérita era el del mantenimiento del orden público, asumiendo progresivamente otras funciones capitales para el Estado como las de policía general, judicial y fiscal, beneficencia pública, guardería rural y vigilancia de montes públicos. Provisto siempre «de tintero y papel para hacer sus apuntes», el guardia civil tenía facultades plenas de vigilancia, de información y de acción toda vez que fuese requerido para ello por la autoridad civil, o cuando así lo estimase oportuno si mediaba amenaza de amotinados o perturbadores. En el orden de lo cotidiano, su apariencia y sus modos de comportamiento, detallados hasta lo más mínimo en la Cartilla, denotaban cierta superioridad hacia los vecinos humildes y una idea de aleccionamiento moral que abarcaba desde el número de afeitado (tres por semana), al cuidado de la ropa y lustre del calzado, pasando por la higiene personal, el modo cortés de entrar en una habitación, y por la prohibición de usar «gritos ni ademanes descompuestos», de llamar por apodos y de entonar por los caminos «cantares» impropias de su posición, pues «su silencio y seriedad deben imponer más que sus armas». Unas armas juzgadas en algunos artículos críticos como impropias del tiempo en el que las policías cuentan con un vergajo y un revólver, y no con el *maüser* más propio de situaciones de guerra que de manifestaciones o algaradas urbanas.

Pero no estaban los tiempos para reformas en el Cuerpo, de por sí refractario a las mismas, sino más bien para que muchos aplaudieran el empleo de la fuerza y justificaran el modo en que reprimían los movimientos revolucionarios y, por lo tanto, salvaguardaban la integridad de la nación y el orden social. Volvamos a la República. Apenas unos meses más tarde de Arnedo llegaría el golpe de estado de Sanjurjo y su condena a muerte ante Consejo de Guerra por rebelión militar. En su decisión de levantarse en armas contra el régimen republicano jugó un papel muy destacado la memoria de Casas Viejas y Arnedo y la llamada del deber de defender un orden social que se interpreta amenazado por los «ingratos», amigos de subversiones y turbas maleantes, levantiscos, «malos españoles» en definitiva incapaces de agradecer el sacrificio de la constante vigía de las fuerzas armadas. Un núcleo importante de escritores y políticos estimaban que Sanjurjo no andaba descaminado en su interpretación de las revueltas contra la Guardia Civil. El problema es «la libertad que se otorga a los organizadores de revueltas y motines, los que por inducción están lanzando al pueblo contra la Guardia Civil». Día tras día, se comenta en el diario *Informaciones*, parece más clara la confabulación criminal fraguada contra la Guardia Civil por los revolucionarios de toda España», y que cuando los guardias «repelen violenta y adecuadamente la agresión», los cómplices de los amotinados aprovechan para presentarlos como «verdugos y asesinos». Desde la izquierda sucesos de ese cariz eran motivo de mítines y artículos criticando los «canallesclos atropellos» de los guardias, tildándolos de «salvajada», de «infamia y de «crimen», y solicitando en más de una ocasión el desarme o disolución de la Guardia Civil.³⁴²

Los sucesos de octubre de 1934 dieron lugar a un común alineamiento de los medios impresos con la Guardia Civil, y a la clausura de los rotativos de la izquierda política. El con-

³⁴² Remitimos para un examen más profundo al estudio que dedica al asunto Carlos GIL ANDRÉS, *La República en la plaza: los sucesos de Arnedo de 1932*, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 2002, pp. 207 y ss.

texto era bien distinto al del bienio republicano socialista, y la misma naturaleza y gravedad de los hechos en Asturias, y la amplificación que provocaban los medios de comunicación, concitaron múltiples reacciones en un mismo sentido de solidaridad con las fuerzas del orden. Entre el relato que el cronista de *La Voz de Aragón* realiza de los sucesos ocurridos en la capital y la comarca de las Cinco Villas, se intercalan losa a la Benemérita y al Ejército. «De nuevo ha sido uno de los basamentos nacionales», señalando que «el guardia civil es uno de los más magníficos soldados que dio el Mundo», pues «jamás hallaréis en él al mercenario, sino al hombre sometido a la humana disciplina de un Reglamento más duro para quien ha de cumplirlo [...] que quien haya de recibir las consecuencias coercitivas de los mandatos». Sus valores, «sencillez, abnegación, humanidad, valor sereno, consciente, suma de todo ello: heroísmo». El panegírico del Ejército comenzaba afirmando que él mismo «es la Nación, es el Pueblo», para señalar respecto de la acción represora que «donde se precisó la acción suasoria fue hecha con sentido ponderado y ecuaníme».³⁴³

Pero ¿quiénes eran los que vestían la capa y el tricornio? ¿Quiénes habían sido los que con su «heroica» resistencia en Uncastillo habían salvaguardado el honor del cuerpo? La pregunta tiene sentido por cuanto atender a la otra cara del conflicto, aquella a la que se enfrentaron los rebeldes, permite contemplar con mayor profundidad la escena de la contienda. Una fuente permite perfilar los rostros del tricornio, los expedientes personales que guarda el Archivo de la Guardia Civil. Por cuestiones legales, no se ha podido tener acceso a todos ellos, pero sí a algunos con los que puede trazarse un recorrido de las procedencias de los guardias, de sus circunstancias vitales, de la huella que los sucesos de octubre tuvieron en sus vidas, de por qué eran tan temidos y odiados entre los vecinos, y de por qué actuaron como lo hicieron tanto en 1934 como a partir del 18 de julio de 1936.

³⁴³ LVA, 10-10-1934.

A mediados del siglo XIX los puestos de la Guardia Civil del territorio aragonés pertenecían al sexto Tercio del cuerpo, estableciéndose en la provincia de Zaragoza una distribución en torno al eje del Ebro, por donde discurrían las principales comunicaciones y podía fijarse una buena cobertura en caso de alerta o insurrección. Las cabeceras de línea estaban ubicadas en Calatayud, Cariñena, Belchite, Mallén, Zaragoza y Ejea. En la inmensa zona de las Cinco Villas tan sólo éste y el puesto de Sos dependiente de él disponían de fuerzas del cuerpo. En total unos 560 hombres constituían la dotación inicial en la Comandancia de Zaragoza, pero ya en 1950 esa cifra fue drásticamente disminuida a tan sólo 130 hombres.³⁴⁴ Hubo posteriormente muchas reformas en la organización de los enclaves en función de las comunicaciones, los presupuestos y las problemáticas sociales, pero con el paso del tiempo muchos pueblos de la zona terminaron albergando, mediando casi siempre peticiones de propietarios y autoridades, su propio puesto, construido de nuevo o habilitando algún edificio municipal.

El sargento Victoriano Quiñones, que mandaba el puesto y con quien Plano conferenció durante el sitio al cuartel en la madrugada de aquel 5 de octubre, había nacido en Fabara en 1892, y tras su paso por el Colegio de Guardias de Valdemoro, y mientras Antonio Plano aprendía en Zaragoza el oficio de carpintero en el Hogar Pignetelli, sirvió desde 1911 en la comandancia de Almería. En 1917 se enfrentó a su primera situación de violencia colectiva, participando en el despliegue de fuerza efectuado con motivo de desórdenes habidos en los últimos días de febrero. Casó luego con la murciana María Luz Zamora, y entonces comenzó su peregrinar de destinos. De 1918 a 1920 sirvió en Fiñana, Albox y Los Lobos, dentro de la Comandancia de Almería, aprobando en el camino una oposición a cabo. Luego va a los puestos de Tijola y Zugena, donde en 1930 vuelve a «intervenir en

³⁴⁴ Enrique MARTÍNEZ RUIZ, *Ubicación geográfica inicial de la Guardia Civil*, Cuadernos de Historia Moderna y Contemporánea, núm. 1 (1980), pp. 83-110.

defensa del orden público», anotándose su «valor, el alto espíritu, disciplina, lealtad y la abnegación que evidenció en cuantas acciones tuvo que intervenir». En 1931, cuando todavía no se había instaurado el régimen republicano, se trasladó a la Comandancia de Zaragoza con el empleo de sargento. Contaba entonces treinta y nueve años, haciéndose con el mando del puesto de Uncastillo el veintiuno de febrero, y causando extrañamente baja y sin que se dijeran las causas en enero de 1932. Viajó a Sevilla y Badajoz, para en 1933 volver a la Comandancia de Zaragoza destinado en Vera del Moncayo. Al igual que el resto del cuerpo, en veintisiete de marzo «firmó la promesa de fidelidad a la República», una de las medidas de Azaña como ministro de la Guerra para vincular a los militares con la defensa del nuevo régimen político y forzar la baja de los monárquicos recalcitrantes. La casi totalidad suscribió la promesa, pero es seguro que muchos lo hicieron para no perder su empleo, y que eso multiplicó la antipatía contra lo republicano. El 10 de julio de 1934 pasaba a mandar de nuevo el puesto de Uncastillo. Conocía el pueblo y al alcalde de su anterior mandato, aunque su llegada estuvo precedida por el descontento vecinal hacia la arbitrariedad del anterior jefe, y por los previsibles informes desfavorables del Gobierno Civil. No obstante por comentarios dispersos en las declaraciones del juicio parece que las relaciones con el pueblo y, sobre todo, con Antonio Plano, no eran malas, sino todo lo contrario. La defensa de Francisco Arregui dice que éste «explota desde hace tiempo un establecimiento industrial público en donde tiene que servir a todo el mundo sin distinción de ideas ni de clases», bar al que acudían muchos vecinos de Uncastillo «y hasta los mismos individuos de la Benemérita, que siempre han mantenido con Arregui relaciones no sólo correctas, sino de gran cordialidad».³⁴⁵ De cualquier modo, es claro que Quiñones contaba con una experiencia notable en la represión de movimientos de protesta colectiva.

³⁴⁵ ATTM núm. 3, Sumario núm. 70-1934, folio 2005.

Los otros dos grandes protagonistas del proceso sumarísimo fueron los dos guardias muertos, Celestino Morales Marco y Francisco García Prieto. El primero procedía del pueblo guadalajareño de Milmarcos, habiendo nacido en el año en que España perdía sus colonias de Ultramar, 1898. Fue soldado recluta y con veintidós años destinado a Marruecos, a la posición de Bussada. Son los años de las campañas africanas y de la contestación obrera a una movilización tan mortífera como inútil, en las que el estamento militar pretendía rescatar el honor patrio de la herrumbre que había dejado el Desastre. En pocos años la prensa volvería a bautizar la actualidad con un nuevo Desastre, esta vez en Annual. Pero Celestino no lo vería en primera persona, pues al llevar tres años en filas pasó a segunda situación de servicio, regresando a su casa natal, donde se casó con Juliana Romero, a quien la hemos visto declarar en el proceso sumarial cómo vivió aquella aciaga mañana de octubre. En los años veinte continúa pasando revista y haciendo ejercicios de tiro, para en 1931 ingresar en la Guardia Civil, siendo Uncastillo su primer puesto y regresando tan sólo a Milmarcos con motivo de la enfermedad de su madre. El resto, la herida producida «por arma de fuego cuyo proyectil le penetró en la cavidad craneana» y su «fallecimiento en el acto» a la edad de treinta y seis años, ya es conocido. Por su parte, el guardia García Prieto era de la misma quinta que Morales, aunque provenía de un pueblo palentino, de Villacidoler, y su trayectoria militar es bien similar. Era un jornalero que en 1920 entró en la caja de recluta, que fue destinado al regimiento de Castillejos, en Zaragoza y que dos años más tarde era nombrado cabo. En ese año de 1922 ingresaba en el 21º Tercio de Caballería de la Guardia Civil en Barcelona, donde el Directorio Militar le concede la Medalla del Homenaje a la Monarquía. En 1926 contrae matrimonio en su pueblo natal con Concepción Salve, a quien también hemos visto desfilar en sesión declaratoria. Prestando servicio en el puesto de Farlete le sorprende la intentona republicana de diciembre de 1930, siendo movilizado para sofocar el movimiento, y

haciéndose constar en su hoja «la satisfacción con que el Gobierno ha visto y apreciado en todo su valor el alto espíritu, disciplina, lealtad y abnegación en cuantas ocasiones tuvo que intervenir en defensa del orden público y de las Instituciones, y muy especialmente en los tristes sucesos acaecidos en la 5ª Región en el mes de diciembre». En el 33 es destinado a Uncastillo, donde ya servía Morales bajo el mando del sargento Teodoro García. El 16 de marzo firman «la promesa de fidelidad a la República, obedecer sus leyes y defenderla con las armas», y un año después es muerto por los disparos de postas de los vecinos que sitiaban el cuartel.

El resto de la dotación presente en el puesto de Uncastillo durante la revuelta la conformaban los guardias Manuel Corchete Álvarez, Félix García Andrés, Demetrio López Cortés y Vicente Adell Carpio. De estos dos últimos no se han conservado los expedientes según información del Archivo de la Guardia Civil, pero sí de los dos primeros. Corchete nació en 1901 en un pueblo de la zona salmantina de Ciudad Rodrigo. Era un jornalero hasta que en 1922 entró en caja, y en 1923 comenzó su servicio activo como soldado en la Comandancia de Artillería de Ceuta. Su bautismo bélico tuvo lugar en octubre de ese año, cuando «hizo fuego de cañón contra grupos de moros», y en diciembre al hacerlo «sobre grupos de enemigos». Todo el año 1924 estuvo en acciones de guerra haciendo fuego de cañón hasta que fue herido de bala, siendo tras su recuperación ascendido a cabo y recibiendo la Medalla de Sufrimientos por la Patria con una pensión vitalicia. En 1925 «efectuó fuegos con su batería sobre poblados y grupos enemigos» en diversas posiciones y momentos, siendo aceptado en ese mismo año su ingreso en la Guardia Civil. Es destinado a la Comandancia de Ciudad Rodrigo, y más tarde, en 1928, es trasladado al 7º Tercio, a la Comandancia de Zaragoza, y destinado al puesto de Luesia. Se le concede la Medalla de la Paz de Marruecos. En 1930 es movilizado para sofocar la sublevación de Jaca, al año siguiente se casa con una joven de Fuencalderas, Pilar Luna, y transcurre 1932 ya en el puesto de Uncastillo, donde junto

con el resto de tropa firma la adhesión a la República. En el mismo año de 1934 sufrió una decepción al serle anulado el uso de la Medalla concedida, y consta que en octubre «defendió heroicamente la Casa-Cuartel durante nueve horas» aun siendo uno de los heridos graves del enfrentamiento.

Por su parte Félix García Andrés era oriundo de Roa, una localidad rural de Burgos. En 1914, con dieciocho años, se presenta «procedente de la clase de paisano y previo el consentimiento paterno», como soldado voluntario de caballería, sirviendo en la plaza africana de Larache y más tarde en la de Sidi-Aisa. En 1917 ingresa en la Guardia Civil, pasando por Vitoria, Pamplona y, finalmente, en 1919, por Ejea de los Caballeros. En 1922 casa con Ana Romanos en Zaragoza, de donde es la joven, «cuyo documento queda unido a esta filiación». Cumpliendo servicio en Alagón pide en 1927 por voluntad propia traslado a Alcalá de Gurrea buscando probablemente huir del hostigamiento vecinal, pues «se le instruyó causa por agresión, de la que resultó muerto el paisano Maiximiano Sánchez, siendo sobreseída por la Autoridad superior de la Región». Estando en Villamayor le sorprendió el movimiento de Jaca, siendo también movilizado para su represión, constando la correspondiente nota oficial reconociendo su «disciplina, lealtad y abnegación». Llegó al puesto de Uncastillo en 1932, y dos años más tarde recibiría la herida que le dejaría ciego de un ojo e «inútil» para el servicio. Le vemos entrar en el salón del cuartel de Hernán Cortés donde se celebraba el juicio sumarísimo tras los sucesos de octubre, produciendo un sentimiento lastimoso entre el tribunal: «se produce un movimiento de expectación, la entrada del guardia, a quien lleva de la mano un sargento de la Benemérita da lugar a unos momentos de emoción, a la que no se pueden sustraer los miembros del Consejo». Recibió más tarde la Medalla de Sacrificios por la Patria con pensión vitalicia de 12,50 pesetas mensuales.

A los guardias que llegaron de refuerzo también los encontramos en África en los años previos a los treinta. El capitán García Lasierra, que llega a Uncastillo con una dota-

ción desde Tarazona, llevaba casi veinte años de servicios militares. Nacido en Morata de Jalón en 1900, se hizo militar de Academia, pasando a partir de los quince años por el Regimiento de Infantería Galicia, haciendo su instrucción en Zaragoza y viajando luego a la escuela de Toledo, donde permaneció estudiando durante tres años. Como alférez es destinado en 1920 al Regimiento de Infantería de Tetuán nº 45 de Castellón, y al año siguiente embarca en el vapor «Lister» hacia Melilla, donde sirvió en la Columna a las órdenes de Sanjurjo haciendo fuego en la posición de Sidi-Hamed el Hadr. Es ascendido a teniente por antigüedad, y a partir de aquí se suceden las acciones de guerra de García Lasierra. Estableció una posición en Cabrerizas Altas formando parte de la Columna de reserva mandada por el General Miguel Fresneda, acampando en lugares diversos (Monte de Camellos, Zoco-el Had de Beni Sicar), hasta que volvió a integrar la columna de Sanjurjo en su camino a las lomas de Sidi-Amarán, «donde sostuvo fuego». Volvió a entrar en combate con una pequeña columna protegiendo un convoy a Tizza, donde defendiendo la posición «que fue frecuentemente hostilizada», volvió a hacer fuego. En 1922 y 1923 continuó con servicios bélicos, haciéndose cargo de la sección de Ametralladoras en la posición del Zoco-el Arlaa de Arkeman, y más tarde en el reconocimiento y toma de otras posiciones, como la protección del avance de las columnas de Larache en Ras-Buturaka. También llegaban las primeras condecoraciones, como la Medalla Militar de Marruecos y la Cruz de Primera Clase del Mérito Militar. En mayo de 1923 protagonizaría una acción de relumbrón. Sirviendo a las órdenes del coronel Gómez Morato asistía al combate en las inmediaciones de Tizzi-Assa, «con motivo de la tenaz resistencia del enemigo al aprovisionamiento de dicha posición». Marchó con su compañía en apoyo de su escuadrón de Regulares, «que se hallaba en crítica situación, y para ello se lanzó con la compañía a un ataque a la bayoneta en el que se causaron considerables bajas a los moros y sufriendolas también en buen número en su compañía, entre ellas la de

su Capitán, y con tal motivo se hizo cargo de mando de la citada compañía, conduciéndose con acertada iniciativa».

La carrera de acciones de guerra no termina con la mención de «distinguido» en el parte de la operación, sino que incrementa su ritmo e intensidad durante 1924. En 29 de junio «sostuvo nutrido fuego con enemigos que desde puestos inmediatos tiroteaban sin cesar el blocao, rechazando la agresión con fuego de fusil y granadas de mano», acción en la que fue herido en una mano, siendo más tarde recompensado con la Medalla de Sufrimientos por la Patria. Quizás fue suficiente, porque poco después ingresaría en la Guardia Civil. En su expediente de operaciones bélicas encontramos algunas notas que dan cuenta de lo que podía suponer la experiencia africana, y del fuerte espíritu de corps imbuido por los mandos de la Legión en la colonia. En efecto, sobre el primer punto no hay sino que recordar que las características de las acciones de guerra en las que estuvo inmerso Lasierra fueron característica general de los combates africanos. Los rifeños, aprovechando su mejor conocimiento del terreno y las necesidades de abastecimiento de las posiciones españolas, que debían de proveerse de agua y víveres por transporte terrestre, hostigaron al Ejército hispano «paqueando» a distancia (onomatopeya del sonido del disparo de los fusiles, «pa-co»), bloqueando campamentos o levantando los poblados contra las tropas. Por otro lado, es conocido el sentido ultranacionalista y violento con que los mandos militares de los regimientos africanos arengaban a la tropa, y no parece casual que uno de los generales con los que sirvió Lasierra se levantara en 1932 contra la República en la célebre «Sanjurjada», contra lo que la mayoría del estamento militar consideraba los «enemigos» de la Patria, concentradas en las corrientes de la izquierda social y política que estaban conduciendo a la Nación al caos.

El teniente estuvo al mando de diversas líneas en Aragón, Soria y Andalucía, y al acudir a Uncastillo fue herido en el cuello con perdigones. Pero también el brigada Fernando Díaz Martín, jefe del puesto de Malón, había servido en África, tomando parte en operaciones militares y siendo en dos oca-

siones felicitado por su actuación. A él lo encontramos en algunas de las campañas más conocidas, como la toma del Gurugú y del monte Arruit en 1921, siendo «el encargado de destruir el poblado enemigo», y formando parte de la columna organizada por el general Cabanellas para la toma de Xarcha. En 1922 fue felicitado por el Alto Comisario, Ministro de Guerra y Presidente del Consejo de Ministros «por la brillante actuación y alto espíritu demostrado con motivo de la ocupación de Dar-Quedani», terminando el año con nuevas acciones bélicas, e ingresando luego en la Guardia Civil. Vemos que el carácter militar de la Benemérita no deviene tan sólo de una cuestión jurisdiccional, sino que, quizás más importante para el propio estamento, descansaba en una experiencia previa en la línea de combate que facilitaba la penetración de una ideología nacionalista y belicista, para resultar en un sentido de exclusividad en la defensa de los valores considerados como esenciales de la Nación. Cuando llegaron los problemas en la República muchos de ellos pensaron que hacía no muchos años se habían estado jugando el tipo para que ahora los desarraigados entraran en el gobierno para romper el país. El guardia Díaz Martín participó además en servicios «durante la huelga de transportes en Barcelona» durante agosto de 1923, «contribuyendo con celo y asiduidad dignos del mayor encomio y con abnegado esfuerzo a garantizar la libertad del Trabajo y asegurar el abastecimiento de la población». Sería reconocido por ello en su expediente por el mismo rey Alfonso XIII con un agradecimiento especial, «toda vez que tomó parte de esas fuerzas por un benemérito y laudable comportamiento». Llegada la República, y tras sofocar el intento revolucionario de Jaca, inició un periplo de destinos entre los que se encontraba el cercano pueblo de Farasdués. Estando en Barcelona hizo «solemne juramento» de adhesión a la República, «prometiendo por su honor servirla fielmente y defenderla con las armas».

Como se puede comprobar, la fuerza presente en Uncastillo contaba con experiencia en situaciones críticas, tanto en escenario bélico como en conflictos colectivos y algaradas urbanas. La mayoría saben lo que es el fuego real y algunos se curtie-

ron en acciones de guerra en el Protectorado español de Marruecos. El paso por el combate como soldados permitía un fácil ingreso en la Guardia Civil, dejando atrás las humillaciones de los mandos y la dureza del blocao, y ese camino fue el recorrido de bastantes de los guardias de Uncastillo y de los refuerzos llegados para sofocar el levantamiento. Parece que ante el ataque que allí tuvo lugar, si no se respondió con mayor celeridad y contundencia fue por falta de medios y por haber perdido totalmente la iniciativa, fruto quizás de un exceso de confianza. Nada parecía prever lo que allí iba a suceder, lo dicen los guardias y lo dicen los detenidos en sus declaraciones. Quizás de otro modo no hubieran salido del cuartel, exponiéndose de un modo tan claro y casi imprudente si hubiera habido indicios para prevenir un ataque. Una confianza inicial que pudo estar avalada por la buena relación del jefe de los guardias con el alcalde. Plano no era lisonjero con los guardias, como lo demostró remitiendo el escrito de protesta de los vecinos contra el jefe del puesto en mayo de 1933 tras la detención interpretada como abusiva de Francisco Arregui, y volviendo a escribir al gobernador en diciembre de ese mismo año para demostrar su desagrado por el envío de refuerzos al pueblo en previsión de acontecimientos con motivo de la sublevación anarquista. «Por dicha fuerza ni se hizo presentación ni ofrecimiento al llegar a esta villa, ni tampoco han dado cuenta a esta Alcaldía de la marcha, circunstancia que considero de desatención para con esta Alcaldía».³⁴⁶ A la altura de 1934 la buena relación del alcalde con el nuevo jefe da cuenta de una buena química y de una voluntad de no soliviantar al vecindario. Pero además, los guardias tenían un buen conocimiento de la situación social de la comarca, pues cuatro de los cinco guardias de los que existe información llevaban al menos dos años en el puesto, y tan sólo el sargento Quiñones podía adolecer de cierto desconocimiento de la problemática local, que con seguridad hubo de ser paliada por la información aportada por los propios subordinados y las autoridades locales.

³⁴⁶ AGCZ, leg. 101, exp. 6.

Inevitable rencor

Tras las detenciones y el encarcelamiento masivo el recuerdo de octubre permanecía en la mente y en las acciones de la mayoría de los vecinos, y también de los guardias civiles destacados en Uncastillo. La Guardia Civil volvía al centro de la confrontación social. En diciembre de 1934, tras dos meses de cautiverio de los procesados, tiene lugar un episodio de tensión en el café de «General», Francisco Arregui, el que quedaba frente al cuartel de la Guardia Civil. Estando unos paisanos «cantando y bebiendo vino caliente» en fecha cercana a la Navidad, se presentó una pareja ordenándoles pusieran las manos en alto, y empleando «malas palabras» y llamándoles «flamencos» les dijeron «que no escandalizaran» más. Al rato se presentaron en la cocina de la dueña («cuyo marido se encuentra en la cárcel») preguntando por qué continuaban las voces. Uno de los guardias entró en el café «y enérgicamente ordenó pusieran las manos en alto, advirtiéndoles a los que allí se encontraban tuvieran cuidado en lo sucesivo de no armar escándalos». Alguien hizo llegar la noticia de lo que ocurría al concejal Eusebio Luis, quien llegó para evitar algún tumulto que no llegó a ocurrir. La actuación de los guardias parece que fue motivo de queja ante la alcaldía por parte de diversos vecinos, quienes también hicieron saber que esa misma pareja «pegaba a los jóvenes en la calle», habiendo abofeteado en una ocasión a los hermanos Rived. Poco después, a mediados de marzo, tenía lugar una detención de veinte vecinos por «reunión ilegal» en las afueras del pueblo. Según el alcalde estaban jugando a la barra, «sin que hubiera lugar a dudas de ninguna clase», pero según el sargento se reunían «para dar lectura de unas hojas clandestinas» pese a que se les había advertido que no podían hacerlo por estar la provincia en Estado de guerra.³⁴⁷

³⁴⁷ Detenidos: Juan Pérez Labe (44, labrador, casado), Tomás Beguería Malón (24, labrador, soltero), León Beguería Villa (26, labrador, soltero), León García Biamonte (34, labrador, casado), Emilio Subirón Guinda (30, labrador, casado), Hilario Garcés Lobera (31, labrador, casado), Gregorio Arregui Acín (38, labrador, casado), Mariano Lanza Ruiz (22, labrador, soltero), José Beguería Arregui (19, labrador, soltero), Benito Convalía Cajal (41, casado), Daniel Sangorín

El alcalde Iluminado Pemán parece no tener más remedio que hacerse eco de la situación. Por las detenciones «se encuentra el vecindario al borde de demostrar su disgusto en forma que pudiera originar alguna alteración del orden público» pues, alega, «el desagrado con que se ha visto la detención referida por los vecinos es unánime». Indica que «a esta Alcaldía van llegando reiteradas quejas de vecinos en cuanto a la actuación de la Guardia Civil», y pide intervención para aclarar «algunas intervenciones de dicha Institución y para que se castigue, si procede, a los que injustamente puedan contribuir a sembrar torcidas opiniones con respecto a tan Gloriosa institución o [...] corregir a los individuos que hayan podido cometer actos que pudieran empañar el honor y la hidalguía de tan heroica Corporación». La situación local, termina, «es para tratarla con tacto, y confío en que nada desagradable habrá de suceder si se adoptan resoluciones encaminadas a cortar probables abusos que pudieran dimanar de cualquier esfera social». La comunicación del alcalde es elocuente, dado el contexto de resaca postrevolucionaria y represiva en que fue elaborada y el signo derechista de las instituciones locales. El gobernador accede a abrir una investigación... que llevará a cabo el capitán Enrique García Lasierra, quien comandaba los refuerzos que llegaron a Uncastillo en octubre y fue herido en la refriega posterior.³⁴⁸

Sin embargo, lo más interesante es analizar las justificaciones argumentadas en uno u otro sentido. En realidad, cuando el alcalde se dio cuenta de dónde se metía, rectificó el tono de su oficio, encontrándolo «algo exagerado en lo que quiso exponer, no expresándose bien su pensamiento, que fue redactado por el Secretario», así como las palabras sobre el «desagrado unánime» del vecindario por las deten-

Navarro (19, labrador, soltero), Matías Añanos Cervero (24, labrador, soltero), José Frago Pérez (29, viudo), Pablo Jarauta Sarralanga (49, labrador, casado), Andrés Vigo Torrea (24, labrador, casado), Saturnino Corrucho Villa (19, labrador, soltero), Faustino Biartola morlaca (29, labrador, casado), Ángel Zárate Ezquerro (20, labrador, soltero), Cándido Charles Guinda (23, labrador, soltero).

³⁴⁸ AGCZ, Leg. 2, exp. 4.

ciones. Se imponía el silencio y, sobre todo, no enfrentarse a la fuerza. El alcalde quiso apoyar su escrito manifestando que avalaban su opinión diversos vecinos pero éstos, interrogados por la Guardia Civil, rebajaron la importancia de los hechos, concedieron autoridad moral a la Benemérita para mantener el orden, y justificaron en algún caso las detenciones con el típico «algo habrían hecho». Todos esos declarantes, tenidos por buenos vecinos y amigos de la nueva autoridad, manifiestan ante el jefe de la Benemérita que «no tienen noticia que a la Alcaldía hayan llegado quejas sobre la actuación de la fuerza del Cuerpo», manteniendo «que el comportamiento de dicha fuerza es admirable, que proceden con arreglo a la Ley, reconociendo que si procede contra alguien es por ser sujetos de malos antecedentes y conducta, que éstos no guardaban respeto a la Autoridad».³⁴⁹ Se interrogó también a los hermanos Rived, que el alcalde denuncia fueron maltratados, añadiéndose que «se trata de dos jóvenes desvergonzados y de los que a altas horas se dedican a producir alborotos». El padre, interrogado por el juez, hizo constar que «prefería una bofetada a tiempo que sobre sus hijos recayera el peso de la justicia». Y sobre los detenidos de marzo se dice que todos eran «elementos de malos antecedentes» que, además, habían mostrado «actitud provocativa». De nada servirían al respecto las promesas del alcalde de interponer «toda su influencia para sacarles de la cárcel», ni manifestar que «si por él fuera ya estarían en la calle». El jefe resumía que en definitiva «no hay descontento en el vecindario por la detención de los individuos, ni han existido esas denuncias reiteradas, ni hay temor de alteración del orden público, pero sí existen innumerables personas que están satisfechas con la actuación de la Guardia Civil, la cual se acomoda a las circunstancias no con dureza, pero sí con la energía que el

³⁴⁹ Se tomó declaración a Mariano Escagüés, Emilio Luis Soterías, Gregorio Olano, Jorge Alaviano, Álvaro Guinda y Esteban Pérez. Dos de ellos, Olano y Alaviano eran concejales, y Emilio Luis hermano de un concejal del Ayuntamiento. Pero estaba claro que el alcalde y secretario habían medido mal las consecuencias de su informe.

estado de salvajismo y barbarie exige y se necesita para hacer entrar a esas gentes del pueblo de Uncastillo por el camino de la legalidad, respeto a la Autoridad y buenas costumbres».³⁵⁰

Pero este no iba a ser sino el inicio del enfrentamiento. En enero de 1935 tuvo lugar un nuevo episodio de tensión con el gran propietario Patricio López Monguilán cuando éste denunció al Ayuntamiento por pasar unos carros con motivo de la reparación de unos caminos por su propiedad. Según Monguilán el camino es «de herederos», por el que sólo pueden pasar las familias de éstos, mientras que según el alcalde «han pasado por él durante muchos tiempos todo el que lo han necesitado». Entre los vecinos que transportaban los carros y otros que se enteraron del hecho «surgió una protesta» que con la intervención del alcalde «pudo evitarse no llegara a una alteración de orden público», deteniéndose los trabajos «para evitar nuevas denuncias y rozamientos». Y sobre López Monguilán se apunta que «es un vecino que por causas que no son al caso, ha venido consintiendo hasta el presente infi-

³⁵⁰ El alcalde Iluminado Pemán no queda muy bien parado en el informe de la Guardia Civil: «Queda demostrado que el Alcalde en su escrito ha faltado abiertamente a la verdad al referir hechos inexactos y dando a entender el que la fuerza de la Guardia Civil puede provocar una alteración de orden público con su actuación, lo cual envuelve una injuria grave para el prestigio y buen nombre del cuerpo [...], si bien hay que hacer constar que el tal escrito está inspirado por el Secretario del Ayuntamiento, aunque éste hábilmente en su manifestación trata de cargar la responsabilidad sobre el Alcalde». El gobernador dio crédito a la información abierta por el capitán García Lasierra, multando con doscientas cincuenta pesetas tanto al alcalde como al secretario porque «todos los hechos denunciados han resultado inexactos». La multa era oficiada en los mismos días en los que tenían lugar las vistas por el juicio sumario por los sucesos de octubre del año anterior. Iluminado Pemán y Emiliano Bravo emitieron un recurso al gobernador para desmentir la «tendenciosidad» por la que les multaba el gobernador, en el que pedían disculpas y dejaban claro que «acatan, obedecen, respetan y sirven fielmente al Poder legítimo»: «No pues estuvo en nuestro ánimo ni propósito causar el más nimio perjuicio o molestia a nadie y menos al Benemérito Instituto de la Guardia Civil que solamente plácemes sin cuento le corresponden a su límpida historia, abriantada si cabe con las jornadas heroicas de los últimos días en las que si bien sacrificó en aras del orden y de la paz social, gran número de sus individuos hizo aumentar la gloria de la Corporación». Las multas quedaron condonadas en atención a la festividad del aniversario de la proclamación de la República y de las manifestaciones de protesta y adhesión al Instituto que hacen los interesados». AGCZ, Leg. 2, exp. 4.

nidad de atropellos en sus propiedades, tala de montes, etc., y cuando como ahora se hace respetar la propiedad y las personas, se opone a una cosa justa por el mero hecho de ser contrario a la política de este Ayuntamiento». En efecto, «Octubre» había conseguido polarizar a la sociedad uncastilleira, y para algunos cualquier cosa que sonara a República, aunque fuera conservadora, era motivo de insatisfacción, cuando no de crítica y combate abierto.³⁵¹

Tras el conocimiento de la sentencia por los sucesos de octubre los resentimientos y acusaciones dieron lugar a enfrentamientos personales y nuevas situaciones de tensión. El sargento Victoriano Quiñones vuelve a tomar posesión del mando del puesto de Uncastillo, debiendo realizar a mediados de abril un informe por «insulto a la fuerza armada». Dos parejas patrullaban por el barrio de San Felices, dando el alto a un Beguería procesado y en libertad provisional por el levantamiento socialista. «Al intentar cachearle el guardia opuso fuerte resistencia», por lo que éste «tuvo que reducirle utilizando el fusil como maza». Al entrar en su casa «fue insultada dicha fuerza» por Beguería y su madre: «criminales, asesinos, cobardes, bandidos, hijos de puta y que ya la pagarían todas juntas», asomándose a las ventanas de la calle más gente intimidando a los guardias. «Por estar habitado dicho barrio en su mayoría por personas extremistas, el guardia Díez hizo un disparo retirándose todas las personas de las ventanas y procediendo a la detención de la madre y el hijo». Por esas nuevas detenciones apunta Quiñones que «existe malestar entre el elemento exaltado de esta localidad y pudiérase ser que se intentara algún acto violento, no considerando suficiente la fuerza destacada para poder contrarrestarlo». Al día siguiente tenía lugar una nueva concentración de fuerza, veinte números, una escena que para muchas familias era algo más que un mal augurio.³⁵²

³⁵¹ AGCZ, Leg. 2, exp. 4.

³⁵² AGCZ, Leg. 2, exp. 4.

También por abril tendría lugar un conflicto entre las mujeres de dos familias enfrentadas con el recuerdo y la experiencia de octubre como telón de fondo. Dos hermanas hijas de un importante propietario local (quien durante la huelga de junio de 1934 reclamó fuerza en su finca por temer coacciones de los campesinos), dijeron ser acosadas por la vecina Catalina Arregui con «palabras groseras», algo explicable según informes de la Guardia Civil por su carácter «díscolo y pendenciero», y por «el odio y la venganza» que tiene la familia por creer que ellos «acusaron a su marido» por los sucesos de octubre. Madre de «unos siete u ocho hijos», fue además condenada por lesiones leves a otra vecina a arresto durante cinco días. Sin embargo, lo interesante sobre este caso es la carta escrita por el propio propietario Pueyo, dirigida a Domingo Caudevilla en búsqueda de una recomendación ante el gobernador, pues «colocado en tan buen lugar para ello, puedes influir con dicho Sr.» Según apunta, «la situación por la que atraviesa este pueblo es bastante peor que antes del movimiento de octubre, ya que si bien entonces eran solamente los hombres los que con su maldad desencadenada nos perseguían, hoy se han sumado a ellos las mujeres». Como ya se ha apuntado, el motivo de la animadversión tiene que ver «con haber declarado yo ante el juez que su marido fue uno de los que con intención de recoger las armas se colocó en grupo delante de mi casa». Pero «como los otros que lo delataron son del gremio revolucionario, contra éstos ella no da, sólo las ha tomado con mis hijas sin motivo alguno, pues mi declaración en nada le perjudica, como así lo reconoce su marido y se lo manda decir, pero por lo visto ésta se encuentra mal de la cabeza y no hay quien le haga razonar». Todavía en septiembre coaleaba el asunto. El nuevo comandante del puesto Eduardo García denuncia que la familia de la citada Arregui «viene provocando «grandes escándalos contra familias honradas y de orden» tratando «de producir una alteración de orden público excitando los ánimos a las demás mujeres que tienen sus maridos o hijos en la cárcel». Recuerda en su informe el

asunto con las hermanas Pueyo, y denuncia también que su hermana produjo otro altercado «injuriando al Sr. cura párroco Emiliano Bayarte», repitiendo al día siguiente «estos escándalos» una hija suya de veinte años. «Y como quiera que la familia está dispuesta a seguir en tal actitud, que tienen atemorizadas a muchas familias amantes del orden, tengo el honor de ponerlo en el superior conocimiento [...] por el peligro que representa la tal familia en esta Villa».³⁵³

Lo cierto es que durante aquellos meses posteriores a las sentencias sumarias la referencia de octubre resultó inevitable en todos los órdenes del discurrir político y social en el país, algo que condicionó acciones y discursos. Desde bien pronto la liberación de los presos se convirtió en motivo de unión y movilización en la izquierda, un banderín de enganche que posibilitaba alianzas olvidadas. En la articulación del discurso de la derecha «octubre» simbolizaba todo lo que debía eliminarse, la prueba palmaria de que de la mano de los sindicalistas y revolucionarios la nación y los valores que la sustentaban iban rumbo al desastre. Pese a eso, en los primeros días de abril el nuevo Ayuntamiento de Uncastillo tramita la solicitud de indulto para los condenados a muerte, entre los que se contaba Antonio Plano. Pero al mismo tiempo se aprueba un acto de desagravio a la Guardia Civil consistente en la entrega de una «bandera nacional». El acto no tendría lugar hasta septiembre, celebrándose en el cuartel, «si bien con sencillez, también con brillantez», pronunciándose «discursos patrióticos con arreglo al caso del acto» y terminando con un «lunch». El alcalde Iluminado Pemán manifestaba en su comunicación al gobernador cierta sensibilidad hacia la situación social que atravesaba el pueblo. «Fueron siempre propósitos de este Ayuntamiento de hacer la entrega de referencia con la mayor sencillez y sin celebrar acto alguno dadas las circunstancias de dolor por que atraviesa buena parte del vecindario», pero a última hora «y con enorme precipitación» se cursaron invitaciones a autoridades locales y

³⁵³ AGCZ, Leg. 2, exp. 4.

funcionarios públicos, por lo que pide disculpas por no haber invitado al acto al gobernador.³⁵⁴

... y movilización política

Pese al intento de descabezamiento y persecución de las directivas de la izquierda el recuerdo de octubre produjo una intensa movilización política. En las instituciones locales los nuevos poderes locales impuestos en los concejos que previamente tenían color socialista, trataban de rehacer los órdenes de la vida municipal en un nuevo sentido. Se trató de fomentar una diferente cadena de favores a través de instrumentos como los censos campesinos, la beneficencia o la cesión de parcelas. En Uncastillo algunas medidas que Antonio Plano consiguió aprobar con su empeño personal y aplicar con unas desconocidas condiciones de equidad, como el reparto de jornales y de trigo a las familias necesitadas, pasaron a la historia. Los propietarios locales e intermediarios trigueros vieron llegada la oportunidad, gracias al contexto político favorable que propiciaba la CEDA en el poder, de satisfacer unos intereses que habían sido frenados por la legislación republicana. Propietarios, productores e intermediarios presionaban al gobierno para «llegar lo antes posible a la libertad de contratación en el comercio de trigos y harinas, suprimiendo toda clase de restricciones y dejando lugar los empujes económicos que naturalmente se produzcan en cada momento en esta importante rama de nuestra economía». Hasta ese momento el gobierno se ve «obligado a intervenir» en el mercado del trigo «ante la persistente demanda de los productores», y en ese estado «no ha de tolerar agresiones ni menoscabo de la autoridad, productos ambos de la codicia de unos y del contubernio inexplicable de elementos antagónicos», difíciles de orientar «en una obra de provecho recíproco».³⁵⁵ Así, siguieron formándose las comisiones del

³⁵⁴ AGCZ, Leg. 2, exp. 4.

³⁵⁵ Decreto sobre el control de las cartillas de conducción de trigo publicado en la Gaceta de Madrid en 1 de septiembre de 1935.

control de trigo, pero con una composición favorable a los intereses agraristas y en aplicación de una legislación sin apenas restricciones. Si en Uncastillo se habían destinado en 1933 alrededor de dos mil seiscientos quintales métricos a la venta, en esa cifra aumentó hasta cuatro mil quinientos quintales métricos en 1935.³⁵⁶ Y luego estaba la legislación social. En mayo de 1935 los propietarios de Uncastillo denunciaban ante el Jurado Mixto las bases de trabajo firmadas en 1934 por las representaciones obrera y patronal.³⁵⁷

La mejor plasmación de lo que podía significar un cambio en la política local puede rastrearse en algunas partidas presupuestarias que se modificaron a lo largo de los años de la República. La que más drásticamente se recortó con el nuevo gobierno local fue la de «montes», que había adquirido en los presupuestos previos una importancia notable. De las 14.000 pesetas presupuestadas para esta partida en 1931, se pasa a destinar tan sólo 2.000 en 1935, paralizando de ese modo toda tarea de deslinde y pago de peritos, abogados y expertos agrónomos que pudieran revertir terrenos al municipio, como se había comenzado a realizar en el primer bienio de gobierno republicano. De igual modo, de las 9.000 pesetas que se destinan a educación en los dos primeros presupuestos, en 1935 se decide que tan sólo se destinen 6.000, una reducción de aproximadamente un treinta por ciento, pese a las crónicas y a veces graves carencias en material de las escuelas en materia de calefacción y enseres escolares y didácticos. Y de igual modo, llama la atención las fuertes subidas que experimentan en el último presupuesto aprobado la partidas destinadas a beneficencia y asistencia social, una decisión probablemente relacionada con la dramática situación de las familias de los detenidos durante todo el año, y con la tendencia a la práctica de la beneficencia como medio de extensión del consenso y la subordinación.

³⁵⁶ AMU, Leg. 175, exp. 29.

³⁵⁷ AMU, Leg. 175, exp. 26.

TABLA 7: COMPARACIÓN DE LOS GASTOS DE PRESUPUESTOS DE DIFERENTES EJERCICIOS. UNCASTILLO. 1930-1935.

	1930	1931	1933	1935
Obligaciones generales	25.070,63	25.770,63	36.980	26.743,28
Representación municipal	1.400	2.500	2.000	1.800
Vigilancia y seguridad	3.467	3.467,65	3.467	5.590
Policía urbana y rural	2.250	13.065	13.100	12.565
Recaudación	250	450	50	
Personal y material oficinas	16.310	17.410	19.360	18.910
Salubridad e higiene	9.411	9.994,69	9.645	10.955
Beneficencia	4.469,9	7.850	8.100	11.126,68
Asistencia social	890	1.190	900	1.700
Instrucción pública	9.730	9.980	8.980	6.683,3
Obras públicas	3.000	3.500	5.500	5.000
Montes	6.447	14.690	4.190	2.190
Fomento de los intereses comunales	2.000	3.000	3.000	4.700
Servicios municipalizados	2.000			
Mancomunidades	2.000			
Entidades menores	2.000			
Agrupación forzosa del municipio	1.300	1.100		
Imprevistos	2.925	3.500	3.000	2.500
Resultas	99.940,69	117.467,97	118.272	110.463,26

Fuente: AMU, Actas municipales.

Lejos de la política institucional, el socialismo en Cinco Villas sólo podía moverse en la clandestinidad. Encarcelados los cuadros directivos y un buen porcentaje de la militancia obrera, con la vigilancia y el control efectuado por las fuerzas del orden sobre cualquier intento de movimiento colectivo, la participación pública y social no resultaba nada sencilla. En el

censo campesino de 1935, como era de esperar, no aparece sociedad obrera alguna registrada. Ni existían los recursos ni la oportunidad para volver a organizarse. Frente a esta situación, los sectores conservadores gozaban de una posición privilegiada para implantar en poco tiempo estructuras políticas y de ocio en la localidad afines a su ideología y usos sociales. Cualquier nueva organización, eso sí, debía de dejar clara su entusiasmo por el orden. Así, en diciembre llegó al Gobierno Civil una solicitud para constituir la sociedad de recreo «La Estrella Dorada» en unos locales de la calle Barrio Nuevo. Su objeto era «la asociación y amigable trato de varias personas, sin distinción de matices políticos, y proporcionarles aquellas distracciones de buena sociedad como bailes, conciertos...». Se estipula que «durante las horas de recreo se guardará la mayor compostura, procurando los socios no molestar el bienestar general de los demás con voces excesivas, movimientos bruscos, etc.», quedando «terminantemente prohibido el ir fumando durante la permanencia de cada bailable». Además, «el buen orden de la sociedad exige que ningún socio dirija reconvenciones a los músicos».³⁵⁸ Dos meses más tarde de la constitución de esta sociedad lo hace la sección de Uncastillo de «Acción Popular Agraria». Su objeto era «la defensa político social de Religión, Patria, Familia, Trabajo y Propiedad», y quedó dirigida por Antonio Caudevilla como presidente, Félix Canales como vicepresidente, José María Arnau como secretario, Daniel Zamora como vicesecretario, Francisco Lear como tesorero, y Venancio Lapieza y Ramón Gay como vocales de la misma. Conectada con la central zaragozana a través de la estructura del Sindicato Central de Aragón, de corte agrarista católico, tenía como fin fortalecer el binomio propiedad y religión en el campo.³⁵⁹

³⁵⁸ La sociedad estaba presidida por Paulino Canales, y tenía por vicepresidente a Fermín Arregui y por secretario a Amado Corrucho. AHPZ, Asociaciones Políticas.

³⁵⁴ En Zaragoza la sociedad estuvo presidida por el abogado Emilio Bas, y las juventudes por Juan Antonio Cremades. La referencia de Uncastillo en AHPZ, Asociaciones políticas.

Sin embargo, y pese al contexto desfavorable, a mediados de año se pudo constituir en Uncastillo la sociedad de Juventudes de Izquierda Republicana siguiendo «la disciplina del Partido y de acuerdo con la declaración política y Reglamento Nacional de la Juventud». Bajo esas premisas, se planteaba «estructurar un programa de educación y de formación política que deberá resolverse de forma armónica», así como «propagar el ideario de Izquierda Republicana y de su Juventud por cuantos medios de difusión sean precisos». Republicanismo tolerado, pero nada que oliera a izquierda obrera. En verdad que durante aquellos meses lo que más importaba a las familias de Uncastillo era que los hombres salieran pronto de la cárcel de Zaragoza. La nueva disposición del socialismo, con una corriente «izquierdista» liderada por Largo Caballero y decididamente partidaria de una política revolucionaria discutía con la corriente «centrista» de Prieto y partidario de la colaboración con el republicanismo de izquierda. Entre ambas posiciones, un renovado Partido Comunista que se pronuncia por la constitución de un «frente único de clase» capaz de derrotar a «las derechas». En ese juego de tácticas de alianzas se comenzaba a dibujar el «bloque popular» que, bajo el objetivo común de conseguir la amnistía para los presos políticos, comenzaría a concitar nuevas y firmes adhesiones colectivas.

En Ejea hubo en agosto un detenido por un delito «contra la forma de gobierno», acusado de recibir por correo un paquete que contenía hojas impresas, sin firma ni pie de imprenta, una de ellas encabezada con las iniciales CNT y FAI y el titular «Comité Nacional Pro-presos». No se reproduce el pasquín en la sentencia, aunque se apunta que contiene dos columnas de prosa que ocupan toda la primera plana, «y en las que en términos vivos y exaltados se censura a los Ministros, al Director General de Prisiones, al régimen penitenciario y al Cuerpo de Asalto», terminando con la arenga «acción constante y eficaz os pide en nombre de los presos [...] El Comité Nacional pro-presos». También había otras encabezadas con «Confederación Regional del Trabajo de

Aragón, Rioja y Navarra, al pueblo: ¡Por la consecución de una amplia amnistía!», conteniendo también «términos exaltados y violentos», terminando con un «¡Viva la Amnistía!! ¡Libertad para todos los presos y condenados!». Parece que el inculpado, una vez recibidos, los comenzó a repartir en el café La Goyesca de Ejea.³⁶⁰ Pero también en Sos aparecieron hojas similares, en octubre de 1935. Acusado de «excitación a la sedición», un vecino era representado en su defensa por el abogado José Martí Laguardia, el mismo que había defendido a buen número de los inculpados de Uncastillo por los sucesos de octubre. Las hojas dan cuenta de la opinión socialista sobre la situación política y la necesidad de un reavivamiento del compromiso de la militancia:

«Juventudes Socialistas a todos los trabajadores.

La Agrupación de Juventudes Socialistas local, atenta siempre a los intereses de la clase que representa se cree en el deber de ponerse en contacto con todos los trabajadores en general por medio del presente manifiesto a fin de hacer renacer la confianza que siempre debimos merecer pese a las excepcionales circunstancias por las que atravesamos. No se debe olvidar que las huelgas habidas y desarrolladas por nuestra organización en el pasado año han traído consigo una serie de enseñanzas que tienen que servirnos de ánimo y consejo para nuestra futura actuación. La reacción que es sabido de todos está formada por los grandes propietarios y terratenientes, amparándose en una religión y un patriotismo que no sienten, pretenden y sus hechos lo demuestran, querer hacernos retroceder a aquellos tiempos que por vergüenza y dignidad no hemos de recordar. No quieren reconocer que los hechos determinantes del 5 de octubre de 1934 fueron consecuencia del ensañamiento salvaje llevado a cabo contra la clase explotada. Creen que con el encarcelamiento de nuestros mejores militantes y el cierre de nuestros centros van a ahogar las voces de protesta de todos aquellos que demandan una justicia social equitativa e igualitaria. Pero aún no conformes con todo esto para mejorar y salvaguardar sus intereses recurren a la edificación de una fortaleza en uno de los puntos más estratégicos del pueblo, demostrando

³⁶⁰ AHPZ, Sentencias criminales, 1935, núm. 493.

con ello que no quieren una convivencia social con los necesitados, sí que nuestro aniquilamiento. Al mismo tiempo se ríen de la noble petición de los trabajadores para que se construyan unas escuelas donde poder llevar a nuestros hijos y adquieran una educación laica, puesto que esto significaría la consecución de cultura por parte del pueblo, cosa que no les interesa porque así creen que podrán seguir imperando más tiempo en “sus dominios”.

Trabajadores de la tierra, proletarios, trabajadores todos que tengáis que vivir de un jornal, arrendatarios pobres, pedir vuestro ingreso sin pérdida de tiempo en nuestra organización, único procedimiento para hacer frenar los desmanes que cometen con nosotros los burgueses, para obligar a que se dé trabajo a todos los parados y para conseguir nuestra total emancipación. Hay que elegir entre este dilema: o fascismo con Gil Robles a la cabeza, lo cual significa hambre, miseria y cárcel o Socialismo, que quiere decir: bienestar, progreso y libertad. Por la unión de todos los trabajadores a la edificación socialista. Viva la revolución social. Viva las juventudes socialistas. Sos, octubre, 1935.³⁶¹

El descontento en las Cinco Villas era más que evidente. En Valpalmas el alcalde escribe al gobernador con cierta desesperación. «En este pueblo se están cometiendo actos delictivos escandalosos [...] teniendo al vecindario atemorizado», relatando varios robos, talas en propiedades, un pajar incendiado, un poste telegráfico cortado. «En el orden social y político ocurre mucho más», y pide una concentración de fuerza en el pueblo. «Remedios para este mal esta alcaldía no los sabe, pero acude a V.E. para que se digne informarse sobre el particular y en su caso tomar las medidas que su recto criterio le dicten». Por su parte, el nuevo gobernador civil de Zaragoza daba cuenta en octubre de 1935 al Ministro de Gobernación del «ambiente en el aspecto social» que había en las Cinco Villas, «algunos de cuyos pueblos tomaron parte activa en el movimiento de Octubre, dando lugar a lamentabilísimos sucesos como los de Uncastillo, Tauste y algunos otros». Como consecuencia de ellos, «muchos vecinos

³⁶¹ AHPZ, Sentencias criminales, 1935, núm. 548.

de esos pueblos están actualmente procesados y presos, y esto mantiene entre sus familiares, amigos y afines en ideas un fermento de agitación y de ansias de revancha [...] que se traducían en incendios de mieses y otros atentados que a la par que saciaban venganzas personales contribuían a sostener un estado de intranquilidad y recelo propicio a que a su amparo se incubaran movimientos de mayor trascendencia». Y menciona al respecto un plan desbaratado para efectuar una «marcha sobre Zaragoza de los extremistas de la comarca citada y de los pueblos limítrofes», y que tenía por finalidad «conmemorar y aun reproducir si era posible los últimos sucesos revolucionarios de Asturias», y en todo caso «perturbar la paz pública de la ciudad e impedir la celebración de sus ferias y fiestas». No es fácil de creer que se proyectara algo más que una manifestación para pedir la liberación de los presos, pero el gobernador vio urgente evitarlo «privando a los pueblos de aquellas personas que los dirigían en incitaban», deteniendo a «los que más se significaban en estas actividades».³⁶²

A la altura de principios de 1936 y conforme se acercaba la fecha de las nuevas elecciones, se intensificó la movilización política en forma de mítines y manifestaciones. Desde la cárcel los detenidos se organizan y publican una carta en *Vida Nueva* que entra de lleno en la campaña electoral, una carta larga e interesante por cuanto vuelve a justificarse la acción de hombres destacados en el socialismo regional en los sucesos de 1934, porque se hace una revisión de la historia reciente en el ámbito rural, y porque Antonio Plano firma en primer lugar como primera autoridad moral entre sus compañeros. Todos afirman en efecto estar limpios «de sangre y de pecado», y haber intervenido en los sucesos de 1934 guiados únicamente por «la aspiración a una vida mejor, más generosa que la presente». Entonces «quisimos [...] que la República española, desviada del camino que le trazamos quienes le dimos la vida, fuera realmente, como promete su

³⁶² AGCZ, Leg. 2, exp. 3.

Constitución, una República de trabajadores de todas clases». Un trabajo que avalan las «callosidades» en las manos de muchos de los firmantes, cultivadores de «una tierra cuya propiedad retienen otros que se llaman agrarios, sólo porque cobran la renta». Y detallan el desastre que ha supuesto la entrada de esos «agrarios» en el poder, conseguido mediante «promesas que se han traducido luego en desventuras».

«Que os digan por qué destrozaron toda la legislación obrera de Largo Caballero; que os contesten cómo y por qué, después de inutilizar la Reforma Agraria que votaron las Constituyentes, aprobaron ellos una Ley de Arrendamientos que es una infamia, porque con ella se expulsa de la tierra a familias que llevan más de cuarenta años trabajándola: que os expliquen por qué no pudisteis vender vuestra cosecha mientras los harineros y acaparadores, protegidos suyos, hacían un negocio monstruoso con el trigo comprado a bajo precio; que os justifiquen por qué mientras se morían de hambre los trabajadores del campo y aumentaba en proporciones aterradoras el paro obrero, votaban ellos, violando la Constitución, 16 millones de pesetas para el clero. Y que os hablen también del estraperlo y de todos los latrocinios cometidos cuando Lerroux les servía de mascarón de proa, para fingir un republicanismo que no sentían ni sentirán jamás. Ahí tienen un índice magnífico de temas a desarrollar en su propaganda electoral.

Son ellos los que tuvieron la avilantez de acusar de inmorales a los Ayuntamientos populares destituidos a mano airada. Muchos de los que firmamos este manifiesto fuimos alcaldes o concejales de aquellos Ayuntamientos, los únicos legales que ha tenido la República. Presos como estamos, inhabilitados para la defensa, reclamamos dos cosas: que se pongan al descubierto nuestras inmoralidades y que ellos respondan de las suyas. Aceptamos por juez, y desde ahora, a la opinión pública. Que ella diga si nuestra conducta fue honesta y si nos preocupamos del interés público. Ciertamente que nuestra voluntad se estrelló a veces. Más fuerte que nosotros fue la resistencia que nos opusieron los triunfadores de 1933. Aún recordamos la expresión con que solían despedir a los obreros que iban a pedirles trabajo: «Que os

lo dé la República. Que os lo proporcionen los alcaldes socialistas". Y recordamos también que, por su culpa, sólo por su culpa, se disolvieron las Cortes Constituyentes sin acabar la Reforma Agraria, sin votar la Ley de Arrendamientos y sin que pudiera aprobarse el rescate de bienes comunales. Fracasó el esfuerzo tenaz de los diputados y los alcaldes socialistas. El caciquismo se había incrustado en la República y nos tenía las manos atadas. Así es como defendieron los intereses de los pueblos las derechas. ¿Con qué dignidad pueden ahora pretender que nadie les guarde respeto?»

Y terminaba apelando a la memoria social y política de los trabajadores en el último año y medio para pedir el voto para el Frente Popular. Refrescan esa memoria recordando entre otras cosas que los de la derecha fueron quienes «hicieron [...] venir de África a los moros para que conquistaran Asturias cazando mineros», y los que «impidieron que volviera a los Municipios el patrimonio comunal que ellos, o sus antepasados, les arrancaron». Subrayaban que no pedían misericordia ni caridad, «lo que pedimos es que se recuerde lo que ellos son y significan», pues la derecha no ha hecho «otro milagro que el de convertir el pan en piedras».³⁶³

Febrero de 1936. El regreso de Antonio Plano

Por aquel entonces Jesús Pueyo no era sino un muchacho de quince años. Su padre, Jesús «de la Virgen», había permanecido en prisión varios meses hasta que fue absuelto, y su memoria todavía aparece impregnada de esas valoraciones y vivencias con las que creció, y de otras mucho más traumáticas que marcarían trágicamente su vida, y que quedaron

³⁶³ Firmas que aparecen: ANTONIO PLANO, Babil Tudela, Alejandro Armingol, Joaquín Gómez Bea, condenados a muerte. Segundo Pérez, Santiago Casajús, Julián Gómez, Alejandro Pérez Cabrejas, Daniel Pérez Cabrejas, José Lahuerta, Valentín Martínez, Apolinar Navarro, Joaquín Yoldi, Bernardino Beltrán, Gregorio Buñuel, Eusebio Cembrano, Ignacio Cembrano, Mariano Gil, Rafael Guillermo Asín, Gregorio Lozano, Pascual Ibáñez, Hilario Lacleta, Mariano Ortubia, Santos Echegoyen, Carlos Larraz (siguen las firmas hasta 227). VN, 8-2-1936.

fijadas en su carácter y su modo de ver el mundo. Sobre aquel mes de febrero, y sobre la amnistía de la gente encarcelada por lo de octubre, afirma que «fue porque vinieron las elecciones y entonces anarquistas y no anarquistas, y de la CNT y compañía que no quería votar, votaron todos, y me acuerdo que un tal Gil Robles decía: «a por los trescientos», pero los trescientos fueron los de la República. Fuimos nosotros que ganamos los trescientos». Hablaba de escaños, claro. El conocimiento de los resultados volvió a despertar expectativas de cambio en los sectores populares que, movilizados durante la campaña, percibieron tras la victoria que había llegado el momento de echarse a la calle. Jesús Pueyo recuerda una manifestación en ese mismo mes de febrero de 1936 en Uncastillo, en la que

«un capitán de Asalto, que comprendió bien la situación, dice: “en este pueblo sobramos todos, aquí lo que hace falta es 8 ó 10 agrónomos y que repartan la tierra. Esta gente está muerta de hambre, y quieren dar de comer a sus hijos”. Y entonces, como veíamos que los agrónomos no venían, porque las cosas de palacio siempre suelen ir despacio, entonces qué pasó, que nos lanzamos a la tierra pura y simplemente, a repartir la tierra».³⁶⁴

En efecto, llegó la victoria electoral, y con ella la tan ansiada amnistía. El día 22 los liberados de Uncastillo partirían en un autobús de regreso a sus hogares.³⁶⁵ Puede imaginarse el recibimiento de las familias, mujeres, hijos, padres, en la entrada del pueblo donde habría de parar el transporte, y los rostros alegres y emocionados de los hombres del pueblo que volvían de la cárcel. El día anterior se habían reunido, bajo la presidencia del alcalde Pemán y según órdenes del gobernador, los concejales «con el objeto de reponer en sus cargos de concejales de este Ayuntamiento los que siéndolo por elección popular fueron suspendidos en octubre de mil novecientos treinta y cuatro». Y habían tomado posesión los

³⁶⁴ Entrevista a Jesús Pueyo, 16-6-2007.

³⁶⁵ *DN*, 23-2-1936.

antiguos concejales León Garín, Pío Pueyo, Francisco Fernández, Inocencio Jiménez y Manuel Cortés, «sin perjuicio de hacerlo con los que ahora no se hallan presentes». Dos días más tarde habría sesión extraordinaria para nombrar alcalde y teniente de alcalde a Antonio Plano y a Manuel Lasilla, sesión a la que no concurrirían los representantes derechistas. Comenzaba así un nuevo ciclo de gobierno municipal con un objetivo muy claro, retornar a las políticas sociales y actualizar la legalidad de las gestiones realizadas en el primer bienio. No hubo tiempo más que para preparar el terreno de esos cambios, antes de que los enemigos de ese nuevo impulso social republicano decidieran frenarlo de manera definitiva y cruel.

Las primeras sesiones transcurrieron entre la aprobación de las cuentas de los ejercicios de 1932 a 1934, las anulaciones de concursos de funcionarios y las reposiciones de funcionarios municipales suspendidos tras octubre. Y en seguida algunos temas se definieron como vertebradores de la política local. Uno de ellos fue la construcción de las nuevas escuelas, un proyecto que ya estaba realizado y que precisaba de ser aprobado por la autoridad superior. El 11 de marzo Antonio Plano comienza la sesión planteando la cuestión «de si había de solicitarse del Estado la creación de Escuelas en esta localidad según ha sido el deseo del vecindario, reconocido por el Ayuntamiento en otras sesiones», por considerarse insuficientes las existentes, «máxime ahora en que habrá de cesar un colegio de carácter religioso que existe en la población, con motivo de la sustitución de la enseñanza religiosa» que el nuevo gobierno pretendía reemprender. Se acordó en efecto solicitar del Estado la construcción de un edificio escolar para dos escuelas de niños, dos de niñas y cuatro de párvulos, facilitando el Ayuntamiento el solar para comenzar la obra.³⁶⁶ De igual modo se acordó solicitar un porcentaje del presupuesto de la Mancomunidad destinado a sanidad para construir un nuevo depósito de cadáveres y un botiquín,

³⁶⁶ AMU, Actas municipales, 11-3-1936.

comprar un analizador de leche para evitar enfermedades o tratar de agilizar un proyecto para la traída de aguas.

De igual modo surgió con fuerza el tema de conseguir fondos para el alivio de la crisis de trabajo. El concejal Fernández proponía en marzo gastar las partidas destinadas a obras «a fin de dar algunos jornales a los más necesitados», contestando Plano que la propuesta es «plausible», pero no ve una solución definitiva para los trabajadores que «se les repartan para todos cuarenta o cincuenta jornales, con lo que ni a razón de uno podrá tocarles [...] para que los trabajadores jornaleros tengan ocupación no hay como llevar a cabo alguna de las obras que tiene en proyecto el Ayuntamiento». En la siguiente sesión se leyó una instancia firmada por trescientos veinticuatro vecinos solicitando a la Alcaldía medios para combatir el paro obrero «o cualquier otro recurso tendente a facilitar recursos a las muchas familias necesitadas de la población». Plano respondió que dado que se habían paralizado «las parcelaciones de terrenos que habían de ponerse a disposición de los vecinos pobres» proponía se designase una comisión del Ayuntamiento para entrevistarse con el gobernador civil de la provincia.³⁶⁷ Y en cuanto a actuación política, destaca la adhesión a una circular del Ayuntamiento de Ejea «en la que invita a este Ayuntamiento a solicitar del Excmo. Sr. Presidente del Congreso de los Diputados se apruebe por el Parlamento un proyecto de ley por el que se faculte a los organismos del Estado, Región, Provincia y Municipio para separar a todos aquellos funcionarios públicos que combatan a la República». En esa misma sesión y también por unanimidad, se acuerda adherirse a la campaña iniciada por la Comisión organizadora Pro-Estatuto Aragonés establecida en Caspe con 50 pesetas.³⁶⁸

Pero como no podía ser de otro modo, y de la mano de Antonio Plano, el tema de los comunales retornó a la agen-

³⁶⁷ AMU, Actas municipales, 25-3 y 5-4-1936.

³⁶⁸ AMU, Actas municipales, 22-4-1936.

da de los concejales desde el primer momento. El concejal Inocencio Fernández planteaba la revisión de la concesión de parcelas para llegar a «su más exacta y justa distribución entre los vecinos». En la siguiente sesión se da cuenta de un escrito firmado por varios vecinos pidiendo al Ayuntamiento el reparto de tierras «para adjudicarlas en arriendo a los vecinos no pudientes». Plano hizo ciertas consideraciones sobre el asunto, apuntando que «tiene noticias fidedignas [...] de que es proyecto del Gobierno hacer leyes al respecto por lo que considera impaciencias (de fácil explicación y naturalidad en quien se halla privado de lo más elemental para subsistir), pero que debe aguardarse un poco más y estará resuelto el problema de una manera legal y seguramente satisfactoria para la clase menesterosa». Al respecto, subraya, «debe haber absoluta confianza en el Gobierno que tan acertadamente rige los destinos de la Nación, esperando sabrá satisfacer a las clases trabajadoras, para corresponder así a la confianza que éstas han depositado en él». ¿Es este el discurso de un sanguinario y revanchista revolucionario? No lo parece. Más bien da la sensación de andar buscando un respaldo legal que avalase las nuevas acciones a emprender por el poder constituido, como el resto de la corporación. Manuel Lasilla había acudido pocos días antes como alcalde ejerciente a una reunión en Ejea convocando a los alcaldes de los partidos de Ejea y de Sos con el fin de detallar la conformidad y envío de una petición al Gobierno para que tramitase con urgencia la publicación de Ley sobre rescate de bienes comunales.³⁶⁹

El día 25 de ese mismo mes el alcalde insiste en que el asunto es «de suma trascendencia e interés para esta villa», cuya resolución «se enfocaron las mayores ilusiones de él y sus correligionarios por ver de poder vivir el día en que por disposición de la ley, se devolviese a los Ayuntamientos lo que les pertenecía y que arbitrariamente se les desposeyó». Hasta aquel momento no pudo ver cumplidos «los anhelos de muchos pueblos que, como éste, se les ocupó lo princi-

³⁶⁹ AMU, Actas municipales, 4 y 11-3-1936.

pal de su patrimonio, pero actualmente es un hecho el rescate de esos bienes». A la vista de esas consideraciones, el Ayuntamiento considera «de urgente necesidad resolver en su término municipal la cuestión social que plantea la falta de tierra cultivable en sus comunes, mermada tradicionalmente por las inclusiones de terrenos comunales en fincas de propiedad particular». Un despojo que «no podía sostenerse sin grave riesgo de perturbaciones sociales» por ser la causa «de la angustiosa situación de gran número de vecinos que poseyendo todos los elementos del capital fijo y móvil para el cultivo, carecen de tierra donde emplearlo juntamente con su esfuerzo, por haberse arrebatado a su Municipio en proporción en cada partida y aun en cada finca suficientemente conocida según los datos de los amillaramientos y aun del Registro de la propiedad».

Con tales premisas «teóricas» y justificaciones sociales, había llegado el momento de actuar. El Ayuntamiento acordó en primer lugar y en virtud del decreto correspondiente de 1931, «reclamar para sí de hecho y de derecho todas las detenciones de terreno realizadas en sus montes comunales de cualquier tiempo, por cuanto que según la ley de Reforma Agraria [esas apropiaciones] no pueden ser justificadas mediante la prescripción» de los derechos de los campesinos, pues no prescribe «el dominio que el Municipio en representación del común de vecinos tiene sobre sus tierras comunales». Se aprueba además que la Junta local de Policía Rural se reúna lo antes posible para, con el asesoramiento de oficiales de Amillaramientos, Registro de la Propiedad y Distrito Forestal, determinar la cantidad de tierra reclamada y «declararla segregada de la finca particular a que estaba unida», incorporándola al Patrimonio comunal del Municipio y levantando el acta correspondiente de la operación. Además se acordaba que si existía pleito sobre la parcela, sería la Junta de Policía Rural la que debería emitir dictamen final, pero dando autorización al cultivador para que en ese tiempo siguiera trabajando la tierra. De igual modo, de cada expediente se habría de remitir certificado al Instituto de

Reforma Agraria para que amparase la ocupación «hasta que se publique la Ley de Rescate de Montes Comunales».³⁷⁰

El tiempo se aceleraba, empujado por la frustrante experiencia de los años precedentes. El 20 de mayo se aprobaba la parcelación de la tierra que había remitido en una instancia la UGT local, dictaminando que para llevarla a efecto «con la mayor rapidez posible» se entregue a cada copartícipe una hoja declaratoria. Al tiempo, los sindicatos locales plasmaban su posición en la nueva correlación de fuerzas políticas, firmando unas nuevas bases de trabajo entre patronos y representantes de UGT y CNT, y con asistencia de Plano y de un inspector de Trabajo. La jornada «de sol a sol» quedaba para el olvido, fijándose las ocho horas con descansos cortos, y pagos al trabajador si hubiera que suspender la jornada por inclemencias meteorológicas (dos horas si contaba media hora de trabajo, medio jornal si pasaba de esa media hora, y el jornal entero si la suspensión era por la tarde). Los jornales de siega y trilla superaban los de las últimas bases, determinándose otras cuestiones como que «los menores de diecisiete años no podrán hacer trabajos pesados, como acarrear mies y cargar sacos», y la obligación de nombrar un delegado de tajo para los obreros contratados en la Bolsa de Trabajo de un mismo patrono, quien deberá repartir los jornales. Además, se trató de beneficiar a cuantos obreros en paro había en el pueblo, obligando a los patronos a emplear a obreros inscritos en la Bolsa de Trabajo del Ayuntamiento, por un tiempo de no más de una semana «con objeto de que turnen todos». Los patronos deberán aceptar a los obreros de las diversas categorías que se les designen. Además, quedaba abolido el asalariado y el trabajo a destajo, se fijaba el número de horas extraordinarias posibles en dos por día, y se obligaba a una indemnización en caso de accidente de trabajo. El signo de los pactos colectivos beneficiaba sin duda a la clase obrera, articulada de nuevo masivamente en las organi-

³⁷⁰ AMU, Actas municipales, 25-3-1936.

zaciones sindicales ugetista y cenetista.³⁷¹ Era el treinta de junio. No daría para más.

El «Movimiento»

A mediados de julio, como todos los años, muchos campesinos se encontraban en el campo ocupándose de la siega. Nada hacía pensar que aquel julio pudiera ser diferente a otros. Mientras los chicos disfrutaban sus días de fiesta y daban al pueblo el sonido del verano, podemos imaginar las mercaderías de frutas ambulantes hacer negocio en las plazas, y a algún familiar de vecinos recién llegados para veranear durante unos días y descansar. El calor se hacía más soportable que en el valle del Ebro, pero no por eso dejaba de sentirse. En las noches, mientras los chicos tramaban en las eras y las plazas, los mayores cultivaban la conversación en las puertas de las casas, tomando la fresca sentados en poyos y banquetas de diversa comodidad. La noche del día 18 resultó más agitada de lo habitual. Las confusas noticias de radio hablaban de una sublevación militar de los tercios africanos, debatiéndose la gente, como en muchos otros sitios, entre quienes restaban importancia al asunto y quienes temían que el paso de los militares a la Península desencadenara una guerra en el país, aparte de quienes esperanzados celebraban en privado el golpe que contra la República acababa de efectuar un pequeño general ferrolano.

La vida política tampoco se había visto alterada hasta la víspera de la rebelión militar. Lejos de existir un vacío de legitimidad en las instituciones políticas republicanas, argumento esgrimido para justificar el «alzamiento», el juego político, aunque enfrentado a una difícil coyuntura inmersa en una intensa espiral de violencia política, mantenía una buena capacidad de gestión, sobre todo desde el ámbito local. El día 17 había habido sesión en el Ayuntamiento (a la que eso

³⁷¹ Según las cifras aportadas por Julián Casanova en Uncastillo había en 1936 unos setenta afiliados a la CNT. *Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa, 1936-1938*, Siglo XXI, Madrid, 1985.

sí tan sólo asistieron Plano, Gracia y Manuel Cortés), tratándose de asuntos como la construcción de un camino a Sos, los haberes del basurero municipal, el nombramiento del Comisionado para el sorteo de los quintos o la tradicional aprobación final de cuentas y facturas. A las ocho, hora en que salían de la Casa Consistorial los concejales asistentes, nada se conocía todavía del asunto. Muy pocos días después el país quedaría dividido en dos bandos enfrentados en guerra, y Uncastillo atrincherado en la zona de los sublevados, para desgracia del común de vecinos del pueblo y de las Cinco Villas, sobre las que se desató una feroz y cruenta represión.

La Guardia Civil no dudó sobre el lugar en el que posicionarse. El pueblo había sido desarmado tras los sucesos de octubre de 1934, y nada impedía la llegada de la hora del ajuste de cuentas. El día 26 el brigada del puesto, Eduardo García Bosque, y cumpliendo órdenes del general en jefe de la 5ª División Orgánica, convocaba en las Consistoriales a diversas personalidades del pueblo para constituir el nuevo Ayuntamiento. A las doce de la mañana el brigada leyó la lista de los nuevos ediles, designando a Sabas Torrero Pueyo como alcalde. La vara de mando ya la tenía en su poder el cabo Jesús Costoya, quien se la entrega a Torrero exhortándole «a que haga uso debido de dicha insignia para bien de España, de la República Española y de Uncastillo». Sorprende la inclusión de la «República Española» en la referencia del cabo, en aquellos días de confusión y miedo. Luego tomaron posesión los concejales indicados y se nombró alcalde a Calixto Pueyo Soterías, de quien Jesús Pueyo dice en sus memorias que se le apodaba «El Conde», pero porque «era más ladrón que una cucaracha», porque era «un cacique de poca monta». Al tiempo, los tenientes de alcalde pasaban a ser Antonio Caudevilla Sierra y Miguel Labat Viartola. Los nuevos concejales eran Manuel Gay, Mariano Marco, Francisco Lear, Mariano Boned, José Rived Buey, Sebastián Pueyo y Jesús Marco. En el día siguiente, el día 27, fueron convocados los concejales que se hallaban presentes en el

pueblo, los socialistas Enrique Pérez, Pío Pueyo, Félix Alcubierre y León Garín, concejales que lo fueron «hasta el día dieciocho». El alcalde Calixto Pueyo les comunicaba que por orden del general de la 5ª División quedaban destituidos como concejales, debiendo hacer entrega de insignias y efectos diversos propiedad del Ayuntamiento. La primera mención de Plano vino al dejar constancia de que no se había procedido al recuento de los fondos «por no haber asistido a esta convocatoria el que hasta el día dieciocho fue Alcalde de este Ayuntamiento [...] en cuyo poder se halla una de las tres llaves de la Caja de caudales».³⁷²

En ese momento la violencia ya ha llegado al pueblo. Y la practican no sólo gente venida de fuera, requetés y falangistas, sino también vecinos recién incorporados a las estructuras de encuadramiento del «Movimiento». Tras el 18 de julio las nuevas autoridades afines a los golpistas comenzaron a organizar la sociedad uncastillera según los modelos corporativos de los fascismos europeos. En los primeros días surgió Milicias de Acción Ciudadana, grupo paramilitar orgánicamente independiente de Falange, formada por personas de mediana edad y de reconocida adicción a los valores propugnados por los golpistas, y con encomiendas de tareas de auxilio social, control y represión. Sólo del 20 al 27 de julio ingresaron en la formación 70 vecinos, haciéndolo 30 de ellos el mismo día veinte. El resto, hasta 140, lo fueron haciendo durante el mes de agosto y nunca más tarde de mediados de septiembre, fechas en las que se desencadenó la más feroz ola de terror en Uncastillo. A muchos de ellos ya los conocemos por formar parte de la Corporación municipal, o formar parte de conocidas familias de propietarios de la localidad. Otros, sin relevancia política y social previa, debieron de ser los que harían el «trabajo sucio», borrar cualquier rastro de la actividad republicana. A partir de mediados de agosto la organización convivió con el surgimiento local de Falange Española de las JONS, inscribiéndose 48 vecinos

³⁷² AMU, Actas municipales, 26 y 17-7-1936.

el 15 de agosto, (37 en primera línea y 11 en segunda), y a partir de ahí continuó el ingreso hasta completar los 88 afiliados registrados, con Miguel Lapieza como jefe local. La localidad, de más de tres mil habitantes, quedó de inmediato y durante los tres años siguientes en manos de los falangistas armados.³⁷³

El que más tarde fuera alcalde de Uncastillo, Ramón Gay, añade en un documento posterior una memoria sobre cómo se produjo la adhesión al «Movimiento» en el pueblo. «En el año 1934 –de nuevo, la memoria del 34–, y para contrarrestar en parte la fuerza que en esta localidad iban tomando las organizaciones marxistas, las escasas personas que entonces formábamos el grupo de derechas fundamos el Círculo de Acción Popular», bajo presidencia de Antonio Caudevilla. El Círculo pretendía «atraer elementos diseminados a nuestro lado que la presión marxista obligaba a ingresar en sus organizaciones, y combatir a éstas por cuantos medios legales tuviéramos a nuestro alcance». El éxito del Círculo, «teniendo en cuenta el virus marxista inyectado en esta villa», se cifró en los 137 asociados. Llegado el 18 de julio de 1936 «todos los componentes del Círculo como un solo hombre nos sumamos al [Alzamiento], poniéndonos seguidamente a disposición del Sr. Comandante del Puesto de la Guardia Civil [...], adueñándonos de la situación y dispersando a los muy numerosos marxistas que huyeron a los montes, y a los que perseguimos con diferentes batidas, causándoles bastantes bajas». Poco después, «todos los componentes de Acción Popular nos afiliamos a Falange, y hecha la fusión de Falange y Requetés, quedamos todos afiliados a FET y de las JONS».³⁷⁴

La actividad municipal fue lógicamente escuálida durante el mes de agosto, y en septiembre se dejaba algún indicio en actas de lo que estaba ocurriendo. Se proveen plazas muni-

³⁷³ Los inscritos en Falange y en Acción Ciudadana en AMU, Leg. 359, exps. 024 y 025.

³⁷⁴ AHPZ, Sociedades de Uncastillo, «Círculo Español».

pales por estar los titulares desaparecidos o, como literalmente se dice, «abandonar el servicio» (enterrador, portero del matedero). La guerra continúa en el frente, y en Uncastillo las nuevas localidades contribuyen a levantar el nuevo régimen enterrando en el olvido los símbolos de la etapa republicana. A mediados de octubre el alcalde Calixto Pueyo propone «variar los nombres de varias calles y plazas de esta villa», acordándose que «la llamada avenida Pablo Iglesias se denomine en la actualidad Avenida de Francisco Franco, y la plaza de la parada del auto se denomine en la actualidad Plaza del General Mola».³⁷⁵ Se acuerda también contribuir con tres mil pesetas a la suscripción abierta por la Comisión local autorizada por la Junta de Defensa Nacional «con destino a fines patrióticos», cantidad que será satisfecha del capítulo de presupuestos destinado a fiestas. Pero la frialdad de la escritura oficial escondía una realidad mucho más cruda sobre lo que ocurría en aquél verano de 1936. En abril de 1937 ya no había nada que disimular, y para adherirse a las muestras de dolor por la muerte del comandante de la Guardia Civil de Ejea, se dice de manera elocuente:

«... se hace constar el sentimiento por la muerte heroica del Teniente de la Guardia Civil D. Eugenio Hernández Santamaría, Jefe de Línea en Ejea, y destacado en la Sierra de Alcubierre, en donde murió gloriosamente en defensa de la Patria, y al que debemos en toda la comarca una gratitud inmensa y la salvación de la misma en los primeros días del Glorioso Movimiento Nacional. Asimismo, por unanimidad se hace constar la gratitud de este Ayuntamiento con el Comandante de la Guardia civil de este puesto D. Eduardo García Bosqued y Fuerzas de dicho puesto, como asimismo a las Milicias locales, que tanto celo y actividad han desplegado desde los primeros días del Glorioso Movimiento Nacional limpiando de marxistas este término municipal y otros próximos, que constituían un peligro inminente para los buenos españoles».³⁷⁶

³⁷⁵ AMU, Actas municipales, 6-9-1936 y 17-10-1936.

³⁷¹ AMU, 13-4-1937.

En marzo de 1937 la retaguardia es requerida para ofrecer suministros a otros puntos de la zona sublevada. El gobernador civil ordena «la recogida de papel inservible y asimismo de ropa y otros efectos», destinados a suplir la falta de materia prima para fabricar papel, y para «los habitantes de Madrid el día que sea liberado por nuestro Glorioso Ejército», publicándose los bandos oportunos en la localidad para que los vecinos contribuyeran. Pero la voluntad hacía tiempo que estaba mediada por el miedo y la coacción en muchas familias del pueblo, partidas casi todas por alguna tragedia. El «Movimiento» se manifestaba controlando todos los aspectos de la vida municipal, las vidas de sus habitantes y todo lo relacionado con el espacio público. La calle había cambiado de dueños. Las manifestaciones y mítines socialistas del pasado dieron paso a las concentraciones al toque de las campanas para celebrar las victorias franquistas. «Uhhh, menudos varazos... y allí iban los guardias con varas y a los chicos halaaa, todos a la plaza, que habían ganado tal batalla, y allí claro, todo el pueblo... iban con unas varas largas y nos arreaban cada una...». Lo recuerda con detalle Abundia Lafuente.³⁷⁷

El pueblo se concentraba en la puerta de la Iglesia de Santa María, convertida no sólo en espacio de reunión por ordeno y mando, sino también en testigo mudo de asesinatos sin cuento. El cuartel de la Guardia Civil sería el otro espacio de desolación y oprobio, amén de cunetas sin nombre ni coordenadas para recordar, recorridas por una camioneta en la que se efectuaban las «sacas» o los «paseos» de los detenidos, sin juicio ni explicación. En un pueblo como Uncastillo, sin una centralidad económica ni política significativa, fundamentalmente agrícola y habitado por campesinos de origen humilde, fueron asesinadas o desaparecieron en torno a cien personas, muertas en un reguero constante de fusilamientos que concentra su flujo en el mes de julio y agosto de 1936.

³⁷⁷ Entrevista realizada a Lisardo Claveras y Abundia Lafuente Corrucho, 16-6-2007.

El terror

Estalla la guerra / o bien la revolución / eran días de angustia / todos esperando una solución.

Entraron los falangistas / no respetaban ni a Dios / y en la entrada de mi pueblo / ya fusilaron a dos. [...]

A las ocho de la tarde / a todos los fachas del pueblo / entregan los mosquetones / para matar a los hombres / como quien mata ratones.

A los mozos de mi pueblo / chicos buenos y humildes / los metían al camión / como si fueran barriles.

Los llevaban a fusilar / daba pena y horror / después que los fusilaban / cantaban «el cara al sol».

Un joven valiente y fuerte / miembro de la CNT / a la Falange burló / al verse tan bien burlada / a la novia asesinó / como estaba embarazada / de seis meses / dos descargas les costó. [...]

A Ejea de los Caballeros / entre hombres y mujeres / bajaron un camión lleno / ¡no puedes imaginar / semejante desconsuelo!

A todo el grupo de mujeres / las llevan a Farasdués / y antes de darles la muerte / les conceden la última gracia.

Una tía mía pide rezar el rosario / con todas sus compañeras. / Todas rezan el rosario / con gran devoción / y en sus últimas palabras / cayeron un montón.

Allí estaban los buenos / fusilando a todos los malos / ¿cómo podían fusilar / con el rosario en la mano? [...]

Dos hermanas socialistas / por el monte se fugaron; / en las piedras de Santo Domingo / allí el guante las echaron / se aprovecharon de ellas / y después, las fusilaron.

A las chicas socialistas / no sabiendo qué hacer / les cortaron el pelo al cero / para reírse después.

Las esposas de los falangistas / eran buenas religiosas / ¡que maten a las raíces! / nos gritaban como locas. [...]

Después de estas tragedias / todo parece calmarse / una mañana de sol / nos fusilan al gigante.

Un hombre muy alto y bruto / con cara de mala pasta / se puso junto a la cabeza / y le dio el tiro de gracia.

De todos los curas de España / puede salir uno malo / yo vi al cura de mi pueblo / con la pistola en su mano.

¡Cuánta sería su pena / cuánto sería su dolor / que en la
hora de su muerte / a todos los hijos de los fusilados / nos
pedía su perdón. [...]

Todo parecía calmado / y no sucedía nada / pero a las
nueve de la noche / nos tendieron una redada.

A jóvenes, mujeres, ancianos / y niños nos sacaron de
nuestras casas / con malos tratos, / y sin saber lo que pasaba
/ en el salón de la casa de la Villa / allí nos amontonaban.

Unos querían utilizarnos / para formar barricada / otros
querían quemarnos / en mitad de la plaza.

Nunca se me olvidará / que en un rincón del salón / el
rosario se rezaba. / No teníamos solución / si los rojos avan-
zaban.

Después de estas aventuras / el corazón en un puño / y
temblando nuestra alma / a las doce de la noche / se oye la
voz brutal / que tenía aquel brigada.

Han tenido ustedes suerte / se pueden marchar a casa /
que ya no avanzan los rojos / que han hecho retirada.

Recuerdo la noche oscura / pueblo de mal alumbrado /
no las teníamos todas / que nos alcanzara algún disparo.

Es un relato en primera persona que guardaba el hijo de Antonio Plano sobre los primeros meses de guerra, con autoría de firma ilegible, que fueron de terror y muerte en la retaguardia cincovillense. Es probable que las cifras de la represión en Uncastillo, como en muchas otras poblaciones, nunca lleguen a quedar definitivamente fijadas. El listado elaborado y revisado en sucesivas ediciones por el equipo de *El Pasado Oculto* apunta a que fueron setenta los vecinos asesinados en la localidad, que son los registros de los que existe documentación o constancia escrita en los registros civiles. Aquel trabajo histórico supuso un auténtico hito en el estudio de la represión fascista regional, un punto y aparte fundamental en el desvelamiento de realidades ocultas durante décadas relacionadas con la política de eliminación física de todo aquel considerado como enemigo de los «valores» nacionales. Con ser eso cierto, no lo es menos que en los últimos años, y conforme desaparecía la generación que había vivido aquellos años y experimentado en sus carnes el terror, surgía un inte-

rés inusitado por rescatar del pasado historias que no contaban con papeles de los que se pudiera servir la Historia. Nuevos datos han sido aportados en entrevistas y memorias, datos que, asumidos con las debidas cautelas metodológicas, permiten extender las cifras de muertos y desaparecidos. En nuestro caso, hasta sobrepasar de lejos el centenar.³⁷⁸

Ellos engrosaban el fenómeno de la represión franquista, estimada en más de 110.000 muertos en 24 provincias, mientras que en el bando republicano fueron represaliados unos 50.000, a falta de saber lo que ocurrió en algunas provincias.³⁷⁹ Pero siendo las cifras importantes, lo significativo es que la guerra no fue, como se vio desde el primer día, un enfrentamiento entre militares, entre voluntarios encuadrados en ejércitos, sino que afectó de lleno a muchos que pensaban que nada tenían que temer, y que creían que no era obligado tomar partido. Estaban equivocados. La vida tenía muy poco valor en aquel sangriento verano de 1936, en ambos bandos. Ahora bien, y admitiendo que la barbarie fue horrenda en ellos, desde un punto de vista histórico tampoco es posible adoptar una postura equidistante en el reparto de responsabilidades. En las zonas que permanecieron leales a la República la represión surgió en un contexto de derrumbe del poder del Estado republicano y de surgimiento de un orden revolucionario, produciéndose en ese ínterin una violencia «caliente» alejada del control de la autoridad republicana. Por el contrario, en las zonas controladas por los militares rebeldes el terror no forma parte de una respuesta incontrolada, sino que es el

³⁷⁸ Jesús Pueyo cifra en 140 los fusilados en Uncastillo, «enterrados en fosas comunes cavadas al borde de los caminos o en cualquier parte».

³⁷⁹ Referencia válida sigue siendo Santos JULIÁ (coord.), *Víctimas de la Guerra Civil*, Temas de Hoy, Madrid, 1999. Los numerosos trabajos surgidos en la última década, sin embargo, obligan a afinar las cifras. Todavía los balances son provisionales debido a que faltan trabajos para algunas provincias o los que existen son parciales. El reconocido especialista en represión José Luis Ledesma apunta a 117.000 víctimas en el bando franquista, y 53.000 ó 54.000 en el bando republicano, a falta de saber lo que en este último punto sucedió en Madrid, de donde no hay todavía un estudio satisfactorio. José Luis LEDESMA VERA, *La «santa ira popular»: violencia, justicia y revolución en la España republicana durante la Guerra Civil española*, European University Institute, Florencia, tesis doctoral en fase de finalización.

resultado de un plan para aniquilar sistemáticamente al adversario. Las palabras de Mola en la misma conspiración no dejaban lugar a la duda, la acción tenía que ser «en extremo violenta para reducir lo antes posible al enemigo, que es fuerte y bien organizado». El siguiente listado de los fallecidos y desaparecidos de Uncastillo está basado en el elaborado por Jesús Pueyo, quien en ardua y prolija tarea junto a su incansable mujer Ana, ha completado un fiable registro contrastando informaciones y recibiendo rectificaciones por parte de familiares y conocidos de represaliados del pueblo.

**TABLA 8: LISTADO DE FALLECIDOS Y DESAPARECIDOS
POR LA VIOLENCIA FRANQUISTA EN UNCASTILLO. 1936-1939**

Abadía	Labé	Antonio
Acín	Abadía	Domingo
Agón	López	Demetrio
Agón	López	Alejandro
<i>Agón</i>	<i>López</i>	<i>Modesto</i>
<i>Agón</i>	<i>López</i>	<i>Saturnino</i>
Aísa	Lanzarote	Antonio
Alcubierre	Frago	Mariano
Alcubierre	Viamonte	Agustín
Alcubierre	Viamonte	Francisco
Almodaneta		Mariano
Añanos	Aznárez	Serafín
Arias	Endrina	Juan
Arilla	Casanova	Bruno
Arilla	Payo de Beguería	Lorenza
Arregui	Biota	Juan
Arregui	García	Antonio
Arregui	Hornos	Adrián
Arregui	Lázaro	José
Arregui	Pérez	Marcos
Arregui	Praderas	Florencio
Aznárez	Lizalde	Narcisa
Aznárez	Lizalde	Pilar
Aznárez	Palacín	Miguel

Aznárez	Tirapo	Inocencia
Aznárez	Tirapo	Agapita
Aznárez	Tirapo	Inocencia
Baztán	Acín	Santiago
Beguería	Pueyo	Tomás
Bielo		Eusebio
Buey	Clemente	Vicente
Buey	Micaley	José
Buey	Micaley	Gregorio
Burguete	Cortés	Jesús
Canales	Pueyo	Ángel
Casalé	Suñén	Josefa
Casalé	Suñén	Manuel
Casalé	Suñén	Juan Pablo
Casalés	Pérez	Mariano
Casalés	López	Isidoro
Casanova	Beguería	Francisco
Casasús	Lear	Tomás
Casaus	Casanova	Antonio
Casaus	Navarro	Vicente
Casaus	Paradís	Domingo
<i>Casaus</i>	<i>Zuria</i>	<i>Tomás</i>
<i>Casaus</i>		<i>Basilia</i>
Castillo	Navarro	José
Cervero	Aísa	Juan

TABLA 8: LISTADO DE FALLECIDOS Y DESAPARECIDOS POR LA VIOLENCIA FRANQUISTA EN UNCASTILLO. 1936-1939 *(continuación)*

Cervero	Aísa	Francisco
Claveras	Martínez	Florencio
Claveras	Martínez	Julia
Claveras	Navarro	Antonio
Combalía	Marco	Eugenio
Combalía	Pérez	Francisco
Corruchaga	Villa	Eugenio
Cortés	Lasilla	Francisco
Cortés	Lasilla	Martín
Cristóbal	Rabinal	Constantino
Charles	Galán	Miguel
Charles	Praderas	Miguel
Charles		Cándido
Charles	Serrano	Crescencio
Estabén	Beguería	Máximo
Ezquerria	Tirapo	Mariano
Galspienzo		Luis
García		Andrés
García	Cortés	Jesús
García	Les	
García	Malón	Fructuoso
García	Reved	Antonio
Gil	Laplaza	Mariano
García	Viamonte	Isidoro
Gracia	Arregui	José
Gracia	Arregui	Antonio
Gracia	García	Jesús
Gracia	Laborda	Pedro
Gracia	Pemán	Santos
Guinda	Alcubierre	Juan
Guinda	Arregui	Pedro
Guinda	Micalay	Josefa
Guinda	Tamarí	Juan
Guinda		Josefa
Izaga	Chiquito	Adrián
Izaga	Chiquito	Saturnino
Hombre		
Hombre		
Jarauta	Abadía	Benito
Jodrá	Maestro	Pablo
Jodrá	Ruiz	Eugenio
Lafuente	Beguería	Domingo
Laiglesia	Pueyo	José
Laiglesia	Pueyo	José
Lalanza	Ruiz	Alejandro
Lalanza	Ruiz	Benito
Lalanza	Ruiz	Julián
Lalanza	Ruiz	Mariano
Lalanza	Asín	Alejandro
Lasilla	Pueyo	Manuel
Lavé	Cervero	Félix
Loire	Loarre	Gregorio
Maistera	Pueyo	Ignacio
Malón	Gil	Francisco
Malón	Pueyo	Lourdes
Malón	Pueyo	Rosario
Malón	Pérez	Mariano
Marcellán	Loperena	Mariano
Marco	Sanz	Nemesio
Martín	Layana	Andrés
Joaquín	Martín	Layana
Navarro	Solsona	Alejandro
Olano	Victoriano	J. Andrés
Palacín	Ruiz	Teodoro
Palacín	Tirapo	Pedro
Palacios	Burguete	Felisa
Palacios	Casanova	Tomás
Palacios	Casanova	Manuel
Palacios	Casanova	Primitivo
Palacios	Casanova	Inclusero

TABLA 8: LISTADO DE FALLECIDOS Y DESAPARECIDOS POR LA VIOLENCIA FRANQUISTA EN UNCASTILLO. 1936-1939 *(continuación)*

Palacios	Martín	Maximino
Pérez	Beguería	Francisco
Pérez	Pradera	Eusebio
Pérez	Sardoy	Enrique
Plano	Aznárez	Antonio
Plano		Constantino
Praderas	Pérez	Luis
Praderas	Pérez	Pedro
Pueyo	Arregui	José Antonio
Pueyo	Aznárez	Lorenzo
Pueyo	Bueguería	Ángel
Pueyo	Cay	Valentín
Pueyo	Prat	Pío
Pueyo	Prat	Jesús
Pueyo		Francisca
Rebla	Alegre	Fermín
Rebla	Alegre	Mariano
Rived	Chirón	José
Rived	Luis	Narciso
Rived	Luis	Pedro
Reved	Rebla	José
Ruiz	Remón	Luis
Sádaba	Echevarren	José Miguel
Sánchez	Suñén	Pascual
Sangorrín		Daniel
Sardoy	Arilla	Aniceto
Sardoy	Pérez	Antonio
Sardoy	Tejero	Enrique
Solano	Alcubierre	Antonio
Solano	Lascuel	Fructuoso
Solano	Pérez	Crescencio

Solano		Progreso
Suñén		Alejandro
Suñén	Mombiela	Anacleto
Suñén	Mombiela	Martín
Suñén	Zárate	Valentín
Tirapo		Vicente
Tirapo	Malón	Cándido
Tirapo	Viamonte	Francisco
Tirapo	Casanova	Vicente
Torrea	García	Luis
Tris	Tosaus	Julián
Ujedo		Luis
Urdániz	Malón	Pedro
Varona	Pueyo	Pablo
Varona	Pueyo	Félix
Viamonte	Alcubierre	
Viertola		Isabel
Viertola	García	Andresa
Viertola	Varona	José
Vicastillo		Simón
Villa	Acín	Santos
Villa	Acín	Leonor
Yarz	López	Víctor
Yarz	Pérez	José
Yarz	Pérez	Silverio
Zárate	Buey	Víctor
Zárate	Ezquerria	Ángel
Zárate	Lasilla	Melania
Zárate	Lasilla	Jesús
Zárate	Lasilla	Antonio
Zárate	Muñoz	Saturnino

Fuente: Listado elaborado por Jesús PUEYO, en <http://pagesperso-orange.fr/Jesus.pueyo/>; Julián Casanova (*et al.*). *El pasado oculto. Fascismo y violencia en Aragón (1936-1939)*, Mira Editores, Zaragoza, 2001; J. A. REMÓN, Ejea, 1936. *La sombra de una guerra*, Círculo «González Gamonal» y Foro de Mujeres Progresistas, Zaragoza, 2006.

El general de la 5ª Región, Miguel Cabanellas, avalaba aquella violencia pese a que muchos en la izquierda confiaban en su declarado republicanismo. Sin embargo no tardaron mucho en darse las detenciones de los principales sindicalistas y cuadros políticos, incluso la del gobernador de Zaragoza Vera Coronel. El Ejército pasaba a controlar el orden público desde la emisión del bando declaratorio de Estado de guerra, junto con las fuerzas paramilitares de la derecha, la Guardia Civil, la Policía y la Guardia de Asalto. En el medio rural eran los requetés y las partidas de falangistas, junto con la Guardia Civil, los que efectuaban las detenciones a partir de documentación requisada y de denuncias de vecinos de consabida afinidad con los insurgentes. No sólo se detenía a militantes de organizaciones políticas y sociales, sino también a cercanos como amigos y familiares. En aquel contexto bien pronto se mezcló la impunidad con la venganza, era la oportunidad de saldar viejas cuentas más allá de las enemistades políticas o las diferencias de clase social. El conocimiento y las cercanas relaciones personales que tradicionalmente se daban en los pueblos llevaron a no poca gente a tratar de resolver de una vez por todas asuntos religiosos, problemas familiares, viejos pleitos económicos, historias pasionales o rencillas de convivencia. Bastaba un rumor, una sospecha sin confirmar o una delación de un vecino sin investigar para que la violencia alcanzara a personas que nunca habían tenido nada que ver ni con la violencia ni con la política, y que pensaban que a ellos no les habría de tocar. La detención tan sólo era el comienzo de un penoso camino que acabó casi siempre con la muerte mediante «sacas» y «paseos» nocturnos. Quizás ese terror se hizo tan macabro por la no excesiva lejanía de las escaramuzas en los primeros días en el monte de Ayerbe y Huesca, como un medio de arrancar de raíz cualquier amenaza de contestación colectiva al golpe.

Y es que a Uncastillo, lugar accesible tan sólo por deficientes caminos y carreteras, también iba a llegar el sonido de las pistolas. Pero no fue por el frente de batalla, sino por una violencia impune y, en lo que atañe al ensañamiento que cabe en

un pueblo en el que todo o casi todo el mundo se conoce, mucho más cruel. Aquel sonido de las pistolas se iba a componer de tragedias sin actas ni certificados. No se trataba de un desmantelamiento político, sino de una eliminación en toda regla. Encarcelamientos, humillaciones y fusilamientos fueron la tónica general de aquel verano de terror. Desde los primeros días del «Alzamiento» las fuerzas de la derecha, vestidas de Guardia Civil, de requetés y de falangistas, tomaron la calle, las casas y las vidas de los vecinos que habían militado en la izquierda política o sindical y, en una amarga y trágica lotería, a quienes se sabía que eran amigos o familiares de aquéllos. Las palizas y los fusilamientos comenzaron en Uncastillo casi desde el primer día. Lo cuenta Jesús Pueyo en primera persona en un vibrante y emocionado relato retomando sus recuerdos de cuando era un muchacho de quince años.

Su saludo equivocado con el puño en alto a los falangistas en el monte, la brutal paliza, la salvación en el último momento de ser muerto, el primer fusilamiento público del que todo el mundo hablaba, el miedo que se iba extendiendo entre la gente del pueblo, y cómo durante aquellos primeros días la gente que estaba en el campo bajaban al pueblo pensando que no les pasaría nada, y en cambio «los cogían como a conejos». Pueyo confiesa que en aquel tiempo «no pude entender nada de lo que estaba ocurriendo, ya que nada hacía presagiar que pudiera suceder una cosa así en el pueblo», continuando «sin entender nada» cuando escribía sus recuerdos, a sus ochenta y dos años. Esa frase resume una de las claves de aquel momento, la incompreensión de tan profunda ruptura con la vida conocida, lo absolutamente desmedido del baño de sangre que acababa de comenzar. Porque además Pueyo es contundente sobre sus verdugos. «Los primeros eran más bien de fuera, pero los de aquí se incorporaron enseguida... las muertes las hicieron los de aquí, porque los de fuera mataron dos, cerca del cementerio... una mujer y un hombre».³⁸⁰ Lisardo Claveras habla de esa misma incom-

³⁸⁰ Entrevista realizada a Jesús Pueyo, Uncastillo, 16-6-2007.

presión, entonces y todavía hoy: «Debían de ir borrachos para hacer aquello», sugiere con sentimiento contenido.³⁸¹

Antonio Plano fue detenido pronto. No hemos hallado constancia del momento, pero hubo de ser en los primeros momentos tras el 18 de julio. Retenido en Zaragoza, su familia hubo de pasar con particular ensañamiento por un trance tras otro. A la angustiosa falta de noticias sobre Antonio se habría de sumar el apresamiento de parte de la familia en el cuartel de la Guardia Civil. El 30 de julio trasladaron a la mujer de Antonio, Benita, y a sus hijos Antonio y María a la cárcel de Ejea. Antonio Plano Cortés recuerda hoy cómo de camino los guardias le amenazaban diciéndole «por ahí bajo te mataremos», siendo testigo en Ejea de «brutales palizas» a presos a los que tuvo que ayudar a comer mientras sus torturadores «se emborrachaban de vino y todo» en celebración de su gesta. Antonio Plano Cortés vio a gente «colgados de los pies para darles ahí bien... mira tú qué... qué defensa». Ya no volverían hasta el 15 de octubre. Entre tanto en el pueblo las armas entraban en acción. Desde el primer momento en que entraron los grupos de falangistas comenzaron los fusilamientos y los episodios de atropellos. Algunos han quedado plasmados en el papel, como los recopilados por Jesús Pueyo respecto de su padre, sus primas y más familiares, y él mismo.

«Mis primas eran excelentes costureras y bordadoras, ellas fueron las que bordaron la bandera Republicana, por petición del Partido Socialista, lo que hicieron con gran orgullo, ya que ellas estaban en las Juventudes Socialistas. Al saber que se habían llevado y fusilado a su madre, mi tío y mis tres primos se marcharon a la montaña para esconderse del asedio de los falangistas y requetés, pero ellos los siguieron en su huida, y en el lugar llamado “Las Peñas de Santo Domingo” situado en la provincia de Zaragoza, mataron a mis dos primas, pero antes las violaron y luego las quemaron. Cuentan que a la pequeña de mis primas, Lourdes, no conseguían quemarla. Se comentaba en el pueblo que los que habían

³⁸¹ Entrevista realizada a Lisardo Claveras y Abundia Lafuente, Uncastillo, 16-6-2007.

cometido el doble asesinato, creían que se trataba de una Virgen. Mi tío y mi primo corrieron mejor suerte lograron salvarse, pero mi tío no pudo soportar tanto dolor, primero el fusilamiento de su mujer y después el asesinato cruel y sanguinario de sus dos hijas, era demasiado para un hombre, al poco tiempo murió de pena y de dolor. [...] Mi abuela Magdalena Prat Pueyo, ante tanta desgracia, se mantuvo siempre firme [...], le fusilaron a sus tres hijos; mi tía Francisca Pueyo, mi padre Jesús Pueyo y mi tío Pío Pueyo, además de perder sus dos nietas que fueron asesinadas, quemadas y violadas Rosario y Lourdes, más la muerte por el dolor de mi tío Francisco Malón. A ninguno de ellos pudo darles una sepultura digna, porque nunca supo donde estaban sus cuerpos».³⁸²

Su relato es un testimonio vivo de sufrimientos y pérdidas cruentas. A su prima Rosario la habíamos visto desfilando en manifestación junto con Isabel Agón portando la bandera republicana que habían bordado con ocasión del primer aniversario de la República. Tan sólo hacía cuatro años de eso. Una noche se llevaron para fusilarlo a su tío Pío Pueyo Prat, que había sido concejal socialista, «nunca supimos dónde». También se llevaron a su tío Ignacio Maisterra «una noche que llevaba un saco de paja para darle de comer a la caballería», lo fusilaron sin saber el motivo ni el lugar. Su padre estaba faenando «por precaución», pero bajó alentado por un tranquilizador recado del juez municipal. Sin embargo, a la media hora «llegaron cuatro falangistas del pueblo que nosotros conocíamos bien» y se lo llevaron al cuartel. Allí «no tuvieron compasión» de él ni del resto de detenidos. Testigo directo de aquella durísima escena, revive con la misma impresión cómo a la mañana siguiente, la del 2 de agosto, «los sacaron de los calabozos y los subieron en un camión, como animales». Pudo contemplar «cómo estaba mi padre, él se tapó la cara para evitar que yo le viera en ese estado», y que «todos estaban ensangrentados, habían sido golpeados con saña. Uno de ellos, el carpintero Maza, tenía un ojo salido, fue horroroso». El camión salió hacia Luesia, diciendo

³⁸² Jesús Pueyo Maisterra, «Del infierno al Paraíso», memorias de Jesús Pueyo.

algunas lenguas que fueron fusilados a las puertas del cementerio de aquel pueblo. Después había que terminar la obra, quitar las ideas socialistas de hijos y familiares a través de la religión. «No contentos con haberlo fusilado, nos tocó el turno a nosotros, los hijos de un “rojo”, nos obligaron a confesarnos, yo no podía comprender cómo se podía imponer la religión a la fuerza, pero así lo hicieron». En la memoria del hijo de Antonio Plano, además de eso, permanece imborrable la imagen de curas con pistola al cinto saliendo en camiones al monte a «cazar» a los huidos. Y como la de Jesús Pueyo, quedaron muchas más familias castigadas, sin poder manifestar dolor ni rabia, y debiendo obligadamente pensar únicamente en sobrevivir.

Las ejecuciones eran públicas y de obligada asistencia. Y la de Antonio Plano debía de cumplir las expectativas de sus verdugos. No sabemos si alguien pensó en la fecha, pero como en una macabra coincidencia Plano era trasladado de Zaragoza a Uncastillo para que fuera asesinado exactamente dos años después de los sucesos de octubre de 1934. Al hijo de Antonio le dijeron que hubo quién había subido de Zaragoza a presenciar su muerte. Su ejecución debía de constituir todo un escarmiento, además de para él, para todo el vecindario. Había que enterrar con Plano las ilusiones y esperanzas despertadas en buena medida por él durante la República —el reparto de la tierra, el impulso de la educación...—, y para eso nada mejor que añadir a la ejecución el oprobio de la humillación. Fue sacado ensangrentado del cuartel, mientras todo el pueblo acudía a la llamada y las voces de guardias y falangistas. Le habían dado de beber una botella de ricino, y su cuerpo ya no respondía. Su hijo Antonio dice que le llevaron en una peana hasta la plaza, hasta la rinconada que formaba la fachada de Santa María con una corraliza que ya no existe. Quizás hubo alguna allocución al pueblo, algún mensaje ejemplarizante que no duró mucho. Le dispararon y cayó al suelo ante los vecinos, callando la mayoría con impotencia, temor e indignación, mientras algunos exteriorizaban algarabía, aplauso y otras

demostraciones jubilosas. Pero el escarnio no terminó ahí. «Abatido el cuerpo de Don Antonio, le siguieron toda clase de burdos gestos ante su cadáver, patadas, tiros». Los rostros de la multitud se difuminan en los relatos de aquella truculenta escena, también los de los individuos destacados del colectivo para dirigir la ceremonia de la vergüenza. Alguno de ellos se destacará del resto para iniciar un horrendo escarnio con el cadáver, tan caliente todavía, de Antonio Plano. Con una azada procedió a cortarle las piernas, si bien otras versiones afirman que le fue cortada la cabeza. Pedro Torralba Coronas hacía mención en su libro de 1980 de una confesión escrita por un testigo ocular «en una hoja de calendario, amarillenta y envejecida por el tiempo». Decía así:

«Hoy, San Froilán, 5 de octubre de 1936, día de riguroso luto para Uncastillo, Aragón y España, ante la milenaria iglesia de Santa María en presencia de una nutrida representación de testigos, previamente convocados y congregados en la plaza del Olmo, sin formación de causa, previamente establecida, es fusilado don Antonio Plano Aznárez, alcalde republicano de Uncastillo y vicepresidente de la Excm. Diputación Provincial de Zaragoza.

Abatido el cuerpo de don Antonio por el aceite de ricino, las patadas y las balas, se siguen cometiendo toda clase de burdos ademanes ante su cadáver; eso sí, por un número reducido de personas. El resto de la nutrida concurrencia, espectadores forzados, y que van entre y desde los niños de tres años hasta personas de más de ochenta, han permanecido visiblemente en silencio y humillados a su vez. Testigos contra su voluntad, los chiquillos recordarán, durante toda su vida, no sólo el fusilamiento de don Antonio, sino más bien la histérica algarada que están produciendo en la plaza los que siguen pisoteando su cadáver.

El sol, pese a la hora del día que es, se ha ocultado, quizá por vergüenza. Unas nubecillas, que han querido sumarse a la tragedia, dejan caer una tenue lluvia, tal vez para amortiguar, en lo posible, el dolor de este día para los demócratas de Uncastillo.»³⁸³

³⁸³ Pedro TORRALBA CORONAS, *De Ayerbe a la «Roja y Negra»*, edición del autor, Barcelona, 1980, p. 358.

Hoy día, en el tranquilo y apartado cementerio de Uncastillo, los restos de Antonio Plano descansan en una humilde tumba.

Al alcalde Antonio Plano / porque era socialista / lo asesinan frente a la Iglesia / con los curas a la vista.

Allí no hubo descargas / tampoco tiro de gracia / le cortaron la cabeza / y la rodaron por la plaza.

Este asesinato lo hicieron / para dar ejemplo / por eso llevaron a verlo / a los niños de la escuela / y a los niños del colegio.

Había un hombre en el pueblo / que no valía una mierda / con una azada en la mano / llegó y le cortó una pierna.

Allí estaban los buenos / los que eran hijos de Dios / al ver tan grande valentía / un aplauso recibió.

La atrocidad del hecho cruzó el Atlántico, y pese a que no hemos podido constatar la información, parece ser que en algún pequeño rincón de un diario bonaerense apareció un relato del mismo. Un sobrino de Antonio Plano, hijo de su hermano Joaquín, aseguró durante décadas haberse enterado de ese modo de la muerte de su tío, así como haber intentado entrar en España para vengarla como fuere, extremo que no pudo realizar.³⁸⁴ Pero volvamos a Uncastillo. El terror se había adueñado del vecindario sin apenas distinciones de ningún tipo. Como apuntaban los tristes ripios, pocos días antes un camión se había llevado a mujeres del pueblo que, junto con otras de otras localidades, fueron muertas en Farasdués.³⁸⁵ En otro episodio recordado por los supervivientes, algo más avanzada la guerra, y ante la amenaza que suponía la movilidad de

³⁸⁴ La fuente familiar argentina indica que *La Prensa* fue el diario en el que apareció la referencia. Extendimos la búsqueda a todo el período 1936-1939, sin éxito, y buscamos además en *La Nación*, *La Vanguardia* y *Crítica*. Es probable que la referencia apareciese algún tiempo después de finalizada la Guerra Civil. Entrevista con Ana María Plano, Buenos Aires, 14 de septiembre de 2008.

³⁸⁵ Información de Manuel MARCO, Uncastillo, 5-3-2007. Recientemente la Asociación «Charata» para la Recuperación de la Memoria Histórica de Uncastillo ha publicado el libro *Uncastillo, mujeres del 36: un retrato, una historia, una vida*, escrito por Francisco Javier RUIZ RUIZ, donde se recogen semblanzas y retratos de las 17 mujeres hasta hoy conocidas que fueron fusiladas en Uncastillo.

las brigadas rojas desde la zona de Huesca, encerraron a todo el pueblo en el salón del Ayuntamiento. La vesania de los verdugos llegó al extremo de pretender quemar a todo el pueblo si llegaban los «rojos» desde Ayerbe, cosa que al final no sucedió al recibirse noticias de que se había frenado su avance. Se sabía que bastantes hombres habían huido y que se habían enrolado en las brigadas conformadas desde bien pronto como milicianos por lo que, demostrando la ausencia de límite alguno, se tramó ese plan para usar a la población civil como escudo y, llegado el caso, matarlos.³⁸⁶

Por si pudieran guardarse dudas respecto al carácter de *vendetta* de octubre del 34 que adquirió la represión violenta, hemos cotejado dos tablas de nombres. Las de los inculcados en el proceso por el asalto al cuartel de la Guardia Civil, y la de muertos y desaparecidos en Uncastillo. De los 110 procesados, 44 fueron asesinados en Uncastillo durante el verano de 1936 y los meses siguientes. Algunos de aquellos procesados (tenemos constancia de diez pero de seguro fueron más) huyeron o ingresaron en las milicias de la comarca, creyendo en vano que así podían salvar su vida y la de sus familiares. En no pocos casos ocurre que la venganza se ejerce sobre quienes han quedado en la localidad, como con los cuatro hermanos de Ricardo Lanza, aquel que se había roto las muñecas al saltar del castillo cuando llegaron los refuerzos en octubre. O los dos hermanos de Lorenzo Alcubierre Viamonte, Agustín y Francisco; las dos hermanas de Santos

³⁸⁶ Los ingresados en la centuria «la Roja y Negra» son nombrados por Pedro Torralba: «Francisco Combalía Pérez, Francisco Alcubierre Viamonte, Antonio Gracia García, Angel Vicastillo Rebla, Víctor Pérez Idoype, Miguel Combalía, Valeriano Urdániz Viartola, Alejandro Arregui Subirón, Pablo Villa Acín, Mariano Samper Urdániz, Lorenzo Estabén, Valentín Larcuén Estabén, Félix Jarauta, Antonio Suñén, Francisco Cindol, José Ribed Samatán, Antonio Ribed Samatán, Tomás Beguería, Rufino Claveras Arregui, León Beguería, Santiago Agón Villacampa, Alejandro Agón Villacampa, Tomás y Domingo Acín Abadía, Jesús y Manuel Burguete Cortés, Ignacio Vigo Torrea, Agustín Beguería, Ricardo Lanza Ruiz, Fructuoso Garcés Lobera, Francisco Combalía Pérez, «Garricas», Garín Herrero, José Beguería Fuertes, Martiniano Subirón, Amado Curruchaga, «Frascelo», Juan Arregui Guinda, y algunos otros cuyos nombres no puedo recordar, y lo siento». Pedro Torralba Coronas, *De Ayerbe a la «Roja y Negra». 127 Brigada Mixta*, Edición del autor, Barcelona, 1980.

Aznárez Lizalde, Narcisa y Pilar; los tres hermanos de Máximo Casalé Suñén, Josefa, Manuel y Juan Pablo; los dos hermanos de Pascual Varoya Pueyo, Pablo y Félix. Las denuncias hacían extender al terror su dominio sobre casas enteras. Mataron a cuatro hermanos Palacios Casanova (Tomás, Manuel, Primitivo e Inclusero), a los hermanos Anacleto y Martín Suñén Mombiola, a los tres hermanos Zárate Lasilla (Melania, Jesús y Antonio), a los hermanos Juan y Francisco Cervero Aísa, o a las dos hermanas Inocencia y Agapita Aznárez Tirapo. Una erradicación en toda regla, orquestada con la impune crueldad de quien cree justificado bañar en sangre a todo un pueblo para ajustar cuentas y, al tiempo, «limpiar» el nuevo orden de «rojos» y «ateos». Una aberración lejos de cualquier dinámica «lógica» de guerra. El castigo ejercido hacia izquierdistas, familiares de izquierdistas o sospechosos de ser familiares de izquierdistas adquirió en Uncastillo proporciones desconocidas en la comarca y la región.

Cuando Benita y los chicos regresaron el día 15 de octubre a Uncastillo encontraron desolados que su casa había sido saqueada. «Habían robado todo en la casa», dejándola en caótico desorden. El material de taller, las máquinas que Antonio tenía de carpintería... todo, no quedó nada. Al dolor de la pérdida del cabeza de familia se sumaron las humillaciones posteriores. Antonio recuerda que otros chicos pasaban delante de él y sus hermanos con sus bicicletas, y que aún debían de soportar burlas y miradas de desprecio. También recuerda la fijación que un guardia tenía con él, cómo cuando estaba jugando con los otros chicos aprovechaba para humillarle, apartándole y amenazándole diciendo entre risas «tira para adelante, que te pego cinco tiros como a tu padre». Un día le metió en el cuartel, «donde daban la candela y tenían a la gente que iban a matar», pero un sargento le dijo al guardia «pero a dónde vas con este chico», y le soltó. Otro día le ordenó ir a descargar un camión de aceite, pero se trataba de una mofa más, «tira para casa, que te vas a manchar». Aquel tiempo fue difícil. Benita se quedó con sus hijos, pues su empeño era sacarlos adelante como

fuera y no ceder a las presiones de personas para «quedarse con los pequeños». Había noticias de huérfanos que habían sido «acogidos» por gente propietaria o afín al golpe que no podían tener hijos o que consideraban un deber moral dar una educación y una familia cristianas a aquellos «perdidos» que despertaban, tras el castigo inicial, su lástima. Ante las dificultades de Benita para sostener la familia, dos de ellos fueron durante un tiempo al Hospicio como su padre, Jesús y Angelines. Antonio recuerda las dificultades iniciales, las carencias, pero también la solidaridad familiar, que la abuela amasaba pan, y que él vivió durante un tiempo con una tía suya, Josefina Cortés, casada con Enrique Pérez, también socialista y concejal en el Ayuntamiento de 1936, y fusilado dos semanas después de que lo fuera Antonio Plano.

La justicia del revés

Después de la muerte de Plano, Benita y sus hijos hubieron de ser testigos pasivos de un proceso judicial. Se trataba del expediente de Responsabilidades Políticas incoado por las instituciones franquistas para delimitar su culpa «en la creación del estado de cosas que provocó el Glorioso Alzamiento Nacional», y para delimitar la compensación económica con la que debía de ser castigada, con embargos e incautaciones. Irrumpía la inversión del orden de las cosas, la instauración de una justicia regida por ideales y dinámicas radicalmente opuestas a la republicana, que premiaba a quien había seguido el camino de la sublevación, y castigaba a quien de un modo u otro se había comprometido con la República. Una justicia que, tras revisar centenares de expedientes, puede decirse que escondía contradicciones y abusos flagrantes, y que en muchos casos no es sino la sanción de saqueos impunes. Utilizando una jerga contundente y militar, el nuevo lenguaje judicial criminalizaba actitudes y comportamientos que antes de julio de 1936 eran perfectamente legales. Es lo que le sucedería a Benita.

El expediente de los Plano se efectuó en febrero de 1937, incoado tanto a Antonio, que hacía más de un año que había

sido muerto «fusilado en la villa de Uncastillo», y a Benita. En dicho expediente se apunta que hubo una incautación «de los muebles y enseres de su casa» por el capitán de la Compañía y el jefe de línea de Ejea «cuando la expresada viuda se hallaba en la cárcel como significada marxista». A la casa cuartel de Uncastillo se habían llevado cuatro máquinas de coser, y ahora, iniciado el expediente y «no siendo posible recibir declaración del presunto culpable Antonio Plano», se decreta «embargo de los bienes propiedad del presunto inculpado». Los cargos eran claros. Antonio Plano era «directamente responsable [...] por su actuación de daños y perjuicios ocasionados por su oposición al Triunfo del Movimiento Nacional». En su casa «estaba establecido el centro socialista al cual pertenecía como Secretario, conserje y contador, siendo el que manejaba a su antojo el referido centro, en el cual se tramaban toda clase de propagandas otros manejos de dicho Frente Popular, contribuyendo con su autoridad y fácil expresión a imbuir sus ideas políticas a los demás vecinos. Fue alcalde de este Ayuntamiento y su actuación en el mismo fue harto lastimosa, ya que favorecía a los suyos y perjudicaba a los que no profesaban sus ideas políticas». Y se añadía que «en los sucesos de Octubre se distinguió notablemente con motivo del cobarde asesinato de la Guardia Civil de este Puesto, siendo condenado a la última pena, conmutada por la de cadena perpetua y amnistiado luego». El juez instructor añadía alguna connotación más criminosa. Antonio era «jefe directo del marxismo en Uncastillo» y «primer agitador y propagandista del Frente Popular», y en declaraciones del médico y dos sacerdotes hacen constar que Plano «fue el dirigente que en el pueblo de Uncastillo y otros pueblos de la comarca llevó a las masas a un estado de violencia que fue el que determinó el Glorioso Movimiento Nacional». Por todo ello se reconoce en algún informe que fue, «al parecer, fusilado en Uncastillo al promoverse el Movimiento Nacional, si bien no consta inscrita su defunción en el Registro Civil».³⁸⁷

³⁸⁷ Toda la información siguiente en el expediente de los Plano, AHPZ, *Responsabilidades Políticas*, Uncastillo, caja 3.

Pese a que Benita alegaba en su declaración que «nunca estuvo afiliada a partido político de clase alguna al servicio del Frente Popular», y que «nunca se metió en política, dedicándose únicamente a las labores propias de la casa», el comandante del puesto Jesús Costoya firmó que Benita tenía «carácter extremista avanzado», y que era «refractaria al Movimiento Nacional Salvador de España, dado su carácter un tanto díscolo». Apuntaba además que «por su posición social y prestigio en el pueblo y entre los extremistas del mismo, y sobre todo con las mujeres, y que tiene una grande dominación con sus maridos, no cabe duda que ha contribuido a imbuir entre los mismos ideas políticas del Frente Popular, contribuyendo a crear la situación que provocó el Alzamiento Nacional». El alcalde Calixto Pueyo añadía que era «persona insultante entre sus convecinos que no participaban con sus ideas». Los vecinos de «reconocida solvencia y moralidad» que siguiendo el protocolo debían declarar por llamamiento de autoridades y de la inculpada fueron los propietarios Baldomero Pueyo, José Canales, y Leoncio Aybar. Firmaron sendas declaraciones-tipo redactadas en jerga más política que jurídica, donde se indicaba que Benita era socialista y «gran propagandista» del partido, con su actuación «propagó las ideas extremistas», y contribuyó directamente a «crear la situación que produjo el Alzamiento».³⁸⁸ Así, la Comisión Provincial estimaba que las responsabilidades de uno y otro debían ser de 25.000 pesetas para el difunto Antonio, y de 1.000 pesetas para Benita.

Para eso estaban las máquinas de coser incautadas, pero la tasación de las mismas no alcanzaba. En septiembre los

³⁸⁸ Los testigos a los que Benita citó buscando confirmar su declaración exculpatoria fueron Manuel Cortés y Ángel Pérez, ambos concejales del Ayuntamiento en algún momento de la República, de carácter conservador. Sin embargo, las defensas que se pudieran realizar en estos casos no eran libres de posteriores sospechas o acusaciones, siendo muy complicado distinguir las acusaciones que se realizaban por convencimiento de las que se hacían por miedo, y hasta dónde llegaba el compromiso de una declaración eximente a raíz del conocimiento personal. Lo más usual era alegar en las declaraciones favorables al acusado ignorancia sobre la difusión de ideas o el desempeño de cargos directivos.

militares que llevan el caso fijan sus ojos en la casa. Se piden informes a la alcaldía sobre la titularidad de la misma, donde estaba instalada la UGT. Calixto Pueyo apunta que en los amillaramientos la finca aparece registrada a nombre del padre de Benita, Hilario Cortés, pero que fueron Antonio y Benita quienes la construyeron y pagaron los materiales y los jornales empleados, añadiendo que los obreros que en ella trabajaron «no reconocen otro amo del referido inmueble». Pero el alcalde no iba a plantear menudencias jurídicas: «Se ve de una forma clara y terminante que el hecho de poner la casa en contribución a nombre de Hilario Cortés fue debido a una de tantas martingalas del Frente Popular, para en caso de incurrir en responsabilidad el entonces cabecilla Antonio Plano, tratar de salvar sus intereses», extendiendo además la culpabilidad a Hilario «por tener las mismas ideas y haber militado en partidos del Frente Popular». La casa fue embargada. En febrero de 1938, Hilario elevó recurso por medio de un letrado al Juzgado, recurso que no se admitió por interpretarse que la casa embargada y la recurrida eran distintas. La casa fue subastada y adjudicada luego al Estado para cubrir parte de las sanciones (7.300 pesetas de las 26.000 reclamadas). Diez años después, en marzo de 1949, se sobreseía el expediente, y el Estado se olvidaba de la sanción que faltaba por satisfacer.

Ese era el proceso general que implicaba la apertura de un expediente de Responsabilidad Política. Los 77 procesos abiertos a vecinos de Uncastillo comenzaban con informes y denuncias de las autoridades, seguían por la «demostración» de su culpabilidad y terminaban con el embargo de propiedades si es que el encartado las tenía. Como en el caso de Antonio Plano, hubo procesos incoados cuando los inculpados habían muerto. En concreto, ocho casos (Demetrio Agón López, Antonio Arregui García, Mariano Casales López, Eugenio Combalía Marco, Miguel Charles Praderas, Francisco Malón Gil, Martín Suñén Mombiela, Vicente Tirapo Casanova y Pedro Urdániz Malón), lo cual demuestra que a la tarea de «limpieza» ideológica le acompañaba un obvio interés económico. De

ellos y de la inmensa mayoría de procesados se alegaba su pertenencia al Partido Socialista como demostración de su oposición al Movimiento, siendo un agravante si se apuntaba que había participado en Octubre de 1934, o que había huido «al monte» en los primeros días tras el «Alzamiento».

Interesante es descubrir algunos detalles revelados en los expedientes y trazar historias particulares que pueden ilustrar recorridos y experiencias colectivas. Antonio Arregui había muerto en agosto de 1936 como «consecuencia de la guerra», pese a que en 1937 en el expediente se afirmaba que «desapareció del pueblo suponiéndole huido a zona roja acompañado de su mujer Juana Claveras». En julio de 1937 se efectuaban gestiones para averiguar «si de las casas clausuradas de esta villa se habían llevado enseres y muebles», como ocurrió en casa de Antonio Plano, concluyéndose que «debido al carácter de los ciudadanos de esta villa se hace un tanto difícil poder esclarecer cualquier hecho delictivo, pues aunque se dice de rumor público que efectivamente se llevaron algunas cosas», no se puede comprobar. El comercio y el beneficio ejercido desde la posición de ventaja y fuerza se reveló más claramente con el caballo incautado a su esposa Julia, «desaparecida» también del pueblo. Mantenido «en depósito» por el alcalde Calixto Pueyo, consideró con asesoramiento del veterinario que el equino valía de 250 a 300 pts., y tras «descontar los gastos de manutención durante el tiempo que lo tuvo en depósito», entregó 60 pts. a la Comisión Provincial de Incautaciones como producto de la subasta del animal. Las facilidades para disponer de los bienes de los «rojos» era manifiesta, y hubo quien manejó esa impunidad con eficacia y desahogo en su beneficio.³⁸⁹

Uno de los casos más significativos de cómo no sólo a través de las pistolas, sino de esta nueva «justicia» se pretendía hacer tabla rasa de la República, fue el del concejal Cándido

³⁸⁹ AHPZ, *Responsabilidades Políticas*, Uncastillo, caja 1. Aunque en el expediente se dice que Julia Claveras, su esposa, huyó con Arregui del pueblo, en el listado de *El Pasado Oculto* aparece como muerta a finales de agosto de 1936.

Gracia, en principio amigo político de Plano, más tarde acérrimo contrario y de nuevo colaborador republicano tras febrero de 1936. En enero de 1937 la Guardia Civil, Alcaldía y Juzgado informaron de su pertenencia a Izquierda Republicana, donde «siendo directivo del mismo» se mostraba «sumamente peligroso», «habiendo contribuido con sus ideales marxistas, predicciones y manejos a crear la situación que provocó el Alzamiento». Como era habitual el párroco y médico declararon en el mismo sentido, señalando que «dirigió los trabajos para el triunfo del Frente Popular, habiendo sido condenado por los sucesos de Octubre y ejerciendo el cargo de Teniente de Alcalde». Se dice que huyó del pueblo al iniciarse el Movimiento, confirmandolo su esposa tiempo después cuando, solicitando la devolución de los bienes, señala que su marido está «exilado en el extranjero». Su fábrica de gaseosas, industria estable y productora en su momento de cierta riqueza, pasaría a ser administrada por la Comisión local de incautaciones formada por las «fuerzas vivas» (cura párroco, alcalde y juez municipal). Y el local en el que tenía su sede Izquierda Republicana, propiedad del padre de Cándido Gracia, quien también fue expedientado, fue subastado y adjudicado al Estado.³⁹⁰

El cinismo de esta nueva «justicia» podía llegar al extremo de iniciar un expediente a una familia prácticamente exterminada. En enero de 1937 se llama a declarar a Francisco Malón Gil, cosa que no hizo porque «según informes adquiridos se fugó del pueblo en unión de sus hijos Rosario, Mariano y María, de 24, 22 y 19 años de edad, [...] suponiéndosele en la actualidad en la zona roja laborando en contra del Movimiento». De su mujer, Francisca Pueyo Prat, se decía que «desapareció a raíz del Movimiento Nacional». Le fueron

³⁹⁰ AHPZ, *Responsabilidades Políticas*, Uncastillo, caja 2. En cuanto al padre de Cándido, Mateo Gracia Vicastillo, solicitó que a su favor declarasen entre otros el cura párroco Emilio Bayarte. Sin embargo no recibió el testimonio esperado cuando «declaró que el repetido inculcado perteneció al partido dicho [de Izquierda Republicana], siendo un propagandista de las ideas del Frente Popular y actuando en contra del Movimiento Nacional», AHPZ, *Responsabilidades Políticas*, Uncastillo, caja 2.

embargados una casa y algunos campos y un par de caballerías, siendo el único postor y principal beneficiario de las subastas el alcalde Calixto Pueyo. A Francisco lo encontramos en las reuniones entre obreros y patronos del pueblo de finales de 1933 y principio de 1934 como representante de los obreros. Parece que enterado del fusilamiento de su mujer Francisca en Luesia, cogió a sus hijos y se echó al monte, pero en frenética caza los falangistas apresaron a sus hijas Lourdes y Rosario para asesinarlas vilmente. Su hijo Mariano consiguió llegar a la zona republicana, donde batalló en los frentes de Huesca y Levante. En el sumario militar que se le abrió tras ser apresado indicaba que «cuando huyó de su pueblo al monte fue perseguido por elementos nacionales que no le lograron alcanzar, pero sí a su madre y dos hermanas, que fueron ejecutadas en el acto, lo que presencié el procesado según sus manifestaciones». Hay cierta contradicción entre las versiones sobre lugares y momentos, errores en fechas e inexactitudes en nombres, pero en cualquier caso no existe duda sobre el móvil económico que perseguía la apertura de expedientes a familias desmembradas y desaparecidas y que no suponían ninguna amenaza política para el nuevo «régimen».³⁹¹

Era esa una buena herramienta «legal» para ajustar cuentas pendientes que no tenían únicamente que ver con la ideología. Antonio Mola, nombrado gobernador civil de Huesca durante la guerra, denunciaba a dos de sus antiguos conveci-

³⁹¹ AHPZ, Responsabilidades Políticas, Uncastillo, caja 3. Parece en la sumaria militar que la madre de Mariano, Malón, Francisca Pueyo Prat, también huía con el resto, si bien en el listado de fallecidos aparece como muerta en Luesia días antes. También respecto a lo ocurrido con su padre Francisco, se indica en el listado de *El Pasado Oculto* su muerte violenta y en cambio en la versión familiar de su sobrino Jesús Pueyo su muerte por «pena y dolor» tras haber escapado por el monte en aquel aciago día. Pero la tragedia no había terminado de acechar a otra rama familiar. Ignacio Maisterra Pueyo, cuñado de Jesús Pueyo Prat, sería fusilado esos mismos días, y su hermano Narciso Maisterra Pueyo, también fue fusilado y se le abrió expediente de responsabilidad política para iniciar el despojo. En la sumaria militar dos vecinos falangistas le acusaban de ser de las Juventudes Socialistas, «destacado en el orden social», que cuando bajaba en los días festivos de su trabajo como pastor «acostumbraba a ponerse la camisa colorada», y que huyó al monte en los primeros días del Movimiento.

nos de la familia Freg como «dirigentes de los elementos perturbadores y revolucionarios de Uncastillo», como «creadores y animadores del partido radical-socialista [significado por] su extremismo y espíritu subversivo», dice Mola. Después, «disuelto el partido radical-socialista» y fusionados en Izquierda Republicana, «animaron su espíritu revolucionario-izquierdista y en repetidas ocasiones favorecieron con sus donativos y aportaciones a estos elementos izquierdistas», «amenazando a los elementos derechistas y abogando por la revolución social». Las referencias aportadas por las autoridades reforzaban la denuncia. Lideraron el «levantamiento que hubo en dicho pueblo para no pagar a los propietarios de las fincas» y además, «con motivo de un viaje efectuado a dicho pueblo por D. Antonio Mola Fuertes, actual gobernador civil de Huesca, [Babil] dijo palabras injuriosas contra el citado señor, parece también le amenazó de muerte». Pero cuidado, también Babil es el arrendatario de propiedades de Mola, goza de una muy buena posición social, estimándosele un capital de 100.000 pesetas, tienen varias casas en el pueblo y varios cientos de cabezas de lanar, y entre ambos inculpados «están al frente de la administración y venta de ganados» contando con 600 cabezas de lanar y casi un centenar de cabrío.

Mola movió hilos. Parecía tener algún interés en quitar de en medio a los Freg. Y aunque la historia particular de Babil era ciertamente rocambolesca al haber pasado del republicanismo militante a presentarse a la Guardia Civil apoyando el Movimiento, haber dado «batidas por los montes», y haberse afiliado a Falange en noviembre de 1936, se ratificó en su denuncia de la actuación de izquierdas, «agravada por la influencia que en el pueblo podía ejercer teniendo en cuenta su buena posición económica». Y restó valor a la actitud de Freg en los primeros días del Movimiento, «por las circunstancias especiales que concurrían en el pueblo en aquellos días, existía una situación indecisa [sin tener duda de que] el denunciado al presentarse lo hacía para favorecer la situación del Gobierno republicano». Escribió incluso al gobernador de Zaragoza, Luis de San-Pío para aclarar que «con su admirable

condición económica» realizaron «acción demoledora [...] sobre los arrendatarios de Uncastillo» para que votasen a las izquierdas extremas», consiguiendo «dejar de ser castigados por sus desafueros» y consiguiendo «sentencias injustas, lo que probaba su gran influjo y ascendente cerca de las Autoridades y en los mismos Ministerios». Lo ilustra con un telegrama enviado por el «funesto» Ministro de Justicia Álvaro de Albornoz al juez de instrucción de Sos, Fernando Lanzón Surruca, para que resolviese a favor de Freg en un pleito que éste mantenía con Pedro Fuertes.

La defensa de Babil Freg ofrece buenas cotas de verosimilitud, también detalles sobre los caminos de la servidumbre caciquil, y sobre los primeros momentos de sublevación militar en Uncastillo. Dice que por indicación de Mola él y toda su familia votaron la candidatura monárquica en 1931, y que durante la República «convivía con todas las personas de derechas», y que en 1933, año en que por los enfrentamientos sociales muchas familias se ausentaron de Uncastillo («la convivencia en casa, en el monte y en los caminos» contenía «gran malestar»), «yo no pude hacerlo porque mis bienes y obligaciones no me lo permitían». Se alistó casi por obligación como militante del partido radical-socialista, porque además «parecía ser que dicho partido por entonces trataba asuntos agrícolas que tanto prometían beneficiar, pero sin ningún ánimo político». Aquí cometió Babil su mayor error, pensar que podía gestionar la fidelidad de su amo. «Se dictó una orden general o decreto sobre la revisión de contratos agrícolas, y como nunca teníamos ningún contrato y sí sólo verbal y, como casi todos los vecinos del pueblo solicitaron tal revisión o llegaron la mayor parte a un arreglo con los propietarios mejorando las condiciones, propusimos al Sr. Administrador-apoderado hiciera algo en nuestro beneficio ya que suponía más para nosotros unos cahíces que para él porque los gastos eran cada día mayores siendo imposible siquiera obtener o cubrir los gastos». Mola contestó que «se atenia a la ley», solicitando entonces la revisión «ya que era legal en aquella fecha y de justicia porque eran condiciones de arriendo imposibles de sostener». Y

defiende su actuación porque «otros propietarios hicieron más conocedores de la situación del campo que encontraron más justas sus peticiones ya que de esta manera hacía más llevadero el sostenimiento no sólo del colono, sino también del obrero por cuanto que de estos beneficios él también participaba».

Afirma que tras 1934 guardaba afajinada la mies de la finca que tenía en aparcería con Mola y la suya propia, y que sólo la suya fue quemada por elementos de izquierda del pueblo. Otra prueba de la distancia que le separaba de éstos fue la invasión de la finca que tenía en aparcería con Mola «por elementos marxistas». Freg afirma que «hizo cuanto pudo para que no se llevase a cabo», avisando a la Guardia Civil cuando constató que no era posible. En 1935, «en virtud de cómo se ponían los partidos tanto de derechas como de izquierdas», dejó de frecuentar el centro republicano, acudiendo tan sólo a los Espumosos, «donde la política era ajena». Y cuenta cómo meses después de los sucesos de Octubre el cabo de la Guardia Civil y el guardia Cisneros se presentaron en la finca que cultivaban él y su tío, preguntando por su filiación, contestando «que era republicano de orden y que tuvieran confianza en mí», y que si algo les ocurría «estaría siempre a su lado porque ellos representaban el orden». En ese año fue nombrado presidente de la Junta de Ganaderos Propietarios, cargo que ostentaría hasta 1939. Llegado el «Glorioso Movimiento Nacional» se presentó al citado cabo diciendo que estaba a sus órdenes. Estaba presente Evaristo Sierra, «encargado en aquel momento del elemento civil que se ofrecía», quien le avaló y le dijo que volviera a su casa, que le avisaría «cuando recibiese las armas que esperaba». Freg reveló que él tenía una con municiones, «obtenida a mi favor por persona de derechas exclusivamente para mi defensa». Llegado el momento el cabo le nombró cabo de milicias, aunque renunció por preferir «ser mandado», prestando servicios de guardias, «batidas por el monte de Uncastillo y limítrofes cooperando con otros pueblos y sosteniendo tiroteos con los marxistas fugados, servicios de detenciones y especiales en Uncastillo y varios pueblos del contorno», etc., siéndole también robadas cabezas de ganado por los que estaban en el

monte, y formando parte de la Junta de Abastos municipal y como vocal de la Junta de Fomento Pecuario «con otras personalidades propietarios e intelectuales de la villa». «Todo esto demuestra –finaliza– que no soy persona indeseable ni desafecta al régimen», lo cual no le evitó tener que pagar una multa de 5.000 pesetas impuesta por el Tribunal de Responsabilidades Políticas de Zaragoza.³⁹² Pero lo que se ponía de manifiesto, además, era la ruptura rápida y dramática de todo el paisaje conocido de relaciones políticas y sociales, y la capacidad o la necesidad de algunas personas por cabalgar con el viento a favor. Algo que para muchos se resumía en la pura y simple supervivencia, cuando además entraban en juego viejos ajustes de cuentas, sobre los que apenas queda un soplo de cenizas en el aire, y la certeza de que muchos de aquellos secretos llevan décadas escondidos bajo tierra.

TABLA 9: LISTADO VECINOS DE UNCASTILLO A LOS QUE SE INSTRUYÓ EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

APELLIDOS	NOMBRE	MULTA EXIGIDA	SENTENCIA O EMBARGO
AGÓN LÓPEZ	DEMETRIO	1.000 pts.	Embargo casa. Subasta sin postor
ALCUBIERRE VIAMONTE	FRANCISCO		Carece de bienes.
AÑANOS AZNÁREZ	SERAFÍN	4.000 pts.	Casa, pajar y tres campos
ARREGUI BIOTA	JUAN	1.000 pts.	Mitad casa y dos mulos.
ARREGUI CANALES	GUILLERMO	2.000 pts.	Mitad casa. «Carece bienes».
ARREGUI GARCÍA	ANTONIO	5.000 pts.	Casa subastada por 2.300 pts.

³⁹² Cita a catorce personalidades locales para que avalen su testimonio: Ramón Auria –juez municipal y propietario–, Ramón Gay –ex juez municipal y propietario–, Jesús Costoya –cabo de la Guardia Civil–, Calixto Pueyo –alcalde y propietario–, Emilio Bayarte –cura párroco–, Venancio Lapieza –farmacéutico–, Ángel Pérez –del comercio y propietario–, Jesús Marco –jefe local de Falange–, José Navarro –secretario del juzgado municipal–, José Olano –propietario–, José Frago –labrador–, Francisco Marín –veterinario–, Evaristo Sierra Pueyo, Miguel Rived –propietario–. AHPZ, *Responsabilidades Políticas*, Uncastillo, caja caja 2. Babil se inscribió en las Milicias de Acción Ciudadana en 26 de julio de 1936, AMU, Leg. 359, exp. 025.

TABLA 9: LISTADO VECINOS DE UNCASTILLO A LOS QUE SE INSTRUYÓ EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS
(Continuación)

APELLIDOS	NOMBRE	MULTA EXIGIDA	SENTENCIA O EMBARGO
ARREGUI JARAUTA	CAYETANO	2.000 pts.	Mitad casa subastada por 8.300.
AZNÁREZ TIRAPO	AGUSTÍN	1.500 pts.	Embargo mitad casa.
BURGUETE CORTÉS	MANUEL		SM. Dos años prisión.
CASALÉ CASAUS	ISIDRO		SM. 20 años prisión.
CASANOVA MIRABEL	MARÍA		SM. 12 años prisión.
SIMÓN MARTÍN	EUSTASIO		SM. 12 años prisión.
ROYO FERRER	EDUARDO		SM. 16 años prisión.
VALLESPÍN DEL VAL	JULIO		SM. 16 años prisión.
CASALÉS LÓPEZ	MARIANO	1.000 pts.	Embargo y subasta mitad casa
CASANOVA ARREGUI	ILUMINADO		SM. 30 años prisión. Carece de bienes.
CASAUS PÉREZ	EUSEBIO	2.000 pts.	Embargo mitad casa, sin postor.
CLAVERAS ARREGUI	RUFINO		SM. 20 años prisión.
COMBALÍA BEGUERÍA	MIGUEL		SM. «Carece de bienes». 12 años prisión.
COMBALÍA MARCO	CONSTANCIO	1.000 pts.	Embargo mitad casa y un mulo.
COMBALÍA MARCO	EUGENIO	5.000 pts.	Mitad casa subastada por 4.750.
CORRUCHAGA VILIA	SATURNINO		SM. 30 años prisión.
EZQUERRA SANZ	PEDRO		SM. 12 años prisión.

TABLA 9: LISTADO VECINOS DE UNCASTILLO A LOS QUE SE INSTRUYÓ EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS*(Continuación)*

APELLIDOS	NOMBRE	MULTA EXIGIDA	SENTENCIA O EMBARGO
CHARLES PRADERAS	MIGUEL	1.500 pts.	Embargo cuarta parte casa.
CHARLES PRADERAS	PANTALEÓN		SM. 30 años prisión.
ESTEBAN MALÓN	CÁNDIDA		SM. Absuelta.
LECUER ESTEBAN	ALEJANDRO		SM. 2 años prisión.
FERNÁNDEZ SUBIRÓN	INOCENCIO		SM. 12 años prisión. Carece de bienes.
GARCÉS ARAGÜÉS	ROMUALDO	2.000 pts.	«Carece de bienes».
GARCÉS LOBERA	FRUCTUOSO		SM. 4 años prisión.
GARÍN FUERTES	LIVIA		SM. Absuelta.
GALARRAGA EZQUERRA	JUAN	500 pts.	«Carece de bienes»
GRACIA GARCÍA	CÁNDIDO	5.000 pts.	Embargo fábrica gaseosas por 2.500 pts.
JARAUTA AZNÁREZ	JESÚS		SM. 14 años prisión.
GARCÍA ATARES	FRANCISCO		SM. 14 años prisión.
VIAMONTE TIRADO	MARTÍN		SM. 14 años prisión.
BATALLER CASAUS	VICENTA		SM. Absuelta.
GRACIA VICASTILLO	MATEO	1.000 pts.	Embargo corrales por 7.030 pts., sin postor.
JARAUTA ABADÍA	FÉLIX		SM. 6 años prisión.
FREG RIVED	BABIL	5.000 pts.	
JORDÁN BUENO	TOMÁS		SM. Sobreseída.
PINTOR PALACÍN	HILARIO		SM. Sobreseída.
FREG BUEY	JOAQUÍN		Absuelto
FRAGO BEGUERÍA	GREGORIO	1.500 pts.	Embargo mitad casa
LALANZA RUIZ	MARIANO		«Carece de bienes»

TABLA 9: LISTADO VECINOS DE UNCASTILLO A LOS QUE SE INSTRUYÓ EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS

(Continuación)

APELLIDOS	NOMBRE	MULTA EXIGIDA	SENTENCIA O EMBARGO
LUIS SOTERAS	EUSEBIO	1.500 pts.	Embargo 4/6 casa y varios huertos
MAISTERRA PUEYO	NARCISO ANTONIO	SM.	
MALÓN GIL	FRANCISCO	1.1000 pts.	Embargo casa y campos por 10350 pts.
MALÓN LEAR	GREGORIO		SM. 30 años prisión. «Carece de bienes»
MALÓN PUEYO	MARIANO		SM. 1 año prisión
MORLANA SOMATÁN	PABLO	1.000 pts.	Embargo de mitad de una casa y ganado
NAVARRO VIDAL	ANDRÉS		SM. 20 años prisión.
PÉREZ ARILLA	FRANCISCO		SM. 30 años prisión.
PÉREZ GUINDA	ANTONIO		SM. 10 años prisión. «Carece de bienes»
PÉREZ IDOYPE	VÍCTOR		SM. 12 años prisión. «Carece de bienes»
PINTOR RUIZ	PEDRO		Embargo casa
PLANO AZNÁREZ	ANTONIO	25.000 pts.	Embargo casa
PRADERAS PEREZ	DOMINGO		SM. 30 años prisión
PRADERAS PEREZ	PEDRO		SM. 6 años prisión.
PUEYO NAVARRO	HIPÓLITO	250 pts.	Embargo casa
PUEYO RIVED	ANGELES	500 pts.	«Carece de bienes»
RIVED PALACIOS	ANTONIO		SM. 12 años prisión. «Carece de bienes»
RIVED PÉREZ	PABLO	1.000 pts.	Embargo casa, corrales y campos

TABLA 9: LISTADO VECINOS DE UNCASTILLO A LOS QUE SE INSTRUYÓ EXPEDIENTE DE RESPONSABILIDADES POLÍTICAS*(Continuación)*

APELLIDOS	NOMBRE	MULTA EXIGIDA	SENTENCIA O EMBARGO
PALACIOS BURGUETE	FELISA	1.000 pts.	Embargo casa, corrales y campos
RIVED SAMATÁN	JOSÉ		SM. 15 años prisión. «Carece de bienes»
RIVED SAMATÁN	ANTONIO		SM. 30 años prisión. «Carece de bienes»
SAMPER URDÁNIZ	MARIANO		SM. 3 años prisión. «Carece de bienes»
SÁNCHEZ NAVARRO	JOSÉ	500 pts.	«Carece de bienes»
SOLANO LARCUÉN	FAUSTINO	1.000 pts.	Embargo casa. Adjudicada al Estado
SUÑÉN MOMBIELA	MARTÍN	25.000 pts.	Embargo bienes
TIRAPO CASANOVA	VICENTE	1.000 pts.	Embargo casa y campos
UGEDO SAMPER	LUIS	5.000 pts.	Embargo 6 fincas urbanas y 1 campo
URDÁNIZ MALÓN	PEDRO	1.000 pts.	Embargo casa y 2 mulos
URDÁNIZ VIARTOLA	VALERIANO		SM. 6 años prisión.
VICASTILLO LABAD	AGUSTÍN		SM. 15 años prisión. «Carece de bienes»
VICASTILLO REBLA	ÁNGEL		SM. 20 años prisión.
VIGO TORREA	IGNACIO		SM. 6 años prisión.

SM: Sumaria Militar. Fuente: AHPZ, *Responsabilidades Políticas*, Uncastillo.

Los tricornos del franquismo

En aquel triste verano de 1936 que siguió al golpe militar encontramos a falangistas y fuerzas paramilitares de derecha

adueñándose del pueblo, denunciando, persiguiendo, deteniendo y matando. Por su parte la Guardia Civil se mostró enseguida conforme con el «Movimiento». ¿Qué actitud tomaron los guardias del puesto? ¿Qué fue del juramento de fidelidad a la República emitido por todos ellos en 1933? Su entusiasmo para adherirse a la sublevación militar no desmerece su historial militar, pero sí cuestiona su idea de la «obediencia debida» al régimen constituido. A los guardias implicados en los sucesos de 1934 los encontramos tras el 18 de julio de 1936 en distintas acciones bélicas por la geografía del país. A Victoriano Quiñones, el que fuera jefe del puesto de Uncastillo, el inicio del conflicto bélico le sorprendió al mando del puesto de Santa Cruz de Grío. En agosto salió para los montes de El Frasno para perseguir a «marxistas huidos» en batidas, «causándoles bajas» a «los rebeldes», y haciendo en los primeros días de septiembre «servicios de limpieza por varios pueblos», «sosteniendo en algunos de ellos tiroteos con marxistas huidos». Al año siguiente era ascendido a alférez, incorporándose en marzo de 1938 a la Compañía Expedicionaria del Frente de Aragón y Cataluña al mando de una Sección del Servicio de Información y Policía Militar, pasando el resto de la guerra en la zona de Morata de Jalón. En 1939 recibe el premio de efectividad de 1.100 pesetas por llevar más de treinta años de servicio, y en octubre disfruta de permiso para asistir «al acto de dar sepultura a los restos del Glorioso General Sanjurjo» en Pamplona. Luego de terminada la guerra llegarían más años de servicio y condecoraciones, como la Medalla de la Campaña y una Cruz roja, la Cruz de San Hermenegildo y el ascenso a Capitán, destinado a Mora de Rubielos. En 1945 lo volvemos a encontrar dedicado a «la persecución de atracadores en Sierra de Monroyo, Castellote, Sierras de Aliaga y Montoro (Teruel), y en 1946 vuelve a recorrer los montes turolenses «con motivo del acto de sabotaje efectuado por los bandoleros en la Central Eléctrica de Castelfabrit (Valencia), continuando por la zona para el «descubrimiento de malhechores» y dando «batidas en persecución de bandoleros y sabotadores». Como es fácil de adivinar, se tra-

taba del maquis, al que también se dedicó a perseguir en la zona de Teruel. Sus días de acción continuaron durante 1948, anotándose en su hoja de servicios que «consiguió después de una hábil labor de capción, que hiciese presentación un conocido bandolero, el que dio localización de un campamento de los mismos», en Salinas de Valtablada. Montó el cerco y entabló «enconada lucha con cinco bandoleros, consiguiendo sin bajas propias dar muerte a los peligrosos forajidos, titulados Jefe y Subjefe y Jefe Político del 5º sector». La operación puso de manifiesto el «entusiasmo, dotes de mando y valor personal del citado capitán». Pocos meses más tarde, en noviembre, pasaría a la situación de retirado.

El guardia Corchete cumplía en Plasencia, pero el 23 de julio fue concentrado en Alagón, permaneciendo luego en Cariñena, batallando en 1938 en Benicarló y Benicásim, y haciendo servicios en Caspe al año siguiente. El Brigada Fernando Díaz Martín se encontraba mandando un puesto en el pueblo soriano de Aldeapaso. El 18 de julio marchó a la capital de la provincia y de allí a esperar una columna que venía de Logroño, uniéndose a ella y entrando en Soria con ella. Marchó a Zaragoza para conseguir armas, y más tarde, ya en los primeros días de agosto de 1936, sostuvo combate «con una Columna de fuerzas rojas» cerca de Atienza. En 1937 «tomó parte activa en unión de fuerza de la Legión, Falangistas y Guardia Civil a la defensa de Brigüega, donde las fuerzas rojas atacaron fuertemente precedidos de abundante artillería, aviación y tanques e hicieron gran resistencia». Termina la guerra mandando el puesto de Malón, ascendido a sargento y condecorado con la Medalla de Campaña y una Cruz roja. También Cristóbal Moral, sirviendo en Aranda de Duero, recibiría las mismas condecoraciones.

El capitán Enrique García Lasierra, que llegó en 1934 como refuerzo y permaneció durante algún tiempo en Uncastillo tras los sucesos, se encontraba aquel 18 de julio en Aranda de Duero como jefe de la 1ª Compañía de Burgos. Allí «concentró 9 hombres que consideraba indispensables para atender al

mantenimiento del orden», recibiendo instrucciones del teniente coronel para su desconcentración, mandato que no obedeció como tampoco el que por el mismo jefe se dio «para que entregara las armas a los del Frente Popular ante el rumor de asalto a las armerías». Por su cuenta recogió en la camioneta del cuerpo unas 50 armas y 30.000 cartuchos, llevándolos al Cuartel de Caballería, y «ante las graves noticias que se recibían y demás incitaciones de Radio Madrid para la revuelta, ordenó la concentración de la casi totalidad de la Compañía». Luego se hace referencia al inevitable juego de fidelidades y adhesiones. Recibió orden del coronel del Tercio de Villena para trasladarse a Burgos con toda la fuerza posible, «orden que le inspiró confianza por conocer al coronel desde muy antiguo y ser persona católica y eminentemente de derechas, pero dispuesto a no obedecer si se trataba de ir en contra del Movimiento Militar, al cual ya había dado su conformidad más entusiasta hacía tres meses al teniente coronel jefe de la Comandancia de Zaragoza, D. Enrique Pérez». Marchó a Burgos «a secundar el Movimiento Militar», regresando después cuando supo que tras su salida de Aranda «grupos armados patrullaban por las calles», siendo a su llegada «hostilizado por disparos sueltos de los rebeldes», pero haciéndose dueño de la situación, declarando el Estado de guerra en todos los pueblos de la demarcación, «y restituyendo los Ayuntamientos según órdenes dadas por la superioridad y tomando algunos pueblos de los que los marxistas se habían adueñado». Tuvo contacto directo con el director de Seguridad de Madrid, quien le dijo que obedeciese las órdenes del Gobierno, «y le contestó que no obedecía otras que las de la Autoridad de Burgos». Por su actuación en Aranda sería felicitado en persona por el general Mola, desarrollando en los años siguientes múltiples acciones de guerra en el bando franquista, siendo por una de ellas, la conquista del Cerro de los Ángeles, felicitado por «S.E. el Generalísimo». No cabe, como se ve, ninguna duda respecto de la adhesión política del capitán y su responsabilidad, explicitada con un detalle sorprendente en su expediente personal, en la misma génesis del alzamiento militar a nivel regional.

Silencio y olvido

Antonio Plano Cortés no ha regresado al pueblo de su infancia desde que salieran de allí, poco después de la ejecución pública de su padre en la escalinata de Santa María. Como la suya, muchas otras familias tuvieron que emigrar al exilio interior, o al extranjero, como Jesús Pueyo, víctimas de la marginación y el sufrimiento. El fin de la guerra no conllevó el olvido y un intento de convivencia pacífica, sino que los vencidos fueron condenados a la segregación constante y al «estigma» de ser «rojo» o «hijo de rojo», muchos de ellos encarcelados, maltratados o depurados. Los trabajadores perdieron sus empleos, y a la mayoría de los sospechosos de ser «desafectos» al régimen se les impuso el silencio como precio de la supervivencia. Y en Uncastillo, fueron muchos los que tuvieron que callar para vivir. La dictadura negó a los vencidos la posibilidad de integrarse en plenitud en la sociedad, obligándoles a enterrar calladamente recuerdos y sufrimientos personales y familiares. El nuevo Estado se consolidó sustentado sobre los pilares de la venganza y la violencia, negando durante décadas toda posibilidad de perdón o reconciliación colectiva. Al mismo tiempo, la victoria conllevó para muchos la pobreza material y una perenne sensación de inseguridad, auspiciadas por una autarquía económica que llevó al aislamiento del país. Las preocupaciones principales de los hombres y mujeres que vivieron la inmediata posguerra miraban al presente más inmediato, a la búsqueda de la supervivencia familiar, quedando en un segundo plano los atropellos de la guerra y la falta de libertades sociales y políticas de aquellos años. Se imponía «pasar», no significarse y llorar en el interior de las casas. «Desde agosto de 1936 nuestra familia simplemente sobrevivía», comenta Pueyo. Que Benita Cortés no hablara apenas de lo sucedido, como recuerda su hijo, no significa que no recordase con dolor a su esposo Antonio.

En el medio rural, el poder fue asumido por las oligarquías locales controlando el tráfico de bienes y alimentos,

controlando el mercado de trabajo y castigando cualquier atisbo de desobediencia. La petición de cartas de referencia firmadas por las autoridades era una práctica común en las empresas para emplear únicamente a trabajadores «limpios» que no fueran «subversivos», y desde luego para muchos conseguir esas cartas de sus alcaldes, párrocos o jefes de puesto de la Guardia Civil era más que imposible, debiendo de emplearse con suerte y por algún favor debido, de forma clandestina. Sobre estos poderes locales el franquismo edificó su dominación política y su control social. En Uncastillo el Sindicato Agrícola retomó el control de la actividad económica, y el Círculo de Instrucción y Recreo, al que luego se añadiría el Círculo Español, monopolizaba la vida social. Los cuadros directivos estaban conformados por propietarios y gente «de orden» como Manuel Cortés, Calixto Pueyo, Sabas Torrero, Iluminado Pemán o el párroco Emilio Bayarte, que dirigían el Círculo «para estrechar los lazos de mutuo afecto y sincera amistad que debe reinar entre todos los socios, procurarles solaz y honesto esparcimiento y atender a su ilustración y cultura». Claro está, que la propia pertenencia a la sociedad denotaba superioridad sobre el común de vecinos, y su no pertenencia a la misma era una marca de exclusión. Se imponía el consenso en las comunidades rurales a partir del sometimiento ejercido por la fuerza y la religión.

Sin embargo no todo parecía estar en orden por los alrededores. La amenaza, para Guardia Civil y propietarios, provenía del monte. Partidas de maquis actuaban en la zona manteniendo ocupadas a las dotaciones de la Guardia Civil de la Línea de Uncastillo. En enero de 1946 «varios camaradas» de Falange de Luesia se toparon con «personal huido», que «les hicieron fuego de metralleta», observando que tomaban la dirección de Biel. La Guardia Civil partía a detener a la partida de «bandoleros», realizándose una batida con refuerzos llegados de Luesia pero perdiéndose el rastro por la nieve caída y la ventisca que borraba las huellas. La dirección tomada era hacia el monte de Lobera, movilizándose fuerza de Luesia y Uncastillo para rodear a la guerrilla. En

una choza se encontró una nota dirigida a la Guardia Civil: «Amigos de la Guardia civil, vosotros que tenéis las armas debéis ayudar a la liberación de España desde vuestro puesto, no persistiendo en la busca de los guerrilleros, porque nos encontraréis cuando menos lo esperéis, puesto que contamos con medios para ello». Añadían que «vosotros no constituís ninguno de nuestros objetivos si vosotros sabéis ser españoles». Y finalizaba: «abajo Franco y Falange que ha condenado a España a la miseria», «Viva la República Española». Tres años más tarde varios vecinos de Luesia denunciaban haber visto humo en una partida del término de Uncastillo, sospechando se tratase de «bandoleros». La Guardia Civil inspeccionó pero no halló nada de interés salvo algunas nubes aisladas de niebla. Se hicieron hasta tres batidas junto con la fuerza de Uncastillo, encontrándose en la última un cargador de subfusil en el registro de una cueva.³⁹³ Pero abajo, en el pueblo, la mayoría de los vecinos que optaron por quedarse hubieron de convivir durante años con la humillación y el recuerdo de tragedias sin nombre, y la necesidad de sacar adelante sus familias.

³⁹³ AGCZ, Leg. 103, exp. 4.

5939/7

Expediente procesal de *Antonio Plano* *Arndares*

Imp. R. P. Alcala - Mod. 117

SEÑAS PARTICULARES

Natural de *Unicastro* provincia de *Yaracuy*
 vecino de *Unicastro* provincia de *Yaracuy*
 hijo de *Joachim* y de *Maria*
 edad *38 años* profesión *comerciante*
 instrucción *tiene* religión
 estado *casado* hijos *tiene* núm. de ellos *6*
 antecedentes ingresa por vez
 Domiciliado *Pablo Iglesias, 10.*

Color de Iris (ojos)
 Cabello
 Piel
 Cejas
 Nariz
 Boca
 Barba
 Cara
 Talla

Fórmula *A. A. I. A. I. - X S. I. de E.*
 dactiloscópica

SEÑAS PARTICULARES

Registro del individuo al Ingresar

CAUSA

NUMERO			NUMERO		AÑO	JUZGADO	SECRETARIA	DELITO	FECHAS	
General	De orden	De libro	Sumario	Rolló					De la detención o prisión	De la libertad
	<i>152</i>	<i>8°</i>	<i>70</i>		<i>1934</i>	<i>Militar</i>		<i>Rebelión</i>	<i>19/10/34</i>	<i>pero 22-1-35</i>

FECHAS

Hora	Día	Mes	Año
	<i>10</i>	<i>octubre</i>	<i>1934</i>

VICISITUDES

Ingresó en esta prisión, procedente de *Unicastro Co.*
 entregado por *la jta. civil.*
 en concepto de *detenido* a disposición
 de la *auditor de guerra de la 5ª división* con
 replicación por *recurso*, por *apariencia a la*
justicia armada; se le cuenta
R. P.
Rejedor
Rejedor

Expediente procesal de Antonio Plano con motivo de su detención por los hechos de octubre de 1934. AHPZ. Prisiones. Leg. 5.938.

Epílogo

MEMORIA Y RECUPERACIÓN

Muchos pequeños silencios terminaron por tejer un manto difícil de remover durante los cuarenta años en los que la Dictadura de Franco alentó una política de ocultamiento mediante la amenaza de la violencia y la represión. Pero cuando Franco murió, el propósito principal de los diferentes actores sociales y políticos empeñados en iniciar una transición democrática en España fue llevar adelante un proyecto de convivencia en paz. Finalmente se pudo llegar a un consenso entre las principales fuerzas de la oposición al franquismo y las elites procedentes de la dictadura para apoyar una nueva cultura política basada en el respeto democrático y el juego parlamentario, gracias a jalones como la amnistía general y la apertura de un proceso constituyente con la amplitud suficiente como para contemplar a las fuerzas políticas que desearan sumarse al mismo. El peso del recuerdo de la Guerra Civil actuó de un modo ambivalente. Si por un lado la tragedia de las penurias vividas décadas atrás alentó la búsqueda del consenso y apremió la búsqueda de los puntos en común, al mismo tiempo ese recuerdo contenía detalles demasiado cruentos como para al recordarlos no agravar a quienes ahora se sentaban en la misma mesa política. Para evitar roces se decidió olvidar, «pasar la página» de la violencia de la guerra y el franquismo, en aras a la concordia y la reconciliación. Pero aquella voluntad de concordia hizo confundir el perdón con el olvido, la generosidad con la desmemoria, extendiéndose un pacto de silencio que dificultaba en extremo hablar o escribir sobre el recuerdo de la violencia. Aquel pacto descansaba en el temor de que el ejercicio de mirar hacia el pasado hiciese revivir viejos enfrentamientos. Y eso afectó a la desmemoria no sólo de los rostros de los instigadores de la violencia y los beneficia-

dos de la dictadura, sino también las historias de dolor y muerte de los vencidos.

Un silencio que ha afectado hasta hace bien poco a las propias investigaciones históricas y a la facilidad de los estudiosos para entrar en los archivos y acceder a documentación capaz de arrojar luz sobre ese pasado en sombras. En términos generales puede decirse que esos obstáculos duraron hasta mediados de los años ochenta, en que se conmemoró el cincuentenario del inicio de la Guerra Civil, momento en el que tuvieron lugar diversos congresos, estudios, encuentros y publicaciones sobre el tema, rompiéndose así el hielo del silencio. Pero como es natural, el deshielo no se produjo de modo homogéneo ni en todos los lugares ni en el mismo momento. Los archivos locales, dependientes hasta no hace mucho tiempo de voluntades o dejaciones individuales, contenían un elemento aleatorio que entorpecía el desarrollo de las investigaciones, y por otro lado la diversidad de experiencias colectivas y el modo en que pervivieron las memorias locales hizo que si en algunos lugares se comenzase a «recordar» relativamente pronto, en otros todavía cueste sacar a la luz temas de este tipo. En Uncastillo el golpe fue muy duro, hubo mucha gente que desapareció, mucha que emigró, y mucha otra que hizo del silencio un modo necesario de supervivencia. Quizás por eso, cuando este investigador comenzó su pesquisa, en varias ocasiones fue preguntado sobre si había encontrado algo sobre «aquello», sobre «el suceso», refiriéndose a la trifulca cometida con Plano, siendo lo significativo no la pregunta sino el modo en que fue emitida, con una evidente mezcla de temor e irritación.

Pasaron por tanto los años sin que nada en apariencia cambiara en Uncastillo. No hubo actos de desagravio, ni placas, ni monumentos, ni desenterramientos. El silencio seguía imponiéndose como norma de conducta. Pero desde los últimos años noventa, loables iniciativas culturales y plataformas cívicas surgidas por todo el país han conseguido generalizar

un clima de sensibilidad positiva hacia el rescate de las historias de la violencia y represión, estableciéndose finalmente un hito legislativo que dota de recursos ese tipo de iniciativas privadas y públicas, la Ley de Memoria Histórica aprobada en 2007. No dejó de haber debate político alrededor del proyecto, volviéndose a poder escuchar por parte de los contrarios los mismos argumentos que durante la Transición Democrática habían apuntado a la incompatibilidad de la convivencia con el rescate de la memoria y el recuerdo. Hoy hay voces en Uncastillo que quieren hablar. Voces con deseos de hacerse oír que deben ser recogidas. Pero no sólo deben ser recogidas por quienes cuentan con los medios para hacerlo. Además, deben ser amplificadas cuando a la experiencia del dolor se añade un deseo de reparación y de recuerdo mediante la construcción de lugares de memoria conmemorativos que, desde el respeto, hagan alusión a episodios que merecen ser comprendidos y conocidos por las generaciones venideras. El admirable caso de Jesús Pueyo Maisterra añade a sus memorias no sólo la valía del recuerdo de su experiencia, sino un objetivo concreto y definido, en busca del cual ha escrito a las más elevadas instituciones del Estado, encontrar a su padre, aquel que hace más de setenta años montaron, ensangrentado y aterrorizado, en una camioneta a las puertas del cuartel para no volver más. Y también elevar en algún lugar del pueblo un monumento «anónimo, que recordase a los muertos de aquello tan horrible, sin nombres».

Parecidos deseos se están comenzando a despertar en otras familias y descendientes, que en el terreno de lo local están comenzando a resquebrajar el silencio cernido sobre Uncastillo. Y es que ante quienes plantean la inutilidad de la recuperación de la memoria y de la misma Historia, cabe señalar que la escritura del pasado posee, ha de hacerlo, una potente enseñanza social para el crecimiento de jóvenes que no vivieron la dictadura ni saben quién es Franco, que desconocen las causas por las que hubo una guerra civil en España, o que ignoran lo que para mucha gente significó la

llegada de la Segunda República. En la pequeña escala parecía preciso dar relieve al hecho de que hubo una vez un hombre que nació en Uncastillo, que desarrolló una intensa y brillante carrera política para mejorar la vida de sus vecinos, y que murió violentamente a manos, o con la connivencia, de aquellos a quienes contrarió con su modo de proceder. No para acusar a nadie, o para pedir cuentas, pero sí para comprender mejor aquel pasado tan sólo relativamente lejano, y tratar de que, en otras circunstancias y momentos, no se vuelva a repetir. Y para, además, sacar de la oscuridad de la violencia el brillo del intenso trabajo de Plano y otros como él por modernizar y mejorar el pueblo, la comarca y, en el fondo, las relaciones sociales. Un proyecto ilusionante y esperanzador amparado en un contexto nuevo, el de la República, que suponía una oportunidad histórica de resolver las cuestiones «pendientes» de la sociedad española a través de la democracia parlamentaria y el proyecto político de reformas de su mayoría republicana y obrera. Bien pronto aquella ilusión topó con muros demasiado altos, con conflictos heredados como la cuestión religiosa, el militarismo, la ineficacia estatal, las divisiones entre los partidos, el enfrentamiento entre sindicatos, las demandas nacionalistas y, en lo que aquí más toca, la cuestión del acceso a la tierra.

Por eso lo que empezó siendo un estudio de homenaje a la figura de Antonio Plano, ha devenido inevitablemente, al seguir su rastro, en un homenaje no sólo a él, sino también a todos los hombres y mujeres que le acompañaron en su compromiso público y, también, a todos aquellos que daban sentido a su vocación política: los vecinos comunes, campesinos, labriegos y pastores de aquel entorno pobre, y duro en tanto en cuanto unas pocas manos abarcaban la riqueza y la cultura del común. La mirada sobre Plano ha tratado de extenderse en el tiempo y el espacio, para intentar explicar el contexto personal y colectivo que eclosionarán en la República, tanto sus convicciones en la justicia social como la perfecta acogida que sus iniciativas tuvieron sobre mucha gente humilde que por primera vez se sentía parte importan-

te del funcionamiento de las cosas, con capacidad y derecho a decidir sobre su futuro. El contexto político de la República facilitó que personalidades y colectivos diversos trataran de encontrar fórmulas de integración social y canales de negociación colectiva y de pacificación de los conflictos. Sin embargo ese proyecto de convivencia pacífica se malogró. El recorrido de los jalones de ese final, y el asomarnos al quicio de ese colapso violento de las esperanzas de quienes esperaban cambiar la sociedad también ha formado parte del trabajo sobre Uncastillo. Muchas cosas quedan pendientes por decir, y este libro no es sino una contribución más en esa dirección favorable a la nueva sensibilidad social y cultural hacia el pasado. Una contribución que ha tratado en todo momento de no perder de vista que la historia que aquí se estaba contando la hicieron personas de carne y hueso que trataron de conseguir una sociedad más justa y equitativa. Y que la comprensión del pasado esconde profundas enseñanzas sobre el presente y sus problemáticas, por lo que la contribución histórica, o se realiza desde un compromiso ético con el presente, o no tiene sentido.

Comenzábamos este escrito con las impresiones que aquel primer viaje a Uncastillo producía en la retina de un historiador. El paisaje, la carretera, el aire limpio, la primera estampa del pueblo desde el automóvil... formaban imágenes bellas en sí mismas, con la silueta del castillo y la elegancia de las torres de sus iglesias como imponente telón de fondo, pero incompletas por cuanto aparecían disociadas de rostros concretos, como despobladas. El estudio de la figura de Antonio Plano me dio la oportunidad de conocer personas increíblemente generosas, tanto como para abrir sus casas y compartir vivencias dolorosas y sentimientos muy personales, y alrededor de cada mesa de «charata» la estampa de Uncastillo iba adquiriendo calidez humana. Y al mismo tiempo, conforme las horas de archivo y bibliotecas iban rellenando vacíos de recuerdo, la estampa del Uncastillo de hace setenta años, con un mínimo esfuerzo imaginativo, también se iba poblando de personas, de campesinos, oficiales,

comerciantes, concejales, guardias y caciques. En el final del viaje que supone cerrar este trabajo, uno no puede sino reconocer que sus páginas se deben a todos los que trataron de hacer del Uncastillo de entonces un lugar mejor, y a los que al abrir el cofre de sus recuerdos y trabajar por el rescate de una memoria que desaparece, sin duda alguna, ya lo han hecho con el Uncastillo del siglo que empieza.



*Foto de Uncastillo, años 30, cedida por Lisardo Claveras.
Obsérvese el rincón de la puerta de Santa María, hoy inexistente,
donde se fusiló a muchos vecinos de Uncastillo.*

FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA

ABREVIATURAS Y SIGLAS

A.D.P.Z.	Archivo de la Diputación Provincial de Zaragoza
A.G.A.	Archivo General de la Administración
A.G.C.Z.	Archivo del Gobierno Civil de Zaragoza
A.H.N.	Archivo Histórico Nacional
A.H.P.Z.	Archivo Histórico Provincial de Zaragoza
A.M.U.	Archivo Municipal de Uncastillo
A.T.T.M.	Archivo del Tribunal Togado Militar
C.N.T.	Confederación Nacional del Trabajo
Exp.	Expediente
I.N.E.	Instituto Nacional de Estadística
Leg.	Legajo
U.G.T.	Unión General de Trabajadores

FUENTES HEMEROGRÁFICAS UTILIZADAS

D.A.Z.	Diario de Avisos de Zaragoza
D.Z.	Diario de Zaragoza
E.C.Z.	El Clamor Zaragozano
E.I.A.	El Ideal de Aragón
E.N.	El Noticiero
E.P.	El Progreso
H.A.	Heraldo de Aragón
L.D.	La Derecha
L.V.A.	La Voz de Aragón
V.N.	Vida Nueva

INFORMANTES ORALES

Antonio Plano Cortés (Zaragoza, 11 de octubre de 2007 y 30 de noviembre de 2007)

Lisardo Claveras y Abundia Lafuente (Uncastillo, 16 de junio de 2007)

Manuel Marco (Uncastillo, 5 de marzo de 2007)

Jesús Pueyo Maisterra (Uncastillo, 16 de junio de 2007)

Ana María Plano (Buenos Aires, 14 de septiembre de 2008)

BIBLIOGRAFÍA

- ÁLVAREZ JUNCO, José, *El emperador del Paralelo: Lerroux y la demagogia populista*, Alianza, Madrid, 1990.
- , «Redes locales, lealtades tradicionales y nuevas identidades colectivas», en Antonio Robles Egea (comp.), *Política en penumbra. Patronazgo y clientelismo políticos en la España contemporánea*, Siglo XXI, Madrid, 1996, pp. 71-94.
- , y PÉREZ LEDESMA, Manuel, «Historia del movimiento obrero: ¿una segunda ruptura?», en Jesús Izquierdo Martín y Pablo Sánchez León, *Clásicos de historia social de España: una selección crítica*, Centro Tomás y Valiente, Alzira, Valencia, 2000, pp. 159-198.
- APÍROZ, José María, «La sublevación de Jaca», *Trébede* nº 45 (2000), pp. 20-25.
- BAREA, Arturo, *La forja de un rebelde*, Debate, Madrid, 2000 (1ª de 1943).
- BERNAD, Enrique (coord.), *República y republicanos. Socialistas y republicanos de izquierda en Zaragoza y provincia. 1931-1936*, Grupo Socialista de la Diputación Provincial de Zaragoza, 2003.
- BERNALDO DE QUIRÓS, Constancio, y LLANAS AGUILLANEDO, José María, *La mala vida en Madrid*, Egido Editorial e Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 1998 (original de 1901).
- BERNECKER, Walter, *España entre tradición y modernidad. Política, economía y sociedad (siglos XIX y XX)*, Siglo XXI, Madrid, 1999, pp. 226 y ss.
- BIASCAS FERRER, José Antonio, *El proceso de industrialización en Aragón. 1900-1920*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1985.
- BLASCO IBÁÑEZ, Vicente, *Contra la Restauración. Periodismo político 1895-1904*, comp. por Paul Smith, Nuestra Cultura, Madrid, 1978.
- BUENO, Jesús; GAUDÓ, Concepción y GERMÁN, Luis, *Elecciones en Zaragoza-capital durante la II República*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1980.
- CALERO, Antonio María, *Movimientos sociales en Andalucía (1820-1936)*, Siglo XXI, Madrid, 1976.

- CASANOVA RUIZ, Julián, *Anarquismo y revolución en la sociedad rural aragonesa. 1936-1938*, Siglo XXI, Madrid, 1985.
- , *La Iglesia de Franco*, Temas de Hoy, Madrid, 2001.
- , *Historia de España. República y Guerra Civil*, Crítica, Barcelona, 2007.
- COBO ROMERO, FRANCISCO, «El conflicto campesino en Andalucía durante la crisis de los años treinta (1931-1939). Un intento de revisión histórica», en Manuel González de Molina (ed.), *La historia de Andalucía a debate. I. Campesinos y jornaleros*, Anthropos / Diputación Provincial de Granada, Barcelona, 2000.
- , «¡Ciudadanos españoles: ayuda a los campesinos! Los socialistas y la “cuestión agraria” al inicio de la II República», en Manuel Ballarín y José Luis Ledesma, *Avenida de la República. Actas del II Encuentro «Historia y compromiso: sueños y realidades para una república»*, Cortes de Aragón, Zaragoza, 2007, pp. 141-162.
- , *Por la reforma agraria hacia la revolución. El sindicalismo agrario socialista durante la II República y la Guerra Civil (1930-1939)*, Universidad de Granada, Granada, 2007.
- R. CRUZ, «¡Luzbel vuelve al mundo! Las imágenes de la Rusia soviética y la acción colectiva en España», en R. Cruz y M. Pérez Ledesma, *Cultura y movilización en la España Contemporánea*, Alianza, Madrid, 1997, pp. 273-303.
- , *En el nombre del pueblo. República, rebelión y guerra en la España de 1936*, Siglo XXI, Madrid, 2006.
- DEL REY REGUILLO, Fernando, «El empresario, el sindicalista y el miedo», en R. Cruz y M. Pérez Ledesma, *Cultura y movilización en la España Contemporánea*, Alianza, Madrid, 1997, pp. 235-272,
- DELGADO RUIZ, Manuel, *Luces iconoclastas. Anticlericalismo, espacio y ritual en la España contemporánea*, Ariel, Barcelona, 2001.
- DE LUIS MARTÍN, FRANCISCO, «La cultura socialista en España: de los orígenes a la guerra civil», *Ayer*, nº 54 (2004), pp. 199-247.
- DÍAZ DEL MORAL, Juan, *Historia de las agitaciones campesinas andaluzas*, Alianza, Madrid, 1995 (1ª de 1923).
- DUARTE, Ángel, «La esperanza republicana», en Rafael Cruz y Manuel Pérez Ledesma (eds.), *Cultura y movilización en la España contemporánea*, Alianza, Madrid, 1997.

- EALHAM, Chris, *La lucha por Barcelona: clase, cultura y conflicto. 1898-1937*, Alianza, Madrid, 2005.
- FERNÁNDEZ CLEMENTE, Eloy y PINILLA NAVARRO, Vicente, *Los aragoneses en América (siglos XIX y XX)*. Vol. 1, *La emigración*, Gobierno de Aragón, Zaragoza, 2003.
- FRÍAS CORREDOR, Carmen, «Elecciones y conservadurismo político en el distrito de Alcañiz-Híjar entre 1900 y 1923. Del turno a la estabilidad», Pedro Rújula (coord.), *Entre el orden de los propietarios y los sueños de rebeldía. El Bajo Aragón y el Maestrazgo en el siglo XX*, Grupo de Estudios Masinos, Zaragoza, 1997, pp. 23-36.
- Domingo GALLEGU, Manuel GONZÁLEZ DE MOLINA y Ramón GARRABOU, Debate mantenido en *Historia Agraria*, nº 16 (1998), pp. 13-97.
- GARRABOU, Ramón, «La crisis agraria española de finales del siglo XIX: una etapa del desarrollo del capitalismo», en Ramón Garrabou y Jesús García Sanz, *Historia agraria de la España Contemporánea. Expansión y crisis (1850-1900)*, Crítica, Barcelona, 1985, pp. 7-191.
- GERMÁN ZUBERO, Luis, *Aragón en la II República. Estructura económica y comportamiento político*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1984.
- , *La UGT en Aragón durante la II República. De la adhesión a la decepción*, en Enrique Bernad y Carlos Forcadell (eds.), *Historia de la Unión General de Trabajadores en Aragón. Un siglo de cultura sindical y socialista*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2000, pp. 79-136.
- , y FORCADELL ÁLVAREZ, Carlos, «La crisis finisecular en la agricultura interior: el caso de Aragón», en Ramón Garrabou (ed.), *La crisis agraria de fines del siglo XIX*, Crítica, Barcelona, 1988, pp. 69-93.
- GIL ANDRÉS, Carlos, *Protesta popular y orden social en La Rioja (1890-1905)*, Instituto de Estudios Riojanos, Logroño, 1995.
- , *Echarse a la calle. Amotinados, huelguistas y revolucionarios (La Rioja, 1890-1905)*, PUZ, Zaragoza, 2000.
- , *Lejos del Frente. La guerra civil en La Rioja Alta*, Crítica, Barcelona, 2006.
- , *La República en la plaza: los sucesos de Arnedo de 1932*, Instituto de Estudios Riojanos y Ayuntamiento de Arnedo, 2002.
- GONZÁLEZ CALLEJA, Eduardo, «La dialéctica de las pistolas: la violencia y la fragmentación del poder político durante la Segunda República», en J. Muñoz, J. L. Ledesma y J. Rodrigo, *Culturas y*

- políticas de la violencia. España siglo XX*, Sietemares, Madrid, 2005, p. 101-146,
- GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel, «Los mitos de la modernidad y la protesta campesina: A propósito de *Rebeldes Primitivos* de Eric J. Hobsbawm», *Historia Social*, nº 25 (1996), pp. 113-157.
- HOBSBAWM, Eric J., *Rebeldes primitivos. Estudio sobre las formas arcaicas de los movimientos sociales en los siglos XIX y XX*, Ariel, Barcelona, 1983 (1ª de 1968).
- JIMENO, Arsenio, *Zaragoza en la tormenta, 1936*, UGT Provincial, Zaragoza, 1987.
- JOVER, Gonzalo, y VALENTÍ, Salvio, *Los niños del Hospicio*, Editorial Maucci, Barcelona, 1903, p. 52.
- Santos JULIÁ, «Objetivos políticos de la legislación laboral», en José Luis García Delgado (ed.), *La II República. El Primer Bienio*, Siglo XXI, Madrid, 1987, pp. 27-47;
- , *Los socialistas en la política española, 1879-1982*, Taurus, Madrid, 1997.
- , (coord.), *República y guerra en España (1931-1939)*, Espasa, Madrid, 2006.
- KAYE, Harvey, *Los historiadores marxistas británicos*, Prensas Universitarias de Zaragoza, Zaragoza, 1989.
- La crisis agrícola y pecuaria (1887-1889)*, Madrid.
- LAMBÁN MONTAÑÉS, Javier, «Los caminos centenarios de las Cinco Villas: un debate centenario», en *IV Jornadas de estudios sobre las Cinco Villas*, Centro de Estudios de las Cinco Villas, Ejea de los Caballeros, 1995, pp. 123-142.
- LUCEA AYALA, Víctor, «Protesta colectiva en Zaragoza en el tránsito del siglo XIX al XX: una tipología», *Studia Historica/Historia Contemporánea*, nº 19-20 (2001-2002), pp. 129-159.
- , *Rebeldes y amotinados. Protesta popular y resistencia campesina en Zaragoza (1890-1905)*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2005.
- , «Anticlericalismo (¿tradicional?) en el Aragón rural a finales del siglo XIX», en Alberto SABIO y Carlos FORCADELL, *Las escalas del pasado*, Instituto de Estudios Altoaragoneses, Huesca, 2005, pp. 117-196.

- MALLADA, Lucas, *Cartas Aragonesas dedicadas a S.M. el Rey Alfonso XIII (q.D.g.)*, Establecimiento Tipográfico de la Viuda e Hijos de M. Tello, Madrid, 1905.
- MARTÍNEZ VERÓN, Jesús, *La Real Casa de Misericordia*, Diputación Provincial de Zaragoza, Zaragoza, 1985.
- MAURICE, Jacques, «Reforma Agraria y Revolución Social», en Ángeles Egido León (ed.), *Memoria de la Segunda República. Mito y Realidad*, Biblioteca Nueva, Madrid, 2006, pp. 239-240.
- MEAKER, Gerald, *La izquierda revolucionaria en España (1914-1923)*, Ariel, Barcelona, 1978.
- MITZ, Jerome, *Los anarquistas de Casas Viejas*, Diputación de Granada y Diputación de Cádiz, Granada, 1999.
- MOA, Pío, *1934. Comienza la Guerra Civil. El PSOE y la Esquerra emprenden la contienda*, Altera, Barcelona, 2004.
- MORENO BURRIEL, Eliseo, «Desorden en el campo: análisis de la sociedad rural turolense desde la sublevación anarquista de 1932 hasta la insurrección de 1933», en Pedro Rújula e Ignacio Peiró (coords.), *La Historia Local en la España Contemporánea*, L'Avenç, Barcelona, 1999, pp. 399-416.
- PAN-MONTOJO, Juan, «El atraso económico y la regeneración», en Pan-Montojo (coord.), *Más se perdió en Cuba. España, 1898 y la crisis de fin de siglo*, Alianza, Madrid, 1998, pp. 261-334.
- PEIRÓ ARROYO, Antonio, «El mercado de cereales y aceites aragoneses. Siglos XVII-XX», *Agricultura y Sociedad*, nº 43 (1987), pp. 213-279.
- PÉREZ LEDESMA, Manuel, «La cultura socialista en los años veinte», en José Luis García Delgado (ed.), *Los orígenes culturales de la II República*, Siglo XXI, Madrid, 1993, pp. 149-198.
- , «Cuando lleguen los días del cólera (Movimientos sociales, teoría e historia)», *Zona Abierta*, nº 64 (1994), pp. 51-120.
- PINILLA, Vicente, *Entre la inercia y el cambio: el sector agrario aragónés. 1850-1930*, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, Madrid, 1995.
- PUYOL, Josep; GONZÁLEZ DE MOLINA, Manuel; FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo; GALLEGÓ, Domingo; y GARRABOU, Ramón, *El pozo de todos los males. Sobre el atraso de la agricultura española contemporánea*, Crítica, Barcelona, 2001.

- REIG TAPIA, Alberto, *Anti-Moa: la subversión neofranquista de la Historia de España*, Ediciones B, Barcelona, 2006.
- RILOVA JERICÓ, Carlos, «¿Qué te parece Pío Moa? Dos notas sobre el revisionismo y la guerra civil española», *Hispania Nova. Revista de Historia Contemporánea*, <http://hispanianova.rediris.es>, 2007.
- ROMERO SALVADOR, Carmelo, «La suplantación campesina de la ortodoxia electoral», en Ignacio Peiró y Pedro Rújula, *La historia local en la España contemporánea. Estudios y reflexiones desde Aragón*, L'Avenç, Barcelona, pp. 80-98.
- RUDÉ, Georges, *La multitud en la Historia. Los disturbios populares en Francia e Inglaterra, 1730-1848*, Siglo XXI, Madrid, 1989 (1ª de 1964).
- SABIO ALCUTÉN, Alberto, «La penetración del capitalismo agrario a través de la renta a fines del XIX: la contabilidad de Tomás Castellano, hacendado y ministro», *VIII Congreso de Historia Agraria*, Departamento de Economía e Historia Económica y Seminario de Estudios de Historia Agraria, Salamanca, 1997, pp. 485-499.
- , *Tierra, comunal y capitalismo agrario en Aragón (1830-1955)*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2002.
- SALOMÓN CHÉLIZ, Pilar, *Anticlericalismo en Aragón. Protesta popular y movilización política (1900-1939)*, PUZ, Zaragoza, 2002.
- SANZ LAFUENTE, Gloria, *Las organizaciones de propietarios agrarios en Zaragoza. 1890-1923*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2000.
- SCOTT, James C., «Formas cotidianas de rebelión campesina», *Historia Social*, nº 28 (1997), pp. 13-39.
- SERRALLONGA I URDIQUI, Joan, «El aparato provincial durante la Segunda República. Los gobernadores civiles, 1931-1939», *Hispania Nova*, nº 7 (2007), <http://hispanianova.rediris.es>.
- SHUBERT, Adrian, *Historia Social de España*, Nerea, Madrid, 1991.
- SUÁREZ CORTINA, Manuel, *El gorro frigio: liberalismo, democracia y republicanismo en la Restauración*, Sociedad Menéndez Pelayo, Madrid, 2000.
- , *La redención del pueblo: la cultura progresista en la España liberal*, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Cantabria, Santander, 2006.

- THOMPSON, Edward P., *Tradición, revuelta y consciencia de clase*, Crítica, Barcelona, 1984;
- , *La formación de la clase obrera en Inglaterra*, Crítica, Barcelona, 1989 (1ª de 1963);
- , *Costumbres en común*, Crítica, Barcelona, 1995.
- TORRALBA CORONAS, Pedro, *De Ayerbe a la «Roja y Negra». 127 Brigada Mixta de la 28 División*, Barcelona, 1980.
- TUSELL, Javier, *Oligarquía y caciquismo en Andalucía*, Planeta, Barcelona, 1976.
- VICENTE VILLANUEVA, Laura, *Sindicalismo y conflictividad social en Zaragoza (1916-1923)*, Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 1993.
- ZAPATER BASELGA, Miguel Ángel, y NAVARRO CHUECA, Francisco Javier, «Cincovillenses en la guerra de Cuba (1895-1898)», *Suessetania*, 22 (2004), pp. 121-172.

ÍNDICES

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. Listado (incompleto) de concejales de Uncastillo. 1895-1920.....	46
TABLA 2. Comparación de los patrimonios ganaderos de Uncastillo declarados en los repartos de hierbas del monte La Sierra. Años 1890-1891 y 1899-1900.....	49
TABLA 3. Concejales del Ayuntamiento de Uncastillo. 1923-1930..	119
TABLA 4. Concejales de Uncastillo. Febrero 1930.....	126
TABLA 5. Mayores propietarios de la tierra en Uncastillo. 1934.	149
TABLA 6. Relación de penas y absoluciones contenidas en la sentencia por rebelión militar en Uncastillo. Zaragoza en 29 de marzo de 1935.....	328
TABLA 7. Comparación de los gastos de presupuestos de diferentes ejercicios. Uncastillo. 1930-1935.....	358
TABLA 8. Listado de fallecidos y desaparecidos por la violencia franquista en Uncastillo. 1936-1939	381
TABLA 9. Listado vecinos de Uncastillo a los que se instruyó Expediente de Responsabilidades Políticas	403

ÍNDICE DE IMÁGENES

ANTONIO PLANO AZNÁREZ. Fotografía hecha en Zaragoza hacia 1930.....	24
Juventudes Socialistas de Uncastillo, 25 de mayo de 1935.....	136
Bases de trabajo propuestas por los obreros. Uncastillo. Junio 1934.....	223
Croquis realizado por la Guardia Civil del asalto al cuartel de Uncastillo. 1934	259
Estado de las detenciones efectuadas por la Guardia Civil en Uncastillo, y de personas pendientes de detener el 8 de octubre de 1934.....	269
Segundo croquis elaborado por la Guardia Civil del entorno del cuartel de Uncastillo en 1934.....	301
Aspectos de la Sala en la que son juzgados 110 vecinos de Uncastillo	334
Expediente procesal de Antonio Plano, con motivo de su detención por los hechos de octubre de 1934.....	414
Foto de Uncastillo, años 30.....	420

ÍNDICE GENERAL

PRÓLOGO, por Javier Lambán.....	5
CONSIDERACIONES PREVIAS	7
UN COMIENZO: OCTUBRE DEL 34, LA EXPLICACIÓN DE MUCHAS COSAS	15
CAPÍTULO 1: UNCASTILLO, UN TIEMPO Y UN LUGAR.....	25
Los Plano	26
País de pastores y jornaleros.....	29
La tragedia	37
De caciques y de vecinos.....	40
El hambre de tierra	53
La resistencia campesina	56
Manifestaciones y peticiones colectivas.....	65
CAPÍTULO 2: LOS AÑOS DEL REY Y EL DICTADOR.....	71
La crisis de 1905 en las Cinco Villas	71
El Hospicio	79
Semillero de cambios. El Republicanismo en Uncastillo	91
El joven carpintero y el socialismo en Uncastillo	106
Madurez de Antonio y primer amargor republicano	116
CAPÍTULO 3: LA REPÚBLICA.....	137
La fiesta	137
Uncastillo en los años treinta: la tierra, siempre la tierra ..	145
La conflictividad agraria. 1931-1932	155
«Crisis obrera», obras públicas y movilización social.....	171

Escuelas y anticlericales	180
En la Diputación	187
CAPÍTULO 4: LA SENDA DE OCTUBRE	201
1933. Pulso entre contendientes.....	204
1934. El camino de la huelga.....	214
La violencia y el descrédito de la democracia	226
Protesta en Cinco Villas	233
CAPÍTULO 5: REVOLUCIÓN.....	245
La crónica	247
Reconstruyendo la revuelta.....	252
La cárcel.....	265
La nueva «normalidad».....	283
El pueblo «inmaduro».....	290
El informe fiscal	297
La chispa que enciende la llama.....	303
Las defensas.....	307
Antonio Plano y la revuelta.....	317
La sentencia	325
Un «apogeo de perturbaciones»	331
CAPÍTULO 6: DESQUITES Y AGRAVIOS.....	335
Los tricornios de la República	335
Inevitable rencor	349
...y movilización política.....	356
Febrero de 1936. El regreso de Antonio Plano	365
El «Movimiento»	372
El terror	378
La justicia del revés	393
Los tricornios del franquismo	407
Silencio y olvido	411
EPÍLOGO: MEMORIA Y RECUPERACIÓN.....	415
FUENTES Y BIBLIOGRAFÍA.....	421



C. S. I. C.

verano de 1936 a la puerta de la Iglesia de Santa María. Desde las primeras páginas de este estudio, el autor, sin embargo, opta por remontarse sobre el caso particular para preguntarse no sólo por las causas de su muerte y escarnio, sino además por la dinámica que facilitó y alentó la violencia política y social a partir del bienio radical-cedista en las Cinco Villas, de la que el episodio de octubre de 1934 fue el más notable, pero no el único. No sólo se trataba de una particular distribución de la tierra y la riqueza, muy desigual en la comarca cincovillesa, sino además de tradiciones políticas, de identidades colectivas y de nuevos discursos públicos que pretendían afirmarse alzando su voz ante los garantes del orden y la propiedad. De ese proceso de largo alcance trata este libro, de cómo quienes nunca fueron protagonistas de la historia percibieron que podían cambiar el destino de su pequeña pero importante historia local, y de cómo Antonio Plano, cabeza visible del republicanismo y el socialismo de Uncastillo, junto con otros convecinos, supo dar voz y nuevos canales de participación política una vez se pudo salir a la calle para celebrar el nuevo régimen. El presente libro pone en valor la actividad política que en las instituciones desplegaron hombres y mujeres como Plano, convencidos de que la República no era el comienzo de los problemas y el desorden, sino el oasis de modernidad que tocaba disfrutar tras una travesía secular por un desierto de atraso y oscurantismo. Un nuevo paraje que no debía necesariamente de ir asociado, como en muchas ocasiones se ha pretendido, a la violencia desbocada cuyos portones abriría, cinco años más tarde, el golpe militar del 18 de julio de 1936.

